

Víctor Meza

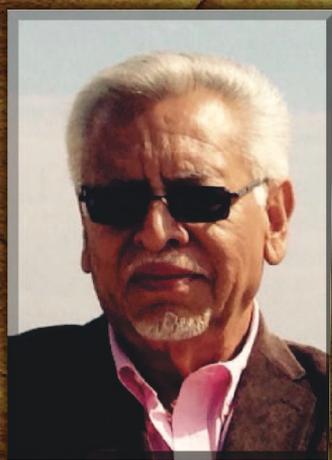
---

*Diario* de la  
**CONFLICTIVIDAD**  
en Honduras: 2009 - 2015

---

**CEDOH**

Centro de Documentación de Honduras



Víctor Meza, fundador y director del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), ha sido investigador social en la Universidad Nacional Autónoma, autor de numerosos libros sobre la realidad nacional y columnista de opinión en diversos medios de comunicación locales y extranjeros.

En el año 2007 coordinó un gran esfuerzo de diálogo nacional para diseñar las Bases de un Plan de Nación, y entre 2008 y 2009 fue Ministro de Gobernación y Justicia. En los años 2012-2014 se desempeñó como Comisionado presidencial para la reforma del sistema de la seguridad pública. Ha recibido varios premios por su labor como investigador y comentarista de prensa.

---

*Diario* de  
la  
**CONFLICTIVIDAD**  
en Honduras: 2009 - 2015

---

*Del golpe de Estado  
a las marchas de las antorchas*

**CEDOH**  
Centro de Documentación de Honduras



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Agencia Suiza para el Desarrollo  
y la Cooperación COSUDE

Con la contribución del Gobierno de Suiza  
a través de la COSUDE

900 Meza, Víctor  
M57 Diario de la conflictividad en Honduras: 2009-2015 / Víctor Meza.--[Tegucigalpa]: Centro  
C. H. de Documentación de Honduras (CEDOH) / [Talleres Litográficos Impresos Cerrato], [2015]  
532 p.

ISBN: 978-99926-41-18-7

1.- HONDURAS-HISTORIA. 2.- HONDURAS-HISTORIA-POLITICA. 3.- GOLPE DE  
ESTADO. 4- DERECHOS HUMANOS. 5.- GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

### **Diario de la conflictividad en Honduras: 2009 - 2015**

La publicación de este libro ha contado con la valiosa colaboración de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), la cual agradecemos en todo lo que vale. Sin embargo, es nuestro deber aclarar que los puntos de vista e ideas expresadas en el texto, son responsabilidad exclusiva de su autor y del CEDOH, sin comprometer de ninguna manera a la entidad cooperante, en este caso el COSUDE.

Esta publicación puede ser reproducida total o parcialmente, en cualquier forma o por cualquier medio, siempre y cuando se cite la fuente.

Edición y diagramación: **CEDOH**

Impresión: **talleres litográficos IMPRESOS CERRATO**

Primera edición: consta de 1,000 ejemplares

*Tegucigalpa, Honduras, C.A., julio 2015*

*Diario* de  
**CONFLICTIVIDAD**  
en Honduras: 2009 - 2015

# Contenido

<i>A manera de introducción</i> _____	I
<b>Año 2009</b> _____	1
<b>Año 2010</b> _____	85
<b>Año 2011</b> _____	177
<b>Año 2012</b> _____	263
<b>Año 2013</b> _____	347
<b>Año 2014</b> _____	421
<b>Año 2015</b> _____	493



## *A manera de introducción...*

---

**T**odo empezó como un simple ejercicio exploratorio, haciendo análisis de contexto para suplir insumos a las discusiones colectivas que entonces solíamos celebrar en nuestras oficinas del Centro de Documentación (CEDOH). Eran los inicios de la década de los años noventa; gobernaba el país Rafael Leonardo Callejas, el primer presidente nacionalista (vale decir del partido Nacional) en la época de la transición política hacia la democracia. Lo que empezó como práctica ocasional, muy pronto se volvió costumbre, rutina periódica que me obligaba a escribir un “*análisis de contexto*” cada mes. Así comenzó esta historia.

Hoy, casi un cuarto de siglo después, cuento con más de 250 “*análisis de coyuntura*” acumulados en mis archivos, como esperando el momento para ser publicados en su totalidad. Ante la dificultad material para cumplir ese objetivo, he optado por publicar los correspondientes a los últimos seis años de nuestra historia contemporánea, abarcando así un sensible periodo que arranca en el año 2009, tiempo siniestro del golpe de Estado, y concluye en el presente año 2015, tiempo luminoso de renacimiento ciudadano y antorchas callejeras.

Este libro es, por lo tanto, algo así como un “*diario de país*”, escrito mes a mes, un registro cotidiano de los hechos que, de alguna manera, han marcado y señalado el rumbo de nuestra evolución histórica reciente en tanto que

Estado y sociedad. Contiene, pues, una visión personal del diario acontecer, un conjunto de puntos de vista y opiniones de un observador subjetivo -no podía ser de otra manera- que busca sistemáticamente el sentido más profundo de los hechos objetivos. Combinación inevitable de lo personal y lo social, lo individual y lo colectivo.

Pero también, debo advertir, se trata de la visión de un observador que, por momentos, se involucra y convierte en actor directo de los mismos acontecimientos que relata y escudriña. Y, como es lógico, esta condición dual se refleja en el texto de los análisis mensuales, incorporando una dimensión parcial y, con frecuencia, apasionada, aunque no por eso menos rigurosa y auténtica. Al final de cuentas, serán los lectores los que harán el juicio definitivo sobre la calidad y solvencia académica del texto.

Al hacer la revisión detallada de cada uno de los análisis, he conservado el texto original, tal como lo escribí en su momento, con los juicios de valor sostenidos entonces, con sus vaticinios y conclusiones. He querido hacerlo así para poner a prueba el valor de pronóstico que tienen las interpretaciones que, mes a mes, elaboraba para la reflexión colectiva. La lectura cuidadosa de cada uno, permitirá al lector atento descubrir las tendencias, el hilo rojo que atraviesa el ovillo, los ejes clave que entrelazan los sucesos y les dan sentido y coherencia lógica. Y, de esta manera, la complementariedad que se observa de un mes a otro, permite, al final, encontrar el sentido global de la evolución de los hechos. A través de los meses, el país va avanzando o retrocediendo, según el ritmo y la secuencia del péndulo de la historia.

Son seis años que, sin duda alguna, han marcado a fuego el desarrollo político, social, económico y cultural de la sociedad hondureña. También han marcado mi vida personal y condicionado en buena medida mi quehacer cotidiano, como era inevitable que sucediera. Los acontecimientos más dramáticos contenidos en este corto periodo nos han afectado a todos, es cierto, pero de diferente manera, en distintos momentos y con intensidad variada. Desde el año 2009 hasta mediados de este 2015, la sociedad hondureña ha

recorrido un largo y, a veces, penoso camino hacia la recuperación plena de su institucionalidad pública. Pero, como siempre sucede, ha habido momentos de parálisis y estancamiento, acompañados con frecuencia de lamentables e imperdonables retrocesos. Cuando creíamos que ya habíamos superado determinadas fases penosas de nuestra historia moderna, los hechos, de pronto, con su riguroso realismo, nos devolvían al mundo verdadero, abandonando el ilusorio, y nos mostraban que aquello que creíamos sólido y consolidado, era en realidad una estructura frágil y voluble.

Recuerdo el día aquel, en abril de 2009 en el Ministerio de Gobernación y Justicia, cuando ofrecía un almuerzo de despedida a una diplomática europea que, de pronto, sin preámbulos protocolarios, me preguntó directamente: dime, Víctor, ¿es posible un golpe de Estado en Honduras? Recuperado de la sorpresa le contesté que no, que tal posibilidad era, en el peor de los casos, una remota e indeseable pesadilla, que los niveles de subordinación militar ante la autoridad civil eran ahora mucho más fuertes y firmes que antes, que las Fuerzas Armadas habían evolucionado hacia niveles aceptables de profesionalización y modernización, acordes con la sociedad democrática y el Estado de derecho... en fin. La mar y sus conchas.

Apenas dos meses después de aquel almuerzo, en la madrugada del domingo 28 de junio, la vida se encargó de demostrarme que mis apreciaciones eran incorrectas, pero que mis temores eran válidos. El peso de la tradición era más fuerte que la urgencia de la modernidad, de la misma forma en que la incultura política y la vocación autoritaria actuaban como un ingrediente corrosivo en la construcción de la democracia. Habíamos creado varias instituciones, diversas y novedosas algunas de ellas, a lo largo del proceso de transición hacia la vida democrática, es decir a partir de los años 1980-1982. Pero no habíamos sido capaces de construir cultura política democrática, valores y costumbres que le dieran sustento realmente decisivo a las nuevas instituciones. El país disponía de nuevas estructuras institucionales pero seguía careciendo de una institucionalidad consolidada. Los mismos vicios, los viejos hábitos, los antiguos y gastados procedimientos seguían permean-

do la vida política de la nación, contaminando los esfuerzos en pro de la modernización del Estado y negando, en última instancia, la perspectiva de una sociedad plural, tolerante y democrática, moderna en fin de cuentas.

Y así fue como se impuso la barbarie. Así fue como las élites políticas y empresariales, militares y religiosas, terminaron consumando su paulatino secuestro de la institucionalidad estatal, sometiendo a su voracidad y caprichos todos los engranajes del sistema político y de la maquinaria gubernamental en su conjunto. Así fue como se puso en marcha y aceleró el retroceso político e institucional de Honduras.

Han pasado seis años hasta ahora. Es un periodo corto porque seis años no son nada en el devenir de la historia del mundo, pero pueden ser mucho en la vida cotidiana de una nación. Por eso tanta agua ha corrido bajo los puentes y tantos acontecimientos han marcado la vida y la lenta evolución de la sociedad hondureña, desde entonces. Y esos son, precisamente, los acontecimientos que, por razones de su trascendencia e impacto, han quedado registrados en este “*diario de país*”, este minucioso recuento ciudadano, fruto del afán de búsqueda, la costumbre del seguimiento y la necesidad de conocer el trasfondo de las cosas. Es un esfuerzo sostenido de registro, de recopilación disciplinada de los hechos, los sucesos y acontecimientos diarios que dan vida, sustento y coherencia a la existencia social de nuestro país. Es la vida del día a día de la sociedad y del Estado. Por eso es que el registro es importante, porque deja constancia de lo sucedido, de lo que ya pasó o está pasando, del pasado y del presente de nuestra comunidad, conocimiento necesario para entender mejor lo que nos pasa y, sobre todo, para diseñar y soñar mejor el futuro.

Pero, ¿cómo asegurar la objetividad necesaria en el análisis, si el autor es parte interesada y actor viviente de muchos de los acontecimientos objeto de interpretación? No es fácil, lo aseguro, pero tampoco es imposible. No soy un espectador pasivo, un observador acrítico y distante, que se conforma con el contorno de los hechos y busca siempre la objetividad ideal, la utopía so-

---

ñada de los ilusos que se autoproclaman siempre neutrales y apolíticos. Busco la verdad de los hechos, adentrándome en los hechos mismos, descendiendo o ascendiendo hasta ellos, según sea su nauseabunda profundidad o su esperanzadora altura. Me sumerjo en la realidad de cada día, buscando siempre la razón última, no la aparente, que explica la lógica de la vida y da sentido y coherencia a los sucesos más extraños y dispersos del diario acontecer.

En política, decía José Martí, lo real es lo que no se ve. Y por eso, el observador requiere tener una mirada de faro, una visión amplia de las cosas, a la vez que un ojo atento de investigador minucioso, buscando y rebuscando qué es lo que se esconde detrás de las negociaciones políticas, qué hay en el trasfondo de los acuerdos y pactos, qué intereses promueven las alianzas - pasajeras o prolongadas-, qué se esconde en el discurso demagógico, en la falsa promesa, en la elaborada propuesta, hasta en la inocente invitación a compartir la mesa o sumarse a la tertulia...en fin. Entre nosotros, el mundo de la política es un mundo de engaños, de hipocresía calculada y cinismo sin límites. De falsa modestia y oculta prepotencia. Un teatro.

Siempre recordaré aquel sábado, a finales del año 2011, cuando llegó a mi oficina uno de esos profesionales de la intermediación a pedirme mis buenos oficios para persuadir al presidente derrocado, a fin de que firmara una carta en la que absolviera de culpas a un reconocido golpista, tan taimado como miedoso, siempre acostumbrado a actuar desde la oscuridad de su propia sombra como operador político de las élites empresariales del país. Era la segunda vez que el atribulado golpista pedía semejante favor. Ya antes, cuando el presidente Zelaya estaba refugiado en la embajada de Brasil, le habían enviado otro mediador para solicitar la anhelada carta. Pero Zelaya, con su conocida habilidad para evadir las trampas y seguirle el juego a quienes quieren utilizarlo, había redactado una carta cuyo texto mismo la volvía inservible para los fines aviesos del solicitante. Decía más o menos así: *“Una vez que he sido restituido en mi cargo presidencial, agradezco a usted los esfuerzos realizados para lograr tal fin...”* Palabras más, palabras me-

nos, así rezaba el contenido de la nota, suma de ambigüedad y burla combinadas, que la volvían inútil y vacía para el objetivo del político que con tanta urgencia la reclamaba. En esta segunda ocasión, de común acuerdo con el ex presidente, preparamos un texto tan sibilino y gelatinoso que tampoco pudo ser utilizado para los fines de expiación y liberación de culpas. Todavía conservo el texto original de esa carta, debidamente firmada por Manuel Zelaya con fecha 18 de noviembre del año 2011. Dos años y cinco meses después del golpe de Estado, el otrora altanero conspirador seguía obsesionado con la idea de obtener la bendita absolución de parte de su víctima. Cosas de la política.

Pero nuestra política local no sólo responde a factores y causas de carácter interno. El elemento exógeno, la presión exterior, la influencia, el consejo, la injerencia externa, también están presentes. Y a veces se expresan de manera tan grotesca y directa que resultan ofensivos y humillantes.

Cuenta el ex presidente Zelaya que en el año 2005, al momento de perder las elecciones, Porfirio “Pepe” Lobo, el candidato derrotado, se negaba obstinadamente a reconocer el triunfo liberal. Pasaban los días y don Pepe no cedía. Mientras tanto, Zelaya actuaba desde ya en su condición de presidente electo, sin conceder demasiada importancia a la negativa de los vencidos. En esas circunstancias, recibió la llamada urgente de uno de los jefes del partido Liberal, quien lo invitó a su casa para conversar sobre el asunto y la engorrosa situación creada. El anfitrión comenzó por recriminarle, con cierto aire de paternalismo impostado, por su estilo “*desinteresado*” y casi indiferente para manejar los asuntos de gobierno. Usted, le dijo, parece que no toma en serio este asunto (incluía, además, la situación conflictiva creada en el Congreso Nacional, en donde Roberto Micheletti peleaba por todos los medios, aceptables e inaceptables, para hacerse con la presidencia del órgano legislativo, en contra de las legítimas aspiraciones de otros diputados liberales) y se desentiende de problemas que ameritan más atención y cuidado. El presidente electo respondió con su habitual informalidad verbal y le dijo: Es cuestión de estilo, cada quien tiene su propia forma de ejercer el poder y

gobernar. Si Pepe no me reconoce, no me importa, yo seguiré gobernando igual... (el embajador de los Estados Unidos ya había reconocido el triunfo liberal en la práctica).

El persistente anfitrión propuso de inmediato reunirse con el embajador norteamericano para resolver de una vez por todas el impasse creado por la resistencia de Pepe Lobo. Llamaron al diplomático y éste llegó en poco tiempo al sitio de la reunión. Ahí, en presencia del anfitrión y de Manuel Zelaya, llamó por teléfono al intermediario profesional y le advirtió sobre los riesgos a que se exponía, en términos de las buenas relaciones con Washington, si continuaba conspirando (regateando más bien) con sus votos para entorpecer la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional. El interpelado, amo y señor mayoritario de un partido de minorías, cedió en sus maniobras y dio marcha atrás.

En la siguiente reunión estuvo invitado don Porfirio Lobo, quien se hizo acompañar del ex presidente Rafael Leonardo Callejas. También estuvo presente el infaltable Arturo Corrales, custodiado por el diputado Ramón Velásquez, su fiel escudero en la Democracia Cristiana, además de los participantes anteriores. Don Pepe, luego de forcejeos verbales y resistencias incómodas, aceptó finalmente reconocer la victoria de Zelaya, con la condición de que el conteo de los votos se quedara así como estaba en ese momento (a Zelaya le faltaban pocos votos para llegar al millón), cuando aún faltaban casi dos mil urnas para concluir el registro de los sufragios. Manuel Zelaya le pidió a Porfirio Lobo que le permitiera seguir contando las urnas para alcanzar el ansiado millón de votos. Don Pepe se negó, molesto e iracundo; golpeó la mesa y concluyó: Ya estuvo bien, Mel, ya me ganaste, no sigás jodiendo, ya basta, así se queda el conteo y aquí termina este problema. Ante la furia del perdedor, a Zelaya no le quedó más alternativa que aceptar la condición y cerrar, de esa forma tan abrupta y especial, el polémico capítulo electoral. El embajador norteamericano se dio por satisfecho y volvió a respirar tranquilo.

Pero esta historia no termina ahí. Ya reconocido oficialmente como presidente electo por el Tribunal Supremo Electoral, Zelaya recibió la invitación del mismo embajador para un almuerzo en la residencia diplomática. Asistió rodeado de varios de sus colaboradores y amigos. A la hora de la despedida, ya en la puerta de salida hacia el estacionamiento de la residencia, el activo y persistente embajador se acercó al nuevo presidente y, con la discreción del caso, le hizo entrega de un sobre blanco, debidamente sellado, con la recomendación expresa de que no lo abriera en ese momento sino después, en la soledad de su despacho. Zelaya guardó el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta y emprendió el regreso hacia su casa, preso de la ansiedad por abrir el sobre y saber, finalmente, en qué consistía el misterio que rodeaba su fuente y origen.

Al entrar en su casa de Tres Caminos, el patio, la sala, y la calle, estaban repletas de partidarios entusiastas que seguían celebrando el triunfo electoral y, no pocos de ellos, esperando obtener desde el primer momento un refugio tan oportuno como provechoso en las apetecidas planillas salariales del Estado. Ansioso por abrir el sobre, Manuel Zelaya subió a su recámara, en la segunda planta de la casa. De la misma forma, ese espacio estaba repleto de familiares y personas cercanas al núcleo de los Zelaya. El nuevo presidente debió encerrarse en el baño para poder estar a solas y abrir el misterioso sobre.

Quedó pasmado por la sorpresa. El sobre contenía una página tamaño carta, sin logotipo ni membrete alguno, que mostraba la lista de los ministerios existentes y, al lado derecho, en línea recta con el nombre de cada Secretaría, tres nombres de personas que la Embajada le “sugería” al nuevo gobernante para que escogiera su futuro gabinete. En medio de su asombro, mezclado ya con un cierto sentimiento de frustración y enojo, el futuro gobernante advirtió, en medio de aquel largo listado de candidatos a ministros, el nombre de algunos de sus futuros colaboradores y de muchos otros que habían estado muy cerca de su círculo personal durante la campaña. “*Sorpresas, sorpresas te da la vida...*”, como dice la canción.

Todavía quedaba espacio para el asombro. A los pocos días, el embajador, el mismo y siempre presente embajador, visitó al presidente y le expresó su disconformidad con la idea de nombrar a Jorge Arturo Reina como nuevo canciller de la República. Usted no puede tener un canciller que no tiene visa para entrar a Estados Unidos, le dijo, agregando de inmediato, y a quien no se la pensamos dar. Zelaya insistió en su determinación de nombrar a Reina en ese cargo, pero luego cedió ante los argumentos del diplomático (“*no tiene visa ni la tendrá*”). Sin embargo, ya en retirada ante la inusitada ofensiva estadounidense, le informó al enviado imperial que, en virtud de esa imposibilidad (que no estaba en manos del gobierno hondureño modificar), Jorge Arturo sería nombrado en el cargo de ministro de Gobernación y Justicia. Ahora el asombro, salpicado de disgusto, se reflejó en el rostro rubicundo del representante norteamericano. Tampoco aceptaba esa decisión; el ministerio mencionado, alegaba, tiene mucha importancia para la seguridad de los Estados Unidos, por el control que debe tener sobre los movimientos migratorios y la emisión de pasaportes. La supuesta “*peligrosidad*” de Reina lo convertía en un candidato inadecuado para ese cargo, de acuerdo a los intereses del gobierno norteamericano. Zelaya reaccionó con más disgusto y reafirmó su decisión: En eso no pienso ceder, embajador, le aseguró. Jorge Arturo será el nuevo ministro de Gobernación, mientras que el canciller será, entonces, Milton Jiménez, le comunicó. Así llegó Milton al importante ministerio de Relaciones Exteriores.

No había empezado a familiarizarse con su inesperado cargo, cuando Milton debió pedir de urgencia una cita con el presidente para plantearle un “*asunto muy delicado*”: se trataba, nada más y nada menos, de la insólita petición del embajador norteamericano para que la cancillería hondureña otorgara una visa de entrada y permanencia en Honduras al conocido terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles, quien en esos momentos enfrentaba un incómodo (para Estados Unidos) juicio en Miami, Florida, por haber entrado ilegalmente al territorio estadounidense. Zelaya comprobó que el asombro no tiene límites.

Ordenó al canciller negar rotundamente el curioso favor que pedía el embajador estadounidense, añadiendo, de paso, una frase que resultó lapidaria ante los oídos imperiales: *“Mejor que me pida una visa para Osama Bin Laden, dile, -instruyó al canciller-, antes que otorgar semejante privilegio a un terrorista de la talla criminal de Posada Carriles”*. Milton interpretó la petición, y así se lo dijo al presidente, como una especie de *“prueba de fuego”* que Washington utilizaba para medir el nivel de lealtad o sumisión del nuevo gobernante hondureño. Pero Zelaya se mantuvo en su posición y rechazó con firmeza inesperada la absurda petición diplomática. Estos incidentes iniciales marcaron el rumbo de lo que después se fue convirtiendo en una lenta pero segura escalada de desentendimientos y confrontación. De nuevo, así es la política.

Ya instalado el gobierno de Zelaya, conformado su gabinete ministerial e iniciado el nuevo rumbo del Estado hondureño, el presidente asistió otra vez a una cita oficial con el embajador norteamericano, en esta ocasión en la sede oficial de la representación diplomática. El anfitrión le recibió rodeado de sus principales colaboradores, un numeroso grupo de funcionarios diplomáticos (consejeros, asesores, técnicos, etc.), a quienes presentó como miembros del *“equipo de país”* (el célebre *“country team”*), en el que cada uno de ellos tenía asignado determinado ministerio en calidad de *“enlace”* o *“responsable”*. A cada Secretaría de Estado le correspondía uno, dos y hasta tres funcionarios de la embajada, que se ocupaban directamente de los asuntos relacionados. Entre bromas y reproches, Zelaya usó su socarronería habitual para hacer el siguiente comentario: *“Estaban tan informados esos diplomáticos de las interioridades de cada ministerio que, con frecuencia, yo optaba por llamarles a ellos para que me informaran o comentaran de los asuntos clave de las distintas Secretarías. Muchas veces sucedía que sabían más que los propios ministros sobre los temas internos de cada dependencia estatal”*. Así funcionan las instituciones en nuestro país.

Cuento estas cosas para que sepamos más, para que conozcamos los detalles, los vericuetos íntimos, los entresijos indispensables, en torno a los que real-

---

mente suceden los verdaderos hechos detrás de los escenarios públicos, la verdadera historia, y no aquella que a diario nos presentan como si fuera la realidad cotidiana del país.

Y, ahora, una historia más, aunque sólo sea para integrar en este relato un contenido tan local como pueblerino: siempre de acuerdo a la versión del ex presidente, un conocido diputado liberal que, en su condición de servidor cercano del usurpador Roberto Micheletti, no tuvo escrúpulos para leer, como si fuera auténtica, la vergonzosa carta apócrifa de la supuesta “*renuncia*” del presidente Zelaya, fue un protegido de Rafael Nodarse, el empresario de la televisión de origen cubano, quien intervino ante el entonces candidato presidencial para que lo incluyera (al aprovechado lector) en las planillas de diputados, marginando de las mismas a otros, más idóneos y apropiados para el cargo. De esa forma, Zelaya favoreció al pequeño aspirante, que luego se convertiría en su feroz enemigo. ¡Las vueltas que da la vida! Otra vez, así es la política.

Nodarse, quien por lo visto tenía una discreta influencia en el gobierno del Poder Ciudadano (al parecer, había cedido al crédito amplios espacios publicitarios en sus medios de comunicación durante la campaña electoral), abogó también a favor de otro protegido para colocarlo dentro de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, lugar privilegiado en donde, tanto el grupo Ferrari-Villeda como el de los Rosenthal, habían colocado ya a sus respectivos peones en posición de Comisionados. De esa manera, los barones de los medios de comunicación negociaban las cuotas de poder, las corrientes de influencia programada y, por supuesto, las campañas mediáticas para favorecer o desmerecer a tal o cual personaje del escenario público. Zelaya, abrumado por las presiones, comentó en su círculo íntimo: y es que el presidente ¿no puede nombrar ni siquiera a un Comisionado en CONATEL? Parecía que no, ni siquiera eso. El dominio e influencia de los poderes fácticos eran tan grandes, que no dejaban espacios para la discreción presidencial. Otra vez, cosas de la política. Es la forma en que funcionan los poderes fácticos en la sociedad hondureña.

Así son las cosas en nuestro país. Por eso este libro, que registra los hechos, los analiza y valora, puede ser de mucha utilidad para sus lectores, algo así como un instrumento, una herramienta apropiada para buscar, escudriñar y, ojalá, encontrar la verdad escondida en la superficialidad de los acontecimientos y sucesos. Aspira a ser una guía, un faro que nos ayude a encontrar el camino, la ruta que nos conduzca, previa iluminación de las antorchas ciudadanas, hacia el destino de un país mejor, más tolerante, más democrático y más plural.

Se termina el ciclo. No tengo mucho más que decir. Lo que resta y queda pendiente, está en el texto que sigue. Los invito a leer, a entrar, como visitantes bienvenidos, discretos y educados, a este salón de espejos, de amplios y limpios espacios, en donde ya tendrán tiempo para ensuciar sus manos, manchar sus dedos y limpiar sus espíritus, disfrutando, o sufriendo, los avatares de la política criolla. Bienvenidos, pues, amigos lectores. Esta es su casa, ¡pasen adelante!

*Victor Meza*

**AÑO**  
**2009**

# ENERO

## 2009

---

### La situación política

La selección por la Junta Nominadora y la posterior elección por el Congreso Nacional de los quince magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia se convirtieron en el asunto más polémico del mes de enero, confrontando al gobierno con la oposición y dividiendo aún más al partido gobernante que vio enfrentadas entre sí a las diversas facciones que existen en su interior.

El gobierno, una vez más, debió sufrir una derrota política inesperada por parte de la oposición. Sin recuperarse todavía del humillante fracaso en las elecciones internas y primarias de noviembre pasado, cuando el candidato preferido del presidente (Roberto Micheletti) se vio ampliamente superado por los votos del entonces todavía Vicepresidente de la República, Elvin Santos, el presidente Zelaya debió encajar una nueva derrota político-parlamentaria: el rechazo a la reelección de los magistrados de la antigua Corte Suprema de Justicia, especialmente el de la abogada Sonia Marlina-Dubón, esposa del actual e influyente ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza. Dubón se había convertido en la principal candidata del presidente Zelaya para ocupar la presidencia de la nueva Corte Suprema de Justicia. Al no estar incluida en la lista de los 45 candidatos propuestos por la Junta Nominadora (una Junta ad hoc conformada para proponer al Congreso Nacional los nombres de los mejores candidatos (as) a magistrados), la esposa del ministro presidencial quedó fuera y perdió todas sus posibilidades de seguir siendo magistrada en la nueva Corte.

La oposición política, hábilmente conducida con mano firme por Porfirio "Pepe" Lobo, el candidato presidencial nacionalista, supo conectar mejor sus propias aspiraciones con las demandas de los diferentes grupos de la sociedad civil que exigían que la elección de los magistrados se llevara a cabo única y exclusivamente entre los 45 abogados propuestos por la Junta Nominadora. La tesis de la Junta Nominadora fue ampliamente respaldada por los diputados de la oposición (nacionalistas, udeistas y pinuistas) y por varios legisladores de la bancada liberal. La propuesta presidencial, cabil-

---

deada en forma un tanto rígida y altanera por algunos colaboradores cercanos del presidente (Milton Jiménez, Enrique Flores, Arístides Mejía y Raúl Valladares, los llamados “*patricios*”) no fue aceptada por los diputados liberales, que prefirieron pactar una solución conjunta con los legisladores de la oposición.

Al final, el gobierno perdió una vez más la batalla frente a la oposición y, de paso, debilitó sus vínculos con las organizaciones de la sociedad civil -especialmente los grupos de presión ciudadana- entre las cuales había logrado crear una importante red de simpatías, sobre todo después del apoyo oficial brindado a los fiscales que declararon una prolongada huelga de hambre el año pasado, en demanda de mayor agilidad y transparencia en los juicios contra la corrupción. El gobierno debería analizar mejor sus estrategias y sacar algunas lecciones que serían de mucha utilidad, por ejemplo: La elección de la nueva Corte Suprema de Justicia en la tormentosa medianoche del domingo 25 de enero, día en que fue instalada la cuarta y última legislatura del Congreso Nacional en la Administración del presidente Zelaya, puso a prueba -una vez más- la fragilidad del Estado de derecho, la debilidad de las instituciones democráticas y la vulnerabilidad del proceso de consolidación de la democracia en Honduras.

La presión ejercida por el Poder Ejecutivo, desde las instancias más altas de la Casa Presidencial, llegó al extremo de que algunos enviados presidenciales -se menciona al ministro de la Presidencia, Enrique Flores, y al entonces todavía ministro de Defensa, Arístides Mejía- amenazaron a los vacilantes diputados liberales con “*cerrar el Congreso y convocar a una Asamblea Constituyente*” si los parlamentarios rechazaban la “*petición presidencial*” para que Marlina Dubón se convirtiera, vía reelección al margen de la lista de candidatos de la Junta Nominadora, en la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia que estaba a punto de ser electa.

En Casa Presidencial, en donde en forma un tanto apresurada había sido convocada una reunión del Consejo de ministros, todo eran rumores. Se hablaba de un posible “*golpe de Estado*”, de extraños movimientos militares en los alrededores de la capital, de la posibilidad de generar un vacío constitucional que dejara al país con sólo dos de los tres poderes del Estado, etc. Al final, ya cerca de la medianoche, apareció el presidente de la República y confirmó que ya todo estaba consumado, es decir que el Congreso Nacional elegiría la Corte Suprema en base a la lista de 45 candidatos propuestos por la Junta Nominadora. Se avisó a los ministros presentes que la reunión del Consejo sería pospuesta para “*una fecha próxima*” y que cada quien podía marcharse a su casa.

Minutos antes de la medianoche, los diputados escogieron a los nuevos quince magistrados (esta vez ocho de filiación liberal y siete nacionalistas)

que habrán de dirigir el sistema de administración de justicia durante los próximos siete años. Ahí mismo quedó electo el nuevo presidente de la Corte, cargo que recayó en el abogado liberal Jorge Avilés, un discreto profesional del derecho que ha pasado la mayor parte de su vida en los entresijos de los tribunales y otros órganos administrativos del Poder Judicial. Su protector político -y en los inicios de su carrera, también económico- es su tío Juan René Rivera, abogado igual que él y reconocido financista de las campañas políticas en el partido Liberal (PL). Avilés es un cuadro político menor, de militancia discreta y carente de influencias reales en el seno de la estructura partidaria de los liberales. Se comenta que uno de sus padrinos políticos en esta ocasión ha sido el propio Roberto Micheletti, actual presidente del Congreso Nacional, quien ha utilizado a uno de sus múltiples testaferros para cabildear a favor de la candidatura de Avilés.

Acompañan a Rivera otros colegas suyos que tampoco tienen una destacada participación en sus respectivos partidos políticos; sin embargo, al haber sido nombrados con el apoyo de las cúpulas partidarias liberal y nacionalista, sus lealtades estarán divididas entre estas dos agrupaciones políticas. O sea que el país ha avanzado muy poco en el camino de la despolitización partidaria del sistema de administración de justicia, uno de los grandes objetivos de los pactos reformistas firmados en septiembre del año 2001 que crearon, entre otras instituciones, la Junta Nominadora de candidatos a la Corte Suprema.

La crisis desatada en torno a la selección y elección de la nueva Corte puso además en evidencia la marcada tendencia de la clase política local a buscar el tutelaje de poderes arbitrarios por encima de los partidos políticos mismos. La búsqueda de tales tutores, ya sean militares o religiosos, resurgió con fuerza en los momentos más álgidos de la crisis cuando muchos líderes políticos apelaban a la buena -o mala- voluntad de los militares para descifrar el rumbo de los acontecimientos o el desenlace final de los mismos.

La actuación del entonces ministro de Defensa, Aristides Mejía, fue especialmente significativa en este aspecto. Apelando a un liderazgo ficticio al interior de las Fuerzas Armadas, se atrevió a hablar en nombre de los militares para intimidar a los legisladores que rechazaban la "*tesis de Casa Presidencial*" a favor de la reelección de la magistrada Marlina Dubón. Los militares, concientes de sus posibilidades políticas reales en las nuevas condiciones internas y externas, guardaron prudente silencio y se esforzaron por disminuir su perfil, artificialmente elevado por los políticos civiles durante el desarrollo de la crisis.

En consecuencia, los defensores de la "*tesis parlamentaria*" que favorecía la preeminencia de la lista de candidatos propuesta por la Junta Nominadora,

---

resultaron vencedores y lograron fortalecer su alianza coyuntural con los grupos de presión ciudadana que se habían instalado, en señal de protesta, en la planta baja del edificio legislativo.

Los nacionalistas lucieron así como si fueran los verdaderos liberales, mientras que los liberales del gobierno volvieron a aparecer como si fueran los reales conservadores. Este trueque de roles y cambio de posiciones sólo es un reflejo de la gran confusión política que satura el ambiente nacional y el laberinto que gira en torno a las campañas políticas en este "año electoral", que, dicho sea de paso, es también el último año de la Administración Zelaya.

Si los liberales del círculo más cercano al presidente Zelaya insisten en lograr sus objetivos, más personales que políticos, a costa de las alianzas con los grupos de la sociedad civil, la oposición tendrá cada vez más despejado el triunfo hacia la victoria electoral en noviembre de este año. Si el partido Liberal continúa fraccionado y dividido entre distintas facciones, sin lograr construir una plataforma mínima de unidad que le dé cohesión y devuelva la capacidad movilizadora de antaño, los nacionalistas seguirán consolidando la unidad dentro de sus filas, en torno a un liderazgo fuerte y probado -el de Pepe Lobo-, lo que sin duda alguna les permitirá formar gobierno en el próximo cuatrienio 2010-2014.

Pero si la batalla por la Corte Suprema dejó maltrecho y derrotado al gobierno, las nuevas batallas que se avecinan, particularmente la que se producirá en torno a la elección del nuevo Fiscal General y su Adjunto, anuncian nuevos encontronazos y pruebas de fuerza entre la Administración Zelaya, la oposición y las facciones disidentes dentro del partido de gobierno.

A mediados del mes de marzo deberá llevarse a cabo la elección del Fiscal General y su Adjunto. Por acuerdos previos entre las cúpulas partidarias nacionalista y liberal, en esta ocasión el titular de la Fiscalía General deberá ser un liberal mientras que el Fiscal Adjunto pertenece al partido Nacional. Así de simple, aunque las cosas pueden ser mucho más complejas. Veamos:

El Congreso Nacional debe elegir a los dos fiscales -el General y el Adjunto- en base a una lista de cinco candidatos que le propone otra Junta Nominadora, esta vez integrada por cinco representantes (dos de la Corte Suprema, entre ellos su presidente, uno del Colegio de Abogados, otro de las Universidades y el Comisionado nacional de los derechos humanos). En esta Junta Nominadora los liberales ya están en minoría: tres son nacionalistas (el del Colegio de Abogados, uno de la Corte Suprema y el de las Universidades), uno es liberal (el presidente de la Corte Suprema) y el otro indepen-

diente (Ramón Custodio, Comisionado de los derechos humanos). Por lo tanto, aunque ya hay un acuerdo básico para que el nuevo Fiscal General sea un liberal, no hay duda que los nacionalistas estarán en capacidad de escoger al liberal que prefieran de los que proponga el partido de gobierno.

El Poder Ejecutivo, escaldado por las derrotas recientes, se muestra esta vez más cauteloso que de costumbre y no se atreve a mencionar los nombres de sus candidatos, aunque es un secreto a voces que los llamados “*patricios*” quieren imponer a uno de los suyos en tan importante cargo. Se mencionan los nombres de Milton Jiménez, el propio Enrique Flores, la gerente de la ENEE, Rixi Moncada, o la misma Marlina Dubón, quien intentaría por segunda vez recolocarse en un puesto clave dentro del engranaje estatal.

Pero, al mismo tiempo, Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional, también tiene su propio candidato: el actual secretario del Parlamento, el abogado José Ángel Saavedra. Los nacionalistas, seguramente, preferirían apoyar a Saavedra antes que a uno de los “*patricios*”. De esa forma, derrotarían otra vez al Poder Ejecutivo y, de paso, agravarían la división interna en las filas liberales.

Mientras llega ese momento, el gobierno acaba de reacomodar sus piezas en el ajedrez ministerial, recolocando al Canciller Edmundo Orellana en el cargo de ministro de Defensa y nombrando a Aristides Mejía como “*Comisionado Vicepresidente*”, una posición artificialmente creada sólo para ubicar en algún lugar al antiguo ministro de Defensa. En la Cancillería, el presidente Zelaya nombró a su estrecha colaboradora y amiga, la hasta entonces presidenta del partido, Patricia Rodas, un nombramiento que ha sorprendido a muchos y preocupado a casi todos.

Los esperados cambios en el gabinete de gobierno quedaron reducidos a estos movimientos rotatorios. El resto del gabinete se mantiene fijo, salvo un par de sustituciones a nivel de viceministros en el Ministerio de Educación y en el Patronato Nacional de la Infancia.

El nombramiento de Patricia Rodas en la Cancillería es el que más sorpresas ha generado y mayor incertidumbre ha creado. Se teme que su manifiesta tendencia a “*ideologizar el discurso político*” y radicalizar verbalmente los mensajes y actitudes del gobierno, puedan crear problemas adicionales en la esfera de las relaciones internacionales y la política exterior del país. Su excesiva y a veces casi ingenua simpatía y admiración por los presidentes izquierdistas de la región, especialmente Ortega de Nicaragua, Chávez de Venezuela, Morales de Bolivia y Castro de Cuba, podrían crear más problemas que soluciones en la política exterior del gobierno del Poder Ciudadano.

Zelaya optó por nombrarla en ese cargo para salvarle un poco la cara, en momentos en que, después del triunfo de Elvin Santos en las pasadas elecciones primarias e internas de noviembre de 2008, Patricia debería abandonar la dirección del partido Liberal y pasar a un segundo plano en la cúpula partidaria. Al mismo tiempo, el presidente movió su pieza clave -Edmundo Orellana- hacia Defensa, pensando en las próximas elecciones de noviembre, cuando los militares deben custodiar y transportar las urnas electorales. Necesitaba un hombre serio al frente de los militares, una persona capaz de inspirar alguna confianza entre la oposición que, por razones obvias, no podía confiar en Arístides Mejía, el anterior ministro, para el manejo de las urnas electorales. Mejía genera desconfianza y dudas entre los nacionalistas, sobre todo por su papel como representante liberal en el Tribunal Supremo Electoral durante las elecciones generales de 2005 que ganó Zelaya frente a Pepe Lobo.

Al nombrar a Orellana en Defensa, el presidente Zelaya busca dar mayor credibilidad y fortaleza al proceso electoral de noviembre, creando un clima de mayor confianza y respetabilidad entre una oposición cada vez más desafiante y desconfiada.

De esta forma, Zelaya inicia su cuarto y último año de gobierno casi con el mismo gabinete ministerial con el que concluyó el año 2008. Sin embargo, esta vez es un gabinete más débil y fracturado, que sufre las consecuencias de las recientes derrotas políticas (elecciones primarias e internas de noviembre de 2008 y la selección y elección de la nueva Corte Suprema de Justicia en enero de 2009) del Poder Ejecutivo y que, además, tiene divididas sus simpatías entre Zelaya presidente y Elvin Santos candidato. Al interior del gabinete no son pocos los ministros que abiertamente apoyan las aspiraciones de Santos, aunque con ello generen fricciones y molestias entre sus propios compañeros. Todo ello incrementa la debilidad estructural del gobierno, desarticula las viejas alianzas y estimula la formación de nuevos grupos, generando cierto inmovilismo en la toma de decisiones y reduciendo la capacidad de convocatoria y la fuerza para la adopción de posiciones más definidas en la Administración zelayista.

En medio de todo este laberinto político, el gobierno debe afrontar también la fuerte oposición de los gremios empresariales que se oponen a la aplicación total del nuevo salario mínimo (290 dólares en el sector urbano y 214 en las zonas rurales), alegando que el incremento ha sido muy brusco (casi 60%) y que no hace discriminación positiva entre las grandes y las pequeñas y medianas empresas. El Poder Ejecutivo ha debido enfrentar una verdadera *"rebelión empresarial"*, para lo cual ha tenido que apelar a la *"solidaridad pactada, a veces comprada"* de los llamados *"grupos populares"*, especialmente los sindicatos obreros (unos trece mil trabajadores en total), las asociaciones campesinas y los grupos étnicos que se han manifestado ya

en dos ocasiones en las calles de las principales ciudades del país para protestar y condenar a los “*voraces empresarios*” que se niegan a pagar el salario mínimo a sus trabajadores.

La sociedad está entrando en una peligrosa pendiente de polarización social, que enfrenta cada vez más radicalmente a los grupos y clases sociales en que está dividido el país.

Y esta creciente polarización se produce en un clima de angustiante inseguridad ciudadana, que mantiene atemorizada a la población por las acciones del crimen organizado y la delincuencia común.

Ante estos hechos, no se puede menos que concluir en lo siguiente: el cuarto y último año de la Administración Zelaya, no sólo será un “*año electoral y político*” sino que, además, será el año del gran impacto de la crisis económica internacional, el año de la inseguridad ciudadana y la convulsión política y social.

# FEBRERO

## 2009

---

### La situación política

**E**l mes de febrero comenzó, como ya es usual cuando inicia el ciclo escolar, con los maestros en las calles protestando por el pago atrasado de salarios, reales o supuestos, y exigiendo la destitución del ministro de Educación, Marlon Brevé. Las marchas callejeras de los maestros se han convertido ya en una parte sustancial del paisaje político cotidiano y del panorama urbano. Al final, como ya es costumbre, el gobierno formó una Comisión negociadora, esta vez encabezada por el Comisionado Vicepresidente, Aristides Mejía, que logró calmar los ánimos y devolver los maestros a las aulas mientras el Ministerio de Finanzas encuentra los dineros necesarios para pagar los supuestos sueldos atrasados.

Los problemas con el gremio magisterial se han vuelto permanentes e irresolubles. La planilla total del gobierno en el año anterior fue de 23mil 365 millones de lempiras, que equivalen al 50% de todos los ingresos tributarios anuales. La planilla total para el pago de maestros fue de 12 mil 901 millones, es decir un poco más del 50% de la planilla total y el 25% de todos los ingresos tributarios del Estado en el año 2008. La masa salarial total del Estado equivale al 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB), aunque a finales del año subió a 9,4%. En este año 2009 la planilla salarial de los maestros subirá tanto y en tales proporciones que amenaza con generar un fuerte desequilibrio en las finanzas estatales, provocando un déficit fiscal igual al 2,5%, es decir unos 7mil millones de lempiras (en el año 2008 el déficit fiscal fue de 1,5% del PIB).

Casi al mismo tiempo que debía enfrentar las protestas callejeras de los maestros, el gobierno debió encajar una nueva derrota política frente al Congreso Nacional. En la noche del día 07 los diputados eligieron al nuevo Fiscal General y su Fiscal Adjunto, cargos que recayeron en el liberal Luis Rubí y en el nacionalista Roy Urtecho, respectivamente. La elección de Rubí y Urtecho, aunque observó el respeto formal a la lista de candidatos propuesta por la Junta nominadora, lo cierto es que respondió al acuerdo político entre las cúpulas de los dos grandes partidos políticos tradicionales, el

Liberal y el Nacional. Ambos partidos sabían que en esta ocasión el turno para ocupar la Fiscalía General le correspondía a los liberales, mientras que los nacionalistas ahora debían conformarse con el segundo lugar. Son acuerdos que, aunque no estén escritos ni se fundamenten en ninguna ley, tienen fuerza legítima y se respetan por ambas partes. De esta forma, los dos partidos se aseguran el control político partidario sobre el Ministerio Público y sus funciones, condicionando la persecución penal al acomodo y reacomodo de las lealtades políticas.

En esta ocasión, el Poder Ejecutivo actuó con más prudencia y discreción, a diferencia del escándalo que escenificó cuando se produjo la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia en el mes de enero. El presidente no presentó abiertamente candidatos, aunque tenía algunos nombres de colaboradores que deseaba fueran electos en el importante cargo de Fiscal General. Aunque el abogado Rubí es un conocido miembro del partido Liberal, no se cuenta entre las filas de entusiastas partidarios del presidente Zelaya. Su lealtad está dirigida hacia el ex presidente liberal Carlos Flores y responde a sus instrucciones y mandato. Rubí es un conocido *"florista"*, al igual que lo ha sido su hermana y ex precandidata presidencial liberal Vera Rubí, actual directora de la Marina Mercante. De esta forma, crecen las influencias del ex presidente Flores en el engranaje gubernamental y aumentan sus espacios de influencia para promover a su hija, la diputada Lizzie Flores, a la presidencia del Congreso Nacional en el caso que Elvin Santos se llegue a convertir en el próximo presidente de Honduras, una posibilidad que por ahora luce todavía como muy remota.

Mientras aumenta la influencia del llamado *"florismo"* (partidarios de Carlos Flores) en el seno del partido Liberal, disminuye la del presidente Manuel Zelaya y se debilita el poder de convocatoria de su gobierno. Los seguidores de Elvin Santos, el candidato oficial del partido, no esconden su resentimiento y rechazo hacia el entorno político más cercano del presidente Zelaya, especialmente hacia los ahora mal llamados Patricios (Enrique Flores, Milton Jiménez, Aristides Mejía y la propia Patricia Rodas). Los elvincistas, prisioneros de su propio triunfalismo político, creen ser capaces de organizar y conducir la campaña electoral hacia una nueva victoria liberal, sin tener que acudir en demanda de ayuda ante el presidente Zelaya y su grupo de cercanos colaboradores.

Pero la popularidad de Zelaya sigue siendo un factor que favorece al presidente a nivel personal, aunque no siempre se traduzca en corrientes de apoyo al gobierno en su conjunto. El presidente es más popular que su propio gobierno, al menos eso es lo que indican las más recientes encuestas, públicas y privadas, que se han realizado en el país. Esta circunstancia se convierte en una importante carta a su favor en el juego político interno del partido. Zelaya es algo más que un simple elector en el seno del partido

---

Liberal. Es un factor clave para generar apoyo entre las bases liberales, especialmente en las zonas rurales del país. Elvin Santos, aunque no lo reconozca en público, necesita de Zelaya y precisa de su apoyo y respaldo.

Micheletti, por su parte, también necesita de Zelaya para ampliar su propia cuota de poder político dentro del partido. Su fuerza ya no está en ascenso, aunque todavía conserva parcelas de poder importantes en el Congreso Nacional y en algunas regiones y zonas electorales clave del territorio nacional. La aspiración de Micheletti por convertirse en el presidente del Consejo Central Ejecutivo del PL es una muestra de su necesidad de afianzarse dentro del partido, controlando sus instancias de dirección para negociar una mejor y más amplia cuota de poder en el proceso de la campaña electoral ya en marcha.

Y así, atrapado en las luchas de facciones y corrientes políticas, el partido gobernante todavía no muestra su fuerza de convocatoria ni parece estar preparado para librar una intensa batalla electoral frente a un candidato opositor (Porfirio Lobo) mejor posicionado y con un partido más unido y fuerte en torno suyo.

Los nacionalistas, aunque están muy conscientes de sus reales posibilidades de retornar al poder en las elecciones del próximo mes de noviembre, se cuidan mucho de no aparecer como triunfalistas y prepotentes. Se han preparado muy bien para enfrentar la campaña electoral y lo continúan haciendo. Sus niveles de unidad interna y cohesión doctrinaria son infinitamente más fuertes y elevados que los que predominan entre los liberales. Las facciones disidentes, que cuestionan la candidatura oficial de Porfirio "Pepe" Lobo, son cada vez más débiles y están en proceso de extinción. Mario Canahuati, el joven empresario de la zona norte del país que perdió las elecciones internas frente a Lobo, cada vez está más solo y aislado. Sus escasos partidarios le han abandonado para buscar oportuno reacomodo en las filas lobistas. Su futuro político es incierto, a menos que opte por rendirse y plegarse totalmente al servicio de Pepe Lobo, tal como ya oportunamente lo hicieron otros disidentes y aspirantes como el ex alcalde de la capital (2002-2006), Miguel Pastor.

Si las elecciones fueran en este mes, tal y como se presenta el actual panorama político del país, no hay duda que las ganarían los nacionalistas con Pepe Lobo a la cabeza. Tal es la convicción del propio presidente Zelaya, quien hace denodados esfuerzos para que Elvin Santos se convierta en el abanderado de la unidad interna del partido, condición previa y fundamental para que los liberales aumenten sus opciones de triunfo en el mes de noviembre.

Pero no sólo la unidad interna de los partidos es tema de discusión en estos momentos. También el asunto de la unidad nacional, condición clave para enfrentar la crisis financiera y económica que afecta al mundo, es uno de los puntos más importantes dentro de la agenda política del país. Los empresarios, a través de su organización gremial, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), han planteado el tema ante los partidos políticos y ante el gobierno mismo. El presidente Zelaya, que ha estado enfrentado a los empresarios cada vez más en los últimos meses, no ha respondido a la solicitud de diálogo y reconciliación. Ahora que los empresarios han elegido una nueva Junta Directiva, con Alejandro Alvarez, un empresario de la construcción, al frente, podría abrirse una nueva ventana de comunicación y acercamiento con el gobierno.

Para calmar los constantes reclamos del gremio empresarial, el presidente anunció, antes de su más reciente viaje a Cuba, que una Comisión especial dirigida por el Comisionado Vicepresidente Aristides Mejía, se encargaría de “socializar” un plan anticrisis que ya ha sido diseñado como un conjunto de medidas y acciones destinadas a proteger y fortalecer la economía ante el inevitable impacto de la crisis internacional. El Plan, que contiene medidas de política monetaria y fiscal, así como propuestas de masiva y millonaria inversión pública, ya está en manos de Mejía y deberá ser discutido y consensuado con los diferentes actores y agentes de la vida económica y política del país.

Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo apura esfuerzos para finalizar el llamado Plan de Desarrollo al año 2030, un documento técnico elaborado por los expertos, nacionales y extranjeros, que trabajan en la Unidad de Asistencia Técnica (UNAT) del Ministerio de la Presidencia. Ese documento, que algunos confunden con las Bases del Plan de Nación que fueron resultado del proceso de Diálogo Nacional llevado a cabo en el año 2007, será el que entregará el presidente al Congreso Nacional en los próximos meses. Por su parte, el mismo Congreso Nacional, vale decir Micheletti, por consejos del ex presidente Carlos Flores, ha impulsado una iniciativa peligrosa para hacer y presentar su propio Plan de Nación o Plan de Desarrollo con los cinco partidos políticos del país. Esta acción de Micheletti constituye un abierto desafío al presidente Zelaya y una muestra más de la capacidad de Carlos Flores para intrigar y poner zancadillas a la Administración zelayista.

Si el Congreso Nacional sigue adelante con su idea de elaborar un “Plan de Nación paralelo”, la iniciativa del presidente Zelaya al enviar al Parlamento su propio “Plan de Desarrollo al 2030” estará condenada de antemano al fracaso, frustrando así una vieja aspiración nacional de contar con un Plan de País que marque el rumbo de Honduras a largo plazo y con visión de futuro.

Las disputas políticas, los celos y ambiciones personales, así como las intrigas y conspiraciones de grupos y facciones, amenazan con echar por tierra todo el esfuerzo realizado a través del Diálogo Nacional del 2007 y relegar a un segundo plano el conjunto de propuestas diseñado por más de 500 organizaciones sociales que fueron consultadas en todo el territorio nacional. O sea que, al final, estaremos en presencia de tres iniciativas diferentes en torno al llamado Plan de Nación o Plan de País:

- a) La iniciativa que se desprende del proceso de Diálogo Nacional llevado a cabo en el año 2007 y conducido por una Comisión Organizadora independiente. El resultado de esta iniciativa está contenido en el documento Bases para un Plan de Nación.
- b) La iniciativa “*técnica*” impulsada por Casa Presidencial a través de la Unidad de Asistencia Técnica (UNAT) del Ministerio de la Presidencia. El resultado de esta iniciativa está contenida en el documento llamado Plan de Desarrollo al año 2030.
- c) La iniciativa surgida en el seno del Congreso Nacional, auspiciada por Carlos Flores y Roberto Micheletti, que involucra a los cinco partidos políticos y que habrá de producir una versión propia de un Plan de País, la que deberá ser presentada oficialmente el día 15 de septiembre, aniversario de la independencia nacional.

Total, al final tendremos tres versiones diferentes de Plan de Nación y, casi seguramente, ninguna será al final aceptada y refrendada por las nuevas autoridades electas en noviembre próximo. De ser así, el país sería el gran perdedor.

### **Crece la conflictividad social**

**E**n el año anterior, de acuerdo a los datos recogidos por el Observatorio de la conflictividad social del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), tuvieron lugar 370 conflictos sociales de diferente magnitud, duración e impacto en todo el territorio nacional. Esa cifra revela un incremento de la conflictividad en 39% con respecto al año 2007, cuando se registraron 267 conflictos en total.

O sea que la conflictividad social va en aumento, tanto en el número de problemas registrados como en la intensidad y duración de los mismos. Basta echar un vistazo a los conflictos cotidianos para sacar las conclusiones adecuadas.

Los maestros, agentes conflictivos permanentes, se han convertido en la contraparte inevitable y más problemática en los ámbitos de la conflictividad social en el país. Sus protestas y demandas, así como los constantes paros laborales que llevan a cabo bajo el disfraz de las llamadas “*asambleas informativas*”, mantienen en vilo a todo el sistema educativo nacional y le ocasionan un grave daño a la niñez y la juventud del país entero. En el año 2008 se perdieron 30 días de los 200 que, al menos en teoría, deberían recibir clases los alumnos.

A su constante reclamo por salarios atrasados y la consiguiente destitución del ministro de Educación, Marlon Brevé, ahora han sumado nuevas demandas: la revisión y discusión del texto de la nueva Ley de Educación que ya ha sido ampliamente discutida a lo largo de siete años y que ahora, por fin, se ha logrado enviar al Congreso Nacional para su aprobación definitiva. Los dirigentes magisteriales rechazan esa ley porque la misma introduce orden y gobernabilidad en el sistema educativo. Su oposición a la ley anuncia nuevos y más prolongados conflictos en el sistema educativo del país.

Los grupos indígenas lencas, agrupados en el llamado Comité de los Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), volvieron a marchar sobre la capital, luego de haber escenificado varias “*tomas*” de carreteras en los departamentos de Intibucá y Lempira (occidente del país) en protesta por la tala inmisericorde de los bosques por parte de terratenientes locales ligados familiarmente a algunas funcionarias del actual gobierno.

En febrero se produjeron varios paros laborales en diferentes dependencias del Estado: Registro Nacional de las Personas (RNP), Instituto de la Propiedad (IP), hospitales y otras dependencias del Sistema de Salud Pública, el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS), etc. Se llevaron a cabo varios desalojos violentos en contra de grupos de pobladores y campesinos, a la vez que se realizaron “*tomas*” en carreteras que están en mal Estado y los usuarios demandan su inmediata reparación o construcción final (carretera a El Paraíso, por ejemplo).

Los ambientalistas continuaron sus protestas contra la empresa Gas del Caribe, que ha instalado depósitos de gas en una zona turística en las playas de Omoa, departamento de Cortés, sin contar con los permisos ambientales requeridos, de acuerdo a la denuncia de los protestantes.

Los desempleados aumentan en número, aunque ya la mayoría de las grandes empresas industriales y comerciales han aceptado el pago del salario mínimo decretado por el gobierno en diciembre del año pasado.

## La inseguridad: un problema en aumento

Como una medida de última hora, que seguramente creará más problemas que soluciones, el presidente nombró a un pariente cercano de su esposa, el médico forense Denis Castro, en condición de “Asesor presidencial en materia de seguridad”. El nombramiento ha causado cierto malestar y decepción en las filas policiales, sobre todo entre aquellos oficiales que han sido sus alumnos en los cursos de medicina forense en la academia policial. Según versión de los propios policías, el nombrado no reúne los requisitos necesarios ni la autoridad suficiente como para desempeñarse en calidad de asesor, sobre todo en tiempos de aguda crisis en el sistema de seguridad pública.

Mientras tanto, el número de secuestros crece en forma exponencial y se ha convertido ya, junto con el narcotráfico y el sicariato, en uno de los principales retos y desafíos para las fuerzas de seguridad en el país. Si en el año 2005 se producía un secuestro cada 73 días, en el 2008 esa relación se redujo drásticamente a uno cada 4 días y medio, y a juzgar por el número de secuestros en los dos primeros meses de este año (27 sólo en la ciudad capital) ahora se produce un secuestro cada 2 días y medio. La situación se agrava y, aunque el ejército ha salido nuevamente a las calles para acompañar a los policías en sus tareas de vigilancia, la percepción de acoso y peligro sigue siendo la misma entre la población.

De acuerdo al último informe del Observatorio de la Violencia, un organismo financiado por el PNUD y apoyado por la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), las muertes violentas aumentaron en un 25% entre el año 2007 y el año 2008. En este último año, el 36% de todos los homicidios fueron realizados por sicarios a sueldo del crimen organizado.

La situación ha llegado a ser tan alarmante que el propio ministro de Seguridad fue sometido a una exhaustiva interpelación por parte del Congreso Nacional para que diera alguna explicación aceptable sobre lo que está pasando. La intervención del ministro fue a puertas cerradas, a pesar de que el presidente Zelaya le había pedido abiertamente a los diputados que la hicieran pública. La oposición aprovechó la ocasión para enfilarse contra el gobierno y poner en la picota la fallida política antidelinquencial del Estado. El presidente acusó a los nacionalistas de “politizar” el tema de la seguridad y vulgarizar el debate sobre un asunto tan importante y vital.

El ministro de Seguridad, Jorge Rodas, quien debería renunciar a su cargo en el mes de mayo para no inhabilitar la candidatura a diputado de su hermano, el político liberal de El Paraíso, Mamilio Rodas, ha perdido liderazgo y respeto en el entorno de la oficialidad policial. Ahora, con el nombramiento de Denis Castro como “asesor en seguridad”, la posición de Rodas queda más debilitada y vulnerable. La crisis en el sistema de seguridad y al interior

de las fuerzas policiales seguirá siendo un tema pendiente en la agenda del sector seguridad y en las prioridades del Poder Ejecutivo.

Como era de esperar, el asunto de la seguridad se ha convertido ya en un tema permanente de la agenda electoral de los dos principales candidatos presidenciales: Porfirio “Pepe” Lobo y Elvin Santos. Ambos se acusan por la falta de una política clara en materia de seguridad y se reprochan unos a otros por el deterioro evidente de la situación.

El tema de la seguridad ciudadana será un eje clave en la campaña electoral que está por comenzar.

# MARZO

## 2009

---

### La situación política y social

El mes de marzo comenzó en medio de gran turbulencia social, un auge alarmante de la violencia y la delincuencia organizada y, para rematar, un clima de creciente crispación política entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo en torno a la llamada “cuarta urna”, es decir la decisión del presidente Zelaya de convocar a una consulta popular el último domingo del mes de junio para decidir si se coloca una urna adicional en las elecciones de noviembre próximo, a fin de conocer la opinión de los votantes sobre la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar y aprobar una nueva Constitución de la República.

Las “tomas” de carreteras y otras vías públicas se sucedieron con mayor frecuencia en este mes. Igualmente, los paros laborales, las llamadas “asambleas informativas” (paros disfrazados) de los maestros, la interrupción de labores en instituciones clave como son el Registro Nacional de las Personas (RNP), el Instituto de la Propiedad (IP) o los hospitales públicos estuvieron a la orden del día, alterando el normal funcionamiento del aparato gubernamental y generando caos y confusión en una sociedad ya de por sí alterada y angustiada por los altos niveles de criminalidad y violencia.

Los secuestros, una de las formas más frecuentes que adopta el crimen organizado en sus actividades diarias, han aumentado en una proporción más que alarmante. Los registros de la policía indican que en lo que va del año, es decir en el primer trimestre, se han producido 32 secuestros, incluyendo los de niñas y adolescentes de clase media. La hija y nieta del conocido publicista Carlos Calderón, uno de los hombres cercanos y asesor en materia de comunicación del presidente de la República, se encuentran todavía en manos de los secuestradores. De los 117 sospechosos de ser secuestradores que han sido capturados en los últimos dos años, apenas uno de ellos permanece en la cárcel, informó el presidente en el círculo de sus más cercanos asesores. El resto o se ha fugado o disfruta de medidas sustitutivas y cautelares concedidas por los jueces.

La situación es tan grave y la escalada tan evidente que el presidente Zelaya se vio obligado a convocar de urgencia al Consejo de ministros para adoptar medidas de emergencia a fin de controlar el ascenso vertiginoso de la criminalidad. Las medidas, que incluyen control en la venta de teléfonos móviles y sus correspondientes “chips”, registro minucioso de arrendadores y arrendatarios de viviendas y vehículos, patrullajes conjuntos e intensivos entre la policía y los militares, incremento en las operaciones encubiertas de inteligencia, endurecimiento de las penas, reducción de las medidas cautelares y concertación casi forzada entre jueces, policías y fiscales, han provocado revuelo en las filas de la oposición y entre algunos organismos de derechos humanos que las consideran atentatorias contra las libertades y garantías individuales consignadas en la Constitución de la República. Sin embargo, el gobierno ha logrado el apoyo de amplios sectores de la población que respaldan la adopción de las medidas de emergencia, aunque casi todos coinciden en señalar su carácter tardío y de última hora.

Convencido de la negligencia de los jefes policiales y la corrupción que prevalece en algunas dependencias del Ministerio de Seguridad, en particular en la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), el presidente decidió poner en funcionamiento una especie de “*mini gabinete de seguridad*”, en donde están presentes el ministro Rodas Gamero, el de Gobernación y Justicia, el de Defensa y los asesores presidenciales Denis Castro y Hernán Silva, éste último es el mismo que fuera destituido recientemente de la presidencia del IP por supuestos actos de abuso de poder (autoasignación de jugosas dietas) y mala administración. La idea, que debería cobrar forma institucional en las próximas semanas, es la de reactivar el llamado Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que ya aparece mencionado en la Constitución de la República.

El presidente ha tomado la decisión radical de involucrarse directamente en el manejo del tema de la seguridad, aunque ha advertido a los jefes policiales, al ministro y a los dos viceministros, que no está dispuesto a perder la batalla y salir lesionado en su prestigio personal y político. En una reunión con las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público, el presidente Zelaya pidió a sus jefes (ambos de reconocida filiación liberal) el apoyo decidido para el Poder Ejecutivo y el respaldo firme a las nuevas medidas adoptadas. Ambos funcionarios -el presidente de la Corte Suprema y el Fiscal General- se comprometieron a endurecer la política criminal de sus respectivas instituciones y colaborar más estrechamente con la policía y todos los operadores del sistema de justicia.

La nueva cruzada del presidente Zelaya en contra de la delincuencia común y organizada se produce en un contexto político sumamente complejo y tenso. Las relaciones con el jefe del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, sobre todo después de su frustrado intento por ganar la nominación oficial

---

del partido Liberal (PL) para la candidatura presidencial, están muy deterioradas y cada vez más tienden a empeorar. Micheletti, hábilmente influido por el ex presidente Carlos Flores, no hace nada o hace muy poco para mejorar las relaciones con Casa Presidencial. Confronta y se opone a las iniciativas del presidente Zelaya, contribuyendo así a la creación de un clima político sumamente crispado y, de paso, creando barreras y dificultades para la necesaria unidad en las filas del partido que, en teoría, sigue siendo el partido gobernante.

Ahora que las relaciones entre Micheletti y el candidato oficial del partido, Elvin Santos, han empezado a mejorar, la figura de Zelaya aparece cada vez más distante de esa alianza y más vinculada con iniciativas políticas de otro tipo. El presidente y su grupo de más cercanos colaboradores (Enrique Flores, Patricia Rodas, Milton Jiménez, Aristides Mejía, Enrique Reina, etc.) tienen otros objetivos políticos, más ligados a una transformación profunda del PL y a una orientación de centro izquierda en la línea doctrinaria del partido. Pero esta iniciativa de Zelaya y su grupo tiene una debilidad intrínseca: carece de una fuerza política organizada que le otorgue sustento y sostenibilidad a mediano y largo plazo. Aparece más como una iniciativa coyuntural, auspiciada por el entusiasmo pasajero de la última etapa del gobierno y sostenida por la interesada solidaridad de aliados externos tan entusiastas y dispuestos como los autollamados “*grupos populares*” y “*sectores sociales*”.

El proyecto político de Zelaya y sus amigos no cuenta con una estructura organizada dentro del PL ni dispone de una fuerza política confiable y segura. El apoyo de algunos grupos del llamado “*movimiento popular*” es puramente circunstancial y, por lo mismo, momentáneo y frágil. No es capaz de dar un apoyo de largo aliento que le permita a Zelaya desafiar con verdaderas posibilidades de éxito a las cúpulas dirigentes de los dos grandes partidos políticos tradicionales del país.

La reciente alianza entre Micheletti y Santos ha puesto en manos del primero las riendas del Consejo Central Ejecutivo del PL, la máxima autoridad partidaria entre los liberales. Este es un golpe fuerte contra las aspiraciones de Zelaya para reconvertir al aparato del partido en un soporte fuerte a sus pretensiones reformistas y renovadoras. Sin el control de las estructuras partidarias, todavía en manos de Patricia Rodas pero muy pronto en las de Micheletti, el presidente Zelaya no tendrá más alternativa que apelar a su liderazgo personal -que todavía es muy fuerte y sólido- para sacar adelante sus iniciativas políticas, entre las cuales ocupa lugar principal la de la llamada “*cuarta urna*”.

De acuerdo a esa maniobra política, Zelaya pretende que los electores puedan decidir en una consulta popular si es preciso colocar una cuarta urna en

las elecciones de noviembre para que los ciudadanos votantes decidan si se debe o no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar y aprobar una nueva Constitución de la República. En caso que la llamada “consulta popular” sea favorable y los ciudadanos decidan que se debe colocar la cuarta urna, el Poder Ejecutivo solicitará al Congreso Nacional tomar las resoluciones legislativas que correspondan y ordenar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) proceder a agregar una urna más en los puestos de votación en las elecciones generales del próximo mes de noviembre.

El resultado de la “consulta popular” no es vinculante, es decir no tiene ninguna obligatoriedad legal frente al Congreso Nacional. Pero sí tiene la fuerza de la presión política, algo que los diputados no podrían ignorar fácilmente, sobre todo en un año de elecciones generales.

Si se decide colocar la cuarta urna y los electores votan a favor de la Asamblea Nacional Constituyente y la nueva Constitución, el gobierno entrante (2010-2014) sería el llamado a convocarla y organizarla. La nueva Constitución establecería las nuevas reglas del juego, ya sea a favor o en contra de la reelección presidencial, el mandato revocatorio, las nuevas formas de democracia directa, la apertura del sistema electoral, etc.

El meollo de la cuestión, por lo tanto, no reside en la llamada “cuarta urna” en sí. Ella no es más que el instrumento, la herramienta para canalizar y expresar la voluntad de los electores. La esencia del asunto consiste en la forma en que serán electos los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, en la que Zelaya espera que estén representados no sólo los partidos políticos sino también los diferentes sectores sociales que hoy están apoyando su giro político hacia el centro izquierda. Ahí está la clave de todo el problema. Zelaya espera que en esa nueva Asamblea Nacional Constituyente estén presente los grupos sindicales, las organizaciones campesinas, las asociaciones de pobladores, los movimientos sociales y étnicos, las llamadas “bases del Poder Ciudadano”, que son las que, a su juicio, permitirían elaborar una nueva Constitución acorde con los planteamientos políticos de centro izquierda que propone el gobierno en su fase actual. Esas son las verdaderas intenciones de Zelaya y no el supuesto continuismo y la reelección presidencial inmediata que la oposición le atribuye. Zelaya es un político hábil, con el instinto y conocimiento necesarios para olfatear y saber que este no es el momento propio para plantear la reelección presidencial, ni la situación es la más propicia para hablar siquiera de continuismo en el poder. Por eso ha dicho y repetido en numerosas ocasiones que no tiene (tampoco puede tener) la intención de continuar en el poder ni un tan solo minuto después de que se venza su periodo gubernamental el día 27 de enero de 2010.

Las intenciones del presidente Zelaya van más allá del mes de enero de 2010, cuando debe comenzar el nuevo gobierno. Desde ahora se está preparando para contar con una especie de Fundación política que se ocupará de trabajar en función de las ideas renovadoras que quiere ver reflejadas en la nueva Constitución política. Esa Fundación deberá contar con medios de comunicación propios (canal de televisión, radioemisora, periódico, etc.) y ser el instrumento político del “*melismo*”, entiéndase del grupo partidario seguidor de Mel Zelaya que propondrá las tesis de centro izquierda que han formado y forman parte del discurso oficial en la segunda y última etapa del gobierno zelayista. La nueva Fundación deberá ser un instrumento para luchar por la Asamblea Nacional Constituyente y la nueva Constitución. Al mismo tiempo, jugará el papel de ser un ente aglutinador que dé cohesión y fuerza a los seguidores actuales del presidente Zelaya, manteniendo vivas sus ideas y objetivos. Pero el presidente Zelaya debe enfrentar, además, otros obstáculos para sacar adelante su plan de la cuarta urna. Uno de ellos es el de la poca o escasa comprensión de sus ideas al interior mismo del gabinete de gobierno y entre sus más entusiastas partidarios. Por lo menos hay dos o tres interpretaciones diversas acerca de los objetivos reales de la “*cuarta urna*”:

- a) Un grupo de colaboradores cree que la cuarta urna es el medio más directo y eficaz para prolongar **ahora** el mandato del presidente Zelaya o asegurar su reelección en las elecciones del año 2013. Este grupo, con una visión de corto plazo y afanes puramente continuistas, no es el más fuerte ni el más influyente. Lo integran funcionarios de nivel intermedio y algunos diputados que perdieron la posibilidad de ser reelectos en noviembre próximo.
- b) Otro grupo cree que la cuarta urna es el camino más corto para **re-formar** la Constitución en todo aquello que se opone a las posibilidades continuistas o reeleccionistas en un futuro cercano del presidente Zelaya. Muchos de los integrantes de este grupo no han podido entender el trasfondo de la iniciativa política del presidente y se limitan a exigir la **reforma** de la actual Constitución. Para lograr tal reforma no haría falta convocar a una Asamblea Nacional Constituyente ya que el futuro Congreso Nacional podría cumplir esa tarea pendiente.
- c) Finalmente, está el grupo que encabeza el propio presidente y es el que propone una **nueva** Constitución política y no simplemente la reforma de la actual. Para ello, como es lógico, se requiere convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, para lo cual es necesario colocar la cuarta urna en las elecciones generales de noviembre de este año. La “*consulta popular*” del último domingo de junio servirá para saber si los votantes quieren o no la cuarta urna.

Como puede verse, el gobierno mismo carece de una visión unificada sobre la llamada cuarta urna. Y por eso su discurso luce errático y disperso, creando más confusión e incertidumbre. El presidente Zelaya, consciente de esta debilidad, ha ordenado desde ya la formulación de una sola estrategia unificada de comunicación y promoción de los objetivos y metas del proyecto de la cuarta urna.

Si la consulta popular anunciada se lleva a cabo en efecto a finales del mes de junio, la misma se convertirá en una especie de termómetro para medir la capacidad de convocatoria y el propio liderazgo personal del presidente Zelaya. Si el resultado es favorable, el presidente le habrá ganado una partida importante a los partidos políticos y los habrá colocado en una situación incómoda en la víspera de las elecciones generales. Su liderazgo saldrá más fortalecido y la idea de la Asamblea Nacional Constituyente estará presente en la agenda política del proceso electoral. El presidente se habrá afianzado en la convicción y certeza de su proyecto político para el futuro inmediato del país. Seguirá adelante con más fuerza y decisión en su iniciativa de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente para elaborar la nueva Constitución política. La influencia del presidente dentro del PL irá en aumento y le convertirá en una especie de “*gran elector*” dentro de su propio partido.

Por el contrario, si la consulta popular de junio arroja un resultado desfavorable a la cuarta urna, el prestigio personal del presidente habrá sufrido un duro golpe y su liderazgo individual se verá sustancialmente disminuido. El gobierno perderá capacidad de ejecución y la administración pública caerá en una especie de inmovilismo institucional. La influencia del presidente en el partido se reducirá y, en consecuencia, se fortalecerá el control de los michelettistas y floristas, vale decir el sector más conservador y cavernario, dentro de las filas partidarias. El gobierno zelayista empezará a ser ya una ficción política en el escenario nacional, cuando apenas le queden seis meses reales de vida institucional. El proyecto político de Zelaya (Fundación incluida), aunque no desaparezca, habrá sufrido un fuerte golpe en su desarrollo y consolidación.

### **La evolución de la economía**

**A**unque el optimismo inicial (finales del año 2008 y enero de 2009) ha disminuido al momento de hacer vaticinios sobre el futuro de la economía, el gobierno mantiene todavía una actitud positiva y espera confiado en que el impacto de la crisis económica y financiera internacional no golpee al país con la misma fuerza y consecuencia negativa que lo hace en otros países de la región.

El Banco Central, ante la evidencia de los hechos, ha debido reprogramar los cálculos y cifras de sus vaticinios económicos, reconociendo que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en este año podría ser menor al 2,5% y no entre 3,5 y 4% calculado al principio. La inflación se sigue estimando menor al 10%, confiando en que la baja en los precios del petróleo permitirá equilibrar mejor la espiral de los precios internos. Las remesas, aunque disminuya su ritmo de crecimiento, se mantendrán en los mismos niveles o, en todo caso, bajarán en forma lenta y manejable.

El gobierno espera reactivar algunos renglones clave de la economía y mantener el viejo ritmo de crecimiento en otros, la construcción, el turismo, las exportaciones no tradicionales, por ejemplo. Para ello cuenta con un *“Plan anticrisis”* que todavía no ha *“socializado”* lo suficiente y que, por lo tanto, no acaba de recibir el apoyo de los sectores empresariales y sindicales.

Pero, además, el gobierno cuenta también con el apoyo oportuno y preciso del gobierno de Venezuela que, aunque no es suficiente para cubrir las necesidades principales de la inversión pública, sí alcanza para paliar la situación y hacerle frente a los problemas más importantes en los meses que restan para que concluya la actual Administración zelayista.

En estos momentos, el gobierno dispone al menos de unos 153 millones de dólares en efectivo depositados ya en las bóvedas del Banco Central, los que se distribuyen así:

- 73 millones de dólares de la cuenta de Petrocaribe
- 50 millones de dólares para financiar un ambicioso programa de vivienda social que espera construir unas seis mil casas en los próximos cinco meses.
- 30 millones de dólares para financiar la recuperación de la producción agrícola a través del Banco Nacional de Desarrollo (Banadesa).

Con estos fondos, especialmente los de Petrocaribe, el gobierno espera financiar las actividades de la micro, pequeña y mediana empresa, facilitándoles créditos a bajo costo (7% de interés) y de rápido desembolso.

A todo esto se debe sumar la colocación de 10mil millones de lempiras (unos 526 millones de dólares al cambio actual) en la banca nacional para fortalecer el crédito a la producción y al comercio. Se debe tomar en cuenta que los bancos privados, unos 17 en total, disponen de una abundante liquidez bancaria estimada en unos 25,102 millones de lempiras (unos 1,321

millones de dólares), aunque el reciente aumento en sus tasas de interés hacen más difícil el acceso de los productores a esos recursos.

El gobierno, contagiado por el entusiasmo personal del presidente Zelaya, ve con optimismo moderado el futuro inmediato. Confía en reactivar la economía y disminuir el impacto negativo de la crisis internacional, aunque no esconde su preocupación por el crecimiento del desempleo en el área de la industria maquiladora y el descenso en las exportaciones en ciertos rubros de la producción nacional.

A esto hay que agregar la preocupación por la notoria reducción en la recaudación de los ingresos tributarios (resultado de la caída relativa de ciertas exportaciones y la baja en el ritmo de las importaciones) y, por supuesto, el imperdonable retraso en la presentación del presupuesto general de la República para que sea aprobado por el Congreso Nacional.

El retraso en la aprobación del presupuesto hace todavía más corto el periodo real del funcionamiento gubernamental en un año electoral, tiempo en el que normalmente los años tienen apenas diez meses para que el gobierno pueda funcionar a cabalidad. A partir del mes de noviembre, fecha de las elecciones, el gobierno comienza a evaporarse del escenario nacional, su capacidad de ejecución disminuye, las lealtades políticas cambian y le debilitan, la corrupción aumenta, los desembolsos de la cooperación internacional fluyen más cautelosa y lentamente, mientras los funcionarios están más preocupados por organizar su partida que por ejecutar los proyectos pendientes.

Si partimos de esta premisa, debemos reconocer que este año 2009 es un año de apenas seis o siete meses **reales**, tomando en cuenta que ya el primer trimestre el gobierno ha funcionado sin contar con un presupuesto nuevo, acorde a los planes y proyectos del año presente.

Así están las cosas en el mes de marzo del último año de la Administración Zelaya.

# ABRIL 2009

---

## La situación política

**L**a crisis en el sistema de seguridad (auge desmedido de los secuestros, las muertes por encargo y otras acciones del crimen organizado), los escándalos por actos de corrupción (sobornos en Hondutel), la división interna en el partido de gobierno (Convención Nacional y elección de Roberto Micheletti como nuevo presidente del Consejo Central Ejecutivo), la pelea cada vez más intensa entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, junto al creciente debate en torno a la llamada “cuarta urna” (convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar y aprobar una nueva Constitución), son los principales hechos que condicionaron y caracterizaron la coyuntura política de Honduras durante el mes de abril.

El incremento de los secuestros en todo el territorio nacional, que incluyó el de la hija y la nieta del empresario Carlos Calderón, asesor publicitario del presidente Manuel Zelaya, disparó hacia arriba la percepción de inseguridad entre la opinión pública y obligó al gobierno a adoptar una serie de medidas extraordinarias que van desde mayor control sobre la venta y uso de teléfonos móviles hasta la intensificación de los patrullajes conjuntos y acciones combinadas entre la policía y las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas. El Congreso Nacional, a petición del Poder Ejecutivo y con el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia, aprobó finalmente las reformas al Código Procesal Penal para restringir el uso de las llamadas medidas cautelares o sustitutivas en todos los casos de crimen organizado o cuando se trate de delitos especialmente graves.

Ante la difícil situación, el presidente Zelaya, como ya se dijo en el análisis del mes anterior, decidió ocuparse directamente del tema de la seguridad y procedió a crear una especie de “*gabinete sectorial*” integrado por los ministros de seguridad, defensa, gobernación, presidencia y finanzas. Este “*mini gabinete*” deberá funcionar como una especie de “*consejo consultivo*” en todos los asuntos relacionados con la seguridad del país. Su importancia puede crecer si, como ya se especula, el ministro de Seguridad, Jorge Rodas, abandona su cargo en el mes de junio a fin de facilitar el curso de la

candidatura de su hermano, Mamilio Rodas, quien aspira a ser diputado por el partido Liberal en el próximo Congreso Nacional (2010-2014). La salida de Rodas crearía una especie de vacío en la cúpula ministerial, la que podría ser llenada por el actual Viceministro Mario Perdomo o por el cuerpo colegiado del *"gabinete sectorial"*.

Aunque la policía se ha anotado importantes puntos en la lucha contra los secuestradores, todavía sigue pendiente la tarea de poner en marcha un verdadero plan de emergencia en contra del crimen organizado, que incluya, por supuesto, la urgente tarea de profundizar la depuración de las filas policiales, infiltradas por los narcotraficantes y otras redes criminales.

El tema de la inseguridad y la carencia de una política integral de largo alcance en contra de la delincuencia común y el crimen organizado, seguirán siendo objeto de mucha polémica y discusión, convertidas ya en punto clave de la agenda electoral de los diferentes candidatos presidenciales. En este sentido, los nacionalistas cuentan con una propuesta más coherente y creíble en comparación con los liberales, que no acaban de ponerse de acuerdo en una sola visión sobre el tema.

A la creciente percepción de inseguridad se debió sumar la frustración y el enojo colectivos cuando se conoció el texto de una sentencia judicial emitida en el Estado de La Florida, Estados Unidos, en contra de una compañía norteamericana que habría sobornado a tres altos empleados de la compañía telefónica Hondutel para obtener rebajas en las tarifas y otros favores y servicios a costa de los ingresos y finanzas de la controversial empresa estatal. La noticia, aunque no fue una sorpresa para los más conocedores, sí produjo una fuerte ola de indignación y condena en contra de la corrupción estatal en general y de la que se anida en Hondutel, en particular. Los actos denunciados involucran a personas clave del entorno que rodeó a Marcelo Chimirri, cuando se desempeñó como subgerente y, posteriormente, gerente de la empresa telefónica. Esta circunstancia permitió que Otto Reich, un conocido político ultraconservador de Washington, insinuara que el presidente Zelaya estaría involucrado en la trama del soborno. Zelaya reaccionó indignado y ordenó proceder judicialmente en contra de Reich, trámite que ya estaría en manos de un bufete norteamericano radicado en Miami, Florida.

La embajada norteamericana, presionada por Zelaya que amenazó con denunciar los hechos ante el presidente Barack Obama en la V Cumbre de Trinidad y Tobago, se apresuró a emitir un comunicado público aclarando que el presidente hondureño no aparecía ni siquiera mencionado en el juicio de Miami y en la sentencia judicial emitida. Con esta carta en la mano, el presidente pudo poner distancia con respecto al escándalo y ordenó la creación de una Comisión investigadora encabezada por la Iglesia Católica,

que todavía hoy no ha sido posible integrar a plenitud. Mientras tanto, el caso ya está en manos del Ministerio Público, que deberá interponer las correspondientes acusaciones contra los implicados ante los tribunales de la República

El escándalo de los sobornos pagados en Hondutel es apenas la punta de iceberg de la gran corrupción que ha prevalecido desde siempre en esa millonaria empresa estatal. Durante la administración encabezada por el señor Chimirri, un personaje muy cuestionado en la farándula política criolla, los actos de corrupción (sobornos, chantaje, venta de influencias, grabaciones ilegales de las comunicaciones, etc.) alcanzaron una dimensión preocupante, promovidos o tolerados desde los propios entresijos de la Administración. El paso de Chimirri por la dirección de la empresa significó un duro golpe para la imagen y credibilidad del gobierno zelayista en su conjunto.

Como si fuera poco tener que habérselas con los problemas de seguridad y, además, con los sobornos de Hondutel, el gobierno debió afrontar también las consecuencias de la creciente división en las filas del partido Liberal (PL), la que se hizo más evidente todavía cuando, en los propios salones de Casa Presidencial, la hoy ex presidenta del partido y actual Canciller de la República, Patricia Rodas, arremetió contra el candidato presidencial de los liberales Elvin Santos y su nuevo aliado, el presidente del Congreso, Roberto Micheletti. De acuerdo a la crítica de Rodas, compartida totalmente y reafirmada después en público por el propio presidente Zelaya, Micheletti no está calificado legalmente para convertirse en presidente del Consejo Central Ejecutivo del PL (CCEPL) y carece de la autoridad moral y política para dirigir los destinos del partido de gobierno. La crítica incluyó al candidato Elvin Santos, quien, en un afán por sumar fuerzas tras su frágil candidatura, decidió entregar la presidencia del CCEPL nada menos que a Micheletti, quien fuera el precandidato perdedor en las elecciones internas y primarias de noviembre de 2008.

La denuncia y condena pronunciadas por Rodas desde el Palacio Presidencial fueron el prelude de lo que habría de convertirse en una campaña contra Micheletti, estimulada y promovida desde el entorno de la Casa de gobierno. El punto culminante de la campaña llegó el día de la Convención Nacional, cuando grupos de liberales afines al presidente Zelaya irrumpieron para abuchear a Micheletti e impedirle hacer uso de la palabra ante los centenares de delegados ahí reunidos. La Convención quedó empañada por estos actos y la división interna del partido quedó evidenciada ante la nación entera.

El fracaso de la Convención sólo sirvió para ahondar más las pugnas internas y profundizar la grieta, ya casi convertida en abismo, que separa a los

liberales melistas de los liberales michelettistas y los partidarios del candidato Elvin Santos.

La división interna de los liberales se ha visto estimulada por la decisión del presidente Zelaya de llevar a cabo una “*consulta popular*”, hoy denominada “*encuesta ciudadana*”, para auscultar la opinión de los votantes en torno a la necesidad de instalar una cuarta urna en las elecciones de noviembre próximo. La instalación de esta urna adicional serviría para que los ciudadanos se pronuncien a favor o en contra de una Asamblea Nacional Constituyente que habría de redactar y aprobar, en el próximo periodo de gobierno, la nueva Constitución que Honduras requiere.

La llamada popularmente “*cuarta urna*” se ha convertido en la fuente de escándalo y pelea entre los diferentes partidos y grupos políticos del país. El debate en torno a la misma es un ejemplo más de la forma en que el presidente es capaz de diseñar e imponer su propia agenda al resto de la clase política del país. Mientras que para unos la “*cuarta urna*” no es más que una maniobra para promover los afanes continuistas que supuestamente tendría el presidente Zelaya, para otros es la oportunidad de escuchar la opinión de la gente en torno a la necesidad de contar con una nueva Constitución de la República.

Ante la oposición de los grupos dirigentes dentro del PL, Zelaya ha buscado aliados en otros sectores políticos y entre los grupos sociales del llamado “*movimiento popular*”, esa masa amorfa de asociaciones, bloques, patronatos, juntas de coordinación, grupos étnicos, feministas, ecologistas, etc. que proliferan por doquier. Pero también ha buscado el apoyo del principal candidato de la oposición, el nacionalista Porfirio “*Pepe*” Lobo, quien, hábil y astuto como es, hace sus propios cálculos y mide las posibles consecuencias de un apoyo discreto o un rechazo absoluto a la iniciativa de la cuarta urna. Pepe Lobo conoce las encuestas privadas que maneja Zelaya en torno al apoyo que recibe la cuarta urna en los distintos departamentos del país. También sabe que la cuarta urna, si la votación es positiva, le daría la oportunidad de convocar a una Asamblea Constituyente en su propio gobierno, en el caso de ganar las elecciones generales de noviembre. Por lo tanto, mide su apoyo a la iniciativa de Zelaya pero sin comprometer su respaldo a una intentona continuista. De ahí su lema cuidadosamente elaborado: apoyo a la consulta popular (cuarta urna) pero rechazo al continuismo.

El apoyo del “*movimiento popular*” quedó reflejado en las consignas y pancartas que los dirigentes obreros mostraron en las manifestaciones del Primero de Mayo, durante las celebraciones del día del trabajador. Agradecidos por la aprobación del salario mínimo de 5,500 lempiras (4,055 en el sector rural) y entusiasmados con los ofrecimientos de recursos para proyectos sociales y políticos con los fondos de la Alternativa Bolivariana para

los pueblos de las Américas (ALBA), los dirigentes obreros se muestran solícitos y dispuestos a brindar respaldo político a las iniciativas de Zelaya, especialmente la de la cuarta urna. En los últimos días se han llevado a cabo varias rondas de negociaciones entre esos dirigentes populares y diferentes ministros y otros funcionarios del gobierno zelayista. La agenda de esas conversaciones ha sido la llamada *“plataforma de los doce puntos”*, un documento clave del movimiento popular que contiene sus demandas más sentidas y constantes: rechazo al modelo económico neoliberal; derogación de los tratados de libre comercio; condena a los intentos de privatizar los servicios públicos, especialmente el agua; una nueva Ley de Minería y reformas a la recién aprobada Ley Forestal; derogación de la Ley de Modernización Agrícola y relanzamiento de la reforma agraria, con una nueva distribución de las tierras ociosas y expropiaciones de tierras que no están cumpliendo su función social; *“renacionalización”* de aquellos servicios que ya han sido *“privatizados”* (energía eléctrica, telecomunicaciones, acueductos y alcantarillado, etc.); depuración de la policía; lucha contra la corrupción; nuevas escalas salariales; una nueva Ley electoral que permita mayor inclusión y participación de fuerzas y sectores independientes; aplicación plena del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas (titulación de tierras, educación bilingüe, etc.).

Las demandas planteadas por los dirigentes populares en estas conversaciones no podrán ser resueltas favorablemente por el actual gobierno. Sin embargo, Zelaya negocia y gana tiempo, a la espera de poder llevar a cabo exitosamente la ansiada consulta electoral sobre la cuarta urna. Ambas partes se necesitan la una a la otra: el gobierno requiere del apoyo de esos grupos para hacer frente a los empresarios más recalcitrantes y a los dirigentes políticos más conservadores, mientras que los líderes populares requieren del apoyo, especialmente económico, que les puedan proporcionar con los fondos del ALBA. Es una transacción social que tiene componentes políticos y económicos, en la que todos esperan salir ganando. Pero es una transacción de carácter temporal, que durará lo que dure el entusiasmo político por la cuarta urna y la reserva económica del ALBA.

Sin embargo, Zelaya no se conforma con una visión de corto plazo. El sabe que si la cuarta urna resulta ser un éxito y un triunfo político, sus perspectivas a mediano plazo, ya en el nuevo gobierno, siguen siendo muy favorables. Su objetivo principal es crear un nuevo movimiento político en Honduras, ya sea dentro del propio partido Liberal o fuera del mismo. Para ello necesita el apoyo de los llamados *“movimientos sociales”* que tanto protagonismo han tenido en procesos similares en otros países de América Latina, especialmente en Ecuador, Bolivia y Brasil. Y por eso es que necesita convocar a una Asamblea Constituyente, que pueda dar cabida a los representantes de estos *“movimientos sociales”*, capaces de servir como contra-

peso a la representación de los partidos políticos tradicionales, vale decir de sus cúpulas dirigentes más conservadoras. El presidente Zelaya está apostando a un nuevo movimiento político, con el cual pueda explotar su creciente popularidad personal y utilizar el apoyo de sus nuevos aliados sociales para, una vez aprobada la nueva Constitución, relanzar su candidatura cuando ya haya sido eliminado el obstáculo de la no reelección. Esos son sus verdaderos planes. Son a mediano y largo plazo. No está pensando en el corto plazo, en la absurda idea del continuismo inmediato, para lo cual habría que frenar el proceso electoral de noviembre o hacerlo fracasar de cualquier modo. Una “*solución*” semejante no tiene ni posibilidades legales ni posibilidades políticas. Las elecciones se deberán llevar a cabo y el proceso deberá ser transparente y democrático. Si no fuera así, qué sentido tendría colocar una cuarta urna junto a las otras tres. Para que la cuarta urna produzca resultados creíbles y oportunos, es necesario que el proceso electoral en su conjunto sea libre y aceptado por todos los actores participantes.

Además, por si los argumentos anteriores no fueran suficientes, la idea del continuismo genera resistencia y rechazo en la gente, a la vez que produce desasosiego y malestar en las filas militares. El ejército, aunque guarda silencio, no es indiferente a lo que está aconteciendo en el escenario político. Los hombres de uniforme no quieren verse involucrados en una maniobra continuista de corto alcance, que comprometa el prestigio de las Fuerzas Armadas y ponga en duda su profesionalismo militar. No es un secreto el descontento que hay entre muchos oficiales por la aparente complacencia que el jefe del Estado Mayor, Romeo Vásquez, ha mostrado con respecto a los halagos e insinuaciones de los políticos tradicionales. Le reprochan su supuesta ambigüedad, a la vez que no le perdonan haber alterado el orden lógico en la escala de sucesión, manteniéndose por tiempo adicional en el cargo, sin permitir que lleguen al mismo los oficiales que por escalafón, antigüedad y condición profesional tienen ese derecho.

O sea que las cosas no están tan tranquilas y estables como aparentan. En los cuarteles hay desasosiego y los ánimos están alterados. No tanto como para convertirse en una amenaza al orden constitucional y a la estabilidad del Estado de derecho, pero sí lo suficiente como para no pasar desapercibido. El presidente Zelaya cree conocer bien el Estado real de los ánimos al interior de la institución castrense y sabe que es un factor a tomar en cuenta cada vez que hace sus cálculos políticos. Conoce los límites de su capacidad de maniobra y hace esfuerzos para recomponer las alianzas al interior de las Fuerzas Armadas y fortalecer la posición de sus partidarios.

Así están las cosas en el gobierno zelayista en este mes de abril, fecha límite para conocer el Estado real de las finanzas públicas (últimos cálculos sobre los ingresos finales por concepto del impuesto sobre la renta) y en-

viar, de una vez por todas, al Congreso Nacional la versión final del esperado Presupuesto General de la Nación para este año 2009. Mientras llega ese momento, el gabinete económico se dispone a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un nuevo crédito por unos 150 millones de dólares para reforzar las reservas financieras y apuntalar mejor el nuevo presupuesto anual. Al final, luego de varios escarceos incómodos y denuncias innecesarias en contra del FMI, el presidente del Banco Central y la ministra de Finanzas aceptaron que lo más prudente es cultivar una buena relación con ese importante organismo financiero internacional y mantener abiertas las puertas de la negociación y los acuerdos.

# MAYO 2009

---

## La situación política

**E**l mes de mayo ha sido especialmente difícil y turbulento. La crispación política ha alcanzado sus niveles más altos, mientras los tres Poderes del Estado han quedado involucrados en una abierta batalla en torno a la validez jurídica o viabilidad política del proyecto gubernamental más conocido como “*la cuarta urna*”, es decir la decisión del Poder Ejecutivo de llevar a cabo una “*encuesta ciudadana*” para instalar una urna adicional en las elecciones generales del próximo mes de noviembre, a fin de que la población decida sobre la conveniencia o no de convocar una Asamblea Nacional Constituyente (en el año 2010 o 2011) que habrá de redactar y aprobar una nueva Constitución de la República.

La idea de la “*cuarta urna*” y su eventual aplicación en las elecciones generales de noviembre, ha dividido el escenario político y confrontado a los más diversos sectores sociales y económicos del país. Desde las diferentes iglesias hasta los grupos empresariales, pasando por los cinco partidos políticos y las múltiples organizaciones del llamado “*movimiento popular*”, se han visto involucrados de manera directa en la controversia y polémica sobre la iniciativa presidencial.

Lo que al principio pareció sólo una provocación política más, lanzada al ruedo por el presidente de la República para caldear los ánimos de los actores políticos, previo a la campaña electoral ya en marcha, se ha convertido en el tema más contradictorio y polarizante en los tres años y cuatro meses que han transcurrido ya de la Administración Zelaya. Y no es para menos, si se tiene en cuenta que la verdadera intención que se esconde tras el proyecto de la “*cuarta urna*” es la ruptura final del sistema bipartidista en Honduras, generando un movimiento político y social de gran envergadura que actúe como una cuña para abrir y ampliar la brecha en el sistema político tradicional de Honduras. El presidente Zelaya parece estar convencido de que ha llegado el momento largamente esperado para debilitar las cúpulas de los dos grandes partidos políticos tradicionales del país, generando un

---

nuevo movimiento social que un día habrá de convertirse en el tercer gran partido político del país, girando en torno a su propia figura y liderazgo. Amparado en sus altos niveles de popularidad personal (62% de simpatías, según una de las últimas encuestas privadas ordenadas por Casa Presidencial), que contrastan con los bajos niveles de aceptación del propio gobierno, el presidente asume que su liderazgo personal debe ser capitalizado a favor del nuevo movimiento político y social, en desmedro de los dirigentes políticos tradicionales del país. Como ya le queda poco tiempo (ocho meses) al frente del gobierno, Zelaya sabe que debe forzar la marcha y, a través del mecanismo de la “cuarta urna”, dejar atadas las manos del próximo Congreso Nacional (2010-2014) para que se vea obligado a convocar la Asamblea Nacional Constituyente que habrá de redactar y aprobar una nueva Constitución de la República. En esa nueva Carta Magna, los constituyentes deberían eliminar la prohibición para la reelección presidencial, de tal manera que el actual presidente pueda convertirse en nuevo candidato presidencial en las elecciones generales de 2013.

Para lograr estos objetivos, el presidente debe trabajar desde ya en la conformación del nuevo movimiento político social, cuyo primer escenario de lucha será el de la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente en el primer año del siguiente gobierno (2010). Esa es la gran tarea que tiene pendiente en estos momentos el presidente Manuel Zelaya, una tarea cuya magnitud y trascendencia no ha sido debidamente comprendida por sus ministros y, en ciertos casos, tampoco es plenamente compartida por varios de ellos.

La búsqueda de aliados para esta iniciativa es crucial. Sin embargo, no todos los grupos y personas que dicen apoyar el proyecto “cuarta urna” lo hacen con conocimiento preciso de sus fines últimos o de su trascendencia política. Muchos de ellos simplemente apoyan porque ven la oportunidad de obtener algunas ventajas políticas y económicas para sus propios movimientos sociales o liderazgos personales. Los métodos utilizados por Casa Presidencial para reclutar aliados tampoco ayudan mucho a la finalidad política del proyecto. El uso de los viejos procedimientos del reclutamiento clientelar por la vía de las prebendas, los pagos bajo la mesa y la satisfacción de viejas y sentidas demandas sociales, sirve para atraer momentáneamente a diversos grupos organizados del movimiento popular pero no garantiza la lealtad política hasta las últimas consecuencias ni asegura su permanencia en las filas de la “cuarta urna”, una vez que haya concluido el periodo presidencial de la Administración Zelaya.

Si tomamos en cuenta todos estos factores, podremos comprender con más facilidad las razones por las cuales el clima político ha alcanzado tan altos niveles de crispación y tensión social. Aunque no todos los políticos han logrado descifrar las intenciones finales del proyecto zelayista, lo cierto es

que sí han comprendido que el presidente pretende seguir siendo un determinante factor de poder aun después de haber abandonado la Casa Presidencial en enero de 2010. Y eso, como es lógico, les preocupa a muchos, especialmente a aquellos que, como el ex presidente Carlos Flores, pretenden seguir controlando buena parte del escenario político del país y, si las condiciones son propicias, volver a ocupar la silla presidencial una vez reinstaurado el derecho a la reelección alterna en la legislación constitucional.

Las acusaciones contra el presidente Zelaya por un supuesto afán continuista en el mando presidencial no tienen mucho asidero, si valoramos en su justa medida los componentes clave y los objetivos concretos del proyecto de la “cuarta urna”. No es una iniciativa **continuista**, es una iniciativa **reeleccionista**, por lo tanto sus tiempos y plazos no son de corto sino de mediano alcance. Las intenciones del presidente no son las de continuar en el gobierno después de enero de 2010; son las de convertirse otra vez en candidato presidencial para las elecciones generales del año 2013. No se trata de **seguir siendo** presidente; se trata de **volver a ser** presidente.

Aunque la oposición no ha sido capaz de hacer la lectura correcta y profunda del proyecto zelayista, sí ha logrado unir sus fuerzas más dispersas y presentar un frente común para detener las pretensiones del presidente y salir al paso de lo que consideran un grave atentado contra la Constitución y el sistema democrático en general. Un desfile de viejos cadáveres políticos, a los que se han sumado varios grupos creados ad hoc en torno a los cuales se aglutinan desde las señoras del Opus Dei hasta los chicos y chicas bien de la llamada “alta sociedad”. Los sectores más tradicionales del alto clero junto a varios pastores y ministros evangélicos de cuestionada seriedad, han sumado sus voces al coro contra la “cuarta urna”. Los dirigentes empresariales y, por supuesto, los dueños de los principales medios de comunicación, el llamado “*Bloque mediático*”, también se han agregado a la cruzada antizelayista. Algunos diputados de la oposición han llegado al extremo de pedir la destitución del presidente, alegando que ha perdido la razón y se ha vuelto loco. “*Trastornado*” le llamó el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, candidato perdedor de las recién pasadas (noviembre de 2008) elecciones internas en el partido liberal.

La crispación política alcanza su mayor punto de tensión cuando se involucran o se ven involucradas las Fuerzas Armadas. Entonces las cosas se complican más. Al interior de la institución castrense ya hay suficientes elementos para generar disputas y controversias. La presencia del general Romeo Vásquez al frente del Estado Mayor Conjunto es una fuente constante de malestar y disgusto en las filas militares. Son muchos los que le consideran una especie de usurpador y violador consciente del escalafón militar y las normas de ascenso y relevo en las jerarquías castrenses. Consideran que ocupa el cargo de manera ilegal y se sostiene en el mismo sólo

---

gracias al apoyo político que recibe de Casa Presidencial. Creen que es la hora del relevo para que otros oficiales, los recién ascendidos generales, pasen a ocupar los principales cargos en la institución militar.

Este malestar institucional se ve alimentado ahora con otro disgusto, el que suscita la idea de la “cuarta urna” y el rol que deberán jugar los militares en su manejo e implementación. La situación ha llegado a tal nivel de confrontación, que el propio presidente del Congreso Nacional y hoy también presidente del partido Liberal, Roberto Micheletti, ha hecho un virtual llamamiento a la sedición en las filas militares instando a sus mandos para que no cumplan las órdenes del presidente Zelaya y se rebelen ante el mismo, prometiéndoles condecoraciones y premios a los que sufran las consecuencias por la insubordinación ante el Poder Ejecutivo. Esta irresponsable actitud del congresista Micheletti ha servido para atizar más el descontento dentro de las Fuerzas Armadas y dar alas y respaldo a los oficiales que se resisten a custodiar y transportar las urnas en las que se depositarán los votos en la consulta popular planificada para llevarse a cabo el domingo 28 de junio próximo.

A todas estas razones obedecen los intensos rumores sobre un posible golpe de Estado que han circulado en los últimos días. Se habla de que los militares, que tuvieron una tumultuosa reunión en los primeros días de junio (en la mañana del día viernes 05), estarían a punto de forzar la situación, protagonizando una especie de rebelión momentánea contra las órdenes del presidente Zelaya, a quien depondrían del cargo y enviarían al exilio exterior. Una vez hecho esto, los soldados volverían a sus cuarteles y dejarían en manos de los políticos tradicionales la recomposición del engranaje estatal. La democracia estaría a salvo y los hombres de uniforme serían los grandes héroes salvadores de la patria. Así de simple.

En la reunión del día 05 de junio el presidente Zelaya envió a dos representantes, el “vicepresidente” nombrado Arístides Mejía y el ministro de la Presidencia Enrique Flores, no obstante que ya el Poder Ejecutivo estaba debidamente representado por el ministro y el Viceministro de Defensa, Edmundo Orellana y Adolfo Sevilla respectivamente. La llegada de los emisarios presidenciales no sólo provocó la molestia de Orellana y Sevilla, que se sintieron injustamente ninguneados por el presidente, sino también la incomodidad de los mismos militares a quienes las argumentaciones de Flores y los halagos de Mejía no causaron ninguna buena impresión.

Mientras los militares se reunían en el Estado Mayor, Micheletti enviaba una urgente y ansiosa carta al ministro de Defensa, Edmundo Orellana, pidiéndole protección inmediata para él y los demás diputados, cuyas vidas, según el dramático estilo de la carta, estarían en gravísimo peligro. Así, en este contexto de crispación y ansiedad colectivas, los rumores sobre un posible

golpe de Estado comenzaron a circular con más fuerza en la tarde del viernes y los asustados capitalinos se lanzaron desesperadamente a los supermercados y a las estaciones de gasolina para abastecerse y esperar el terrible desenlace en la seguridad de sus hogares.

Mientras la sociedad entera estaba en vilo, los principales actores liberales de este drama, el presidente Zelaya, Micheletti y el candidato presidencial Elvin Santos, lograron finalmente reunirse en una hacienda del departamento de El Paraíso (casa campestre del Viceministro de Defensa, Leonel Sevilla) para iniciar conversaciones sobre la mejor forma de bajar la tensión y buscarle una salida armoniosa a la crisis, una salida que no perjudique el proceso electoral ni afecte las posibilidades de triunfo del candidato liberal Elvin Santos. Las conversaciones, según confesión del propio presidente Zelaya, comenzaron muy bien y dan pié para ser optimistas en la evolución del problema. El miércoles 10 de junio volverán a reunirse y se espera que para entonces las aguas hayan vuelto a su cauce normal y la crispación del ambiente político haya disminuido.

Pareciera que las amenazas de la intervención militar actuaron como un acicate para que los políticos, en este caso los tres líderes liberales, retornaran a la calma y midieran mejor el impacto y las consecuencias de la escalada de confrontación en que se habían involucrado.

### El otro terremoto

**M**ientras los políticos, los empresarios, los religiosos y los líderes de las más diversas organizaciones de la sociedad civil se enfrascaban en una lucha sin cuartel en torno a la llevada y traída “cuarta urna”, el país se vio súbitamente estremecido en la madrugada del día 28 de mayo (justo un mes antes del golpe de Estado) por un poderoso temblor que alcanzó un poco más de los siete grados en la escala de Richter, cuyo epicentro, afortunadamente, se situó a unos 170 kilómetros de la costa norte, en el Mar Caribe. La sacudida fue muy fuerte y causó angustia y pánico, principalmente en los departamentos y comunidades costeras, aunque su impacto se sintió en todo el territorio nacional. Siete personas murieron a causa directa o indirecta del terremoto y muchas obras de infraestructura y viviendas y edificios sufrieron serios daños. El emblemático puente “La Democracia”, que une San Pedro Sula con la ciudad de El Progreso, en el norte del país, quedó inutilizado completamente, lo que sirvió a los adversarios de la “cuarta urna” para deducir significados premonitorios y advertencias bíblicas sobre el futuro político del país.

La oposición política, tratando de utilizar al máximo cualquier argumento para reprochar al gobierno por la “cuarta urna”, aprovechó la ocasión del

---

terremoto para reclamar mayor atención a los que llamó “*problemas reales*” del país y menos alboroto en torno a los proyectos políticos de Casa Presidencial. El gobierno, incapaz de valorar en toda su dimensión el daño verdadero causado por el terremoto, concentró sus mejores esfuerzos en la organización y montaje de la 39 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se llevó a cabo en San Pedro Sula en los tres primeros días del mes de junio. En ese importante evento internacional, los delegados aprobaron por consenso la eliminación de una antigua resolución que ordenaba excluir a Cuba del organismo continental. El gobierno de Honduras fue uno de los principales patrocinadores y activo promotor de esta nueva resolución, a pesar de los llamados, directos e indirectos, que habían hecho los cubanos desde La Habana, para expresar su incomodidad con una resolución en cuyo texto se fijaban condiciones para un eventual retorno de Cuba a la comunidad de naciones agrupadas en la OEA. En ausencia de los representantes directos de Cuba, era Daniel Ortega, el presidente nicaragüense, el encargado de conducir la discreta oposición a la resolución condicionada.

### **La hora de los secuestros**

**L**a ola de secuestros que tiene aterrada a la población ha continuado en ascenso, a pesar de algunos notables éxitos que se ha agenciado la policía en la liberación de rehenes y captura de secuestradores. Algunos de los capturados han resultado ser antiguos o actuales miembros de las fuerzas policiales, con lo que ha vuelto a resurgir con mayor fuerza la demanda por una verdadera y profunda limpieza interna de los cuerpos de seguridad del Estado.

Al tiempo que los secuestros se incrementan, tanto por su frecuencia como por el amplio espacio social que abarcan, aumenta también el número de avionetas que utilizan pistas clandestinas para aterrizar y dejar sus cargamentos de drogas en el territorio nacional. Hasta finales del mes de mayo, doce “*narcoavionetas*” han sido encontradas destruidas en diferentes departamentos del país, pero especialmente en la zona norte y en las Islas de la Bahía. La proliferación de estas naves aéreas es un reflejo del masivo incremento del tráfico de estupefacientes en todo el territorio hondureño, que se ha convertido ya en corredor de tránsito de primera importancia para los carteles internacionales de la droga.

Los secuestros, el narcotráfico y los homicidios, sobre todo los asesinatos por encargo, son ya los principales problemas de seguridad en Honduras.

# JUNIO 2009

---

## La situación política

**E**ste mes de junio quedará grabado en la historia política de Honduras como un mes negro, el mes en que se produjo un inesperado e insólito golpe de Estado, en una época cuando se creía que tales acciones por parte de los militares estaban totalmente excluidas y desterradas de los escenarios políticos en América Latina.

En la madrugada del día 28 de junio, el domingo en que debía llevarse a cabo la polémica “*encuesta ciudadana*” (en realidad, una simple consulta popular) para decidir la instalación de la llamada “*cuarta urna*” en las próximas elecciones generales del mes de noviembre, un contingente militar irrumpió violentamente en la casa de habitación del presidente Manuel Zelaya, le sometió por la fuerza para luego trasladarlo a la Base Aérea de Tegucigalpa y, desde ahí, transportarlo en un avión militar rumbo a Costa Rica. La operación militar fue llevada a cabo en poco tiempo y el país entero quedó anonadado cuando supo, minutos después del asalto, la noticia.

Lo que vino después ya es historia conocida y, por eso, quizás sea más importante comenzar por los antecedentes, lo que sucedió antes del fatídico golpe de Estado del día 28 de junio.

## Los antecedentes

**D**esde mediados del periodo gubernamental, pero fundamentalmente a partir del segundo semestre del año 2008, la Administración liberal del presidente Zelaya empezó a ser cada vez menos “*liberal*” y cada vez más de “*centro izquierda*”, afianzando un alineamiento creciente con los países integrantes de la llamada Alternativa Bolivariana para los pueblos de las Américas (ALBA), coalición política regional inspirada por los gobiernos de Venezuela y Cuba, a la cual Honduras se adhirió formalmente en agosto del año 2008.

A partir de la adhesión al ALBA y, especialmente, después de que el presidente venezolano Hugo Chávez acudiera en su auxilio con fuertes inyecciones económicas (los banqueros locales, debidamente concertados, se habían negado a comprar los bonos que el Estado, a finales del año, había sacado al mercado para paliar un tanto la falta de recursos gubernamentales), el presidente Zelaya había empezado a radicalizar su lenguaje político, divulgando un discurso de denuncia y confrontación con los denominados “*grupos de poder*” (empresarios conservadores, beneficiarios de las concesiones estatales, dueños de los principales medios de comunicación, y representantes de las grandes empresas transnacionales, especialmente las importadoras de petróleo y gestoras de los recursos minerales del país) y construyendo una red de relaciones, entre afectivas y políticas, con los movimientos sociales de los sectores más pobres del país.

Esta nueva situación creada, que ponía en entredicho las tradicionales reglas del juego del sistema político hondureño, asustó a los grupos más conservadores y tradicionalistas de las cúpulas partidarias y de los gremios empresariales de Honduras.

A principios de la Semana Santa (06-12 de abril de 2009), dos actores clave del escenario político -el ex presidente liberal Carlos Flores y el empresario democristiano Arturo Corrales- visitaron al presidente Zelaya para plantearle lo siguiente:

- a) Retirar la propaganda sobre la llamada “*cuarta urna*” porque “*le estaba haciendo mucho daño a la imagen de los dos grandes partidos políticos tradicionales y, por ende, al sistema bipartidista en Honduras*”, y
- b) A cambio, lograr la aprobación en el Congreso Nacional de la instalación de la famosa “*cuarta urna*” en las elecciones generales de noviembre de 2009. Flores y Corrales se comprometían a lograr esa difícil aprobación, si Zelaya aceptaba retirar de los medios de comunicación los llamados y la publicidad a favor de la “*cuarta urna*”.

Zelaya, por supuesto, no aceptó. La propuesta de Flores y Corrales era, para él, la mejor constatación de que la “*cuarta urna*” tenía asustadas a las cúpulas políticas de los partidos tradicionales y, por lo tanto, estaba cumpliendo su función real: debilitar a los dirigentes partidarios del sistema político y abrir los espacios para el surgimiento de un amplio movimiento político-social que, más temprano que tarde, habría de desembocar en la formación de un “*tercer partido*”, es decir en la ruptura del orden bipartidista tradicional en el escenario político hondureño.

Ese era en realidad el sueño, el deseo acariciado de Zelaya. *“Después de la masiva votación a favor de la cuarta urna, dijo, las cúpulas partidarias sabrán que el tercer partido va en serio y, por lo tanto, deberán negociar conmigo la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente para redactar y aprobar una nueva Constitución política en Honduras”.*

Hasta aquí, los planes del presidente Zelaya marchaban muy bien. Pero se cruzó en su camino un factor que todos los políticos tradicionales menosprecian y subestiman: la politización partidaria de las instituciones, en particular de aquellas que son elegidas o nombradas por el Congreso Nacional: la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, el Tribunal Superior Electoral, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, etc. Todas estas instituciones se convirtieron en aliadas *“políticas”* en contra de la intención de Zelaya de romper, vía *“cuarta urna”*, las reglas del juego del sistema político electoral y del sistema de partidos políticos tradicionales de Honduras. Todas ellas respondieron, con mayor o menor visibilidad, a los mandatos, abiertos o encubiertos, de las cúpulas partidarias y de los grupos empresariales que les dan apoyo económico y sustento institucional.

La crispación en el escenario político alcanzó sus niveles más altos. La confrontación en torno a la *“cuarta urna”* fue desplazando de la agenda cotidiana, poco a poco pero con mucha firmeza, el tema del proceso electoral en marcha. Los partidos políticos y, en especial sus candidatos presidenciales, se fueron evaporando del escenario social; la *“cuarta urna”* los fue borrando virtualmente del mapa y sacándolos por la puerta de atrás de la agenda política nacional.

La *“clase”* política tradicional y los grupos más conservadores del empresariado nacional estaban alarmados. Llegaron a la conclusión de que no podían permitir la *“consulta popular”* del domingo 28 de junio. Y, en consecuencia, comenzaron a conspirar *“en serio”*.

Apelaron, como era inevitable, a sus viejos aliados: los militares. Les devolvieron el protagonismo perdido. Desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado, los militares habían empezado a perder su liderazgo tradicional, el rol arbitral, que siempre habían mantenido en el escenario político hondureño. Aunque el proceso de desmilitarización de las instituciones estatales locales había comenzado, al menos en teoría, en el año 1982 (inicio de los gobiernos civiles y de la transición democrática en Honduras), lo cierto es que los hombres de uniforme habían mantenido un protagonismo silente, una especie de tutelaje discreto, sobre la evolución democrática en Honduras. Sólo a partir de los años noventa (pérdida de elecciones por parte de los Sandinistas de Nicaragua, firma de la paz y fin de la guerra civil en El Salvador, conclusión de la contienda armada en Guatemala), los mili-

---

tares hondureños comenzaron a asumir, un tanto a regañadientes, el proceso de “*evaporación*” de su influencia y protagonismo en la vida política y social de Honduras. Su rol arbitral, su sensación absurda de “*estar por encima de los grupos políticos en pugna*” y, por lo mismo, de desempeñar un rol mediador y conciliador entre los actores políticos del sistema, entró en crisis y se impuso la tendencia a fortalecer la subordinación constitucional de los militares ante las autoridades civiles legítimamente constituidas.

Esta situación, que había costado tantos y difíciles años consolidar, empezó a derrumbarse y cuartearse en los dos meses anteriores al golpe de Estado. Los actores principales de la conspiración golpista -políticos tradicionales, empresarios conservadores y mercantilistas (dueños, además, de los principales medios de comunicación del país), militares “*congelados*” en los prejuicios de la guerra fría y algunos fundamentalistas religiosos, católicos y evangélicos- acudieron a tocar las puertas de los cuarteles buscando auxilio para impedir la llegada del “*comunismo*” y detener la nociva influencia de las hordas “*chavistas*” amparadas en el ALBA y financiadas por los petrodólares del presidente venezolano Hugo Chávez.

Sin descartar la dañina influencia de las peroratas de Chávez a favor de Zelaya y sin subestimar el alcance de sus planes expansionistas en la región centroamericana, lo cierto es que su influencia en Honduras es infinitamente menor a la que tiene en otros países del Caribe y no merece la supremacía e importancia que sus críticos le atribuyen.

En estas condiciones, con la crispación en su punto más alto, con la emergencia en el escenario de antiguos jefes militares educados en la confrontación de la guerra fría, y con una clase empresarial asustada y desesperada (muchos empresarios, especialmente en la zona norte, empezaron a huir hacia Miami, en Estados Unidos), estaban creadas las oportunidades más propicias para el golpe de Estado.

## **El golpe**

**C**uando los militares hondureños secuestraron al presidente Zelaya y lo expulsaron del país, no estaban ni podían estar conscientes de la trascendental importancia negativa que ese acto tendría en el continente americano y en el mundo entero. Su frágil preparación profesional y su escasa formación en los valores de la cultura política democrática, no les permitían entender la magnitud de sus acciones ni, por supuesto, la consecuencia de sus actos.

Habían perpetrado el primer golpe de Estado relativamente exitoso en el siglo XXI, es decir en el siglo de la globalización, el replanteamiento del

esquema económico financiero del mundo, de la era del conocimiento y la tecnología computacional, la era del Internet.

Muy pronto empezarían a darse cuenta de su monumental error. En primer lugar, no esperaban la reacción de protestas masivas, espontáneas u organizadas, de parte de los seguidores del presidente depuesto, vale decir, seguidores del proyecto un tanto populista y de inclusión y de participación ciudadana que el presidente Zelaya venía impulsando desde mediados del año anterior (2008). En segundo lugar, no fueron capaces de intuir siquiera la reacción de la comunidad internacional, manifestada a través de sus diferentes organismos multilaterales (ONU, OEA, etc.), que de inmediato condenaron y aislaron a Honduras. En tercer lugar, menospreciaron el impacto económico de tal aislamiento y, por lo tanto, no fueron capaces de valorar las consecuencias negativas sobre sus propias utilidades y beneficios. Finalmente, aunque no por eso menos importante, los golpistas subestimaron la trascendencia del precedente nocivo y peligroso que estaban sentando de cara al resto de los gobernantes latinoamericanos que tienen una larga y amarga experiencia en sus relaciones con las instituciones castrenses de sus propios países.

Todas estas consecuencias, en su conjunto, se aglutinan hoy para dar fundamento al inmenso aislamiento internacional en que se encuentra Honduras, su gravísima situación económica (un poco más del 30% de su presupuesto nacional depende de la cooperación internacional, la inversión extranjera ha caído en forma estrepitosa, las fronteras han sido parcialmente cerradas, etc.), su precaria situación, sus altísimos niveles de ingobernabilidad y, lo que es peor, su creciente clima de conflictividad y confrontación política y social.

La dimensión y magnitud de las protestas callejeras a favor o en contra del retorno del presidente Zelaya son sólo una muestra, la más evidente por cierto, del alto grado de polarización y confrontación política y social que hoy caracteriza a la sociedad hondureña. Ya no se enfrentan en la calle los liberales con los nacionalistas, los campesinos con los terratenientes, los obreros con los patronos, los estudiantes o los maestros con el Estado. Hoy son los pobres contra los ricos, los desposeídos contra los poderosos, los que no tenían voz ni manera de expresarse públicamente contra los dueños de los grandes medios de comunicación social.

Zelaya ha tenido el cuestionado honor de devolver a los pobres su condición de sujeto social, de sujeto político e histórico, que han abandonado su situación pétreo de objeto político, siempre dispuesto a ser conquistado por el discurso demagógico de los líderes tradicionales. Hoy, por primera vez en la historia contemporánea de Honduras, los pobres sienten que son parte de la vida política cotidiana y que están ahí, plantados para siempre en el escena-

---

rio social, para ser consultados y, sobre todo, para ser escuchados y tomados en cuenta.

### **Las lecciones de la crisis**

**L**a crisis política reciente y su nefasto desenlace en el golpe de Estado el pasado 28 de junio son acontecimientos que deben dejarnos algunas lecciones y preocupaciones:

- a) El Estado hondureño requiere una profunda reforma política e institucional. Es un Estado diseñado para conservar el status quo, para impedir el cambio positivo y el progreso, para mantener el clientelismo y la acción benefactora, providencial, paternalista o tutelar, del gobierno sobre la sociedad. Es un Estado diseñado para impedir o dificultar la organización de la ciudadanía y el fortalecimiento de la sociedad civil. Ve en ésta a un enemigo y no a un socio para el desarrollo. Es un Estado centralista y centralizador, adversario de la iniciativa local y de la participación ciudadana. Es un Estado para perpetuar la representación mediatizada e impedir la participación creadora de la gente.
- b) El sistema político hondureño es incapaz de autorreformarse, de la misma forma que la “clase” política tradicional es incapaz, histórica y socialmente, de llevar a cabo la necesaria reforma del Estado, del sistema político, del sistema electoral y del sistema de partidos. La transformación urgente del Estado debe venir desde abajo, desde los movimientos sociales, y no desde arriba, desde las cúpulas partidarias.
- c) La politización partidaria de la institucionalidad estatal es la causa primaria de la ineficacia, ineficiencia y corrupción de los organismos del Estado, encargados de asegurar el sistema de administración de justicia, la transparencia y la rendición de cuentas, el control institucional sobre la gestión pública y el buen funcionamiento de las normas y principios de un sistema electoral libre y creíble.
- d) Las Fuerzas Armadas deben ser una institución realmente subordinada a las autoridades civiles debidamente constituidas. Los militares tienen y deben tener la única función de la defensa externa del país, el aseguramiento de su soberanía y la garantía de la inviolabilidad de sus fronteras. Los militares son ciudadanos en uniforme y nunca, jamás, deben constituirse en un poder arbitral, por encima de la sociedad y hostiles a ella.

- e) La alternabilidad en el ejercicio del poder, un valor crucial de la cultura política democrática y de la democracia en sí misma, es obligación de los ciudadanos y, de ninguna manera, una función especial de los militares.

De igual manera, la defensa de la Constitución y la garantía de su funcionamiento y vigencia deben ser dejadas en manos de los ciudadanos y no de los militares.

El mantenimiento y garantía del orden público debe ser una función exclusiva de las fuerzas policiales. En ambas instituciones, las militares y las policiales, debe prevalecer el liderazgo civil, profesional y apolítico.

- f) El peligro de la involución política está siempre latente. No hay que subestimarlos. La construcción de la democracia es la suma de dos esfuerzos: la edificación de la institucionalidad y la promoción y consolidación de los valores y la cultura política democrática. La construcción de una ciudadanía activa y, por lo mismo, una sociedad civil fuerte, son condiciones clave para la consolidación de la democracia y el Estado de derecho.

# JULIO 2009

---

## La situación política

**H**a pasado un mes ya desde el domingo 28 de junio cuando los militares hondureños, en contubernio con un grupo de dirigentes políticos tradicionales y empresarios conservadores, consumaron el fatídico golpe de Estado que ha sumido al país en la peor crisis política de su historia contemporánea.

Desde el día del golpe, el país ha debido afrontar una ola constante de insatisfacción y rechazo que ha vuelto absolutamente ingobernable la sociedad hondureña. Manifestaciones callejeras, marchas de protesta, “*plantones*” frente a oficinas públicas, “*tomas*” de carreteras y vías públicas urbanas, paros laborales, suspensión constante de clases en las escuelas y colegios, boicot al trabajo de los hospitales, enfrentamientos cada vez más violentos con los policías y los militares, todas estas acciones en su conjunto conforman el cuadro de ingobernabilidad que caracteriza hoy la situación política y social prevaleciente en Honduras.

Los frustrados intentos del presidente Manuel Zelaya para regresar al país y reasumir el ejercicio de la presidencia de la República, restableciendo así el orden constitucional destruido por el golpe de Estado, sólo han servido para estimular más la cólera y la frustración de sus miles de partidarios que no cesan en realizar acciones de protesta y condena contra el golpe y el gobierno de facto que preside Roberto Micheletti.

La decisión de Zelaya de instalar algo así como un campamento rebelde en la frontera entre Honduras y Nicaragua ha convertido esa zona en una especie de teatro bélico en donde se acumulan las fuerzas civiles del depuesto presidente frente a los contingentes militares y policiales que defienden al gobierno de facto. La tensión va cada día en ascenso y no se debe descartar choques o escaramuzas bélicas entre los soldados hondureños y los militares de Nicaragua, que por órdenes de su gobierno dan protección y asistencia a Zelaya.

La crispación prevaleciente en la zona fronteriza se ve estimulada por el Estado de sitio que el gobierno golpista ha decretado en la zona, restringiendo los movimientos de la gente y dificultando el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana. La población de la región oriental del país está desesperada y demanda una pronta solución del conflicto.

De igual manera, en otras regiones del territorio nacional, en occidente, en la costa norte, en el centro, la situación se ha vuelto inmanejable. Las constantes "tomas" de las principales vías y carreteras del país han paralizado virtualmente todo el flujo comercial y están causando graves daños a la economía nacional. Cálculos hechos por algunos empresarios estiman que el país está perdiendo unos 50 millones de dólares cada semana, lo que en parte explica el asombroso descenso de las reservas internacionales del Banco Central en más de 217 millones de dólares.

La ingobernabilidad creciente debería ser razón suficiente para convencer a las partes del conflicto sobre la necesidad de buscar una solución negociada a la crisis. Pero no ha sido así. La mediación iniciada por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, ha encontrado más dificultades de las que se esperaban. Tanto la primera ronda de negociaciones (09 y 10 de julio) como la segunda (18 y 19) no han producido los resultados deseados, aunque han puesto las bases para un arreglo consensuado del problema. En la primera ronda el mediador propuso un plan de siete puntos que incluía en primer lugar el retorno inmediato de Zelaya a Honduras para concluir su periodo presidencial, o sea seis meses más hasta el 27 de enero de 2010. La comisión negociadora de Zelaya aceptó el Plan pero la de Micheletti lo rechazó. Zelaya apareció como el negociador y el gobierno de facto como el intransigente. En la segunda ronda, Arias mejoró su plan inicial incorporándole algunos agregados sugeridos por Micheletti y aconsejados por un pequeño grupo de senadores republicanos de los Estados Unidos, con John McCain a la cabeza, a los siete puntos iniciales agregó cinco puntos, más pero siempre conservó, esta vez en un lugar menos prominente, la condición del retorno de Zelaya a Honduras. Para sorpresa de muchos, incluida una buena parte de los ministros del gabinete que acompañaba a Zelaya hasta el 28/VI/09, la delegación negociadora rechazó la segunda propuesta de Arias, más conocida como el Acuerdo de San José, imitando de esa forma la actitud intransigente e intolerante que había mostrado Micheletti en la primera ronda de negociaciones. Las dos partes, la del presidente depuesto y la del gobierno de facto, aparecieron ante la comunidad internacional como intransigentes y duras.

La mediación emprendida por el presidente de Costa Rica, que goza del decidido respaldo de Washington y de otros países del continente y de la Unión Europea, aunque ha recibido reveses importantes, todavía no ha fracasado completamente. Estados Unidos está ejerciendo una presión política

---

creciente sobre el gobierno de facto para que acepte el Acuerdo de San José y permita el retorno de Zelaya. Sin embargo, Micheletti se queja de no poder convencer a sus aliados empresariales que mantienen una posición en extremo radical en contra de la reinstalación de Zelaya en la presidencia de la República. Eso explica la llamada telefónica que hizo Micheletti al presidente Arias a finales del mes para pedirle ayuda y el auxilio de *“alguna personalidad internacional importante”* que pudiera ayudarlo a convencer a los grupos golpistas dentro de Honduras sobre la necesidad de retomar el camino del diálogo y la negociación en base al Acuerdo de San José.

Pero a Micheletti no le preocupa solamente eso. Tiene suficientes razones para desconfiar también de la lealtad militar hasta el final, sobre todo cuando se enteró que dos coroneles hondureños, autorizados por la Junta de Comandantes golpistas, viajaron a mediados de julio a Washington para negociar una posible salida *“decorosa”* de la grave crisis en que están metidas las Fuerzas Armadas a causa del golpe del 28J. Estos coroneles viajaron como emisarios del General Romeo Vásquez y demás comandantes golpistas, ante el rechazo norteamericano para que viajara a Miami el propio General Vásquez. En la capital estadounidense los coroneles permanecieron un poco más de una semana y sostuvieron reuniones con representantes del Congreso y, especialmente, con senadores del partido demócrata. En el despacho de uno de esos representantes redactaron un comunicado de prensa, el llamado *“comunicado No 6”*, en el cual anunciaban el respaldo de las Fuerzas Armadas a las negociaciones llevadas a cabo por el gobierno *“en el ámbito internacional”*. Este comunicado fue divulgado el día viernes 24 de julio. Los norteamericanos no estuvieron de acuerdo con la ambigüedad del texto y exigieron que fuera publicado otro comunicado que respetara el texto original discutido en Washington. Así surgió, el mismo día 24, el *“Comunicado No.7”* que expresamente declara el respaldo de la institución armada *“a una solución a la problemática que atraviesa nuestro país, mediante un proceso de negociación en el marco del Acuerdo de San José”*. Ahora sí, los norteamericanos quedaron satisfechos al haber logrado un compromiso a favor del Acuerdo de San José, es decir la segunda propuesta del Plan Arias (los doce puntos) que incluye siempre la condición del retorno de Zelaya a la presidencia de la república. Una vez cumplida su incómoda misión, los dos jóvenes coroneles regresaron a Tegucigalpa.

Los empresarios más radicales a favor del golpe mostraron su asombro y pidieron explicaciones a Micheletti y a los jefes militares sobre estas supuestas negociaciones secretas, es decir a espaldas de los políticos y los empresarios, que se llevaban a cabo en Washington.

Diario El Heraldo, el principal vocero, junto con La Prensa (ambos pertenecientes al empresario Jorge Canahuati, entusiasta partidario y promotor del golpe de Estado), del gobierno de facto, dedicó una página entera (la No.6)

en su edición del día 28 a una larga y tediosa entrevista con el General Romeo Vásquez bajo el revelador título de *“El ejército no negocia en Washington”*, en la cual el militar jefe del golpe de Estado miente con el mayor de los descaros y niega la participación militar en las negociaciones en la capital norteamericana: *“Eso no es cierto”* dice, cuando el periodista le pregunta sobre la presencia de los dos coroneles en Washington. *“Todos los comunicados que nosotros hacemos los elaboramos en nuestra institución”*, agrega. *“No tengo información”*, añade, para luego afirmar con la mayor tranquilidad y cinismo: *“No hay nadie que esté representando al ejército de Honduras en negociaciones en Washington”*.

Pero, a pesar de sus falsas afirmaciones, el General no logra explicar las razones por las cuales los militares se vieron obligados a emitir dos comunicados, el No.6 y el No.7, el mismo día viernes 24 de julio. Tampoco logró convencer a los empresarios que financiaron el golpe y a los políticos aliados de Micheletti. Hay razones para pensar que Micheletti, preocupado por las consecuencias de una negociación paralela de los militares con los norteamericanos, se apresuró a buscar el apoyo del presidente Oscar Arias para reabrir las negociaciones y pedir el apoyo de *“alguna personalidad internacional”* que le ayude a vencer la resistencia de los sectores políticos y empresariales más recalcitrantes y enemigos de cualquier negociación que suponga el retorno al país del presidente Zelaya.

O sea que los golpistas están en aprietos: aislados internacionalmente, con crecientes dificultades en el manejo y sostenimiento de la economía, con fisuras en su propio bloque y, sobre todo, con fundadas sospechas de traiciones e iniciativas paralelas de diálogo con los norteamericanos. Los militares, por su parte, están en una encrucijada: o encuentran una pronta salida *“elegante”* de la crisis o, a pesar de ellos mismos, se verán obligados a continuar enfrentando a los partidarios de Zelaya, con el riesgo creciente de más derramamiento de sangre. Los militares sienten que los políticos les están utilizando, asignándoles el trabajo sucio de la represión, mientras ellos se reparten el botín del Estado en sus reuniones en Casa Presidencial.

Pero, por el lado del presidente Zelaya también la situación es complicada. Sus aliados más cercanos, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba, no ven con simpatía el proceso de negociaciones que dirige el presidente Arias en Costa Rica. Lo rechazan porque lo consideran una trampa, una maniobra de Washington para ganar tiempo y permitir la consolidación de Micheletti en el gobierno, logrando poco a poco la aceptación internacional. Ellos apuestan al fortalecimiento de la llamada *“resistencia interna”* como única vía segura para derrotar a los golpistas y devolver la presidencia a Zelaya.

También algunos colaboradores cercanos de Zelaya desconfían demasiado de la labor mediadora de Arias y favorecen la adopción de posturas radica-

---

les e intransigentes. Los demás ministros del antiguo gabinete, algunos de ellos en el exterior, son partidarios de buscar una solución negociada sobre las bases del llamado Acuerdo de San José. Lo mismo piensan otros ministros que todavía permanecen en el territorio nacional (Víctor Meza, Mayra Navarro, Karen Zelaya, Miriam Mejía, Ricardo Martínez, etc.).

Pero, en medio de todo este laberinto, ¿qué es lo que piensa el presidente Zelaya? Él está convencido de que la fórmula correcta es la siguiente: una adecuada e inteligente combinación entre la resistencia interna y la presión de la comunidad internacional. La una sin la otra no tiene peso decisivo pero las dos juntas pueden lograr el objetivo de doblegar la voluntad de los golpistas y permitir la reinstauración del orden constitucional en Honduras.

Por eso para Zelaya es fundamental mantener vivo y activo el espíritu de la resistencia interior. Eso explica su decisión de permanecer en las cercanías de la frontera con Honduras y transmitir ánimo y esperanza con su sola presencia a los miles de seguidores que le apoyan en todo el país. Pero, al mismo tiempo, deberá atender también las urgencias y necesidades del llamado "*frente exterior*", en donde se requieren muchas habilidades políticas y diplomáticas para mantener el apoyo de la comunidad internacional y buscar el endurecimiento de las medidas y condenas contra el gobierno de facto que preside Micheletti.

La atención al "*frente externo*" no es una tarea fácil. Zelaya debe lograr el respaldo de Washington sin provocar demasiado el disgusto del coronel Hugo Chávez, la incomodidad de Daniel Ortega o las sospechas de La Habana. Debe conservar la amistad del presidente Álvaro Uribe, de Colombia, sin irritar a Chávez ni provocar los recelos de Ortega o del ecuatoriano Rafael Correa, tres presidentes con los cuales Uribe está confrontado. Al mismo tiempo, tiene que cuidar su relación con Panamá, que parece ser el único país de la región dispuesto a aceptar las explicaciones de Micheletti y acercarse al gobierno de facto.

Sin embargo, la tarea más importante Zelaya la debe cumplir en Washington, en donde ha colocado a uno de sus hombres de confianza, su ex secretario privado Enrique Reina, buen diplomático y conocedor de los pasillos de la capital norteamericana. El nuevo embajador debe hacer frente a las actividades de "*lobby político*" que realiza un influyente bufete de abogados que ha sido contratado por un grupo de empresarios hondureños a un costo millonario. El ex presidente Ricardo Maduro, junto al ex embajador Roberto Flores, es uno de los empresarios que realiza actividades de lobby en Washington.

Para completar el cuadro, hace falta saber qué está pensando otro actor importante, el liderazgo que encabeza la denominada "*resistencia interna*",

los llamados dirigentes del movimiento popular, los líderes de los movimientos sociales que apoyan y demandan el retorno del presidente Zelaya y el restablecimiento del orden constitucional. Al interior de la “*resistencia*” se pueden percibir con claridad al menos tres tendencias políticas muy bien definidas:

- a) Los partidarios de forzar a Micheletti a una negociación rápida y en condiciones de desventaja. Apoyan la negociación pero rechazan los puntos relacionados con el perdón a los golpistas o la renuncia a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
- b) Los adversarios de la negociación y de cualquier forma de concesiones a Micheletti y a los militares. Son los más radicales, los que propugnan por pasar de la “*resistencia pacífica*” a la “*resistencia violenta*”, incluyendo fórmulas de confrontación armada con las fuerzas militares y policiales.
- c) Los llamados “*liberales*”, es decir los miembros del partido Liberal que apoyan al presidente Zelaya y rechazan a Micheletti, a quien repudiaron en las elecciones internas y consideran un traidor al partido. Estos se diferencian de los integrantes del “*movimiento popular*” y conservan sus estructuras orgánicas y su fidelidad a la militancia partidaria. Son numerosos pero no tienen la capacidad de movilización que caracteriza a los del “*movimiento popular*”, más organizados y mejor acostumbrados a la protesta callejera.

# AGOSTO

## 2009

---

### La situación política

**H**an pasado ya dos meses desde el domingo 28 de junio, día en que los militares, generosamente financiados por algunos grupos empresariales e inducidos por sectores políticos tradicionales y conservadores, llevaron a cabo un golpe de Estado y rompieron el orden constitucional de la República.

Desde entonces, el país ha estado sumido en una grave y profunda crisis de ingobernabilidad política y convulsión social, aislado internacionalmente y condenado por la inmensa mayoría de los países del mundo. Las protestas callejeras, espontáneas u organizadas, se repiten día a día. El llamado Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado crece y se fortalece en lugar de debilitarse, amplía sus redes y se reproduce a nivel de casi todos los departamentos y ciudades del país. Al mismo tiempo, algunos de sus sectores integrantes se radicalizan y claman por medidas más drásticas y violentas en contra del régimen golpista que encabeza Roberto Micheletti. La situación tiende a complicarse y podría salirse de las manos de los dirigentes originales.

La economía también refleja los efectos de la crisis, tanto de la crisis financiera y económica mundial como de la peligrosa coyuntura política nacional. Las inversiones, tanto públicas como privadas, caen o simplemente desaparecen, mientras el desempleo aumenta y afecta a cada vez más amplios sectores y grupos de la población económicamente activa. El Índice mensual de la actividad económica (IMAE), un instrumento de medición utilizado por el Banco Central de Honduras (BCH), revela que la economía decreció en 3% durante el primer semestre del año (el año pasado, en el mismo periodo, la economía creció en 3,5%). Se espera un crecimiento negativo de 2% para finales del presente año. Las reservas internacionales bajan escandalosamente: han caído en 14,8% entre enero y julio. Al momento del golpe de Estado sumaban casi los 2,500 millones de dólares; actualmente, según Edwin Araque, ex presidente del BCH, son de 2,070 millones (2,158 millones, según la nueva presidenta del Banco Central). Las remesas fami-

liares, fuente clave para la estabilidad económica y origen básico de los ingresos de más de un millón de pobres en el país, cayeron en 11% durante este mes de agosto. El desempleo aumenta: 56 empresas han pedido suspensión autorizada de labores ante el Ministerio de Trabajo, lo que significa unos cinco mil puestos de trabajo menos. Las exportaciones bajaron 30% el mes anterior, mientras las importaciones se redujeron en 26,5% en el primer semestre del año. El peligro de una devaluación del lempira se cierne como una nueva amenaza sobre la economía nacional.

Sin embargo, mientras el caos y la crisis amenazan la estabilidad total del sistema, el régimen golpista se apresta a celebrar las elecciones generales que ya habían sido convocadas para llevarse a cabo el último domingo del próximo noviembre. En ese día, más de cuatro millones de hondureños podrán ejercer el voto para escoger unos quince mil candidatos a cargos de elección popular, entre los cuales destacan seis candidatos a la presidencia, 128 diputados propietarios y otros tantos suplentes, 298 corporaciones municipales y 20 delegados al Parlamento centroamericano (Parlacen).

En esta ocasión se presenta, por primera vez, un candidato independiente a la presidencia de la República, el veterano líder sindical de izquierdas, antiguo miembro del desaparecido partido Comunista de Honduras, Carlos H. Reyes. También hay 18 candidaturas independientes más, entre aspirantes a alcaldes y diputados.

El proceso electoral en marcha, cuya campaña política comenzó oficialmente el primer día de septiembre, se lleva a cabo en las condiciones especiales del gobierno de facto que surgió como consecuencia del golpe de Estado del 28J. Esa circunstancia contamina la legalidad del proceso y, esencialmente, lesiona o disminuye su legitimidad y aceptación pública. Muchos países de la comunidad internacional, especialmente en América Latina, han declarado ya su renuencia a reconocer los resultados de las elecciones de noviembre. A principios de septiembre, el Departamento de Estado norteamericano emitió una declaración formal anunciando su rechazo a las elecciones y sus resultados si estas se llevan a cabo bajo la tutela y supervisión del gobierno golpista de Micheletti.

Los dos principales candidatos, Elvin Santos, del partido Liberal (PL), y Porfirio "Pepe" Lobo, del partido Nacional (PN), aunque ya iniciaron formalmente sus campañas, no muestran todavía el vigor y entusiasmo que han sido característicos en campañas anteriores. Ambos han sufrido el rechazo ostensible de los llamados grupos de la Resistencia, que les abuchean y hostigan cada vez que intentan celebrar sus actos públicos de proselitismo. La situación es particularmente más difícil en el caso del candidato liberal, quien se ha negado a expresar una condena abierta, directa y pública, del golpe de Estado, a la vez que se opone al retorno del presidente exiliado

---

Manuel Zelaya. Las denominadas bases del liberalismo le rechazan y condenan, convirtiéndolo en el candidato débil de un partido fragmentado y al borde de una ruptura interior de grandes proporciones.

Si las elecciones fueran hoy, es casi seguro que el nacionalista “Pepe” Lobo se alzaría fácilmente con la victoria. Es más, Lobo está tan convencido de la viabilidad de su triunfo que, incluso, se ha atrevido ya a anunciar buena parte de su futuro gabinete. Los nacionalistas se aprestan a regresar al ejercicio del poder gubernamental a partir del 27 de enero del año 2010, fecha clave en la que el actual gobierno (o Manuel Zelaya, si es repuesto en el cargo) deberá entregar oficialmente el mando al candidato y partido ganadores en los comicios de noviembre.

Las elecciones son una pieza clave en el ajedrez político del país. El régimen golpista pretende alcanzar cierta legitimidad internacional por la vía del proceso electoral. Sin embargo, cada vez son más los países que consideran ilegítimo ese proceso precisamente por culpa del mismo régimen de Micheletti. La situación parece no tener una solución a corto plazo. El anuncio de los Estados Unidos desconociendo la legalidad de las elecciones, ha sido un verdadero mazazo en las pretensiones del gobierno de facto de buscar credibilidad internacional y respaldo público al proceso electoral.

Para cerrar el cuadro y aumentar la complejidad de la situación, hay otro fenómeno que amenaza la integridad y buena marcha del proceso electoral: el abstencionismo. La crisis política derivada del golpe de Estado ha creado un clima de crispación y desencanto como pocas veces se ha visto en la historia reciente de Honduras. Miles de jóvenes no esconden su frustración y rechazo contra los partidos políticos y sus prácticas electorales. Hay un ambiente creciente de desafección y descreimiento frente a la política. Cobra fuerza y se amplía un sentimiento favorable hacia la denominada “antipolítica”. Es la hora del desencanto democrático.

### **La batalla en el exterior**

**E**l presidente Manuel Zelaya es el jefe del llamado “frente externo”, es decir el espacio internacional en el que se mueve con abundante fluidez y dirige todas las actividades orientadas a incrementar el aislamiento del gobierno golpista, su condena y rechazo. Hasta el momento se ha anotado importantes éxitos diplomáticos y políticos. La gran mayoría de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) repudia al régimen de Micheletti y presiona para que se acepte y firme el llamado Acuerdo de San José, uno de cuyos puntos establece la condición clave del retorno de Zelaya al cargo presidencial como requisito básico para recuperar la constitucionalidad perdida y la gobernabilidad deseada.

La obstinada actitud de Micheletti, su soberbia y altanería proverbiales, le hacen un flaco favor al régimen golpista. Cuando vino a Tegucigalpa la Misión de Cancilleres de la OEA, los días 24 y 25 de agosto, el comportamiento grosero y desafiante de Micheletti sólo sirvió para reforzar más la percepción de que el gobierno de facto es intransigente e intratable. Sus insultos personales al canciller argentino Jorge Taiana (le acusó de terrorista) precipitaron la ruptura de relaciones entre los dos países y aumentaron la orfandad diplomática del régimen.

La Misión de la OEA tuvo entrevistas con casi todos los sectores de la sociedad, golpistas y antigolpistas. Se reunió incluso con el propio Micheletti. Sin embargo, sus gestiones no lograron persuadir al gobierno de facto para que aceptara el Acuerdo de San José y facilitara de esa forma una salida negociada y pacífica a la crisis política. La OEA, o la mayoría de los países miembros, deberán adoptar nuevas medidas de presión para doblegar a Micheletti y su grupo golpista. De hecho, ya han empezado a hacerlo. Brasil ha establecido un riguroso régimen de requisitos para otorgar visados a los ciudadanos hondureños que deseen visitar ese país. Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Costa Rica han expulsado o rechazado a los diplomáticos hondureños afines al golpe de Estado. El círculo se cierra cada vez más, mientras Micheletti, entre desesperado y acosado, se vuelve más desafiante y altanero.

En un intento por ganar tiempo y hacer señales de cierta flexibilidad, el gobierno golpista presentó su propia propuesta a la OEA y al presidente costarricense Oscar Arias. Se trataba de articular la renuncia de Micheletti y la de Zelaya junto a la posibilidad de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera, asumiera la presidencia de la República en forma temporal para garantizar el proceso electoral y un gobierno interino de transición que concluiría en enero del 2010. Es la fórmula de la llamada “*tercería*”, la búsqueda de un tercero para resolver la crisis política por encima de Micheletti y Zelaya, los dos primeros en discordia.

La maniobra fracasó porque ni la OEA ni Arias la consideraron como fórmula viable de solución. Todos señalaron su contradicción con la esencia del Acuerdo de San José al evadir el retorno de Zelaya al sillón presidencial. El propio Zelaya comentó: “*mis aliados de América del sur (Cristina Kirchner, Lula da Silva y Michelle Bachelet, entre otros) me han advertido que si negocio la presidencia me quitarán inmediatamente el apoyo que me han brindado hasta ahora. Mi retorno a la presidencia es innegociable*”.

En un gesto tardío y casi melodramático, Micheletti anunció que retiraba su “*generosa oferta*” de renunciar a la presidencia y abandonaba la idea de la famosa “*tercería*”. Hasta ahí llegó la frustrada iniciativa de los golpistas por introducir su propia agenda dentro del contenido del Acuerdo de San José.

La declaración oficial del Departamento de Estado norteamericano a principios de septiembre se considera uno de los mayores triunfos de los diplomáticos afines al presidente Zelaya (Eduardo Enrique Reina, ex secretario privado del presidente, es quien conduce el lobby zelayista en Washington en su condición de representante asignado ante el gobierno estadounidense). El retiro de la ayuda, la revocación de visas y la descalificación del proceso electoral, han golpeado fuertemente al régimen de Micheletti, aunque, al parecer, sólo son el preámbulo de otras medidas y sanciones más severas y radicales que ya se anuncian (restricciones comerciales, congelamiento de cuentas bancarias, investigaciones sobre inversiones y bienes en territorio norteamericano, etc.). Los empresarios hondureños, especialmente aquéllos cuyos nombres aparecen en las listas de los financistas del golpe de Estado, no ocultan su preocupación y ansiedad ante las medidas adoptadas por Washington. Algunos de ellos (los maquileros, por ejemplo) ya han empezado a dar muestras de flexibilidad y disposición al diálogo y al acuerdo.

### **El silencio de los militares**

**F**ieles a su vocación de silencio, los generales golpistas casi nunca hablan. Apenas lo hacen cuando deben refutar las indirectas de los políticos y ciertos empresarios que les acusan, abiertamente o en forma disimulada, por haber cometido el “error” de sacar ilegalmente del país al presidente Zelaya en la mañana del 28J (el día 28, el magistrado de la Corte Suprema Jacobo Cáliz, del PN, declaró a la prensa que “no había autorización legal para expulsar a Zelaya”).

Pero a finales del mes, se vieron obligados a hablar para aclarar la denuncia del presidente Zelaya, formulada desde la capital nicaragüense, en donde ha establecido su principal base de operaciones, según la cual habrían sido transferidas a las Fuerzas Armadas decenas de millones (primero dijo 40 y luego la suma subió a 90 millones de lempiras) para financiar, entre otras cosas, actividades relacionadas con la campaña y realización de la consulta a favor de la denominada “cuarta urna”. El General Romeo Vásquez pretendió refutar la acusación, pero sólo logró complicar más las cosas e introducir más confusión en el asunto.

La denuncia de Zelaya introdujo dudas y generó malestar al interior de las filas militares. Oficiales de menor rango se preguntaban, con razón, adónde habían ido a parar esas sumas millonarias y cómo y entre quiénes se había llevado a cabo el reparto. Los generales golpistas (Junta de Comandantes) han tenido dificultades para explicar en forma convincente a sus subalternos el destino final de los millones transferidos por Casa Presidencial.

Pero el malestar interno en la institución castrense no sólo se origina por el reparto del dinero. También tiene que ver con la decisión misma de realizar el golpe de Estado y, sobre todo, con las consecuencias indeseables del mismo. El retorno obligado desde España del contingente que debía ir a El Líbano y el rechazo argentino a la participación del representante hondureño en la Conferencia de Ejércitos de América, en Buenos Aires, han sido dos bofetadas humillantes en el rostro de los militares locales. El corte de la ayuda norteamericano afecta las carreras profesionales de muchos oficiales que tenían cursos pendientes en las academias de EEUU. A todo esto se debe sumar el desprestigio creciente de la institución, su pérdida de imagen entre los sectores populares opuestos al golpe de Estado y el repudio internacional a los altos mandos golpistas (Generales y coroneles).

Por todo ello, no es casual el rumor que circula sobre la supuesta detención de una treintena de oficiales subalternos, sometidos a proceso disciplinario, por haber insistido en que el 28J fue un golpe de Estado y no una *“sucesión constitucional en la Presidencia”*, como insisten los golpistas civiles y militares.

En las filas de la Policía también han surgido las controversias y polémicas por la forma en que se han visto obligados a enfrentar la resistencia de los opositores al golpe de Estado. Varios jefes policiales (Comisionados) se consideran *“utilizados”* por los militares y critican la forma en que su institución carga con el desprestigio y el descrédito, además del odio y rechazo de la población afectada.

Al sumar todos los factores arriba señalados, no se puede menos que concluir en que el régimen golpista se debilita y muestra cada vez más fisuras en su estructura orgánica. Y, paradójicamente, entre más débil y fraccionado aparece, mayor es su tentación por recurrir a métodos extrajudiciales para conducir la represión y la lucha contra los llamados sectores y grupos organizados en la llamada Resistencia contra el golpe. La represión, sobre todo la que adopta formas paramilitares y clandestinas, sólo servirá para atizar más la radicalización de ciertos grupos de la Resistencia que favorecen fórmulas violentas y armadas para buscar una solución definitiva a la crisis. El país se acerca peligrosamente al abismo de la violencia política generalizada.

# SEPTIEMBRE

## 2009

---

### La situación política

**L**a crisis política que mantiene en permanente zozobra a la sociedad hondureña ha entrado ya en su cuarto mes, momento en el que parecen abrirse posibilidades reales de diálogo y concertación para encontrar una salida negociada y pacífica al difícil conflicto generado por el golpe de Estado del pasado 28 de junio (28J).

La imprevista llegada del presidente Manuel Zelaya al territorio hondureño el día domingo 21 de septiembre y su sorpresiva aparición en la sede de la embajada de Brasil el día lunes 22, revolvió el ambiente político y le impuso un giro radical a la situación prevaleciente en el escenario nacional. A partir de ese momento, la discusión en torno al posible arreglo negociado de la crisis adquirió un nuevo impulso y el Acuerdo de San José o Plan Arias volvió a tener plena vigencia en la agenda de la crisis política desatada por el golpe de Estado del 28J.

Antes de la llegada del presidente Zelaya al suelo nacional, el Acuerdo de San José había pasado a un segundo plano y los golpistas creían haberlo enterrado para siempre. Sólo Zelaya y su círculo de colaboradores más cercanos hablaba del mencionado Acuerdo y lo invocaba como plataforma única de negociación. Hoy, al llegar a los cuatro meses del conflicto, todos hablan de la necesidad de buscar una fórmula consensuada de solución y reclaman el también denominado Plan Arias como documento base para el diálogo nacional.

El encierro forzado del presidente Zelaya en la sede diplomática brasileña ha colocado la crisis política hondureña en una nueva dimensión a nivel internacional. El Consejo permanente de la Organización de las Naciones Unidas, a petición expresa del gobierno de Brasil, se ha visto obligado a ocuparse de ella aunque sea de forma un tanto marginal. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha relanzado su función mediadora y está patrocinando actualmente una prometedora gestión de diálogo que podría

permitir en los próximos diez días alcanzar acuerdos importantes entre las partes involucradas en el conflicto.

La presión creciente de la comunidad internacional y el sostenido impulso de la resistencia interna contra el golpe militar, sumados a los constantes errores políticos y diplomáticos del gobierno de facto, han acabado por fracturar el bloque golpista y producir fisuras importantes en su estructura interna. Algunos empresarios han empezado a poner distancia con respecto al grupo de Micheletti, de la misma forma que destacados políticos como el ex presidente Carlos Flores y el líder de la oposición nacionalista Porfirio “Pepe” Lobo, han reducido su apoyo al gobierno golpista y se han sumado a las fuerzas que apuestan por la solución negociada de la crisis en base al Acuerdo de San José.

La división y el debilitamiento del bloque golpista se han visto estimulados por la torpeza de Micheletti y su grupo de políticos voraces, al aprobar un decreto ejecutivo que establece un régimen de Estado de sitio durante 45 días y deja sin vigencia las garantías individuales, sabotando así el desarrollo del proceso electoral y mostrando de una forma abierta y directa la naturaleza represiva y dictatorial del gobierno de facto. Con la aprobación de tal decreto, Micheletti y sus colaboradores más cercanos han cometido dos errores fatales:

- a) Han mostrado sus reales intenciones de cargarse el proceso electoral y permanecer por un tiempo más prolongado en el control y ejercicio del poder gubernamental, y
- b) Han debilitado la unidad de sus propios aliados, alertados ya sobre las intenciones continuistas de los golpistas y, por lo mismo, dispuestos a defender el proceso electoral y evitar la permanencia de Micheletti en el gobierno después del 27 de enero del 2010.

El primero en hacer sonar las alarmas ha sido el candidato presidencial del partido Nacional (PN), Porfirio “Pepe” Lobo, quien considera la emisión del polémico decreto como un atentado directo contra su candidatura, que le cierra los espacios y le obstaculiza la posibilidad real de convertirse en el próximo presidente electo de Honduras. Lobo, el candidato mejor posicionado en las actuales encuestas electorales, ha sido el más preocupado por las consecuencias negativas del decreto sobre el proceso electoral. Sabe muy bien que en condiciones de Estado de sitio y suspensión de la vigencia de las garantías individuales que la Constitución garantiza, las elecciones no serán posibles o, en todo caso, serán inmediatamente desconocidas por la mayoría de países de la comunidad internacional.

En tal virtud, Pepe Lobo logró persuadir a los diputados de la bancada nacionalista para que rechazaran el decreto represivo y promovieran su derogación en el seno del Congreso Nacional. Otro tanto hicieron los llamados diputados disidentes o constitucionalistas del partido Liberal (PL), que ya suman 24, quienes también proclamaron abiertamente su oposición al decreto. La situación se revirtió en contra de Micheletti, quien sufrió así su primera derrota legislativa desde que asumió ilegalmente la Presidencia de la República el pasado 28 de junio.

Ante el fracaso legislativo interno y la crítica y la presión externas, Micheletti se ha visto obligado a retroceder y derogar el famoso decreto PCM-M-016-2009 en la sesión del Consejo de ministros que se llevó a cabo el día lunes 05 de octubre en Casa Presidencial.

Para complicar más las cosas, el presidente Zelaya, desde su encierro en la embajada de Brasil, había puesto como una condición básica para iniciar el anunciado proceso de diálogo la derogación del decreto represivo. Al mismo tiempo, reclama que se abra un canal de comunicación con los miembros de su *"comisión negociadora"* (cuatro ministros y diez representantes de la llamada Resistencia contra el golpe de Estado), que se permita la reapertura y funcionamiento de los medios de comunicación ilegalmente clausurados (Radio Globo y Canal 36), y que cese la represión, el acoso militar contra la embajada de Brasil y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los opositores al golpe de Estado.

La derogación del decreto es una buena señal a favor del diálogo promovido por la OEA y plenamente respaldado por la ONU. El mismo día lunes 05.10.09 llegó a Tegucigalpa una Misión de avanzada de las Naciones Unidas para preparar la llegada el próximo miércoles del argentino Oscar Fernández Taranco, secretario de asuntos políticos de la ONU y cercano colaborador del Secretario General de esa organización mundial Ban Ki Moon. La ONU, al parecer, no quiere permanecer fuera del juego que, sin duda, ya la OEA ha relanzado con éxito relativo en los últimos días.

### **Las dudas de la Resistencia**

**H**ay un clima de moderado optimismo en las filas del presidente Zelaya, aunque todavía persisten la duda y la desconfianza con respecto a la actitud y disposición del régimen golpista para participar en un diálogo real y creíble. Los negociadores escogidos por el presidente Zelaya son tres ministros y una Viceministra (Víctor Meza, Milton Jiménez, Mayra Mejía y Patricia Licón), junto a diez representantes de la llamada Resistencia contra el golpe de Estado (los candidatos presidenciales Carlos H. Reyes y César Ham, además de los dirigentes populares Juan Barahona,

Rafael Alegría, Israel Salinas, Daniel Durón, Andrés Pavón, Salvador Zúñiga, el líder cafetalero Dagoberto Suazo y el abogado Rodil Rivera). Todos ellos deberán defender las posiciones del depuesto presidente, colocando en primer lugar la demanda de su inmediata restitución en el cargo. La estrategia de negociación propuesta por Zelaya y su grupo consta de tres puntos claramente diferenciados:

- a) Firma del Acuerdo de San José, en su espíritu general, e implementación inmediata del mismo.
- b) Conformación de una o más “*mesas de diálogo*” para afinar los puntos específicos del Acuerdo, adaptar las fechas y tiempos de cumplimiento y ejecución.
- c) Nombramiento de un “*garante nacional*” que asegure el fiel cumplimiento de los acuerdos logrados y ya debidamente firmados. Ese “*garante*” puede ser una persona o una institución.

En la agenda negociadora de la Resistencia, el punto relacionado con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente sigue siendo el más sensible y polémico. Los líderes de ese amplio movimiento de oposición al golpe de Estado asocian el retorno del presidente a su cargo con la casi inmediata convocatoria a la mencionada Asamblea. El Acuerdo de San José expresamente prohíbe a los firmantes, en este caso al presidente Zelaya, hacer alusión siquiera a la mencionada Asamblea Constituyente y mucho menos convocarla o promoverla. El presidente hace esfuerzos para convencer a los dirigentes de la Resistencia de la necesidad de respetar el rigor de los puntos del Acuerdo de San José y dejar la demanda de la Asamblea para el próximo año, cuando haya un nuevo gobierno y un nuevo presidente de la República. No es fácil persuadir a dirigentes que se han radicalizado en los últimos cuatro meses, participando diariamente en las interminables marchas de protesta y en los esporádicos enfrentamientos con la policía y los militares en las refriegas callejeras.

El presidente Zelaya deberá hacer esfuerzos adicionales para lograr que sus negociadores compartan una sola agenda en la mesa de diálogo, sin presentar fisuras ni discrepancias notables, que debiliten su posición y, por lo mismo, favorezcan o benefician la posición del bloque golpista.

En un Comunicado hecho público el mismo día 05 de octubre, los líderes de la Resistencia demandan una vez más que “*el diálogo debe tener como resultados:*

- a) *La salida del poder de la dictadura militar civil.*

- b) *La restitución del presidente Manuel Zelaya a su cargo sin condiciones, de forma inmediata y segura.*
- c) *La definición de mecanismos para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente democrática, incluyente y participativa”.*

Por lo visto, a juzgar por la naturaleza de estas demandas, la negociación con el grupo de Micheletti será más difícil y tortuosa de lo que parecía a primera vista. El presidente Zelaya deberá garantizar una habilidosa estrategia combinada de negociación, que le permita integrar a la resistencia dentro de su plan de diálogo, sin herir la susceptibilidad política de sus propios seguidores ni despertar sospechas de rendición o indebido repliegue en sus posiciones antigolpistas.

### **El proceso electoral**

**M**ientras que para los Zelayistas la restitución del presidente en su cargo es el núcleo central del Acuerdo de San José y su demanda más sentida, para los golpistas de Micheletti la clave reside en el proceso electoral, única vía, dicen, para encontrar una “solución” a la crisis. De esa forma, la restitución y las elecciones se han convertido en los puntos clave del famoso Plan Arias y, por lo mismo, serán los ejes centrales en torno a los cuales habrán de girar las negociaciones en la mesa de diálogo.

Zelaya plantea la siguiente tesis: sin restitución presidencial no hay elecciones válidas ni aceptables. La única garantía para que el proceso electoral sea reconocido por la comunidad internacional como tal reside en la restitución del derrocado presidente en su cargo. Si esto no sucede, no sólo no serán aceptados los resultados electorales sino que se corre el riesgo incluso de que no haya elecciones reales. Ante este planteamiento, los micheletistas contestan: las elecciones serán válidas por si mismas, en la medida que se asegure la amplia participación de los electores. Por lo tanto, la restitución presidencial no es el punto principal sino el secundario, es decir el derivado y subalterno. La restitución podría darse, dice el gobierno de facto, **después** de las elecciones. Aquí está la clave de la principal contradicción que separa las posiciones de Zelaya y las de Micheletti en torno al diálogo que está por comenzar en Tegucigalpa.

Mientras que Micheletti y los candidatos presidenciales consideran que las elecciones son la **solución**, el grupo negociador de Zelaya las considera únicamente como la **salida**, es decir la antesala a la verdadera solución, que sólo podrá encontrarse en el marco de la Asamblea Nacional Constitu-

yente que deberá convocar el futuro gobierno. La controversia va más allá de un simple juego de palabras. Apunta a la legalidad misma del proceso electoral, si éste es conducido, supervisado y dirigido en las condiciones de un régimen de facto. El proceso electoral no puede legitimar al gobierno de Micheletti precisamente porque es este gobierno, por su origen golpista, la principal fuente que contamina ilegalidad e ilegitimidad a las elecciones.

Porfirio “Pepe” Lobo, el candidato nacionalista, así lo ha entendido ya y por eso se esfuerza en poner distancia con respecto al gobierno de facto, presentándose a última hora ante sus electores como un político constitucionalista y adversario del golpe de Estado que él mismo, con sus diputados, ayudó a consumir el pasado 28J. Pero, además, Pepe Lobo no las tiene todas consigo al interior de su propio partido político. En el seno del PN hay fuertes sectores conservadores que respaldan a Micheletti y consideran a Zelaya como su principal enemigo. Son los “*nacionalistas golpistas*”, que se resisten al giro de timón que está dando gradualmente el candidato presidencial Lobo y presionan para sostener incólume la alianza con el presidente de facto Micheletti.

El alejamiento calculado de Pepe Lobo y su distanciamiento gradual con relación a Micheletti son indicios preocupantes en el seno del bloque golpista. Si la alianza se rompe totalmente, Micheletti quedará muy debilitado en el frente legislativo y su caída puede ser más pronto de lo esperado. Por eso es fundamental que los zelayistas logren conformar una alianza coyuntural con Lobo para frenar a Micheletti, rescatar el proceso electoral del desprestigio golpista y permitir una restitución negociada de Zelaya en la Casa Presidencial. En una alianza semejante gana Zelaya y gana Pepe Lobo. Solo pierde Micheletti y su grupo golpista.

Así están planteadas las posiciones de los grupos contendientes en la víspera de un diálogo político que ojalá conduzca a la salida negociada y pacífica de la grave crisis política en que está sumida Honduras a raíz del golpe de Estado del 28J.

# OCTUBRE

## 2009

---

### La situación política

Octubre ha sido el mes de las negociaciones políticas para buscar y encontrar una salida a la grave crisis por la que atraviesa el país, a raíz de los acontecimientos del 28 de junio recién pasado, es decir el golpe de Estado llevado a cabo en contra del gobierno constitucional de Manuel Zelaya Rosales.

Como resultado de las numerosas presiones externas y ante el evidente deterioro de la situación política y social interna, el gobierno de facto de Roberto Micheletti no tuvo más alternativa que aceptar la necesidad de abrir un espacio favorable para iniciar un proceso de diálogo y concertación. El punto más alto de la presión externa se alcanzó en la llamada “*Cita de Palmerola*”, es decir la reunión secreta que tuvo lugar en la Base Aérea Enrique Soto Cano, también conocida como Palmerola, en la región central del país. Esa reunión, llevada a cabo el día martes 29 de septiembre, convocó a los siguientes personajes: Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), su asesor principal John Biehl, el ex presidente Ricardo Maduro, el alcalde de Tegucigalpa Ricardo Alvarez, Carlos López Contreras, canciller de facto, y el propio Roberto Micheletti. La reunión, avalada por los norteamericanos, sirvió para persuadir al régimen golpista sobre la necesidad de abrir un espacio para el diálogo político, bajo los auspicios de la OEA.

Fue así que, finalmente, el viernes 02 de octubre pudo ingresar al país el resto de la delegación de la OEA que había sido expulsada del aeropuerto Toncontín el pasado domingo 27 de septiembre. La delegación, una vez reconstituida en su composición inicial, inició de inmediato sus gestiones para instalar una Mesa de diálogo que permitiera sentar a ambas partes en torno a una difícil pero urgente negociación. El proceso de diálogo quedó formalmente instalado el día miércoles 07 de octubre, ante la presencia de numerosos cancilleres latinoamericanos y el Secretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental del gobierno de Estados Unidos, el experimentado diplomático Thomas Shannon.

Ambas delegaciones quedaron reducidas, a propuesta de la OEA, a tres personas por cada bando. Tanto la que representa a Roberto Micheletti (los abogados Vilma Morales y Armando Aguilar, junto al ingeniero y empresario Arturo Corrales) como la del presidente Manuel Zelaya (los ministros Mayra Mejía y Víctor Meza, junto al líder de la Resistencia, el sindicalista Juan Barahona, primero, y, posteriormente, el abogado y empresario Rodil Rivera), tuvieron su primera reunión en la tarde del propio día 07 y definieron la agenda del diálogo, la que quedó conformada por tres puntos:

- a) Firma del Acuerdo de San José,
- b) Creación de comisiones para hacer los ajustes y modificaciones al texto del mencionado Acuerdo, y
- c) Propuesta metodológica y procedimientos para un nuevo Pacto político y social.

Al día siguiente, el 08, las delegaciones negociadoras lograron acuerdos en los primeros dos puntos: 1) la formación de un gobierno de unidad y reconciliación, con representantes de los partidos políticos y de las organizaciones sociales, y 2) la amnistía por la comisión de delitos políticos y comunes conexos. En este segundo punto, ambas delegaciones coincidieron en eliminarlo, considerando que el derecho a otorgar o no la mencionada amnistía corresponde estrictamente al Congreso Nacional. Los representantes de las dos partes afirmaron que no necesitan la amnistía.

El avance en los dos primeros puntos del Acuerdo (en total son doce puntos, ocho conceptuales y cuatro de procedimiento) causó sorpresa y entusiasmo entre los propios negociadores, pero, al mismo tiempo, generó sospechas y suspicacias al interior del bloque golpista. Por la noche se incrementaron las acciones de hostigamiento y acoso en contra de la embajada brasileña en Tegucigalpa, en donde está refugiado el presidente Zelaya con unas cuantas decenas de simpatizantes y representantes de la prensa internacional.

Al día siguiente, 09, se avanzó en la discusión del texto final del Acuerdo y se logró la aprobación de tres puntos más: la prohibición de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, el apoyo al proceso electoral y la transferencia del mando militar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante todo el mes de noviembre hasta las elecciones del día 29. El avance logrado (cinco puntos aprobados) hizo sonar las alarmas en Casa Presidencial y llamaron a sus negociadores para que explicaran la inesperada prisa en la mesa de negociaciones y el verdadero alcance de los puntos ya aprobados (casi el 60% del contenido total de la parte conceptual del Acuerdo). La reunión fue tensa y la cúpula empresarial golpista, junto a los asesores del Opus Dei

que rodean a Micheletti, advirtieron sobre el peligro de aprobar demasiado pronto un Acuerdo político. Debe entenderse que la delegación de Micheletti había diseñado una estrategia de negociación destinada a “*ganar tiempo*”, mantener atada a su contraparte a la mesa del diálogo hasta acercarse lo más posible a la fecha del 29 de noviembre, día señalado para celebrar las elecciones generales en el país.

A partir de este momento, el proceso de diálogo disminuyó su ritmo de avance y aumentaron las peticiones de recesos, algunos hasta de tres días, por parte de los representantes de Micheletti.

Cuando ya se habían aprobado dos puntos más (la creación de las Comisiones de verificación y de la verdad, además de la normalización de las relaciones con la comunidad internacional y los países cooperantes), el diálogo entró en su fase más difícil y conflictiva: la discusión del punto seis (texto original del Acuerdo de San José) en el que se trata de la solicitud al Congreso Nacional para que retrotraiga el Estado de los Poderes constituidos a la fecha previa al 28 de junio de 2009, lo que implica la restitución de Manuel Zelaya en la presidencia de la República.

En este momento, el diálogo quedó entrampado y virtualmente estancado. El presidente Zelaya, previendo una situación semejante, había decidido ya poner un plazo al proceso de negociación: la medianoche del jueves 15 de octubre. En la tarde de ese mismo día, bajo la presión del plazo fatal, las dos delegaciones lograron consensuar un texto único para el punto seis (No.5 en el nuevo texto del Acuerdo) y se acercaron a lo que ya parecía una salida acordada del problema. Al consultar con Micheletti el contenido del texto, sus representantes recibieron el rechazo total y la contrapropuesta de una nueva versión que se reducía a lo siguiente: solicitar a Zelaya que reconociera la legalidad de los Poderes constituidos el día 28, es decir reconocer que no hubo golpe de Estado, y, además, solicitar a la Corte Suprema de Justicia para que decidiera sobre su petición de restitución en el cargo presidencial. Esta “*propuesta*” fue considerada insultante y absurda por parte de la Comisión Zelaya, diseñada más para provocar que para generar consenso. El diálogo quedó interrumpido en la mañana del día viernes 16, tal como quedó evidenciado en un Comunicado público emitido por el presidente Zelaya desde la embajada de Brasil.

El día 22, luego de varios contactos informales con los negociadores michelettistas, especialmente con Arturo Corrales, los delegados zelayistas volvieron a la mesa de diálogo para conocer oficialmente de la “*nueva propuesta*” anunciada desde Casa de gobierno. Lo novedoso de la misma resultó ser una repetición de anteriores propuestas: la renuncia de ambos protagonistas y la promoción de un tercero, la llamada “*tercería*”, para que se haga cargo del gobierno hasta el 27 de enero de 2010.

El propio John Biehl, representante de la OEA en el proceso de diálogo, explicó personalmente la “propuesta” al presidente Zelaya, quien la rechazó totalmente e insistió en volver a discutir de nuevo el tema de la restitución presidencial. Al día siguiente, sábado 24, Biehl regresó a Washington para informar al Secretario General Miguel Insulza sobre el nuevo estancamiento del diálogo.

En este momento, el diálogo parecía haber llegado a su fin. Fue entonces cuando intervinieron de manera más directa y abierta los norteamericanos, aunque siempre habían estado presentes, especialmente a través de la intensa actividad desplegada por el embajador Hugo Llorens, reuniéndose a diario con los diversos actores involucrados en el conflicto y aplicando sanciones graduales a los funcionarios, políticos, militares y empresarios golpistas más connotados (a partir del lunes 26 la embajada estadounidense reinició la distribución de notas de cancelación de visados).

La Secretaria de Estado Hillary Clinton llamó a Zelaya y a Micheletti (media hora de conversación “dura” con este último) y les anunció la llegada a Tegucigalpa el miércoles 28 de una Misión diplomática de alto nivel encabezada por Thomas Shannon, en la que también estaría el asesor personal del presidente Barack Obama, el hispano de origen colombiano Dan Restrepo. Por su parte, la OEA envió el día martes 27 al boliviano Víctor Rico, responsable de la Dirección de asuntos políticos de esa organización.

El miércoles 28, Shannon y sus acompañantes invitaron a un almuerzo a las dos delegaciones negociadoras, durante el cual dejaron muy en claro el objetivo de su misión: reactivar el diálogo y lograr un acuerdo político consensuado antes de las elecciones del 29 de noviembre. Shannon, en particular, fue muy explícito al señalar los dos escenarios posibles que podían presentarse ante Honduras:

- a) Ir a las elecciones acompañada por la comunidad internacional, con el apoyo de Estados Unidos y el reconocimiento oficial del proceso electoral o, por el contrario,
- b) Avanzar sola hacia las elecciones del 29 de noviembre, sin legitimidad ni reconocimiento internacional, sin aceptación de los resultados y expuesta a recibir nuevas y más duras sanciones por parte de la OEA y la ONU.

La diferencia entre ambos escenarios es muy simple, dijo el diplomático norteamericano: un acuerdo político entre ambas partes, en base al espíritu del Pacto de San José, antes de las elecciones.

Al hablar con los protagonistas principales del conflicto, Shannon fue más claro y directo. Al encontrarse con el presidente Zelaya, a quien visitó el mismo día de su llegada, el norteamericano comprometió la palabra de su gobierno para ayudar efectivamente a la restitución presidencial, eje clave del Acuerdo de San José. Con Micheletti, en cambio, fue más terminante y duro: o regresan a la mesa de diálogo y suscriben el Acuerdo político, o sufrirán nuevas y más duras sanciones por parte de Washington. Shannon, al parecer, habría enumerado seis de esas posibles sanciones:

- a) Descertificación de seguridad a Puerto Cortés, lo que afectaría gravemente todas las exportaciones que salen por esa instalación portuaria.
- b) Cese inmediato de toda la ayuda económica para el programa de la merienda escolar.
- c) Cese inmediato de toda la ayuda económica para el programa Educación para Todos (Educatodos).
- d) Retiro del embajador Hugo Llorens.
- e) Declaración de Honduras como “país violador de los derechos humanos”, y
- f) Exclusión de Honduras del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (Cafta-RD).

Restrepo, por su parte, fue muy enfático al aclarar a Micheletti y sus asesores que no debían hacer cálculos equivocados al valorar la influencia de sus amigos republicanos ultraconservadores en Washington. *“Nosotros, los demócratas, dijo en otras palabras el asesor de Obama, ganamos las elecciones y somos los que mandamos en Washington. Sus amigos republicanos cuentan pero no tienen la fuerza suficiente para impedir la buena marcha de nuestra política exterior...”*

Al decir esto, Restrepo seguramente pensaba también en los asesores norteamericanos del gobierno de facto, que están alojados en el hotel Clarion y se encargan de diseñar la estrategia michelettista en la mesa del diálogo y los ejes del cabildeo a favor del golpe en los pasillos de la capital estadounidense. Esos asesores son los mismos que no ocultaron su disgusto y malestar cuando Shannon y sus acompañantes forzaron virtualmente a Micheletti a mostrarse más flexible y anuente a volver a la mesa del diálogo y suscribir el esperado Acuerdo político para buscar una salida a la crisis.

El día 29, a las 11 de la noche, luego de varios intentos de redacción conjunta y en base a una propuesta integrada que finalmente tuvo la aceptación

de ambas partes, fue firmado el polémico punto No 5 (versión nueva del texto de San José), lo que abrió paso para la adopción del texto completo del Acuerdo final, que fuera definitivamente firmado por las dos delegaciones en la mañana del día siguiente, viernes 30 de octubre de 2009. El mismo día, a las 12:30 pm, el texto oficial fue entregado por las dos delegaciones negociadoras en la Secretaría del Congreso Nacional.

La firma del Acuerdo final, oficialmente denominado “*Acuerdo de Tegucigalpa/San José*”, ha despertado gran alegría entre los simpatizantes del presidente Zelaya, quienes lo perciben como una primera derrota política importante en contra del régimen golpista de Micheletti. Sin embargo, también ha generado escepticismo y prudente cautela al momento de valorar su alcance y perspectivas.

El Acuerdo, en su punto No.5, expresa la solicitud de las partes negociadoras para que el Congreso Nacional, “*en uso de sus facultades, en consulta con las instancias que considere pertinentes, como la Corte Suprema de Justicia, y conforme a Ley, resuelva en lo procedente en respecto a **retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010.***”

O sea que el Congreso Nacional será la instancia, política por excelencia, en donde deberá resolverse el asunto de la restitución de Manuel Zelaya en el sillón presidencial. Pero la decisión que adopte el Congreso no estará libre de condicionamientos. El párrafo último del punto No.5 es muy claro a este respecto: “***La decisión que adopte el Congreso deberá sentar las bases para alcanzar la paz social, la tranquilidad política y gobernabilidad democrática que la sociedad demanda y el país necesita***”.

En otras palabras, si el Congreso decide que la restitución presidencial no es viable y mantiene la vigencia del decreto ilegal del 28 de junio mediante el cual se despojó ilegalmente a Manuel Zelaya de la Presidencia y se “*promovió*” a ese cargo a Roberto Micheletti, en ese caso su decisión **no servirá para “sentar las bases para alcanzar la paz social, la tranquilidad política y gobernabilidad democrática...”**, por lo tanto será una decisión contraria al espíritu que anima al Acuerdo de San José/Tegucigalpa y desligada del sentido de coherencia y unidad que exhibe el texto completo del Acuerdo.

Todos los puntos de ese Acuerdo están estrechamente vinculados entre sí, cada uno adquiere su importancia y validez plena sólo si se le relaciona con los demás y se complementa con el texto integral del documento. Al leerlo con cuidado y en detalle será más fácil comprender la interrelación de los doce puntos y la complementariedad entre todos, girando siempre en torno

---

al eje central del Acuerdo: la restitución del presidente Manuel Zelaya en su cargo hasta la conclusión del periodo gubernamental el 27 de enero de 2010.

Como era de esperar, la firma del Acuerdo político ha generado una intensa actividad de cabildeo entre los distintos partidos políticos y entre las diferentes facciones al interior de los mismos. Algo parecido sucede entre las diferentes organizaciones de la sociedad civil, en las filas de la llamada Resistencia contra el golpe de Estado y, en general, entre todos los actores políticos, militares, empresariales y parlamentarios involucrados en la trama del golpe de Estado del 28J.

Los nacionalistas, encabezados por su candidato presidencial, Porfirio “Pepe” Lobo, con su bancada parlamentaria de 55 diputados, están en una posición privilegiada al momento de negociar el peso de sus votantes y su capacidad para inclinar la balanza a favor o en contra de la restitución de Zelaya. Las negociaciones con Pepe Lobo han sido muy intensas en los últimos meses pero, en especial, después de la firma del Acuerdo. También hay negociaciones con los diputados que respaldan al candidato liberal Elvin Santos, quien insiste en oponerse a Zelaya, en un pleito que parece tener ya demasiada carga emocional y personal. Dentro de los diputados liberales, al menos 22 han dicho que están dispuestos a apoyar la restitución de Zelaya, junto a los cinco diputados de Unificación Democrática y al menos uno de la Democracia Cristiana.

Pero los números cambian, hacia arriba o hacia abajo, en dependencia de la intensidad y el éxito de los cabildeos, de las ofertas monetarias y los compromisos políticos a futuro. No fueron pocos los diputados que llamaron a Zelaya a la Embajada de Brasil para sondear la posibilidad de una mejor oferta por encima de las que les había hecho el gobierno de facto. Todo el sistema político local está siendo puesto a prueba.

El trabajo de la Comisión de Verificación, que se instalará oficialmente el miércoles 04 de noviembre, será muy intenso y minucioso. Estará integrada por cuatro personas, dos nombradas por la OEA (el ex presidente chileno Ricardo Lagos y la Ministra del Trabajo de la Administración Obama, Hilda Solís) y dos nacionales, nombrados por cada una de las partes: Jorge Arturo Reina, por el lado zelayista, y Arturo Corrales, por el lado michelettista. La Comisión tendrá la delicada misión de velar porque el Acuerdo suscrito sea cumplido en todos y cada uno de sus puntos, tanto conceptuales como de procedimiento. El miércoles 04, fecha prevista para su instalación, será la víspera del anuncio del nuevo gobierno de unidad y reconciliación que ordena formar el punto No.1 del Acuerdo. Ese gobierno deberá estar integrado por ministros, Viceministros y directores o presidentes de instituciones descentralizadas del Estado, nombrados de común acuerdo por Zelaya y Mi-

cheletti antes del día 05 de noviembre. Ojalá que para entonces ya haya decidido lo procedente el Congreso Nacional, evitando así una demora injustificada y peligrosa para la paz y la estabilidad social del país.

Si los diputados, obedeciendo a intereses ajenos a la necesaria paz y gobernabilidad democrática que el país necesita, fallan en contra de Manuel Zelaya y se niegan a restituirlo en el cargo, habrán perpetrado un segundo golpe de Estado en menos de cinco meses: el golpe de Estado militar de junio y el golpe de Estado técnico de noviembre.

# NOVIEMBRE

## 2009

---

### La situación política

**E**l mes de noviembre ha sido decisivo en la evolución de la crisis política en que está sumida Honduras desde el 28 de junio recién pasado, fecha en que se produjo el golpe de Estado en contra del gobierno constitucional de Manuel Zelaya. En este mes entró en vigencia y colapsó muy pronto el ansiado Acuerdo Tegucigalpa/San José, que fue firmado en la mañana del 30 de octubre, gracias a la presión que Estados Unidos ejerció sobre el gobernante de facto, Roberto Micheletti, quien se negaba obstinadamente a autorizar la firma del Pacto.

Ante el evidente estancamiento en que se encontraban las negociaciones iniciadas el día 07 de octubre, bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA), las comisiones negociadoras de ambas partes se limitaban, desde el día 16 de octubre, a mantener esporádicos contactos informales que no permitían un relanzamiento exitoso del diálogo. Fue en ese momento cuando el Departamento de Estado decidió enviar al entonces Secretario de Estado Adjunto para el hemisferio occidental, Thomas Shannon, y al asesor en materia de seguridad Dan Restrepo, quienes sostuvieron entrevistas individuales con los principales actores del conflicto, especialmente con el presidente Manuel Zelaya y el gobernante usurpador Roberto Micheletti. La Misión Shannon tenía por objetivo principal la reanudación del diálogo y la correspondiente firma de un Acuerdo político que permitiera la formación de un gobierno de reconciliación nacional y, eventualmente, la restitución del presidente Zelaya en su cargo.

Aunque Micheletti se resistía a firmar el Acuerdo, la presión estadounidense fue muy eficaz y logró doblar la mano del gobernante de facto. El Acuerdo fue firmado a las 11 am del día viernes 30 de octubre. Una hora después, las dos delegaciones negociadoras hicieron entrega de la versión original del Acuerdo en la Secretaría del Congreso Nacional para que ese órgano legislativo diera cumplimiento inmediato a la parte correspondiente del documento.

Según el calendario de cumplimiento incorporado en el texto del Acuerdo, el día 02 de noviembre debía quedar instalada la Comisión de Verificación (dos representantes internacionales escogidos por la OEA y dos nacionales seleccionados por cada una de las partes del conflicto) y el día 05, fecha límite, quedaría conformado el nuevo gobierno de unidad y reconciliación nacional.

La Comisión de Verificación comenzó sus funciones el día 03 y en esa misma fecha el ministro de la Presidencia del gobierno de facto, Rafael Pineda Ponce, envió una carta al presidente Zelaya, a los partidos políticos y a ciertas organizaciones de la sociedad civil solicitándoles listas de candidatos para conformar el gobierno de unidad y reconciliación... bajo la dirección de Micheletti. Este fue un golpe bajo al cumplimiento del Acuerdo y generó la confusión suficiente para introducir el palo en la rueda de la Comisión de Verificación.

Al cumplirse el plazo del 05 de noviembre sin que fuera integrado e instalado el nuevo gobierno, el presidente Zelaya reaccionó sumamente molesto por el engaño de los golpistas y declaró virtualmente fracasado el diálogo y el Acuerdo político. En el ínterin se habían producido las malogradas declaraciones de Thomas Shannon en Washington, según las cuales el gobierno norteamericano estaba dispuesto a reconocer el resultado de las elecciones de noviembre sin la condición previa de la restitución presidencial de Zelaya. Otro golpe bajo al cumplimiento del Acuerdo.

Para complicar más las cosas, la Junta Directiva del Congreso Nacional, por mayoría de votos, había decidido ya pedir la opinión y dictámenes diversos sobre el "caso Zelaya" a diversas instituciones del Estado, todas ellas hostiles al presidente derrocado, como condición básica para tomar una decisión definitiva sobre la restitución del orden constitucional y la reinstalación de Zelaya en Casa Presidencial. Un nuevo golpe bajo al cumplimiento del Acuerdo.

En resumen, como consecuencia de todas estas acciones, Zelaya optó por denunciar la falta de voluntad de cumplimiento por parte de los golpistas y el engaño disfrazado de "buenos oficios" realizado por Washington al respaldar sin condiciones el proceso electoral. Por lo tanto, el Acuerdo Tegucigalpa/San José entró en fase de coma y su utilidad potencial quedó reducida a nada. Fue un fracaso para los partidarios del diálogo y una magnífica oportunidad perdida para la paz y la tranquilidad de Honduras.

Ante la nueva situación creada, se rompieron prácticamente todos los contactos entre las dos comisiones negociadoras y su lugar fue ocupado por la Misión de los dos delegados de la OEA (el argentino Octavio Bordón y el chileno Enrique Correa) y las gestiones diarias del embajador de Estados

Unidos en Honduras, Hugo Llorens. Gracias a esas gestiones, las de Llorens especialmente, fue posible persuadir al gobernante de facto para que se ausentara por un tiempo (una semana) del ejercicio de las funciones públicas y permitiera un espacio libre de su presencia para poder llevar a cabo con alguna posibilidad de éxito el proceso electoral programado para el día 29. La estrategia escalonada de los Estados Unidos apunta en el sentido de convertir en definitivo el retiro temporal de Micheletti, para abrir el espacio suficiente que le permita al nuevo presidente electo negociar más libremente con Zelaya y recomponer el escenario político a través de la formación del ansiado gobierno de unidad y reconciliación.

El anuncio del presidente de facto del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, en el sentido de que ese órgano legislativo se podría reunir el día 02 de diciembre para resolver en forma definitiva sobre la situación del presidente Zelaya, ha agregado más leña al fuego. Ahora ya existe una fecha fijada por los legisladores y el tiempo se acaba para los negociadores informales del conflicto.

### **Las polémicas elecciones**

**P**or fin llegó el esperado domingo 29, día programado para llevar a cabo las controversiales elecciones generales, posiblemente las más polémicas y difíciles en los casi treinta años de duración del proceso de transición política hacia la democracia en Honduras. Aunque las cifras todavía son incompletas, no cabe ninguna duda sobre el triunfo arrollador del candidato nacionalista Porfirio “Pepe” Lobo sobre el aspirante liberal Elvin Santos. De esta manera, el viejo político olanchano, Porfirio Lobo, se ha convertido en el nuevo presidente de Honduras, siendo, al mismo tiempo, el candidato más votado en las elecciones menos concurridas. Son las ironías de la vida.

Los liberales, a juzgar por la magnitud de la derrota (entre 12 y 17 puntos de diferencia a favor de Lobo), prefirieron quedarse en casa y optaron por el abstencionismo de castigo a los que consideran golpistas (Micheletti) o cómplices del golpe (Santos). Por primera vez fueron derrotados en departamentos tradicionalmente liberales como Cortés o El Paraíso. El número de diputados se verá reducido sensiblemente y las alcaldías perdidas sumarán decenas. O sea que, en suma, el partido Liberal (PL) ha sufrido una derrota contundente y se ha convertido en la principal víctima electoral del golpe de Estado del pasado 28 de junio (28J).

El presidente Zelaya, por su parte, había vaticinado con mucha antelación este desastroso desenlace. La negativa de Santos a condenar el golpe de Estado y reclamar el retorno al orden constitucional fue severamente casti-

gada por los militantes liberales de base, descontentos por el golpe del 28J y ofendidos por el derrocamiento de un presidente también liberal. Muchos liberales votaron por otros partidos o simplemente se abstuvieron de hacerlo. En resumen: Elvin Santos sufrió la mayor derrota electoral que candidato liberal alguno haya recibido en los últimos treinta años, sólo comparable con la humillante paliza política que Rafael Leonardo Callejas le propinó al candidato liberal Carlos Flores en las elecciones generales de noviembre de 1989.

El triunfo de Pepe Lobo modifica esencialmente el escenario político del país y abre una nueva puerta para buscar una salida a la grave crisis en que se encuentra Honduras desde el 28J. Al prometer la apertura de un gran diálogo nacional para resolver la crisis, Lobo podría facilitar una salida para Zelaya. Los dos protagonistas, además de conocerse muy bien mutuamente y ser amigos, deberán negociar en forma directa y encontrar la ventana que permita librarse de Micheletti y evitar que el Congreso Nacional se apresure a condenar a Zelaya y respaldar al gobernante de facto.

Los dos coinciden en desear, por diferentes razones, la salida de Micheletti. Los dos coinciden en la necesidad de introducir cambios sustanciales en el modelo jurídico y constitucional del país. Los dos coinciden en la urgencia de retornar al orden constitucional para reinsertar a Honduras en el concierto mundial de las naciones democráticas. Sin embargo, pese a esas notorias e importantes coincidencias, los dos deben afrontar la resistencia dentro de sus propias filas y el rechazo de muchos sectores sociales y políticos a los acuerdos de cualquier tipo. Los dos deben hacer frente a sus propios grupos duros y radicales.

En las filas del partido Nacional (PN) existe un fuerte e influyente grupo de políticos golpistas, enemigos acérrimos de Zelaya y adversarios totales a su retorno a Casa Presidencial. Entre ellos destacan el actual alcalde de la ciudad capital, Ricardo Alvarez, y los diputados Antonio Rivera Callejas y Rodolfo Irias Navas, así como el ex candidato presidencial y ahora nuevamente diputado Osvaldo Ramos Soto. Lobo deberá negociar con ellos para persuadirlos de la necesidad de buscar un arreglo con Zelaya que facilite el reconocimiento internacional de las elecciones y ayude a una transición gubernamental más ordenada y legal. Lobo no quiere recibir la banda presidencial de manos del gobierno de facto de Micheletti. Es la historia del beso envenenado a que hizo alusión el embajador norteamericano Hugo Llorens.

Pero Zelaya tampoco las tiene todas consigo. Debe tomar en cuenta la opinión de sus seguidores, especialmente los que están agrupados en el llamado Frente de Resistencia Nacional contra el golpe de Estado. No será fácil convencerlos de la necesidad de llegar a un acuerdo político con Lobo, una persona cuyo triunfo electoral la Resistencia pone en duda o abierta-

---

mente cuestiona. Negociar con Lobo equivale para muchos a la aceptación de su victoria electoral y la virtual legalización del proceso electoral.

El mismo Zelaya se encuentra en una encrucijada al plantearse la eventual y necesaria negociación con Pepe Lobo. Al negar la legalidad del proceso electoral y amenazar con impugnar sus resultados, automáticamente descalifica a Lobo como presidente electo y, por lo mismo, como interlocutor válido posible. Deberá moderar sus críticas y bajar el tono de su cuestionamiento a los resultados electorales, si es que en verdad quiere llevar a cabo una negociación seria con Lobo y encontrarle una salida digna a la crisis.

Por otro lado, está la amenaza cierta de que el Congreso Nacional se reúna en efecto el día 02 de diciembre y tome una decisión definitiva sobre el destino de Zelaya. Hasta el momento, la correlación de fuerzas al interior del Congreso no ha sido favorable a Zelaya, sin embargo, después de las elecciones y sobre todo después de la debacle liberal, las condiciones podrían cambiar. Además, Pepe Lobo podría lograr algunos votos favorables entre los diputados nacionalistas, porque se descarta que sea capaz en tan corto tiempo de alinear a toda su bancada a favor de la restitución del presidente derrocado.

Entre los liberales, es decir entre los diputados del PL, se advierte una corriente de opinión ambigua. Hay quienes culpan a Zelaya por la derrota electoral del domingo 29, pero otros insisten en que la razón básica de su fracaso se origina en el golpe de Estado del día 28J. De esta forma, las opiniones se dividen y las lealtades cambian y se reacomodan a la nueva situación. Zelaya podría tener una oportunidad en el Congreso si recibe la ayuda decidida de Lobo. Eso está por verse.

Para cerrar el cuadro, es preciso mencionar una posibilidad más, la peor de todas, es decir el retorno de Micheletti al ejercicio efectivo del poder a partir del día 02 de diciembre. Si ello se produce, el escenario se complica y la solución o salida de la crisis se vuelve más difícil y se aleja. Los norteamericanos, junto a la Misión de la OEA, están trabajando intensamente para lograr ya sea la prórroga de la ausencia de Micheletti o, lo más deseable, su alejamiento definitivo de Casa de gobierno.

Si se logra el objetivo de separar a Micheletti, un actor de menor peso después de las elecciones, las condiciones para encontrar una salida serán más propicias y prometedoras. Así lo entienden todos los demás actores: Zelaya, Lobo, la OEA y el embajador Llorens. Sólo se oponen los integrantes del llamado "*círculo de hierro*" que rodea a Micheletti, integrado por algunos militantes fundamentalistas de las sectas católicas (Opus Dei, Legionarios de Cristo, etc.) y evangélicas, varios empresarios ultraconservadores, políticos que han sido beneficiados con el nuevo reparto del botín estatal

después del golpe de Estado, etc. Los militares, vale decir los cuatro generales encabezados por Romeo Vásquez, mantienen un discreto y sospechoso silencio en torno a todas estas gestiones e iniciativas que están desplegando los políticos. Aseguran que aceptarán lo que éstos (los dirigentes políticos, diputados, etc.) decidan, aunque no ocultan su ferviente deseo de que el Congreso Nacional emita un decreto de amnistía que les proporcione la suficiente protección legal en los próximos años por los delitos cometidos al consumar el golpe del 28J.

Así está el entramado de la búsqueda de una salida política negociada a la crisis en que se encuentra actualmente Honduras. No será fácil hallar la solución, pero no cabe duda que la primera semana de diciembre será clave para resolver el problema.

### **El frente externo**

**P**ero las dificultades de Zelaya no sólo están en el frente interno. También en el externo se le están complicando las cosas. Crece el número de países que se inclinan por reconocer el resultado de las elecciones del domingo 29 y conceder la legitimidad debida al triunfo electoral del candidato nacionalista.

La decisión de los Estados Unidos de apoyar al nuevo presidente electo contribuirá, sin duda alguna, a que otros países tomen una decisión similar y modifiquen su apoyo inicial a las posiciones de Zelaya. Ya lo han hecho países como Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica y otros.

A propósito de Panamá, su recién electo presidente, Ricardo Martinelli, invitó a Pepe Lobo a viajar a ese país el día martes 24 de noviembre, apenas cuatro días antes de las elecciones del 29. Lobo se reunió con el gobernante panameño y, se sospecha, también con emisarios especiales del Departamento de Estado de Washington. No se conoce en detalle la agenda que fue discutida en esas reuniones, pero no es difícil concluir en que tal agenda debió estar relacionada con la crisis política del país y la necesidad de afianzar el reconocimiento internacional para el triunfo electoral de Lobo.

De igual manera, Lobo se reunió con el Vicecanciller mejicano, Salvador Beltrán, quien estuvo en Tegucigalpa en discreta misión observadora los días 19-21 de noviembre recién pasados.

Lobo tiene una difícil tarea para reconstruir las redes de las relaciones y la cooperación internacional, rotas a consecuencia del golpe de Estado del 28J. Pero, al mismo tiempo, en el cumplimiento de esta tarea tiene -o puede tener- un valioso aliado: el propio presidente derrocado Manuel Zelaya. He

aquí, pues, otro punto más de coincidencia que debe acercar a los dos protagonistas y facilitar su comunicación y entendimiento.

# DICIEMBRE

## 2009

---

### La situación política

**C**on este mes de diciembre concluye el año 2009, posiblemente el año más crítico y difícil para la sociedad hondureña, cuando fue cortado en seco el proceso de construcción democrática y quedó bruscamente interrumpida la transición política hacia la democracia, que había comenzado en los inicios de la década de los años ochenta del siglo recién pasado.

En este año, precisamente el 28 de junio (28J), los militares, auspiciados, financiados y debidamente estimulados por una coalición de políticos conservadores, empresarios temerosos y fanáticos de las más diversas sectas religiosas (católicos y protestantes), llevaron a cabo un golpe de Estado que dio al traste con el gobierno constitucional que encabezaba el presidente Manuel Zelaya Rosales e instauraron en Honduras un gobierno de facto dirigido por el político tradicional, viejo caudillo regional del liberalismo y presidente del Congreso Nacional en ese momento, Roberto Micheletti.

El golpe de Estado del 28J interrumpió el proceso de construcción y consolidación de la democracia, devolvió un peligroso protagonismo a las Fuerzas Armadas en el escenario político y sumió al país en una grave crisis de gobernabilidad, en medio de un casi total aislamiento internacional. Hasta la fecha, ni un tan sólo gobierno ha reconocido públicamente al gobierno de facto que preside Micheletti como el gobierno oficial y legítimo de Honduras.

En medio de este clima de rechazo y condena internacionales, el gobierno de facto logró llevar a cabo el proceso electoral que ya estaba programado previamente para que fuera realizado el último domingo del mes de noviembre. Así, el día 29, los electores acudieron a las urnas y favorecieron con sus votos al principal candidato de la oposición, el nacionalista Porfirio “Pepe” Lobo, quien a partir de esa fecha se convirtió en el nuevo presidente electo de Honduras.

Pero la victoria nacionalista, que abarcó también la mayoría de los escaños parlamentarios y la de las corporaciones municipales en todo el país, se vio ligeramente empañada por el alto nivel de abstencionismo que sufrió el torneo electoral. De acuerdo a las cifras oficiales, el abstencionismo ascendió “apenas” a un 38 o 40%, sin embargo, el recuento extraoficial de las actas electorales y las encuestas a boca de urna realizadas por instituciones no oficiales situarían las cifras reales del abstencionismo entre 50 y 65%, según la fuente de cálculo. El incremento del volumen abstencionista se explica, fundamentalmente, por la renuencia de centenares de miles de liberales que prefirieron quedarse en sus casas antes que depositar sus votos a favor de los candidatos de su partido. Esa fue una manera de rechazar el colaboracionismo del candidato liberal, Elvin Santos, con los organizadores y ejecutores del golpe de Estado. Los liberales abstencionistas prefirieron la derrota electoral de su partido antes que el triunfo de los golpistas a través de Elvin Santos.

Los reiterados llamados que hizo el presidente Manuel Zelaya desde su refugio en la embajada de Brasil para que los liberales castigaran en las urnas a los colaboracionistas con el golpe de Estado, produjeron los resultados que el gobernante derrocado esperaba y daba por hechos.

De esta forma, los nacionalistas obtuvieron una contundente victoria sobre sus adversarios tradicionales, los liberales, y alcanzaron el 56,6% de los votos a favor de su candidato presidencial, Pepe Lobo. El principal perdedor, Elvin Santos, obtuvo el 38,1%, mientras que los partidos pequeños reunieron entre los tres el 5,5% de los votos totales.

Estos porcentajes, a nivel de diputados y alcaldías municipales, se traducen de la siguiente forma: el partido Nacional tendrá 71 de los 128 diputados que conforman el Congreso Nacional; el partido Liberal tendrá 45, la Democracia Cristiana 5, Unificación Democrática 4 y el partido de Innovación y Unidad 3. En cuanto a las Alcaldías, los nacionalistas controlarán 191 de las 298 que existen en todo el país; los liberales 104, la Democracia Cristiana 2 y una estará en manos de un alcalde independiente. O sea que los nacionalistas podrán gobernar con mucha holgura a partir del 27 de enero del 2010, por lo menos en lo que se refiere al Congreso Nacional y al universo municipal.

Una vez alcanzada su victoria, los nacionalistas deberán enfrentar el problema principal del país: la restauración del orden constitucional y el restablecimiento de las relaciones internacionales y la red de apoyo a nivel de la comunidad cooperante mundial. Una tarea casi imposible, sobre todo si se toma en cuenta que para cumplirla el presidente electo requiere de la buena disposición por parte del gobernante de facto para hacerse a un lado y permitir que el país retorne al orden institucional normal.

Un día después de las elecciones, el candidato ganador, Pepe Lobo, se reunió en una instalación militar con los altos jefes militares del país. En esa reunión los jefes militares le expresaron al nuevo presidente su oposición al retorno de Manuel Zelaya a la presidencia de la República, su apoyo a una amnistía política y su respaldo a la gestión de Roberto Micheletti al frente del gobierno de facto.

Pepe Lobo entendió el mensaje de los militares. El día 02 de diciembre, en la sesión del Congreso Nacional para decidir sobre el retorno de Zelaya a la presidencia, todos los diputados nacionalistas, en bloque, votaron en contra de ese retorno y ratificaron la ilegal destitución del presidente constitucional llevada a cabo el día del golpe de Estado. Junto a la mayoría de los diputados liberales, los legisladores golpistas votaron 111 contra 14 y, de esa forma, ratificaron el golpe del 28J. Fue una especie de segundo golpe de Estado en menos de seis meses.

De esa forma, la suerte del presidente derrocado quedó echada. El siguiente paso sería luchar para que pudiera salir de su refugio en la embajada de Brasil, viajar al extranjero y celebrar negociaciones políticas con Pepe Lobo en un país amigo. Fue así como se puso en marcha una iniciativa internacional, auspiciada por los gobiernos de Brasil y Argentina, para que el gobierno de México y el de la República Dominicana hicieran las gestiones necesarias a fin de lograr un salvoconducto a favor de Zelaya y su familia. La salida y el posterior viaje debían llevarse a cabo el día 09 de diciembre pero, a última hora, maniobras urdidas desde Casa Presidencial y ejecutadas por un muy cuestionado emisario y hombre de confianza de Micheletti, socio suyo en negocios diversos, dieron al traste con el plan de salida e impidieron el viaje de Manuel Zelaya hacia México, lugar desde donde viajaría al día siguiente a Santo Domingo para sostener ahí conversaciones políticas con Pepe Lobo.

Una vez fracasada la iniciativa de Brasil y Argentina, se puso en práctica otro plan, esta vez directamente auspiciado por el gobierno dominicano, apoyado por los Estados Unidos y gestionado a nivel local por el ex presidente nacionalista Ricardo Maduro. La idea era obtener el salvoconducto para que Zelaya pudiese viajar a Santo Domingo antes de las fiestas navideñas. Nuevamente la intransigencia y tozudez de Micheletti y su grupo echaron a perder el plan y cerraron los espacios posibles para una salida inteligente de la crisis. Los golpistas pusieron tres condiciones para otorgar el salvoconducto:

- a) Que el presidente derrocado solicitara expresamente el asilo político en otro país, que no fuera uno del área fronteriza en Centroamérica;

- b) Que el presidente Zelaya reconociera públicamente la legitimidad del proceso electoral del 29 de noviembre, y
- c) Que el presidente Zelaya renunciara públicamente a hacer nuevas denuncias contra el gobierno de facto a nivel internacional.

Esas condiciones, como era de esperar, fueron rechazadas por Zelaya y hasta ahí llegó, en ese momento, lo que se conoció como “*la iniciativa dominicana*”.

Las presiones norteamericanas, orientadas a facilitar la toma de posesión de Pepe Lobo el día 27 de enero del 2010, no han logrado tener éxito en doblegar la voluntad de Micheletti para que cumpla con los siguientes requisitos:

- a) Retiro voluntario del cargo de “*presidente de facto*” y abandono del poder;
- b) Conformación de un gobierno de unidad y reconciliación, en base al punto No 1 del Acuerdo de Tegucigalpa/San José, firmado el pasado 30 de octubre del 2009, y
- c) Conformación de la llamada Comisión de la Verdad, que ordena el Acuerdo de Tegucigalpa/San José.

Según el razonamiento de los diplomáticos norteamericanos, el cumplimiento de estas tres condiciones permitiría un clima político más favorable para que la comunidad internacional aceptase la elección de Pepe Lobo y apoyara la instalación de su nuevo gobierno. El único obstáculo real para que se encuentre una solución en base a estas condiciones es el propio gobernante de facto, Roberto Micheletti, quien se resiste a retirarse del poder e insiste en permanecer en el mismo hasta el día 27 de enero, fecha de la toma de posesión del nuevo presidente electo.

Las presiones norteamericanas, según lo que anunció el embajador Hugo Llorens a mediados del mes durante una visita al presidente Zelaya en la embajada de Brasil, irán en aumento a medida que se acerca la fecha para que comience el gobierno de Pepe Lobo. Llorens habló de una “*presión extraordinaria*” en la primera mitad del mes de enero del nuevo año para obligar a Micheletti a abandonar el poder (la sorpresiva llegada de Craig Kelly, Subsecretario adjunto para América Latina, en la primera semana de enero/2010, podría ser una señal de lo que anunció Llorens en su plática privada con Zelaya).

Mientras los diferentes actores políticos, nacionales y extranjeros, se afanan por encontrar una salida negociada a la crisis, el partido ganador de las elecciones, el Nacional, se debate ya en una profunda discusión interna en torno al reparto de las principales cuotas de poder en la estructura del nuevo gobierno. Es la clásica lucha por el reparto del botín estatal, característica de la visión patrimonial del Estado. Los ganadores sienten que han obtenido el premio mayor y que, por lo tanto, tienen el derecho a exigir su cuota correspondiente en el reparto de los beneficios y canonjías que otorga el poder político sobre el Estado.

Por el momento, la lucha interpartidaria gira en torno a la presidencia del Congreso Nacional y demás cargos importantes en la Junta Directiva de ese Poder del Estado. Los aspirantes (cuatro en total) representan a diferentes facciones del partido y responden a intereses diversos entre los grupos económicos más influyentes en la vieja clase política conservadora. Pepe Lobo está en una situación difícil para inclinar la balanza a favor de uno de los cuatro. Dos de ellos -Juan Orlando Hernández y Celín Discua- son hombres cercanos de su entorno político y gozan de su confianza personal. Los otros dos -Rodolfo Irías y Antonio Rivera- responden a los intereses de la llamada "*vieja guardia*" del partido, muy ligados a los sectores del ex presidente Rafael Callejas y sus círculos de colaboradores más cuestionados.

Lobo ha prometido conformar un gobierno de unidad e integración nacional, lo que quiere decir que se propone invitar a políticos de otros partidos y sectores independientes para que le ayuden a gobernar. Esta intención, políticamente justa y legalmente constitucional, ha despertado resistencia en las filas tradicionales de su propio partido y ya le está creando dificultades iniciales.

Pero Lobo parece decidido a seguir adelante y cumplir sus promesas de campaña, en particular la que tiene que ver con el famoso Plan de Nación, el que deberá estar listo para el día de la toma de posesión. Una comisión especial, coordinada por el empresario democristiano y negociador profesional Arturo Corrales, está preparando dicho Plan, utilizando los documentos previos elaborados en gobiernos anteriores, especialmente en el de Manuel Zelaya. El "*nuevo*" Plan de Pepe Lobo tendrá cuatro ejes u objetivos clave:

- a) Una Honduras sin pobreza, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social.
- b) Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia.

- c) Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental, y
- d) Un Estado moderno, eficiente y competitivo.

Cada uno de estos ejes/objetivo tiene sus propias metas -veinte en total- y están concebidos para ser alcanzados en un plazo de 28 años, a través de planes concretos de corto plazo diseñados cada cuatro años.

Este Plan de Nación será consensuado con diferentes sectores de la sociedad y convertido en ley por el Congreso Nacional antes del 27 de enero del 2010.

No es casual, pues, que Pepe Lobo haya iniciado desde ya su propio proceso de diálogo nacional, cuya primera reunión se llevó a cabo el 03 de diciembre, pocos días después de su triunfo electoral. En esa reunión, Lobo sentó a su lado a dos connotados partidarios y líderes espirituales del grupo golpista: el obispo católico Juan José Pineda y el pastor evangélico Osvaldo Canales, lo que fue interpretado por los partidarios de Zelaya y miembros de la Resistencia contra el golpe de Estado, como un mal mensaje inicial.

No es casual que, en la segunda reunión celebrada el día 14, los representantes de la Resistencia se negaron a aceptar la invitación de Lobo para participar en el proceso de diálogo iniciado el día 03.

Mientras llega el momento de la toma de posesión, los ministros y altos funcionarios del gobierno de facto están haciendo de las suyas con los dineros del tesoro público: contratos irregulares para obras millonarias (construcción de viviendas populares, perforación de pozos de agua, construcción de carreteras, etc.); modificación de la fórmula para calcular el precio de los combustibles, de tal manera de favorecer a las grandes empresas importadoras y distribuidoras de combustible; liberación de impuestos para favorecer a grandes empresarios locales; contratación de personal innecesario en las oficinas públicas; aumentos exagerados de sueldos, etc.

Asustados ante la preocupante perspectiva de recibir un gobierno saqueado y en bancarrota, los colaboradores de Pepe Lobo han denunciado las maniobras irregulares y corruptas de los funcionarios del gobierno de facto.



**AÑO**  
**2010**

---

# ENERO 2010

---

## La situación política

**E**n este mes comienza algo más que un nuevo año. Da inicio el gobierno que encabeza Porfirio Lobo Sosa, el candidato nacionalista que resultó vencedor indiscutible en las pasadas elecciones del 29 de noviembre de 2009. La nueva administración de Lobo Sosa es la tercera que dirige el partido Nacional (PN) a lo largo de los 30 años de la transición política hacia la democracia, iniciada en 1980.

Es un comienzo difícil, signado por el profundo trauma que generó en la sociedad hondureña el golpe de Estado llevado a cabo el 28 de junio del año pasado en contra del gobierno constitucional que encabezaba Manuel Zelaya, y condicionado por la difícil situación en que se encuentra el Estado hondureño, especialmente en lo que concierne a las finanzas públicas y al relativo aislamiento político en la escena internacional.

El nuevo gobierno encuentra un país en virtual bancarrota, luego de siete meses de gobierno interino o de facto, producto del golpe de Estado del 28J. Las finanzas públicas están casi agotadas (el nuevo ministro de Hacienda, William Chong, declaró que apenas encontró mil millones de lempiras, unos 53 millones de dólares, en las arcas nacionales), la deuda interna ha llegado a límites inmanejables (23 mil millones de lempiras, unos 1,211 millones de dólares), mientras la de carácter externo alcanzó ya los 3,200 millones de dólares. Al momento de producirse el golpe de Estado, la deuda interna del país ascendía a 16 mil millones en moneda nacional, es decir 842 millones de dólares, pero el gobierno golpista endeudó internamente al Estado en siete mil millones de lempiras más, o sea en 368 millones de dólares adicionales, a razón de 62 millones de dólares por mes, un poco más de dos millones de dólares diarios, entre julio y diciembre de 2009.

El Estado debe cumplir con varios compromisos casi ineludibles, entre los que destaca el pago de millonarias sumas a los maestros, un gremio potencialmente explosivo y con un gran poder de organización y movilización social. No es casual que el presidente Lobo, en un acto de mucha audacia

---

política, haya decidido nombrar al frente del Ministerio de Educación a Alejandro Ventura, un veterano dirigente magisterial, con larga trayectoria de negociador flexible en las organizaciones de maestros.

Ventura proviene de las filas del partido Nacional, condición que ha contribuido a calmar las aguas al interior de las filas nacionalistas, especialmente alteradas por la decisión de Lobo de formar un gabinete de unidad y reconciliación nacional, es decir un gobierno de integración con los diferentes sectores sociales y partidos políticos, tal como lo ordena el artículo 5 de la Constitución de la República.

Lobo, en cumplimiento de su promesa de campaña y en atención al mandato constitucional y al espíritu conciliador reflejado en el Acuerdo Guaymuras o Pacto Tegucigalpa-San José de octubre de 2009, ha conformado un gabinete con representantes de los partidos políticos perdedores en las elecciones de 2009, generando con ello el disgusto de la vieja guardia del PN que, como es tradición, pretendía quedarse con todo el botín del Estado.

Esta circunstancia explica las dificultades que ha tenido el nuevo presidente para integrar su equipo de colaboradores. Todavía quedan pendientes algunos nombramientos importantes (Defensa, Agricultura y Ganadería, Recursos Naturales y Ambiente, etc.) en el gabinete ministerial, además de los cargos principales en algunas de las instituciones descentralizadas del Estado. Los nombramientos realizados hasta la fecha sirven para ilustrar la compleja red de influencias políticas y económicas que se mueven al interior del partido de gobierno y en el entorno personal del nuevo mandatario.

La designación de María Elena Mondragón en el Banco Central, de William Chong en el Ministerio de Finanzas y de Osvaldo Guillén en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, refleja la fuerte influencia del ex presidente Ricardo Maduro en el futuro control de las finanzas públicas y las correspondientes políticas fiscales del gobierno lobista. De igual manera, Maduro ha logrado colocar a sus peones en otras áreas clave del gobierno, por ejemplo en el Ministerio de Salud (Arturo Bendaña), además de contar con el apoyo de la Designada Presidencial María Antonieta Guillén de Bográn, una persona excepcionalmente influyente y decisiva en el engranaje más cercano al presidente Lobo. La señora Guillén era la Directora de la Fundación Ricardo Ernesto Maduro (FEREMA), una organización social sin fines de lucro creada por el ex presidente en honor de su hijo asesinado en un fallido intento de secuestro hace algunos años. La Fundación FEREMA se dedica a promover el cambio y la modernización en el sistema educativo de Honduras.

Pero Pepe Lobo, aunque recibe intensas presiones de la vieja cúpula dirigente del PN, no se rinde fácilmente y ha logrado colocar a su personal de confianza en los puestos clave del Estado. En primer lugar, logró convertir

en presidente del Poder Legislativo a su colaborador más incondicional, Juan Orlando Hernández, quien a partir del 25 de enero funge como presidente del Congreso Nacional. Al mismo tiempo, colocó en Gobernación y Justicia a Áfrico Madrid, un joven abogado de padre hondureño y madre norteamericana, que se ha mantenido fiel a Lobo durante toda la campaña electoral. En Seguridad cuenta con la lealtad de Oscar Álvarez que, aunque tiene sus propias aspiraciones políticas, seguramente se mantendrá fiel a Lobo al menos durante los primeros dos años del gobierno. En Industria y Comercio colocó a un viejo amigo y seguidor, el ex demócrata cristiano y ex dirigente sindical Oscar Escalante. Los Designados presidenciales son absolutamente leales al presidente y seguramente tendrán más poder del acostumbrado. En el caso particular de la señora Guillén, ella desempeñará también el cargo de ministra de la Presidencia, en donde gozará de una gran influencia y control sobre el gabinete ministerial y el conjunto general de la estructura gubernamental.

Otros Ministerios como Relaciones Exteriores o el de Obras Públicas y Transporte (SOPTRAVI) han sido confiados a dirigentes políticos que tienen sus propias ambiciones presidenciales y que no han sido miembros cercanos del equipo de más confianza en el entorno de Lobo.

Mario Canahuati, el nuevo Canciller, tiene su agenda propia y responde a los intereses de los grupos económicos de origen árabe asentados en el norte del país (San Pedro Sula). Su esposa, colombiana, sirve de vínculo estrecho con empresarios y políticos de Colombia. Sus principales inversiones (Juan Canahuati y *cía.*) están en la industria de la maquila.

Miguel Pastor, ahora a cargo de SOPTRAVI, fue alcalde de Tegucigalpa en el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) y dejó una lamentable herencia de corrupción y descalabro en el gobierno municipal. Ha sido y sigue siendo aspirante presidencial, para lo cual cuenta con el respaldo total del magnate de los medios de comunicación Rafael Ferrari, suegro de Sebastián, el hermano gemelo de Miguel.

Otros Ministerios como el de Trabajo, el de Cultura o el Instituto Nacional Agrario (INA) han sido repartidos entre los tres candidatos perdedores de los partidos políticos pequeños, los que, juntos, no sacaron ni siquiera el 6% de los votos. Trabajo le fue entregado a Felícito Ávila, ex candidato presidencial de la Democracia Cristiana; el Ministerio de Cultura podría ser asignado a Bernardo Martínez, ex candidato presidencial del partido de Innovación y Unidad, si sus compañeros de partido se lo permiten, y el INA quedó en manos de César Ham, el ex candidato de la izquierdista Unificación Democrática (UD).

---

De esta forma, el presidente Lobo ha repartido los cargos, en un declarado intento por conformar un gobierno de integración, en aras de lograr la reconciliación y la paz en el territorio nacional.

Podría correr el riesgo de fracturar la acción gubernamental al crear pequeños islotes de poder, que acaban convirtiendo al aparato estatal en una especie de archipiélago de influencias, intereses y ambiciones. Eso fue lo que le sucedió al ex presidente Manuel Zelaya en los inicios de su gobierno en el año 2006: por tratar de unir al partido gobernante, satisfaciendo los apetitos de sus diferentes facciones, se acaba dividiendo al gobierno y debilitando su acción conjunta.

Hay un nuevo Ministerio que está llamado a ser clave y fundamental en el esquema político del presidente Lobo, el de Planificación Económica. Será el encargado de velar por el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan de Nación, un viejo sueño y promesa electoral de Porfirio Lobo, quien firmó la ley que le da vigencia en el mismo día de su toma de posesión.

Este Ministerio, que estará estrechamente vinculado a la Presidencia de la república, deberá tener una influencia muy grande en el diseño y aprobación del Presupuesto anual de la Nación, lo que sin duda será motivo de roces y controversias con los grupos económicos (Maduro, Callejas, banqueros, empresarios, etc.) más influyentes del país. El encargado de este Ministerio todavía no ha sido anunciado, pero se sabe que Arturo Corrales, el empresario y jefe del partido demócrata cristiano, es uno de los candidatos más fuertes para ocupar tan importante puesto.

Corrales ha sido el encargado de coordinar la elaboración final del Plan de Nación y hacer el cabildeo necesario para generar consenso en torno al mismo. Cuenta para ello con el respaldo del influyente Consejo Económico de la Empresa Privada (COHEP) y el apoyo político del ex presidente liberal Carlos Flores. Sin embargo, así como cuenta con importantes influencias también enfrenta la oposición de varios líderes del PN que no quieren ceder un cargo tan decisivo a una persona ajena a las filas nacionalistas.

Por otro lado, en el círculo de los aspirantes presidenciales que no comulgan plenamente con las iniciativas del presidente Lobo, destaca la figura de Ricardo Álvarez, alcalde reelecto de la ciudad capital y hombre estrechamente vinculado con el grupo económico FICOHSA (Familia Atala) y políticamente ligado al ex presidente Ricardo Maduro. Álvarez no esconde sus pretensiones de convertirse en el próximo candidato presidencial del PN, para lo cual ha empezado a trabajar desde ya, organizando sus cuadros y creando estructuras propias en todo el país. Sus prematuras aspiraciones lo llevarán a confrontar muy pronto con otros aspirantes menos notorios pero igualmente interesados como Miguel Pastor, Mario Canahuati y Oscar Álva-

rez o, eventualmente, Juan Orlando Hernández, el influyente nuevo presidente del Congreso Nacional.

A propósito del Congreso Nacional, ahí también se llevó a cabo la integración nacional al incluir en la Junta Directiva a representantes del partido Liberal, de la Democracia Cristiana y, por primera vez, de Unificación Democrática también. De esta forma, Hernández realiza, a nivel del Poder Legislativo, el mismo esfuerzo integracionista que lleva a cabo el presidente Lobo a nivel del Poder Ejecutivo. Dos esfuerzos conjuntos, enmarcados en el llamado *“humanismo cristiano”*, plataforma doctrinaria que tanto Lobo como Hernández se han esforzado por imponer e institucionalizar al interior del PN.

Así, en este contexto político tan complicado y controversial, da inicio el gobierno constitucional de Porfirio Lobo Sosa, un acaudalado agricultor de la zona centro-oriental del país (departamento de Olancho), conocido por sus condiciones de benefactor de estudiantes pobres, simpatizante izquierdista en sus años de juventud, fundador del hoy reconocido Comité para la defensa de los derechos humanos (CODEH) y responsable principal de la difícil tarea de reinstalar el orden constitucional y reinsertar a Honduras en el concierto mundial de naciones.

En medio de la relativa desconfianza de sus compañeros de la vieja guardia del PN, ante el recelo manifiesto de los grupos económicos de poder y frente al malestar evidente de los sectores golpistas más recalcitrantes, Porfirio *“Pepe”* Lobo deberá dirigir un gobierno contradictorio en medio de grandes desafíos, problemas enormes y una oposición agrupada en la llamada Resistencia Popular, cada vez más impaciente y demandante. Ojalá que tenga éxito.

# FEBRERO

## 2010

---

### La situación política

**E**l gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo acaba de cumplir su primer mes de funcionamiento. Treinta días difíciles, en medio de una gravísima crisis fiscal, preocupante descontento en las filas de sus propios partidarios, desconfianza creciente de la ultraderecha criolla, junto a un evidente escepticismo y cautela excesiva de la izquierda local. Pero no sólo eso. El cuadro se complica más por el reavivamiento de viejos conflictos agrarios, laborales y gremiales, auge de la delincuencia, en especial los secuestros, además de una lenta recuperación de la necesaria confianza de la comunidad internacional y, sobre todo, de los organismos y agencias financieras y de cooperación externa.

La tiene difícil don Pepe Lobo. Y para hacerle frente a esta complicada situación, ha logrado ya -por fin- conformar plenamente su gabinete ministerial, al nombrar en sus cargos a los ministros que todavía faltaban:

- ***Plan de Nación y Cooperación Externa:*** Arturo Corrales Álvarez, el conocido empresario y jefe, casi propietario, de la minúscula Democracia Cristiana. Hombre de confianza, al menos por el momento, del presidente Lobo y, a la vez, confidente cercano del ex presidente Carlos Flores. Corrales es de profesión ingeniero.
- ***Agricultura y Ganadería:*** Jacobo Regalado, también ingeniero, pero en agronomía, hijo de un ex jefe de las Fuerzas Armadas (General retirado Humberto Regalado) y de una conocida empresaria de origen judío de la zona norte. Fue director de Hondutel en la primera etapa del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2007), de donde fue separado por sospechas de mal manejo en la administración. Fue propuesto para el cargo por Elvin Santos, como parte del reparto de posiciones en la cuota asignada por el presidente Lobo al partido Liberal (PL).

- **Recursos Naturales y Medio Ambiente:** Rigoberto Cuéllar, abogado, ex Director de Fiscales en el Ministerio Público y ex consultor de Foprیده, asociación de ONG financiada por la Agencia para el Desarrollo Internacional, adscrita al gobierno de los Estados Unidos. Fue propuesto para el cargo por Elvin Santos, en premio a su defensa jurídica de la tesis de la “sucesión presidencial”, negando el golpe de Estado del 28J.
- **Turismo:** Nelly Jerez, odontóloga, dirigente intermedia del PN y diputada al Congreso Nacional. Muy cuestionada por su manifiesto desconocimiento del tema que le corresponde manejar, el turismo, pero recomendada especial del Grupo Ficohsa (familia Atala), que busca proteger sus intereses empresariales en el gran proyecto turístico de la Bahía de Tela.
- **Defensa:** Marlon Pascua, hombre estrechamente ligado al presidente Lobo, ex diputado y cuadro político en la dirección del partido Nacional (PN). El Viceministro, en cambio, fue nombrado a propuesta del PL (Elvin Santos).

Con el nombramiento de estos Secretarios de Estado ha quedado completo el gabinete ministerial de la presente administración nacionalista. Ya sólo falta designar, a nivel de otras entidades menores, al nuevo director de la compañía telefónica, una de las principales instituciones descentralizadas del Estado hondureño.

Por decisión de Lobo, el Consejo de ministros se reunirá una vez por semana, los días martes, y sus sesiones serán televisadas al público por el canal 8, que todavía sigue funcionando como canal oficial.

### La difícil transición militar

Una vez que ha terminado la complicada tarea de formar el equipo ministerial que habrá de acompañarle en la administración del país, el presidente Lobo decidió abordar el incómodo problema del cambio, es decir las sustituciones y destituciones, en la cúpula militar. Presionado discretamente por algunos países amigos y aconsejado prudentemente por colegas presidentes vecinos, Lobo decidió coger al toro por los cuernos y separar al General golpista Romeo Vásquez Velásquez del cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) dentro de la institución armada. Vásquez debía permanecer en el puesto por lo menos hasta diciembre de este año, cuando cumpliría los tres años de su segundo periodo al frente del Estado Mayor. Pero Lobo decidió cesarlo y, en su lugar, nombró al General Carlos Cuéllar, quien se desempeñaba como Inspector General de las General de

---

las FFAA, un cargo relevante pero de menor perfil en la cúpula castrense. Por eso Cuéllar no figuró como protagonista destacado en el entramado del golpe de Estado del 28J, circunstancia que, por lo visto, le resultó muy favorable para ser escogido como el sucesor del principal militar golpista.

Pero Cuéllar ha sido nombrado sólo para cumplir el periodo que le faltaba a Vásquez en el ejercicio del cargo, es decir hasta el 11 de diciembre del presente año, fecha en que, además, cumple sus 35 años legales de servicio en el ejército y, por lo tanto, debe pasar a condición de retiro. Luego habrá que nombrar un nuevo jefe del EMC. Mientras tanto, Lobo se apresta a nombrar, en consulta con Cuéllar y el nuevo ministro de Defensa, Pascua, a los miembros restantes de la Junta de Comandantes. Por el momento, se descarta la posibilidad de que sean ratificados algunos o todos los generales golpistas del 28J (Miguel Ángel García Padget, Javier Prince y Juan Pablo Rodríguez). De igual manera hay dudas sobre el destino final del General Vásquez, aunque circulan fuertes rumores de que recibirá, a manera de premio de consolación, la Dirección de Hondutel. Si así fuera, el presidente Lobo estaría enviando un mensaje contradictorio a la comunidad internacional, al destituir al General golpista y, al mismo tiempo, premiarlo con un apetitoso cargo en su equipo gubernamental. Si esto sucede, sería una prueba más de la debilidad intrínseca del gobierno lobista y una evidencia adicional de las múltiples y grandes presiones políticas a que está constantemente sometido el nuevo presidente.

### En el centro de las presiones

**L**as presiones, como se sabe, son varias y de diversa procedencia y magnitud. Las hay desde el sector más duro de la cúpula militar y desde la vieja guardia del PN, teóricamente convertido ya en el nuevo partido gobernante; desde las cámaras empresariales, desde el sector de los influyentes banqueros, los ya conocidos “*grupos económicos*” o “*poderes fácticos*”, que tantos problemas le causaron al ex presidente Manuel Zelaya; desde los mismos medios de comunicación que defienden los intereses de esos “*grupos fácticos*”, desde la ultraderecha agrupada en el grupo de los famosos “*camisas blancas*” o “*perfumados*”, que organizaron la defensa “*civil*” del golpe de Estado y, por supuesto, también desde la llamada Resistencia Popular, en donde proliferan los dirigentes radicales y radicalizados que todavía insisten en no reconocer la legitimidad electoral del gobierno de Pepe Lobo y le siguen considerando como expresión y “*continuidad del golpe*” del 28J. No se debe olvidar, tampoco, la discreta pero eficiente presión de la comunidad internacional, especialmente de algunos países amigos que demandan más y más claras señales de limpieza y desmarcación con respecto a los residuos del golpe de Estado.

Como podemos ver, la situación de Pepe Lobo es difícil y embarazosa. Debe moverse con extrema cautela y prudencia, lo que explica a veces su tendencia hacia la indefinición y la ambigüedad útil. Por el momento, cuenta con la lealtad segura de, al menos, unos cuantos hombres y mujeres clave dentro del gabinete: Arturo Corrales, Óscar Escalante, Marlon Pascua, Óscar Álvarez, Áfrico Madrid, María Antonieta Guillén más los otros dos Designados presidenciales, Hilda Hernández, Marlon Tabora (Coordinador del staff presidencial), Reynaldo Sánchez (Secretario privado) y varios Viceministros y Directores generales que el propio presidente ha escogido para ocupar esos cargos.

El descontento interno en el PN cada vez se hace más evidente. Discretamente estimulado por algunos dirigentes de la vieja guardia partidaria y, en especial, por el actual presidente del partido y alcalde capitalino, Ricardo Álvarez, ese descontento ya se ha hecho manifiesto a través de reuniones “conspirativas” y “visitas”, casi invasiones, tan impertinentes como masivas de los activistas políticos a las oficinas de varios de los nuevos ministros. Los activistas reclaman, cada vez con mayor fuerza y descaro, el despido de los empleados públicos liberales para poder ellos ocupar sus puestos. Es la vieja historia del “estado botín” y la cultura política del reparto entre los ganadores del torneo electoral.

Los ministros, especialmente los nacionalistas, ya se han hecho eco de tales demandas. En varios Ministerios han comenzado los despidos masivos, en particular de aquellos empleados que no gozan de un acuerdo de nombramiento sino que trabajan en base a contratos temporales. Los propios ministros que no pertenecen al partido gobernante han podido comprobar que, aunque fueron nombrados a la cabeza de la institución, su poder de contratación laboral es limitado, ya que esa función la ejercen directamente los jefes de personal o los directores generales, todos ellos pertenecientes al partido de gobierno.

### **Entre la corrupción y la represión paralela**

**A** estas dificultades, que pueden ser consideradas como “normales” y casi inevitables, Pepe Lobo debe sumar ahora el impacto mediático y financiero de los abundantes escándalos de corrupción, surgidos a raíz de numerosas decisiones apresuradas e irregulares que fueron adoptadas en los meses que duró el gobierno de facto que presidía Roberto Micheletti. Se trata, en verdad, de varias contrataciones indebidas, ampliaciones sospechosas en los montos de los contratos, venta de influencias, emisión fraudulenta de cheques, pagos ilegales, gastos millonarios sin respaldo documental ni financiero, robo descarado de bienes estatales, falsificación de documentos, en fin... Ahora ha quedado plenamente al descubier-

---

to la verdadera naturaleza saqueadora y arbitraria del régimen golpista. Pareciera que los golpistas llevaron a cabo el derrocamiento del ex presidente Zelaya con el único fin de apoderarse de la institucionalidad del Estado y someterla a un masivo y despiadado saqueo. Más que usurpadores, los golpistas aparecen ahora como vulgares saqueadores de los fondos y bienes públicos.

Pepe Lobo, que ha convencido a su Consejo de ministros para declarar este año como el *“Año de la transparencia”*, tiene ahora ante sí el inmenso desafío de promover el castigo de los corruptos y ladrones que vaciaron las arcas del Estado y dejaron las finanzas sumidas en una de las más graves y profundas crisis de la historia reciente de Honduras.

Pero los escándalos de corrupción no son las únicas secuelas visibles del golpe de Estado del 28J. También están las constantes y graves violaciones a los derechos humanos, llevadas a cabo por unidades especiales de los cuerpos represivos del Estado, especialmente de los servicios de inteligencia militar y de la policía. Cada vez aparecen con más frecuencia personas ejecutadas por estas unidades semiclandestinas, verdaderas estructuras paralelas que operan con el mismo estilo y furor con que lo hacían sus antecesores en los inicios de la década de los años ochenta, cuando Centroamérica estaba envuelta en el fragor de las guerras civiles y la convulsión política y militar.

Pareciera que el golpe del 28J reanimó esos servicios especiales de los cuerpos represivos y dio nueva vida a los aparatos de la represión clandestina, conformando una red muy parecida a las que utiliza el terrorismo de Estado para reprimir a sus críticos y opositores. Se mueven con sospechosa impunidad, disponen de cárceles clandestinas, vehículos sin placas de identificación, portan armas de uso oficial, secuestran, torturan y, eventualmente, asesinan a sus víctimas. Operan, en síntesis, como prototipos de los tristemente célebres escuadrones de la muerte, de tan infausta recordación en la historia reciente de Centroamérica.

Pepe Lobo, que es un convencido defensor de los derechos humanos, como ya lo ha demostrado con su conducta pública en los años ochenta, y que, además, se ha comprometido ante la comunidad internacional a defender y salvaguardar esos derechos, tal como quedó consignado en el texto del llamado Acuerdo de Santo Domingo, firmado en enero de este año con el presidente dominicano Leonel Fernández, tiene ante sí un nuevo y peligroso desafío: dismantelar de una vez por todas esas unidades represivas que se anidan en los entresijos de los cuarteles policiales y en los servicios de inteligencia militar.

Los organismos de derechos humanos llevan cuentas diarias y minuciosas de los actos de represión más notorios y alarmantes. Al margen de la credibilidad precisa que tienen esos datos y, sin descartar que algunos sufren de cierta “*inflación calculada*”, no se debe descartar el hecho fundamental: están operando unidades especiales dedicadas a ejercer una represión que, al igual que treinta años atrás, tiene, al menos, las siguientes características:

- a) es **preventiva**, es decir está orientada a “*prevenir para evitar*” el desarrollo de movimientos políticos contestatarios de carácter “*popular*”, como los que se aglutinan en la llamada Resistencia.
- b) es **selectiva**, o sea que va dirigida hacia blancos especialmente seleccionados: los dirigentes intermedios de la Resistencia y aquellos jóvenes, hombres y mujeres, que destacan por su activismo o dan señales claras de ejercer un cierto liderazgo.
- c) es **clandestina** y, por lo tanto, **ilegal**. Se ejerce al margen de los órganos jurisdiccionales del Estado, utilizando métodos terroristas, cárceles clandestinas y logística especial.

Esta práctica represiva la llevan a cabo militares y policías, tanto activos como en retiro, con el auxilio de agentes privados de seguridad y vigilancia, al servicio de reconocidos empresarios y comerciantes del país. Las medidas de “*represión paralela*” se incrementan en la medida que se amplía y radicaliza el círculo político de las fuerzas antigolpistas, la mayoría de las cuales está afiliada en las estructuras del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que cuenta con redes organizadas en todo el territorio nacional y cuya capacidad de movilización ha dado ya sobradas muestras de ser amplia y efectiva.

### Otra vez la conflictividad social

La conflictividad social “*tradicional*” también ha resurgido con más fuerza y presencia pública: Los maestros, ese gremio tan organizado y beligerante, han vuelto a las protestas callejeras para rechazar los esfuerzos del partido de gobierno por copar con sus militantes las estructuras intermedias y estratégicas -las Direcciones departamentales- del sistema educativo nacional. Sus reclamos salariales, siempre presentes, siguen siendo un eje movilizador del magisterio. Los campesinos, por su parte, han vuelto por sus fueros, especialmente en el peligroso y convulso departamento de Colón, en donde mantienen invadidas miles de hectáreas sembradas de palma africana y que reclaman como suyas tres conocidos empresarios del rubro agroexportador: Miguel “*Tío Mike*” Facussé, el nicaragüense René Morales y el terrateniente local Miguel Canales. Los campesinos, hijos de

los antiguos propietarios de esas tierras, los ya famosos cooperativistas de la reforma agraria de los años setentas, reclaman como propias las nuevas plantaciones, las invaden y las defienden, a veces, con las armas en la mano. Esta circunstancia -la autodefensa armada campesina- ha dado pie para que el diario La Prensa, un reconocido medio defensor del golpe de Estado, divulgue una historia un tanto fantástica sobre el surgimiento de células guerrilleras en la zona del Aguán, con el apoyo de instructores militares provenientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La Prensa fundamenta su *"historia"* en un supuesto informe de inteligencia militar que los propios voceros castrenses se han apresurado a desmentir. Pero, de tanto insistir en ello, los guerrilleros fantasmas podrían llegar a convertirse en combatientes verdaderos. Todo dependerá de la forma en que evolucione este peligroso conflicto social.

Estos son, pues, algunos de los grandes y pequeños desafíos a los que deberá hacer frente el nuevo presidente de Honduras, don Porfirio *"Pepe"* Lobo. De su éxito o su fracaso dependerá, en gran medida, el futuro de la democracia y del Estado de derecho en Honduras.

# MARZO 2010

---

## La situación política

Según la más reciente encuesta realizada por la empresa consultora Cid Gallup (17-23 de febrero de 2010, 1,204 encuestados, todo el país, menos Islas de la Bahía y Gracias a Dios, 95% nivel de confianza), por encargo de la Organización de Estados Americanos (OEA), el presidente Porfirio “Pepe” Lobo cuenta con un alto porcentaje de *“opinión favorable”* (83%) entre la población hondureña, seguido en segundo lugar por el futbolista Carlos Pavón (80%) y en tercer lugar por el actual ministro de Seguridad, Oscar Álvarez (77%). Sin embargo, a contrapelo de la elevada percepción positiva sobre la personalidad del presidente y su desempeño en los primeros dos meses de su nueva Administración, las instituciones en general están sumidas en una profunda crisis de credibilidad. Ninguna de ellas, ni las iglesias, Católica y Evangélicas, ni las Fuerzas Armadas, ni los medios de comunicación, ni los partidos políticos, los sindicatos, la policía, la empresa privada, el Congreso Nacional o la Corte Suprema de Justicia, alcanza niveles satisfactorios de credibilidad. Todo indica que la mayor desconfianza hacia la institucionalidad del país es una de las consecuencias inevitables del golpe de Estado del 28 de junio del año pasado (28J).

Así, en esta situación un tanto paradójica, en la que el presidente goza de aceptación y confianza mientras su entorno institucional se debate en una crisis de credibilidad, el gobierno nacionalista de Pepe Lobo intenta superar la grave crisis política y financiera que ha recibido en herencia directa de manos del régimen de facto que presidió Roberto Micheletti (julio 2009–enero 2010).

El restablecimiento del equilibrio financiero en las finanzas públicas y el relanzamiento de las actividades productivas en la economía nacional, aparecen como dos grandes retos que debe enfrentar la Administración lobista, antes de poder poner en práctica los programas y proyectos destinados a cumplir sus principales promesas de campaña.

---

Para hacer frente al elevado déficit financiero que padece el gobierno (7% del Producto Interno Bruto; Zelaya lo había mantenido en un 3% del PIB), Pepe Lobo no ha vacilado en aprobar el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que contiene importantes reformas fiscales y tributarias, mediante cuya aplicación los lobistas esperan obtener unos 7,616 millones de lempiras (unos 400 millones de dólares) adicionales. Luego de algunos ajustes para suavizar el impacto de los nuevos impuestos, los diputados del Congreso Nacional aprobaron en la noche del 29 de marzo el ya denominado a nivel popular *“paquetazo fiscal”* de Pepe Lobo.

O sea que el gobierno nacionalista inaugura su Administración con la aprobación de impuestos que, como siempre sucede, son impopulares y rechazados por la mayoría de la población. Un mal comienzo.

El rechazo al nuevo programa fiscal proviene de los más diversos sectores sociales y económicos: desde los sindicatos, las organizaciones campesinas, los grupos de la llamada Resistencia Popular y los gremios magisteriales, hasta las cámaras empresariales y los más diversos grupos y hombres de negocios del país. El rechazo ha sido casi unánime y la aceptación muy frágil y dispersa.

Pero el gobierno no tiene muchas alternativas para recuperar el equilibrio de sus finanzas, sobre todo si se toma en cuenta que tan sólo en los últimos cuatro años, el Estado ha dejado de percibir 64,000 millones de lempiras (unos 3,368 millones de dólares) por culpa de las amplias y variadas exoneraciones que existen en el sistema tributario nacional, de acuerdo a datos proporcionados por la propia Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

La única forma expedita que tiene el gobierno para agenciarse nuevos recursos financieros a nivel interno es la imposición de nuevos impuestos y la emisión de bonos para obtener crédito a nivel local, a pesar de que la deuda pública interna ha alcanzado ya niveles inmanejables (unos 23,000 millones de lempiras, es decir aproximadamente 1,210 millones de dólares). La aprobación del nuevo programa tributario y fiscal ha recibido el discreto respaldo de la más reciente Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que hace pocos días visitó el país. O sea que, el gobierno se asegura nuevos ingresos y, al mismo tiempo, satisface las demandas del FMI, con la inocultable esperanza de abrir plenamente las puertas -y sobre todo las ventanillas de crédito- de los organismos financieros internacionales.

Todavía está por verse cuán alto será el precio político que deberá pagar el gobierno en materia de gobernabilidad política y social por haber aprobado el impopular *“paquetazo tributario”*. Aunque los problemas fiscales y financieros en general son clave y fundamentales, no son los únicos desafíos

que el gobierno lobista ha debido enfrentar en el segundo mes de su Administración.

Las violaciones a los derechos humanos, que en este mes han alcanzado un protagonismo inesperado por la muerte violenta de cinco periodistas de diversas tendencias y predilecciones políticas, se han convertido ya en uno de los principales dolores de cabeza para el nuevo presidente, un hombre que, desde su juventud, ha estado vinculado seriamente en la defensa y promoción de tales derechos. La situación se agrava por el evidente aislamiento social en que se encuentra el Comisionado de los derechos humanos, Ramón Custodio, luego de haber afiliado a esa estratégica institución en las filas de los que apoyaron y respaldaron activamente al golpe de Estado y al gobierno de facto de Micheletti.

La situación de los derechos humanos aparece hoy como el talón de Aquiles del gobierno lobista en sus esfuerzos por obtener el reconocimiento y respaldo de la comunidad internacional. Mientras persista una situación tan lamentable y peligrosa, los esfuerzos de Lobo por abrir los espacios exteriores seguirán obteniendo resultados muy pobres y cuestionables. Quizás por eso, el presidente Lobo tomó la decisión de nombrar un Comisionado Presidencial para los derechos humanos, ante el vergonzoso descrédito en que Custodio ha sumido al Comisionado Nacional y ante las crecientes demandas y presiones de países amigos y aliados importantes.

Si alguna duda cabía al respecto, la publicación del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, junto a las constantes denuncias y protestas de varios países europeos (Suecia, Francia, España, Alemania, etc.) y el informe de Navy Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, han sido suficientes para convencer a Lobo sobre la necesidad de articular su propia política en materia de derechos humanos, al margen de la sospechosa compañía de Custodio y su contaminación "golpista".

El recién nombrado en el importante cargo, el señor Miguel Bonilla, es un antiguo funcionario estatal en el área de las licitaciones y la transparencia, protegido del Cardenal Oscar Rodríguez y yerno de Mario Rietti, uno de los seguidores más entusiastas del referido Cardenal. No tiene ninguna experiencia en el tema de los derechos humanos y, seguramente, no será mucha la ayuda que pueda proporcionar al nuevo gobierno en la búsqueda de la credibilidad necesaria a nivel interno y externo.

Es preciso decir que en este espinoso asunto puede haber mucha tela que cortar. Hay muchos datos "inflados", contagiados políticamente con propósitos de impacto mediático o inflados superficialmente para dificultar la aceptación del régimen en el entorno internacional. No todos los hechos denun-

---

ciados como “*violaciones del Estado a los derechos humanos*” deben ser considerados como tales. En algunos casos se tratan de simples actos de delincuencia común o venganzas y represalias llevadas a cabo por los diferentes carteles y facciones de los narcotraficantes o del crimen organizado en general, que actúan en Honduras. Pero hay un denominador común en todos los casos: la impunidad que los rodea y la incapacidad casi total del Estado, es decir de la policía y los tribunales, para descubrir a los culpables e imponerles el castigo merecido.

Al margen de la naturaleza, política o no, de los hechos denunciados como violaciones a los derechos humanos, lo cierto es que la situación se ha deteriorado mucho y el clima de inseguridad y violencia es hoy más preocupante y amenazador que el año anterior. Así queda demostrado con los resultados de la ya citada encuesta de Cid Gallup, que coloca a estos problemas -la delincuencia y la violencia- en el primer lugar de las preocupaciones vitales de los hondureños, seguidos por el desempleo, el costo de la vida y la falta de vivienda.

Junto al difícil problema de los derechos humanos (que demandará un mayor y más minucioso control del presidente Lobo sobre los cuerpos de seguridad del Estado, los militares y la policía), el gobierno debe enfrentar también las crecientes presiones de los generales golpistas que se resisten a abandonar con las manos vacías los altos cargos que han ocupado en la estructura institucional castrense. El chocante nombramiento del general Romeo Vásquez, jefe militar del golpe de Estado, al frente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), debe ser entendido como una muestra clara de esas presiones y, lo que es más importante, de la debilidad relativa de Pepe Lobo para hacer frente exitosamente a tales presiones y demandas.

El presidente logró reestructurar, con relativa autonomía e iniciativa propia, la cúpula castrense. Sacó de ella a los golpistas más visibles y reubicó a otros en puestos de menor importancia en comparación con los que ostentaban el día del golpe. Pero, al mismo tiempo, debió hacer concesiones, entre las cuales el nombramiento de Vásquez aparece como la más indignante y onerosa.

Pero las presiones sobre Lobo no sólo provienen de los círculos militares. También se originan, y con mucha fuerza, en el seno de su propio partido político, en donde el alcalde capitalino y presidente del Comité Central del partido Nacional (PN), junto a su tutor político y protector partidario, el ex presidente Ricardo Maduro, no ocultan sus desmedidas pretensiones por ejercer influencia decisiva en las decisiones principales y los nombramientos clave dentro del gobierno lobista. El alcalde Ricardo Álvarez, un abierto y decidido partidario y cómplice del golpe de Estado, aspira a convertirse en el

próximo candidato presidencial del PN y, desde ya, se apresta a organizar sus simpatizantes y partidarios, al margen y a veces en contra del propio liderazgo político del presidente Lobo. Álvarez se convierte cada vez más en el aliado incómodo de Pepe Lobo.

Junto a Álvarez, hay otros aspirantes que también sueñan con ser los sucesores de Lobo en la Casa Presidencial, pero ninguno de ellos, al menos por el momento, se ha convertido en un obstáculo o impedimento para el normal desempeño administrativo del gobierno lobista.

Las veladas disputas y aspiraciones discretas dentro del PN quedaron manifiestas durante la reciente Convención del partido, celebrada en Olancho a mediados del presente mes (domingo 14). En esa ocasión, el alcalde de Tegucigalpa no vaciló en llevar a sus seguidores para que le hicieran coro y mostraran su fuerza y poder de convocatoria ante los otros aspirantes. Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional y también fuerte aspirante a una eventual candidatura oficial por parte del partido de gobierno, se vio obligado a llamar a sus colegas a conceder una “*tregua política*” de al menos dos años para permitir que Pepe Lobo pueda organizar y dirigir con alguna probabilidad de éxito su nuevo gobierno. La simple solicitud de tal tregua es una muestra que refleja las luchas internas en el partido y las prematuras ambiciones políticas ya desatadas.

### **El auge de la conflictividad social**

**P**or si fuera poco el reto que significan los problemas fiscales, las presiones militares y las ambiciones políticas en juego, el presidente Lobo también debe enfrentar el auge creciente de la conflictividad social y el aumento alarmante de la criminalidad, organizada y común.

Por el momento, el denominado conflicto del Bajo Aguán, que enfrenta a miles de familias campesinas contra al menos tres conocidos empresarios agrícolas de la zona, es el problema más peligroso y preocupante. Aunque Lobo ha dado muestras claras de su voluntad para encontrar una salida pacífica a la crisis, los líderes del llamado Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguán (MUCA) no han dado muestras hasta el momento de aceptar las ofertas del gobierno, mientras persisten en la ocupación de las fincas de palma africana y reclaman su antigua propiedad (sus padres y mayores vendieron a principios de los años noventa esas tierras a los empresarios agrícolas Miguel Facussé y René Morales, hermano del vicepresidente de Nicaragua, Jaime Morales Carazo).

La intransigencia de la dirección campesina ha colocado a Lobo en una especie de callejón sin salida, obligándolo a buscar fórmulas de solución tan

---

impracticables y absurdas como la de solicitar ayuda a la OEA para que envíe una comisión a analizar el problema y proponer vías de salida. Olvida Lobo, o quien le aconsejo tal “*solución*”, que Honduras permanece todavía fuera del ámbito de la OEA, sumido en un relativo aislamiento continental a causa del golpe de Estado del 28J.

El conflicto del Bajo Aguán, que ya ha producido varios muertos en ambos bandos, amenaza con crecer y agudizarse, corriendo el riesgo de desembocar en un enfrentamiento sangriento entre campesinos ocupantes, militares, policías y guardias privados de los empresarios afectados. Si esto llegara a suceder, el gobierno de Lobo sufriría un descenso brusco de los todavía incipientes niveles de aceptación que tiene en la comunidad internacional. Sería lo peor que le podría pasar, sobre todo en momentos en que se propone relanzar una ofensiva internacional, principiando por la Cumbre Iberoamericana en Madrid, España, el próximo mes de mayo, para ampliar su reinserción en el entorno mundial.

Junto al grave conflicto agrario del Bajo Aguán, están otros conflictos de menor intensidad pero con mucho potencial para convertirse en crisis sociales. Las demandas de los maestros, por ejemplo, que, además de reclamos salariales, protestan contra la politización indebida del sistema de asignación de cargos y plazas vacantes en el esquema educativo del país. Apenas han comenzado las clases y ya los maestros han decretado arbitrariamente varios paros de labores que interrumpen los ciclos educativos y reducen el número de días/clases por año.

En la Universidad Nacional, desde finales de febrero pasado (día 23) la situación se ha vuelto inmanejable. Los dirigentes sindicales se han apoderado de los edificios administrativos y han paralizado todas las actividades académicas de la principal institución de la educación superior hondureña. El principio de autoridad ha sido sustituido por el caos y la insolencia de una pequeña burocracia sindical que ha convertido el sindicato en un instrumento para repartirse el poder administrativo y el control sobre el presupuesto universitario.

Para complicar más las cosas, el apoyo directo y entusiasta del llamado Frente Nacional de Resistencia Popular (contra el golpe de Estado) a las acciones del sindicato universitario y a los campesinos del Bajo Aguán, ha añadido un ingrediente político indeseable y peligroso en medio del torbellino de la conflictividad social que impera en el país.

Las enfermeras auxiliares ya han anunciado su decisión de realizar paros laborales por demandas de mejores salarios. Los dirigentes del transporte urbano reclaman aumentos en sus tarifas, al igual que lo hacen los transportistas del combustible. Pobladores de los barrios marginales en los principa-

les centros urbanos del país demandan más y mejores servicios públicos, al tiempo que protestan contra el alza en las tarifas de la energía eléctrica y el agua. Y todo esto se produce en medio de una grave y acuciante sequía general y aguda escasez de agua en la ciudad capital, junto al incremento de los incendios forestales en todo el territorio nacional.

En las negociaciones en torno al salario mínimo para fijar el nuevo monto que se deberá pagar legalmente, ni los empresarios ni los trabajadores han logrado ponerse de acuerdo, abriendo el margen para que sea el gobierno el que establezca de forma definitiva la cantidad en que deberá ser aumentado dicho salario en este año. Como es de suponer, Pepe Lobo no podrá quedar bien ni con unos ni con otros, lo que sin duda abrirá un nuevo frente de confrontación y reclamos en el escenario social hondureño. Vale decir que, según datos del Ministerio del Trabajo, el 63% de las empresas establecidas en el país no cumplen con la ley del salario mínimo, es decir pagan sueldos inferiores a la suma legalmente establecida por el gobierno zelayista (unos 263 dólares mensuales).

Por momentos da la impresión de que el país se mueve en la dirección de una grave y profunda crisis de ingobernabilidad, que bien podría dar al traste con la escasa estabilidad política que generaron las elecciones de noviembre de 2009 y la instalación del nuevo gobierno nacionalista en enero de 2010. Pepe Lobo pareciera estar atrapado en una maraña de presiones de todo tipo, sin poder reaccionar con la diligencia y la autonomía necesarias para introducir orden y coherencia en medio del caos general que amenaza a la sociedad entera.

Junto a los graves problemas derivados de la conflictividad social en ascenso, hay que sumar los grandes retos que supone el incremento de la delincuencia común y de las actividades del crimen organizado, especialmente las redes del narcotráfico a nivel de todo el país.

Han aumentado los homicidios y muertes violentas -un promedio de 64 por cada cien mil habitantes frente a una media mundial que no pasa de ocho-, los secuestros, los asaltos a mano armada, los robos en domicilios particulares, el hurto de vehículos, el tráfico de personas indocumentadas y la violencia doméstica. Es alarmante la cantidad de mujeres que son asesinadas a diario. Los periodistas viven en un permanente estado de zozobra, luego que cinco de sus colegas, por diversas razones, han perdido la vida tan sólo en este mes de marzo, sumados a otros que han debido huir del país para poner a salvo sus vidas.

El nombramiento de Óscar Álvarez al frente del Ministerio de Seguridad logró despertar demasiadas expectativas entre la gente, confiando en la efectividad de sus métodos espectaculares y bulliciosos para combatir la

delincuencia. Sin embargo, en estos primeros dos meses de gobierno, Álvarez se ha dedicado a promover los necesarios cambios y rotaciones internas dentro de las filas policiales, más que a desarrollar acciones operativas concretas contra la delincuencia. La población espera más acción y demanda más rapidez y efectividad por parte de la policía.

Álvarez, ansioso por salir a las calles y desplegar todos sus recursos operativos y propagandísticos, ha pedido y recibido mayores asignaciones presupuestarias, a la vez que espera y reclama mayor apoyo y confianza de la población hacia la policía. Algo difícil de obtener, sobre todo después del desgaste y el desprestigio que ha sufrido la policía por sus acciones represivas durante las manifestaciones en protesta contra el golpe de Estado.

Como si esto fuera poco, Álvarez también tiene que estar atento para impedir la marcada tendencia de los militares a invadir los espacios propios de la policía -guardar el orden público-, algo a lo que han quedado acostumbrados después de las jornadas de represión conjunta que realizaron junto con los policías en contra de los manifestantes pro zelayistas en el segundo semestre del año anterior.

### **Presupuesto y política**

**A** finales del mes, por fin, el Congreso Nacional aprobó el nuevo presupuesto general de la nación. Un total de casi 122 mil millones de lempiras (aproximadamente unos 6,421 millones de dólares) distribuidos de la siguiente forma: 68,230 millones (3,591 millones de dólares) para el gobierno central y 53,760 millones (2,829 millones de dólares) para las instituciones descentralizadas del Estado.

La nueva estructura del presupuesto nacional para este año 2010 refleja, quizá sin proponérselo, el estado actual de la correlación de fuerzas políticas y las diversas presiones y chantajes a que está sometido el débil liderazgo presidencial.

Los militares, para empezar, recibieron un suculento aumento en su respectiva partida presupuestaria que equivale a un 23% con respecto al año anterior, casi 26 millones de dólares más. Su presupuesto total para este año asciende a la suma de 136 millones de dólares.

El presupuesto destinado a la Secretaría de Seguridad aumentó, al menos por el momento, en 8% con respecto al año 2010, lo que equivale a unos 12 millones de dólares más. El total asignado en este año al Ministerio de Óscar Álvarez es de 154 millones de dólares, o sea que en el sector defensa y seguridad serán invertidos 290 millones de dólares en total.

Los presupuestos anuales destinados al sector Salud y a Educación crecieron en 10,5 y 9,2% respectivamente con relación a los montos asignados en el año pasado.

Este presupuesto anual operará con un déficit muy alto y con una dependencia estimada mayor al 20% con respecto a los fondos de la cooperación externa.

Para consuelo de la nueva Administración nacionalista, en las filas de la oposición liberal tampoco las cosas marchan muy bien. En un sorpresivo golpe bajo, los miembros del Consejo Central Ejecutivo (CCEPL), máximo órgano de dirección del partido, destituyeron el pasado día 05 a Roberto Micheletti de la presidencia del mencionado Consejo. La votación fue 8 a favor de la destitución, tres michelettistas en contra y una abstención. El nuevo presidente del partido Liberal (PL) es Elvin Santos, padre del candidato presidencial perdedor del mismo nombre (Elvin Santos Jr.).

De esta forma, los dirigentes liberales se distancian de la desprestigiada figura de Micheletti y le relegan al desván del olvido. Con esta maniobra pretenden frenar o disminuir las presiones de la base liberal, la llamada Resistencia Liberal, que reclama una renovación total en los cuadros de dirección del partido, sacando o expulsando a todos los dirigentes liberales que apoyaron el golpe de Estado del 28J. Así se está produciendo el reacomodo de fuerzas al interior del PL, en donde crece y se afianza el protagonismo y la iniciativa política de los nuevos dirigentes que encabezaron el rechazo al golpe y marcharon en las calles durante largos meses para reclamar el retorno al orden constitucional y la reinstalación de Manuel Zelaya en la Casa Presidencial.

La recomposición de fuerzas en el seno del PL y el eventual retorno de Manuel Zelaya en los próximos meses al territorio nacional, crearán las bases para conformar una fuerza opositora poderosa y democrática, capaz de convertirse en el inevitable interlocutor válido del gobierno nacionalista de Pepe Lobo.

Cada vez se hace más evidente la necesidad que tienen todos, especialmente los norteamericanos, de reconstruir el antiguo "*centro político*" y recuperar el equilibrio perdido en el tradicional sistema bipartidista hondureño. La recuperación política de los liberales y el afianzamiento de un liderazgo fuerte y efectivo, como el que les podría proporcionar Zelaya con su regreso, son condiciones indispensables, aunque parezca paradójico, para devolverle al sistema político hondureño cierta normalidad y viabilidad funcional.

# ABRIL 2010

---

## La situación política

**A**punto ya de cumplir sus primeros cien días en el ejercicio de la administración estatal, el gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo sigue todavía atrapado entre las secuelas de la grave crisis fiscal y política heredada del gobierno de facto anterior, que presidió el gobernante golpista Roberto Micheletti. Al mismo tiempo, continúa sus denodados esfuerzos para salir del relativo aislamiento internacional en que Honduras quedó sumida después del golpe de Estado del 28 de junio del año anterior (28J).

Para tranquilidad del gobierno, el denominado conflicto agrario del Bajo Aguán, el más importante conflicto social que el gobierno lobista ha enfrentado hasta hoy, quedó finalmente resuelto, al parecer, en la madrugada del día 14, luego que sus actores firmaran un convenio en el que se reconoció buena parte de las demandas de los grupos campesinos y se prometió entregar a éstos once mil hectáreas de tierra, cultivada y sin cultivar, en un plazo no mayor de dos años. La firma del mencionado convenio fue una victoria muy importante para los campesinos organizados y para el Frente Nacional de Resistencia (contra el golpe de Estado) que había convertido el reclamo campesino en una de sus principales banderas de lucha.

Pero, al mismo tiempo, el acuerdo logrado fue un triunfo personal del presidente Pepe Lobo, quien siempre estuvo al frente de las negociaciones y pudo consensuar una solución válida que desmontó un grave y peligroso conflicto. Con esta medida, el presidente logró aislar a los sectores más radicales, tanto a la derecha como a la izquierda, que apostaban por la confrontación y el fracaso de la gestión gubernamental de Lobo. La solución encontrada ha suscitado el público enojo de los núcleos golpistas más recalcitrantes, los que se agrupan en la llamada Alianza por Honduras o en la Unión Cívica por la Democracia (UCD), que la consideran una traición a la empresa privada y una concesión demasiado generosa a los partidarios del ex presidente Manuel Zelaya (léase grupos campesinos y militantes de la llamada Resistencia Nacional).

En este sentido, el conflicto del Bajo Aguán puede ser considerado como un termómetro para medir la intensidad de las diferentes fuerzas políticas y sociales que conforman el escenario en el que debe actuar y moverse el gobierno nacionalista que encabeza Pepe Lobo.

Una vez resuelto el problema agrario más difícil de los últimos años, el gobierno lobista debe afrontar el enorme desafío que representan las denuncias por graves violaciones a los derechos humanos, el auge incontrolable de la violencia, las horrendas y frecuentes masacres (seis en el mes de abril) vinculadas al crimen organizado y, en especial, al comercio de drogas y la disputa sangrienta por los territorios de influencia. De acuerdo a datos del Observatorio de la violencia, una institución financiada por la Organización de las Naciones Unidas y coordinada por la Universidad Nacional Autónoma, las muertes violentas aumentaron en el año 2009 en casi 13% con respecto al año anterior, con una media de 14 asesinatos por día. La tercera parte de los homicidios fueron obra de sicarios a sueldo del crimen organizado. El crecimiento de la delincuencia es más que preocupante: si en el 2004 el promedio era de 40 homicidios por cada cien mil habitantes, ya el año pasado la cifra había subido a 67, en apenas cinco años, con el agravante de que en ciudades como San Pedro Sula y La Ceiba la media es mucho más alta, 140 y 122 homicidios por cada cien mil habitantes respectivamente.

De acuerdo a los resultados de las más recientes encuestas de opinión pública, la inseguridad sigue siendo el problema principal en la escala de preocupaciones de los hondureños, por encima de problemas tales como el desempleo, el costo de la vida o la corrupción. Durante su campaña electoral, el actual presidente Lobo fue el candidato que despertó más expectativas entre la población con respecto a las demandas de seguridad ciudadana. Por lo tanto, la frustración actual es mayor y el desencanto es creciente. La gente demanda más y mayores acciones en contra de la delincuencia y exige del ministro de Seguridad más resultados y menos palabras.

La muerte de varios periodistas (siete en total) en las últimas semanas, la mayoría de ellos por razones más vinculadas a sus problemas personales que a su labor periodística, ha sido la gota que rebalsó el vaso. La condena internacional no se ha hecho esperar y la imagen del gobierno lobista ha salido aún más maltratada. Para complicar más las cosas, ante su propia impotencia, el gobierno anunció su decisión de pedir ayuda a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para realizar una investigación a fondo de los crímenes, dejando en una posición muy comprometida a su ministro y Viceministro de Seguridad, así como a la nueva cúpula policial recién nombrada.

A finales del mes (el día 26) una delegación de jueces del sistema judicial visitó al presidente Lobo para pedirle seguridad y protección para 22 de sus colegas, amenazados por la delincuencia común y el crimen organizado. Los jueces acudieron directamente ante el Poder Ejecutivo, convencidos de la propia inoperancia e impotencia de sus jefes en el seno del Poder Judicial. Pocos días después, en el curso de su primera conversación telefónica con el gobernante hondureño, el presidente norteamericano Barack Obama recordó a Lobo su preocupación por el tema del irrespeto a los derechos humanos en Honduras.

El tema de esos derechos está en el centro de la agenda nacional. El presidente Lobo ha tomado conciencia de la gravedad del asunto pero, al parecer, todavía no dispone de la fuerza y voluntad necesarias para imponer su línea de respeto a tales derechos y poner bajo control a las fuerzas paralelas que llevan a cabo acciones ilegales de persecución, secuestro, tortura y, eventualmente, asesinatos de opositores, especialmente jóvenes ligados a las filas de la llamada Resistencia Nacional. Lobo sabe muy bien que el éxito de su política de reinserción en la comunidad internacional depende fundamentalmente de la situación interna de los derechos humanos y de la credibilidad real que despierte su actitud en este campo.

De cara a su próximo viaje a España para participar en la Cumbre Iberoamericana (mediados de mayo), el presidente Lobo no oculta su preocupación por el éxito de tal misión y tampoco escatima esfuerzos para buscar un acercamiento con las organizaciones internacionales de derechos humanos, que ya se han dado cita para protestar en Madrid por la presencia del presidente hondureño.

En el curso de esta misma línea de aproximación a sus críticos, el presidente también ha solicitado reuniones discretas con los principales dirigentes del Frente de Resistencia Popular, en un intento por limar asperezas y encontrar puntos de coincidencia en la búsqueda de soluciones a la crisis nacional. La respuesta de esos dirigentes ha sido negativa y rotunda: se niegan a reconocer la legitimidad y legalidad del régimen lobista, rechazan, por lo tanto, cualquier tipo de negociación y proclaman una política de oposición permanente y sin concesiones. Esta es la posición del sector más duro del liderazgo *“resistente”*, encabezado por Carlos H. Reyes y Juan Barahona e integrado, además, por Tomás Andino, Francisco y Gilberto Ríos, Félix Molina, Luis Méndez, Lorena Zelaya, Bety Matamoros y Sara Elisa Rosales. Ellos conforman la llamada *“Coordinadora”* del Bloque Popular, que se ha convertido en el círculo más intransigente y radical al interior del Frente Nacional de Resistencia Popular. (FNRP). Son los que encabezan el rechazo contra las bases liberales de la Resistencia y se oponen a cualquier tipo de contacto o relación puntual con el gobierno de Pepe Lobo. Consideran al ex presidente Manuel Zelaya como un *“aliado inevitable pero incómodo”*, a

quien prefieren mantener lejos, ausente del escenario nacional en donde su innegable liderazgo podría causarles problemas de control sobre el movimiento político de resistencia. Su enemistad con los dirigentes liberales antigolpistas va creciendo y podría desembocar en una ruptura política.

Aunque sólo sea por esa razón, Pepe Lobo debería buscar nuevas formas de acercamiento con la Resistencia, pero a través directamente de Zelaya, prescindiendo de los dirigentes más intransigentes y radicales. No hay duda que Lobo todavía tiene pendiente el diseño de una inteligente política de alianzas con las distintas fuerzas sociales y partidarias en la vida política local. Ese es uno de sus nuevos desafíos.

Además de estos problemas de carácter puramente político, el presidente Lobo ha debido hacer frente a otros conflictos de tipo social y gremial. La permanente disputa con los sindicatos (asociaciones gremiales) de maestros es un constante dolor de cabeza para todos los gobiernos. Aunque fue nombrado un viejo dirigente magisterial al frente del Ministerio de Educación (Alejandro Ventura), su liderazgo es muy débil y su respaldo moral es casi inexistente. Los paros laborales continúan y los maestros, con la misma frecuencia de antaño, cierran las aulas y se lanzan a las calles a hacer sus protestas cotidianas.

En la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), en donde hasta no hace mucho se había perdido por completo el principio de autoridad interna, la nueva Rectora (Julieta Castellanos) hace intentos por recuperar el control, haciendo frente a un fuerte sindicato conducido por dirigentes mafiosos e intransigentes. En estos momentos se lleva a cabo una huelga de hambre por parte de diez sindicalistas que reclaman el reintegro de más de un centenar de compañeros suyos, despedidos por realizar huelgas ilegales y boicotear el normal desenvolvimiento de las actividades universitarias. El conflicto al interior de la UNAH siempre está latente y puede desembocar en una nueva crisis en cualquier momento.

La cuestión del salario mínimo es otro tema pendiente y difícil. Ante la incapacidad de las partes (trabajadores y empresarios) para llegar a un acuerdo y definir la cantidad a aumentar, el gobierno de Pepe Lobo deberá intervenir y fijar por su propia cuenta el nuevo salario mínimo. El presidente se ha resistido hasta hoy a adoptar una decisión, a la espera de que las partes alcancen un arreglo de última hora. Lobo sabe el riesgo que corre en una situación tan sensible y controversial, en la que virtualmente es imposible quedar bien con ambos sectores. Confía en forzar una solución negociada en la primera semana de mayo y, de esa manera, evitar el estallido de otro conflicto laboral más.

La aprobación de la reforma fiscal que aumentó los impuestos y elevó las cargas fiscales a los empresarios, así como la posterior manipulación del texto aprobado, en perjuicio de los contribuyentes, han servido para abrir un nuevo frente de confrontación entre los grupos empresariales (industriales, comerciantes, banqueros, etc.) y el recién inaugurado gobierno nacionalista de Pepe Lobo. El Poder Ejecutivo ha recibido el respaldo decidido del presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, quien salió en su defensa y acusó a los empresarios de insensibles y avaros. Al menos por el momento, Hernández aparece como uno de los principales aliados y soportes de Lobo en la Administración gubernamental.

Pero son alianzas que serán pasajeras, en la medida que se definan las aspiraciones presidenciales de los distintos precandidatos nacionalistas que quieren sustituir a Lobo en el próximo periodo gubernamental. Hernández, al igual que el alcalde capitalino y presidente del Comité Central del partido Nacional (PN), Ricardo Álvarez, junto al ministro de Seguridad Oscar Álvarez, el de Obras Públicas Miguel Pastor y el actual Canciller Mario Canahua-tí, no ocultan sus aspiraciones y apenas si disimulan su ambición prematura por disputar el liderazgo a Pepe Lobo. En la lista de aspirantes también figura la Designada Presidencial María Antonieta Guillén, quien goza de la confianza de Lobo y podría contar con el importante apoyo del ex presidente Ricardo Maduro.

O sea que, en síntesis, Lobo está rodeado de personas que tienen sus ambiciones propias, lo que las convierte en aliados episódicos y apoyos esporádicos de dudosa credibilidad a largo plazo. No es casual que, en conversaciones privadas con amigos cercanos, Lobo diga con frecuencia que “*se siente solo*”.

Y quizás por eso es que el presidente insiste en dar cumplimiento total a los compromisos contenidos en el Acuerdo Tegucigalpa/San José, firmado el 30 de octubre del año pasado, en un desesperado afán por complacer a la comunidad internacional y lograr su reconocimiento y respaldo pleno. Lobo busca en el exterior el apoyo que le niegan dentro del país sus propios compañeros de partido, los empresarios y la oposición agrupada en la Resistencia. Necesita urgentemente ser aceptado y reconocido.

La instalación de la Comisión de la Verdad, con el apoyo de países amigos y de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como de las Naciones Unidas a través del PNUD, es el mejor ejemplo de la urgencia de Lobo por cumplir con los acuerdos políticos suscritos entre las delegaciones de Manuel Zelaya y Roberto Micheletti en octubre de 2009. Sin embargo, también este ejemplo puede servir para evidenciar las dificultades que debe sortear el nuevo presidente hondureño. Un día antes de la instalación formal de la Comisión oficial, la Resistencia Nacional, con el apoyo de varias orga-

nizaciones humanitarias internacionales, anunció en Tegucigalpa la creación de otra Comisión paralela, llamada Comisión de Verdad, la que estaría integrada por varias personalidades de renombre mundial, entre ellos los premios nobel Adolfo Esquivel (argentino) y Rigoberta Menchú (guatemalteca). Esta Comisión paralela persigue el objetivo de desacreditar la que ha formado el presidente Lobo y dificultar su trabajo, profundizando todavía más la polarización social y la crispación política que prevalecen en el ambiente nacional.

La debilidad del gobierno lobista se hace cada vez más evidente. Las constantes e inexplicables concesiones que el presidente hace a los círculos militares sorprenden a muchos. Les está entregando gradualmente circuitos clave del engranaje estatal, con el pretexto de que pertenecen al área de la seguridad del Estado. De esta forma, los militares, que en los últimos 25 años se habían ido replegando poco a poco a sus cuarteles, están retornando al escenario oficial, recuperando las posiciones perdidas y aspirando a controlar otras nuevas. Este peligroso proceso de remilitarización del aparato estatal es, posiblemente, la amenaza más cierta y preocupante a la frágil y vulnerable democracia hondureña. El retorno de los militares les devuelve un protagonismo indeseable y desafiante, que reduce la influencia de los partidos políticos, desequilibra el balance de poderes y deteriora al sistema político en su conjunto, además de que se convierte en una amenaza permanente contra los derechos humanos de la ciudadanía y en una fuente inagotable de corrupción y abuso de poder. El presidente Lobo deberá contener esa política de concesiones y hacer frente a las presiones militares, para lo cual debe buscar con inteligencia y decisión el apoyo de los países democráticos. La remilitarización del Estado es el peor daño que el gobierno lobista le puede hacer al proceso de construcción democrática y al Estado de derecho en Honduras.

### **¿Y la economía?**

**E**n materia económica, el gobierno lobista sigue pendiente de la firma de un ansiado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le abriría las puertas para tener acceso a los recursos de otros organismos financieros, especialmente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La más reciente misión gubernamental que visitó Washington el pasado día 20, escuchó las mismas recomendaciones de siempre: orden en las finanzas públicas, mayor austeridad en el gasto, control y reducción del gasto salarial, más inversión social y lucha efectiva contra la corrupción. Una agenda de difícil cumplimiento en un Estado acostumbrado al clientelismo político, con un gobierno débil y acosado por todos los flancos, tanto internos como externos.

Pero no todas han sido malas noticias: el índice de crecimiento económico del Banco Central reportó un crecimiento de la actividad económica de 1,6% en los primeros dos meses del año, mientras que las remesas familiares -ese aliento vital y decisivo para la economía hondureña- alcanzaron la suma de 691,4 millones de dólares al 15 de abril, apenas 5,4 millones menos que en el mismo periodo del año anterior.

Si se comparan estas cifras con las expectativas casi catastrofistas de finales del año anterior, la situación no debe ser considerada tan mala.

# MAYO 2010

---

## La situación política

**E**l mes de mayo, como ya es usual cada año, comenzó con la celebración del día consagrado a los trabajadores, fecha en la cual los principales sindicatos del país desfilan por las calles y plantean -una vez más- sus tradicionales demandas y reclamos ante el gobierno nacional (aumentos salariales, mejores condiciones laborales, rechazo a la privatización de las empresas públicas y los recursos naturales, nueva ley de reforma agraria, más y mejores empleos, etc.). Pero esta vez, las marchas fueron multitudinarias y fusionaron sus acostumbradas peticiones con la exigencia de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y el inmediato retorno del ex presidente Manuel Zelaya al territorio hondureño. De hecho, la celebración del Primero de Mayo quedó convertida en una verdadera fiesta del llamado Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que aprovechó la ocasión para mostrar otra vez su poder de convocatoria y su innegable capacidad de movilización de miles y miles de simpatizantes en todo el país. Fue una demostración de fuerza y una muestra por parte del FNRP de su evidente condición de actor político clave en el actual escenario nacional.

El día 04, por fin, fue oficialmente instalada la Comisión de la Verdad, acto con el cual el gobierno dio por cumplidos totalmente los compromisos contenidos en el Acuerdo Guaymuras, también conocido como Pacto Tegucigalpa/San José, que fuera firmado el 30 de octubre del año pasado entre los representantes de Manuel Zelaya y de Roberto Micheletti. El presidente Porfirio “Pepe” Lobo aprovechó el acto de instalación para declarar, ante el asombro de muchos, su simpatía a favor de una consulta popular en torno a la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente que deberá redactar una nueva Constitución política. “Soy proconsulta”, dijo Pepe Lobo, para luego agregar que ninguna generación debe dejar atada a la próxima en los marcos férreos de determinada normativa constitucional. Era una alusión directa a los llamados “*artículos pétreos*” de la Constitución, es decir aquellos que no pueden ni deben ser modificados, especie de camisa de fuerza para evitar reformas y cambios dentro de la sociedad.

---

La declaración del presidente Lobo cayó como un balde de agua fría entre los sectores ultraconservadores, partidarios y promotores del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. El diputado nacionalista y ex presidente del Congreso Nacional Rodolfo Irías Navas (1990-1994) no vaciló en recomendar al presidente *“tener mucho cuidado ya que hay preocupación ante algunas expresiones vertidas por altos funcionarios del gobierno sobre la posibilidad de una consulta... hablar de Constituyente en este momento es sembrar vientos y cosechar tempestades”*, concluyó el destacado líder del llamado *“sector oscuro”* del partido Nacional (PN), es decir el grupo conservador de la vieja guardia partidaria, estrechamente asociado con la corrupción imperante en el gobierno del entonces presidente nacionalista Rafael Leonardo Callejas (1990-1994).

Las confesiones de Pepe Lobo han servido, entre otras cosas, para ahondar la brecha que paulatinamente lo va separando de los grupos golpistas, tanto dentro de su propio partido como en todo el escenario político en general. Cada vez son más frecuentes los ataques virulentos en contra del presidente Lobo. Analistas políticos identificados con el golpe y periodistas a sueldo de los golpistas no dudan en acusar a Lobo de vacilante e indefinido, advirtiéndole cada vez con más descaro sobre las posibilidades de un nuevo golpe de Estado, que vendría a dar al traste con su incipiente administración gubernamental. En esta confrontación inevitable, Lobo cuenta, al menos por ahora, con el apoyo directo del presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández. En cambio, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera, las cosas son diferentes: aunque Lobo hace esfuerzos por persuadirlo para que apoye las iniciativas de reconciliación nacional emanadas de Casa Presidencial, el magistrado Rivera insiste en mantener su posición dura, contraria a cualquier tipo de arreglo político, persistiendo en hostigar y perseguir judicialmente al ex presidente Zelaya. Y, como quedó en evidencia en este mes, también a los jueces y funcionarios judiciales que se opusieron y se oponen al golpe de Estado y sus secuelas. La destitución a mediados del mes de varios miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia así lo demuestra.

No es casual, entonces, que el gobierno lobista haya tenido que enfrentar cinco huelgas de hambre en el mismo mes (jueces despedidos, sindicalistas de la Universidad, maestros destituidos de sus cargos administrativos en el sector Educación, campesinos desalojados de sus tierras y supuestos padres de familia enfrentados contra los gremios magisteriales), con demandas diversas pero con el denominador común de la creciente ingobernabilidad política y conflictividad social. Al finalizar mayo, tres grupos se mantenían todavía en huelga de hambre: los sindicalistas, los maestros y los campesinos. Los jueces decidieron darla por concluida ante la intransigencia de la Corte Suprema de Justicia y el rechazo de la mayoría de sus miembros (10 de 15) a la demanda de restitución de los despedidos, mientras que los llamados *“padres de familia”* (en realidad, activistas políticos al servicio del

alcalde capitalino y prematuro aspirante presidencial nacionalista, Ricardo Álvarez) optaron por abandonar su original protesta ante el escaso apoyo recibido.

En su reciente viaje a España para participar en la cumbre entre la Unión Europea y Centroamérica, Pepe Lobo pudo anotarse éxitos relativos que, entre otras cosas, le permitieron también medir el nivel de aceptación de su gobierno en el ámbito europeo y conocer de cerca las demandas concretas de la comunidad internacional en materia de respeto a los derechos humanos, auténtica reconciliación política interna y la necesidad de promover el pronto retorno del ex presidente Manuel Zelaya a Honduras, en el goce pleno de todos sus derechos políticos. Durante su estancia en Madrid, Lobo reconoció finalmente que en Honduras se produjo un golpe de Estado, el 28J, y no vaciló en llamarle de esa forma. Aprovechó para reafirmar su anterior declaración a favor de una consulta popular sobre la Asamblea Constituyente, agregando, de paso, que la vía del plebiscito pudiera ser el camino más correcto para decidirlo. Una vez más, como era de esperar, sus palabras provocaron la ira incontrolada de la derecha criolla y el escepticismo confuso de la izquierda local. Pepe Lobo pareciera estar condenado a vivir en un centro político inestable e inseguro, bajo el fuego de los extremos y ante la incomprensión de una parte creciente de la población. Ello explica, en buena parte, su tendencia a adoptar medidas en apariencia contradictorias e incoherentes, aplicando una política pendular que oscila entre las concesiones a la derecha golpista y los gestos amistosos hacia la izquierda resistente. Ni unos ni otros han sido capaces de entender los dilemas del presidente y, por eso mismo, le atacan y condenan con igual virulencia e irracionalidad.

La elite política y empresarial que promovió, financió y apoyó políticamente al golpe de Estado se siente traicionada por el presidente Lobo. Esperaba de él una firme política derechista, orientada a consolidar a los golpistas y reprimir sin vacilaciones a los partidarios de Zelaya y demás sectores agrupados en el llamado Frente Nacional de Resistencia Popular. Su desencanto y malestar con la política de Lobo se traduce en maniobras para dificultar la consolidación del nuevo gobierno y un apoyo cada vez más abierto y directo a las pretensiones presidenciales del alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, quien, además, es el presidente del Comité Central del partido teóricamente gobernante.

El anuncio del presidente Lobo de su disposición a viajar a República Dominicana para traer personalmente al ex presidente Zelaya y, de esa forma, garantizarle su seguridad personal al momento del regreso, ha sido la gota que colmó el vaso. La elite de derechas ha saltado de inmediato, poniendo en movimiento todos los mecanismos de presión y su ofensiva propagandística con los mismos medios de comunicación que sirvieron de comparsa y apoyo publicitario al golpe de Estado. Han proliferado los “*espacios paga-*

dos” en que los empresarios, ciertas organizaciones autollamadas de “*sociedad civil*”, los grupos de presión golpistas, etc. proclaman su disposición a defender el Estado de derecho y condenan, abierta o solapadamente, las intenciones de Lobo para facilitar el retorno de Zelaya. Organizan sondeos de opinión amañados, disfrazados de “*encuestas*”, para demostrar una supuesta oposición mayoritaria al regreso del ex presidente derrocado. Sus “*analistas*” más beligerantes no vacilan en subir el tono de sus amenazas y aconsejan a Lobo, en abierto desafío y desplante de agresión, tener “*lista la pijama*” que deberá vestir cuando le llegue el momento de salir expulsado del gobierno y del país. En las tertulias políticas se habla abiertamente sobre la posibilidad de un nuevo golpe de Estado, esta vez en contra del presidente electo en noviembre pasado y quien, a juzgar por sus antiguos aliados, ha resultado ser un debilucho con vocación de traidor.

Al interior del partido de gobierno, las opiniones están divididas. La vieja guardia partidaria, junto a los seguidores del alcalde Álvarez (respaldado por los ex presidentes Ricardo Maduro y Rafael Leonardo Callejas) no logran ocultar su descontento con las posiciones de Lobo. El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, junto a los líderes emergentes del partido y las ligas juveniles del mismo, cierran filas a favor del gobernante y respaldan, no siempre con la firmeza y entusiasmo requeridos, sus acciones a favor de la reconciliación nacional y la urgente reinserción de Honduras en el concierto internacional de naciones.

Los Estados Unidos, que consideran que ya Lobo ha cumplido con todos los compromisos derivados del Acuerdo Guaymuras, le aconsejan que ya no ceda más a los reclamos de la comunidad internacional, se olvide de sus presiones y concentre sus mejores esfuerzos en la búsqueda de solución a los llamados “*problemas internos*”. Ese fue, al menos, el consejo que le dio al presidente Lobo el enviado norteamericano Craig Kelly en su más reciente visita pública a Tegucigalpa (03 y 04 de mayo). Las recientes visitas a Colombia (para despedirse del presidente saliente Álvaro Uribe) y a Perú (para agradecer al mandatario Alan García por su apoyo) han dejado un sabor de victoria pírrica en los círculos diplomáticos de la Cancillería.

Quizás por todo ello, el presidente Lobo ha acudido a un apoyo insospechado, sobre todo para sus colegas partidarios: ha pedido a Jorge Arturo Reina, ex embajador del gobierno de Zelaya en las Naciones Unidas, que se convierta en su “*embajador itinerante*”, dependiente directamente del Despacho presidencial, para gestionar acercamientos y deshielo en las relaciones con los países del Cono sur (especialmente Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay) y, eventualmente, con la República Popular China. O sea que Lobo le está apostando a la diplomacia personal, privada y discreta, casi al margen de su propio Canciller y también aspirante presidencial Mario Canahuati.

## Sigue la conflictividad social

La confluencia de tantos grupos declarados en huelga de hambre en los espacios públicos del parque central, la planta baja del Congreso Nacional y las instalaciones de la Universidad Nacional, es una muestra clara del alto nivel de conflictividad que caracteriza en estos momentos a la sociedad hondureña. Es un hecho inédito por sus proporciones y significado político. Nunca antes en la historia política del país se había producido una concentración similar de tantos huelguistas.

En el caso de la Universidad Nacional Autónoma, los miembros del sindicato se han declarado en huelga de hambre (inició el 27 de abril y dura ya más de un mes, con relevos temporales y calculados de los protagonistas) exigiendo el reintegro de más de cien trabajadores despedidos por haber participado en paros ilegales y boicot contra el funcionamiento normal de la institución académica (en el año 2007 el sindicato llevó a cabo 13 acciones de “tomas” de las instalaciones universitarias para interrumpir las labores administrativas y académicas; en 2008 fueron 11 “tomas”; en 2009 se perdieron 45 días de clases por las mismas razones y en lo que va del 2010 los sindicalistas han interrumpido las labores durante seis semanas, poniendo en precario el principio de autoridad que la nueva rectora, Julieta Castellanos, se ha propuesto restaurar a como dé lugar).

Los maestros que están en huelga de hambre desde mediados del mes son ex Directores departamentales del sistema educativo que han sido despedidos de sus empleos para abrir espacio a los nuevos aspirantes nacionalistas que buscan un refugio en las planillas salariales del Ministerio de Educación. El ministro del ramo, el antiguo dirigente magisterial Alejandro Ventura, es militante activo del partido Nacional y se afana por favorecer a sus correligionarios, aplicando medidas de carácter sectario y clientelar que violentan la estabilidad laboral de sus propios colegas maestros. Esta es una muestra típica de la politización partidaria de las instituciones, en este caso del sector educativo público.

Por su parte, los campesinos de la región del Bajo Aguán, que se han declarado en huelga de hambre, pertenecen a varias cooperativas de la zona que no resultaron beneficiadas con el reciente acuerdo firmado entre el gobierno y los dirigentes del Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguán (MUCA). Los protestantes han sido desalojados recientemente (el día 20) de las tierras que habían ocupado, muchas de ellas pertenecientes supuestamente al empresario de origen nicaragüense René Morales, uno de los principales plantadores, junto con Miguel Facussé, de palma africana en el área. Este es un **nuevo conflicto agrario**, aunque no está totalmente desvinculado del viejo conflicto que encontró solución parcial mediante el Acuerdo firmado a mediados del mes anterior.

Los otros dos problemas que daban sustento a la huelga de hambre de los jueces despedidos y de los supuestos o reales padres de familia que reclamaban de los maestros el cumplimiento de los 200 días de clase por año, se han disuelto por sí solos, una vez que los magistrados de la Corte Suprema ratificaron los despidos y luego que, en el caso de los padres de familia, se hiciera evidente la indiferencia y casi rechazo que su protesta había generado.

También se han producido protestas callejeras de los gremios magisteriales, incluyendo movilizaciones a nivel nacional, así como plantones y reclamos, con crucifixiones fingidas incluidas, frente a Casa Presidencial por parte de los grupos indígenas leccas, junto a paros momentáneos de labores de los empleados públicos en el área del Sector salud, en el Registro Nacional de las Personas, en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y algunas Municipalidades. En el caso específico de los maestros, el gobierno enfrenta serios problemas para cumplir con sus demandas, entre las que resaltan dos: a) la discusión y búsqueda de consenso en torno a la nueva Ley General de Educación, que ya se encuentra en manos del Poder Legislativo (la normativa vigente data del año 1963), y b) el pago de la deuda de 3,640 millones de lempiras (unos 192 millones de dólares) que el gobierno de facto de los golpistas dejó de pagar al Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA) en sus siete meses de duración. A fines de enero de este año, la deuda todavía ascendía a 168 millones de dólares, debiendo el gobierno pagar una cuota mensual de 20 millones de dólares para poder capitalizar y evitar la quiebra del instituto de pensiones de los maestros.

La conflictividad y las protestas están en su mejor apogeo, afectando gradualmente cada vez más los niveles de gobernabilidad política y social en el país.

### **La economía y sus inciertos pronósticos**

**A**provechando la llegada de la Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que vino al país (17-27 de mayo) para hacer una nueva revisión de las cuentas oficiales, el Banco Central de Honduras (BCH) presentó públicamente el nuevo Programa de política monetaria para el periodo 2010-2011, según el cual se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2,2 y 3,2% en este año, con una tasa inflacionaria que no supere el 6% (en abril ya era de 2,3%) y un déficit fiscal estimado para el mes de diciembre de 4,1% del PIB (en el año 2009 alcanzó un poco más del 6%).

La mayor preocupación del BCH, según palabras de su presidenta María Elena Mondragón, es el aumento de la deuda interna para poder financiar el actual déficit fiscal y pagar los elevados intereses millonarios (tres mil millo-

nes de lempiras, unos 158 millones de dólares, por año) por los bonos emitidos o renegociados por el gobierno de facto anterior. Sin el apoyo de los organismos financieros internacionales, el gobierno lobista no podrá hacer frente a estos desafíos. De ahí la urgencia vital de llegar a un acuerdo lo más pronto posible con el FMI. En esta perspectiva, el gobierno nombró sus nuevos representantes ante el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Cosenza y Marlon Tábora respectivamente, ambos hombres de confianza del ex presidente Ricardo Maduro.

La Misión visitante, al marcharse, hizo público su comunicado de prensa habitual con las recomendaciones tradicionales: controlar el gasto público, focalizar los subsidios, rescatar las empresas estatales en situación financiera difícil (ENEE, HONDUTEL, etc.), reducir la planilla salarial, etc., agregando su propio pronóstico sobre el crecimiento económico en el 2010: 2%.

Las reservas internacionales netas, al 20 de mayo, ascendían a la suma de 2,137 millones de dólares, unos 21 millones más que en diciembre de 2009. Las remesas familiares, aunque no han crecido mucho, al menos tampoco han descendido en forma alarmante, tal como se esperaba a finales del año anterior.

La firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea a mediados del mes en la Cumbre de Madrid, ha abierto una ventana de esperanzas, especialmente entre los empresarios de la industria maquilera, los cafetaleros y los productores de carne, a diferencia de los azucareros y los empresarios de la industria láctea que no quedaron muy satisfechos con los términos de la negociación y sus resultados.

Las recaudaciones en base al impuesto sobre la renta no llenaron las expectativas de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), al recoger 600 millones de lempiras menos (unos 32 millones de dólares) de lo que se esperaba. Por su parte, la Cámara de la Industria de la Construcción reveló que ese rubro, fuente fundamental de empleo, ha caído en un 32% en lo que va del año.

Para cerrar el círculo del pesimismo económico, a finales del mes la tormenta tropical Agatha provocó inundaciones y daños severos en toda la infraestructura del país, destruyendo más de diez mil manzanas de granos básicos y ocasionando pérdidas en la agricultura por unos 300 millones de lempiras (más o menos 16 millones de dólares), según cálculos preliminares de las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (SAG).

# JUNIO 2010

---

## La situación política

**E**n este mes, el pasado día 28, se cumplió el primer aniversario del golpe de Estado que derrocó al gobierno del ex presidente Manuel Zelaya y abrió una etapa de crisis y convulsión política permanente en la sociedad hondureña. Con motivo de la fecha, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) convocó a manifestaciones callejeras pacíficas en las principales ciudades del país y, una vez más, tuvo oportunidad de mostrar su fuerte poder de convocatoria y capacidad de movilización organizada. Miles de personas (en Tegucigalpa se estima que marcharon más de cien mil “*resistentes*”) desfilaron en todo el país condenando el golpe de Estado y a sus autores, al tiempo que reclamaban la pronta convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y el retorno incondicional del ex presidente Manuel Zelaya.

En el mitin celebrado en Tegucigalpa participó activamente la ex primera dama Xiomara de Zelaya, quien vino directamente desde la República Dominicana para traer el mensaje enviado por su esposo, el exiliado presidente Zelaya. La presencia de Xiomara en la manifestación sirvió para atizar los rumores sobre su posible lanzamiento como aspirante a la presidencia de la República en representación del liberalismo zelayista agrupado, fundamentalmente, en las filas del FNRP. La idea de convertir a la ex primera dama en la heredera política de su esposo está cobrando cada vez más fuerza en las filas de la llamada Resistencia liberal, en momentos en que surgen por doquier numerosos aspirantes a convertirse en candidatos presidenciales del partido para las elecciones de noviembre del año 2013: Elvin Santos, que intenta repetir; Edmundo Orellana, Yani Rosenthal, Carlos Eduardo Reina, Rasel Tomé, Gloria Oquelí, etc. Aunque todos lo niegan, no hay duda que todos están haciendo desde ahora su labor proselitista en las bases liberales para tener opciones de triunfo en las elecciones internas y primarias que deberán celebrarse un año antes de las generales, es decir en noviembre de 2012.

Manuel Zelaya, líder indiscutible del liberalismo antigolpista y de buena parte de los miembros no liberales del FNRP, es actualmente el gran elector dentro del partido Liberal (PL). Su peso específico y la influencia de su liderazgo serán definitivos al momento de inclinar la balanza a favor o en contra de cualquiera de los pretendientes liberales a la silla presidencial.

Esta es una de las razones, entre muchas otras, por las cuales el retorno de Zelaya resulta tan polémico y controversial al interior del PL. Los dirigentes de la vieja guardia liberal -Carlos Flores, Rafael Pineda Ponce, Jaime Rosenthal, el propio Roberto Micheletti, etc.-, por causas distintas aunque muy obvias, se muestran reticentes o abiertamente opuestos al regreso del ex presidente, celosos como están de la popularidad de éste y vigilantes para cuidar sus propios cotos de influencia, grande o pequeña, en las filas del liberalismo. Entre más se prolonga la incertidumbre sobre el retorno triunfal de Zelaya, mayor es la angustia y la confusión al interior del que debiera ser el principal partido de la oposición política.

De ahí, pues, que el eventual retorno de Manuel Zelaya al territorio nacional esté lejos de ser *“un caso cerrado”*, como dijo el presidente Lobo, o *“un tema que ha dejado de ser crítico”*, como lo calificó Arturo Valenzuela, secretario adjunto de Estados Unidos para América Latina, desde Washington. Lo cierto es que, al decir de Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, el *“caso Zelaya”* sigue siendo clave para la reconciliación nacional y el posible reingreso de Honduras en la organización continental.

Coincidiendo con el primer año del golpe de Estado, el escenario político se vio más agitado que de costumbre y el clima de crispación se intensificó de nuevo. A ello contribuyeron las marchas callejeras del FNRP, la instalación, el propio día 30, de la llamada Comisión de Verdad (siete representantes, dos nacionales y cinco extranjeros), una especie de instancia paralela que la Resistencia decidió crear en oposición abierta a la considerada oficialista Comisión de la Verdad que fuera inaugurada por el presidente Porfirio Lobo el pasado día 04 de mayo, y la reaparición de Roberto Micheletti en las pantallas de la televisión local y en un foro empresarial en la capital salvadoreña.

Además de estos hechos, ya de por sí suficientes para atizar el fuego de la controversia, el propio presidente Lobo había escandalizado el escenario nacional el día 09 al denunciar la existencia de una trama golpista en contra suya. *“Tengo información detallada, dijo Lobo, ... me quieren quitar (pero) ya los tengo ubicaditos (sic), no se engañen con mi sonrisa”*, advirtió al final. Los supuestos conspiradores serían miembros del propio partido Nacional (PN) y también del PL y otros sectores extrapartidarios. Al calificar la ideología de los complotistas, el presidente los describió como un *“tutifruti”*, es decir una mezcolanza variada de ideas y opiniones (curiosamente, a uno de

---

los supuestos complotistas, el liberal Enrique Ortez Colindres, se le conoce en el ambiente político por el sobrenombre de *"tutifruti"*). Aunque los denunciados pretendieron disminuir el impacto de la denuncia presidencial, lo cierto es que las declaraciones de Porfirio Lobo pusieron el dedo en la llaga y alimentaron al máximo el clima ya de por sí crispado y convulso del mundillo político local. Cuando el diputado nacionalista Rodolfo Irías Navas, uno de los supuestos conspiradores, calificó la denuncia como una broma presidencial, Lobo salió de inmediato al paso con una declaración tajante: *"Yo no bromeo con cuestiones de Estado"*.

El ex presidente Zelaya, por su parte, también aportó su cuota de polémica en la confrontación general. En una carta enviada a los militantes del FNRP, traída y leída por su esposa Xiomara, acusó al gobierno de Estados Unidos de ser el responsable principal del golpe de Estado y el primer obstáculo para su posible retorno a Honduras. De paso, aprovechó la ocasión para volver a descalificar la Comisión de la Verdad instalada por el gobierno de Porfirio Lobo el 04 de mayo y brindar todo su respaldo a la otra, la autollamada Comisión de Verdad, organizada por los grupos de derechos humanos ligados al FNRP el día 30 de junio. De acuerdo a la versión de Zelaya, los norteamericanos, especialmente los sectores más duros, los *"halcones"* del Pentágono con base en Palmerola, serían los principales organizadores del golpe de Estado que, posteriormente, fue ejecutado por *"hondureños inexpertos y torpes"*. Según esta nueva versión, la conspiración golpista sería de inspiración externa y los cómplices locales quedarían reducidos a la simple categoría de *"ejecutores nacionales"*.

La Embajada de los Estados Unidos y el propio embajador Hugo Llorens calificaron las denuncias de Zelaya como *"simplemente absurdas"*. Los dirigentes del FNRP, en cambio, celebraron la contundencia de la denuncia zelayista y respaldaron totalmente sus afirmaciones. La decisión de denunciar a Estados Unidos como responsable por el golpe de Estado parece responder a una nueva tendencia del discurso zelayista, más acorde con el lenguaje y las motivaciones de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) que con la realidad de los hechos y la versión inicial de lo acontecido el 28 de junio del año 2009.

Esta *"nueva"* denuncia de Zelaya se produce justo en el momento en que se están llevando a cabo discretas negociaciones para facilitar su regreso al país y abrir las puertas de la OEA al reingreso de Honduras en la misma. Luego de que la OEA decidiera, en su reciente reunión de Lima, Perú, conformar una comisión especial para que dictamine si el gobierno hondureño ha cumplido ya con sus compromisos y, por lo tanto, reúne los requisitos indispensables para ser readmitido en la misma, tanto el presidente Lobo como el ex presidente Zelaya han nombrado representantes para que negocien los términos de un posible acuerdo que facilite el dictamen de la comi-

sión de la OEA. Por la parte oficial del gobierno lobista el nombrado fue Arturo Corrales, el antiguo negociador de Roberto Micheletti en el Acuerdo Guaymuras o Pacto Tegucigalpa/San José, mientras que por Zelaya los designados fueron Jorge Arturo Reina, Mayra Mejía y Víctor Meza, también antiguos negociadores del Acuerdo Guaymuras.

Corrales ha viajado a Washington en dos ocasiones en lo que va del mes para negociar con la OEA. Por su medio, el gobierno de Lobo se ha comprometido a facilitar al máximo el retorno de Zelaya, eliminando o destrabando las complicaciones jurídicas que el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia han creado para dificultar la llegada del ex presidente derrocado. Ha prometido eliminar al menos cuatro de los seis casos que reconocen haber incoado en contra de Zelaya. Es en este contexto en el que debe entenderse el comunicado de prensa emitido por el Ministerio Público el pasado día 29, según el cual ya no habría más trabas ni amenazas en contra del retorno de Zelaya. La ambigüedad del texto y el reducido poder de decisión del Ministerio Público sobre resoluciones que son competencia de los tribunales de justicia, convierten al comunicado en un documento dudoso y, por decir lo menos, sospechoso. Los abogados zelayistas dudan de sus verdaderas intenciones y lo califican de *"trampa"* y *"maniobra engañosa"* para embaucar a Zelaya. Éste, por su parte, no confía en las promesas de Lobo, sobre todo si se toma en cuenta que su principal negociador (de Lobo) es Arturo Corrales, personaje de escasa credibilidad, reconocido partidario del golpe de Estado y consejero cercano de Roberto Micheletti.

A pesar de la gravedad de la situación, lo incierto de las negociaciones en marcha y la urgencia por resolver el tema de la reinserción en la comunidad internacional, el presidente Lobo y algunos de sus cercanos colaboradores no vacilaron en abandonar el país y permanecer fuera durante dos semanas, disfrutando del campeonato mundial de fútbol en la lejana Sudáfrica. La frivolidad de su conducta y la ligereza de su actuación sirvieron para que muchos pusieran en duda la veracidad de sus denuncias sobre la conspiración para llevar a cabo un nuevo golpe de Estado.

Así están las cosas cuando llega el final del mes de junio, primer semestre del gobierno de Lobo, sin que éste haya podido demostrar todavía la suficiente voluntad y coherencia políticas que el país requiere, para empezar a salir de la grave crisis política, fiscal y económica en que se encuentra sumido.

## **El tema de los derechos humanos**

**M**ientras el presidente Lobo permanecía fuera del país, la influyente Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) pidió públicamente a los países de la OEA negar el reingreso de Honduras a esa organización internacional, mientras no mejorara sustancialmente la situación de los derechos humanos en el país centroamericano. Al mismo tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo dependiente de la OEA, demandaba del gobierno hondureño medidas de protección especial para doce periodistas de Radio Progreso, la emisora de la Compañía de Jesús (Jesuitas) que opera en el norte del país (Departamento de Yoro).

Casi al mismo tiempo, el hijo mayor de Roberto Micheletti, de nombre Aldo, conduciendo en estado de ebriedad en horas de la madrugada en su ciudad natal, El Progreso (sede, para más señas, de la radio jesuita), atropelló a cinco personas y causó la muerte de una de ellas. Abandonó presuroso la escena del accidente y, posteriormente, culparon a uno de los miembros de su guardia personal de ser el responsable del delito, en una prueba más de la protección especial de la que disfruta Micheletti y su familia en un clima de creciente y repudiable impunidad.

En este mismo mes, Roland Valenzuela, un médico que ocupó cargos importantes en el gobierno de Manuel Zelaya, de quien era un cercano amigo, murió abatido a balazos en un bar de San Pedro Sula. El asesino, un empresario local de origen árabe, logró escapar y sigue prófugo de la justicia. Lo truculento del caso, que genera rumores y sospechas, es que días antes Valenzuela había dado explosivas declaraciones a una radioemisora de la localidad, en las cuales denunciaba la trama golpista, involucrando a empresarios de origen árabe, el gobierno de los Estados Unidos y reconocidos políticos tradicionales de ambos partidos. De acuerdo a la denuncia de Valenzuela, los golpistas habrían contado con la eficaz acción coordinadora de una antigua agente de los servicios de inteligencia militar, la oficial retirada Jackeline Foglia Sandoval, una hondureña, hija de padre estadounidense (AntohnyFoglia) y egresada de la Academia militar de West Point, con amplios vínculos con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y los gremios empresariales hondureños. La Foglia, quien se desempeñaba entonces como funcionaria de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, ha sido en el reciente pasado presidenta de la Cámara de Comercio Honduro-Americana y en los años ochenta del siglo pasado trabajó como ayudante de la Agregaduría militar de la embajada de Honduras en Washington. Sus estrechas relaciones con la inteligencia militar (C-2) de las Fuerzas Armadas son hartamente conocidas, de la misma manera que sus vínculos con la embajada norteamericana y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos.

Al margen de la veracidad que puedan contener las denuncias de Valenzuela, lo cierto es que su muerte violenta días después de haberlas divulgado le agrega un velo de misterio y sospecha al crimen y lo convierte en una pieza más del tablero de confusión y dudas que hay en el país.

Ante este clima tan preocupante en materia de derechos humanos e impunidad, el presidente Lobo ha pedido -y recibido- ayuda profesional por parte de gobiernos extranjeros, especialmente Estados Unidos, para investigar profesionalmente la muerte de varios periodistas (al final de este mes ya suman nueve los casos), asesinados en circunstancias misteriosas. También ha solicitado auxilio, o está por hacerlo, al gobierno español para organizar una Oficina presidencial que habrá de ocuparse del tema de los derechos humanos, una decisión necesaria y correcta ante la inoperancia y complicidad golpista del Comisionado Nacional de los derechos humanos, Ramón Custodio.

### **La conflictividad social**

**P**or si los conflictos políticos y las constantes violaciones a los derechos humanos fueran pocos, el gobierno de Porfirio Lobo tiene también que lidiar con una creciente conflictividad social que amenaza con desbordar los niveles manejables de la ingobernabilidad política.

El viejo tema del conflicto agrario del Bajo Aguán, que se creía ya superado luego del Acuerdo alcanzado entre las partes hace dos meses, ha vuelto a cobrar presencia, esta vez protagonizado por cuatro grupos (cooperativas) campesinos disidentes, que no firmaron el Acuerdo anterior y persisten en demandar más tierras de las plantaciones que reclaman como propias los empresarios Miguel Facussé, René Morales y Santiago Canales. De los 28 grupos existentes, cuatro se niegan a reconocer los términos del Acuerdo alcanzado y se mantienen en rebeldía. El día 03 se produjo un enfrentamiento entre campesinos armados y guardias privados de los empresarios junto a policías nacionales; el resultado fue un policía muerto y cinco heridos de ambas partes. El desalojo se llevó a cabo, pero a costa de la sangre de hondureños enfrentados por la tierra.

Pocos días después, Miguel Facussé anunció el despido de 500 trabajadores que laboraban en las fincas de palma africana ocupadas por los campesinos, un hecho que creará más desempleo y descontento en la zona. Los campesinos despedidos están enfrentados con los campesinos ocupantes de las tierras en disputa, a quienes culpan por la pérdida del empleo. Se avecinan peleas entre los mismos campesinos.

---

Para complicar más las cosas, el Comité Coordinador de Organizaciones Campesinas (COCOCH), la alianza más importante dentro del campesinado hondureño, decidió pasar a la ofensiva y se apoderó por la fuerza de las oficinas principales del Instituto Nacional Agrario (INA) el último día del mes, en demanda de cumplimiento del polémico decreto 18/2008, que autoriza la expropiación de tierras incultas que no están cumpliendo su *"función social"*. La aplicación de este controversial decreto, aprobado en el tercer año de gobierno de Manuel Zelaya, ya generó en el pasado fuertes choques con los grupos campesinos organizados y creó un clima de peligrosa tensión en el agro.

El INA, dirigido por el ex candidato presidencial izquierdista (Unificación Democrática-UD) César Ham, no las tiene todas consigo. También enfrenta la oposición de su Sindicato de trabajadores, el SITRAINA, que lo acusa de graves violaciones a la legislación laboral y de intentos perversos por *"politicizar partidariamente"* la institución, es decir utilizarla para fines proselitistas de Ham y su grupo de la UD.

Miguel Facussé, quien ya debería tener suficientes problemas con el conflicto del Bajo Aguán, también tiene problemas en la zona sur del país, en las costas del Golfo de Fonseca, en donde está enfrentado a grupos de pobladores que lo acusan de quererlos despojar de sus tierras. La última acción llevada a cabo por los guardias privados de Facussé, fue la irrupción violenta para clausurar y destruir la radioemisora comunitaria de Zacate Grande, un medio de comunicación alternativo de los grupos de pobladores en protesta.

En el Sector de la salud pública, el nuevo ministro, Arturo Bendaña, un funcionario más propenso a las luces de las cámaras que al buen desempeño de sus funciones, ha generado más problemas de los que encontró. Varias secciones sindicales se han declarado en huelga, demandando mejoras salariales, en momentos en que una epidemia de dengue, que ya ha provocado más de 20 muertos, ataca al país. La situación se ha vuelto crítica y caótica en los hospitales del país.

El gobierno sigue sin definir los términos del salario mínimo, es decir sin fijar la tasa de aumento correspondiente a este año. A pesar de que la ley establece que la nueva tarifa del salario mínimo debe estar fijada antes del mes de abril, hemos llegado a junio sin que el presidente Lobo haya decidido tomar al toro por los cuernos y fijar unilateralmente el monto del salario, en virtud de que las partes (empresarios y sindicatos) no fueron capaces de llegar a ningún arreglo en sus interminables y fracasadas negociaciones, que comenzaron desde el mes de enero pasado.

Para agravar la situación, el número de repatriados desde el extranjero por su condición de migrantes indocumentados supera ya los 22 mil, sumándose de inmediato y agravando de esa forma la crisis del desempleo que vive el país: un millón 300 mil subempleados y 101 mil desempleados totales, en medio de una población económicamente activa (PEA) de tres millones 300 mil personas (más de un millón están ubicados en mercados laborales del extranjero, especialmente de Estados Unidos), según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), organismo que también se encargó de avisar que ya la población hondureña ha llegado a los ocho millones, 51.7% mujeres y 48.3% hombres. El 47% son menores de 18 años y sólo 465 mil hondureños son mayores de 60 años (tercera edad). Honduras sigue siendo un país excepcionalmente joven, en donde el 34% de su población sobrevive con menos de un dólar diario (19 lempiras).

# JULIO 2010

---

## La situación política

**E**l mes comenzó con uno de los principales acontecimientos políticos del año: la celebración de la independencia de los Estados Unidos, una fiesta que suele congregarse a toda la clase política local y sirve, entre otras cosas, como una especie de termómetro para medir el nivel de relaciones de cada político con la legación diplomática estadounidense. Ser invitado a la fiesta es la mejor prueba de que el afortunado tiene buenas relaciones con la Embajada norteamericana y que, al menos, no corre el riesgo inmediato de perder el visado que le permita entrar libremente al territorio de Estados Unidos.

En esta ocasión, los norteamericanos mostraron, una vez más, su amplio poder de convocatoria y reunieron a golpistas y antigolpistas, liberales y nacionalistas, ex funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya (su hijo mayor, Héctor, estaba entre los invitados, mientras su padre culpaba públicamente al gobierno norteamericano de ser el autor intelectual del golpe de Estado del 28 de junio de 2009) y los principales representantes del gobierno actual, incluyendo al propio presidente Porfirio “Pepe” Lobo.

La fiesta en sí misma y la calidad de sus invitados sirvieron, además, para mostrar el afán de los diplomáticos norteamericanos por promover una reconciliación pronta en la sociedad hondureña, que les permita con urgencia reconstruir el maltrecho equilibrio político que quedó hecho añicos como consecuencia del golpe de Estado. Tanto Hugo Llorens como sus más cercanos colaboradores no ocultan su ansiedad por revivir el antiguo centro político, reincorporando a los liberales al escenario para alcanzar de nuevo el necesario balance que permita aunque sea niveles mínimos de tranquilidad y gobernabilidad política.

Pero la tarea de reconstruir el equilibrio político luce cada vez más difícil y complicada. Los liberales están muy divididos entre sí y su estructura partidaria ha quedado tan fragmentada y débil, que le impide convertirse en el partido de oposición que el equilibrio del sistema demanda y necesita. Sólo la celebración de elecciones internas anticipadas les podría permitir a los

liberales escoger un nuevo Consejo Central Ejecutivo, dotado de la suficiente legalidad y legitimidad para dirigir al partido y devolverle su liderazgo nacional.

Pero para llegar a ello, los liberales, golpistas y antigolpistas, necesitan la presencia y el liderazgo de Manuel Zelaya, el único líder con dimensión nacional que existe actualmente en el seno del que debería ser el principal partido político de la oposición. Zelaya se ha convertido en algo así como el gran elector en las filas liberales. Su bendición política será el factor clave para ungir al nuevo candidato o candidata liberal en las próximas elecciones presidenciales de noviembre de 2013. Su retorno al escenario político local es la clave para que los liberales recuperen la influencia y el peso específico que siempre han tenido en la escena nacional.

Sin embargo, es bueno saber que no todos los dirigentes liberales quieren el inmediato regreso de Zelaya, aunque todos se pronuncian favorablemente en público. Liberales de la vieja guardia como el ex presidente Carlos Flores (1998-2002), Rafael Pineda Ponce, el propio Roberto Micheletti o el frustrado ex candidato presidencial Elvin Santos y su familia, no quieren que Zelaya regrese porque, al hacerlo, el ex presidente derrocado tomará en sus manos directamente las riendas del partido y su liderazgo se impondrá en todos los niveles y en todo el territorio nacional. Lo saben y le temen.

Mientras tanto, Zelaya ha aceptado ser el Coordinador nacional del Frente de Resistencia Popular, la variopinta alianza de decenas de grupos sociales (sindicatos, feministas, defensores de derechos humanos, líderes indígenas, ecologistas, organizaciones campesinas, antiguos comunistas e izquierdistas en general, etc.) que aglutina a la mayoría de los opositores al golpe de Estado y cuya capacidad de movilización sigue siendo impresionante y digna de tomar en cuenta, al momento de valorar el peso concreto de los diferentes actores políticos en la crisis hondureña.

Una vez que Zelaya aceptó la Coordinación general del FNRP, los liberales zelayistas, autollamados "*liberales en resistencia*", decidieron permanecer en las filas del Frente pero sin compartir los cargos de dirección, los que quedaron en manos de los antiguos izquierdistas, cada vez más radicales e intolerantes. Será hasta en el mes de diciembre cuando se elegirán de manera definitiva los cuadros de dirección del FNRP, una vez que hayan recolectado el millón y medio de firmas (ya cuentan con un poco más de un millón) para respaldar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que permita elaborar una nueva Constitución de la República. Será entonces cuando se producirá la prueba de fuerza definitiva entre los liberales en resistencia y los viejos dirigentes izquierdistas que, hoy por hoy, se han hecho con el control de la dirección del FNRP.

---

Mientras esto sucede al interior de la alianza antigolpista y zelayista, en las filas del partido Nacional (PN), teóricamente el partido gobernante, se ha desatado ya una carrera abierta para hacer proselitismo político de cara a ganar la nominación presidencial del partido en las elecciones generales de 2013. Son cuatro los principales aspirantes a convertirse en el sustituto de Pepe Lobo al frente de la Presidencia de la República: Juan Orlando Hernández, actual presidente del Congreso Nacional; Ricardo Álvarez, alcalde de la capital; Miguel Pastor, ministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, y Óscar Álvarez, ministro de Seguridad.

De los cuatro, los tres primeros son los que tienen las mayores posibilidades, especialmente Hernández y Álvarez. Todos ellos utilizan los recursos logísticos de las respectivas instituciones que dirigen para favorecer sus afanes proselitistas y organizar desde ya sus núcleos de apoyo en los diferentes municipios y departamentos del territorio nacional. Hernández, con el pretexto de “socializar” y consensuar con la gente los proyectos de ley de la reforma laboral y el de la creación de empresas mixtas con inversión pública y privada, se ha dado a la tarea de recorrer todo el país, en un abierto intento por construir una red de apoyo nacional a sus pretensiones presidenciales. El alcalde Álvarez, por su parte, ha entrado en una abierta competencia con el ministro Pastor por ganarse la simpatía de la gente mediante la reparación de las vías deterioradas y la reconstrucción de carreteras. El cuarto aspirante, el ministro Óscar Álvarez, es el que la tiene más difícil ya que no ha podido exhibir éxitos convincentes en su lucha contra la delincuencia común y organizada. Su frustración es mayor porque comprueba cada día que sus contrincantes le ganan cada vez más la carrera y ponen distancia considerable con respecto a su propia campaña proselitista.

El presidente Pepe Lobo, que todavía no se inclina por ninguno de los aspirantes en particular, no oculta su disgusto porque la carrera por la nominación presidencial haya comenzado en forma tan prematura, antes incluso de cumplir el primer año al frente de la Administración pública. Tradicionalmente se ha acostumbrado que los aspirantes den una tregua de al menos dos años al presidente de la república, permitiéndole gobernar sin mayores contratiempos partidarios y con el apoyo pactado de todos los posibles precandidatos presidenciales. Esta vez nadie parece interesado en respetar esa vieja norma de la política tradicional hondureña.

Como si no tuviera suficientes problemas con la crisis política que recibió en herencia envenenada, el presidente Lobo debe lidiar también con los celos y recelos de los prematuros aspirantes presidenciales, sus luchas internas y el desgaste adelantado del poder presidencial.

En los treinta años que lleva ya recorridos el proceso de transición desde los gobiernos autoritarios hacia la democracia, el presidente Lobo ha sido, sin duda alguna, el presidente más débil y solitario en el ejercicio del poder.

Criticado por la vieja guardia de su propio partido, cuestionado por los grupos cívicos de la ultraderecha golpista, presionado por los núcleos empresariales más conservadores y ambiciosos del país y, para completar el cuadro, rechazado y satanizado por la ultraizquierda del llamado Frente de Resistencia Popular, así como desconocido por varios influyentes gobiernos de Latinoamérica, Lobo se encuentra en una difícil encrucijada, atrapado entre sus propias vacilaciones y una muralla absoluta de incomprensión y cuestionamiento a sus escasas iniciativas políticas. A veces da la impresión de que todavía no ha empezado a ejercer su gobierno.

Como si todo esto fuera poco, el país ha sido víctima de las intensas lluvias de la temporada, que han provocado inundaciones, derrumbes y serios daños a la infraestructura vial del país, todo esto sin contar la mortal epidemia del dengue, una enfermedad que ha provocado ya más de cuarenta muertos y ha puesto al desnudo toda la fragilidad, los vicios y carencias del sistema de salud pública en el país.

### **La conflictividad que no cesa...**

**E**n medio de la crisis de gobernabilidad política en que se encuentra sumido el país desde el golpe de Estado del 28J, la ingobernabilidad social campea por sus propios fueros. Como ya es costumbre, sus destacados protagonistas son los principales gremios y sectores sociales organizados del país, en este caso los maestros de primaria y secundaria del sistema educativo nacional. Reclamando lo de siempre, el pago de salarios atrasados y la asignación transparente de los cargos intermedios en la estructura administrativa del sistema educativo, los maestros han paralizado el funcionamiento de la red de centros escolares, condenando a millones de niños a perder sus clases y permanecer en sus casas. A los reclamos tradicionales, esta vez han sumado la demanda de pago de la millonaria deuda que tiene el Estado con el Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA), una institución que fue virtualmente saqueada (más de tres mil millones de lempiras) durante los siete meses que duró el gobierno de facto de Roberto Micheletti (julio 2009 - enero 2010). Y ahora, para radicalizar más sus demandas, los maestros en huelga exigen la destitución del ministro de Educación, el otrora dirigente gremial Alejandro Ventura, un personaje socialmente muy cuestionado, con numerosos líos judiciales pendientes y órdenes de captura en suspenso.

Las constantes huelgas magisteriales han ocasionado la pérdida de 310 días de clase en los últimos cinco años, es decir que el país ha perdido un año entero de educación en el último quinquenio.

En el otro extremo del país, en la zona del Bajo Aguán, en la costa norte frente al Mar Caribe, los conflictos agrarios no dan señales de llegar a su fin.

---

Cuando se creía que ya se había encontrado una afortunada fórmula de solución mediante la firma del Acuerdo del pasado día 12 de abril, los problemas resurgen con más fuerza y violencia. Cuatro grupos campesinos reclaman más y nuevas tierras ocupadas por las plantaciones de palma africana, mientras antiguos obreros agrícolas de la que fuera próspera y muy productiva Empresa Asociativa de Isletas, reaparecen de nuevo reclamando parte de las tierras que ya habían vendido a los empresarios agrícolas de la zona. Ahora reclaman 750 hectáreas que, según ellos, nunca quedaron incluidas en la venta final que se hizo a favor de la compañía bananera norteamericana Standard Fruit Company. Todos estos reclamos e invasiones van acompañados de frecuentes choques entre los guardias privados de los empresarios agrícolas y los campesinos armados, provocando la muerte en ambos bandos y causando serios daños materiales a las fincas de producción de palma africana.

A nivel de las dos principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, el gobierno de Lobo ha debido enfrentar las protestas callejeras y los bloqueos de tráfico protagonizados por los taxistas urbanos, que reclaman el pago de millonarias sumas por concepto de bonos ofrecidos en gobiernos anteriores. Sus millonarios reclamos llevaron casi a la desesperación al ministro de Finanzas, William Chong Wong, quien, ante las críticas del presidente Lobo que, irónicamente le llamó "*llorón*", puso su cargo a disposición y afirmó de manera rotunda que el país no tiene dinero para seguir pagando subsidios dudosos y bonos clientelistas.

Por el reclamo de los mismos bonos, esta vez para los estudiantes de secundaria a fin de que financien parte del costo del transporte, los alumnos de educación media salieron a protestar en las calles, generando desorden y caos en una ciudad ya colapsada por el exceso de vehículos en sus estrechas calles. Los estudiantes se enfrentaron a la policía, que no escatimó el uso de la fuerza excesiva y la represión violenta. Una vez más el país apareció como un escenario constante de brutalidad policial y violación a los derechos humanos.

### **Delincuencia y corrupción**

**A** mediados del mes, quedó en evidencia la grave crisis financiera por la que atraviesa la otrora muy rentable Empresa Nacional Portuaria (ENP), que fuera sometida a un verdadero saqueo de sus finanzas en los seis meses del gobierno de facto. Tan sólo en el mes de enero, los funcionarios de Micheletti gastaron más del 50% de todo el presupuesto de la empresa asignado para el año 2010, entre ellos 56 millones de lempiras en compras directas que resultaron ser tan opacas como innecesarias.

La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) descubrió una red de “clonadores” de dispensas parlamentarias, que se utilizan para introducir vehículos de lujo libres de impuestos y gravámenes. Un total de 17 diputados del Congreso Nacional aparecen como beneficiarios dudosos de esos privilegios, a pesar de que ya en el mes de marzo el propio Congreso había prohibido la emisión de las mencionadas dispensas.

No es casual que un alto funcionario de la DEI haya sido víctima de un atentado criminal en los últimos días, cuando se desplazaba en función de control y supervisión contra los evasores de impuestos por una de las carreteras de la zona norte del país. Fue atacado a balazos en una emboscada y salió con vida afortunadamente.

Todo esto sucede en el año que el propio presidente Lobo declaró oficialmente al inicio de su Administración como el “año de la transparencia”, lo que no es obstáculo para que más de 70 instituciones del Estado, entre Ministerios, entidades descentralizadas, Direcciones y otras, se resistan todavía a cumplir con la ley y abrir portales electrónicos con la información básica de sus estructuras y funcionamiento. Este hecho ha sido denunciado públicamente por la directora del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Guadalupe Jerezano.

Junto a la corrupción generalizada y cada vez más extendida dentro del aparato estatal, el gobierno debe hacer frente a los peligrosos desafíos de la delincuencia común y organizada que no da tregua ni da indicios de retroceder. Las muertes violentas siguen a la orden del día: más de catorce personas mueren violentamente cada día (en El Salvador, en plena guerra civil en los años 80 del siglo pasado, el número de muertos diarios era de ocho personas). El número de secuestros crece, aunque la policía ha logrado dismantelar varias bandas de secuestradores y capturado a centenares de reconocidos delincuentes y pandilleros. La situación es tal que el sistema carcelario ha entrado en una fase de virtual colapso, lo que ha obligado al Consejo de ministros, a petición de Óscar Álvarez, ministro de Seguridad, a declarar el “estado de emergencia carcelaria” a nivel nacional. Los 24 centros de reclusión que existen el país (algunos ni siquiera son dignos de ese nombre) se han convertido en una verdadera bomba de tiempo debido al exceso y sobrecarga de población penitenciaria: 12,128 reos en 24 centros penales que sólo tienen capacidad para 8,230. Nueve de esos centros penales están, dijo el ministro Álvarez, “en estado de coma”, a punto de estallar.

# AGOSTO 2010

---

## La situación política

**E**l mes de agosto ha sido un mes en extremo difícil y azaroso para la Administración del presidente Porfirio “Pepe” Lobo. Las protestas sociales alcanzaron su punto más alto, y muy peligroso para la estabilidad política del país, en el transcurso de este mes, sobre todo en la segunda mitad, cuando decenas de miles de maestros de todo el país confluyeron en la ciudad capital para protestar contra el gobierno y exigir la destitución del actual ministro de Educación, el otrora dirigente gremial del magisterio Alejandro Ventura. Pero los maestros no sólo exigían eso: también pedían saldar las deudas acumuladas por parte del Estado con el Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA), el pago de salarios atrasados, el respeto al célebre Estatuto del Docente, el rechazo al anteproyecto de Ley General de Educación (un documento elaborado y “consensuado” a lo largo de los últimos seis años, sin que hasta la fecha los dirigentes magisteriales le hayan dado su respaldo y apoyo), la destitución de varios funcionarios intermedios y la celebración de nuevos concursos para aplicar a las plazas vacantes. Todo un conjunto abigarrado de demandas que volvían virtualmente imposible la negociación bilateral y la perspectiva de un acuerdo negociado.

Mientras se buscaba desesperadamente una fórmula de solución que permitiera el retorno de los maestros a sus aulas (se perdieron 46 días de clases, en un calendario ideal de 200 días), las manifestaciones callejeras alcanzaban su más alto nivel de expresión: choques violentos con la policía, atascamiento del tráfico urbano y un caos generalizado en la capital de la República.

Y todo esto sucedía en momentos en que el país prácticamente se caía a pedazos, como resultado de su propia vulnerabilidad ambiental ante las lluvias incesantes que siguen todavía cayendo sobre el territorio nacional. Inundaciones, resquebrajamiento de la infraestructura vial, destrucción de cosechas, viviendas, puentes, derrumbes en las zonas urbanas de mayor riesgo, damnificados y muertos. Eso y más, como la gravísima crisis provo-

cada en el sistema sanitario nacional por la epidemia del dengue (ya van 60 muertos, según los datos oficiales), ha debido sufrir Honduras durante este inquietante mes de agosto de 2010.

Desesperado ante la situación creada, el presidente Lobo no vaciló en reclamar públicamente a sus ministros por la indiferencia mostrada por muchos de ellos ante la crisis general y por su inexplicable renuencia a defender al gobierno ante las críticas y ataques de los medios de comunicación. *"Debo defenderme solo"*, reprochó el presidente a sus ministros, al tiempo que evidenciaba, con esas palabras, la tremenda soledad en que se encuentra en el ejercicio del poder. Criticado por los dirigentes de su propio partido, rechazado por la oposición aglutinada en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), sin la necesaria confianza en los círculos empresariales, y enfrentado a movilizaciones callejeras constantes y masivas, además de la posibilidad de una convocatoria a huelga general, el presidente Lobo da la impresión de encontrarse en una verdadera encrucijada, sin salidas visibles, caminando peligrosamente hacia la orilla de un precipicio cada vez más cercano y amenazante.

Su desesperante tardanza para encontrar una solución al espinoso asunto del salario mínimo, es decir fijar el porcentaje de aumento a ese salario que la ley obliga realizar a principios del año, ha colmado la paciencia de los dirigentes sindicales que, apresurados y sin medir las consecuencias de sus actos, han decidido convocar a una huelga general para el mes de septiembre en protesta por la demora en resolver lo del salario mínimo y en contra de la política económica del gobierno nacionalista. Todavía está por verse cuál es la verdadera capacidad de convocatoria de los viejos dirigentes sindicales, hace ya mucho tiempo divorciados de la dinámica social de sus bases y tranquilamente instalados en un ámbito cada vez más burocrático y privilegiado.

Hasta el momento, la convocatoria a huelga general ha sido el paso más audaz y desafiante por parte de la burocracia sindical ante el gobierno de Porfirio Lobo. Ni siquiera cuando se produjo el golpe de Estado del 28 de junio del año pasado, los sindicalistas llamaron a un paro general en protesta por el derrocamiento violento del entonces presidente constitucional Manuel Zelaya. Se limitaron a sumarse a las demás organizaciones del hoy constituido FNRP, sin mostrar autonomía en sus demandas políticas y sociales. Hoy, en cambio, cansados ya de esperar por una solución positiva al problema del salario mínimo (demandan el 15% de aumento, mientras los empresarios sólo ofrecían al inicio 3%; hoy ya retiraron esa oferta y se muestran renuentes a volver a la mesa de negociaciones), han optado por la huelga general, para lo cual han creado ya los respectivos Comités de huelga en los principales centros urbanos del país. Para mediados de septiem-

---

bre se sabrá en definitiva si son capaces o no de paralizar las empresas del Estado y los principales centros industriales del país.

El movimiento sindical ha perdido mucha de su antigua fuerza en los últimos años. El número de trabajadores sindicalizados ha disminuido dramáticamente, sobre todo después de que las grandes compañías bananeras redujeron el ritmo de sus actividades productivas y prefirieron centrar su atención en la comercialización del banano, más que en su producción directa, la que dejaron en manos de finqueros nacionales e independientes. La mayoría de los “grandes” sindicatos actuales no están concentrados en el espacio industrial y agrícola, sino en el área del sector público, en las principales empresas autónomas y descentralizadas del Estado como la telefónica, la compañía de electricidad, la de agua y saneamiento, la Universidad Nacional, la Empresa Nacional Portuaria, etc. Su capacidad de movilización no es muy grande y sus posibilidades de llevar a cabo una huelga general son, en realidad, muy débiles. Sin embargo, ya la han anunciado para mediados del próximo mes. Habrá que esperar para ver hasta donde son capaces de llegar los dirigentes sindicales en sus presiones al gobierno y cuán exitosas pueden resultar éstas.

La huelga general, en el contexto de la intensa convulsión social que prevalecía a mediados y finales del mes, aparecía como una amenaza real y muy preocupante. Sin embargo, ahora, cuando ya se ha logrado un acuerdo con los maestros en huelga y el gobierno ha podido, al menos por el momento, desactivar la protesta callejera del magisterio y lograr su retorno a las aulas de clase, la huelga general ya no luce tan inminente ni tan peligrosa para la estabilidad social y la tranquilidad económica del país.

En efecto, en la tarde del día 30, luego de largas y difíciles negociaciones, la Comisión representante del gobierno y los dirigentes magisteriales lograron llegar a un acuerdo básico, mediante el cual la Administración lobista se compromete a pagar las deudas atrasadas al INPREMA y reformar su marco normativo, revisar y corregir los nombramientos indebidos en las estructuras del sistema educativo nacional, respetar el Estatuto del Docente y retirar del Congreso Nacional el anteproyecto de Ley de Educación General, a fin de buscar nuevos puntos de consenso sobre el mismo. Por su parte, los maestros se comprometieron a volver de inmediato a clases y poner en marcha un calendario especial de horarios para recuperar el tiempo perdido. Lograron evitar la suspensión de pago por los días no trabajados pero, al mismo tiempo, vieron frustradas sus demandas de destitución del ministro de Educación, su ex compañero de luchas gremiales, Alejandro Ventura. El Acuerdo, previa aprobación por parte de una multitudinaria asamblea de maestros en huelga, entró en vigencia de inmediato y su cumplimiento será vigilado por diversas comisiones especiales creadas para los distintos puntos del documento final.

Con la firma de este Acuerdo, el gobierno de Pepe Lobo logra desmontar el principal problema del momento y devolver un poco de calma a las calles, aunque todavía le quedan pendientes otros problemas de menor calado, pero igualmente preocupantes y desquiciantes para la gobernabilidad política y social.

Para el caso, las invasiones de fincas productoras de palma africana en el Bajo Aguán han continuado y siguen generando choques violentos entre los guardias privados de los grandes empresarios agrícolas y los grupos de campesinos armados que custodian las tierras invadidas. El pasado día 29 los campesinos volvieron a invadir nuevas fincas, sumando unas tres mil hectáreas más a las zonas en disputa. Por lo visto, el Acuerdo que habían firmado las tres partes involucradas (el gobierno, los empresarios agrícolas y el llamado Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguán-MUCA) ha sido incumplido y cada vez sirve menos para resolver la crisis.

Los empresarios culpan al ministro Director del Instituto Nacional Agrario (INA), César Ham, ex candidato presidencial del partido izquierdista Unificación Democrática (UD), a quien consideran un agitador social, tan peligroso como audaz. En diferentes reuniones con el presidente Lobo han pedido su cabeza y exigido una solución radical a favor de los empresarios agrícolas Miguel Facussé, René Morales y Santiago Canales. En la más reciente reunión que sostuvieron con Lobo en Casa Presidencial, el día 30, los principales dirigentes de las cámaras empresariales del país, entre ellos dos prominentes banqueros -Jaime Rosenthal (Banco Continental) y Jorge Bueso Arias (Banco de Occidente)- volvieron a insistir en la destitución de Ham y se quejaron por el peligroso clima de *"lucha de clases"* que ha vuelto a tomar forma en el país, por culpa, dijeron, del exiliado ex presidente Manuel Zelaya.

O sea que Lobo sigue en medio de dos fuegos: por un lado, los maestros en huelga le exigen la cabeza del ministro de Educación, Alejandro Ventura, y, por el otro, los empresarios reclaman la destitución del ministro del INA, César Ham. A ninguno de los dos sectores ha decidido complacer, pero es evidente que la situación del presidente es cada vez más difícil y complicada.

Como resultado principal de la última reunión con los empresarios, se decidió crear una Comisión de enlace para plantear y resolver más rápidamente los desacuerdos y problemas que surjan entre los hombres de negocios y el gobierno nacionalista. La Comisión será encabezada por el ex presidente y próspero empresario Ricardo Maduro, miembro destacado del partido Nacional (PN) y un hombre cada vez más inclinado a posiciones ultraderechistas y conservadoras, según la opinión propia y privada del embajador de los Estados Unidos, Hugo Llorens. Maduro, un crítico cada vez más fuerte de la

---

gestión de Lobo, desempeñó un destacado papel en la realización del golpe de Estado y en las negociaciones políticas posteriores a la ruptura del orden constitucional.

En medio de todo este panorama tan crítico como confuso, el presidente Lobo y su equipo logró dar forma y presentar al público un ambicioso Plan de Promoción de las Inversiones (2010-2014) que, al menos en teoría, debería generar unos 350 mil nuevos empleos en el periodo señalado. La idea parece ir de la mano con la iniciativa del canciller Mario Canahuati, quien ha creado una sección especial y casi privilegiada dentro de la Cancillería para promover nuevas inversiones y buscar empresarios interesados en el exterior. Muchos colegas empresarios ven en la iniciativa de Canahuati una competencia desleal para favorecer la industria maquiladora en la que destaca su grupo familiar.

Al tiempo que hace esfuerzos por atraer inversiones extranjeras, el presidente Lobo ratificó en Consejo de ministros su facultad y decisión para adoptar medidas firmes, a fin de reducir sustancialmente el gasto público, cuyas dimensiones siguen siendo preocupantes e incómodas para las distintas misiones que suele enviar el Fondo Monetario Internacional (FMI). Preocupado por la sensible reducción de las recaudaciones tributarias, que suman ya unos 137 millones de dólares, el presidente ha decidido recortar drásticamente los gastos y excesos en el manejo del presupuesto nacional.

Esta decisión se produce en momentos en que aumentan los reclamos de la militancia de base del PN, que demanda puestos y empleos dentro de la Administración gubernamental. La vicepresidenta del Congreso Nacional y ex candidata presidencial del PN (1997) Nora Melgar, le reclamó personalmente al presidente Lobo por su indiferencia ante las exigencias de los llamados “*activistas*” y acusó a los funcionarios/militares que ocupan cargos importantes en el gobierno lobista de dar la espalda a los militantes del partido e ignorar sus peticiones.

Por su parte, del lado de los liberales, la supuesta “*oposición política*” del gobierno nacionalista, por fin el Consejo Central Ejecutivo dio a conocer el famoso y anunciado documento de evaluación de la Administración lobista en sus primeros seis meses de funcionamiento. El documento, tan anunciado como postergado, resultó un verdadero fiasco, comenzando por la propia ceremonia de presentación a la que no asistieron los principales dirigentes del partido Liberal (PL) ni, mucho menos, los representantes del sector zelayista. El contenido de la “*evaluación*” más parecía una crítica al gobierno de Zelaya que una valoración del régimen actual. Su tufillo golpista era inocultable y su afán por no provocar las iras del partido gobernante quedó plenamente en evidencia. Sus observaciones críticas al gobierno resultaron mínimas ante sus alabanzas al golpe de Estado y su virulenta condena con-

tra los países de América Latina, agrupados en la Unión de países de América del sur (UNASUR), que se resisten a reconocer la legitimidad política del gobierno de Porfirio Lobo.

Y precisamente en relación con UNASUR, la noticia sobre el posible nombramiento de Jorge Arturo Reina, ex ministro de Gobernación y ex representante del gobierno de Zelaya en la Organización de las Naciones Unidas, como embajador itinerante de Lobo, sólo sirvió para echar más leña al fuego de la inconformidad y el descontento de los frustrados militantes nacionalistas.

Como para rematar el problema y volver a colocar el dedo en la llaga, María Otero, Secretaria adjunta en el Departamento de Estado, visitó Tegucigalpa y aprovechó la ocasión para recordarle al gobierno su deuda pendiente en el tema de los derechos humanos. La Otero, hoy convertida en funcionaria de primera línea en el gobierno estadounidense, vivió en los difíciles años ochenta en Tegucigalpa, acompañando a su esposo Joe Eldridge, un abogado y ministro religioso destacado en la defensa de los derechos humanos, una labor que sigue cumpliendo al frente de una reconocida ONG en Washington. Los Eldridge/Otero tienen una simpatía especial por Honduras y, seguramente, mantendrán vigente en forma constante su preocupación por el tema de los derechos humanos en este país.

### **Los vaivenes de la economía**

**L**os diseñadores de la política económica del gobierno lobista siguen cifrando sus esperanzas en una cada vez más incierta y lejana recuperación plena de la economía norteamericana, que permita aumentar la demanda de productos locales y el incremento correspondiente de las exportaciones hacia el principal socio comercial de Honduras. Sin embargo, las señales que llegan desde el norte no son tan alentadoras y apuntan a un retorno, todavía más preocupante, de las consecuencias de la crisis financiera y económica internacional en el primer semestre del próximo año.

Ante las pocas expectativas de crecimiento de la inversión privada -y también de la pública-, los bancos siguen acumulando millonarias cantidades de dinero líquido, que no pueden prestar por la inseguridad jurídica prevalente o por una comprensible cautela ante la crisis de la economía y sus escasas posibilidades de recuperación. Hasta mediados del mes, la liquidez bancaria ascendía a la suma de 35,348 millones de lempiras, unos 1,860 millones de dólares, una cantidad demasiado importante como para no prestarle atención. Las peticiones de crédito se han reducido sustancialmente porque las inversiones están paralizadas y la incertidumbre y la desconfianza se han apoderado del mercado local. En circunstancias semejantes, es

---

comprensible que el desempleo crezca y el trabajo informal amplíe sus redes de operación. De acuerdo al ministro del Trabajo, el democristiano Felícito Ávila, el 43% de la Población económicamente activa (PEA), estimada en 3 millones 135 mil personas, está desempleada totalmente o subempleada.

Las remesas familiares no han sufrido mayores descensos, afortunadamente. A principios del mes eran de 1,447 millones de dólares, 41 millones más que a mediados del año 2009. El año pasado las remesas se vieron reducidas en 11%. Las reservas monetarias internacionales se han mantenido estables: 2,323 millones de dólares al 20 de agosto, una suma suficiente para cubrir el standard internacional de 3.3 meses de importaciones.

La Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), como si no fuera suficiente con la crisis del INPREMA (el instituto de previsión de los maestros), advirtió sobre la difícil situación en que se encuentra el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEM), a punto de hacer crisis. *“Está en estado de calamidad”*, dijo la CNBS.

Ante una situación semejante, es comprensible que el gobierno vacile tanto antes de decretar un incremento al salario mínimo, cuyas consecuencias, sin importar el monto final del mismo, tendrán una repercusión directa y fatal sobre las calamitosas finanzas públicas.

De igual manera, es comprensible la cautela del FMI, cuya última Misión anunció una próxima visita para el próximo mes y la posibilidad de firmar un acuerdo por 18 meses en el mes de octubre. O sea que cada vez se aleja más y más la perspectiva de un Acuerdo con el Fondo, que permitiría liberar urgentes desembolsos y el apoyo presupuestario que el gobierno necesita con desesperación y urgencia.

# SEPTIEMBRE

## 2010

---

### La situación política

**E**l mes de septiembre, señalado en el calendario cívico como el mes de las fiestas de independencia nacional, ha servido como escenario propicio para mostrar, una vez más, cuán dividida y fraccionada se encuentra la sociedad hondureña, que todavía no ha podido reponerse del profundo trauma causado por el golpe de Estado del 28 de junio del año 2009 (28J).

En efecto, con motivo de los desfiles del día 15 de septiembre, fecha de la independencia nacional, quedó en evidencia la profundidad de la polarización política existente en Honduras: dos manifestaciones paralelas dividieron a los hondureños en las principales ciudades del país; por un lado, la oficial, organizada por el gobierno de Porfirio Lobo, y, por el otro, la de la oposición aglutinada en el llamado Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

El gobierno celebró la independencia en el Estadio Nacional, con las gradas repletas de público, entre seguidores del partido de gobierno, empleados del Estado y simples curiosos afanados por presenciar los desfiles marciales de los colegios de educación secundaria. Mientras tanto, la llamada Resistencia popular, que abarca un amplio espectro de fuerzas políticas bajo el denominador común de su rechazo y condena al golpe de Estado del 28J, mostró su incombustible poder de convocatoria y reunió decenas de miles de partidarios en una marcha multitudinaria que concluyó pacíficamente en el parque central de la ciudad capital. Las dos demandas básicas de los marchantes eran las siguientes: la pronta convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar y aprobar una nueva Constitución política, y el retorno incondicional y seguro del ex presidente Manuel Zelaya y sus seguidores políticos que actualmente se encuentran en el extranjero.

Las manifestaciones del FNRP fueron pacíficas en todo el territorio nacional, con excepción de San Pedro Sula en donde la policía arremetió con violencia y uso excesivo de la fuerza contra los integrantes del Frente, destruyen-

---

do de paso las instalaciones de la Radioemisora Uno, muy conocida por sus posiciones críticas contra el gobierno, su permanente condena al golpe de Estado y sus llamados a favor del retorno del ex presidente Zelaya. La violencia policial produjo numerosos heridos, otros tantos arrestados y la muerte de un curioso que sufrió ahogo por los gases lacrimógenos. Las denuncias internacionales contra el gobierno lobista por violaciones a los derechos humanos se han multiplicado en las redes electrónicas a nivel mundial.

Al día siguiente, todavía bajo los efectos del triunfalismo por las multitudinarias marchas convocadas el día anterior, la dirigencia del FNRP convocó a una conferencia de prensa para presentar en público el resultado de cuatro meses de intensa labor proselitista a favor de la recolección de firmas para respaldar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y exigir el retorno seguro del exiliado ex presidente Zelaya. En cuatro meses de trabajo, los organizadores del FNRP lograron reunir una cifra impresionante de solicitudes: un millón 342 mil 876 boletas debidamente avaladas por la firma, el número de la tarjeta de identidad y la huella digital de los peticionarios. La cifra representa un poco más de la tercera parte del padrón electoral real y una suma superior al número de los votos (un millón 213 mil 695) obtenidos por la candidatura del actual presidente Porfirio Lobo en las controversiales elecciones generales de noviembre del año pasado. Sin duda alguna, la campaña de recolección de firmas ha sido un incuestionable éxito de la Resistencia y ningún político serio puede desestimar su importancia.

Aprovechando la euforia desatada por la presentación de las firmas, Juan Barahona, uno de los principales dirigentes del FNRP, anunció por primera vez su disposición a negociar con el presidente Lobo pero, eso sí, advirtió, únicamente sobre el tema de la Asamblea Nacional Constituyente y la fijación de la fecha para su inevitable convocatoria. Una agenda cerrada con demandas rígidas y un tono que más parece de provocación que de propuesta para un diálogo entre las partes. El presidente Lobo, por supuesto, no ha respondido todavía al “reto” lanzado por Barahona.

Al tiempo que se llevaba a cabo la presentación de las firmas, trascendió la noticia de que el ex presidente Zelaya había sido finalmente juramentado como diputado en el Parlacen (Parlamento Centroamericano), ocupando la curul que le corresponde por su condición de ex presidente constitucional de Honduras. Un triunfo más de la Resistencia y un golpe directo a las pretensiones de los partidarios del golpe de Estado que insistían en otorgar ese cargo al gobernante de facto Roberto Micheletti.

El ingreso de Zelaya en el Parlacen le acerca más al escenario político local y le garantiza un mayor protagonismo regional. Su posible retorno a Honduras cada vez luce más inminente, aunque él siga insistiendo en que primero deben ser anulados los procesos criminales que le han sido incoados por el

Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, dos instancias del Estado hondureño a las que Zelaya se niega a reconocer y exige su sustitución total.

Sin embargo, a pesar de estas tensiones inevitables y de la crispación que a veces prevalece en las relaciones de Zelaya y el gobierno de su paisano Porfirio Lobo, lo cierto es que poco a poco, al parecer, se van creando las condiciones para un posible diálogo entre el gobierno lobista y los dirigentes del FNRP. Al final, el tema clave será la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), una demanda que goza del prudente y matizado respaldo del propio presidente Lobo. Para llegar a ese punto, será necesaria mucha flexibilidad de ambos lados, pero hay indicios que ya apuntan en esa dirección.

Ya en el pasado Lobo ha dado sobradas muestras de pragmatismo y habilidad política para negociar con sus adversarios. Es un convencido de las virtudes del diálogo y tiene fama de hombre paciente y calmado, con mucho autocontrol y seguridad interior, virtudes derivadas de su afición declarada por las artes marciales. No debería sorprendernos si un buen día declara abiertamente su disposición a negociar la convocatoria de la Constituyente, proponiendo reformas a las leyes que rigen el sistema electoral y a las figuras del Plebiscito y el Referéndum. El presidente es capaz de tomar ventaja y convertir el reto de Juan Barahona en una beneficiosa oportunidad política para su gobierno.

Pero antes, Lobo deberá vencer la fuerte oposición de muchos dirigentes de su propio partido, el Nacional, que rechazan la idea de una ANC en la que tengan participación beligerante los miembros del FNRP. En una reunión llevada a cabo en los primeros días del mes, un grupo de dirigentes nacionalistas encabezados por el alcalde capitalino y presidente del partido, Ricardo Álvarez, junto a los diputados Rodolfo Irías Navas, Antonio Rivera Callejas y Celim Discua, reconocidos por su apoyo total al golpe de Estado, reclamaron al presidente Lobo por lo que consideraron sus "*veleidades izquierdistas*" y le recordaron que el partido Nacional ha sido siempre y debe seguir siendo un partido de derechas, sin inclinaciones ni gestos demasiado complacientes hacia la izquierda, especialmente hacia el FNRP. En esa reunión, el presidente se hizo acompañar por su, hasta hoy, principal aliado político, el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, y la influyente Ministra de la Presidencia y Designada presidencial María Antonieta Bográn. Pidió calma y paciencia a sus críticos, asegurándoles que las cosas van por buen camino y que no hay motivos reales para preocuparse. Al parecer, esa es una de las características del estilo de Porfirio Lobo: restarle importancia a las cosas, pedir calma, reclamar tolerancia y prometer soluciones prontas y favorables... Todo envuelto en una sonrisa compla-

---

ciente y ambigua, que no transmite certeza sobre el verdadero rumbo que habrá de tomar el presidente de la República.

Mientras esto sucede al interior del partido de gobierno, cada vez más dividido por las inocultables aspiraciones presidenciales de muchos de sus dirigentes, en el seno del partido Liberal (PL) las cosas no andan mejor. También ahí, aunque de manera un tanto discreta y solapada, existen ya varios aspirantes a convertirse en candidatos oficiales del partido para las elecciones de noviembre del año 2013. Con el pretexto de promover la unidad de las dispersas fuerzas liberales, varios aspirantes recorren el país promoviendo su propia imagen y reclutando adeptos. Entre esos aspirantes destacan los siguientes:

- **Yani Rosenthal**, ex ministro de la Presidencia en los primeros dos años del gobierno de Manuel Zelaya, hijo del banquero Jaime Rosenthal, un frustrado precandidato eterno a la presidencia de la República, y actual gerente de varias empresas del llamado Grupo Continental, propiedad de la familia Rosenthal; Yani es diputado por el PL y dirige una facción importante (unos 18 - 20 diputados) de la bancada liberal en el Congreso Nacional.
- **Edmundo Orellana**, ex ministro de Gobernación y Justicia, de Relaciones Exteriores y de Defensa en el gobierno de Manuel Zelaya. Fue el fundador del Ministerio Público (1994) y ha sido representante de Honduras en la Organización de las Naciones Unidas. Fue diputado en el Congreso Nacional y es actualmente catedrático universitario. Es un abogado que goza de merecido prestigio en el país, aunque encuentra serios rechazos en las filas del FNRP y la llamada Resistencia Liberal (liberales en el FNRP) que no le perdonan haber abandonado a Zelaya en los momentos más difíciles de la crisis previa al golpe de Estado (Orellana renunció al cargo de ministro de Defensa en la noche crítica del 24 de junio, tres días antes del golpe de Estado del 28J).
- **Carlos Eduardo Reina**, hijo de Jorge Arturo Reina, actual embajador itinerante, aunque no en ejercicio, del gobierno de Porfirio Lobo. Fue presidente de la Juventud Liberal y se mantuvo muy cerca del ex presidente Zelaya durante la crisis en la embajada de Brasil a partir de septiembre del año pasado. Se ha destacado como un activo organizador de la resistencia al golpe de Estado y promotor de cambios profundos en la doctrina del PL y en sus planteamientos programáticos. Lidera un grupo pequeño de liberales dentro del FNRP, aunque en los últimos días su influencia y peso específico van en notorio declive. Ha sido acusado de malos manejos de los

dineros de la Resistencia y la embajada de Estados Unidos le canceló su visado de ingreso al territorio norteamericano.

- **Esteban Handal**, empresario de las casas de juego (traganíqueles y casinos), propietario de un canal de televisión (JBN), pastor y predicador evangélico. Ha sido presidente de la Juventud Liberal y precandidato frustrado a la nominación presidencial en su partido. Sus aspiraciones, aunque están respaldadas por soportes económicos muy importantes (su hermano, José “*Chepito*” Handal, es considerado uno de los capos del narcotráfico en la zona norte del país), carecen del apoyo político necesario. Recientemente visitó a Zelaya en Santo Domingo para pedirle su bendición política.
- **Rasel Tomé**, abogado, acompañante de Zelaya durante el refugio en la embajada de Brasil y asistente suyo en los primeros meses del exilio en Santo Domingo. Tomé fue funcionario en el gobierno zelayista (Director de la Comisión de Telecomunicaciones, CONATEL, cargo en el que fue nombrado a petición expresa de Rafael Nodarse, empresario cubano de la televisión local con buenas influencias en el gobierno del Poder Ciudadano) y uno de los organizadores del FNRP, a raíz del golpe de Estado. Se considera a sí mismo como el delfín de Zelaya y su vocero autorizado. Goza de simpatías y aprobación en las filas de la Resistencia, pero no tiene el apoyo real de los dirigentes principales.
- **Elvin Santos**, ingeniero, candidato presidencial perdedor en las pasadas elecciones de noviembre/2009. Su vinculación con el ex gobernante de facto Roberto Micheletti y su evidente complicidad en el golpe de Estado le han generado el rechazo de una masa importante de liberales, que se negaron a votar por su candidatura, facilitando de esa manera el triunfo de Porfirio Lobo. Santos pertenece a una familia ligada a la industria de la construcción y las inversiones inmobiliarias, famosa por el disfrute constante de millonarios contratos estatales en los diferentes gobiernos de los últimos años. Aunque todavía no ha proclamado públicamente sus intenciones de buscar nuevamente la nominación presidencial en el PL, Santos no oculta sus intenciones de hacerlo y se considera a sí mismo como el líder natural del partido.
- **Xiomara Castro de Zelaya**, esposa del ex presidente y lideresa por esfuerzo propio en las filas del FNRP, en donde se le considera como una posible candidata presidencial capaz de aglutinar a las fuerzas dispersas y a veces confrontadas entre sí de la Resistencia popular. En las filas liberales/zelayistas tiene mucha aceptación y la consideran una persona que podría aglutinar a todos los liberales

---

enemigos del golpe de Estado. Su posible candidatura dependerá, en última instancia, de la decisión del ex presidente Zelaya.

Estos son los nombres que más suenan en estos momentos al interior de las filas liberales. Pueden existir otros con aspiraciones presidenciales -se menciona a la abogada Gloria Oqueli, ex presidenta del Parlacen-, pero sus posibilidades son menores y su relevancia pública no es todavía suficiente.

El partido Liberal ha quedado muy golpeado después de los acontecimientos del 28J. En sus filas hay un sector partidario del golpe de Estado que respaldó al gobernante de facto Micheletti y sigue profesándole obediencia y simpatía. En la bancada parlamentaria, un fuerte grupo de diputados liderados por José Antonio Saavedra, hombre incondicional de Micheletti y ex “*presidente*” de facto del Congreso golpista (junio 2009-enero 2010), continúan apoyando al golpe de Estado y oponiéndose a la renovación del partido. Su posición impide que los liberales puedan presentar un frente único de oposición con sus 45 diputados en el seno del Parlamento. Según versión de Zelaya, Saavedra entró en las planillas para diputado por el departamento de Valle debido a la presión ejercida en su favor por el mismo empresario cubano de la televisión Rafael Nodarse. El candidato preferido de Zelaya era otro, Virgilio Umanzor.

El Consejo Central Ejecutivo del PL (CCE), la máxima instancia de dirección en el partido, continúa en manos de la familia Santos, a la que pertenece el candidato presidencial perdedor (Elvin Santos). Este hecho deslegitima al CCE y deja a las filas liberales sin dirección reconocida. Los demás dirigentes reclaman elecciones internas para elegir un nuevo CCE y devolverle la credibilidad y legalidad necesarias a la instancia de dirección partidaria. Sólo así será posible iniciar el camino de la reconstrucción y unidad de los liberales hondureños.

El ex presidente Zelaya, desde su exilio dominicano, insiste en persuadir a los dirigentes de su partido para que pospongan en este momento sus aspiraciones presidenciales y sus maniobras electorales a favor de un esfuerzo único y concentrado en pro de la Constituyente y la nueva Constitución de la República. Según el razonamiento de Zelaya la prioridad es la Constituyente y las elecciones sólo aquellas que sirvan para elegir un nuevo CCE y los posibles delegados a la anunciada ANC. Los temas de la elección de candidatos a la presidencia deben ser tratados sólo en última instancia, después de haber consolidado la unión del partido y vencido a los golpistas de Micheletti y Santos que todavía controlan el CCE.

En una carta enviada al FNRP el día 24 de septiembre, Zelaya es enfático en condenar las aspiraciones prematuras y los devaneos electorales de ciertos dirigentes. En particular, su carta contiene veladas críticas y conde-

nas al intento de un grupo de sindicalistas y ex dirigentes comunistas por organizar un nuevo partido político -la denominada Alternativa Democrática-, amparándose en la euforia causada por la masiva recolección de firmas a favor de la ANC. Los promotores de esa iniciativa son los dirigentes sindicales Israel Salinas y José Luis Baquedano, que se reclaman a la vez líderes del FNRP, junto al viejo dirigente comunista Agapito Robleda Castro. Su intención de legalizar el nuevo partido ya está causando rechazo y fraccionamientos al interior del FNRP, algo que Zelaya condena y fustiga en su condición de Coordinador General de la Resistencia.

Todos estos hechos, estas divisiones prematuras y rencillas políticas al interior del FNRP, hacen más urgente y necesario el retorno de Zelaya al país para asumir de manera directa el liderazgo del Frente y encabezar una oposición dialogante y unida ante el gobierno de Porfirio Lobo. Pero Zelaya cada vez pone más dificultades para su regreso. Su negativa a reconocer la validez de los tribunales hondureños para juzgarle, ha generado un preocupante impasse en las gestiones a favor de su reincorporación plena a la vida política nacional. Al mismo tiempo, en el seno del FNRP se perfilan con mayor claridad dos tendencias muy claras con respecto a Zelaya: los que quieren que regrese y se haga cargo efectivo de la Coordinación general de la oposición resistente, frente a aquellos que, sin decirlo abiertamente, prefieren que Zelaya no vuelva y quede reducido a una figura simbólica en el lejano exilio. Los primeros son los liberales/zelayistas y buena parte de los sectores independientes que se aglutinan en el FNRP. Los segundos son los actuales dirigentes radicales del Frente, que temen que al retorno de Zelaya se ponga en duda y se cuestione el control actual que tienen sobre las instancias de dirección del FNRP. En todo caso, cualquiera que sea la posición que prevalezca, lo cierto es que el futuro del FNRP está ligado estrechamente al liderazgo de Zelaya y a su pronto o demorado retorno.

### **El affaire del canal ocho**

**L**a disputa surgida entre el gobierno de Lobo y el empresario de origen árabe Elias Asfura (ex aspirante presidencial en el partido Nacional) en torno a la posesión y derecho de explotación de la frecuencia del canal ocho de la televisión, es un buen ejemplo para mostrar la correlación de fuerzas entre el gobierno y los grupos empresariales más radicales e intransigentes. De hecho, todos los empresarios que apoyaron y financiaron el golpe de Estado cerraron filas al unísono en torno a su colega Asfura, condenando al gobierno de Lobo y al Congreso Nacional de Juan Orlando Hernández por haber decidido otorgar la explotación de la frecuencia a favor del Estado.

La pelea en torno al canal ocho permitió que se volvieran a alinear en una sola fila todas las instituciones golpistas del Estado -la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Comisionado de los derechos humanos, etc.- junto a los grupos empresariales más conservadores y recalcitrantes del país (Asociación Nacional de Industriales, Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cámaras de comercio, etc.). Lobo se mantuvo firme y enfrentó a estos grupos, conservando para su gobierno el polémico canal de televisión. Ya antes, el ex presidente Zelaya había tenido que pasar por la misma experiencia: en una batalla legal logró ganar el derecho a explotar el canal ocho en beneficio y en nombre del gobierno de la república. Asfura, quien ya posee dos frecuencias más y, por lo tanto, explota dos canales de televisión, intentó en vano arrebatarse el canal ocho al gobierno de Zelaya. Hoy, dos años después, vuelve a confrontarse con el gobierno, sólo que ahora su principal contendiente ya no es Zelaya sino don Porfirio Lobo.

La decisión de Lobo ha provocado la furia de los sectores golpistas del mundo político y empresarial. Nuevamente se está conformando un bloque antigobierno que busca la paulatina desestabilización del país para luego proceder a un prematuro cambio de gobernante. Son los mismos que amenazan al presidente Lobo con la pesadilla de un nuevo golpe de Estado y hacen alusión constante a las pijamas (Zelaya fue capturado en ropa de dormir, en pijamas, el día del golpe del 28J), como un símbolo de la *“solución golpista”* en las crisis del país. A ellos se refiere el presidente Lobo cada vez que les recuerda *que “no se equivoquen, no crean que me van a asustar con sus amenazas y ofrecimiento de pijamas...”*

El affaire del canal ocho es un espejo en el que han quedado reflejadas las tensiones y los ejes de la crispación que actualmente dividen y confrontan a la sociedad hondureña.

### **Las perspectivas de la economía**

**L**a esperada Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que debía venir para revisar las cifras del presupuesto general del año 2011 y los logros de la política económica actual, así como el desempeño de las finanzas públicas, llegó finalmente el día 07 y permaneció durante cuatro días revisando las cuentas nacionales y midiendo el nivel de cumplimiento de los compromisos fiscales adoptados por el gobierno lobista. Su dictamen fue favorable y abrió las puertas para la firma en el próximo mes de octubre de un Acuerdo de más largo alcance (unos 18 meses) que le permitiría al gobierno el respiro que necesita y el inicio de un alivio más definitivo en sus urgencias monetarias.

La relativa complacencia del FMI, debidamente estimulada por las presiones de Washington a favor del gobierno lobista, puede significar el ingreso a finales de año de unos 196 millones de dólares que permitirían un fuerte apoyo presupuestario y la reactivación de importantes proyectos de desarrollo. El gobierno deberá, eso sí, contener de manera real el incontrolable gasto corriente, especialmente en materia de sueldos y salarios, a la vez que generar un mayor flujo de ingresos tributarios mediante la contención de las exoneraciones y el combate efectivo a la defraudación y evasión fiscales.

Una vez conocida la disposición del FMI a aprobar un Acuerdo con Honduras el próximo mes de octubre, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se ha mostrado más flexible y solícito en su disponibilidad financiera a favor del gobierno de Lobo. A la aprobación de 55 millones de dólares para financiar programas de asistencia social (Bono diez mil, entre otros) y 17 más para la lucha contra la pobreza, ha ofrecido para octubre unos 85 millones para apoyo presupuestario y una suma millonaria más para remodelar, ampliar y modernizar la Empresa Nacional Portuaria y la Aduana de Puerto Cortés.

Junto a esta buena noticia, el gobierno también se anotó un importante punto a su favor al anunciar, para sorpresa de muchos, la firma de un Acuerdo de Entendimiento con la firma Sinohydro, una poderosa empresa de la República Popular China que se compromete a gestionar financiamiento y llevar a cabo la construcción de las tres represas hidroeléctricas -Patuca I, II y III-, que generarán unos 524 megavatios de energía en base a fuentes renovables. La suscripción de este acuerdo con una empresa de China continental tomó por sorpresa a los empresarios locales, muchos de los cuales han manifestado su aprobación y entusiasmo con la iniciativa de Casa Presidencial.

Una vez repuestos del susto, los chinos de Taiwán se han apresurado a invitar a Taipéi al presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, quien de inmediato viajó con una numerosa comitiva para aplacar los ánimos de los tradicionales aliados taiwaneses y, de paso, buscar posibles fuentes de financiamiento para su eventual campaña electoral en búsqueda de la nominación presidencial en su partido. Los taiwaneses gozan de merecida fama en la región centroamericana como oportunos financistas de candidatos presidenciales.

# OCTUBRE 2010

---

## La situación política

Justo en el último día del mes, el gobierno, mediante cadena de radio y televisión, anunció al país la fijación del esperado salario mínimo, una medida que, según la ley, debió haber sido tomada desde el primer trimestre del presente año. El aumento fue aprobado de manera diferenciada, según el tamaño (número de empleados) y la ubicación (urbana o rural) de las empresas. Las micro, pequeñas y medianas empresas, con menos de veinte trabajadores, quedaron al margen del aumento y, según sus representantes, se libraron de ir a una quiebra segura. Los aumentos oscilan entre el 3 y el 7%, lo que en moneda nacional quiere decir entre 111 (unos 5,8 dólares) y 285 lempiras (unos 15 dólares) en el sector rural y entre 165 (unos 8,7 dólares) y 386 (unos 20,3 dólares) en el área urbana. Son aumentos que, desde ya, han sido calificados como pírricos o, en el peor de los casos, una burla grotesca, según la opinión de los principales dirigentes sindicales del país.

La tardía fijación del salario mínimo debió esperar a que el Congreso Nacional previamente aprobara la separación entre el salario mínimo y los llamados “*estatutos especiales*” que protegen a los maestros, médicos del sector público, enfermeras y otros sectores profesionales. Esta separación, conocida en el lenguaje sindical como “*desindexación*”, le permite al gobierno incrementar el salario mínimo sin tener que realizar aumentos automáticos a los grupos beneficiarios de los “*estatutos*”. Los primeros en reaccionar en contra de esta decisión han sido los maestros, quienes consideran vulnerado uno de los principios clave de su famoso “*Estatuto del docente*”. Desde ahora, los maestros han convocado a marchas de protesta y paros laborales que, sin duda, habrán de repercutir en mayor conflictividad social, menor calidad educativa y nuevos fracasos en el sistema de educación pública.

A las protestas magisteriales se sumarán también los integrantes del llamado Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que han convocado a paros nacionales para los primeros días de noviembre. De esta manera, maestros y FNRP continuarán con sus manifestaciones callejeras en el pró-

ximo mes, de la misma forma que lo hicieron en varias ocasiones durante el presente mes de octubre. Los maestros protestaban por el incumplimiento de los Acuerdos firmados con el presidente Porfirio Lobo en el mes de septiembre, el atraso en los pagos a unos tres mil (a veces la cifra sube a cuatro y hasta a cinco mil) maestros, los nombramientos indebidos en cargos intermedios del sistema educativo, etc. La situación es tal que el propio presidente Lobo se vio obligado a reconocer que en el Ministerio de Educación prevalece el caos administrativo, el desorden en el nombramiento de personal y la falta del principio de autoridad. Es preciso devolver la gobernabilidad al sistema educativo y despolitizar de una vez por todas los nombramientos de los jefes, supervisores y maestros. Sin una reestructuración total de esa Secretaría de Estado, los conflictos con el gremio magisterial seguirán siendo el tema de cada día.

Este mes de octubre comenzó con malos augurios. El intento de golpe de Estado llevado a cabo en Ecuador el 30 de septiembre en contra del presidente Rafael Correa sirvió, entre otras cosas, para volver a crispar los nervios en los círculos políticos de Honduras. El fantasma del golpe volvió a agitarse y las especulaciones sobre el mismo nuevamente se convirtieron en el tema de discusión y debate en el escenario nacional.

Los hechos coincidieron con el anuncio del presidente Lobo de iniciar una ronda de consultas políticas que dio en llamar Diálogo Nacional. A las mismas fueron invitados los más diversos sectores sociales, grupos y partidos políticos, así como asociaciones diversas de la sociedad civil. Los únicos que rechazaron la invitación presidencial y se negaron a compartir la mesa de consultas fueron los dirigentes del FNRP que, con la aprobación del ex presidente Manuel Zelaya, optaron por quedarse al margen y no participar en las conversaciones. Aunque el rechazo de la denominada Resistencia fue un fuerte golpe a la iniciativa del presidente, lo cierto es que la asistencia a las pláticas fue nutrida y muy representativa. Incluso algunos dirigentes de los liberales zelayistas, desoyendo las recomendaciones de su líder, llegaron a Casa Presidencial y compartieron opiniones con el propio gobernante.

Aunque inicialmente la convocatoria fue formulada para discutir sobre las reformas políticas que el país reclama y la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, la agenda de los temas consultados se fue ampliando y, al final, el presidente confesó que contaba ya con más de 50 temas que habían sido planteados en las reuniones y a los que se les debía conceder toda la importancia del caso. La primera conclusión de la ronda de consultas fue la de reformar el artículo 5 de la Constitución de la República, en el que se incluyen y describen las figuras jurídicas del Plebiscito y el Referéndum, las que, en su forma actual, tan restrictiva y estrecha, no pueden servir para los fines de consultar al pueblo sobre la Constituyente y las reformas políticas. El Congreso Nacional, en atención a las opiniones

---

del presidente Lobo, ya ha formado una Comisión de dictamen que habrá de proponer la reforma del artículo constitucional.

La urgencia del Congreso obedece a que la reforma de ese artículo, por ser constitucional, deberá ser ratificada por la subsiguiente legislatura. Por lo tanto, si se quiere hacer el plebiscito el próximo año, la reforma deberá ser aprobada en los próximos dos meses. Es evidente que el presidente Lobo y su principal aliado, el presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández, no están dispuestos a esperar mucho para abordar a fondo el espinoso tema de la convocatoria para una Asamblea Nacional Constituyente o, en su defecto, para realizar profundas reformas en el esquema normativo de la Constitución actual.

Pero no sólo ellos. El presidente del Comité Central del partido Nacional (PN) y alcalde capitalino, Ricardo Álvarez, también ha iniciado un periplo de negociaciones con lo que denomina *“las bases del partido”* para conocer su opinión en torno a las reformas y los temas planteados. De paso, Álvarez utiliza la oportunidad para organizar sus comités de apoyo de cara a la lucha que se avecina para tratar de convertirse en el candidato oficial del PN en las elecciones generales del año 2013. Los nacionalistas, por lo visto, ya están directamente avocados a la campaña proselitista interna para buscar al sucesor de Porfirio Lobo quien, dicho sea de paso, no ha cumplido ni siquiera un año en la silla presidencial.

Pero el tema de la Constituyente no sólo tiene muy ocupados a los nacionalistas. En las filas liberales también hay discusión y controversias en torno al asunto. La idea original de la convocatoria pertenece a Manuel Zelaya, a quien tal iniciativa le costó la presidencia de la República. Por lo tanto, los zelayistas, también conocidos como *“liberales en Resistencia”*, se consideran los verdaderos padrinos de la idea y disputan ese rango con los dirigentes izquierdistas del FNRP, que, a su vez, creen tener el monopolio sobre la Asamblea Nacional Constituyente y todo lo que le concierna.

Es una pelea interminable. Zelaya, desde su exilio en Santo Domingo, ha terciado en la polémica y, para sorpresa de muchos, se ha decantado a favor de las posiciones extremistas del liderazgo del FNRP, poniendo prudente distancia con respecto a sus compañeros liberales. Zelaya da la impresión de querer agradar siempre a los dirigentes izquierdistas del Frente, aunque para ello deba radicalizar su discurso y adoptar posiciones que lo alejan de los liberales y le cubren de un cuestionado prestigio de *“hombre de izquierdas”*, *“revolucionario o socialista del siglo XXI”*.

Pero, al mismo tiempo, Zelaya mantiene contactos discretos y silenciosos con el entorno político del presidente Lobo, con quienes negocia las mejores condiciones para su retorno. Así, por ejemplo, se ha creado ya una atmósfe-

ra más favorable para el regreso de Zelaya, libre ya de las acusaciones judiciales prefabricadas que le montaron los patrocinadores del golpe de Estado después del 28 de junio del año pasado. Veamos los hechos:

Por iniciativa del presidente Lobo se formó una comisión de tres reconocidos abogados locales, encabezados por el ex Fiscal General y ex Canciller Leónidas Rosa Bautista, para que busquen una salida jurídicamente válida a la situación de Zelaya y así poder descartar los juicios prefabricados, carentes de un verdadero soporte legal. La comisión concluyó que los juicios no se ajustan a lo que se denomina el *“debido proceso”* y, en tal caso, lo que procede es declararlos no válidos por la vía de un *“sobresimiento por defectos procesales”*, o sea que los juicios pierden su valor por no responder a los requisitos básicos del procedimiento legalmente establecido. De esta forma, utilizando la novedosa fórmula jurídica encontrada, los juicios serán eliminados y Zelaya podrá regresar libremente al país. Todo indica que la decisión ya fue tomada y que en breve será comunicada formalmente a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Una vez notificada la OEA, el tema de Honduras podrá ser incluido en la agenda de la próxima reunión de cancilleres en Argentina, a finales del año, y ahí se habrá de decidir sobre el reingreso del gobierno hondureño en la organización continental. Mientras ese momento llega, Zelaya podrá regresar a Honduras y reintegrarse plenamente a sus actividades personales y políticas. Se dice que Zelaya no piensa residir permanentemente en el país, sino venir periódicamente, aprovechando las fechas de las reuniones del Parlacen en Guatemala. Al parecer ha decidido vivir un tiempo más en República Dominicana, al menos hasta que concluya el periodo gubernamental de su amigo, el presidente Leonel Fernández.

Aunque no se ha fijado con precisión la fecha del retorno del ex presidente derrocado, se espera que el mismo se produzca durante el mes de noviembre. El embajador dominicano en Honduras, quien tenía programado un viaje de vacaciones a Europa para ese mes, fue requerido por el presidente Fernández para que se mantuviera en su puesto, aquí en Tegucigalpa, por lo menos hasta el día 28 de noviembre, para cuando se esperan *“acontecimientos importantes”* que, sin duda, tienen que ver con el regreso del ex presidente a suelo hondureño. De igual manera, gestiones consulares para visar los pasaportes de la madre y la suegra de Zelaya se han llevado a cabo en la embajada dominicana en Tegucigalpa, lo que hace suponer que se está preparando el regreso de la familia del ex presidente.

Sea como sea, lo cierto es que ya hay indicios suficientes para creer que estamos llegando al final del capítulo del retorno de Zelaya a su país. El obstáculo principal sigue siendo el Fiscal General, Luis Rubí, quien persiste en su actitud de entorpecer y frenar todas las iniciativas del Poder Ejecutivo

---

a favor de la reconciliación y unidad nacional. *“Pepe Lobo no es abogado”*, dijo un desafiante Rubí cuando le preguntaron acerca de la propuesta presidencial para anular los juicios en contra de Zelaya. Pero la fuerza del Ejecutivo, sumada a la voluntad favorable del Poder Legislativo, acabarán imponiéndose y venciendo la resistencia del Ministerio Público.

El tema de la Constituyente revivió también a la Unión Cívica Democrática (UCD), la organización emblemática que agrupa a los partidarios del golpe de Estado, los autodenominados *“camisas blancas”*. Convocaron a una manifestación de protesta frente al Congreso Nacional el día 21 para expresar su rechazo a la idea de la Constituyente, pero la asistencia fue tan escasa y débil que no tuvo ninguna trascendencia. De igual manera, se reunieron con el presidente Lobo con el mismo propósito pero los resultados fueron iguales. Ya no tienen el poder de movilización que les facilitaba el apoyo del gobierno de facto, cuando obligaban a los trabajadores de sus empresas a engrosar las filas de los golpistas. Ahora han quedado reducidos a un pequeño grupo de empresarios y políticos conservadores, unas cuantas *“damas de sociedad”* y uno que otro periodista de las grandes cadenas radiales y de televisión. Los *“blanquitos”*, como les llama un tanto despectivamente el presidente Lobo, ya no infunden el temor de antaño, aunque siguen teniendo presencia mediática y capacidad de divulgación.

Los avances en el proceso de diálogo y la amplia convocatoria que ha logrado generar, son puntos a favor del presidente Lobo, sin duda. Pero no todo es color de rosa al interior del gobierno. El ministro de Finanzas, William Chong Wong, se ha quejado públicamente por la baja capacidad de ejecución en aquellos proyectos financiados con fondos externos. Les ha reclamado a sus colegas ministros para que aceleren los trabajos de ejecución y muestren mayor eficacia en el manejo de esos recursos. Casi al mismo tiempo, un grupo de diputados nacionalistas ha desatado una especie de ofensiva política contra ciertos ministros y funcionarios del gobierno (ministros de educación, de agricultura y ganadería, de recursos naturales, jefe de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, etc.), a quienes culpan por no atender las recomendaciones políticas del partido para dar empleo a sus militantes y activistas. Demandan su renuncia y exigen al presidente Lobo que les enmiende la plana.

Por otro lado, la reorganización de la estructura ministerial, creando dos nuevas secretarías de Estado (Ministerio de derechos humanos y Ministerio de los pueblos indígenas y afrohondureños) y reformando otra más (Ministerio de Gobernación y Justicia, hoy reconvertido en Ministerio del Interior y Población) han obligado al rediseño del proyecto de presupuesto nacional que ya había sido aprobado (133,000 millones de lempiras, unos siete mil millones de dólares) por el Consejo de ministros el pasado día 07 de septiembre. En el rediseño, como es de esperar, aumentarán las partidas de

gastos y subirá el correspondiente déficit fiscal, algo que, seguramente, creará preocupación adicional entre los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por cierto, a propósito del Fondo, terminó el mes de octubre y todavía no se ha firmado el esperado acuerdo por 18 meses que el gobierno había anunciado que suscribiría con el organismo financiero antes de noviembre. El Directorio del FMI, al parecer, todavía no ha dado el visto bueno para la firma del Acuerdo, aunque es probable que ello suceda antes que concluya el año. Sólo así el gobierno podrá contar con recursos frescos para financiar los vacíos que contiene el proyecto de presupuesto del año 2011.

A los problemas políticos y fiscales, el gobierno debió sumar uno más: la crisis de granos básicos, especialmente los frijoles, ocasionada por las intensas lluvias del prolongado invierno y la correspondiente pérdida de las cosechas. El Congreso Nacional debió echar mano de las reservas del fondo creado por Petrocaribe (el criticado acuerdo petrolero que Zelaya firmó con Venezuela) y autorizar el uso de 8,5 millones de dólares para ayudar a los agricultores afectados por la catástrofe natural.

Ya casi para finalizar el mes, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), el grupo empresarial dirigido por Adolfo "Fito" Facussé, demandó del presidente Lobo el respeto a la ley y al principio de antigüedad al momento de escoger a los nuevos miembros del Estado Mayor Conjunto, los que deberán conformar la nueva cúpula militar del país a partir del mes de diciembre. Aunque no lo dicen claramente, los industriales se decantan a favor de la figura del general Miguel Ángel García Padget, un reconocido golpista que representó la línea más dura en el círculo castrense que encabezaba el jefe militar del golpe de Estado, Romeo Vásquez. El presidente Lobo, visiblemente molesto por la intromisión de los empresarios en un asunto tan sensible, les cuestionó la pertinencia de su reclamo y les pidió dedicarse exclusivamente a sus negocios, dejando en manos del gobierno el manejo de asuntos tan delicados. Se rumorea que el candidato favorito de Lobo para encabezar la Junta de Comandantes al frente del Estado Mayor es el actual general encargado de la Guardia de Honor Presidencial y, por lo tanto, de la seguridad personal del gobernante, René Osorio Canales.

Para cerrar el mes y ampliar el círculo de los problemas, se hizo público el informe de la organización Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de la corrupción en el mundo, en el cual Honduras aparece en primer lugar a nivel centroamericano y entre los cinco países más corruptos a nivel de América Latina. Otro golpe más a la deteriorada imagen internacional del país.

## **La economía y sus vaivenes**

**A** principios de octubre, la inflación acumulada había llegado al 4,6%, siguiendo así la tendencia pronosticada en el Programa Monetario del Banco Central, según la cual la espiral inflacionaria no pasará del 6 o 7% a finales del año. Las reservas internacionales se han mantenido en niveles aceptables: 2,333 millones de dólares, aunque se espera que aumenten en unos 50 millones más antes de que concluya el 2010 (el año pasado se perdieron 346 millones en las reservas de dólares).

Las remesas familiares, aunque no han tenido un aumento sustancial, tampoco han sufrido reducciones bruscas, a pesar de las dificultades creadas a los migrantes a causa de la crisis económica y financiera que golpea a Estados Unidos y al mundo en general.

El ministro de Finanzas, William Chong Wong, advirtió, eso sí, a los diputados que en el próximo año el servicio de la deuda interna, si no se le controla, puede subir de manera exponencial y crecer ¡hasta un 310%! La deuda interna podría llegar a los 40 mil millones de lempiras (unos 2,105 millones de dólares), mientras que la de carácter externo alcanzó ya los 2,400 millones de dólares. Según cálculos del ministro, el servicio de la deuda externa podría bajar hasta en un 20%.

Los índices del crecimiento económico, al menos hasta antes de la aprobación del nuevo salario mínimo, apuntan en la dirección esperada y podrían generar una tasa acumulada de 2,5 o 3% en el Producto Interno Bruto (PIB) a finales del año.

El desempleo sigue siendo uno de los grandes problemas del país. Según los más recientes datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadísticas (Encuesta de Hogares No.39), en el país hay más de un millón de subempleados y unos 134 mil personas se encuentran en el desempleo absoluto. Siempre según el INE, la pobreza abarca al 65% de la población, mientras que un 23% de ese total se encuentra en condición de pobreza extrema (viven con menos de un dólar diario). Tres millones y medio de hondureños, de una población total de ocho millones, viven con ingresos que no superan los tres dólares diarios. El INE mide la pobreza por el nivel de consumo; antes se hacía en base al nivel de ingresos.

## **El sensible tema de los derechos humanos**

**L**as violaciones a los derechos humanos y las denuncias de impunidad siguen siendo el talón de Aquiles en la imagen exterior de la administración de Porfirio Lobo. A pesar de sus probados intentos

para convencer a la comunidad internacional de sus buenas intenciones y de su convicción profunda en defensa de tales derechos, el presidente Lobo sigue sufriendo las consecuencias de una situación anormal que él mismo condena pero que no es capaz de controlar plenamente.

Las violaciones constantes por razones de carácter político (persecución, hostigamiento, secuestros momentáneos, torturas en “casas de seguridad”, amenazas y asesinatos) se siguen produciendo y el gobierno no parece ser capaz de controlar a los responsables de las mismas. En este mes de octubre, dos conocidos periodistas de la emisora crítica Radio Globo, Luis Galdámez y Katherine Izaguirre, fueron atacados a balazos (caso Galdámez) o secuestrados temporalmente con fines de tortura e intimidación (caso Izaguirre). La esposa de Rassel Tomé, conocido dirigente del FNRP y colaborador cercano de Manuel Zelaya, la abogada Fanny Carolina Tomé, estuvo a punto de ser secuestrada junto con sus pequeños hijos por parte de un grupo de hombres enmascarados que se conducían impunemente en un vehículo sin las debidas placas de identificación. Estos son algunos de los graves atentados contra miembros de la Resistencia que han tenido lugar en los últimos días.

Es evidente que en el país operan grupos que practican la violencia paralela, al margen de los cuerpos de seguridad del Estado pero en sospechosa cercanía con ellos. Son grupos similares a los escuadrones de la muerte que funcionaron en la década de los años ochenta del siglo pasado, organizados, financiados y protegidos por los servicios de inteligencia militar y por conocidos empresarios locales. Muchos de estos grupos, en la actualidad, están estrechamente vinculados con las agencias privadas de seguridad.

En este mes de octubre, el gobierno sufrió una derrota en toda la línea durante las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebradas en Washington en la tercera semana del mes. Sus acusadores demostraron con datos concretos que de las 197 personas que han sido beneficiadas con medidas cautelares ordenadas por la CIDH, dos han sido ya asesinadas, tres han sufrido atentados, 25 han sido amenazadas y nueve se han visto obligadas a abandonar el país para poner a salvo sus vidas y las de sus familiares.

La situación de la inseguridad en general ha llegado a un punto tan alto, que en un informe preparado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el controversial Ramón Custodio, se asegura que cada 88 minutos se produce en Honduras una muerte violenta (286 por mes y 72 por cada cien mil habitantes por año).

Al concluir el mes, una nutrida delegación (once personas) de altos funcionarios gubernamentales viajó a Ginebra, Suiza, para hacer la defensa colec-

tiva del gobierno lobista durante el examen anual sobre derechos humanos que practica la Organización de las Naciones Unidas a sus estados miembros. A juzgar por los resultados obtenidos ante la CIDH en Washington, no se deben albergar muchas esperanzas sobre lo que vaya a ocurrir en Suiza.

### **Lo que dicen las encuestas**

**A**unque todavía no es el momento para las encuestas, las que florecen en los periodos electorales, lo cierto es que siempre se llevan a cabo estos ejercicios de medición a petición expresa y privada de ciertas instituciones y grupos. Una de estas encuestas, realizada por la firma internacional Le Vote Harris hace apenas un par de meses, revela algunos datos que resultan interesantes y vale la pena anotar.

Según la encuesta mencionada, la que se llevó a cabo entre el 17 y 27 de julio en 16 departamentos del país y abarcó a 1,364 encuestados, el 61.9% condena lo sucedido el 28 de junio de 2009 (el 24.3% está a favor) y el 66.6% considera que el país está peor que antes del 28J). En cuanto al retorno del ex presidente Zelaya, el 68.2% lo apoya mientras el 23.7% lo rechaza. El 42.1 tiene **buena imagen** de Zelaya; el 49.6% tiene **mala imagen** de Roberto Micheletti y el 53.1% tiene una **imagen regular** del presidente Porfirio Lobo. En cuanto a la gestión gubernamental en la administración lobista, el 54.5% la aprueba y el 36% la desaprueba (en la encuesta realizada en abril de este mismo año, los porcentajes eran un tanto diferentes: 56.4 la aprobaba y el 24.9 la desaprobadaba). El 61.4% de las personas entrevistadas cree que es posible que suceda un nuevo golpe de Estado, esta vez en contra de Porfirio Lobo; el 27.9% cree que no.

Los partidos políticos siguen experimentando un discreto porcentaje de apoyo y credibilidad, mientras el 40.8% de los consultados (encuesta de abril) declaran no pertenecer a ningún partido y se proclaman independientes.

En relación al retorno de Honduras a la OEA, el 82% cree que es **muy importante** que lo logre.

# NOVIEMBRE 2010

---

## La situación política

**E**ste mes de noviembre ha estado cargado de tensiones políticas y conflictividad social. Desde su mismo inicio, cuando se produjo el sorprendente robo de una avioneta en la propia Base Aérea de San Pedro Sula, la segunda más importante del país, hasta la publicación en la red de Wikileaks del llamado Informe Llorens sobre el golpe de Estado, sin olvidar, por supuesto, los violentos enfrentamientos, con saldo de varios muertos, que han tenido lugar en el Bajo Aguán entre grupos campesinos y guardias privados al servicio de empresarios agroindustriales de la zona. Todos estos acontecimientos han tenido lugar en medio de un clima político poblado de crecientes rumores sobre la posible llegada del ex presidente Manuel Zelaya y la casi segura reforma de la Constitución para permitir un plebiscito más amplio e incluyente en torno a la posible convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente el próximo año 2011.

Al inicio del mes, el país entero quedó asombrado al descubrir que en la Base Aérea de San Pedro Sula, en el norte del país, se había producido el insólito robo de una lujosa avioneta decomisada tiempo atrás a las redes del narcotráfico internacional. Las investigaciones apuntaron hacia los cómplices internos y a sus socios narcotraficantes, con lo que quedó evidenciada la alianza entre narcos y oficiales de las Fuerzas Armadas. Actualmente hay 25 personas arrestadas, 19 de ellas con orden de prisión y 6 con medidas sustitutivas. Todas pertenecen a las filas militares. El juicio, que todavía está siendo manejado en base al anacrónico fuero militar, es decir dentro de las cortes castrenses, deberá pasar a la jurisdicción civil, si es que se quiere respetar las normas básicas del Estado de derecho. El propio Fiscal general, quien no pierde ocasión para congraciarse con los militares, en esta ocasión se ha visto obligado a pedir que el juicio sea trasladado a la justicia civil y que el Ministerio Público pueda tener una participación más activa en la conducción del mismo.

Al margen de su desenlace final, este caso ha servido para demostrar, entre otras cosas, la enorme vulnerabilidad que padecen los sistemas de seguri-

dad de la que se considera “la mejor Fuerza Aérea de Centroamérica” y el preocupante nivel de penetración que las redes del crimen organizado, en este caso del narcotráfico, han alcanzado al interior de la institución militar. Como corolario, además del ridículo en que han quedado, los militares han visto lesionado aún más su ya deteriorado prestigio, más dañado aún después del golpe de Estado del año pasado.

De igual manera, ya para finalizar el mes, el día 28, el país debió experimentar una nueva sacudida, esta vez de carácter político, cuando la red electrónica de WikiLeaks puso en circulación, vía internet, miles de documentos que dejaron al desnudo valiosos secretos de la diplomacia norteamericana. Entre ellos, para sorpresa de los políticos locales, está el llamado Informe Llorens, un extenso documento que contiene las apreciaciones y el análisis del embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens, sobre el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. En síntesis, el diplomático informa a Washington que el golpe de Estado es el resultado de una conspiración en la que se coludieron los diputados, los jueces y los jefes militares, junto con varios líderes políticos, para dar al traste con el gobierno de Manuel Zelaya y romper el orden constitucional del país. Las revelaciones del embajador norteamericano han producido un gran impacto en los círculos políticos del país, atizando de nuevo el debate sobre el golpe de Estado, su naturaleza legal o ilegal y el rol que jugó cada uno de los actores involucrados en la trama golpista. Uno de los primeros en reaccionar al conocer el contenido del Informe fue el ex presidente Zelaya, quien, desde su exilio en la República Dominicana, denunció lo que llamó “la hipocresía de Washington” y amenazó con demandar al gobierno estadounidense por una supuesta complicidad en la comisión del delito.

La declaración de Zelaya produjo sorpresa e irritación en la sede diplomática de Washington en Tegucigalpa. Llorens calificó de absurdas las acusaciones y, de paso, se permitió hacer conjeturas sobre la credibilidad del documento. La opinión del ex presidente está en línea con lo que ha sido su discurso político desde hace algunos meses, un discurso cada vez más cargado de epítetos groseros y juicios descalificadores sobre la política de Estados Unidos en Honduras. Pareciera que Zelaya se empeña en mantener un tono “antiimperialista” en sus proclamas para agradar a cierta audiencia internacional y mantener satisfecho al liderazgo más radical en el seno del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), del cual es, al menos en teoría, su Coordinador Nacional.

Pero no sólo Zelaya ha reaccionado con virulencia sobre el contenido del Informe Llorens. También los políticos partidarios del golpe de Estado han aprovechado la ocasión para reprochar a Llorens su supuesto parcialismo a favor de Zelaya y descalificarlo como observador imparcial. El propio presidente Porfirio Lobo, quien se siente aludido en el Informe porque Llorens

escribe que, al apoyar la fórmula de una *“cuarta urna constitucional”*, también se puso al margen de la ley y debió ser invalidado legalmente como candidato presidencial, pretendió restarle importancia a la declaración del embajador estadounidense y bajar el nivel de la controversia. En síntesis, el Informe Llorens ha vuelto a poner la discusión sobre el golpe de Estado en el centro de la polémica pública, estimulando otra vez el clima de crispación y tensión que ha prevalecido en el ambiente político desde el año pasado. De continuar la publicación de nuevos documentos sobre el caso hondureño (se comenta que hay centenares de ellos en el paquete divulgado por WikiLeaks), es de esperar que la polémica se acentúe y se vuelva más belicosa en los próximos días.

Casi al mismo tiempo de la aparición del Informe Llorens, se conocieron en Tegucigalpa las declaraciones del conocido fiscal argentino de la Corte Penal internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, anunciando el inicio de las *“investigaciones preliminares”* de rigor para decidir si se abre o no el *“caso hondureño”* para acusar a los responsables del golpe de Estado del 28J e investigar las correspondientes violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir de ese momento en todo el territorio nacional. Este era el ingrediente que faltaba para atizar más la hoguera de la crispación y la discordia que caracterizan a la sociedad hondureña actual.

Para complicar más el clima político y social, en el transcurso del mes se volvió a agitar la situación prevaleciente en la zona del Bajo Aguán, agudizando el conflicto agrario que desde hace un año enfrenta en forma directa y sangrienta a varios grupos campesinos y a un trío de empresarios agroindustriales de la palma africana. A mediados del mes, el día 15, cinco campesinos murieron en un nuevo enfrentamiento armado (desde diciembre del año pasado suman ya unos treinta muertos, entre ellos doce guardias privados). La ocasión fue propicia para que el gobierno decidiera militarizar la zona, ocupar por la fuerza las oficinas del Instituto Nacional Agrario (INA) y destituir a sus empleados, sin tomar en cuenta la opinión del ministro/Director del INA, el político izquierdista y jefe de Unificación Democrática (UD), César Ham.

Ante una situación tan singular, el presidente Lobo trató de calmar la cólera de Ham y le dio la siguiente explicación: *“Este problema ya no está en mis manos, está fuera de mi control; lo manejan los servicios de inteligencia militar”*. Al mismo tiempo, al día siguiente, durante el semanal Consejo de ministros, Lobo declaró a la prensa que *“en el Bajo Aguán se está formando un grupo armado para realizar acciones violentas”*. Los integrantes de tal grupo, según la información presidencial, se estarían entrenando militarmente en campos especiales fuera del país y contarían con armas de grueso calibre proporcionadas por sus aliados desde el exterior. A tono con esta denuncia, el ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, fue más allá y, días des-

pués, agregó que los supuestos guerrilleros del Bajo Aguán estarían recibiendo entrenamiento militar y apoyo logístico por parte del gobierno de Nicaragua, en lo que calificó como “*una grave amenaza a la seguridad nacional*”. De paso, el gobierno anunció que más de mil fusiles AK47, de fabricación soviética, estarían escondidos en las instalaciones del INA, por lo que se procedió a un minucioso registro de las mismas sin ningún resultado positivo. La comparación con el caso de las armas de destrucción masiva en Iraq no se hizo esperar y la prensa crítica del régimen hizo fiesta con las declaraciones oficiales.

Pero, al margen de los aspectos grotescos y ridículos de lo que a todas luces parece una trama montada ex profeso, lo cierto es que la situación en la zona se ha vuelto muy complicada y peligrosa. La anunciada operación de desarme podría desencadenar nuevos enfrentamientos armados, sobre todo si se aplica sólo a los campesinos y excluye a los guardias de seguridad privada al servicio de los empresarios. No hay duda que muchas armas están circulando en la región, un área invadida y, en gran medida, controlada por los carteles del narcotráfico. Los campesinos, alegando medidas de autodefensa, se han hecho con fusiles, pistolas y otras armas de menor calibre y calidad, mientras que los guardias de seguridad privada cuentan también con armas suficientes para librar una larga lucha y confrontación contra los que consideran “*invasores*” de las tierras y plantaciones de los empresarios Miguel Facussé, René Morales (nicaragüense) y Reynaldo Canales. La situación es compleja y más parece una bomba de tiempo a punto de estallar.

El presidente Lobo está en una encrucijada. No puede o no quiere despedir a César Ham, tal como lo exigen los empresarios, porque eso significaría desarticular el gobierno de unidad nacional. De hecho, ya ha ratificado a Ham en su cargo, calificándolo como un funcionario eficiente y sensible, capaz de reducir en corto tiempo la peligrosa “*mora agraria*” que conforman las demandas legales de los campesinos acumuladas y olvidadas en los archivos del INA. El anuncio del presidente provocó, como era de esperar, la furia de los empresarios más duros, especialmente de Miguel “*Tío Mike*” Facussé, quien no ha dudado en exigir la destitución y el encarcelamiento del polémico ministro/Director del INA.

El caso del Bajo Aguán es un buen ejemplo para analizar la política indecisa y pendular que caracteriza al gobierno del presidente Lobo. Su ambigüedad y vacilación son tales que con demasiada frecuencia envía mensajes contradictorios y confunde, sin proponérselo, tanto a sus partidarios como a sus adversarios. Mientras, por un lado, disminuye la autoridad de su ministro Ham al militarizar e invadir la jurisdicción de las oficinas regionales del INA en el Bajo Aguán, por otro lado y casi al mismo tiempo ratifica la permanen-

cia de Ham al frente del INA y lo felicita públicamente frente a los agradecidos campesinos. Nadie lo entiende y todos se sorprenden.

Pero Ham no es el único ministro que ha causado problemas al presidente. También su amigo y mentor ideológico en los vericuetos del *“humanismo cristiano”*, Oscar Escalante, el hasta hace poco ministro de Industria y Comercio, se vio obligado a replegarse del escenario público luego de que se conociera que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) había financiado la millonaria decoración y lujoso acondicionamiento de sus oficinas. El caso, una flagrante colisión de intereses, fue aireado con gran escándalo en los medios de comunicación, especialmente en los diarios El Heraldo y La Prensa que, de esa forma, le pasaron la factura al presidente Lobo por su supuesta *“traición”* a los sectores golpistas aglutinados en la Unión Cívica Democrática (UCD), los denominados *“camisas blancas”* o *“blanquitos”* como les llama un tanto despectivamente el presidente.

La salida de Escalante del gabinete priva a Lobo de un aliado fiel y amigo incondicional. Seguramente lo ubicará en una nueva posición, más discreta pero no menos cercana. Escalante ha sido un colaborador muy estrecho de Lobo y fue uno de los pioneros en lograr el acercamiento del partido Nacional con la Democracia Cristiana internacional, de cuyas filas proviene.

Por cierto, y a propósito del social cristianismo, acaba de abrir sus oficinas en Tegucigalpa la Fundación alemana Konrad Adenauer, sumándose así a las otras dos Fundaciones germanas que ya operan en Honduras: la Naumann, de tendencia liberal, que apoyó el golpe de Estado, y la Friedrich Ebert, de orientación social demócrata, que se distanció del golpe y condenó el rompimiento del orden constitucional. La nueva Fundación se encargará de afianzar la doctrina social cristiana al interior del partido Nacional (PN) y asegurar los vínculos orgánicos del partido de gobierno con los demócrata-cristianos alemanes, en primer lugar, y con los partidos afines en general. Hay razones suficientes para creer que la implantación de los principios social-cristianos en las estructuras orgánicas del PN está encontrando fuerte resistencia por parte de los sectores más conservadores del partido, acostumbrados a definirse como un partido de derechas pura y simplemente. En esta tarea, la de convencer a sus partidarios de las bondades del *“humanismo cristiano”*, el presidente Lobo cuenta, al menos hasta ahora, con la complicidad plena de Juan Orlando Hernández, el influyente presidente del Congreso Nacional.

Pero Hernández no sólo lo apoya en eso. También comparte totalmente con Lobo la idea de reformar el artículo cinco de la Constitución de la República para ampliar el contenido de las figuras jurídicas del plebiscito y el referendium, a fin de permitir una vasta consulta popular para decidir sobre las reformas constitucionales o la convocatoria a una Asamblea Nacional Consti-

---

tuyente con el fin de redactar y aprobar una nueva Constitución. Se espera que las reformas al artículo cinco queden aprobadas en el mes de diciembre o, a más tardar, el próximo enero, para que luego sean ratificadas tan pronto como comience la siguiente legislatura en el Congreso Nacional.

Al promover la reforma del artículo cinco y abrir el espacio para las reformas de la Constitución o la convocatoria de la Constituyente, tanto Lobo como su estrecho aliado Hernández están jugando una carta política muy inteligente, tomándole la delantera a la oposición zelayista (la llamada “Resistencia”) y huyendo hacia adelante. Al arrebatarle las banderas a Zelaya, se arriesgan a perder el escaso apoyo que todavía tienen en las filas más tradicionales y conservadoras del PN, así como a provocar el rechazo de políticos influyentes como los ex presidentes Rafael Callejas y Ricardo Maduro, convertidos hoy en los principales abanderados de la ultraderecha partidaria.

Pero, ni aun así, promoviendo las demandas que han sido características de los zelayistas (a Zelaya lo derrocaron por su afán de convocar una Asamblea Constituyente para reformar o hacer una nueva Constitución), ni Lobo ni Hernández han podido moderar el rechazo de la Resistencia y persuadir a su liderazgo de la necesidad de establecer un diálogo y buscar salidas y soluciones conjuntas a la crisis política en que sigue sumido el país. Tampoco ha sido posible convencer a Zelaya para que modere sus posiciones políticas, regrese al país y acepte un diálogo nacional al más alto nivel.

Zelaya, convencido de su indudable liderazgo al interior de las filas liberales y en amplios sectores de la Resistencia, negocia con dureza los términos de su retorno, mientras crea las condiciones para alcanzar el control de los órganos de dirección del partido Liberal (PL), hoy en manos de los llamados “liberales golpistas”, Elvin Santos (padre e hijo) y compañía. Según el hermano menor de Zelaya, Carlos, el ex presidente simula estar de acuerdo con todos los grupos de la Resistencia pero sigue conservando su convicción de que es preciso formar un gran Frente Amplio en base a los llamados “liberales resistentes”. Siguiendo esa lógica en su estrategia política, Zelaya ha conformado un grupo de liberales absolutamente fieles a él, dirigidos en parte por su hermano Carlos, dentro del territorio nacional. A ese grupo pertenecen líderes regionales como Nehemías Hernández en El Paraíso, William Hall en Cortés, Adán Fúnes en Colón, Amable de Jesús y Denis Sánchez en Santa Bárbara, Eleázar Juárez en Valle, Rafael Barahona en Francisco Morazán y el propio Carlos Zelaya en Olancho. Estos son los liberales que organizaron la masiva “toma” de carreteras en nueve puntos del territorio nacional, en once departamentos, el día 19, bajo la consigna única de exigir el retorno de Manuel Zelaya. Puede decirse que estos son los hombres de Zelaya dentro de los autodenominados “liberales en Resistencia”. Por supuesto, Zelaya también cuenta con el apoyo de colaboradores incondicionales como el abogado Rassel Tomé o el dirigente cafetalero Dagober-

to Suazo, en Tegucigalpa, que se mantienen dentro de las filas del FNRP pero representando directamente los intereses políticos del ex presidente exiliado en Santo Domingo.

Mientras consolida su *“grupo liberal”*, Zelaya también se desempeña como Coordinador general del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), en donde debe compartir liderazgo con los dirigentes más radicales y extremistas que provienen de la antigua izquierda y del mundo sindical que fuera controlado por los viejos comunistas. Debe hacer verdaderos malabarismos ideológicos para satisfacerlos a todos o, al menos, mantenerlos contentos y tranquilos. No siempre lo logra y, por eso, insiste en introducir a sus peones más cercanos en el exilio, Enrique Flores Lanza y Patricia Rodas, en el seno del nuevo Consejo político consultivo creado recientemente por el FNRP. La misión de Flores y Rodas sería la de mantener vivo el liderazgo de Zelaya al interior del Frente, sin permitir desvíos ideológicos o radicalismos antiliberales. Para hacer frente a estas dificultades y superar estos obstáculos, el regreso de Zelaya se vuelve cada vez más urgente e inevitable. Los rumores sobre el posible retorno son cada vez más intensos. Primero apuntaban hacia finales del mes de noviembre; hoy insisten en que será antes del 10 de diciembre y, como máximo, en ocasión de las fiestas navideñas. Sea como sea, la verdad es que cada vez es más intensa la presión de sus partidarios para que el ex presidente regrese, aunque sea por unos pocos días, al territorio nacional.

Mientras todo esto sucede, el presidente del Congreso Nacional, quien cada vez hace más evidentes y públicas sus aspiraciones presidenciales, logró sacar adelante buena parte de su agenda legislativa, haciendo aprobar unas polémicas leyes y reformas laborales para permitir la contratación de empleados por horas y hacer más ágiles y flexibles los términos de la contratación laboral en el país. Es una especie de reforma laboral encubierta. También hizo aprobar una ley para reprimir las actividades orientadas a financiar y apoyar al terrorismo (*“Ley antiterrorista”*), así como otra ley para facilitar el trámite de la *“extinción del dominio”* y permitir que los bienes incautados al crimen organizado puedan ser transferidos rápidamente a los organismos encargados de combatirlo (policías, jueces y fiscales). En las últimas semanas han sido decomisadas varias haciendas y otros bienes raíces, así como sumas millonarias de dólares en efectivo, pertenecientes a los carteles del narcotráfico. En lo que va del año, el decomiso de drogas asciende a la suma de 5,213 kilogramos. Ha quedado demostrado que los traficantes de drogas utilizan el engorde de ganado y su venta a las empresas emparadoras y exportadoras de carne como un vehículo seguro para el lavado de dinero y activos. De igual manera, utilizan también la compra y venta del café de exportación para lavar millonarias sumas en el mercado local (Honduras está a punto de convertirse en el primer productor y exportador de

café a nivel centroamericano, con una cosecha cercana a los cinco millones de quintales).

Ya para finalizar el mes, la llegada de una nueva Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) coincidió en el tiempo con el inicio del debate parlamentario sobre el nuevo presupuesto de ingresos y egresos para el año 2011. Fijado inicialmente en unos 133,000 millones de lempiras (unos siete mil millones de dólares), el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo podría ser incrementado en unos 4,400 millones de lempiras más (unos 232 millones de dólares), si es que los diputados acceden a las urgentes peticiones de los diferentes ministros del gabinete presidencial. Sin embargo, la oportuna llegada de los representantes del FMI ha servido como un factor de disuasión para recordar a los legisladores los compromisos previamente adoptados y la obligación de mantener el gasto público dentro de los parámetros de la disciplina fiscal ya acordada (el gasto público en Honduras representa el 30% del Producto Interno Bruto, mientras que la recaudación tributaria es de apenas el 17% del PIB, dejando un déficit del 13%).

El pago del servicio de la deuda interna pesa como un ancla en la estructura del nuevo presupuesto. Según el ministro de Finanzas, William Chong Wong, al final del primer semestre de este año (junio/2010), la deuda total del país era de 3,979.6 millones de dólares, distribuidos de la siguiente manera: 2,427.8 millones en deuda externa (61%) y 1,551.7 millones en deuda interna (39%). Para tener una idea de la forma desbocada en que ha crecido la deuda interna basta conocer estos datos: la deuda interna en el año 2005 era de 358.9 millones de dólares, o sea que en cinco años, de 2005 a 2010, creció en 1,193 millones de dólares, especialmente en el último semestre del año 2009, durante el gobierno de facto posterior al golpe de Estado.

El mes de noviembre concluyó en medio de una grave crisis alimentaria generada por la real o supuesta escasez de frijoles, cuyo precio en el mercado local alcanzó niveles insospechados. El Congreso Nacional, en contra de la fuerte oposición de los gremios empresariales, se vio obligado a aprobar un decreto de congelamiento de los precios de 33 productos de la llamada "*canasta básica*" por un periodo de dos meses. La medicina, al parecer, ha resultado peor que la enfermedad y los frijoles han desaparecido casi de la venta callejera; si se les encuentra, es a precios de usura y contrabando.

El descontento crece, lo que se expresa en las constantes manifestaciones de protesta que a diario paralizan el tráfico vehicular en las principales calles urbanas o en las diferentes carreteras del país. Los taxistas que reclaman un bono de subsidio, los maestros exigiendo el pago de salarios, las enfer-

meras, los meteorólogos, los policías (en San Pedro Sula), los pobladores, etc., todos reclaman y protestan, cada quien a su manera.

### **Lo que dicen las encuestas**

Una reciente encuesta sobre el Estado de la democracia en Honduras, ordenada por la Universidad Nacional Autónoma (UNAH) a la firma internacional Le Vote Harris y llevada a cabo entre el 02 y el 09 de este mes de noviembre en 12 centros urbanos y entre 1,330 personas mayores de 18 años, arrojó los siguientes resultados, que permanecen inéditos y serán utilizados únicamente por las autoridades universitarias con fines internos:

- El 60,7% de los encuestados cree que lo sucedido el 28 de junio del 2009 hizo **retroceder al país todo lo que había avanzado**.
- El 60,6% cree que todas las instituciones involucradas activamente en la crisis del 28J requieren de una **reforma profunda**.
- El 73% opina que **es totalmente falso que los políticos representan el interés de la sociedad**, ya que lo que menos les interesa a ellos es el bienestar de los demás.
- El 39,5% considera que en el último proceso electoral (2009) **todos los candidatos eran malos**.
- El 69% afirma que se ha perdido el entusiasmo por las elecciones, porque **los políticos no cumplen sus promesas y no ayudan a resolver la situación económica**.

Estos son algunos de los principales hallazgos encontrados por la firma Le Vote Harris en la última encuesta privada realizada en el país.

# DICIEMBRE 2010

---

## La situación política

**E**l año 2010, el primer año de la Administración nacionalista encabezada por el presidente Porfirio “Pepe” Lobo, concluyó en un ambiente de cierta frustración y esperanza por la combinación de iniciativas exitosas y fracasadas junto a expectativas latentes, ambiente que envuelve a la sociedad hondureña un año y medio después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

En cierta manera, todo el año 2010 ha estado marcado por la impronta del golpe de Estado, atrapado en sus interminables laberintos y conflictos sociales y políticos. El tantas veces anunciado y finalmente frustrado retorno del expresidente Manuel Zelaya, la convocatoria a un amplio proceso de diálogo nacional, los complicados intentos gubernamentales para desenredar el ovillo jurídico que envuelve los procesos judiciales en contra de Zelaya, los esfuerzos por lograr la reinserción plena en la comunidad internacional, las graves denuncias por violaciones a los derechos humanos, las disputas internas en el gobierno lobista, las candidaturas presidenciales prematuras al interior de los dos partidos políticos tradicionales, pero especialmente en el partido Nacional (PN), junto a los graves y continuados conflictos sociales, en particular en la zona del Bajo Aguán, son algunos de los principales acontecimientos que marcaron y condicionaron la agenda política del gobierno nacionalista de don Porfirio Lobo.

A principios del mes el Congreso Nacional aprobó finalmente el presupuesto general de la nación para el ejercicio fiscal del año 2011. En total, el presupuesto aprobado suma la cantidad de 7,015 millones de dólares, el más grande en la historia reciente del país. Se distribuye de la siguiente forma: 3,983 millones para el gobierno central (unos 2,800 provenientes de los impuestos y fondos nacionales más 1,183 derivados de préstamos y donaciones internacionales) y 3,032 millones para las instituciones descentralizadas del Estado. El 80% del nuevo presupuesto deberá ser financiado con fondos nacionales y el resto con préstamos de los organismos financieros internacionales y donaciones de los países amigos.

Las Fuerzas Armadas y la Policía recibieron aumentos, mientras que los recursos destinados a educación y salud sufrieron recortes. Una buena parte del presupuesto será absorbida por el pago de amortizaciones e intereses de la deuda pública (interna y externa), uno de los más grandes desafíos al que deben hacer frente las finanzas públicas.

Pertrechado ya con el nuevo presupuesto, el gobierno se apresta a comenzar el año 2011 haciendo frente a dos problemas de mucha trascendencia jurídica (constitucional) y política:

- a) La reforma del artículo No.5 de la Constitución para ampliar el marco del Plebiscito y el Referéndum, haciéndolos más abiertos e incluyentes, de tal manera que permitan llevar a cabo una consulta popular a mediados del año para escoger una de las siguientes posibilidades: 1) convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva Constitución; 2) reformar sustancialmente la actual Constitución, o 3) suscribir un amplio Pacto Social.
  
- b) El inicio de un verdadero proceso de descentralización del sistema educativo nacional, que privilegie el rol de los gobiernos locales (Alcaldías municipales) y de las organizaciones de padres de familia y de sociedad civil en general en la supervisión y control de las actividades educativas de carácter público.

Estas dos grandes iniciativas están programadas para arrancar en el mes de enero, de tal manera que el gobierno deberá estar listo para hacer frente a los numerosos problemas y consecuencias que de ellas se deriven.

En lo que concierne a la primera de esas iniciativas -la reforma del artículo 5-, el cabildeo previo ha sido muy provechoso y el gobierno cuenta con los votos suficientes para impulsar el cambio en el seno del Poder Legislativo. Tanto Porfirio Lobo como Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional, están convencidos de la necesidad de esa reforma y harán todos los esfuerzos necesarios para ponerla en marcha. De esa manera cumplen dos objetivos: por un lado, arrebatan una importante bandera (la consulta para la Constituyente) al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que coordina desde el exilio el expresidente Zelaya, y, por otro lado, generan su propio espacio de maniobra política al consultar directamente al pueblo y aislar a los sectores más conservadores de su partido, el Nacional. La reforma deberá ser aprobada en enero y ratificada por las dos terceras partes de los diputados tan pronto como inicie la siguiente legislatura, ya que se trata de una reforma al texto constitucional. Una vez logrado esto, el Plebiscito podría ser convocado para llevarlo a cabo a mediados del año, preferiblemente en el mes de junio.

En cuanto a la segunda iniciativa -la descentralización del sistema educativo-, la situación es más complicada y su posible solución luce más remota y difícil. Los gremios magisteriales, el conglomerado laboral con mayor capacidad de movilización y protesta (agrupa a más de 50,000 maestros de educación primaria y secundaria del sistema público), ya han declarado su abierta oposición a la intención gubernamental, la que consideran como un atentado contra sus derechos y conquistas laborales contenidos en el llamado Estatuto del Docente. Los dirigentes magisteriales rechazan la simple idea de que los alcaldes y los padres de familia controlen las actividades educativas en las comunidades, vigilen la asistencia laboral de los maestros y supervisen el pago de sus salarios. Desde ya están convocando a movilizaciones en todo el país para rechazar el proyecto descentralizador, al que consideran como un preámbulo para la politización partidaria, primero, y la privatización total del sistema educativo, después. El gobierno, por su parte, persigue el objetivo de devolver cierta gobernabilidad al sistema educativo, mejorar la calidad de la educación y asegurar que los maestros cumplan con los 200 días de clases anuales que se consideran óptimos (en este año 2010 los maestros, según un informe del Congreso Nacional, sólo sirvieron 90 días de clases; la UNESCO asegura que fueron 120 y el Ministerio de Educación afirma que fueron 173). Los alcaldes de los 298 municipios del país, persuadidos previamente por Lobo y Hernández, en su mayoría apoyan el proyecto de descentralización educativa y respaldan al gobierno.

Lo que se avecina es una nueva confrontación entre maestros y gobierno, que se sumará a los constantes choques que les han enfrentado durante todo el año 2010 por cuestiones salariales y condiciones de trabajo. Los maestros son, ya se sabe, el gremio con mayor capacidad de convocatoria y movilización, capaces de poner en las calles a decenas de miles de educadores dispuestos a confrontar a las autoridades gubernamentales. Son, por añadidura y como si esto fuera poco, el grupo clave, la fuerza principal en las manifestaciones callejeras que suele convocar el FNRP. Son, por lo tanto y por el momento, uno de los principales soportes del expresidente Zelaya.

Todo esto quiere decir que el nuevo año anuncia desde ahora una mayor agudización de la conflictividad social, afectando, por lo mismo, los precarios niveles de gobernabilidad política democrática prevalecientes en el país.

Quizás por eso, entre otras cosas, el presidente Lobo ha hecho tantos y tan difíciles esfuerzos para facilitar el camino del retorno del expresidente Zelaya. Los últimos intentos conocidos tienen que ver con el nombramiento de dos abogados defensores, por la vía de la Procuraduría General de la República, para que representen a Zelaya en los dos juicios que todavía permanecen activos en los tribunales del país. De acuerdo a esta maniobra, el juez designado fallaría a favor de anular los juicios ya que adolecen de sus-

tanciales defectos procesales y, además, los delitos invocados pueden y deben ser amparados por el decreto de amnistía emitido por el Congreso Nacional a principios del año. Zelaya, como era de esperar, rechaza lo que considera una trampa jurídica y política del régimen lobista, la denuncia internacionalmente y la ignora a nivel interno. El expresidente se niega a reconocer autoridad a los jueces y fiscales que participaron activamente en la ejecución y aval jurídico del golpe de Estado y, por lo tanto, no está dispuesto a someterse a sus juicios. Pero, además, Zelaya da la impresión de dificultar cada vez más las cosas para que el gobierno de Lobo acabe finalmente cediendo a todas sus pretensiones y condiciones. Siempre que el gobierno parece estar a punto de hallar una solución, Zelaya endurece su posición política y plantea nuevos requisitos. Paradójicamente, lo mismo hacen los grupos de ultraderecha asociados en la Unión Cívica Democrática (UCD), los que también afilan sus lanzas y arremeten contra el gobierno lobista para evitar el temido retorno de Zelaya.

De esta manera, el país da la impresión de estar atrapado en una lógica absurda en la que muchos de los artífices del golpe de Estado son hoy los mismos que se esfuerzan por traer de regreso a Zelaya y convertirlo en un interlocutor único en los posibles diálogos políticos que se avecinan en torno al tema de las reformas constitucionales o la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Los que crearon y pusieron en funcionamiento un complicado embrollo jurídico para acusar a Zelaya y mantenerlo atrapado en interminables líos judiciales por muchos años, son los que hoy hacen mayores esfuerzos por desenredar el ovillo y encontrarle una salida “legal” y elegante del laberinto que ellos mismos le construyeron. El caso más típico y, si se quiere, patético, es el del actual ministro de Planificación y Cooperación Externa, el democristiano Arturo Corrales, conspirador golpista de la primera hora, representante y negociador del gobernante de facto Roberto Micheletti después y hoy, por decisión del presidente Lobo, reconvertido en su principal negociador para facilitar el regreso de Zelaya a la patria.

Para complicar más las cosas, a finales del año la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo constitucional, adoptó una resolución declarando inconstitucional y, por lo mismo, ilegal y sin valor alguno la reforma que el Congreso Nacional había hecho en el año 2008 a la ley orgánica del Ministerio Público, según la cual el Poder Legislativo puede investigar la conducta administrativa del Fiscal General y el Fiscal adjunto y, si se encontraran pruebas que le incriminen, proceder a su destitución. De esta manera, la Corte Suprema desafía la autoridad y competencia del Poder Legislativo (invasión de jurisdicción entre dos poderes del Estado) al tiempo que, poniendo sus propias barbas en remojo, se blinda desde ahora para evitar una eventual destitución de los propios magistrados de la misma Corte. Todo esto no es más que el reflejo de la pugna que confronta al Fiscal general y a los magistrados de la Corte Suprema, por un lado, frente al presidente Lobo

---

y Juan Orlando Hernández, presidente a su vez del Congreso Nacional, por el otro, en torno a la mejor forma de enfrentar las consecuencias de la crisis política generada por el golpe de Estado y el asunto especial del retorno del expresidente Manuel Zelaya desde su exilio dominicano.

La decisión de la Corte Suprema supone un grave desafío al Congreso Nacional y pone en entredicho la autoridad y liderazgo de su actual presidente, Juan Orlando Hernández, quien, como ya se sabe, se perfila desde ahora como un fuerte aspirante a suceder a Porfirio Lobo en la presidencia de la República. El Congreso Nacional deberá reivindicar su derecho a destituir al Fiscal general y al Fiscal adjunto de la misma forma que tiene la facultad de elegirlos en sus cargos. Con más burla que sorpresa, muchos juristas se preguntan ¿cómo es eso de que el Poder Legislativo no puede destituir a los principales fiscales del Ministerio Público si hace año y medio fue capaz de destituir, ilegalmente por cierto, al propio presidente de la República? Son los aspectos contradictorios que caracterizan el lado cómico y absurdo de la crisis.

En el Congreso Nacional coge fuerza la idea de destituir al Fiscal General Luis Rubí, a quien el presidente dominicano Leonel Fernández no vaciló en calificar recientemente como *“el principal obstáculo para la salida de la crisis política”* en que se encuentra sumida Honduras. Rubí, quien debe su cargo al apoyo que le brindó Micheletti cuando era presidente del Congreso Nacional, se ha convertido en uno de los más furibundos enemigos de Zelaya. Sabe que su destitución está en la agenda secreta de Juan Orlando Hernández y, para evitar desagradables sorpresas, acude en busca de auxilio ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes, a su vez, también conocen de las cada vez más evidentes intenciones de Lobo y Hernández para hacer borrón y cuenta nueva, es decir, destituir a los actuales magistrados y colocar en su lugar a abogados más consecuentes y menos conflictivos. Tanto Lobo como Hernández, para poder llevar adelante sus planes políticos (reformas constitucionales a las figuras del Plebiscito y el Referéndum, convocatoria a una consulta popular, posible convocatoria a una Asamblea Constituyente, reformas a la Ley electoral, etc.) necesitan la colaboración de una Corte Suprema integrada por magistrados que sean menos golpistas y más leales al proyecto reconciliador del presidente Lobo.

Así están dispuestas las piezas en el tablero político del país al llegar el final del año 2010.

## **La situación económica**

**E**l país recibe el año nuevo en una situación económica difícil y, por momentos, casi desesperada, pero, en todo caso, mucho mejor de lo que se esperaba. De acuerdo a las cifras del Banco Central (BCH), la economía logró obtener finalmente una tasa de crecimiento del 3,5% de su Producto Interno Bruto (PIB), un porcentaje superior al 2%, vaticinado por el mismo Banco a principios de la Administración lobista en enero del presente año. La inflación subió hasta el 7% (fue de 3,1% en el 2009), superando las estimaciones preliminares del BCH que había pronosticado una tasa inflacionaria entre el 5 y el 6%. El precio de los combustibles (el país consume 19,5 millones de barriles al año), siempre en ascenso, más los graves daños causados en la agricultura por las lluvias y correspondientes inundaciones, son algunas de las causas que explicarían el alza de la inflación. Las reservas internacionales netas (RIN) están en un buen nivel: 2,690 millones de dólares (2,116 en diciembre de 2009) y sirven para cubrir cuatro meses de importaciones, o sea que se mantienen dentro del estándar internacional aceptado. Las exportaciones, aunque no crecieron lo suficiente, han mejorado su nivel con respecto al año 2009. En este sentido, hay que destacar el buen comportamiento de las exportaciones de café, camarones y productos de la industria maquiladora.

Influyentes economistas y banqueros como Jorge Bueso Arias (Banco de Occidente) y Jaime Rosenthal (Banco y Grupo Continental), ambos destacados dirigentes del partido Liberal, coinciden en su optimismo sobre las perspectivas de la economía nacional para el año 2011 y vaticinan un crecimiento de entre 4,5 y 5% del PIB. Fundamentan sus pronósticos en los buenos precios del café, el aumento sustancial de la producción del grano y la mejora de su calidad. Honduras se ha convertido ya en el primer productor y exportador cafetalero de Centroamérica. La producción del grano está en manos de unos 112 mil pequeños finqueros, que constituyen el 95% del total de productores de café, por lo que el cultivo constituye una de las actividades económicas más equitativas y mejor distribuidas socialmente en todo el país. Está ubicada en 210 de los 298 municipios del territorio nacional, dispersa en 15 de los 18 departamentos o provincias en que está dividida Honduras. La distribución a nivel internacional, en cambio, está en manos de unas 40 empresas locales y transnacionales que compran el café directamente a los pequeños productores y lo revenden en el mercado internacional, obteniendo una ganancia promedio de cinco dólares por cada quintal. El costo de producción de un quintal de café oscila entre 65 y 90 dólares, según el grado de tecnología invertido. Su precio actual anda por los 210 dólares y se espera que se mantenga en esos niveles en los próximos tres años. De igual manera, los técnicos calculan que en los próximos siete años el precio internacional no será inferior a los 100 dólares por quintal. En este año, la exportación de café produjo 1,200 millones de dólares, el

doble de lo exportado en el 2009 (605 millones de dólares). Estos son los datos que alimentan el optimismo de los banqueros mencionados en cuanto a las posibilidades de crecimiento económico en este nuevo año 2011.

La inversión extranjera directa (IED), aunque no alcanza todavía los niveles más óptimos, experimentó un ligero crecimiento con respecto al año anterior: pasó de 284 a 299 millones de dólares, con un ligero aumento del 5%. Poco a poco se va produciendo una lenta recuperación de la confianza de los inversionistas, especialmente en las áreas de las telecomunicaciones, la energía y la industria. Del total de las inversiones extranjeras en este año, 182,4 millones pertenecen a inversionistas de Estados Unidos (61%, es decir el primer lugar). El segundo lugar lo ocupa Europa, especialmente Alemania (14,2 millones), Irlanda (10,9 millones) e Inglaterra (9,3 Millones) que invirtieron en telefonía móvil, café y alimentos envasados. Centroamérica tiene el tercer lugar con 29,5 millones de dólares (40% más que en el 2009). Las inversiones extranjeras en general se distribuyeron en este año de la siguiente manera: 35 en transporte y telecomunicaciones, 22% en manufacturas, 18,2% en la maquila, 10% en servicios y 7,3% en electricidad y agua.

Para que las perspectivas de la economía produzcan los mayores beneficios, el gobierno de Porfirio Lobo deberá enfrentar con gran rigor el desafío de devolver estabilidad y equilibrio a las maltrechas finanzas públicas. El déficit fiscal, según los últimos datos del Ministerio de Finanzas, llegó al 3,5% del PIB (unos 10,500 millones de lempiras, es decir aproximadamente unos 553 millones de dólares). La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), a pesar de la guerra sorda que han desatado contra su director Osvaldo Guillén un grupo de empresarios financistas del partido Nacional, logró superar la meta de los 43 mil millones de lempiras de recaudación total en el año, aunque no pudo colmar todas sus expectativas recaudatorias. La DEI cuenta con apenas 812 "*grandes contribuyentes*" que generan el 82% del total de los ingresos por concepto de impuestos, 1,614 "*medianos contribuyentes*" que aportan el 6% y el resto (12%) lo generan los demás contribuyentes. La deuda total que los contribuyentes le deben al Estado asciende actualmente a la suma de 219 millones de dólares.

Ya para finalizar el año, los medios de comunicación divulgaron información sobre dos casos de sobornos pagados en Honduras por dos compañías transnacionales norteamericanas (Latinode y Alcatel) a conocidos funcionarios públicos en los gobiernos de Ricardo Maduro (2002-2006) y Manuel Zelaya (2006-2009). En el primer caso los mencionados son el hermano del presidente de la República, uno de sus primos, el gerente de la compañía telefónica HONDUTEL y otros funcionarios menores. En el segundo caso son ex gerentes de HONDUTEL como Marcelo Chimirri y otros. Los casos se están ventilando en los tribunales de Estados Unidos y muy pronto se

podrán conocer más detalles y los nombres precisos de todos los involucrados.

Los sobornos, la corrupción generalizada a través de la venta de influencias y el cobro de comisiones en las compras y contrataciones del Estado son prácticas comunes que explican el porqué Honduras está en los últimos lugares de la lista de Transparencia Internacional y, más recientemente, las razones por las cuales el país quedó fuera de los beneficios de la Cuenta del Milenio, programa de cooperación millonario del gobierno de los Estados Unidos. En la primera fase de ejecución de ese programa, Honduras había sido generosamente beneficiada pero en la segunda fase quedó al margen. La razón es una sola: el alto grado de corrupción de los diferentes gobiernos y la impunidad de que gozan los funcionarios corruptos.

Así terminó el año 2010, el primero de la Administración nacionalista (2010-2014) que encabeza el presidente Porfirio Lobo.

**AÑO**  
**2011**

# ENERO

## 2011

---

### La situación política

**E**l nuevo año comenzó con una intensa actividad política que incluyó reformas clave a la Constitución de la República, creación de las llamadas Regiones Económicas de Desarrollo (RED) más conocidas como “*ciudades modelo*”, la aprobación del Consejo de la Judicatura que introduce mejores controles y más orden en la división de funciones dentro del Poder Judicial, el nombramiento de los nuevos integrantes del Estado Mayor Conjunto, el inicio de cinco grandes proyectos hidroeléctricos y uno de energía eólica, movilizaciones callejeras de los maestros y los campesinos y, como ya es usual, constantes aumentos en las tarifas de los servicios públicos (luz, teléfono, etc.) y en los precios de los alimentos y de los combustibles.

Tal como se esperaba, el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, logró reunir una amplia mayoría de diputados a favor de las reformas constitucionales para ampliar el radio de cobertura de las figuras de democracia directa, el plebiscito y el referéndum, que quedaron aprobadas desde mediados del mes y pendientes de ratificación por parte de la nueva legislatura en la segunda mitad de febrero. Las reformas fueron aprobadas con una holgada mayoría de votos: 103 diputados a favor, de los 128 que conforman el parlamento hondureño. Cabe destacar que muchos diputados liberales votaron a favor de las reformas a pesar y en contra de la posición oficial del Concejo Central Ejecutivo (CCE) de ese partido que previamente se había pronunciado en contra. Desde su exilio en República Dominicana, el ex presidente Manuel Zelaya anunció su respaldo a las reformas y pidió a sus partidarios continuar en la lucha para profundizar el contenido de las mismas y lograr la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Es la primera vez que Zelaya coincide en apoyar una reforma constitucional auspiciada por el gobierno de Porfirio Lobo.

Las reformas constitucionales, especialmente la del artículo 5, abren la puerta para una futura convocatoria, vía plebiscito, a una amplia consulta popular en torno a temas tan sensibles como la Asamblea Nacional Consti-

---

tuyente, la reelección presidencial y otros, todos ellos relacionados con los llamados “*artículos pétreos*”, es decir aquellos postulados constitucionales que, a juicio de los legisladores que redactaron la Constitución vigente (1982), serían inamovibles e irreformables. O sea que las reformas tocaron un tema que tradicionalmente ha sido considerado un tabú en el escenario político local: el tema de la posible reforma de los “*artículos pétreos*”.

Como para agitar más las aguas, el propio presidente Lobo declaró que no se oponía a la reelección presidencial, siempre y cuando esta se produjera de manera alterna y no continua, al tiempo que expresó su profunda satisfacción y alegría por la aprobación de las reformas, cuyo decreto “*voy a sancionar mil veces (si es necesario) porque reconoce el derecho del pueblo a decidir*”. Las declaraciones de Lobo sobre la posible eliminación, vía plebiscito, de la prohibición constitucional de la reelección presidencial cayeron como un rayo en cielo sereno y alborotaron el cotarro político.

Pero las reformas introducidas en la Constitución no se limitaron sólo al artículo cinco. También incluyeron la creación del Consejo de la Judicatura, por medio del cual el Congreso Nacional recorta las facultades de la Corte Suprema de Justicia en el nombramiento y remoción de los jueces en todo el territorio nacional, una facultad tradicionalmente usada por los magistrados para favorecer lealtades políticas y reducir la independencia de los jueces y tribunales. De esta manera, Juan Orlando Hernández, el llamado del fín del presidente Lobo para convertirse en el futuro candidato presidencial del partido Nacional (PN), responde a la provocación de la Corte Suprema de Justicia que en diciembre pasado anuló la reforma del artículo 25 de la Ley del Ministerio Público que permite al Congreso Nacional despedir, en caso de conducta impropia o desempeño irregular, al Fiscal General y al Fiscal Adjunto. Es la continuidad de la lucha sorda que hay entre los distintos poderes del Estado. Mientras el Poder Ejecutivo, en estrecha alianza con el Legislativo, intenta sacar adelante el plan de reconciliación nacional, con el retorno del ex presidente Zelaya incluido, y la reforma política, el Poder Judicial, en donde se atrincheran los magistrados que avalaron el golpe de Estado del 28J, se opone con firmeza a los planes del dúo Lobo-Hernández. Junto a los magistrados de la Corte Suprema cierra filas el Fiscal General, Luis Rubí, otro connotado funcionario involucrado en el golpe de Estado que sigue siendo leal al gobernante de facto Roberto Micheletti.

Con una rapidez asombrosa para el estándar local, los legisladores, siempre conducidos por su presidente Juan Orlando Hernández, aprobaron también la creación de las llamadas Zonas o Regiones Especiales de Desarrollo, más conocidas por el nombre genérico de “*ciudades modelo*”, que se ha convertido ya en el proyecto económico favorito del presidente Lobo y en uno de sus objetivos primordiales para los tres años que todavía le faltan a su Administración. El promotor de la idea, el profesor estadounidense de

economía Paul Romer, con la ayuda de un empresario hondureño-nicaragüense, Xavier Arguello, y el jefe del staff en Casa Presidencial, Octavio Sánchez hijo, lograron convencer al presidente Lobo sobre las reales o supuestas bondades del proyecto, para desarrollar el cual necesitan que el gobierno hondureño conceda en arriendo partes escogidas de su territorio (unos mil kilómetros cuadrados), preferiblemente en zonas costeras en donde se desarrollarían una especie de pequeñas “ciudades-estado”, con un alto grado de autonomía y apertura total para transacciones financieras y comerciales de todo tipo. El proyecto requiere de la presencia de lo que se llama un “estado garante”, es decir un país que avale la viabilidad de las ciudades modelo y dé garantías de su normal funcionamiento y del respeto absoluto por parte del Estado concesionario (Honduras) a las reglas del juego legalmente pactadas. Se habla de hacer gestiones (Romer y cía) ante gobiernos tales como Canadá o Noruega.

El proyecto, no hay duda, tiene un cierto sabor a utopía, a sueño irrealizable. Pero, tampoco hay duda, se ha convertido ya en el proyecto favorito del presidente Lobo, quien ha invitado a sus compatriotas a “soñar en grande”. Para reafirmar sus intenciones, el presidente no ha vacilado en viajar al menos en dos ocasiones a los Estados Unidos para conocer más detalles del proyecto y en breve viajará a Corea del Sur y a Singapur para estudiar in situ el funcionamiento de las “ciudades modelo” en esos dos países.

Como era de esperar, el tema ha generado un gran debate en los círculos políticos y empresariales de la sociedad hondureña. Son muchos los críticos que condenan de antemano lo que consideran “una venta del territorio nacional” y un atentado sin precedentes a la soberanía del país. El ex presidente Zelaya ha sido uno de los primeros en condenar en términos muy duros la iniciativa del dúo Lobo-Hernández. Lo mismo ha hecho el llamado Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y varios políticos de la oposición liberal. Los empresarios, en cambio, han sido más cautelosos en sus juicios y, sin condenar el proyecto, manifiestan sus dudas y vacilaciones. La discusión es amplia y abierta; seguramente se habrá de intensificar en los próximos días, a medida que el gobierno avance en su decisión de poner en marcha el ambicioso proyecto.

Como un efecto colateral al debate sobre las “ciudades modelo”, la crítica del ex presidente Zelaya al proyecto ha provocado el disgusto del círculo que rodea al presidente Lobo y sus nuevas dudas sobre la conveniencia o no de facilitar su retorno desde el exilio dominicano en donde hoy se encuentra. Los lobistas de Casa presidencial razonan así: si Zelaya retorna y se dedica a hacer campaña crítica en contra de las “ciudades modelo”, ¿qué sentido tiene facilitar su regreso y crearnos un nuevo problema a nivel interno? Todo indica que poco a poco se va debilitando el interés de Lobo por contribuir a la reintegración de Zelaya en el escenario político local.

Sin embargo, aunque con retrasos y dificultades, avanza el proceso para desenredar la madeja jurídica que envuelve los procesos judiciales montados contra el ex presidente. En su fase actual, los dos expedientes que contienen los respectivos juicios deberán pasar a manos de la Corte Suprema de Justicia, la que, a su vez, deberá nombrar un *“juez natural”* que se encargará de fallar de manera definitiva en el caso de los mencionados juicios. Si el fallo es, tal como se espera, favorable a la anulación de esos procesos judiciales, el ex presidente Zelaya se quedará sin argumentos ni pretextos para no regresar a Honduras. Es el momento que espera el presidente Lobo para presionar, al amparo diplomático de Estados Unidos, a favor del retorno pleno de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA). El momento decisivo podría ser en junio, durante la reunión de cancilleres de la OEA. Para esa fecha, Estados Unidos espera que el nuevo gobierno brasileño haya cambiado su posición y acepte facilitar el retorno de Honduras a la OEA. Si ese no fuera el caso, se podría forzar una votación en la que, por una diferencia mínima (uno o dos votos), el gobierno de Lobo podría ser aceptado en el seno del sistema interamericano. Aunque no sería la mejor solución (Washington se muestra renuente a *“humillar”* a Brasil en una votación desfavorable), no se debe descartar esta posible salida. Si para esa fecha (junio, 2011) Zelaya ya se encuentra en el país, en ese caso las cosas serían más fáciles y podrían resolverse sin necesidad de acudir a una incómoda y forzada votación. Es la salida más conveniente tanto para Lobo como para el Departamento de Estado norteamericano.

Además de lidiar con el *“caso Zelaya”*, el presidente hondureño ha debido afrontar en este mes el difícil problema de renovar la cúpula militar, nombrando a los nuevos integrantes del Estado Mayor Conjunto (EMC) y la Junta de Comandantes (Ejército, Naval y Fuerza Aérea). Aunque lo debió hacer en el mes de diciembre, las negociaciones, complicadas y confusas, se prolongaron más allá de lo programado y sólo en enero fue posible poner en marcha la fórmula salvadora que permitió sortear el impasse. En una maniobra típica de la política criolla, Lobo ascendió al EMC al general René Osorio, su hombre de confianza, a fin de que cumpliera con el requisito clave (ser miembro del EMC) para poder ser nombrado su jefe. La *“salida”* causó el disgusto de más de alguno y provocó molestias al interior de la alta oficialidad castrense. Sin embargo, las aguas empezaron a calmarse sobre todo después del paso a retiro de cinco generales y nueve coroneles más el envío al llamado *“exilio diplomático”* de otros tantos generales, entre ellos Miguel Ángel García Padgett, posible nuevo agregado militar en México y uno de los fuertes y más duros aspirantes a dirigir el EMC.

El general Osorio Canales, jefe de la guardia de honor presidencial en el gobierno de facto de Roberto Micheletti y en el primer año de la Administración de Lobo, ha sido señalado como uno de los oficiales encargados de supervisar y controlar la acción militar que culminó con el derrocamiento del

ex presidente Zelaya, su ilegal captura y posterior expatriación delictiva del territorio nacional. Perteneciente a la promoción XVII de la Escuela Militar Francisco Morazán, Osorio es un oficial del círculo cercano del general Romeo Vásquez (como éste, proviene de la llamada “*comunidad de inteligencia*”, es decir los servicios secretos), jefe del golpe de Estado del 28J y actualmente Gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL). Su llegada a la jefatura del EMC obedece más a las presiones y preferencias del presidente Lobo que a sus méritos propios y capacidades profesionales. Su presencia al frente de tan importante cargo seguramente será una fuente constante de malestar y molestia al interior de las filas castrenses.

El Congreso Nacional inauguró su segunda legislatura (enero 2011 – enero 2012) el día 25 de enero, luego de intensas jornadas de reformas y aprobación de nuevas leyes, que, entre otras cosas, incluyeron la ratificación de los contratos para la construcción de cinco represas hidroeléctricas en el territorio nacional, un viejo sueño acariciado y nunca alcanzado por los últimos gobiernos. Las represas en mención son las siguientes: Patuca I, II y III, ubicadas en el departamento de Olancho y con financiación principal de la República Popular China (se espera que lleguen mil trabajadores chinos para iniciar las labores de construcción de estas represas), Los Llanitos y Jicatuyo, en el departamento de Santa Bárbara y con posible financiación de Brasil. La aprobación de estos contratos permitirá poner en marcha la ejecución de estos ambiciosos proyectos, especialmente las del río Patuca, en un esfuerzo a fondo por diversificar la rígida matriz energética del país, basada fundamentalmente en la producción de energía a base de petróleo (70%). También en este mes fue inaugurado el “*parque eólico*” del Cerro de Hula, al sur de la ciudad capital, en donde se producirá energía a base del viento. Es, según el gobierno, el segundo parque más grande en América Latina. Sus inversionistas son norteamericanos, que venían luchando desde hace varios años para obtener los permisos ambientales y administrativos que les permitieran lanzar este proyecto.

Casi al mismo tiempo, el próximo mes de abril deberán iniciar los trabajos para la instalación en el departamento de Colón de una gran planta para generar energía a base de carbón. Este proyecto, aprobado en el año 2008 durante el gobierno de Manuel Zelaya, ha tenido una trayectoria muy controversial ya que los técnicos del Banco Mundial, por razones del posible daño ambiental, desaconsejaron su ejecución. Sin embargo, algunos influyentes funcionarios en el gabinete del gobierno presionaron fuerte a favor de su aprobación, favoreciendo de esa forma a reconocidos empresarios y gestores del polémico proyecto. El costo total de la obra será de 300 millones de dólares, 200 de los cuales serán aportados por bancos de la China Popular y el resto por empresarios locales ligados al Grupo Continental (Jaime Rosenthal y familia) y algunos inversionistas guatemaltecos, socios

---

del gestor principal, el empresario Víctor Bendeck. La planta espera producir unos 50 megavatios en el primer año y 300 al finalizar su construcción total. Se espera que a partir de abril comiencen a llegar unos 400 obreros chinos que trabajarán en el proyecto.

El mes finalizó envuelto todavía en el clima político de cotilleo y rumores generado a partir de la divulgación de nuevos cables diplomáticos aireados por Wikileaks, en los cuales queda al descubierto el alto nivel de influencia y presión que tiene la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, la anuencia casi servil de los gobernantes y líderes políticos locales frente a los diplomáticos norteamericanos, y el cabildeo realizado para nombrar o destituir funcionarios dentro del aparato estatal. El presidente Lobo ha quedado muy mal parado a raíz de las más recientes revelaciones contenidas en los cables e informes de inteligencia enviados por el embajador Llorens a Washington. Aparece como un gobernante sumiso y desinformado, que acude a la embajada en busca de consejos e información.

### La difícil marcha de la economía

Ahora, ya con los datos más afinados y las cuentas del 2010 completamente cerradas, el Banco Central de Honduras (BCH) ha empezado a proporcionar cifras más definitivas sobre el verdadero Estado de la economía nacional. Resulta que la verdadera tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue de apenas 2,6% y no de 3,5% como se informó, con exceso de entusiasmo y triunfalismo, a finales del año anterior. La inflación llegó casi al 7% y el déficit fiscal quedó fijado en 4,5% del PIB. La inversión extranjera directa sumó 621,5 millones de dólares en el año 2010 (120,2 millones más que en el año 2009, o sea creció en un 24%) y la deuda pública interna llegó a 35 mil millones de lempiras (unos 1,842 millones de dólares, mientras que al momento del golpe de Estado del 28J era apenas de unos 600 millones de dólares). Las reservas internacionales llegaron a 2,754.4 millones de dólares, lo que significa que crecieron en 35,1 millones con respecto a diciembre del 2010. Las exportaciones crecieron en 17% pero la industria de la construcción, gran fuente creadora de empleos, sigue deprimida por segundo año consecutivo y cayó en 18%.

Continuó la tendencia al alza en los precios de los granos y otros alimentos fundamentales en la canasta básica de los consumidores. El precio de las gasolinas experimenta alzas constantes cada fin de semana y si el precio del petróleo supera los cien dólares por barril, la factura petrolera del país se verá incrementada en 300 millones de dólares. Actualmente es de unos 2 mil millones. En el campo de los servicios públicos, subió la tarifa de la energía eléctrica en 3% para cumplir con los compromisos contraídos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se anuncian nuevos aumentos en

este rubro. Los precios del cemento y la varilla de hierro se fueron para arriba y elevaron el costo de las viviendas en 12,6%, según datos de la Cámara de la Construcción.

Aunque el gobierno se muestra optimista ante el futuro de la economía nacional, lo cierto es que hay razones suficientes para ser escépticos y tener cautela ante los pronósticos demasiado entusiastas. La creación de empleo, la atracción de inversionistas extranjeros, el saneamiento de las finanzas públicas y la mejoría en la capacidad de ejecución de los proyectos pendientes (el presidente Lobo reclamó a sus ministros por la tardanza en ejecutar unos 1,800 millones de dólares en proyectos pendientes o en fase lenta de realización), siguen siendo unos de los principales desafíos que deberá enfrentar en este año el gobierno del presidente Porfirio “Pepe” Lobo.

# FEBRERO

## 2011

---

### La situación política

**T**al como ya se había previsto desde finales del año anterior, el 2011 estaría saturado de conflictos sociales, entre los cuales habría de destacar la confrontación entre los gremios magisteriales y el gobierno del presidente Porfirio Lobo en torno al controversial tema de la descentralización del sistema educativo nacional. El gobierno, en un afán por buscar una salida a la grave crisis que afecta al sector educación, tomó la decisión, quizás un tanto apresurada y sin generar en torno a ella el debido e inevitable consenso político, de proceder a la aprobación en el Congreso Nacional de una ley que ordene de inmediato la descentralización del sector de la educación pública, transfiriendo muchas de sus funciones y responsabilidades a los gobiernos locales, es decir a los municipios (298 en total). La decisión ha sido interpretada por los dirigentes magisteriales como un intento por “*privatizar*” la educación pública por la vía disfrazada de la “*municipalización*”. El argumento, sin duda, es exagerado y coloca en los extremos el afán descentralizador del gobierno central. Pero, al mismo tiempo, contiene algunos elementos de razón que valdría la pena analizar y discutir con los interlocutores gubernamentales.

Para el caso, nadie puede negar que el sistema educativo nacional se encuentra en crisis, con estructuras administrativas ingobernables, corrupción burocrática, politización partidaria y, como consecuencia de todo ello, una pésima calidad educativa que mantiene a los alumnos hondureños en los tres últimos puestos de calificación a nivel latinoamericano (menos del 47% de los estudiantes aprueban matemáticas e idioma español). El sector sufre dos grandes males, cada vez más característicos de la administración estatal en Honduras:

- a) La politización partidaria, que se traduce en la colocación de militantes políticos del partido gobernante dentro de las estructuras administrativas del sistema educativo, atendiendo más a su lealtad política que a su calificación profesional. Esto redundará en la ineficiencia e ineficacia del sistema y en la baja calidad docente y educativa,

además de provocar un exceso desmesurado en el gasto que el Estado invierte en la educación (uno de los más altos en América Latina y, al mismo tiempo, uno de los más improductivos).

- b)** La gremialización burocrática del sistema educacional, que se expresa en el reparto de casillas presupuestarias, privilegios y canonjías entre los líderes y dirigentes de los gremios (sindicatos) magisteriales, que han logrado copar los puestos clave de instituciones como el Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA), al que tienen hoy en bancarrota.

Estas dos situaciones han conducido al sistema educativo nacional a una verdadera encrucijada. Ningún gobierno, en los últimos treinta años, ha podido encontrar una solución adecuada para este problema, que cada vez se empeora y agrava más. El gobierno del presidente Lobo, en un intento por coger al toro por los cuernos, ha decidido poner en marcha un plan de descentralización que debilite el poder de los gremios y fortalezca, potenciándolo, el poder de supervisión y control por parte de las autoridades municipales y las asociaciones de padres de familia. La idea tiene su propia lógica interna, pero no es totalmente viable en las actuales circunstancias del mundo municipal. Muchas, quizás la mayoría, de las Alcaldías municipales no están en capacidad de gestionar con eficiencia los temas educativos en sus propias comunidades. También ellas padecen el mal de la politización partidaria y sufren de un déficit notable en materia gerencial y administrativa, además de padecer los ya crónicos problemas de escasez de recursos humanos y carencias presupuestarias.

El gobierno ha entrado en un camino peligroso. Los gremios magisteriales tienen un gran poder de convocatoria y, además, como para complicar más las cosas, cuentan con el respaldo del llamado Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que aglutina a la mayor parte de la oposición zelayista en contra del gobierno de Lobo. Las multitudinarias manifestaciones callejeras de los últimos días en contra de la descentralización educativa, las “*tomas*” de carreteras y edificios de algunas Alcaldías, así como la interrupción continua de las clases en las aulas escolares y de los colegios de secundaria (muchos estudiantes se han sumado a las protestas), son el mejor ejemplo de la gravedad de la situación y el peligro real de que desemboque en una crisis de mayores proporciones.

Junto a estas manifestaciones de descontento se han sumado los conductores de taxis que, reclamando el pago de subsidios millonarios y quejándose por los continuos aumentos en el precio de los combustibles, introducen un caos endemoniado en la ciudad capital cada vez que deciden organizar un paro o “*tomas*” parciales de las vías públicas. A esto hay que agregarle los paros laborales de los trabajadores de la Empresa estatal de energía eléc-

trica, que protestan por la politización desmesurada de su institución, y, por supuesto, las marchas campesinas que tuvieron lugar en este mes de febrero, en rechazo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar ilegal el decreto 18/2008 que autorizaba al Instituto Nacional Agrario (INA) a disponer de tierras incultas para otorgárselas a los campesinos sin tierra. A veces, pareciera que los magistrados de la Corte están empeñados en crearle cada vez más problemas al gobierno lobista, adoptando medidas o negándose a hacerlo para que la Administración de Lobo no pueda respirar tranquila y dedicarse con mayor soltura al manejo de los grandes problemas que el país enfrenta.

Eso explica las constantes quejas que el presidente Lobo pronuncia en público en contra de los funcionarios del Estado (léase algunos magistrados de la Corte Suprema y el Fiscal General y el Adjunto del Ministerio Público) que se oponen, abiertamente o bajo la mesa, a hurtadillas, a las acciones gubernamentales para lograr algún nivel aceptable de reconciliación y sosiego en una sociedad hondureña que todavía sigue crispada y confrontada en torno a las consecuencias del golpe de Estado del 28 de junio del año 2009 (el llamado 28J).

Precisamente en relación con los planes de reconciliación, el presidente Lobo cree que, finalmente, el país se está acercando a una solución en el enmarañado caso de los juicios judiciales montados a posteriori del golpe de Estado en contra del hoy ex presidente Manuel Zelaya. Después de muchos atrasos y obstáculos, la mayoría de ellos creados artificialmente por los jueces y magistrados, por fin la Corte Suprema nombró al llamado “juez natural” que se encargará de emitir una resolución definitiva sobre el “caso Zelaya”. El magistrado escogido, el abogado Chinchilla, es un viejo amigo del presidente Lobo y seguramente fallará a favor de la anulación de los juicios para facilitarle las cosas al gobernante. Si esto es así, el ex presidente Zelaya ya no tendrá muchos argumentos o pretextos para no retornar cuanto antes a Honduras. Deberá hacerlo tan pronto como el asunto judicial quede disuelto, lo que se espera que sea en breve, a fin de facilitar el reingreso del gobierno hondureño en el sistema interamericano de la OEA, cuya reunión de cancilleres se llevará a cabo el próximo mes de junio en El Salvador. Para esa fecha, Lobo confía en que todo se habrá resuelto favorablemente y Zelaya, una vez que haya retornado al país, contribuirá con su presencia en Honduras a ablandar la posición dura de los países sudamericanos que todavía se niegan a reconocer a Lobo y permitir la reinserción de Honduras en la OEA.

Superada esta incómoda situación, Lobo podría dedicarse con mayor esmero e intensidad a promover la realización de lo que parece ser su sueño favorito: la construcción de las “ciudades modelo” o “Regiones Económicas Especiales (RED)” en algunas de las zonas costeras del país. Su reciente

periplo por Asia, especialmente sus visitas a Corea del Sur y a Singapur, acompañado por una corte de funcionarios y empresarios tan numerosa que suscitó críticas interminables en el país, ha incrementado su entusiasmo casi infantil por este nuevo proyecto, tan ambicioso como todavía incierto. Sin embargo, Lobo no esconde su optimismo y no ahorra esfuerzos para viajar fuera del país a promoverlo y buscar inversionistas dispuestos a colocar dinero en las famosas RED.

Este proyecto, junto con la construcción de las represas hidroeléctricas anunciadas (Patucas I, II y III, más las de Los Llanitos y Jicatuyo) y la puesta en marcha del llamado Plan de Nación, se han convertido en los objetivos centrales del gobierno lobista, preocupado cada vez más porque el tiempo pasa y no acaba de arrancar con la consistencia suficiente para generar el empleo necesario y recuperar los antiguos índices de crecimiento de la economía (en los años 2006-2008 el Producto Interno Bruto creció entre 5 y 6,5%; a junio de 2009 creció en 4,5%).

Una vez que se produzca el esperado regreso del ex presidente Zelaya, seguramente los problemas del gobernante Lobo serán de un tipo diferente. Al menos eso es lo que se deduce de las resoluciones adoptadas en la gran Asamblea General (1,500 delegados de todo el país y casi todos los sectores y grupos del espectro social) llevada a cabo por el FNRP los días sábado y domingo 26 y 27 de febrero. En la misma, por aclamación general fue ratificado en su cargo el ex presidente Zelaya como Coordinador general del Frente y, en calidad de Sub coordinador, fue ratificado el viejo dirigente sindical izquierdista Juan Barahona. Entre las principales resoluciones de la Asamblea (una muestra impecable de buena organización y gran capacidad de convocatoria) destaca la siguiente: rechazar la conversión del FNRP en un Frente Amplio político para participar en el próximo proceso electoral de 2013, a menos *“que se cumplan las siguientes condiciones”*:

- a) Reforma de la Ley electoral y de las organizaciones políticas (LEOP), a fin de promover la apertura del sistema político-electoral y la libre participación de candidaturas independientes y coaliciones partidarias.
- b) Reestructuración del Tribunal Supremo Electoral (TSE), asegurando su despolitización partidaria y la equidad en la representación política.
- c) Retorno incondicional y en condiciones aceptables de seguridad del ex presidente Manuel Zelaya.

- d) Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para aprobar una nueva Constitución de la República que permita “*refundar Honduras*”.

Esta resolución, basada quizás en el concepto de la “*ambigüedad útil*”, sirvió para calmar los ánimos de los diferentes bandos en pugna, tanto los que abogaban por convertir al Frente en una amplia coalición política electoral, capaz de enfrentar con posibilidades de éxito a los partidos políticos tradicionales en las elecciones generales de noviembre de 2013, como aquellos, más radicales y a la izquierda, que rechazan cualquier posibilidad de participar en elecciones, que desde ya califican de ilegales y tramposas.

La adopción de una resolución tan gelatinosa y elástica permitió mantener una cierta unidad al interior del Frente y evitar las rupturas que, un día antes, parecían inevitables y seguras. Zelaya, en carta enviada a los delegados y a través del mensaje pronunciado por su esposa en la Asamblea, abogó por la unidad de la Resistencia y se las ingenió para evitar su propia definición personal a favor del Frente o a favor de su partido original, el partido Liberal (PL). Dijo que estaba a favor de un amplio frente de fuerzas políticas que incluyera a todos los sectores sociales ahí representados, pero también a los liberales y a los miembros de Unificación Democrática (UD), así como a los militantes de los demás partidos que compartieran su rechazo al golpe de Estado y su apoyo a una Asamblea Nacional Constituyente para “*refundar Honduras*”.

Hay algo que vale la pena destacar y analizar con más detenimiento en relación con la Asamblea del FNRP: fue más que evidente la popularidad de que goza la esposa del ex presidente Zelaya, Xiomara Castro, quien se perfila como una posible candidata presidencial, ya sea por los liberales disidentes (los llamados “*liberales en resistencia*”) o por el propio FNRP. No se debe descartar que resulte siendo la candidata de ambas fuerzas, con la venia y el respaldo, por supuesto, de Zelaya, quien sigue siendo el líder principal de los hondureños que condenan el golpe de Estado y reclaman la Asamblea Nacional Constituyente. La ex primera dama del gobierno constitucional (2006-2010) ha logrado construir un discurso político sencillo y muy emotivo, capaz de despertar el entusiasmo y la solidaridad de los militantes de la Resistencia. Las mujeres ven en ella a una víctima del golpismo, mientras que los hombres admiran en su comportamiento el valor y la dignidad con que supo enfrentarse a los golpistas durante las marchas callejeras en protesta contra el derrocamiento de su esposo. Su liderazgo luce natural, sin imposiciones ni maniobras. Parece muy auténtico y, por lo mismo, recibe la aceptación fácil de los miembros del FNRP, de los liberales disidentes y, sobre todo, de la amplia franja de electores independientes. Una reciente encuesta de opinión pública le otorgaba más de un 60% de aceptación.

Pero bien, todavía faltan más de dos años para las elecciones generales y quizás sea todavía muy prematuro para especular con la posible candidatura de Xiomara Castro. Sin embargo, no hay que olvidar que las elecciones primarias (las que sirven para escoger los distintos candidatos de los partidos políticos) se llevarán a cabo a finales del próximo año y desde ahora han comenzado ya las giras proselitistas y el trabajo de reclutamiento por parte de varios de los precandidatos aspirantes.

En el seno del partido Liberal, Yani Rosenthal, hijo del banquero Jaime Rosenthal, jefe del Grupo Continental, ha comenzado ya su campaña electoral. Otro tanto está haciendo Edmundo Orellana, el ex Canciller y último ministro de Defensa en el gobierno de Manuel Zelaya. De igual manera, el ex candidato presidencial Elvin Santos, aunque no lo ha proclamado abiertamente, tampoco ha negado en forma rotunda sus intenciones de volver a lanzar su frustrada candidatura.

Al interior del partido Nacional (PN) la situación es más tensa e intensa. Al menos cinco personas han reconocido sus intenciones de convertirse en el candidato oficial nacionalista a la presidencia de la República: Juan Orlando Hernández (presidente del Congreso Nacional), Ricardo Álvarez (alcalde de la capital), Miguel Pastor (ministro de Obras Públicas), Óscar Álvarez (ministro de Seguridad) y Mario Canahuati (Canciller de la República). De todos ellos, Hernández, dadas las ventajas que le proporciona su alto cargo y su estrecha alianza con el propio presidente Lobo, es el que más ha avanzado en su carrera hacia la nominación presidencial. Álvarez (Ricardo) le sigue muy de cerca, utiliza con desparpajo y descaro los recursos de la Alcaldía y cuenta con bien organizadas estructuras partidarias en todo el país. Pastor dispone del apoyo de los medios de comunicación del dúo Ferrari (Rafael)-Canahuati (Jorge), que le facilitan amplia cobertura en radio, televisión y prensa escrita (El Heraldo y La Prensa). Álvarez (Oscar), aunque suele aparecer ante los medios como el funcionario más popular del gobierno Lobo, lo cierto es que no cuenta con estructuras ni el apoyo nacional para convertirse, al menos por ahora, en el candidato presidencial del PN. Finalmente, Canahuati, quien ya en el pasado perdió ante Lobo en las elecciones primarias, parece ser el más débil de todos y, por lo mismo, el que tiene menos posibilidades. La batalla más inmediata será en el escenario de la próxima Convención ordinaria del partido, que se llevará a cabo entre el 12 y el 13 de marzo en San Pedro Sula. Ahí medirán fuerzas los distintos aspirantes y tendrán oportunidad de mostrar el grado de aceptación con que cada uno cuenta entre los cuadros medios y de base del partido gobernante.

Pero, en este mes de febrero, no todo fue ajeteo político y conflictividad social. El Congreso Nacional llevó a feliz término el día 16, en un clima de tranquilidad y sin sobresaltos, la esperada ratificación de las reformas constitucionales que regularon el plebiscito y el referéndum, crearon el Consejo

de la Judicatura y dieron vía libre para la conformación de las llamadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED). El presidente Lobo, por su parte, logró consumir su maniobra política al interior de las Fuerzas Armadas, facilitando la salida de cinco generales golpistas al exilio dorado de agregadurías militares en embajadas en el exterior y limitando los alcances del descontento castrense por los cambios operados al interior del Estado Mayor Conjunto (EMC). Al parecer, el último rebelde que todavía quedaba, el general de aviación Luis Javier Prince, acabará conformándose también con un bien remunerado cargo en el extranjero.

Pero no sólo eso. Los militares aprovecharon el creciente clima de inseguridad que prevalece en el país y, de paso, los nuevos cambios introducidos en la estructura castrense, para pedir al Congreso Nacional nada menos que un aumento del presupuesto de las Fuerzas Armadas, a fin de poder contratar dos mil nuevos efectivos de tropa para engrosar sus menguadas filas. La petición no tuvo el eco suficiente dentro del Poder Legislativo y, al mismo tiempo, provocó la repulsa y condena de la oposición política, especialmente el FNRP.

Finalmente, la caída de un pequeño avión de pasajeros y la muerte de sus 14 ocupantes en las cercanías de Tegucigalpa, volvieron a actualizar la vieja discusión sobre la viabilidad del aeropuerto Toncontín y la posibilidad de habilitar la pista de Palmerola, en el centro del país, a fin de garantizar la seguridad de los vuelos y disminuir el peligro que supone el aeropuerto en Tegucigalpa. El fantasma de Manuel Zelaya volvió a planear en el ambiente político del país, al recordar la antigua polémica sobre el mismo tema que el ex presidente desató cuando intentó, en vano, convertir Palmerola en el principal aeropuerto comercial de Honduras. Pareciera que este gobierno está condenado a revivir con cierta frecuencia los episodios más polémicos y difíciles de la Administración zelayista.

### **Crece la inseguridad**

**L**os niveles de inseguridad siguen creciendo con preocupante intensidad. Cada día aumenta el número de homicidios, secuestros, matanzas entre pandilleros y narcotraficantes, asesinatos de abogados, asaltos a residencias y muertes violentas en general. El gobierno de los Estados Unidos ha expresado su preocupación por las muertes de periodistas y de homosexuales, comparando a Honduras, en el caso de los llamados “*crímenes de odio*” (muerte a los gays), con países africanos como Uganda, Mauritania y Nigeria.

Washington también incluyó a Honduras entre los 20 países del mundo (entre ellos 12 latinoamericanos) en donde se está perdiendo la batalla en con-

tra de los traficantes de drogas y en los que ha aumentado el tráfico de estupefacientes a través de sus territorios. El gobierno de Porfirio Lobo contestó a través del propio presidente, del ministro de Seguridad y del presidente de la Corte Suprema, que Estados Unidos debería incrementar la ayuda a Honduras para poder tener más éxitos en el combate a las drogas. Óscar Álvarez, el publicitado ministro de Seguridad, llegó a afirmar, un tanto molesto por el señalamiento de Washington, que *“el problema no es nuestro... nosotros somos simples espectadores”*, en un intento por cargar toda la responsabilidad del narcotráfico en los países productores y en los consumidores, una vieja separación ya superada por la nueva concepción de la lucha en contra del narcotráfico, según la cual todos, de una forma u otra, estamos involucrados: los productores de drogas naturales, los productores de drogas sintéticas, los países de tránsito y depósito, así como los consumidores en general, que se encuentran en todas partes. Tanto los productores como los países de tránsito y los del mercado final, acabamos siendo países consumidores. Todos tenemos una responsabilidad compartida (Declaración de Cartagena de Indias, agosto de 2008).

El día 10 llegó a Tegucigalpa William Brownfield, secretario de antinarcóticos de Estados Unidos, en una gira centroamericana para promover un Plan antidrogas conjunto, que suponga la creación de una superestructura regional de coordinación. Este Plan, que incluye también el combate combinado a las pandillas o *“maras”*, recibirá un apoyo adicional de 200 millones de dólares por parte del gobierno norteamericano. Sin embargo, el alto funcionario fue claro al afirmar que los dólares por sí solos no resolverán el problema. Se requiere más entrenamiento, depuración, fortalecimiento institucional y la erradicación de la impunidad en el sistema de justicia, dijo. Se espera que la próxima visita del presidente estadounidense Barack Obama a la capital salvadoreña en marzo, servirá, entre otras cosas, para afianzar este nuevo nivel de cooperación regional en la lucha contra el crimen organizado (El Salvador es el único país de Centroamérica que no está incluido en la lista negra de los 12 países latinoamericanos que presentan mayores problemas en el control del narcotráfico).

En su reciente visita a Honduras, en la primera semana de marzo, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el colombiano Luis Moreno, proporcionó un dato que impresionó a casi todos sus oyentes: mediciones del BID permiten afirmar que los niveles de inseguridad en la región impactan negativamente en el crecimiento de la economía, aumentando sus costos, en un promedio que oscila entre 5 y 8%. En gran medida, el descenso en el ingreso de la inversión extranjera directa (IED) y las dificultades para recuperar sus antiguos niveles, tienen que ver directamente con el clima de zozobra e inseguridad que, con justa razón, atemoriza a los inversionistas y, con mucha frecuencia, los aleja y ahuyenta.

---

Desesperado ante esta situación y presionado diariamente por las protestas y quejas de la población, el gobierno, aconsejado por el ministro Álvarez, ha optado por buscar reformas legislativas para endurecer la política de control y castigo a los delincuentes, incrementando las penas, modificando los periodos de reclusión preventiva y eliminando las restricciones legales para los allanamientos a cualquier hora del día. En los próximos días el Congreso Nacional deberá discutir estas reformas, aunque no parece haber un clima demasiado favorable a las mismas entre los diputados de la oposición (vale decir liberales, udeístas y pinuistas).

### **Los vaivenes de la economía**

**E**l día 28 llegó una nueva Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que permanecerá en el país hasta el día 11 de marzo. Viene para revisar las cuentas nacionales al 31 de diciembre de 2010 y comprobar el nivel de desempeño y cumplimiento del gobierno con respecto a los compromisos contraídos en octubre del año pasado, cuando se firmó el nuevo Acuerdo Stand By, se aprobó un nuevo programa económico y se autorizó un préstamo por 203 millones de dólares para asegurar la estabilidad macroeconómica del país.

La Misión del Fondo llega en momentos en que se produce una peligrosa escalada en los precios de los productos de la canasta básica y un aumento constante en el valor de los combustibles. Todo ello en el marco de una anunciada sequía para los próximos meses, que supondrá, según cálculos oficiales, una disminución del 30% en la precipitación fluvial del país.

# MARZO

## 2011

---

### La situación política

**E**l mes de marzo ha sido el más convulso y difícil desde los meses inmediatos al golpe de Estado del 28 de junio de 2009 (28J). Los niveles de confrontación social y crispación política alcanzaron el punto más alto y la violencia se desató en las calles de las principales ciudades del país.

Tal como ya lo habíamos previsto en los análisis de coyuntura anteriores, el choque entre el gobierno y los gremios magisteriales en torno a la Ley de descentralización educativa era inminente. Los maestros, poniendo a prueba su reconocida capacidad de movilización, decidieron enfrentar al gobierno en las calles, con marchas callejeras, “*tomas*” de carreteras e interrupción de las vías públicas en los principales centros urbanos del país, abandono indefinido de las aulas y “*toma*” y cierre de la mayoría de las escuelas y centros educativos medios del país. El gobierno, por su parte, reaccionó con firmeza y condicionó las negociaciones y el diálogo al retorno de los maestros a las aulas para servir las clases.

Los términos de la confrontación se volvieron rígidos, mientras los maestros siguieron acumulando demandas y reclamos hasta generar una situación en la que la solución negociada parecía cada vez menos posible. Fracasaron los intentos de diálogo, tanto los promovidos en la Casa presidencial por el propio presidente Porfirio Lobo como los iniciados después en el Congreso Nacional, bajo la iniciativa de su presidente, Juan Orlando Hernández. Mientras tanto, los choques entre maestros, estudiantes y padres de familia, por un lado, y las fuerzas policiales y militares, por el otro, se volvían cada vez más violentos y peligrosos. Su saldo era el de numerosos heridos, otros tantos prisioneros y, lo peor del caso, una maestra muerta, asfixiada por los gases lacrimógenos y atropellada por un automóvil de la prensa. La situación se había vuelto tan difícil y caótica que parecía escapar de las manos de sus principales promotores, independientemente del bando en que éstos se encontraran.

---

El país se hallaba en una encrucijada, rememorando los peores momentos inmediatamente posteriores al golpe de Estado del 28J. Cada día era más evidente la pérdida de capacidad por parte del gobierno, y del sistema político en su conjunto, para procesar democráticamente los conflictos sociales. La gobernabilidad se venía a pique y el gobierno sucumbía cada vez más y más a la tentación autoritaria y represiva.

Después de más de un mes de confrontación violenta y constante, los maestros empezaron a dar muestras de cansancio y agotamiento en su capacidad de movilización diaria y masiva. Las amenazas del gobierno de despedir a los huelguistas y aplicarles diversas sanciones administrativas y penales, incluyendo a sus principales dirigentes, hicieron mella en el ánimo de los protestantes y fueron creando las condiciones para lo que se ha dado en llamar un *“repliegue táctico”*, es decir una especie de tregua para darle nuevas posibilidades al diálogo con el presidente Lobo y buscar formas negociadas de salida de la crisis.

El gobierno, sobre todo en el Congreso Nacional, estuvo dispuesto a hacer algunas pequeñas concesiones y aceptó introducir cambios en la llamada Ley de estímulo a la participación comunitaria (o Ley de descentralización educativa), volviéndola un tanto más digerible y aceptable para el gusto de los dirigentes magisteriales. Pero, a pesar de estas concesiones, se mantuvo firme en defender y preservar la intervención de las iglesias, tanto católica como protestantes, en la supervisión de los contenidos y la calidad de la educación en las distintas comunidades. Todo ello, a pesar de que la Constitución de la República proclama en su texto el carácter laico de la educación pública en Honduras.

La nueva versión de la Ley, a pesar de sus modificaciones de última hora, se vuelve un tanto repetitiva y engorrosa, de difícil aplicación y de dudosa eficacia en cuanto a devolver la necesaria gobernabilidad interna que el sistema de educación pública ha perdido desde ya hace mucho tiempo en Honduras.

En cuanto a las otras demandas presentadas por los gremios magisteriales, especialmente las que tienen que ver con su Instituto de Jubilaciones y Pensiones (INPREMA) o con los reclamos por corrupción y despilfarro documentados en abundancia por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), esos serán temas de discusión en las próximas reuniones que sostendrán con el presidente Porfirio Lobo.

Todo esto quiere decir que, aunque se han interrumpido las protestas y se han reanudado las negociaciones entre ambas partes, el problema está todavía muy lejos de encontrar una solución aceptable para todos los acto-

res involucrados en el conflicto. La tensión se mantiene y las heridas abiertas no podrán ser cicatrizadas muy pronto.

Es importante señalar que, por decisión de su Junta colectiva de dirección, encabezada por el ex presidente Manuel Zelaya, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) decidió dar todo su respaldo al movimiento magisterial y sumar sus fuerzas -que no son pocas- a las filas de los maestros en sus protestas callejeras. Esta explosiva coalición de rebeldía antigubernamental dio pie para que el presidente Lobo acusara a sus adversarios de formar parte de un “*plan político*”, destinado a crear crisis y buscar la caída del gobierno. De esta forma, a los ojos del régimen, la protesta gremial quedó convertida en una ofensiva política de la oposición zelayista. Y como tal, así fue enfrentada por el bloque gobernante.

De tal manera que la momentánea rendición de los maestros y su retorno a la mesa del diálogo son dos hechos considerados por el gobierno como una derrota de la oposición zelayista y, específicamente, un fracaso de la estrategia de confrontación y lucha promovida por el FNRP que, al menos en teoría, coordina desde el exterior el ex presidente Zelaya.

Pero la supuesta victoria del gobierno no se ha producido en el vacío ni ha Estado libre de costos políticos. Ante la evidente intención del presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández (JOH), de capitalizar a su favor el triunfo ante los maestros, el alcalde capitalino, Ricardo Álvarez, contendiente político de JOH y, como él, aspirante a la nominación presidencial en el partido Nacional (PN), ha tratado de frustrar el desenlace actual, simulando un discreto apoyo a la lucha magisterial y atizando, bajo la mesa y a través de sus activistas políticos, el ánimo de los sectores más radicales del magisterio que se oponen a cualquier tipo de arreglo con Lobo y Hernández.

O sea que la confrontación entre los maestros y el gobierno también ha servido, entre otras cosas, para mostrar las fisuras internas, cada vez más grandes y evidentes, que ya dividen al partido de gobierno en la lucha por la sucesión presidencial. El alcalde de Tegucigalpa es un político que, a pesar de su juventud, juega duro y con los métodos y artimañas de la vieja guardia partidaria. Es un joven político pero no es un político joven, es decir uno con ideas nuevas, modernas y renovadas. Es de la vieja escuela, del viejo estilo, tal como son sus asesores principales: los ex presidentes nacionalistas Rafael Callejas y Ricardo Maduro. JOH, en cambio, luce como un político de la nueva generación, moderno e ilustrado, más propenso a la reforma y el cambio, al menos a nivel de su discurso político. Cuenta en su haber con dos activos muy importantes para un aspirante presidencial: la presidencia del Poder Legislativo y el apoyo, cada vez menos encubierto, del presidente del Poder Ejecutivo.

---

Ante las críticas reiteradas del alcalde Álvarez, quien también ostenta el influyente cargo de presidente del Comité Central del partido de gobierno, en contra de los ministros que no pertenecen al PN, especialmente del director del Instituto Nacional Agrario (INA), el udeísta César Ham y su petición para que renuncie, el presidente Lobo debió salir en defensa del dirigente izquierdista y, de paso, descalificar las objeciones de los que llamó *“políticos que ya andan en campaña”*, en directa alusión peyorativa al precandidato Álvarez.

La vieja guardia del PN insiste en reprocharle a Lobo lo que consideran falta de sensibilidad partidaria para atender los reclamos de los miles de militantes nacionalistas que no han logrado encontrar colocación en las planillas gubernamentales. Culpan al presidente por insistir en mantener un gabinete integrado con miembros de los otros partidos, en un desesperado intento por dar la imagen de ser un *“gobierno de unidad y reconciliación nacional”*. Le reclaman por insistir tanto en complacer a la comunidad internacional que demanda el retorno del ex presidente Zelaya como condición clave para abrir los espacios y permitir la reinserción del Honduras en el sistema interamericano, concretamente en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Pero Lobo se muestra sordo e indiferente ante las críticas de sus correligionarios de partido. Los ignora en público y suele referirse a ellos de manera burlona en privado. Al mismo tiempo, sigue insistiendo en crear las condiciones apropiadas para lograr el reingreso de Honduras en la OEA durante la próxima reunión de ese organismo que tendrá lugar en el mes de junio en la capital salvadoreña. Precisamente por eso es que debió reaccionar muy mal cuando el juez natural, Oscar Chinchilla, su amigo personal, nombrado especialmente por la Corte Suprema de Justicia para resolver en el caso de los dos juicios vigentes en contra de Zelaya, optó, para sorpresa de muchos, por una solución ambigua y vacilante que se limitó a anular, el día 25, las dos órdenes de captura pero, al mismo tiempo, permitió mantener vigentes los cuestionados juicios. Esta *“solución”* dejó sin piso la pretensión de Lobo de poner fin a los juicios y resolver de una vez por todas el incómodo asunto del retorno de Zelaya.

Ahora la situación sigue tan complicada como antes, entrampada en el laberinto de los procedimientos judiciales, las maniobras y zancadillas legales que a cada instante introduce el Ministerio Público y que los jueces, casi con satisfacción y alegría, atienden y dan curso. Desesperado ante esta situación que cada vez parece más inmanejable, el presidente Lobo exclamó recientemente, entre impotente y molesto, *“que la Corte, ¡por Dios!, nos ayude en los juicios de Zelaya”*.

Esa expresión de impotencia, pero también de hastío y enojo, revela muy bien el Estado de ánimo del presidente, cansado ya de este juego que parece infinito, en el que los artífices del entramado pseudo legal del golpe de Estado del 28J persisten en sus maniobras para complicar más el embrollo e impedir el retorno del ex presidente exiliado en República Dominicana.

Además de estos problemas políticos, el presidente tiene también que manejar el complicado asunto de las finanzas públicas, cuyo Estado sigue siendo crítico y, por momentos, calamitoso. Así lo evidencia las declaraciones de la propia vice ministra de Finanzas, Evelyn Bautista, quien, luego de proclamar angustiada que *“la situación de las finanzas es crítica”*, abogó casi desesperada por la urgente venta de más bonos en el mercado local, es decir por más deuda pública interna.

La situación es difícil, tal como queda demostrado por los urgentes reclamos de la Cámara de la Industria de la Construcción (CHICO) para que el gobierno pague deudas que suman unos 1,600 millones de lempiras (unos 84 millones de dólares) por contratos ya vencidos o en vías avanzadas de ejecución. De igual manera, hay deudas millonarias pendientes con el Instituto de pensiones y jubilaciones de los maestros, declarado ya casi en bancarrota, con el Instituto del seguro social y numerosos proveedores privados que abastecen a las dependencias estatales.

Las esperanzas están cifradas en una gradual recuperación de la economía en este año 2011, gracias sobre todo a los mejores y más altos precios del café, los camarones y el banano.

Al finalizar el mes, el gobierno, tal como lo establece la ley, fijó directamente mediante un decreto el nuevo aumento al salario mínimo, luego que, como ya es costumbre, los empresarios y los sindicalistas no lograran ponerse de acuerdo en el monto a fijar durante los tres meses que duraron las negociaciones. El Gobierno optó esta vez por un aumento diferenciado, según el rubro de producción (agricultura, industria, servicios, maquila, etc.), el tiempo de contratación (por horas o el día completo) y el número de empleados o tamaño de la empresa). En promedio, el aumento fue de un 9%, lo que dejó insatisfechos a los trabajadores, que pedían algo más del 13%, y molestos y disgustados a los empresarios, que no ofrecían algo más allá del seis o siete por ciento. El presidente reclamó públicamente a los empresarios críticos del aumento y demandó de ellos un espíritu de *“mayor responsabilidad social empresarial”*, a tono con los principios del llamado *“humanismo cristiano”*, la doctrina oficialmente proclamada como el fundamento ideológico del gobierno lobista.

En este mes de marzo, justo cuando el PN cumplió sus 109 años de existencia, también se llevó a cabo la Convención Nacional partidaria, en la que

---

el gran ganador fue sin duda alguna el presidente Lobo, quien recibió el respaldo de la mayoría de los delegados y el aval político necesario para la nueva plataforma ideológica basada en el *“humanismo cristiano”*, con lo que el partido de gobierno queda ratificado en su voluntad de unirse a los principios del social cristianismo a nivel internacional. No es casual que, casi al mismo tiempo, la Fundación social cristiana alemana, la Konrad Adenauer, haya abierto sus nuevas oficinas en la capital hondureña.

### El curso de la economía

**S**i en el campo político y social el gobierno ha debido pasar por momentos muy difíciles y peligrosos en este mes de marzo, en el terreno de la economía las noticias no han sido tan desalentadoras.

Para empezar, la Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que permaneció en el país entre el 28 de febrero y el 11 de marzo, aprobó la gestión financiera y monetaria de la Administración Lobo a la luz de los compromisos contraídos en octubre del 2010, cuando se firmó el último Acuerdo con ese organismos internacional. La Misión del FMI certificó que *“la economía se continúa recuperando”* y que ha habido *“avances significativos en las reformas estructurales”* prometidas, pese a lo cual expresa su preocupación y pide fortalecer las instituciones de pensiones, en especial el Inprema y el Seguro Social. El Fondo se comprometió a auxiliar al programa económico del gobierno de Honduras con una suma de 202 millones de dólares.

Casi al mismo tiempo, coincidió en Tegucigalpa la visita del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el colombiano Luis Moreno, quien informó sobre la asignación de 600 millones de dólares para los cuatro años del gobierno lobista. De esa suma, el año pasado ya fueron aprobados 350 millones -una cifra record- pero sólo desembolsados 170. En este año 2011, el BID espera desembolsar 162 millones más.

Las perspectivas de crecimiento y mejora en productos de exportación tales como el café, los mariscos y el banano, son alentadoras y el gobierno tiene cifradas grandes esperanzas en ello, al igual que en el turismo. La construcción de las represas hidroeléctricas Patucas I, II y III (departamento de Olancho) avanza, aunque no con la celeridad necesaria y la rapidez deseada. Al parecer, el gobierno dispondrá de unos 60 millones de dólares de la reserva acumulada hasta 2009 por el tan denostado convenio de Petrocaribe, pero, aún así, requerirá del auxilio de otros inversionistas, especialmente asiáticos, chinos en particular. Hay indicios de que las negociaciones están en marcha pero todavía no hay resultados concretos. Los chinos no muestran todo el entusiasmo que el gobierno había anunciado, y los brasileños, que habían prometido financiar las represas de Los Llanitos y Jicatuyo (de-

partamento de Santa Bárbara), al parecer han dado marcha atrás, como consecuencia de las malas relaciones que hay entre Brasilia y Tegucigalpa.

Las reservas del Banco Central, a finales de febrero, estaban en un buen nivel: 3,104 millones de dólares, pero crece la preocupación por la situación de los combustibles y las perspectivas de aumento en su precio internacional. La factura petrolera del año pasado fue de 1,487 millones de dólares (335 millones más que en 2009), lo que indica que la importación de combustibles aumentó en 29%. El incremento de la factura petrolera (por precio y volumen) generará inevitablemente mayor presión sobre las divisas. Si se mantiene la actual tendencia al alza, esa factura podría aumentar en un 30% más, según cálculos preliminares del Banco Central.

Preocupa, además, la tendencia al alza que predomina en los precios de los productos de la llamada “*canasta básica*”, es decir los alimentos clave de la dieta cotidiana de los hondureños. Además del descontento social que genera, el alza de los precios de la comida presiona sobre los índices inflacionarios y desequilibra las variables de la macroeconomía.

El gobierno todavía no ha sido capaz de diseñar y poner en práctica un verdadero plan de ahorro de combustible en el país. Sus intentos en tal sentido, además de patéticos, resultaron fallidos: el cambio de horario para los empleados públicos o la modificación de ciertas vías de circulación en las horas pico. El resultado fue mayor caos vehicular y el enojo colectivo.

### **A propósito de la inseguridad**

**L**a apresurada partida del ex Comisionado nacional de los derechos humanos, Leo Valladares, para poner a salvo su vida luego que recibiera amenazas de grupos criminales que, según su denuncia, le reclamaban por sus críticas al creciente militarismo en el país, contribuyó en grado sumo al deterioro de la imagen internacional del gobierno lobista en materia de respeto a los derechos humanos. Valladares, un reconocido defensor de esos derechos, denunció internacionalmente el clima de inseguridad que prevalece en el país y el peligro que corren los críticos y disidentes en la Honduras posterior al golpe de Estado del 28J.

Las denuncias de Valladares coincidieron con el momento en que una delegación oficial del gobierno, encabezada por la Ministra de derechos humanos y justicia, Ana Pineda, se esforzaba en Ginebra, Suiza, por defender al régimen y convencer a la comunidad internacional de sus buenas intenciones en relación con la defensa y vigencia de los derechos humanos. Sus esfuerzos no fueron suficientes para mejorar la deteriorada imagen del gobierno de Porfirio Lobo.

Todo esto sucedía en momentos en que el Jefe del Comando Sur del ejército de los Estados Unidos, Donald Fraser, declaraba que *“el Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) es una de las regiones más violentas del mundo... fuera de las zonas activas de guerra como Iraq y Afganistán”*. Esta afirmación fue respaldada con cifras estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, que proporcionaban fundamento a la preocupante calificación de peligro e inseguridad asignada a esta región.

En la reciente visita del presidente estadounidense Barack Obama a El Salvador, el tema de la seguridad regional fue uno de los puntos discutidos en la agenda. El ofrecimiento de 200 millones de dólares para respaldar una futura estrategia regional de seguridad no fue suficiente para calmar el creciente reclamo del gobierno hondureño que, a través de declaraciones del propio presidente Lobo, del ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, y del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilez, reclamaron al gobierno de los Estados Unidos por más ayuda y mejor apoyo, sobre todo en términos económicos, para combatir el crimen organizado y, en especial, las redes del narcotráfico internacional.

Los reclamos locales coincidieron con el descubrimiento, en la zona norte del país (cerca de la ciudad de Choloma, la tercera en tamaño), del primer laboratorio para procesar cocaína que se encuentra en Honduras.

# ABRIL 2011

---

## La situación política

**E**l mes de abril concluyó, como ya es usual todos los años, con la organización y preparación de los desfiles del Primero de Mayo, día internacional de los trabajadores. En esta ocasión, a diferencia de años anteriores, la participación fue masiva y miles de manifestantes inundaron las calles de las principales ciudades del país. Sus consignas y demandas reflejaron la influencia decisiva que mantiene el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) en todo lo concerniente a las protestas y reclamos de los principales movimientos sociales del país. Las organizaciones que desfilaron, con raras excepciones (Central General de Trabajadores/CGT, Confederación de Trabajadores de Honduras/CTH, etc.), están bajo la influencia o el control directo de los dirigentes más duros y radicales del movimiento nacional de Resistencia, específicamente del llamado Bloque Popular (BP).

La presencia de la ex primera dama, Xiomara Castro de Zelaya, entre los miles de manifestantes y el discurso que pronunció, entendido éste como un mensaje unificador de parte del ex presidente exiliado, fueron la nota original en el desfile en Tegucigalpa. La señora de Zelaya se sigue perfilando como una lideresa real, que goza de creciente simpatía y aceptación en las filas del FNRP. No se debe descartar su posible lanzamiento en un futuro próximo como aspirante presidencial en las filas de la denominada Resistencia liberal (RL), con el apoyo de los sectores independientes e izquierdistas del FNRP.

La naturaleza de las protestas y demandas sociales refleja una agenda conflictiva entre el movimiento social y el gobierno del presidente Porfirio Lobo. Temas tales como la privatización de los servicios públicos, la confrontación con los gremios magisteriales, el manejo de los recursos naturales, la desmilitarización del Estado, la corrupción, los problemas agrarios (caso del Bajo Aguán), el retorno del ex presidente Zelaya, la eventual convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, etc. son los asuntos primordiales en el choque entre el FNRP y el gobierno nacionalista.

El mejor reflejo de esta agenda de conflictos fue la prolongada huelga sostenida por los maestros, seguida de fuertes encontronazos con la policía y los militares, desalojos forzosos y violencia callejera, que durante varios días saturó el escenario político y social de Tegucigalpa y otros centros urbanos del país (en un solo día, el 12, se produjeron ocho marchas y once tomas de carreteras en todo el territorio hondureño). La virulencia de la confrontación alcanzó niveles muy altos y superó con creces la violencia de otras ocasiones. Al final, agotados ya los contendientes, sobre todo los maestros, decidieron volver a la mesa de negociaciones en torno a la cual todavía se encuentran. El movimiento magisterial ha salido un tanto debilitado de estas refriegas, mientras que el gobierno pretende aprovechar la nueva situación creada para terminar de doblegar el brazo de los líderes del movimiento.

Todavía estaban los maestros junto a los estudiantes protestando en las calles, cuando el presidente Lobo realizó una maniobra política que tomó por sorpresa a todos: en un giro novedoso e inesperado de su posición política, viajó el sábado nueve de abril a la ciudad costera colombiana, Cartagena de Indias, para sostener una inusitada reunión con los presidentes de Colombia, Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez. La cita había sido programada pocos días antes por iniciativa de Santos, quien pidió a Chávez abrir un espacio para buscar una salida a la crisis política hondureña y facilitar una reconciliación con el nuevo presidente hondureño Porfirio Lobo. Chávez, antes de responder afirmativamente a la propuesta de su colega colombiano, pidió tiempo para consultar con el ex presidente Manuel Zelaya quien, a petición de Caracas, viajó a la capital venezolana un día antes de la cita de Cartagena.

Aunque Zelaya se negó a acompañar a Chávez en su viaje a Colombia, no tuvo reparos para trabajar la noche anterior, junto al canciller venezolano Nicolás Maduro, en la redacción de un documento/propuesta de cuatro puntos que sería presentado por Chávez y los anfitriones colombianos a la consideración del gobernante hondureño.

Los cuatro puntos del documento/propuesta son los siguientes:

- a) Retorno seguro del ex presidente Zelaya y demás exiliados políticos al territorio hondureño.
- b) Respeto a los derechos humanos, cese del hostigamiento y las acusaciones contra los miembros de la Resistencia ante el golpe de Estado.
- c) Reconocimiento del FNRP como una fuerza política legal en el escenario político nacional, y

- d) Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para asegurar el retorno pleno de Honduras a la vida institucional y democrática.

El presidente Lobo recibió los puntos propuestos y se comprometió a presentar su propio documento con observaciones y detalles sobre los mismos. Otro tanto debería hacer Zelaya, de tal manera que se pueda llegar a consensuar un documento único que sea la base de un nuevo acuerdo político para la reconciliación de la sociedad hondureña. Zelaya dejó claro en la negociación que sólo estaría dispuesto a firmar un acuerdo en el momento en que se sienta libre por completo de cualquier tipo de presión o coacción jurídica o de otra índole. Evidentemente, Zelaya hacía referencia a los dos procesos judiciales que todavía mantienen las cortes hondureñas en contra suya. El fallo en torno a esos dos juicios se produjo en la tarde del día 02 de mayo cuando, por mayoría de votos (2 a 1), los magistrados de la Corte de Apelaciones ad hoc se pronunciaron a favor de anular los controversiales procesos judiciales. El abogado Marco Vinicio Zúniga, apoderado legal del Banco FICOHSA (propiedad del conocido Grupo Atala, de origen árabe, señalado como uno de los más entusiastas partidarios del golpe de Estado) fue el voto disidente en la resolución de la Corte.

Todo indica que este engorroso proceso en contra del ex presidente está llegando a su fin. Ha sido un largo camino, repleto de trampas y obstáculos artificiales, saturado de zancadillas pseudo legales, destinadas a impedir la anulación de los juicios y, por esa vía, dificultar el regreso seguro de Zelaya y, de paso, el reintegro de Honduras en la comunidad interamericana de naciones a través de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Si el Ministerio Público decide oponerse a esta sentencia de la Corte de Apelaciones (los fiscales tienen sesenta días de plazo para oponerse a la resolución y presentar un recurso de amparo), los juicios seguirán entrapados en los pasillos judiciales, impidiendo la salida de la crisis y saboteando la solución de la misma.

El presidente Lobo necesita urgentemente la anulación definitiva de los juicios. De ello depende la credibilidad de su palabra empeñada en la cita de Cartagena y, lo que es más importante, la reinserción del Estado hondureño en las estructuras de la OEA, una condición básica para poder abrir puertas de la cooperación internacional y que Honduras recupere la condición de sujeto pleno de derecho internacional público.

Como para reforzar la posición de Lobo, la Secretaria de Estado Hilary Clinton le llamó por teléfono el viernes de la semana santa para brindarle su respaldo y apoyar la solución pactada en la cita de Cartagena. Posteriormente, los Cancilleres de América Latina y el Caribe reunidos en Caracas

---

dieron público respaldo a las negociaciones y a la mediación colombo-venezolana. El prestigio y la credibilidad de Porfirio Lobo están en juego.

Mientras se espera el desenlace de este prolongado episodio en la vida política del país, nuevas revelaciones en los cables de wikileaks han puesto en la picota pública a las Fuerzas Armadas, al dejar al descubierto un vergonzoso tráfico de armamento oficial (vendido por Estados Unidos al Estado de Honduras) hacia México y Colombia a manos de los narcotraficantes de esos países. El asunto no es nuevo y ya se conocían algunos detalles sobre el mismo. En febrero de 2008 viajó a Tegucigalpa un alto funcionario del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) de México para mostrar las pruebas documentadas de armas del ejército hondureño capturadas por las autoridades mejicanas en su territorio. La denuncia fue presentada ante funcionarios civiles y militares del gobierno de entonces.

Las Fuerzas Armadas, encabezadas por el ministro de Defensa Marlon Pascua, se han limitado a negar la veracidad de los hechos y descalificar las revelaciones de wikileaks como si se tratara de una maliciosa campaña internacional de descrédito en contra de los militares hondureños. El tráfico de armas oficiales en las redes del mercado negro ha sido un antiguo negocio de muchos oficiales de la institución castrense en Honduras. En la actualidad hay un proceso vigente en contra de un oficial de rango mediano que se vio involucrado en el robo de armas en el año 2004, pero todavía no ha sido enjuiciado ningún miembro destacado de la cúpula militar.

Casi al mismo tiempo en que los militares estaban siendo fuertemente cuestionados, el Congreso Nacional en una decisión inesperada aprobó el presupuesto necesario para incrementar en dos mil efectivos las filas de las Fuerzas Armadas. El pretexto utilizado fue que se trata de soldados entrenados para proteger los bosques, especie de *"guardias forestales"*. La maniobra no logró convencer a nadie, comenzando por los países vecinos, especialmente Nicaragua, que expresaron su malestar por lo que consideran como un *"aumento del militarismo"* en Honduras.

Coincidiendo con estos pequeños y grandes escándalos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) presentó en Washington su informe anual el día 15 e incluyó a Honduras en lo que se considera la *"lista negra"* de los países violadores de los derechos humanos en América, junto a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Colombia. Es un golpe más, muy fuerte por cierto, en desmedro de la imagen internacional del gobierno lobista. Su fama de irrespetuoso de los derechos humanos le precede y perjudica en el ámbito internacional.

Por si hubiera alguna duda al respecto, han continuado las muertes violentas en la conflictiva zona del Bajo Aguán, en donde el número de campesi-

nos muertos ya supera los cincuenta desde diciembre del año 2008. La violencia en contra de los campesinos que ocupan las fincas en controversia se ha incrementado en las últimas semanas, sobre todo después que conocidas instituciones financieras europeas, tanto en Alemania como en Francia, decidieron suspender los créditos y el apoyo a la Corporación Dinant/ Exportadora del Atlántico, la empresa productora de aceite de palma africana, propiedad del empresario de origen árabe Miguel Facussé Barjúm. La suspensión de créditos es la respuesta a la campaña internacional que sostienen varias Organizaciones no gubernamentales europeas en contra de la represión en el Bajo Aguán. Sus denuncias han dado resultados y le están provocando serios problemas al empresario Facussé.

Acorde con esta situación, la conflictividad social en la zona, expresada en constantes tomas de carreteras e interrupción del tráfico interdepartamental, ha seguido aumentando y profundizándose. El gobierno, a pesar de haber firmado en abril del año pasado un acuerdo con los ocupantes de las fincas, no ha podido dar total cumplimiento al mismo y el conflicto sigue vigente.

Ya para finalizar el mes, como una muestra evidente del desencanto que la política y los políticos tradicionales acumulan y generan en la percepción colectiva de la población, un reconocido presentador de la televisión nacional, cronista deportivo y animador de concursos de belleza, el señor Salvador Nasralla, anunció que había decidido lanzar su candidatura presidencial para poder *“gobernar Honduras... resolver sus múltiples problemas y aplicar la mano dura que el país necesita...”*. Según la curiosa opinión del señor Nasralla, ciudadano de origen árabe, habría que comenzar por controlar la bruma y el humo que cada año cubre el cielo capitalino y obliga al cierre temporal del aeropuerto de Tegucigalpa.

### La situación de la economía

Como para compensar un poco los deslices en la política, el gobierno se anotó un punto importante con la visita de la Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que, al partir, dejó un comunicado público alentador y una promesa de desembolso más alentadora aún: reconoce la *“recuperación gradual”* de la economía y otorga un crédito de 83,4 millones de dólares. Al mismo tiempo, formula sus acostumbradas recomendaciones: incrementar los ingresos tributarios, hacer las reformas necesarias para volver empresas rentables a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la compañía telefónica HONDUTEL, a la vez que reestructurar los sistemas de pensiones, especialmente el del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA) que se encuentra al borde de la bancarrota financiera.

Preocupado por la falta de crédito para los productores agrícolas del país, el presidente Lobo pidió a las autoridades del Banco central y de la Comisión de Banca y Seguros que revisen la política monetaria del país para bajar las tasas de interés bancario. No es posible, reclamó el presidente, que no haya crédito para los productores cuando la liquidez bancaria ha alcanzado una cifra record: 48,593 millones de lempiras, aproximadamente unos 2,558 millones de dólares.

Y, para finalizar, ante el aumento en el precio de los combustibles y el alarmante incremento en el consumo y la factura petrolera, el presidente Lobo ordenó al gobierno recortar en 10% el consumo de los combustibles en todas las dependencias gubernamentales. Medidas similares en el pasado no han producido ningún resultado evidente.

# MAYO 2011

---

## La situación política

El mes comenzó bajo el impacto que produjo la masiva movilización organizada y conducida por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) con motivo de la festividad del Primero de Mayo, día internacional de los trabajadores. Esa importante demostración de fuerza permitió medir el volumen y la dimensión social de la oposición política que debe enfrentar el gobierno del presidente Porfirio Lobo. Oposición que se ha visto sustancialmente reforzada y movilizada, como se pudo comprobar al final del mes cuando se produjo el retorno del ex presidente Manuel Zelaya y la multitudinaria manifestación de recibimiento que le organizó el FNRP.

O sea que el mes de mayo ha sido un mes de movilización política casi constante, a la que se debe sumar la elevada conflictividad social protagonizada por los gremios magisteriales y el movimiento campesino del valle del Bajo Aguán, en el departamento de Colón. Los maestros, una vez que suspendieron las protestas callejeras y, en aplicación de una cuestionada maniobra de *“repliegue táctico”*, optaron por volver a la mesa de negociaciones con el gobierno, han desmovilizado su movimiento sin haber logrado todavía obtener concesiones importantes de la parte gubernamental. Cansados de ejercer presión con escasos resultados, un grupo de profesores optó por declararse en huelga de hambre en la planta baja del Congreso Nacional, situación en la que se mantienen ya desde hace casi un mes.

En lo que concierne a la crisis, ya casi permanente, en la zona del Bajo Aguán (costa norte a orillas del Mar Caribe), la situación sigue siendo muy crítica. Todas las semanas aparecen nuevos muertos, generalmente campesinos involucrados en las *“tomas”* de las fincas de palma africana que cuatro empresarios (Miguel Facussé, el nicaragüense René Morales, Reynaldo Canales y el diputado nacionalista Óscar Nájera) reclaman como suyas. La violencia involucra a los propios campesinos, a los guardias privados a sueldo de los empresarios, a los militares y a la policía; todos ellos están envueltos en una trágica espiral de muerte que ha cobrado la vida de unos sesenta hondureños desde el mes de diciembre de 2008 cuando se produjeron las primeras invasiones y *“tomas”* de las tierras en disputa. Aun-

---

que el gobierno firmó en abril de 2010 un acuerdo para hallar solución al problema, los términos del compromiso no se han cumplido y las partes continúan confrontadas a muerte. La zona del Bajo Aguán se ha convertido en un peligroso escenario en el que se violan los derechos humanos a diario y en donde la vida cada vez vale menos.

Pero todos estos conflictos y choques sangrientos no fueron obstáculo para que avanzaran, a veces con muchas dificultades, las negociaciones en torno a la suscripción del Acuerdo de Reconciliación Nacional o Pacto de Cartagena, que ha abierto la puerta para dos retornos de mucho significado político: el del ex presidente Zelaya al territorio nacional, hecho producido el 28 de mayo, y el del Estado hondureño al seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que tuvo lugar en la mañana del 01 de junio.

Consumados estos dos retornos, el país hace su ingreso a una nueva fase de la crisis política que surgió a raíz del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. ¿Cuáles son las características de esta nueva situación? ¿Cuál será el impacto del regreso de Zelaya en el escenario político nacional? ¿En qué medida cambia o se altera la actual correlación de fuerzas en la vida política local?

Son preguntas válidas que, con mucha y merecida frecuencia, se repiten en el ambiente político y reclaman respuestas concretas. No es fácil contestar con precisión y amplitud a las mismas, ya que involucran un proceso que todavía está lleno de dudas e interrogantes. Sin embargo, se puede elaborar hipótesis que apuntan a los posibles escenarios inmediatos:

- a) El retorno del ex presidente Zelaya tiene el efecto inmediato de una reactivación súbita de la actividad político-electoral en el sistema de partidos políticos del país. Esta reactivación se expresa con más fuerza al interior del partido Liberal (PL), al que pertenece el ex presidente, y dentro del FNRP, cuya coordinación nacional ejerce el propio Zelaya.

En el PL la llegada de Zelaya ha significado la instalación de un nuevo liderazgo político, fuerte y de carácter nacional, que se convierte en el factor clave para apoyar o desactivar las diferentes candidaturas a la nominación presidencial que ya existen en las filas liberales. Nos referimos específicamente a los movimientos proselitistas de Yani Rosenthal, Edmundo Orellana (ambos, ex ministros de Zelaya) y Esteban Handal, que son, al menos por el momento, los más conocidos y activos en el interior del PL.

Zelaya, quien ha expresado públicamente que no piensa abandonar las filas de su partido aunque seguirá fungiendo como Coordinador Nacional del FNRP, se ha decantado a favor de la conformación de

un Frente Amplio, es decir un movimiento político de gran envergadura que dé cabida a todos los grupos políticos y sociales que tienen como denominador común su oposición al golpe de Estado y su apoyo a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que formule una nueva Constitución y abra el paso a las reformas políticas y sociales que el sistema actual requiere. Para que esa coalición política pueda ser registrada legalmente y participar como tal en las futuras elecciones generales de noviembre del año 2013, será necesario previamente reformar la actual Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP), aprobada en el año 2004, a fin de abrir sus márgenes de participación y facilitar el registro válido de las alianzas políticas de corte electoral, sin que sus partes o grupos integrantes pierdan la identidad partidaria propia.

Según los planes de Zelaya, una coalición semejante debería incluir en un solo bloque a los llamados “*liberales en Resistencia*” o liberales zelayistas, junto a los considerados electores independientes y, por supuesto, a los militantes del FNRP. Tal alianza, a su juicio, sería una fuerza invencible en el próximo torneo electoral y se convertiría así en el canal más adecuado y valioso para recuperar el poder político perdido hace ya dos años, como consecuencia del golpe de Estado de 2009.

La pregunta clave que abruma y confunde a todos los posibles miembros de esta alianza soñada es la siguiente: ¿quién sería el candidato ideal para ganar las elecciones? Aunque Zelaya no lo dice abiertamente, no hay duda que su candidata favorita es su propia esposa, la ex primera dama Iris Xiomara Castro (Licenciada en administración, 51 años, cuatro hijos), una persona que goza de mucha aceptación y simpatía en las filas del FNRP y de los liberales adversarios del golpe de Estado. La señora Castro ha participado en las principales manifestaciones y marchas callejeras organizadas por el FNRP desde el día del golpe de Estado, lo que le ha creado un aura de heroína de la Resistencia y mujer valiente y decidida. Al interior del PL antigolpista cuenta con suficiente aceptación como para convertirse en la candidata presidencial oficial. De ser así, sería la primera vez que los liberales proponen una mujer para optar a la presidencia de la República. Las encuestas realizadas conceden a Xiomara una holgada ventaja de más del 50% de la intención de voto, muy por encima de los otros pretendientes, sean liberales o nacionalistas. Todo esto quiere decir que la ex primera dama tiene muy buenas posibilidades de ser la candidata del antigolpismo, en caso de que los “*resistentes*” decidan aceptar el reto de participar en el próximo proceso electoral.

- b) El retorno de Manuel Zelaya ha servido, entre otras cosas, para estimular más, si es que cabe, el temor que prevalece entre las élites político-empresariales más conservadoras del país ante la posibilidad de que el ex presidente vuelva a tener influencia decisiva en las grandes decisiones nacionales.

Este temor se manifiesta de diversas maneras: por un lado, el miedo se traduce en amenazas contra la seguridad personal de Zelaya y advertencias sobre el peligro que podría correr su vida si persiste en desafiar al sistema. Por otro lado, el miedo al activismo político de Zelaya se manifiesta también a través de un creciente rechazo y censura a lo que consideran una política demasiado complaciente y tolerante por parte del presidente Porfirio Lobo. Las dos formas de rechazo expresan, de alguna manera, la desesperación y angustia que el activismo político de Zelaya y del FNRP provocan al interior de las élites que financiaron y organizaron el golpe de Estado.

La multitudinaria concentración popular organizada por el FNRP para recibir a Zelaya en el aeropuerto de Tegucigalpa el pasado día 28 (los cálculos oscilan entre 500 mil y un millón de personas) sirvió, entre otras cosas, para incrementar el temor de las élites y la preocupación de los sectores golpistas (políticos tradicionales, empresarios conservadores, líderes religiosos, jefes militares, etc.) que nunca habían visto una demostración de apoyo a un dirigente político tan masiva, bien organizada y autofinanciada.

En los días previos al retorno del ex presidente, su esposa denunció públicamente la existencia de un complot empresarial para asesinar a Zelaya. La fuente de tal información fue el empresario cubano-americano José “Joseíto” Lamas, amigo de la familia Zelaya, que confió el secreto del complot a Xiomara Castro. Ante el escándalo suscitado y temiendo por las consecuencias legales del mismo, Lamas llegó a la Fiscalía General y negó ante los fiscales haber dado semejante información a la ex primera dama. Sin embargo, en los círculos más cercanos a Zelaya consideran la información como cierta (Lamas está estrechamente vinculado a los grupos empresariales más recalcitrantes y golpistas del país) e incluso conocen los nombres de los supuestos empresarios que estarían involucrados en la financiación del posible atentado criminal. Zelaya inicialmente ha rechazado la protección oficial que le ofreció el gobierno de Lobo y prefiere estar rodeado de guardaespaldas civiles, partidarios y amigos suyos.

Un atentado en contra de Zelaya sería algo así como la chispa que falta para incendiar la pradera del descontento nacional. Los dirigentes políticos más sensatos y los empresarios menos ligados al golpe

de Estado así lo entienden y se lo hacen saber cada vez que pueden a los funcionarios diplomáticos acreditados en Tegucigalpa. Sin embargo, no se debe descartar la variable de la estupidez y la torpeza políticas que podrían desembocar en un acto tan irracional y suicida como sería un atentado en contra de Zelaya, el político que tiene el mayor liderazgo real en la nación hondureña en este momento concreto de la historia del país.

- c) Al interior del FNRP, el regreso de Zelaya también ha creado nuevos desafíos y ha replanteado antiguos problemas. Su liderazgo es indiscutible, aunque algunos sectores, todavía minoritarios por ahora, cuestionan su nuevo discurso de reconciliación y reconstrucción democrática. Esos grupos, los más ideologizados y definidos en el bando de la izquierda tradicional y delirante, quisieran escuchar de Zelaya un llamado más preciso y desafiante a luchar contra el gobierno actual y a favor de la toma del poder en corto tiempo. Rechazan al “Zelaya liberal” y demandan un “Zelaya revolucionario y socialista”.

Sin embargo, político experimentado y habilidoso como es, el ex presidente ha logrado persuadir al resto de los dirigentes de la Resistencia para que esperen a tomar las decisiones cruciales en una futura asamblea nacional del FNRP que sería convocada en las próximas semanas. Ahí, en ese evento, se decidiría finalmente sobre la participación o no de la Resistencia en las elecciones generales del 2013. O sea que serán los asambleístas, en definitiva, los que decidirán sobre la creación del Frente Amplio para aliarse con los demás grupos políticos y sectores sociales o, por el contrario, optarán por convertir al FNRP en un partido político de izquierdas que haría frente, por sí solo, a los otros dos grandes partidos políticos tradicionales del país, el liberal (PL) y el nacional (PN).

Zelaya ya ha declarado abiertamente que sus intenciones son participar en las elecciones y derrotar al PN mediante una coalición de fuerzas aglutinadas en un Frente Amplio. De esta forma, su posición política ha quedado clara y definida, enfrentada desde ya a las tendencias antielectorales que se agrupan en el sector más radical e izquierdista del FNRP, los llamados “*refundacionistas*” del Estado, entre los cuales destacan algunos dirigentes de los grupos indigenistas, unos cuantos académicos y profesores universitarios, miembros de distintas facciones de la antigua izquierda hondureña, dirigentes sindicales “*clasistas*” y viejos militantes del ya desaparecido partido comunista hondureño. En suma, una mezcla variopinta y gelatinosa que podría convertirse en el palo en la rueda del avance hacia la formación de un Frente Amplio político-electoral.

- d) La llegada de Zelaya ha generado, como es natural, la preocupación y el desasosiego en las filas del partido de gobierno y entre sus más activos precandidatos a la nominación presidencial (Juan Orlando Hernández, Miguel Pastor, Ricardo Álvarez y Oscar Álvarez). También ellos deben estar preocupados por la impresionante capacidad de convocatoria y movilización nacional que mostraron los zelayistas el sábado 28 para recibir a su líder. Si esa capacidad se mantiene y fortalece de cara al próximo evento electoral, el triunfo de los nacionalistas podría quedar reducido a un simple sueño.
- e) La presencia de Zelaya, además, ha puesto en agenda el tema de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un asunto demasiado controversial y polémico que divide las filas y las opiniones de los miembros del partido gobernante (PN). El presidente Lobo, quien no vacila en declararse abierto partidario de convocar a una consulta popular, vía plebiscito, para decidir sobre la ANC, suele incomodar a los dirigentes de la “*vieja guardia*” partidaria y provocar el enojo y rechazo de los grupos más conservadores agrupados en asociaciones como la Unión Cívica Democrática (UCD), el reducto preferido de los golpistas más recalcitrantes y sectarios. La ANC se va convirtiendo, poco a poco, en el nuevo gran tema de confrontación y polarización en la sociedad hondureña.
- f) Finalmente, aunque no por ello menos importante, la firma del Acuerdo de Cartagena, punto de partida para los “*dos retornos*” (Zelaya a Honduras y Honduras a la OEA), recoloca con más fuerza el espinoso tema de los derechos humanos en el escenario político hondureño. La imagen del gobierno está seriamente deteriorada a nivel internacional y las denuncias tanto internas como externas sobre las violaciones y la impunidad que las rodea siguen estando a la orden del día.

La reciente carta de 87 representantes del Congreso norteamericano a la Secretaria de Estado Hilary Clinton, demandando el recorte de la ayuda militar y policial al gobierno de Honduras por las graves violaciones a los derechos humanos, es una prueba de lo difícil que se pueden poner las cosas en el ámbito internacional. Para colmo, las recientes peleas públicas entre la Fiscal de derechos humanos, Sandra Ponce, y el ministro y Viceministro de Seguridad, Oscar Álvarez y Armando Calidonio, respectivamente, no es algo que ayude mucho a la buena imagen del régimen lobista.

La comunidad internacional en general y la Comisión verificadora del Acuerdo, integrada por Colombia y Venezuela, en particular, seguramente vigilarán de cerca, como es su deber, el cumplimiento de todos los puntos y compromisos contenidos en el texto de la Decla-

ración de Cartagena. O sea que el gobierno de Porfirio Lobo seguirá estando en la mira de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y, por lo mismo, estará sujeto a nuevas denuncias y condenas.

El gobierno de Lobo, al firmar el Acuerdo, ha adquirido una nueva responsabilidad ante los países que respaldaron el reingreso de Honduras a la OEA (32 votos a favor y uno en contra, el de Ecuador) y se ve obligado a ejercer más control sobre los órganos de represión paralela que ejercen persecución y violencia contra disidentes políticos, especialmente dirigentes intermedios del FNRP, en todo el territorio nacional. No será suficiente la simple buena voluntad política del presidente Lobo a favor del respeto a los derechos humanos. Será preciso un control más efectivo sobre el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad privada. El caso del conflicto agrario en el Bajo Aguán y la ola de violencia represiva que ahí se ha desatado, son un buen ejemplo de lo que aquí se afirma.

### La situación económica

**E**l gobierno lobista se anotó un éxito muy importante con la organización en San Pedro Sula del evento internacional conocido como “*Hondurasis open for business*”, una amplia reunión de empresarios de todo el mundo para conocer las posibilidades de inversión que hay en Honduras y los diferentes proyectos con ofertas de ejecución inmediata. Centenares de hombres de negocios se dieron cita en la “*capital industrial*” y escucharon a los funcionarios gubernamentales explicar en detalle los posibles proyectos de inversión y las facilidades legales (un día antes, el Congreso Nacional había aprobado una nueva Ley para la protección y el fomento de las inversiones) que el país ofrece para el desarrollo de los mismos.

En este mes también dio inicio la construcción del proyecto hidroeléctrico del Río Patuca, en el departamento de Olancho. Se colocó la primera piedra del proyecto que, según los planes, entrará en pleno funcionamiento en el año 2014, con una producción de unos 104 megavatios de energía eléctrica y un costo inicial de 350 millones de dólares. El gobierno, que todavía no ha reunido el dinero para financiar la obra, espera obtener los fondos de parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de bancos chinos y de empresarios privados. Al parecer, sólo cuenta con 50 millones de dólares como aporte inicial. La represa será construida por una empresa de China Continental (Sinohidro).

A mediados del mes, una noticia de gran impacto mediático estremeció el escenario nacional y despertó el interés -y las esperanzas- de todos los hondureños. Según el gobierno, la empresa noruega “*Petroleum Geo Services*”, encargada de realizar exploraciones petroleras en la costa Caribe de Honduras, presentó un informe final en el que establece la existencia de reservas petrolíferas en la zona, las que podrían ser objeto de explotación futura. Esta empresa fue contratada en marzo de 2009, en las postrimerías del gobierno de Manuel Zelaya, y presentó un informe preliminar a finales del mes de junio, unos días antes del golpe de Estado. Debía presentar su informe final en el mes de octubre de ese mismo año, pero se desconoce si lo hizo. En todo caso, si lo presentó fue ante las autoridades del gobierno de facto, las que han guardado silencio sobre el caso. Lo cierto es que la noticia trascendió en este mes de mayo y el país entero acarició, aunque fuera por unos pocos días, la esperanza de que Honduras se convirtiera, de la noche a la mañana y por un golpe fabuloso de la suerte, en país productor y exportador de petróleo. El escándalo duró apenas una semana y luego un velo de misterio y silencio ha cubierto el asunto.

Pero no todo es misterio en el juego de la economía. La Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó el país en la segunda mitad del mes, emitió al final un Comunicado de prensa en el que, como en ocasiones anteriores, felicita al gobierno por el cumplimiento de las metas cuantitativas comprometidas pero, al mismo tiempo, advierte sobre los riesgos del gasto público, la excesiva e inmanejable deuda interna (37 mil millones de lempiras), el calamitoso Estado de las finanzas de varias instituciones de pensiones y jubilaciones, la urgente necesidad de hacer reformas de fondo en las empresas estatales como la ENEE y HONDUTEL, etc. De paso, pronosticó una inflación acumulada de 8% para finales del año (en abril ya era de un poco más del 3%) y un déficit fiscal que no debe superar el 3,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

# JUNIO 2011

---

## La situación política

**E**l retorno del gobierno hondureño al seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), el primer día de este mes, marcó el inicio de un proceso de reconciliación y acercamiento relativo entre el ex presidente Manuel Zelaya, quien regresó de su exilio en las vísperas, y el presidente en funciones Porfirio Lobo. Una vez producido el esperado reingreso, Lobo pidió encarecidamente *“darle vuelta a la página (ya que)... es la hora de enterrar el pasado”*, mientras Zelaya declaró abiertamente que *“no guarda ningún rencor”*. Pero Lobo agregó algo más: *“Es tiempo de hacer reformas, dijo, respetar el derecho del pueblo a ser consultado y tomar decisiones (porque)... ninguna generación le puede imponer a otra su modelo, ninguna Asamblea designada hace treinta años puede imponerle su modelo a la generación de hoy”*, para luego advertir que, aunque promueve las reformas, él no será un directo beneficiario de las mismas, respondiendo de esa manera a las insinuaciones de sus adversarios que lo acusan de pretender el continuismo político a través de la reelección presidencial.

Tanto Lobo como Zelaya, con diferente lenguaje y distinto acento, parecen coincidir cada vez más en sus propuestas políticas, desembocando, más temprano o más tarde, en la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente o promover desde el seno del Parlamento las necesarias y profundas reformas que el sistema político requiere. Sus coincidencias políticas, cada vez más evidentes y públicas, despiertan el recelo de los sectores más radicales y extremistas al interior del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), a la vez que provocan la furia y el rechazo de los grupos más conservadores y golpistas dentro de las élites empresariales, políticas y religiosas del país. Los dos protagonistas principales del escenario político local, Lobo y Zelaya, concitan, sin proponérselo, tanto la desconfianza y las dudas de la ultrazquierda como el enojo y la animadversión de la ultraderecha. Los extremos políticos, como suele suceder, coinciden y hacen causa común al identificar a quienes consideran los enemigos a vencer. Ambos protagonistas deben, por lo tanto, librar sus propias luchas internas en el seno de sus respectivas organizaciones y ámbitos políticos. De hecho,

ya la están librando. El presidente Lobo debe enfrentar no sólo la oposición de los grupos golpistas ya conocidos (algunos empresarios, dirigentes políticos tradicionales, jefes militares, líderes religiosos, etc.) sino la resistencia propia en las filas de su mismo partido. Ricardo Álvarez, presidente del partido Nacional (PN), es el primero en oponerse a las iniciativas reformistas de Lobo y obstaculizar sus propuestas. La vieja guardia del partido, encabezada por dirigentes como los ex presidentes Rafael Callejas y Ricardo Maduro, Osvaldo Ramos Soto, Rodolfo Iriás Navas, Roberto Ramón Castillo, etc. no logra ocultar su molestia y disconformidad con las intenciones de Lobo por hacer consultas al pueblo para tomar una decisión definitiva en torno a las reformas y la posible convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero Lobo sigue avanzando en su proyecto, como lo evidencia su más reciente decisión de convocar a todos los partidos políticos, legalmente inscritos o en proceso de formación, al igual que a las organizaciones sociales, para iniciar una ronda de diálogos sectoriales que permitan identificar propuestas concretas en torno al proyecto de reformas al sistema político y social del país. Zelaya, por su parte, tampoco las tiene todas consigo y debe hacer frente a las posturas más radicales y extremistas dentro del FNRP, así como librar la batalla política al interior de las filas liberales en donde la cúpula dirigente, vinculada estrechamente al golpe de Estado, insiste en expulsarlo del partido y considerarlo un desertor del liberalismo. Pero su liderazgo es fuerte y tiene raíces cada vez más profundas a nivel nacional (en este sentido, su posición es mejor que la de Lobo), tal como lo demuestran las multitudinarias concentraciones proselitistas que organiza cada fin de semana en los distintos departamentos del país. La mejor prueba de su fuerza política la dio el día 26, cuando en la masiva asamblea nacional del FNRP (1,640 delegados de todo el país) logró revertir totalmente la antigua resolución de esa misma asamblea (febrero/2011) que rechazaba la participación del FNRP en el futuro proceso electoral. Ahí Zelaya puso a prueba su liderazgo y hegemonía política dentro del FNRP, desafiando en lo esencial a los grupos ultras de la antigua izquierda política del país, que pretenden mantener a la llamada Resistencia al margen de la lucha política electoral, sólo concentrada en trabajos de formación política, organización interna y movilización callejera constantes. Zelaya logró que los delegados, en su inmensa mayoría, apoyaran su propuesta de formar un Frente Amplio, es decir una coalición política-electoral abierta y plural, que dé cabida a todos los grupos y sectores antigolpistas, para participar en las próximas elecciones y derrotar al partido Nacional.

Si la iniciativa zelayista cobra fuerza, como parece que ya lo está haciendo, y logra traducirse en una nueva fuerza política en el escenario nacional, el bipartidismo tradicional, base del precario equilibrio político de las últimas décadas, podría estar llegando a su final. Los dos grandes partidos tradicionales de Honduras, el liberal y el nacional, han mantenido un monopolio casi absoluto sobre el electorado a lo largo de más de cien años. Unos más,

otros menos, pero ambos se han turnado en el ejercicio del poder gubernamental, repartiéndose los bienes y beneficios del Estado como si fuera un botín que deben disputar cada cuatro años en un torneo electoral. El surgimiento del Frente Amplio propuesto por Zelaya podría alterar ese frágil equilibrio y romper la correlación de fuerzas tradicional en el sistema político hondureño. Tal perspectiva aterroriza a las cúpulas partidarias del modelo tradicional (liberales y nacionalistas), a la vez que introduce miedo y vacilación al interior de las élites empresariales, militares y religiosas del país. Todo ello sólo presagia una creciente crispación en el ambiente político local, la que se irá acrecentando a medida que se acerque la fecha de las elecciones primarias e internas en los partidos políticos (noviembre de 2012), como antesala de las elecciones generales de noviembre de 2013.

Mientras se desarrolla este proceso político, el presidente Lobo sigue enfrentando los problemas ya comunes en el desempeño de su gabinete ministerial: peleas y encontronazos constantes entre sus ministros (casos del Ministerio de Seguridad y el de Derechos Humanos o las disputas entre la ENEE, Ministerio de Recursos Naturales y Finanzas por el control de los fondos para gestionar el cambio climático, la resistencia de Ministerios como el de Salud a obedecer los lineamientos de planificación que emanan de SECPLAN en base al Plan de Nación, etc.), bajísimo nivel de ejecución en los diferentes proyectos, renuencia manifiesta a obedecer la legislación de compras y contratación del Estado (transparencia y rendición de cuentas), resistencia a los decretos que ordenan ahorro y austeridad en el gasto público, etc. El presidente se ha visto obligado a ordenar la intervención en diferentes instituciones del Estado carcomidas por la corrupción, el despilfarrero y la mala administración (casos del Instituto de Previsión del Magisterio/INPREMA -o la Empresa Nacional Portuaria/ENP-), de la misma forma que ha ordenado crear un fondo especial con los dineros que han dejado de ejecutar por negligencia e incapacidad varios de los funcionarios clave de su gabinete.

Las disputas por el control de los recursos y la distribución de los mismos ha llegado y se ha centrado en el Congreso Nacional, en donde los diputados acaban de aprobar un conjunto de impuestos agrupados todos bajo el paraguas de una llamada "*tasa de seguridad*", es decir impuestos para financiar aumentos al presupuesto de la policía y de los militares. Serán afectadas las transacciones bancarias (cuentas que tengan un promedio semestral superior a los 120 mil lempiras, es decir unos 6,300 dólares), las casas de juego (máquinas traganiqueles), la telefonía móvil y las operaciones mineras. En total, los recaudadores podrán reunir sumas millonarias que superan con creces las cantidades inicialmente solicitadas (mil quinientos millones de lempiras), lo que generará abundantes excedentes que desde ya están generando dudas, sospechas y controversias entre los diputados de las diferentes bancadas y entre los principales funcionarios del Poder Ejecutivo. Los

---

empresarios, que se consideran los más afectados por los nuevos impuestos de la llamada “*tasa de seguridad*”, han emprendido una verdadera campaña mediática en contra del gobierno, acusándolo de atentar contra la recuperación de la economía y la competitividad del país. Pero hay algo más: con suficiente razón, los empresarios sospechan que los fondos millonarios a recaudar, al menos una buena parte de ellos, podrían ser utilizados para financiar las campañas proselitistas del presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, y del ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, ambos declarados aspirantes a la nominación presidencial dentro del partido de gobierno.

El presidente Lobo, situado en medio del fuego cruzado entre el Congreso Nacional y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) por la “*tasa de seguridad*”, ha declarado su decidido apoyo a la iniciativa del Poder legislativo, acusando a los empresarios de ser egoístas y miserables por negarse a aportar un poco siquiera para financiar la lucha contra la delincuencia común y organizada. La adopción de impuestos para financiar la lucha por la seguridad está en la línea aconsejada recientemente por Hilary Clinton en la reunión celebrada en Guatemala para diseñar agendas regionales de lucha contra el crimen organizado. En esa ocasión, la representante estadounidense aconsejó a los gobernantes centroamericanos hacer que los ricos paguen más para poder financiar la actividad policial en contra de los criminales y garantizar mejores sistemas de seguridad ciudadana.

Pero la pelea del Ejecutivo no sólo es con los empresarios. De nuevo ha vuelto a surgir la disputa con el Poder Judicial, empeñado como ya es usual en dificultar los esfuerzos del presidente Lobo por lograr mejores niveles de reconciliación y entendimiento con el ex presidente Zelaya y sus partidarios. Por instrucciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, encabezados por su propio presidente, un juez secundario decidió dictar prisión domiciliaria a Enrique Flores, ex ministro de la presidencia y cercano colaborador de Zelaya. Flores regresó al país desde Nicaragua, acompañando al ex presidente en su viaje de retorno a Honduras. Está acusado de manejos irregulares de sumas millonarias (se habla hasta de 40 millones de lempiras que, supuestamente, habrían sido invertidos en financiar la operación de la famosa “*cuarta urna*”) y enfrenta al menos tres procesos judiciales en los tribunales. El juez le impuso el pago de una multa millonaria (27 millones de lempiras, un poco más de un millón cuatrocientos mil dólares), batiendo así un record en la práctica judicial hondureña. La medida fue impuesta para evitarle al imputado su defensa en condiciones de libertad, tal como se establece que debe ser de acuerdo a los puntos pactados en el célebre Acuerdo de Cartagena firmado el pasado 22 de mayo entre Lobo y Zelaya, con el aval internacional de los presidentes de Colombia y Venezuela. El resultado de todo este embrollo ha sido la puesta en duda de la voluntad política real para cumplir con el mencionado Acuerdo, lo que ya motivó

la llegada de representantes de las cancillerías colombiana y venezolana para hacer una evaluación de la situación y vigilar más de cerca el cumplimiento de lo pactado. El presidente Lobo no oculta su malestar y enojo por lo que están haciendo los jueces, sobre todo después que trascendió la noticia sobre una reunión secreta de los magistrados con líderes políticos nacionalistas, entre ellos Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional, para planificar la mejor forma de enviar a Flores Lanza a la cárcel y provocar así la ruptura abierta de Zelaya con Lobo.

No hay duda que los sectores golpistas, atrincherados desde hace ya dos años en la Corte Suprema de Justicia, siguen poniendo trabas y obstáculos a los esfuerzos de Lobo por reconciliar al país y llegar a acuerdos políticos válidos con la oposición zelayista. Lo nuevo en todo este laberinto es la presencia de Hernández al lado de los magistrados golpistas. La única explicación posible es la siguiente: Juan Orlando, como aspirante presidencial que es, no está interesado en facilitarle las cosas a Zelaya y a sus seguidores. Tampoco está interesado en que se establezca una eventual y sorprendente alianza Lobo-Zelaya en torno al objetivo común de lograr una Asamblea Nacional Constituyente.

En síntesis, la situación sigue siendo complicada y el presidente Lobo continúa haciendo esfuerzos por sacar adelante su intención reformista y sus deseos de reconciliación política con los opositores al golpe de Estado. Una tarea difícil que absorbe las mejores energías presidenciales y, con frecuencia, distrae al presidente de otras iniciativas y problemas que enfrenta el país.

Por ejemplo, problemas tales como el conflicto agrario en la zona del Bajo Aguán, en la costa norte del país. Afortunadamente se ha logrado llegar a un acuerdo previo que, si se cumple, pondrá fin a buena parte del conflicto y permitirá recuperar la paz y la tranquilidad en esa zona tan peligrosa y volátil. El gobierno logró convencer al empresario Miguel Facussé para que venda siete de sus numerosas fincas (plantaciones) de palma africana, unas 4,045 hectáreas a razón de unos 135 mil lempiras (aproximadamente siete mil dólares) por hectárea, que serán entregadas de inmediato a los grupos campesinos que las reclaman como propias. Facussé también ha salido ganando, según denuncian los campesinos, ya que ha inflado artificialmente el precio de las tierras en disputa, sin haber demostrado plenamente sus títulos de propiedad sobre las mismas. Los campesinos, por su parte, recuperan la calma y conservan la vida, ya que durante el conflicto muchos de ellos fueron asesinados por los guardias privados de los terratenientes-empresarios. El gobierno, al final, logra apagar un fuego que amenazaba con extenderse peligrosamente y provocar un verdadero incendio social en esa explosiva región.

## La corrupción al desnudo

**J**unto a los problemas políticos y líos judiciales que acercan o enfrentan al gobierno y a la oposición zelayista, la sociedad hondureña ha podido presenciar en este mes la revelación de numerosos escándalos de corrupción que ponen al descubierto hasta qué punto los corruptos han llegado a controlar importantes eslabones de la estructura gubernamental y cuánta impunidad les rodea y protege.

Uno de los casos más emblemáticos revelados en las últimas semanas es el del Banco de los Trabajadores (Bantrab), una institución creada para financiar a los menos favorecidos y respaldar las iniciativas mercantiles del movimiento obrero organizado. Han salido a la luz pública las transacciones irregulares, los préstamos falsos, las evaluaciones falseadas, los gastos ficticios, el derroche, el despilfarro y las operaciones fraudulentas de gerentes burocratizados (antiguos dirigentes sindicales, algunos de ellos) y empresarios inescrupulosos, algunos muy vinculados en la financiación y apoyo del golpe de Estado. Como resultado de toda esta trama corrupta, el banco ha llegado al límite de sus posibilidades y ha sido preciso acudir en su rescate y vender sus acciones a una cooperativa millonaria que se ha ganado el premio mayor al comprar a precios ridículos los bienes y el capital de Bantrab. Esta operación de rescate, avalada por la estatal Comisión Nacional de Banca y Seguros que dirige la abogada Vilma Morales, ex representante de Roberto Micheletti en las negociaciones del Acuerdo Tegucigalpa/San José, ha sido seriamente cuestionada por su falta de transparencia y credibilidad financiera. Los afectados principales, los pequeños accionistas que creían ser dueños del banco, amenazan con demandas nacionales e internacionales para castigar a los corruptos y recuperar parte aunque sea de los dineros perdidos. Al final, el caso Bantrab ha permitido poner al desnudo, una vez más, la preocupante ola de corrupción que abarca a tantas instituciones del sector público y del privado.

Otro caso escandaloso ha sido el del instituto de Previsión del Magisterio (Inprema), una institución llamada a proteger los intereses de los maestros, sus principales accionistas, y asegurar un fluido fondo de pensiones y recursos para financiar la jubilación de sus contribuyentes. El Inprema sufre ahora un déficit millonario (se habla hasta de setenta mil millones de lempiras) que lo tiene al borde de la bancarrota. Su crisis y quiebra financiera se deben a la manipulación arbitraria que han hecho de sus recursos políticos corruptos y dirigentes magisteriales burocratizados. Los políticos, desde el gobierno, suelen utilizar los dineros de la institución para financiar el déficit fiscal crónico que padecen las finanzas del Estado. Los dirigentes magisteriales, enquistados en los principales cargos de dirección del Inprema, se aprovechan para hacer negocios de dudosa transparencia y enriquecerse ilegalmente. Para colmo de males, durante el gobierno de facto de Roberto

Micheletti (julio 2009 - enero 2010), es decir inmediatamente después del golpe de Estado, las ya escuálidas finanzas del Inprema fueron virtualmente saqueadas de manera abierta y sin reparos. El resultado ha sido una institución quebrada y ahora intervenida por la Comisión Nacional de Banca y Seguros a la búsqueda de alguna fórmula de rescate y salvación financiera.

Un tercer caso completa esta lista de ignominia e impunidad. Se trata de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) que administra los puertos marítimos de Honduras, en especial el puerto más moderno y grande, Puerto Cortés. Esta empresa ha sido una especie de *“gallina de los huevos de oro”*, junto con la empresa telefónica Hondutel, para el Estado hondureño. Los diferentes gobiernos han acudido siempre a la ENP en busca de auxilio económico para equilibrar las deterioradas finanzas públicas. Pero también los políticos corruptos, convertidos en gerentes, han metido sus manos en los recursos millonarios de la ENP para saquearlos a su gusto y antojo. En alianza con ellos, un grupo de reconocidos empresarios de San Pedro Sula, algunos de ellos sospechosos de lavar dinero del crimen organizado, han convertido la ENP en un espacio propicio para sus negocios sucios y sus transacciones financieras opacas. Alquiler simulado de maquinaria, compras directas sin licitación ni transparencia, asesorías y consultorías ficticias, contrataciones falsas, sobrefacturación y subvaluación de servicios y productos, subsidios a candidatos, pago de deudas de reconocidos políticos y partidos, etc. todo esto, en su conjunto, ha permitido que la ENP se encuentre hoy en una situación muy difícil, sin credibilidad operativa y en manos de un grupo de corruptos que no temen a nadie ni obedecen a nadie. No es casual que el presidente Lobo, harto ya de recibir quejas y denuncias, haya ordenado intervenir la empresa, para lo cual ha nombrado una comisión especial que deberá presentar su informe de investigación en pocos meses.

El denominador común de estos tres casos de corrupción mencionados es la impunidad. Nadie está en la cárcel, nadie está siendo procesado, al menos todavía, y nadie se hace responsable por los daños causados al Estado y a la sociedad. En tal situación, no es nada casual entonces que una reciente encuesta del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) arroje los siguientes y reveladores datos: el 87% de los encuestados cree que la corrupción va en preocupante aumento, mientras que el 78% asegura que ya hemos perdido la batalla contra los corruptos.

# JULIO 2011

---

## La situación política

**E**n este mes de julio, entre denuncias de amenazas de muerte y la oposición creciente de los gremios empresariales a algunas medidas adoptadas por su gobierno, el presidente Porfirio Lobo ha continuado con su ronda de “*diálogos sectoriales*”, en un esfuerzo amplio por concertar con las diferentes fuerzas sociales y políticas un programa viable de reformas y cambios en el sistema político del país. Por este camino, Lobo prepara las condiciones para hacer una consulta a la población, ya sea vía plebiscito o diálogo nacional, a fin de tomar una decisión final sobre la convocatoria o no a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). A este respecto hay, en el seno del gobierno y de la sociedad en general, al menos tres posiciones claramente diferenciadas:

- a) La realización de reformas al texto constitucional sin necesidad de convocar a una ANC, es decir que sea el propio Congreso Nacional, en su legislatura actual, el que lleve a cabo el programa reformista.
- b) La convocatoria a una ANC, integrada por representantes elegidos por los partidos políticos en base a las disposiciones de la legislación electoral actualmente vigente. Esta posición supone que serían sólo los representantes de los cinco partidos políticos legalmente registrados los que llevarían a cabo los cambios en el texto constitucional o, en su defecto, redactarían una nueva Constitución.
- c) La convocatoria a una ANC, formada por representantes de los partidos políticos y **de los movimientos sociales**, en condiciones de equidad política, para redactar una nueva Constitución y llevar a cabo lo que denominan “*la refundación de Honduras*”. Esta posición goza del respaldo del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), encabezado por el ex presidente Manuel Zelaya.

Frente a estas opciones políticas, el presidente Lobo ha optado por convocar a los “*diálogos sectoriales*”, una fórmula incluyente que le permite discutir por separado con los distintos grupos y estamentos políticos, empresaria-

les y populares, sobre la mejor forma de abordar el espinoso tema de las reformas políticas y los cambios que es preciso introducir en el entramado económico y social del país.

La primera de estas reuniones se llevó a cabo en la Casa Presidencial el día 09 y convocó a los representantes de los cinco partidos políticos existentes y otros tantos en proceso de formación. En la cita estuvieron mezclados, con igual rango y jerarquía política, conocidos dirigentes de la clase política tradicional y desconocidos aspirantes a ocupar un lugar en el escenario político-electoral del país. Entre estos últimos aparecieron desde un destacado presentador de televisión y comentarista deportivo, hasta ignorados dirigentes sindicales de bajo perfil y más de algún oportunista de última hora que logró conseguir invitación para el encuentro.

Además de los cinco partidos inscritos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE): Liberal, Nacional, Innovación y Unidad, Unificación Democrática y Demócrata Cristiano, llegaron a Casa Presidencial los representantes de los siguientes *“partidos en formación”*: Frente Amplio de Resistencia Popular (FNRP-Manuel Zelaya), Frente Amplio de Participación Electoral (Andrés Pavón), partido Anticorrupción (Salvador Nasralla), Convergencia Nacional (Julio Soriano), Tendencia Revolucionaria (Guillermo Jiménez), partido para la Transformación de Honduras (Luis Mayorga) y el partido Nueva Democracia (Mario Membreño). Estos *“nuevos partidos en proceso de formación”*, tal como se les denomina en la prensa diaria, representan intentos, unos más serios y consistentes que otros, por diversificar la oferta política en el país y reflejan, en buena medida, la desconfianza, el hastío y el desencanto creciente que muestran los electores con respecto a los viejos partidos tradicionales, tanto los dos grandes como los tres pequeños o *“emergentes”*. Sin embargo, no todos los aspirantes a conformar nuevas agrupaciones políticas tendrán la misma oportunidad de lograrlo. Para ello necesitan reunir el dos por ciento del total de votos depositados en las elecciones generales más recientes, es decir las de noviembre del año 2009. De acuerdo a los datos oficiales del TSE, en esas elecciones votaron 2 millones 146 mil ciudadanos, lo que arroja un 2% equivalente a 43 mil personas. O sea que los aspirantes necesitan presentar 43 mil firmas debidamente registradas ante el TSE antes de que finalice este año. De lograrlo, podrán inscribir sus nuevas agrupaciones políticas y participar en las elecciones generales de noviembre del año 2013.

A última hora, hasta los militares, por la vía de los llamados *“reservistas”* y *“veteranos de guerra”*, han mostrado interés por crear un nuevo partido, la Organización de las Reservas Democráticas de la Nación (ORDEN), estimulado desde las barracas y apoyado por el actual Gerente de la empresa telefónica estatal (HONDUTEL), el jefe militar del golpe de Estado del 28J, General Romeo Vásquez. Es curioso comprobar que los militares salvadoreños, en los años sesenta y setenta del siglo pasado, también montaron

---

una estructura de carácter paramilitar con el mismo nombre. Este atrevido intento castrense muestra hasta qué punto se ha retrocedido en los afanes por subordinar las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles legítimamente constituidas. Es un retroceso lamentable en el proceso de construcción democrática en Honduras.

Observadores imparciales de la escena política coinciden en que al menos dos de estos grupos aspirantes -el FNRP de Manuel Zelaya y el partido Anticorrupción de Salvador Nasralla- son los que tienen las posibilidades reales de ser inscritos. Los demás, a pesar de sus buenas o dudosas intenciones, la tienen más difícil y, seguramente, se agotarán en sus esfuerzos por conseguir las firmas necesarias y llenar los demás requisitos que la actual ley electoral establece.

El FNRP, coordinado por el ex presidente Zelaya, no tiene mayores dificultades para recolectar las firmas necesarias. Ya en el reciente pasado fue capaz de reunir en apenas cuatro meses de intenso trabajo a nivel nacional un millón 300 mil firmas para exigir la convocatoria a la ANC y el retorno del exilio de su líder y coordinador general, Manuel Zelaya. Por lo tanto, es dable deducir que 43 mil firmas las podrán reunir en poco tiempo. En cuanto al otro aspirante, el locutor deportivo Salvador Nasralla, su campaña mediática y su reconocida popularidad entre los aficionados al deporte son activos importantes a su favor que, sin duda, le facilitarán la tarea recolectora de firmas. El TSE espera que ambas agrupaciones soliciten la inscripción definitiva en los próximos meses.

Sea como sea, todo indica que en las próximas elecciones generales (noviembre de 2013) el escenario político estará más poblado y, por lo mismo, será más complejo. Se abren más los espacios para las posibles alianzas políticas y las candidaturas independientes. Ahora sólo queda introducir en la legislación electoral las debidas reformas y modificaciones para que el sistema sea más abierto y facilite la mayor participación plural y diversa. Este tipo de reformas será el nuevo tema, el más inmediato, que va a ocupar el quehacer político de los partidos y grupos que participarán en el próximo torneo electoral.

Se ha producido ya una reactivación innegable de la actividad política y electoral en el escenario nacional. La misma fue impulsada con el retorno del ex presidente Zelaya pero ha sido acelerada, sin duda, con el debate creado en torno a la posible convocatoria a una ANC y el auge de los grupos políticos por inscribir nuevos partidos en el TSE.

El presidente Porfirio Lobo, en medio de esta nueva aceleración política (continuación de sus diálogos con los movimientos sociales, con los representantes del sector educativo, con los sindicalistas, con los empresarios, etc.), ha colocado otro tema controversial y peligroso sobre la mesa: ha

denunciado haber recibido amenazas a muerte por parte de grupos o personas que identificó como “*de arriba*”, en una clara alusión a los núcleos ricos y poderosos del país. Todo se originó, al parecer, en una reunión de empresarios de la costa norte en San Pedro Sula hace algunas semanas. Ahí, al calor de la tertulia, un empresario muy conocido por su radicalismo golpista, además de ser un privilegiado proveedor de productos y servicios al Estado, criticó fuertemente las últimas medidas del gobierno, en especial la aprobación de la llamada “*tasa de seguridad*” (impuestos para financiar el millonario gasto en la lucha contra la delincuencia), y concluyó diciendo que el costo de derrocar a Zelaya había sido muy alto y que, por lo tanto, era preciso pensar en una vía más directa y definitiva para sacar del juego al incómodo gobernante. El comentario trascendió las paredes de la reunión y, como era de esperar, llegó a oídos del presidente Lobo quien, sin vacilar, procedió a denunciarlo haciéndolo público. La denuncia de Lobo ha provocado la reacción inmediata de muchos líderes empresariales, en especial la del presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Adolfo “*Fito*” Facussé, quien no ha vacilado en criticar la denuncia calificándola como una irresponsabilidad ya que, según él, produce más inseguridad y desconcierto, a la vez que aleja a los posibles inversionistas extranjeros que estarían dispuestos a arriesgar sus capitales haciendo negocios en Honduras. De paso, recomendó al denunciante buscar a los posibles criminales en el seno de su propio partido, es decir al interior de los círculos que le adversan en el partido Nacional (PN). Lobo se ha limitado a matizar sutilmente su denuncia, enfatizando en su carácter preventivo en tanto que mensaje de advertencia hacia quienes se atreven a una conspiración semejante.

La oposición de los gremios empresariales va en aumento, a pesar de que muchos de ellos acepten y hasta celebren la última disposición del gobierno de establecer modificaciones en la política monetaria, permitiendo una moderada flexibilización en el tipo de cambio para dejar flotar la moneda nacional siete puntos hacia arriba o hacia abajo. La medida, recomendada por la ANDI desde hace tres años y reclamada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha creado cierta confusión y ansiedad entre los agentes económicos y en la población en general, temerosos de que, al final, desemboque en una lamentable devaluación del lempira. La nueva medida provocó ya desde el primer día una búsqueda desesperada de dólares en el mercado nacional, lanzando la demanda hacia arriba, desde los 30 millones de dólares que usualmente el Banco Central (BCH) presenta en oferta cada día de subasta, hasta los 120 y 130 millones de dólares reclamados por los postores. La ola especulativa es evidente. El BCH ha debido salir al frente y aclarar que no está dispuesto a permitirlo, endureciendo sus controles y manteniendo la oferta en la suma promedio de 30 millones de dólares en cada sesión de subasta.

El FMI, satisfecho con la nueva medida de política monetaria, ha anunciado la aprobación de 113.9 millones de dólares más (que se suman a los 207

millones otorgados en octubre del año pasado) para apuntalar al gobierno lobista. O sea que la decisión del Banco Central le ha generado al gobierno la simpatía del FMI y la discreta satisfacción de muchos líderes empresariales locales.

Pero no ha sido suficiente. La ANDI ha iniciado, casi al mismo tiempo, una amplia campaña de prensa en contra del gobierno en la que le acusa nada menos que de lo siguiente: provocar desempleo, desorden, inseguridad, incertidumbre, desconfianza, amenazas, anarquía y derroche. La proliferación de reclamos expresa mejor que nada el enojo y la cólera de los gremios empresariales en contra de la *"tasa de seguridad"* y las iniciativas oficiales para reducir en todo lo posible la evasión fiscal y las exoneraciones. El presidente Lobo, a su manera y en su propio tiempo y lugar, está experimentando otra vez la oposición y el rechazo que los empresarios practicaron constantemente durante el gobierno del ex presidente Zelaya. No es casual que los mismos empresarios insistan en comparar a Lobo con Zelaya, reprochando al primero las reales o supuestas tendencias políticas y amistades internacionales del segundo. Por lo tanto, tampoco es casual que los críticos más acérrimos de Lobo concluyan con facilidad y desparpajo que se le debe aplicar igual o peor tratamiento que el recibido por el ex presidente derrocado.

A los problemas generados por el rechazo empresarial a algunas de sus medidas, el presidente debe sumar también los reclamos y dificultades que lo confrontan con los gremios magisteriales, algunos grupos campesinos, organismos de derechos humanos, núcleos ecologistas, étnicos e indigenistas, etc. Crecen las protestas en contra del costo de la vida, el alza en las tarifas de los servicios públicos, los intentos de privatización en algunas empresas públicas (ENEE, HONDUTEL, SANAA, por ejemplo), el sobreempleo en empresas estatales para favorecer a los activistas políticos, la corrupción generalizada y la inseguridad alarmante. El auge en el cobro de los llamados *"impuestos de guerra"*, extorsión ejercida por las pandillas (*"maras"*) en contra de los taxistas, dueños del transporte urbano, pequeños y medianos comerciantes, vecinos de las colonias y barrios marginales en general, ha creado una situación inmanejable en los principales centros urbanos del país, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Cada vez es más fuerte la percepción de que el Estado está ausente, la policía no funciona o está confabulada con los delincuentes y, por lo tanto, la población está desprotegida e indefensa ante la actividad cada día más abierta y descarada de los delincuentes, tanto del crimen organizado como de la delincuencia común. Pareciera que el Estado está en vías de convertirse en un Estado fallido o a punto de fracasar.

Un acontecimiento más sirvió para agitar otra vez el ya de por sí agitado ambiente político y social: la presentación, el día 07 -¡por fin!- del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) sobre lo sucedido antes,

durante y después del 28 de junio del año 2009. El esperado Informe reunió a los diferentes actores del espectro político, ansiosos por conocer el resultado de las investigaciones y confiados en que las mismas les darían la razón a todos y cada uno de los involucrados. Pero, tal como ya se esperaba, los Comisionados (tres extranjeros y dos nacionales) repartieron las culpas por igual y reprocharon a todos la irresponsabilidad y el irrespeto hacia la institucionalidad democrática que condujeron al golpe de Estado. “*Golpe al Poder Ejecutivo*”, le llamaron, promoviendo una nueva y novedosa figura jurídica, para evitar sutilmente el calificativo más común y racional de “*golpe de Estado militar*”.

Pero lo verdaderamente novedoso en el Informe de la CVR es el capítulo dedicado a las Recomendaciones “*para evitar que los hechos del 28J se repitan*”. En ese apartado, los Comisionados incluyen un amplio paquete de cambios y reformas que van desde algunas de naturaleza puramente constitucional hasta otras que afectan fórmulas y procedimientos de la legislación secundaria, códigos, ley electoral, normas administrativas, etc. Pero, en esencia, esas Recomendaciones apuntan en el sentido positivo de fortalecer la institucionalidad democrática del país, abrir a la más amplia participación ciudadana el sistema político, fortalecer, perfeccionándolo, el Estado de derecho, reducir la influencia institucional de las Fuerzas Armadas, limitar los excesos del presidencialismo y crear nuevas instituciones que permitan asegurar el normal funcionamiento de los Poderes del Estado, su debida interdependencia y legalidad. Se puede afirmar, con propiedad, que el capítulo de las Recomendaciones es lo más rescatable y valioso de todo el Informe final presentado por la CVR. Así lo han entendido ya varias organizaciones de la sociedad civil que, desde ahora, se disponen a “*apropiarse*” de estas recomendaciones y convertirlas en propuestas concretas de cara a la reforma constitucional o a la redacción de una nueva Constitución de la República en una eventual ANC.

Ya para concluir el mes, junto al éxito un tanto controversial de la captura de 7.5 toneladas de cocaína (el más grande decomiso en la historia del país) que eran transportadas en un “*submarino*” artesanal colombiano, las autoridades militares y policiales han debido afrontar la vergüenza de reconocer que no disponían de ninguna información sobre la operación Castaway (Operación naufragio), mediante la cual las fuerzas antinarcóticos de los Estados Unidos introdujeron armas al territorio nacional dizque para seguirles la pista y encontrar a los destinatarios y contrabandistas. La operación resultó un rotundo fracaso y las armas acabaron en las manos de los pandilleros y los narcotraficantes. El gobierno de Honduras ha reconocido que no sabía absolutamente nada sobre la mencionada operación.

## La corrupción

Los casos de corrupción y falta de transparencia han continuado en una sucesión cada vez más alarmante y vergonzosa. A pesar de los reiterados llamados por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que los ministros, otros altos funcionarios y diputados, presenten cuentas sobre sus bienes y en torno a las transacciones de adquisiciones, contratación y compras a favor del Estado, todavía no se conocen respuestas convincentes. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en reiteradas ocasiones ha exigido a los funcionarios del Estado facilitar en sus portales de transparencia la información que la población demanda sobre las actividades de sus respectivos Ministerios y unidades. Tampoco ha habido respuesta satisfactoria. El propio presidente Lobo se ha visto obligado a crear una especie de “*Ministerio especial*” para “*desburocratizar*” al gabinete y otras dependencias gubernamentales. A cargo del mismo ha colocado, entre otros, a Jorge Lobo, un hijo suyo, en quien ha depositado toda la confianza y le ha conferido facultades para intervenir aquellas oficinas gubernamentales que atrasen los procesos y muestren señas evidentes de una burocratización desmedida. La situación de ineficiencia e irregularidad en la administración pública ha llegado a tal punto en que se hizo necesario crear un nuevo organismo burocrático ¡para “*desburocratizar*” al Estado!

Una millonaria compra de medicamentos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), sin la licitación debida ni la transparencia necesaria, ha servido para mostrar los vínculos entre los actos de corrupción y las campañas proselitistas de los precandidatos del PN, en este caso la del presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández. Los diputados nacionalistas dieron su respaldo al acto irregular cometido en el IHSS, institución recortada por un reconocido dirigente intermedio y activista del partido de gobierno.

En HONDUTEL las cosas andan por el mismo camino. Se ha denunciado en este mes la existencia de una red de “*telefonía gris*” que cuenta con la complicidad de altos funcionarios de la empresa y que contribuye financieramente a la campaña proselitista del alcalde capitalino, Ricardo Álvarez, uno de los fuertes aspirantes a suceder a Porfirio Lobo.

En el Ministerio de Educación las cosas no son menos escandalosas. La repentina muerte del Administrador general, un conocido activista del PN, ha servido para terminar de sacar a flote los casos de corrupción que involucran al propio ministro Alejandro Ventura y a otras autoridades importantes en el engranaje gubernamental, incluso en la misma Casa Presidencial.

En el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) la situación alcanza niveles de escándalo. El Director de Transporte, Blas Ramos (reconocido activista del PN), encargado de distribuir los millonarios

subsidios, hace de las suyas y maneja a su antojo buena parte de los recursos. La pelea es tan grande que hasta incluye peligro de muerte para algunos dirigentes del transporte, especialmente taxistas. Las millonarias comisiones (sobornos y otras “*contribuciones*” forzadas) que deben pagar los contratistas del Estado a los altos funcionarios de ese Ministerio, son comida diaria en los pasillos de todas las oficinas ministeriales y entre los empresarios de las compañías constructoras.

En la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) también están a la orden del día las comisiones y demás pagos “*voluntarios*”, requisito indispensable para obtener contratos con esa compañía estatal. La contratación exagerada de activistas políticos y amigos del Gerente Roberto Martínez Lozano (conocido dirigente y cuadro político del PN), ha generado el rechazo y la oposición del sindicato de la empresa, lo que se traduce en paros laborales constantes y en denuncias públicas reiteradas.

Y así, hasta el infinito. Es la de nunca acabar...

# AGOSTO 2011

---

## La situación política

**A**gosto ha sido un mes socialmente muy agitado. El viejo conflicto agrario en el Bajo Aguán se reactivó con mucha fuerza y, como ya es usual, con un saldo sangriento: seis muertos y varios heridos, entre campesinos ocupantes y guardias privados de seguridad. El gobierno, incapaz hasta hoy de asegurar niveles aceptables de gobernabilidad en la zona, optó por la vieja fórmula de enviar un contingente combinado de militares y policías (seiscientos en total, bajo la denominación de Operación Xatruch) para llevar a cabo un desarme general e imponer el orden en la región. Como ya ha sucedido en otras ocasiones, los soldados y los policías generan un clima de Estado de sitio en el área y producen más crispación y encono entre la población local.

El Director del Instituto Nacional Agrario (INA), el político izquierdista César Ham, ha asegurado que el agravamiento de la situación en el Bajo Aguán ya no responde a causas estrictamente agrarias, dejando entrever que en el asunto está mezclado el crimen organizado, específicamente los narcotraficantes que operan en esa región y que cada vez tienen más influencia y poder. Por su parte, el Comisionado de la policía Julio Espinal, jefe del contingente combinado, fue más allá y, sin inmutarse siquiera, expresó sus sospechas, casi convicciones, de que en la zona se encuentran activistas y asesores de origen nicaragüense, salvadoreño y hasta venezolano, que imparten instrucción militar a los campesinos ocupantes de las fincas en disputa. Curiosamente la misma afirmación ha hecho el principal terrateniente/empresario involucrado en el conflicto, Miguel Facussé Barjúm.

Por lo visto, el asunto se complica más con la inclusión de narcotraficantes y supuestos “*revolucionarios*” extranjeros entre los actores del drama que ya se prolonga por varios años. La decisión del gobierno de pagar una millonaria suma a Facussé por la compra de unas cuatro mil hectáreas distribuidas en siete plantaciones deberá ser refrendada por el Congreso Nacional en los próximos días, a menos que una de las partes quiera renegar del acuerdo firmado y rechace los términos de la negociación realizada.

Si el Acuerdo es aprobado por los diputados, el gobierno habrá resuelto buena parte del conflicto, pero todavía quedan otros grupos pendientes de una nueva negociación y a la espera de nuevas ofertas por la parte gubernamental. La agudización del conflicto ha caldeado los ánimos de las partes en disputa. Reconocidos dirigentes empresariales, junto al alcalde capitalino y presidente del Comité Central del partido Nacional (PN), Ricardo Álvarez, han aprovechado la ocasión para demandar la destitución de César Ham y su salida definitiva del gabinete ministerial del presidente Lobo. Al mismo tiempo, Álvarez ha insistido en que Lobo debe destituir a los demás ministros que no pertenecen al PN (partido gobernante) -Trabajo, Cultura, Recursos Naturales y Agricultura y Ganadería- con lo que quedaría virtualmente disuelto el llamado “*Gobierno de unidad y reconciliación nacional*” que el presidente Lobo ha conformado y exhibe como uno de sus logros más significativos.

La pretensión del alcalde capitalino es la de sustituir a los ministros cuya cabeza demanda por compañeros suyos de partido, a fin de reforzar el control del PN, vale decir de sus estructuras partidarias, sobre el aparato gubernamental. El presidente Lobo no se ha dejado intimidar. Ha respondido de inmediato rechazando de manera cortante la petición de su correligionario político y reafirmando su confianza en los ministros cuestionados, especialmente en el caso del Director del INA, César Ham. La declaración presidencial, como era de esperar, provocó el enojo y la frustración de los líderes empresariales que cuestionan lo que consideran complacencia de Lobo hacia los amigos izquierdistas de Ham, en particular hacia los grupos campesinos del Bajo Aguán.

Pero, junto al problema agrario, el gobierno ha debido hacer frente a las protestas, con frecuencia violentas, de los estudiantes de educación media y los universitarios. Los colegios fueron tomados por la fuerza, desalojados de igual forma por la policía y vueltos a tomar por los estudiantes. Los llamados al diálogo emitidos desde Casa Presidencial no provocaron, inicialmente, ninguna reacción positiva entre los protestantes, pero sí encontraron eco entre los dirigentes magisteriales que aceptaron el llamado oficial para incorporarse, con el patrocinio y apoyo del Congreso Nacional, en seis mesas de concertación en torno a igual número de temas que conformarán el contenido de lo que debe ser la nueva Ley General de Educación (la actual legislación para el sector educativo data desde los años sesenta del siglo pasado y es demasiado obsoleta). Al final, todo indica que los líderes estudiantiles, sobre todo los más radicales y reacios a la negociación, aceptaron la invitación del presidente y estarían dispuestos a integrarse en las mesas de debates y conciliación.

Los estudiantes demandan tres cosas muy concretas: la gratuidad de la educación, su carácter público y su naturaleza obligatoria. De tal manera

---

que se oponen con decisión a las posibles maniobras para impulsar iniciativas de privatización en el sistema educativo en general. Aunque el gobierno ha declarado su respaldo directo a la educación pública, gratuita y obligatoria, no se pueden ignorar los intentos de los empresarios de la educación (universidades y colegios privados) para aumentar su influencia en el sistema y controlar mayores cuotas de poder, especialmente en el área de la educación superior en donde, de acuerdo a la Constitución de la República, la Universidad Nacional Autónoma (UNAH) tiene la potestad de organizar, supervisar y conducir la educación a nivel superior.

Coincidiendo en el tiempo con los campesinos ocupantes y las protestas estudiantiles, los trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) también salieron a las calles para oponerse a la compra de más energía térmica a los grupos de siempre y rechazar cualquier intento de una mayor privatización en la administración de los servicios que presta la Empresa estatal. Los sindicalistas se oponían, además, a la concesión del alumbrado público (compra y colocación de lámparas en las vías públicas) a una empresa propiedad del padre de la vicepresidenta de la Cámara legislativa, la diputada nacionalista Lena Gutiérrez, seguidora incondicional del presidente del Congreso Nacional y aspirante presidencial Juan Orlando Hernández. El otorgamiento de concesiones semejantes es una de las fórmulas favoritas de los precandidatos presidenciales para obtener recursos financieros y pagar sus millonarias campañas proselitistas.

La protesta de los sindicalistas de la ENEE, que se prolongó durante tres días frente a las instalaciones del Palacio Legislativo, dio resultado. El Consejo de ministros se pronunció en contra de la compra de más energía térmica y los diputados no tuvieron más opción que rechazar esa transacción y dar paso atrás en la decisión de *“privatizar”* el alumbrado público. La victoria del sindicato ha debilitado más la cuestionada gestión del Gerente de la ENEE, el reconocido activista y dirigente del PN, Roberto Martínez Lozano. Los constantes apagones que se producen en todo el territorio nacional, pero especialmente en los principales centros urbanos, son interpretados por los empresarios como una maniobra de chantaje por parte de Martínez Lozano en represalia por la prohibición ministerial y parlamentaria para comprar más energía térmica que, además de ser excesivamente cara, produce generosos beneficios a los funcionarios que reciben la *“comisión”* por hacer esa transacción. La matriz energética de Honduras tiene un componente térmico que alcanza el 70%, razón por la cual el gobierno de Porfirio Lobo se ha empeñado en reducir ese porcentaje, privilegiando la energía hidroeléctrica y eólica. La ENEE, además de estar atrapada en una grave crisis financiera, reporta pérdidas equivalentes al 22,3% de toda la energía generada, una cantidad muy por encima del promedio internacionalmente aceptado.

Ante la intensidad que va cobrando gradualmente la lucha interna en el partido de gobierno por la candidatura presidencial de 2013, el presidente Lobo se vio obligado a hacer un llamado a sus compañeros de partido para que moderen sus ímpetus y restablezcan un clima de paz entre sus diferentes equipos de trabajo proselitista. Lobo está preocupado por lo que casi parece evidente: el fraccionamiento lento pero seguro de las filas nacionalistas, ahora que se agudiza la batalla para escoger al sucesor presidencial. No es casual que Víctor Hugo Barnica, uno de los tres Designados presidenciales (vicepresidentes) de Lobo, haya declarado sin tapujos que *“el mayor error cometido por el presidente ha sido estimular y permitir las candidaturas presidenciales prematuras”*. Hoy, por lo visto, la Administración Lobo empieza a pagar las consecuencias de aquella imprudencia.

Y, como si eso fuera poco, el presidente también tiene que habérselas con sus propios ministros a quienes en repetidas ocasiones, sobre todo en las últimas semanas, ha recriminado por su inercia y el burocratismo en su trabajo cotidiano, así como por la dispersión y falta de atención que suelen mostrar durante las reuniones del Consejo de ministros. El presidente da la impresión de estar descontento con el trabajo de muchos de sus principales colaboradores y, aunque les hace constantes llamados de atención, no parece lograr sus objetivos de insuflar el requerido dinamismo y la energía vital al equipo de gobierno. En privado, Lobo expresa su descontento y frustración porque pasa el tiempo y ya pronto llegará a la mitad de su periodo presidencial sin haber avanzado como quisiera en la búsqueda y consecución de las metas planteadas.

Pero las luchas internas no acontecen sólo en el partido de gobierno. También en el seno del partido Liberal (PL) se ha intensificado la competencia para convertirse en el candidato oficial de esa agrupación política en las elecciones primarias e internas que tendrán lugar en noviembre de 2012. A los precandidatos ya conocidos se sumará ahora -así lo ha declarado recientemente- el abogado Mauricio Villeda, quien fuera asesor y figura clave del entorno de Elvin Santos, el candidato liberal que perdió las elecciones en noviembre de 2009 frente a Porfirio Lobo. Villeda, hijo del ex presidente liberal Ramón Villeda Morales (1957-1963), derrocado por un golpe de Estado en 1963, no vaciló en convertirse en consejero de Roberto Micheletti después del más reciente golpe de Estado en junio de 2009. Hoy, persuadido de que Santos no está dispuesto a hacer un segundo intento por alcanzar la presidencia, Villeda se dispone a proponer su propia candidatura a un PL fracturado profundamente y escindido en facciones tan apasionadas como virulentas. El golpe de Estado dividió radicalmente al partido y dejó heridas muy grandes que tardarán mucho tiempo en cicatrizar. Las facciones que apoyaron al golpe de Estado han quedado enfrentadas ante los llamados *“liberales en resistencia”*, es decir los partidarios del derrocado presidente Manuel Zelaya. Entre ambos, en el espacio de en medio, hay

---

una abigarrada multitud de liberales que buscan el liderazgo requerido para poder hacer frente a sus tradicionales adversarios, los nacionalistas. Zelaya aparece a los ojos de muchos como el líder esperado, pero tiene impedimentos legales (la prohibición de la reelección) para volver a ser candidato. Los ojos se vuelven entonces hacia su esposa, la ex primera dama Xiomara Castro de Zelaya, quien aparece como la candidata favorita en las filas del llamado Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP).

Los dirigentes del FARP han declarado, luego de hacer una visita oficial a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que estarán listos para inscribir su nueva agrupación política en el mes de octubre próximo, concretamente el día 03, para coincidir con la fecha de nacimiento del más grande héroe de la historia hondureña, Francisco Morazán. Para cumplir con los requisitos establecidos -recolección y presentación de unas 43 mil firmas de respaldo como mínimo-, el FARP se dispone a dedicar dos jornadas de fin de semana para reunir las firmas, es más, según sus declaraciones, pretenden recolectar muchas más, unas cien mil han dicho, como prueba de su capacidad de convocatoria y movilización. Si lo logran, estarán enviando un mensaje desafiante sin duda a los partidos políticos tradicionales (PN y PL) y también a los mal llamados “*emergentes*”, es decir los partidos pequeños (partido de Innovación y Unidad, Democracia Cristiana y Unificación Democrática). Así que en la primera semana de octubre sabremos si el FARP ha sido capaz de cumplir su promesa y demostrar su fuerza organizativa para convertirse en una verdadera opción política en las futuras elecciones generales de noviembre de 2013.

Al interior del FARP también hay lucha y tensión entre distintas facciones y grupos. La disputa escenificada recientemente entre Juan Barahona, Sub coordinador general, y César Ham, líder de la Unificación Democrática (partido de izquierdas), es una prueba fehaciente de las disputas y celos que separan y distancian a los dirigentes de la vieja izquierda hondureña. Ham acusó a Barahona de ser un corrupto y vivir a costa del presupuesto nacional desde hace ya muchos años y sin trabajar. Barahona alega que tiene un “*permiso como líder sindical*” que le permite dedicarse exclusivamente a sus funciones sindicales sin tener que presentarse a su puesto de trabajo en el INA (Barahona ha sido por muchos años dirigente del Sindicato de Trabajadores del INA). Ham se niega a renovar el permiso y, por supuesto, a pagar el salario de Barahona. La pelea ha conmovido a las bases del FARP, en donde la mayoría ha tomado partido a favor del Sub coordinador general. En respuesta Ham y la UD han amenazado con romper sus escasos vínculos con las estructuras orgánicas del FARP. Aunque las causas inmediatas giran en torno al permiso y el salario, lo cierto es que las divergencias vienen desde más atrás, desde el momento en que la UD tuvo su primer fraccionamiento serio (años 2003-2005) y Ham se apoderó del control del partido. Luego, en las elecciones generales de 2009, Ham desatendió la orden

de la Resistencia de boicotear el proceso electoral y decidió participar en el mismo. Los Resistentes le consideraron desde entonces como un traidor, sin embargo Zelaya siempre le ha invitado a participar en el FARP y formar parte de sus hombres de confianza. La pelea Ham/Barahona es apenas un aviso de los choques y controversias que se van volviendo cada vez más comunes en las filas del zelayismo Resistente.

A mediados del mes, llegó a Tegucigalpa el Primer ministro de Canadá Stephen Harper para firmar con su homólogo local el Tratado de Libre Comercio que durante mucho tiempo ambos países estuvieron negociando. Los productos hondureños, en un porcentaje de 96%, podrán entrar sin mayores restricciones aduaneras al territorio canadiense, mientras que las mercancías de ese país llegarán al mercado hondureño libres de cortapisas en un porcentaje de 68%. Curiosamente, casi al mismo tiempo que ambos países firmaban el tratado, Canadá puso en circulación un aviso en el que, en forma por demás detallada y minuciosa, advertía a sus ciudadanos sobre los innumerables peligros que corren al visitar el territorio hondureño. Tegucigalpa encajó el golpe pero lo consideró como una maniobra muy censurable y de mal gusto.

Y, siempre en el área de las relaciones con el mundo, el presidente Lobo sorprendió a muchos al declarar en Lima, Perú, durante la toma de posesión del nuevo mandatario andino Ollanta Humala, que su gobierno había decidido votar en las Naciones Unidas a favor del reconocimiento del Estado palestino. Al emitir la declaración, Lobo estaba reunido con el canciller de Palestina y rodeado de algunos destacados empresarios hondureños de origen árabe. La noticia provocó la furia y una reacción poco diplomática del embajador concurrente de Israel con sede en Guatemala, quien consideró la decisión hondureña como *“una puñalada por la espalda”* al pueblo israelita. Las iglesias evangélicas locales, persuadidas de que el pueblo de Israel es el elegido de Dios, iniciaron una campaña en contra de la decisión presidencial y condenaron la actitud de Lobo, considerándola poco leal y muy peligrosa para los intereses de Honduras. No hay que olvidar que las iglesias evangélicas, en su mayoría, al igual que el gobierno de Tel Aviv, fueron importantes soportes del golpe de Estado de junio de 2009. Lobo se sintió más comprometido con la causa palestina (en Honduras reside la colonia árabe más importante de la región centroamericana) que con el agradecimiento a los israelitas por el apoyo al gobierno de Roberto Micheletti.

Ya para finalizar el mes, el ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, anunció una pronta depuración profunda en las filas de la policía, para lo cual, dijo, enviará y solicitará al Congreso Nacional la rápida aprobación de una ley que facilitará la limpieza y el despido de los oficiales y agentes corruptos, vinculados con el crimen organizado. La declaración del ministro, quien no acostumbra hablar con tanta claridad y firmeza, se produce pocos días des-

pués de su retorno de Washington, en donde firmó acuerdos de cooperación en materia de seguridad con las autoridades norteamericanas.

# SEPTIEMBRE

## 2011

---

### La situación política

Septiembre ha sido un mes muy intenso en términos de conflictos políticos y sociales, marchas callejeras, protestas de maestros y sindicalistas, desfiles paralelos por el 15 de septiembre (día de la independencia), asesinato de un importante activista del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), primeros pasos y dificultades para inscribir el nuevo partido político del ex presidente Manuel Zelaya, destituciones sorpresivas en el gabinete ministerial, división en las filas del partido de gobierno, compra millonaria y poco transparente de más “energía sucia”, y la llegada de una Misión -la tercera en lo que va de la Administración Lobo- del Fondo Monetario Internacional (FMI) para revisar las cuentas del gobierno.

El presidente, en medio de tanto ajeteo político, ha tenido tiempo suficiente para hacer algunos viajes al extranjero: Kosovo, en los lejanos Balcanes (viaje organizado por un empresario salvadoreño -Ricardo Ritz- interesado en hacer buenos negocios en Honduras y cabildero a favor del reconocimiento internacional de aquél pequeño país), España, Estados Unidos (Miami, Washington, etc.)

Aunque se venía hablando desde hace algunos meses sobre la posibilidad de que el presidente Lobo hiciera varios cambios en su gabinete ministerial, lo cierto es que algunos de esos cambios produjeron sorpresa y desconcierto. Concretamente, la sustitución del ministro de seguridad, Óscar Álvarez, y sus colaboradores más cercanos. Álvarez era sin duda uno de los ministros más fuertes del gobierno y había sido elegido como “*el diputado más votado y popular*” en las elecciones de noviembre de 2009, lo que le abría las puertas para una posible candidatura presidencial por parte del partido Nacional (PN).

A su regreso de Washington, ciudad a la que había viajado para entrevistarse con altos funcionarios del área de seguridad del gobierno de Estados Unidos, el ministro declaró que se disponía a hacer una depuración entre altos oficiales de la policía, sospechosos de estar vinculados con el crimen

organizado. Es más, al mismo tiempo envió un proyecto de decreto al Congreso Nacional para que, previo acuerdo con Juan Orlando Hernández, presidente del Poder Legislativo, le concedieran facultades suficientes para llevar a cabo la anunciada limpieza en las filas policiales.

Advertidos de su posible despido, los jefes policiales movieron sus influencias en los círculos políticos y lograron persuadir al presidente Lobo para que detuviera las anunciadas acciones de Álvarez. Sospechosamente, al tiempo que ocurrían estos hechos, asesinaron a uno de los activistas más emblemáticos del FNRP, EmoSadloo, hindú residente desde hacía muchos años en Honduras, desatando una crisis adicional que tomó por sorpresa al gobernante. Las sospechas cayeron de inmediato sobre la misma policía, especialmente cuando los partidarios de la Resistencia capturaron por su propia cuenta a un sospechoso del crimen que resultó ser agente de los servicios de información policiales.

El asesinato de Emo provocó la movilización inmediata y las protestas del FNRP, incluyendo al ex presidente Zelaya que denunció lo que llamó *“oligarquía sanguinaria”*, rompiendo su habitual tono conciliador frente al gobierno lobista. Lobo se vio obligado a convocar una cadena de radio y televisión para anunciar que muy pronto darían captura al asesino y lo presentarían ante los tribunales. Nada de eso ha sucedido.

En medio de esta situación tan compleja, el presidente anunció la sustitución del controversial ministro quien, al día siguiente, abandonó el país. Posteriormente se ha sabido que el anuncio depurador de Álvarez provocó algo así como un conato de rebelión, a tal punto que el día sábado 10 el ministro no pudo ni siquiera entrar a sus oficinas en el cuartel de Casamata, tomado por los jefes policiales en rebeldía. Lobo debió intervenir para que las cosas no pasaran a más y se escaparan de sus manos.

Llama la atención el hecho de que dos días antes de la destitución de su jefe, el Ministerio de Seguridad, con la presencia de las más altas autoridades del país, había presentado en público lo que pomposamente dieron en llamar *“Política integral de seguridad y convivencia ciudadana”*, un documento preparado por consultores colombianos contratados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Por el momento, la impresión que queda después del remezón en las filas ministeriales es que los grupos más corruptos de la policía han ganado una primera batalla, impidiendo la depuración anunciada y protegiendo, al menos por el momento, a los que el destituido ministro llegó a llamar *“controladores aéreos”*, por su colaboración en la coordinación desde tierra para el aterrizaje seguro de las avionetas del narcotráfico. Al abandonar el país,

Álvarez dijo una frase que lo resume todo: *“En Honduras es más fácil destituir a un ministro que sacar a un policía corrupto”*.

Junto con Álvarez salieron también del gabinete el Canciller Mario Canahua-ti (una destitución largamente anunciada y esperada), el director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Tito Asfura, y el jefe de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Osvaldo Guillén. Éste último fue destituido, entre otras cosas, por presiones de importantes banqueros locales a los cuales el funcionario había impuesto millonarias multas por violación a la legislación bancaria y fiscal del país (presentó reparos por 539 millones de lempiras, unos 28 millones de dólares, a tres conocidos bancos: HSBC, Atlántida y Banco del País). Arturo Corrales, el ministro *“mil usos”* del gabinete pasó a ocupar el cargo de Canciller, una función que ya venía desempeñando de hecho en algunos de los asuntos más importantes de la política exterior del régimen. En lugar de Corrales, al frente de la Secretaría de Planificación y Cooperación Externa, fue nombrado quien era su viceministro, Julio Raudales, un tecnócrata obediente y diligente que se ocupará ahora del cumplimiento del Plan de Nación. En la Secretaría de Seguridad, el sustituto de Álvarez será Pompeyo Bonilla, un ex capitán de las Fuerzas Armadas, ex diputado y ex coordinador de la campaña electoral que Lobo perdió frente a Manuel Zelaya en el año 2005. Bonilla ha sido cuestionado por organizaciones de sociedad civil que se ocupan de los temas de seguridad y su nombre ha sido mencionado en una confusa trama que incluye la supuesta sustracción ilegal de una piedra lunar de Casa Presidencial (fue edecán en tiempos de los gobiernos militares), regalo del gobierno estadounidense al Estado de Honduras (la valiosa piedra fue recuperada después en Miami, Florida, por agentes del FBI que fingieron ser compradores encubiertos de la misma, y devuelta oficialmente al gobierno hondureño).

El despido de los funcionarios mencionados, todos ellos pertenecientes al partido de gobierno, provocó el enojo de las autoridades partidarias, en especial del alcalde capitalino, Ricardo Álvarez, quien se desempeña además como presidente del Comité Central del PN. Le reclamaron a Lobo por destituir a los funcionarios nacionalistas y dejar en sus puestos a los que pertenecen a otros partidos. En esencia, demandaron la desarticulación del llamado *“gobierno de unidad y reconciliación”* para reconstituirlo sólo con militantes del partido que ganó las elecciones, es decir del PN.

Lobo no cedió ni un ápice. *“No me van a doblegar”* les dijo a sus críticos, a la vez que le confesaba en privado a un buen amigo suyo, ex colega en la Escuela de Cuadros de Moscú (años setenta del siglo pasado), que se sentía solo, criticado por sus propios compañeros de partido y apoyado únicamente por las Fuerzas Armadas, razón suficiente, añadió, para no confrontarlas ni distanciarse de ellas. Es evidente que Lobo evita los roces con los militares y está dispuesto a satisfacer todas sus peticiones y caprichos. Eso

es lo que se deduce de su conducta cotidiana frente a los hombres de uniforme.

Casi coincidiendo con estos hechos, la bancada parlamentaria del PN se dividió y, por fin, sacó a flote las discrepancias y controversias que tiene en su seno. Era de esperar. Las ambiciones presidenciales de los diferentes candidatos, casi todos ellos unidos en contra del presidente del Parlamento, Juan Orlando Hernández, protegido y favorito, al menos hasta ahora, del presidente Lobo, son demasiado fuertes y evidentes. Dos aspirantes igualmente ambiciosos y convencidos de sus propias posibilidades de triunfo, el alcalde Álvarez y el ministro de obras públicas y transporte, Miguel Pastor, decidieron unir sus fuerzas y conformar lo que la prensa ha dado en llamar “*la bancadita azul*” (su nombre real es “*Alianza parlamentaria por la dignidad*”), un grupo de 23 diputados, entre propietarios y suplentes, que están descontentos con los métodos de Hernández para dirigir el Congreso Nacional y, sobre todo, con las abundantes cantidades de dinero que, sin control alguno, maneja e invierte en su propia campaña proselitista.

Como precandidatos que sueñan con heredar el sillón presidencial de manos de Lobo, tanto Álvarez como Pastor coinciden en frenar la carrera de Hernández hacia la nominación oficial y están dispuestos a ponerle todos los obstáculos posibles. Una actitud semejante les hace correr el riesgo de enfrentar a Lobo, explícito protector y padrino del presidente del Poder Legislativo.

O sea que la publicitada unidad del partido gobernante, que le permitía contar con 71 de los 128 diputados y, por lo mismo, disponer de una holgada mayoría parlamentaria, sólo ha durado 20 meses. Este hecho debilita más al gobierno lobista y abre los espacios para nuevas alianzas y coaliciones al interior del Congreso Nacional.

La situación se volverá más compleja y difícil para el presidente, sobre todo ahora cuando ha anunciado que se dispone a poner en práctica un “*Plan anticrisis*” que, entre otras medidas, incluye la fusión de varias instituciones y organismos estatales. Si la tendencia de la confrontación se mantiene y las fisuras se vuelven grietas, separando más a los líderes nacionalistas, Lobo deberá buscar recomponer sus alianzas y generar nuevos espacios de colaboración y acuerdo con sus críticos.

Sin embargo, su declarada intención de fusionar las Secretarías de Defensa y Seguridad bajo un mando más unificado, ha sido suficiente para despertar las sospechas y el rechazo de amplios sectores políticos y sociales. La mayoría coincide en ver en esa intención un retroceso en el avance institucional del país, que ha hecho ingentes esfuerzos por desmilitarizar las fuerzas policiales y establecer un límite claro y definido entre las funciones de la

seguridad interna y la defensa exterior. La fusión sugerida por Lobo generará posiblemente la oposición de los liberales en el Parlamento y la condena de los grupos ciudadanos de presión, en especial los organismos de derechos humanos que ven en la desmilitarización de la policía una merecida conquista democrática lograda en los últimos años.

La presencia de Pompeyo Bonilla en el Ministerio de Seguridad contribuye a despertar más sospechas entre los grupos críticos de las llamadas “*políticas*” de militarización del sistema de seguridad pública. Bonilla, al igual que el destituido Álvarez, proviene de las filas del Ejército y no oculta su formación castrense. Ambos son percibidos como un obstáculo para la desmilitarización real de la policía y, por lo tanto, para la mejor formación de policías profesionales.

Pero, además, el nombramiento de otro ex militar al frente de la policía, envía un mensaje difuso y negativo, revelando las intenciones de Lobo de fortalecer a los militares y mantener satisfechas y complacientes a las Fuerzas Armadas. Da la impresión de que el presidente está buscando aliados en el lugar equivocado.

Por si esto fuera poco, la difícil situación que prevalece en materia de derechos humanos, especialmente en la conflictiva zona del Bajo Aguán, sólo sirve para crispas más las relaciones entre la oposición zelayista (la mayoría de la cual se agrupa en el seno del FNRP y entre los llamados “*liberales en resistencia*”) y el gobierno, en particular los policías y los militares. Continúan los choques armados entre campesinos y guardias de seguridad privada al servicio de los supuestos propietarios de las fincas en disputa. Cada día aparecen nuevas víctimas de ambos bandos, intensificando un conflicto que, ya de por sí, se ve agravado por la presencia dominante en la zona de las bandas del crimen organizado y el narcotráfico.

A esto se debe agregar el incremento de la delincuencia común con su secuela cotidiana de muertes, robos, asaltos, violaciones y secuestros. Un estudio realizado por el PNUD demuestra que ¡los homicidios aumentaron en 190% en los últimos cuatro años! La tasa de homicidios en el país por cada cien mil habitantes ya llegó a los 77,5 como promedio nacional (en el puerto de La Ceiba la cifra se dispara y alcanza los 158, lo que convierte a esta ciudad de la zona norte en más peligrosa y letal que ciudades de 85 países que sufren situación bélica o de guerra).

El mismo estudio del PNUD revela que el 92,8% de la población urbana considera que sus comunidades y ciudades no son seguras, el 70% cree que la inseguridad ha aumentado, mientras que el 68% evalúa “*mal*” o “*muy mal*” a la policía y el 59% no cree ni en el Poder Judicial ni en el Ministerio Público. Hay una verdadera crisis de confianza en las instituciones, algo que

---

muestran con claridad las más recientes encuestas de opinión política realizadas en el país.

Ya para concluir el mes, el ambiente político volvió a calentarse, esta vez por el tema controversial de la inscripción del nuevo partido político de la denominada Resistencia. Resulta que otro grupo de supuestos “*resistentes*”, fundado por Andrés Pavón, un conocido activista de los derechos humanos, muy cuestionado por sus constantes vaivenes políticos y vinculaciones poco transparentes, ya había manifestado su intención de inscribir su agrupación con un nombre muy parecido al de la Resistencia Popular. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó en dos ocasiones los nombres propuestos por Zelaya y sus partidarios (Frente Amplio de Resistencia Popular, primero, y partido de la Resistencia Popular, después). Al final, en un tercer intento, los magistrados decidieron aceptar inicialmente el nuevo nombre propuesto: LIBRE (Libertad y Refundación), pero todavía queda la duda si podrían surgir nuevos obstáculos en las próximas semanas para aceptar definitivamente el nombre propuesto y proceder de una vez por todas a inscribir legalmente el nuevo partido político.

Por cierto que, durante la disputa por encontrar un nombre adecuado para “*el brazo político*” del FNRP, tal como se autocalifica la nueva agrupación partidaria, Zelaya debió saborear la hiel de la derrota en una multitudinaria asamblea de la Resistencia que rechazó, entre silbatina y abucheos, el nombre propuesto por el ex presidente (partido del Pueblo Organizado-POR). Este “*incidente*” muestra las limitaciones que tiene el liderazgo de Zelaya en una estructura política en la que él no controla las redes organizativas. La influencia de los grupos más duros y sectarios del liderazgo gremial y de la vieja izquierda comunista, se ha convertido en un ancla que carga con peso muerto al movimiento político y social que surgió y creció después del golpe de Estado de 2009. El liderazgo del ex presidente Zelaya, aunque fuerte y evidente, todavía no se muestra suficiente como para controlar a plenitud el movimiento y dotarlo de un programa abierto y democrático, a tono con la naturaleza de las diversas fuerzas que lo integran y del pluralismo político que deben representar.

Los días por venir pondrán a prueba la capacidad de Zelaya para neutralizar los radicalismos delirantes que existen en el FNRP y orientar su rumbo por senderos de tolerancia y verdadera amplitud políticas. Ya veremos.

# OCTUBRE

## 2011

---

### La situación política

**E**ste mes de octubre será registrado en el calendario político hondureño como el mes en que hizo crisis el sistema institucional de la seguridad en el país, especialmente en lo que concierne a la Policía nacional. En efecto, aunque el colapso se veía venir y, de alguna manera, ya lo había anunciado Óscar Álvarez, el ex ministro de Seguridad que fuera destituido por el presidente Porfirio Lobo a principios del mes anterior, lo cierto es que la crisis alcanzó proporciones inesperadas y tomó por sorpresa a más de alguno.

El asesinato en la madrugada del sábado 22 de dos jóvenes universitarios, uno de ellos hijo menor de la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma, Julieta Castellanos, amiga personal del presidente Lobo y ex integrante de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), conmocionó, una vez más, a la sociedad entera. Pero esta vez, las reacciones de los diferentes grupos sociales y de la Universidad misma no se hicieron esperar. El impacto fue tan grande que el gobierno se vio obligado a reaccionar. La crisis adoptó mayores proporciones cuando el día 24, durante el entierro de las víctimas, corrió el rumor entre los asistentes de que los autores del doble crimen eran policías en activo. La Universidad, haciendo uso de sus propios recursos técnicos y profesionales, se involucró directamente en la investigación del caso y logró poner al desnudo la sospechosa negligencia policial y la cuestionada lentitud de la Fiscalía General para identificar a los autores del repudiable asesinato.

La Policía, atrapada en sus propias mentiras y descubierta en sus afanes por ocultar las huellas, quedó al descubierto y trató, infructuosamente, de culpar a los fiscales por las fallas tan evidentes en el proceso de la investigación. La cúpula policial no tuvo más remedio que aceptar el involucramiento de cuatro de sus agentes en la comisión del delito. La crisis estalló por todos lados. El presidente ordenó la inmediata sustitución de los altos mandos y una investigación a fondo de los hechos.

---

Los nuevos jefes militares, cuestionados también por amplios sectores de la opinión pública (ha habido una verdadera lluvia de denuncias en las radio-emisoras locales por parte de personas que dicen conocer los malos pasos y las inexplicables fortunas de los jefes policiales, tanto de los que salen como de los que entran), no han tenido más opciones que intervenir diversas instalaciones de la institución (postas y estaciones policiales), sacando a flote toda la podredumbre que corroe y desnaturaliza a la Policía nacional: vínculos con las pandillas o “*maras*”, ligazón estrecha con el crimen organizado, participación en secuestros, robos, extorsiones y asesinatos a cambio de pagos y prebendas. En el transcurso de la limpieza se ha podido conocer sobre el robo de centenares de fusiles y armas cortas de la Policía que, desde hace ya varios años, han ido a parar a las manos de los delincuentes nacionales y extranjeros. No son pocos los policías que, de hecho, se han convertido en traficantes de armas para aprovisionar a las pandillas y bandas del crimen organizado.

Por si fuera poco, el día lunes 31 circuló la noticia sobre la “*fuga*” de los policías implicados en el asesinato. Sus jefes inmediatos les habían dado un increíble permiso para que salieran libres, “*francos*” le llaman, el día domingo. Por supuesto, no regresaron más a los cuarteles de la Policía. Este hecho fue la gota que rebalsó el vaso.

La población, aunque ya curada de espanto, está estupefacta. No sabía cuán profunda era la desintegración ética de los cuerpos policiales y el nivel alcanzado por la corrupción y el descontrol en las filas de las fuerzas de seguridad del Estado. Todos los días los medios de comunicación rivalizan entre sí tratando de informar sobre nuevos descubrimientos de crímenes y corrupción al interior de la Policía, mostrando hasta qué punto había llegado la descomposición institucional y la penetración del crimen organizado en el organismo encargado de combatirlo.

Ante la creciente presión social y los constantes reclamos de todos los grupos, sin diferenciación política, el gobierno no ha tenido más opción que poner en práctica algunas medidas para calmar la cólera nacional y encontrar una salida a la gravísima crisis. De común acuerdo con el Congreso Nacional, el presidente Lobo decidió eliminar la flamante Oficina de Asuntos Internos de la Policía (un órgano que se mostró incapaz de funcionar normalmente y con la eficacia debida para detectar y sancionar la conducta criminal en las filas policiales) y sustituirla por un nuevo organismo, independiente o desconcentrado del Ministerio de Seguridad y avalado por el consenso básico de las organizaciones de la sociedad civil. Esta iniciativa ha sido bien vista por la opinión pública y, al menos por ahora, se le ha concedido el beneficio de la duda, a la espera de ver su funcionamiento y disposición para introducir orden y control en una institución al borde de la bancarrota. No satisfecho con esto, el presidente del Congreso Nacional y

aspirante presidencial, Juan Orlando Hernández, ha anunciado la creación de una nueva instancia de control, una llamada Superintendencia especial que vigilará el comportamiento no sólo de los policías sino también el de los otros “operadores de justicia”: los fiscales y los jueces.

Al mismo tiempo, el presidente ordenó poner en marcha la llamada “Operación Relámpago”, una especie de ofensiva súbita contra reductos importantes, sobre todo en término de bienes y distintas propiedades, de las redes del narcotráfico y el lavado de activos. Numerosas casas de habitación, haciendas y empresas de reconocidos narcotraficantes han sido ocupadas por las fuerzas policiales, en aplicación de la nueva ley que facilita la “extinción del dominio” en el caso de los bienes obtenidos como fruto del dinero ilegal. Barrios y colonias otrora controlados impunemente por las “maras” y pandillas han sido “recuperados” momentáneamente por las fuerzas combinadas de los militares y, a última hora, algunos policías. La lucha contra el narcotráfico casi ha quedado en manos del Ministerio Público y de la DEA norteamericana. Los policías, en virtud de la desconfianza que los rodea, han quedado prácticamente marginados en estas últimas operaciones.

Pero, justo es decir que estas medidas han sido recibidas con cierta cautela y, a veces, inocultable desconfianza. La Universidad Nacional, que ha cobrado un rol destacado y fuerte liderazgo en la lucha por la depuración policial, exige la “intervención inmediata, con apoyo de la comunidad internacional” en la Policía nacional. Sólo así, sostiene la Rectora Castellanos, la sociedad hondureña podrá recuperar la confianza en las instituciones del sistema de seguridad en Honduras, especialmente en la Policía. El presidente Lobo se muestra renuente a adoptar una medida de esta naturaleza y sigue confiado en que el nuevo ministro de Seguridad, el ex capitán del Ejército Pompeyo Bonilla, junto a la nueva cúpula nombrada tras el estallido de la crisis, serán capaces de manejarla y lograr resultados positivos en corto tiempo. El país oscila entre la duda, la desconfianza y una cierta dosis de esperanza.

El estallido de la crisis policial y el virtual colapso del sistema de seguridad en el país, desplazaron a un lugar secundario los temas de la política cotidiana en las primeras planas de la prensa nacional. Sin embargo, la política, como suele suceder, volvió por sus fueros y el día 30, tal como ya se había anunciado, el ex presidente Manuel Zelaya, acompañado por varios miles de sus seguidores, se presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para hacer entrega de más de ochenta mil firmas que respaldan la inscripción del nuevo partido político Libertad y Refundación (LIBRE), que se conforma como el “brazo político” del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

Aunque la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP) reformada establece que sólo se necesitan, en este caso, 43 mil firmas (el 2% de la votación total que recibieron las candidaturas presidenciales en las últimas elecciones, las de noviembre/2009), Zelaya presentó casi el doble, de las cuales, una vez concluida la revisión del TSE, fueron descartadas sólo siete mil, por lo que la inscripción del nuevo partido es ya casi una realidad. En el seno de la nueva agrupación política se aglutinan hasta ahora al menos cinco facciones o “*tendencias*”:

- a) La Fuerza de Refundación Popular (FRP), en la que confluyen los grupos de izquierda, dirigentes sindicales y otras expresiones variopintas del radicalismo político;
- b) 2) El Pueblo Organizado en Resistencia (POR), creado por seguidores cercanos de Zelaya que no comulgan con el radicalismo de izquierda, pero que tampoco se sienten “*liberales*”;
- c) El Movimiento de Resistencia Progresista (MRP), dirigido por Rasel Tomé, uno de los asesores legales y cercano colaborador de Zelaya, que se sigue considerando un “*liberal*”;
- d) El Movimiento de Resistencia Liberal 28 de junio (MLR 28J), dirigido por el hermano de Zelaya, Carlos, e integrado por liberales fieles al ex presidente, y
- e) El Movimiento de Resistencia 5 de julio (MR5J), un grupo diminuto conformado por los llamados “*progresistas*”, liberales muchos de ellos, disidentes del grupo anterior (MLR 28 J).

Como puede verse, el nuevo partido nace como una amalgama de diversas expresiones políticas que, con frecuencia, lo único que los separa es la simpatía o antipatía personal entre sus dirigentes o, en el peor de los casos, sus propias ambiciones y vanidad política.

También logró pasar la primera prueba (la revisión de las firmas) el llamado partido Anticorrupción, que dirige el presentador de televisión y comentarista deportivo Salvador Nasralla. En este caso, las firmas presentadas fueron 60 mil y el TSE había rechazado ya unas ocho mil, por lo que era seguro que sería cumplido el requisito más difícil, el del número de firmas necesarias para el respaldo legal.

Otros grupos han manifestado su intención de inscribirse como partidos políticos, pero, hasta el momento, ninguno ha dado muestras claras de poder cumplir con todos los requisitos exigidos. Uno de esos grupos, el auto-denominado Alianza Patriótica Hondureña (APH), integrado por varios ex

oficiales y reservistas de las Fuerzas Armadas, ha declarado ya su intención de llevar como candidato presidencial al General retirado Romeo Vásquez, el mismo ex jefe del Estado Mayor Conjunto que encabezó el 28 de junio de 2009 la asonada militar para derrocar al presidente constitucional de entonces, Manuel Zelaya.

Sea como sea, lo cierto es que el nuevo torneo electoral programado para noviembre del año 2013 contará, por primera vez, con un número inesperado de partidos contendientes -al menos ocho o nueve-, lo que, en pocas palabras, significa la muerte paulatina pero segura del viejo sistema político basado en el bipartidismo tradicional (partido Liberal/partido Nacional), que durante más de cien años ha dominado el escenario político/electoral de Honduras. El viejo maridaje libero/conservador, la prolongada cohabitación entre rojos y azules, están llegando a su final.

Mientras surgen y se disponen a competir por el poder los nuevos partidos, en las filas de los viejos la lucha interna se acentúa y adquiere nuevos niveles de confrontación. En el partido de gobierno, el Nacional (PN), están a la orden del día las alianzas y fracturas de todo tipo. Los integrantes de la "*Bancadita azul*", es decir los diputados oficialistas que adversan la aspiración presidencial del jefe del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, se mantienen unidos, aunque han perdido un par de integrantes. Son y seguirán siendo en los próximos meses un escollo incómodo para la labor proselitista de Hernández, quien no vacila en utilizar libremente los recursos económicos del Parlamento para financiar una empalagosa y masiva campaña publicitaria a favor de su imagen y liderazgo. Sin embargo, la unidad misma de la "*Bancadita*" es precaria y podría romperse en cualquier momento, sobre todo cuando se acerque la fecha de definir las candidaturas a la nominación presidencial en el partido gobernante. Sus dos principales líderes e inspiradores, el alcalde capitalino y presidente del partido, Ricardo Álvarez, y el ministro de Obras Públicas y Transporte, Miguel Pastor, cogerán cada uno su propio camino y formarán tiendas aparte para competir por la ansiada nominación. Su contendiente más importante será, sin duda, Juan Orlando Hernández, quien, además de contar con los recursos del Poder Legislativo, dispone también de un discreto pero evidente apoyo del presidente de la República. Hay un cuarto aspirante, el ex ministro de Seguridad Óscar Álvarez, quien se ufana de haber sido el diputado que recibió el mayor número de votos en las elecciones pasadas y, ahora que ha regresado al seno parlamentario, confía en afianzar su liderazgo y disputar con opciones de triunfo la designación partidaria como candidato presidencial del PN. A juzgar por los efectos múltiples y colaterales de la crisis policial, es casi seguro que la figura de Álvarez saldrá muy lesionada y debilitada en los próximos meses.

Así están las cosas al interior del PN. En el otro partido tradicional, el Liberal (PL), las cosas no andan mejor. En las últimas semanas, al menos dos aspirantes más se han sumado a los otros tres que ya estaban en la competencia (Yani Rosenthal, Edmundo Orellana y Esteban Handal). Se trata de los abogados Mauricio Villeda y Lucio Izaguirre. El primero, hijo de un ex presidente y líder histórico del PL (Ramón Villeda Morales, 1957-1963), fue uno de los defensores legales y negociador directo del gobernante de facto Roberto Micheletti en los meses posteriores al golpe de Estado; se desempeñó además como mano derecha del entonces candidato presidencial de los liberales, Elvin Santos, quien fuera derrotado por Porfirio Lobo en las elecciones generales de 2009. Su precandidatura aparece como la opción política de los *"micheletistas"*, los llamados *"blanquitos"* o *"perfumados"* que fueron el soporte político del régimen de facto que surgió después del golpe del 28J. El FNRP, es decir los miembros de la Resistencia, consideran a Villeda como el político más vinculado a los intereses del golpe de Estado y a las filas del Opus Dei. El otro nuevo aspirante, Lucio Izaguirre, fue el Director del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJU-PEM) durante la Administración de Manuel Zelaya, de quien había sido uno de sus cercanos colaboradores durante la campaña electoral. Hoy se ha convertido en uno de sus más beligerantes detractores, acusándole de tener un pacto secreto con el presidente Lobo para impedir que los liberales ganen las futuras elecciones. Sus posibilidades para ganar las elecciones internas de noviembre del próximo año son más que remotas.

Como si no bastara con la crisis en el sistema de seguridad, la debacle de la institución policial y el incremento exponencial de los índices de criminalidad e inseguridad en todo el país, el territorio nacional se vio azotado por intensas lluvias que, como en años anteriores en esta época, inundaron los distintos departamentos del país, aislando a estratégicas zonas geográficas, destruyendo vías importantes, puentes, carreteras y caminos así como miles de hectáreas de cultivos de exportación y granos básicos clave para la seguridad alimentaria de la población. Numerosas viviendas sufrieron daños irreparables y miles de ciudadanos se vieron obligados a vivir en condición de damnificados en campamentos apresuradamente improvisados. Una vez más, como sucede casi todos los años, el país volvió a ser víctima de su propia vulnerabilidad e incapacidad para disponer de una eficiente política de prevención de desastres (ya anunciados) y de alerta temprana. Los daños ocasionados a la producción agrícola y a la economía en general han sido cuantiosos y lamentables.

# NOVIEMBRE

## 2011

---

### La situación política

Los principales acontecimientos políticos durante este mes de noviembre giraron, básicamente, en torno a la crisis del sistema de seguridad, más concretamente crisis de la institución policial, y permitieron comprobar, una vez más, la gravedad de la situación y el profundo grado de descomposición y podredumbre interior que corroe e invalida a las fuerzas policiales hondureñas.

Cada día que pasa se descubre un nuevo escándalo, aparece un nuevo núcleo mafioso en la estructura policial o surgen nuevas y escalofriantes denuncias sobre crímenes cometidos por policías activos. El gobierno reacciona muy lentamente, según la opinión pública, delegando funciones de autodepuración en oficiales y funcionarios policiales que no gozan de la credibilidad suficiente para generar confianza entre la población. El nuevo ministro recién nombrado, el ex capitán del ejército Pompeyo Bonilla, todavía no ha sido capaz de proyectar a los ojos de la gente el liderazgo suficiente para dirigir la policía, someterla a una profunda reestructuración y sacar de sus filas a todos los delincuentes que ahí anidan.

En estrecha colaboración con el Congreso Nacional, el presidente Lobo decidió crear la Comisión encargada de vigilar el desempeño de la policía, investigar la conducta de sus integrantes y llevar a cabo el necesario control de las cuentas y la debida depuración de sus filas. Al frente de esta Comisión, que viene a sustituir a la antigua Unidad de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, decidieron nombrar a dos abogados que no inspiran la suficiente confianza ni despiertan la credibilidad necesaria para realizar estas difíciles tareas. Se trata de Oscar Arita, un desconocido funcionario intermedio del Poder Judicial que ha hecho carrera como juez y magistrado en cortes de apelaciones. Cuenta con el respaldo del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés. El otro, el que funcionará como Director adjunto, es Eduardo Villanueva, un antiguo fiscal del Ministerio Público que, a raíz del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, aceptó fungir como Director del Instituto Nacional Agrario (INA), en el gabinete de

---

facto del “*presidente*” golpista Roberto Micheletti. En su condición de tal, Villanueva instruyó varios procesos criminales contra decenas de campesinos que adversaban el golpe de Estado y habían ocupado por la fuerza las oficinas del INA en Tegucigalpa para resguardar, alegaban ellos, la documentación legal que les favorecía en sus reclamos agrarios.

O sea que, en pocas palabras, los dos nuevos funcionarios no inspiran confianza y más bien generan dudas cuando no rechazo en el seno de la oposición política, vale decir en las filas del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Les consideran débiles y vacilantes o, en el caso de Villanueva, un adversario de las organizaciones campesinas a las que en tiempos pasados había servido como consejero legal.

El presidente Lobo y su principal aliado político actual, Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional, intentan paliar un tanto la grave crisis policial con la creación de esta Comisión. Aunque el decreto de creación no lo especifica, Lobo ha anunciado que la misma tendrá funciones de “*comisión interventora*”, en un intento por calmar las exigencias que vienen desde la población en el sentido de nombrar una comisión interventora de la policía con plenos poderes para que, de una vez por todas, lleve a cabo la reestructuración y depuración de la misma, imponiendo el merecido castigo a todos los policías delincuentes.

En nombre de la población reclamante habla, en primer lugar, la Universidad Nacional, cuya Rectora, la socióloga Julieta Castellanos, madre de uno de los dos jóvenes universitarios asesinados por la policía el pasado 22 de octubre, se ha convertido en una especie de símbolo mediático, algo así como la imagen pública que representa a todas las víctimas de la violencia y corrupción policial, y que, al mismo tiempo, identifica el clamor nacional a favor de la depuración y el castigo de los policías delincuentes. La Rectora simboliza hoy la indignación colectiva y el ansia nacional por transformar la estructura policial, eliminando los grupos mafiosos que la integran y rompiendo para siempre sus vínculos con el crimen organizado y la delincuencia común.

Ya para finalizar el mes, la Universidad nacional hizo entrega al presidente Lobo y a Juan Orlando Hernández de una propuesta concreta para llevar a cabo la intervención de la policía, promover su reestructuración profunda y limpiar sus filas de los delincuentes convertidos en policías. La propuesta, entre otras cosas, incluye la creación de una Comisión interventora que estaría integrada por siete personas, cuatro nacionales y tres extranjeros, algo que el gobierno se niega a aceptar. Lobo, aún con mucha resistencia, estaría dispuesto a conceder la creación de una comisión interventora pero sólo integrada por nacionales y con funciones ejecutivas estrictamente limitadas. No quiere crear una “*instancia paralela*” que anule el desempeño del

recién nombrado ministro de Seguridad, un viejo amigo suyo, ex director de su campaña electoral.

Si las cosas son así, la propuesta universitaria deberá sortear difíciles y numerosos escollos para poder cobrar cuerpo y volverse realidad. El presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, quien tiene y no oculta fuertes aspiraciones presidenciales, se muestra más dispuesto a coincidir con el plan sugerido por las autoridades universitarias, impulsado en buena medida por el apoyo popular que ha recibido la iniciativa de la Rectora Castellanos. Hernández intuye que ese plan podría granjearle nuevas simpatías entre la población, las que, eventualmente, podrían convertirse en votos a su favor. Hace sus cálculos y oscila entre el apoyo abierto y directo a Lobo o la simpatía forzada a favor de la tesis universitaria.

En medio de estas dudas y vacilaciones, llegó al país la Subsecretaria adjunta del Departamento de Estado norteamericano para asuntos globales y democracia, María Otero, quien se fue directamente desde el aeropuerto a la Universidad Nacional para reunirse con Castellanos y su equipo académico. Otero, acompañada por la embajadora estadounidense Lisa Kubiske, llegaron a los predios de la Universidad rodeadas de periodistas especialmente invitados para esa ocasión. Es evidente que querían enviar un mensaje abierto de respaldo y apoyo a la posición de la Rectora Castellanos. Otero, boliviana de origen, vivió en la difícil década de los años ochenta (época de guerra sucia y desapariciones forzadas, graves violaciones a los derechos humanos y Doctrina de la Seguridad Nacional) en Honduras junto a su esposo, el ministro religioso y abogado defensor de derechos humanos Joe Eldridge, actualmente en Washington al frente una asociación de abogados norteamericanos que velan por el respeto de los derechos humanos en la aplicación de la política exterior estadounidense.

El gobierno de los Estados Unidos, tanto en declaraciones del Departamento de Estado como en diversas entrevistas de prensa ofrecidas por la embajadora Kubiske, ha dejado en claro su preocupación por el tema de los derechos humanos en Honduras, especialmente en la zona del Bajo Aguán y, más recientemente, en el ejercicio de las funciones policiales. De hecho, este asunto de los derechos humanos, junto a los problemas causados por la creciente y masiva corrupción que invade la administración pública y la vida social del país, son las dos principales razones para que Honduras enfrente serios problemas para ser beneficiado nuevamente con los fondos donados en el marco de la Cuenta del Milenio. A finales de este año se conocerá la decisión adoptada en Washington al respecto. El gobierno se muestra escéptico y no abriga mayores esperanzas en ser favorecido con la millonaria donación.

Ese escepticismo se ve fortalecido por la reciente renuencia de la Misión del Fondo Monetario Internacional que estuvo en el país, la que, al concluir su misión, no emitió el acostumbrado Comunicado público sobre los resultados de la misma. La razón de tal renuencia, al parecer, ha sido la escasa eficiencia mostrada por el gobierno en el control del gasto público y, sobre todo, su notoria indecisión en llevar a cabo de una vez por toda la prometida reforma del sistema de pensiones del país.

Como para complicar más las cosas en la relación con su principal socio político y comercial, el gobierno del presidente Lobo recibió copia del Informe del Departamento de Estado puesto en circulación a principios de este mes, según el cual la mitad de la droga (cocaína) que llega al territorio norteamericano pasa a través del suelo hondureño, entre 20 y 25 toneladas por mes, mientras que el 79% de los vuelos cargados de droga que vienen del sur hacia el norte tocan en algún momento el territorio o el espacio aéreo de Honduras. De hecho, este país centroamericano se ha convertido, según Estados Unidos, en el principal punto de trasbordo de drogas hacia el mercado norteamericano. No es casual que ya estén operando en suelo hondureño los comandos armados (FAST) de la DEA norteamericana (la Agencia especializada en el combate al narcotráfico), tal como ha sido reconocido en diferentes reportajes aparecidos en la propia prensa estadounidense.

Pero, valga decirlo, no todo ha sido malas noticias para el gobierno en su relación con Washington. A principios del mes se hizo pública la decisión del gobierno norteamericano de prorrogar, por décima vez, el estatuto de permanencia temporal (más conocido como TPS, por sus siglas en inglés) que favorece a unos 70 mil hondureños que viven indocumentados en Estados Unidos y que, junto a un millón más de sus compatriotas, son fuente permanente y vital de remesas familiares que contribuyen en alto grado a mantener la precaria estabilidad macroeconómica del país (hasta el mes de agosto los envíos por remesas alcanzaron la suma de 1,612 millones de dólares, un 10,5% más que lo enviado en el mismo periodo durante el año pasado). Sin las remesas familiares, la devaluación brusca del Lempira, con la consiguiente confusión y caos que ello originaría en la economía nacional, sería inevitable.

El General Douglas Frazer, Jefe del Comando Sur del ejército norteamericano, llegó nuevamente a Tegucigalpa (desde junio de 2009 ha visitado Honduras en tres ocasiones) para tratar los consabidos temas de *“seguridad y cooperación regional”*. Sin embargo, en esta ocasión, su visita estuvo precedida por la entrega en calidad de donación de cuatro avionetas especiales para la lucha en contra del narcotráfico, así como el anuncio de nuevas y prontas donaciones de más equipo. La crisis policial ha mostrado, también a los ojos de Washington, hasta qué punto han logrado penetrar las filas policiales ( y, en parte, las militares) el crimen organizado y las redes interna-

cionales del tráfico de drogas. Estados Unidos no escatima esfuerzos para mostrar su preocupación por el tema y la urgencia que tiene de incorporar plenamente a Honduras en una estrategia regional coordinada de lucha en contra de esos delitos.

En materia de derechos humanos, el gobierno no ha podido hacer avances sustanciales. La situación del Bajo Aguán, aunque parece haber entrado en una fase de tensa calma en las últimas semanas, sigue latente y peligrosa. En cuanto a la situación de las muertes por encargo (el sicariato), el problema continúa: fue acribillada en una zona residencial de Tegucigalpa la conocida abogada Judith Alemán, quien hacía algunos meses había logrado escapar a otro atentado perpetrado en contra de ella en la misma ciudad; con su muerte suman ya 74 abogados que han sido asesinados por encargo en los últimos tres años y cuyos casos siguen, en un 99%, en la impunidad. Un total de 58 homosexuales han sido asesinados impunemente en Honduras en los últimos años, mientras continúan sin ser esclarecidos los crímenes que cobraron la vida de unos 16 periodistas desde junio de 2009 a la fecha. Para colmo, en los últimos días, pistoleros todavía no identificados acosan y disparan en contra de periodistas e instalaciones del diario La Tribuna, propiedad del ex presidente liberal Carlos Flores, en un abierto acto de represalia por los reportajes de investigación que el diario publica cada día en torno a la podredumbre interna de la policía.

Como si todos estos problemas no fueran suficientes, el gobierno lobista entró nuevamente en choque abierto con el gremio empresarial más importante del país, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). El motivo de esta nueva confrontación fue la compra de 100 megavatios de energía “sucía”, a base de combustible fósil (bunker) y la promesa de producirlos más adelante en base a gas licuado (RPG). Los empresarios vinculados al negocio de la venta de energía térmica, acostumbrados a hacer grandes negocios a costa del Estado, junto a otros hombres de empresa adversarios del gobierno (Grupos Canahuatí, Grupo Intur, etc.), se opusieron abiertamente a la operación de compra y acusaron al gobierno de comprar energía innecesaria para favorecer intereses de otros grupos económicos (los “nuevos grupos fácticos en formación”). El gobierno arremetió en contra de sus críticos y amenazó con publicar los nombres de todos los empresarios morosos que deben millonarias cuentas al Estado por el consumo de energía, a la vez que anunció –desafiante– que compraría 450 megavatios más el próximo año, hasta dejar sin ningún valor ni utilidad los leoninos contratos de compra de energía a los llamados “empresarios térmicos” (Fredy Nasser, hermanos Kafie, hermanos López, etc.).

Al arremeter en contra de estos empresarios, sin mencionar sus nombres, el presidente Lobo también señaló el papel perjudicial que desempeñan muchos medios de comunicación (alusión directa a los diarios La Prensa y El

Heraldo, de Jorge Canahuati) que no informan objetivamente sobre los hechos sino que dedican sus páginas y espacios radiales o televisivos a la defensa cerrada de los intereses comerciales de sus propietarios. No es casual que en la recién celebrada Conferencia de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), en Caracas, Venezuela, Lobo aprovechara las feroces críticas del presidente ecuatoriano Rafael Correa en contra de los medios y “*poderes fácticos*” de su país, para solidarizarse con él y, de paso, mostrar al continente sus coincidencias con el gobierno más crítico y hostil que actualmente tiene el régimen hondureño en el entorno latinoamericano. Esa Conferencia sirvió, entre otras cosas, para acercar posiciones con Ecuador y bajar el perfil a la confrontación, a la vez que para aproximarse a Cuba y planificar la próxima firma del Tratado de límites marítimos entre los dos países. Lobo fue muy hábil y logró abrir nuevos espacios para sus relaciones externas en el ámbito regional. El tema del reingreso a Petrocaribe y la normalización plena de las relaciones entre Caracas y Tegucigalpa, fueron dos puntos clave de la agenda bilateral de Lobo en sus conversaciones con los venezolanos.

La exitosa visita de Lobo a Venezuela para participar en las reuniones fundacionales de la CELAC, ha sido un motivo más de disgusto y molestia en los círculos políticos y empresariales más conservadores del país. Consideran al presidente un traidor, imitador del depuesto presidente Manuel Zelaya y seguidor taimado de sus pasos y aventuras en política internacional. El propio presidente del partido gobernante y aspirante presidencial, el alcalde capitalino Ricardo Álvarez, no oculta su creciente disgusto por la forma en que Lobo conduce el gobierno y realiza sus actividades políticas. Cada vez que puede, insiste en reclamar a Lobo por la presencia de varios ministros (cinco) en el gabinete que no pertenecen al partido Nacional (PN) y que, por lo mismo, de acuerdo a su lógica partidaria, no deberían estar en él. Esos cargos, alega Álvarez, deberían ser ocupados por auténticos nacionalistas, “*cachurecos de pura cepa que lucharon para hacer efectiva la victoria electoral de Pepe Lobo*”. El presidente contesta a esas críticas con una risita burlona y despectiva que sólo sirve para atizar la furia de sus adversarios y “*compañeros de partido*”.

Ya para finalizar el mes, e l Congreso Nacional, finalmente, logró los votos necesarios para aprobar una muy singular “*interpretación*” del artículo 274 de la Constitución de la República y conceder “*por tiempo limitado*” (en este caso, 90 días renovables) funciones policiales a las fuerzas militares, es decir, permitir que los militares que patrullan las calles puedan ejercer funciones policiales de allanamientos, capturas y persecución de delincuentes. La medida legislativa, que muchos consideran un peligroso retroceso en materia de derechos humanos y fortalecimiento democrático, desembocará en el reforzamiento de la creciente influencia castrense en los asuntos civiles. Se percibe como una secuela negativa del golpe de Estado de junio de

2009, que devolvió a los militares un protagonismo político e institucional que con tanta dificultad y esfuerzo la sociedad civil había logrado disminuir y reducir en los últimos treinta años de transición hacia la democracia.

No se debe descartar la posibilidad de que este controversial decreto legislativo sea impugnado por algún ciudadano o institución, ya que no son pocos los juristas que lo consideran inconstitucional en virtud de que la *“interpretación”* realizada por los legisladores es, en realidad, una reforma del texto constitucional. La Ministra de derechos humanos fue la única que se opuso a la emisión de este decreto legislativo. El tiempo dirá, en breve, quién ha tenido la razón.

# DICIEMBRE 2011

---

## La situación política

**E**ste mes de diciembre marca el fin de la primera e inicio de la segunda fase de la Administración nacionalista encabezada por el presidente Porfirio “Pepe” Lobo Sosa. Dos años han pasado ya desde que el actual mandatario hondureño fuera electo y tomara posesión de su cargo en un ambiente cargado de crispación interna y rechazo internacional. Dos años ha debido invertir el presidente Lobo para lograr el reingreso de Honduras en la comunidad de naciones y la aceptación de su gobierno como sujeto pleno de derecho internacional.

Hoy, al momento de iniciar la segunda mitad de su Administración, el presidente se encuentra nuevamente en una verdadera encrucijada. El virtual colapso del sistema de seguridad pública, que abarca en general a todo el esquema de administración de justicia (policías, fiscales y jueces); las violaciones constantes a los derechos humanos y el consiguiente desprestigio a nivel internacional; la acuciante crisis de la deuda pública (interna y externa); el lento y débil crecimiento económico; la fuga de empresas maquiladoras hacia los países vecinos (Nicaragua, especialmente) y el auge alarmante de la delincuencia común y el crimen organizado, son apenas algunos de los graves problemas a los que el gobernante hondureño debe hacer frente. Las dificultades económicas que debió sortear el gobierno en este final de año para hacer frente al pago de salarios y aguinaldos navideños a los empleados públicos, son una muestra de la gravedad de la crisis fiscal y del Estado de virtual bancarrota en que se encuentra la hacienda nacional. Fue preciso acudir a un organismo financiero internacional -el Banco Interamericano de Desarrollo- para obtener los fondos necesarios que permitieran el reforzamiento presupuestario de las finanzas públicas. Y, aún así, no son pocos los empleados públicos, especialmente maestros del sistema educativo y trabajadores del sistema sanitario, que no recibieron a tiempo sus sueldos en este mes de diciembre.

Como para agravar la situación, en este mes se produjeron los asesinatos de una conocida periodista de la radio y de un reconocido político democris-

tiano especialmente crítico contra la corrupción policial. Nos referimos a la periodista Luz Marina Paz y al político y consultor en temas de seguridad Alfredo Landaverde. La muerte de estas dos personas, asesinadas por sicarios que se conducían en motocicletas, ha servido para aumentar la indignación pública en contra de la policía y demandar con más fuerza su depuración y reestructuración inmediatas.

La reacción del gobierno ha sido lenta y vacilante. El presidente Lobo no parece estar muy dispuesto a aceptar la propuesta de la Universidad Nacional para crear una Comisión Interventora que ponga en marcha la reorganización interna de la policía y la reforma profunda de todo el sistema de seguridad y justicia. Aunque sus representantes ya firmaron la propuesta universitaria en una versión ligeramente modificada, todavía hace falta que el Congreso Nacional -que se fue de vacaciones en la segunda semana del mes- convierta esa propuesta en norma legislativa, es decir en un Decreto-Ley que proporcione la base jurídica de la intervención, la depuración y la reforma policial. Los diputados se reintegran a sus labores hasta el próximo 10 de enero de 2012. Se espera que entonces procedan a discutir la propuesta y, eventualmente, convertirla en Ley.

Mientras llega ese momento, la nueva cúpula policial, en la cual cierran filas muchos policías cuestionados por la población, continúa afianzando sus recién adquiridas posiciones burocráticas y simulando una depuración que no convence a nadie ni produce resultados tangibles y aceptables. El propio nuevo jefe de la policía, el Comisionado Ricardo Ramírez del Cid, declaró sin tapujos a la prensa el día 13 que teme por su vida y que ha recibido amenazas de muerte que proceden del seno mismo de la institución policial que, supuestamente, dirige.

Tomando en cuenta estos hechos, no es de extrañar entonces que dos diarios muy influyentes de los Estados Unidos -el Washington Post y Los Angeles Times- hayan dedicado amplios espacios en sus páginas para denunciar la crítica situación de la criminalidad en Honduras y hayan exigido al gobierno de Porfirio Lobo una clara rendición de cuentas y un freno decidido a los abusos de poder y a las violaciones a los derechos humanos. La publicación de estas notas en la prensa estadounidense se produce pocos días después de que el gobierno hondureño haya sido descalificado para optar como beneficiario a una millonaria donación (más de 200 millones de dólares) en el Programa conocido como Cuenta del Milenio (Honduras ya había recibido en el gobierno anterior de Manuel Zelaya un primer "tramo" de esa Cuenta, por valor de 215 millones de dólares). Los fondos de la donación perdida debían ser utilizados para concluir las obras de construcción de la carretera conocida como "canal seco", que debe unir los puertos salvadoreños en el Océano Pacífico con Puerto Cortés, en el Atlántico hondureño. El retraso que se producirá en la construcción de esta importante obra de in-

---

fraestructura repercutirá en las actividades económicas y en la generación de empleo durante el nuevo año.

Las razones por las cuales Honduras quedó fuera de los beneficios de la Cuenta del Milenio tienen que ver con el bajo rendimiento del gobierno en la lucha contra la corrupción y en el respeto a los derechos humanos. La decisión norteamericana provocó una reacción emotiva del presidente Lobo, quien no pudo esconder su disgusto y frustración, reprochando a sus aliados la “*poca comprensión*” hacia Honduras y su difícil situación. La Ministra de la Presidencia debió emitir horas después un apresurado comunicado de prensa suavizando el enojo de Lobo y casi presentando disculpas a la embajada norteamericana.

Pero la situación sigue tensa. La nueva embajadora estadounidense, Lisa Kubiske, aprovecha cada oportunidad que tiene para expresar su preocupación por la inseguridad reinante y por la preocupante situación de los derechos humanos en el país. En Washington, por su parte, cada vez con más frecuencia diversos senadores y representantes ante el Congreso expresan sus críticas hacia Honduras y demandan una política más dura de parte de Estados Unidos frente al gobierno lobista. La decisión del gobierno norteamericano de retirar al contingente de miembros del Cuerpo de Paz (158 en total) del territorio hondureño (otro tanto hicieron en El Salvador y Guatemala) a causa del peligroso clima de inseguridad, sólo ha servido para agriar más las relaciones entre el gobierno de Lobo y su principal aliado político a nivel internacional.

Para complicar más la situación y agregar más controversia, los norteamericanos no ven con buenos ojos la sensible mejoría que se está produciendo en las relaciones entre Honduras y Venezuela. La reciente visita del presidente Lobo a Caracas, en la primera semana de este mes, para participar en los actos de creación de la Comunidad de Naciones de América Latina y El Caribe y su decisión de lograr la reinserción plena de Honduras en el programa de Petrocaribe (18 países lo integran y Honduras había ingresado en enero de 2008, pero su participación quedó en suspenso a raíz del golpe de Estado del 28J), no parecen suscitar el entusiasmo y la alegría de los norteamericanos. El presidente Lobo prepara un nuevo viaje a Caracas, esta vez acompañado por varios empresarios locales, para finalizar los trámites de la reincorporación a Petrocaribe.

Mientras se produce este “*realineamiento*” de la política exterior hondureña con respecto a los vecinos del sur, a nivel interno los aspirantes presidenciales consolidan sus posiciones y presentan públicamente y de manera ostentosa sus precandidaturas. En este mes lanzaron sus “*Movimientos o Corrientes*” los precandidatos Juan Orlando Hernández y Ricardo Álvarez dentro del partido Nacional (PN). El primero presentó oficialmente su “*Movimiento*” el día 10 en un multitudinario acto en la ciudad capital. En su discurs-

so de inauguración criticó fuertemente a los liberales, a quienes culpó por el golpe de Estado, y alabó la mano dura del dictador Tiburcio Carías (1933-1948) por haber logrado “*poner orden*” en la convulsa Honduras de aquellos años (Carías es una especie de símbolo del conservadurismo más recalci-trante en el PN). Pocos días después, en el norte del país, lanzó su propio Movimiento “*Salvemos Honduras*” el alcalde capitalino y presidente del PN, Ricardo Álvarez. Ambos precandidatos se perfilan como fuertes aspirantes a la nominación presidencial. El tercero en disputa, el ministro de Obras Públicas, Miguel Pastor, todavía no ha oficializado públicamente su propio Movimiento político.

Al interior del partido Liberal (PL), el día sábado 03 inauguró su campaña electoral por la nominación presidencial el político folclórico Esteban Handal, más conocido como “*el toro colorado*”, un singular personaje que combina hábilmente sus negocios en los juegos de azar con la prédica religiosa a través de su propio canal de televisión. Handal se suma a una amplia lista de aspirantes presidenciales en las filas liberales: Edmundo Orellana, Yani Rosenthal, Mauricio Villeda, Guillermo Gaugel y un sacerdote, Luis Alfonso Santos, quien hasta hace pocos días fungía como Obispo de la Diócesis de Copán, en el occidente del país.

Aprovechando los últimos días del plazo para solicitar la inscripción de nuevos partidos políticos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), presentaron sus respectivas solicitudes, acompañadas de las firmas requeridas, las siguientes agrupaciones políticas: Alianza Patriótica, que encabeza el General (retirado) Romeo Vásquez, jefe militar del golpe de Estado y actual Gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), y el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER), dirigido por Andrés Pavón, presidente del Comité para la defensa de los derechos humanos (CODEH) y disidente del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que lidera Manuel Zelaya. Estos partidos en formación se suman a los otros dos que presentaron con suficiente anterioridad sus solicitudes y firmas: el partido Libertad y Refundación, más conocido por las siglas de LIBRE, que se autocalifica como el “*brazo político*” del FNRP y proclama la candidatura presidencial de Xiomara Castro de Zelaya, ex Primera Dama y esposa del ex presidente Zelaya, y el partido Anticorrupción, que es dirigido por el presentador de televisión y comentarista deportivo Salvador Nasralla.

O sea que, si el TSE aprueba y valida las firmas y demás documentación presentadas por estas cuatro organizaciones políticas, el panorama político para los dos próximos años será mucho más variado y complejo de lo que suele suceder en los procesos electorales hondureños. Participarían en las elecciones generales de noviembre de 2013 nueve partidos políticos para elegir un presidente y tres Designados presidenciales; 128 diputados propietarios y 128 suplentes; 298 corporaciones municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

Pero, la verdadera novedad no estaría tanto en el número de partidos participantes sino en la calidad del enfrentamiento. Por primera vez en la historia contemporánea de Honduras existe la posibilidad real de romper el esquema bipartidista casi centenario que ha prevalecido en el sistema político del país. Y, por primera vez también, existe un partido político nuevo –LIBRE–, enfrentado a los dos grandes partidos históricos o tradicionales y con posibilidad real de ganar el torneo electoral. Se produciría un enfrentamiento más ideológico entre la clase política tradicional, agrupada fundamentalmente en los partidos Liberal y Nacional, y una emergente clase media reformista que aglutina en sus filas políticas a todos los adversarios del golpe de Estado del 28J y respalda el programa reformador de Manuel Zelaya. La confrontación sería más directa y feroz. Las viejas cúpulas políticas nacionalistas y liberales harán hasta lo imposible para impedir el triunfo de LIBRE en las urnas y esta circunstancia volverá la competencia más intensa y crispada. Serán, sin duda, unas elecciones muy reñidas y con alto grado de tensión y confrontación políticas, lo que las volverá potencialmente explosivas y peligrosas.

Una reciente encuesta (octubre/2011) ordenada por los industriales de las fábricas maquiladoras y llevada a cabo por una firma estadounidense, califica a LIBRE como *“una fuerza política que tiende a ser decisiva”* en el escenario local. Otros hallazgos de los encuestadores indican que el esquema electoral futuro puede presentar muchas sorpresas y modificar la tradicional correlación de fuerzas políticas en el ámbito local.

Ya para concluir diciembre, el presidente Lobo, fiel a su arraigada costumbre, realizó el viaje número cuarenta, por enésima vez a los Estados Unidos, para pasar las vacaciones navideñas en Nueva Orleans. De esta forma, Lobo cerró un intenso ciclo de viajes oficiales y privados que lo mantuvieron fuera de Honduras una buena parte de su tiempo laboral. A las críticas y burlas de la oposición, hubo que sumar el disgusto al interior de las filas del propio partido gobernante, que no acaba de perdonar al presidente su decisión de hacer un gobierno de *“integración nacional”*, es decir con la participación de al menos cinco ministros provenientes de otras tiendas políticas.

### **¿Y la economía?**

**A**unque la última Misión del Fondo Monetario que vino a Tegucigalpa (noviembre 2011) rehusó emitir, como ha sido costumbre, un comunicado de prensa dando cuenta de sus hallazgos y opiniones, lo cierto es que al gobierno no le ha ido tan mal en sus relaciones con los organismos financieros internacionales. Según los datos de Ian Walker, el nuevo representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Honduras, este año el país recibió del banco unos 300 millones de dólares en préstamos y donaciones y para el nuevo año 2012 están aprobados ya 320

millones de dólares (también agregó que los niveles de pobreza oscilan entre el 65 y el 66%, mientras que la pobreza extrema alcanza el 40% de la población). El Banco Mundial, por su parte, anunció que ya fueron aprobados 171 millones de dólares a favor del gobierno hondureño para el período 2012-2014. Julio Raudales, el ministro de Planificación y Cooperación Externa, asegura que la ayuda internacional en este año fue de unos 500 millones de dólares, entre préstamos concesionales y donaciones (también reconoció que la ejecución presupuestaria al finalizar diciembre sería apenas de 60 o 70%).

Las reservas internacionales en el Banco Central en la última semana de diciembre eran de 2,848 millones de dólares (333 millones más que en diciembre de 2010), suficientes para cubrir 3 meses y medio de importaciones. La inflación, según los cálculos oficiales, fue de 5,4% (en 2010 fue de 6,4%), aunque el Banco Central esperaba que oscilara entre 7 y 9%. Las remesas crecieron este año en 9% con respecto al año anterior. El Producto Interno Bruto (PIB), siempre según las mismas fuentes, creció en 3,4%. Entre todos los productos de exportación, el café, sin duda alguna, ha sido la clave que explica el crecimiento del PIB.

A principios del mes de diciembre, la deuda total (interna y externa) de Honduras, según William Chong Wong, ministro de Finanzas, era de 5,554 millones de dólares, 1,142 millones más que la deuda encontrada por el actual gobierno al iniciar su administración en enero de 2010 (4,412 millones de dólares). Hasta el mes de septiembre (tercer trimestre), la inversión directa extranjera (IED) alcanzó los 719 millones de dólares, sobre todo en el área de las telecomunicaciones y el transporte. De ese gran total, 456 millones corresponden a inversiones norteamericanas, según los datos oficiales.

A mediados del mes, el Congreso Nacional aprobó finalmente el presupuesto general para el año 2012: en total, 144.338.210 millones de lempiras (unos 7,597 millones de dólares), distribuidos entre el gobierno central (4,188 millones de dólares) y las instituciones descentralizadas (3,409 millones de dólares). Para el pago de la deuda pública serán destinados 685 millones de dólares.

Así concluyó el año 2011, segundo del período gubernamental (2010-2014) de la Administración que encabeza Porfirio Lobo Sosa.

**AÑO  
2012**

---

# ENERO 2012

---

## La situación política

**E**n este mes de enero, el día 27 concretamente, la Administración que encabeza el presidente Porfirio “Pepe” Lobo ha cumplido dos años y ha llegado a la mitad de su periodo gubernamental. Comienza la segunda fase de su gobierno y todos los indicios apuntan en el sentido de que será un tiempo difícil y muy controversial.

La oposición política ha aprovechado la ocasión para hacer diferentes valoraciones sobre los primeros dos años del gobierno. Casi todas coinciden en señalar como el principal éxito del régimen haber logrado la reinserción plena del Estado hondureño en la comunidad internacional, superando el doloroso Estado de exclusión que el país debió sufrir a raíz del golpe de Estado del 28J. Junto a esta reinserción, el gobierno logró obtener acceso nuevamente a los préstamos y donaciones de los organismos financieros internacionales y de los países amigos, alcanzando así cierta recuperación económica y alguna estabilidad política. En cuanto a los fracasos y desaciertos de este primer periodo gubernamental, los críticos de la oposición insisten en señalar los siguientes: colapso del sistema de seguridad, especialmente en las filas de la policía; aumento incontrolado del crimen organizado y el narcotráfico; incremento alarmante de los homicidios; crecimiento del desempleo; descalabro de las finanzas públicas y reiterados actos de corrupción a través de las compras millonarias, sin la debida licitación pública, o la mani-fiesta venta de influencias en el aparato administrativo del Estado.

Como un anuncio de lo que le espera, el presidente Lobo aprovechó la primera reunión del gabinete ministerial, el día 04, para advertir a sus ministros sobre los riesgos de la politización preelectoral en sus actividades como Secretarios de Estado, y condenó cualquier práctica discriminatoria en la Administración pública por razones de pugnas políticas entre los diferentes precandidatos presidenciales del partido de gobierno. Esta advertencia es apenas un indicio de la intensa lucha política interna que ya se ha desatado al interior del partido Nacional (PN), en donde al menos cinco dirigentes políticos (Juan Orlando Hernández, Ricardo Álvarez, Miguel Pastor, Fernan-

---

do Anduray y Víctor Hugo Barnica) están trabajando activamente para convertirse en el candidato oficial de su partido a la presidencia de la República en las elecciones generales de noviembre de 2013. Esa lucha, por momentos, adquiere altos niveles de crispación y encono que se traducen en despidos y discriminación contra los diferentes partidarios de tal o cual precandidato. Al final de cuentas, la lucha repercute en los niveles de eficiencia y eficacia del equipo ministerial, afectando su funcionamiento y debilitando la ya de por sí escasa fuerza del gobierno en su conjunto.

Ante una situación semejante, el presidente luce cada vez más aislado y desconfiado con respecto a sus propios colaboradores. No fue casual que en otra reunión del Consejo de ministros, esta vez en Comayagua el día 17, confesara, entre molesto e impotente, que *“si me descuido, me meten gol”*, en alusión a las maniobras de algunos de sus colaboradores para aumentar las tarifas aeroportuarias o llevar a cabo compras directas de energía *“sucía”* o contratación millonaria de servicios sin que el presidente esté debidamente enterado. Uno de los casos más escandalosos se produjo cuando el presidente descubrió que se pretendía contratar los servicios de una compañía norteamericana -Securiport- para montar equipos de seguridad y control en los aeropuertos y aduanas del país, con el pago de tarifas escandalosas por entrar y salir del territorio nacional. Los artífices de esta maniobra fueron el ministro del Interior Áfrico Madrid y el asesor en proyectos de infraestructura Mauro Membreño, hombre de confianza del ex presidente Ricardo Maduro. Madrid se vio obligado a disculparse públicamente en el Consejo de ministros, mientras que Membreño se ha mantenido en silencio. Los dos siguen conservando sus importantes cargos en la Administración lobista.

La situación ha alcanzado tales niveles de escándalo, que el mandatario decidió crear una comisión especial para revisar minuciosamente todos los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo debe enviar al Congreso Nacional. Casi al mismo tiempo, el presidente anunció que llevará a cabo nuevos cambios en el seno del gabinete y entre algunos de sus principales colaboradores. Los cambios comenzaron en el Ministerio de Cultura, en donde el ministro Bernard Martínez, ex candidato presidencial del partido de Innovación y Unidad (PINU) en las pasadas elecciones de 2009, fue sustituido por Tulio Mariano González (ambos son afrodescendientes), un perito agrónomo graduado en la antigua Unión Soviética y destacado militante del partido gobernante. La situación en el Ministerio de Cultura se había vuelto incontrolable y el ex ministro Martínez se mostraba incapaz de imponer orden y racionalidad en esa Secretaría de Estado. Los críticos aseguran que la tardanza del presidente Lobo en destituir a Martínez sólo indica la desidia y la ligereza que predominan en el manejo de las cuestiones del Estado.

El presidente, según el decir de uno de sus colaboradores más cercanos (el Canciller Arturo Corrales), se encuentra muy decepcionado con respecto a

muchos de los integrantes de su equipo gubernamental y sumamente molesto con la persistente crítica y animadversión que le profesan algunos de los principales medios de comunicación del país, especialmente los diarios La Prensa y El Heraldo, de Jorge Canahuati, y las radioemisoras y canales de televisión pertenecientes a Rafael Ferrari y Manuel Villeda Toledo (el clan Ferrari-Villeda). Así se explica la advertencia lanzada por Lobo en la inauguración de la tercera legislatura en el Parlamento, el día 26, en el sentido de que está preparando un proyecto de decreto para enviarlo al Congreso Nacional en relación con los límites y restricciones que debe tener el ejercicio del periodismo en Honduras. El anuncio de tal intención fue suficiente para que los medios de comunicación ligados a los grandes grupos económicos del país lanzaran una campaña en contra de lo que ya calificaron como “Ley mordaza”.

De igual manera, la oposición de los grandes medios, vale decir de los grupos fácticos de poder, encabezados en este caso por Canahuati y Ferrari-Villeda (el presidente Lobo los señaló por su nombre en el discurso ante los diputados), se concentra también en contra de la decisión presidencial de gestionar el reintegro de Honduras en la estructura de la organización internacional Petrocaribe, financiada por el gobierno de Venezuela. Cualquier intento de aproximación con gobiernos como el venezolano inmediatamente es rechazado y satanizado por esos medios de comunicación. Al parecer, el presidente Lobo está llegando ya a los límites de su propia paciencia.

Todo parece indicar que se acercan momentos de mayor confrontación entre el gobernante y los grandes medios de comunicación, lo que equivale a decir confrontación con algunos de los principales grupos económicos tradicionales. Es como si Lobo estuviera condenado a seguir el mismo camino de controversia y disputa que debió recorrer el ex presidente Manuel Zelaya en su escabrosa relación con esos mismos medios de comunicación.

En la mañana del día 18, el país entero se vio sorprendido por la inesperada y apresurada salida del presidente Lobo con destino a los Estados Unidos. El viaje, en el que estuvo acompañado por la propia embajadora estadounidense Lisa Kubiske y por el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, más tres de sus colaboradores más cercanos (el Canciller Arturo Corrales, el ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla y su secretario privado y ahijado personal Reinaldo Sánchez), tomó por sorpresa a todos y abrió la puerta para una ola de especulaciones de todo tipo. Al final, el día siguiente, se pudo conocer parcialmente algunos de los detalles del viaje y razones que motivaron la intempestiva “visita”. Se trató de una reunión de urgencia con altos representantes de la Administración de Barack Obama (Dan Restrepo, asesor de Obama en materia de seguridad; Francisco Palmieri, ex agregado político en los años noventa en Tegucigalpa y ex embajador en Nicaragua, actual jefe de antinarcóticos para América Latina; Oliver

---

Garza, ex embajador en Nicaragua, etc.) para tratar temas de seguridad y, entre otros, el de la reforma a la Constitución de la República para permitir la extradición de ciudadanos hondureños ante reclamos legales de países perjudicados. La urgencia de tal reforma tenía que ver con la conclusión de la segunda legislatura y la necesidad de dejar aprobada la reforma para que pudiera ser ratificada en la tercera legislatura que estaba por comenzar. De esa manera, se cubría el requisito que demanda toda reforma constitucional y se evitaba dejar el cambio para el siguiente año, un año que estará condicionado por las peleas electorales.

Las demandas norteamericanas fueron planteadas en términos tales que no admitían mayor discusión. Al día siguiente, el Congreso Nacional aprobó la reforma constitucional al artículo 102 y decidió permitir la extradición de ciudadanos hondureños cuando sean acusados por otro país (léase Estados Unidos) de delitos vinculados con el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado en sus distintas variantes. El día 27, fecha en que ya quedó inaugurada la tercera legislatura, los diputados ratificaron la reforma y le dieron plena vigencia. Ahora, el siguiente paso será la firma de convenios bilaterales de extradición, similares a los que tiene Estados Unidos con otros países del área (El Salvador, Guatemala, Belice, México, etc.).

Las especulaciones van y vienen. Se habla ya de la existencia de listas con los nombres de posibles candidatos a la extradición, entre los que se mencionan al menos seis diputados, 16 alcaldes, algunos empresarios y otros líderes políticos conocidos. Los rumores son intensos y, en igual medida, el miedo se apodera de muchos personajes del mundo bancario, empresarial y político.

Y no es para menos. La presencia del crimen organizado y la creciente influencia de las redes del narcotráfico son cada vez más evidentes. La prensa internacional, especialmente la norteamericana, con frecuencia se hace eco de esta preocupante situación. El propio Designado presidencial y actual aspirante a la nominación oficial del PN, Víctor Hugo Barnica, declaró públicamente el día 11 que *“el crimen organizado invierte en las precandidaturas del partido Nacional”* y pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) investigar el asunto.

Por estas y otras razones, el tema de las reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones políticas (LEOP) adquiere una importancia especial. Se deben reforzar los controles y la supervisión sobre los dineros que sirven para financiar las campañas electorales. Aunque el TSE presentó ante el Congreso Nacional un minucioso paquete de reformas a la legislación electoral, los diputados parecen tener su propia agenda *“reformista”* y han desechado, al menos hasta el momento, la propuesta de los magistrados del TSE y se disponen a introducir sólo aquellas reformas que no alteren en

lo sustancial las actuales reglas del juego electoral. Como el propio presidente del Congreso es uno de los precandidatos más activos y de los que más dinero invierte en su proselitismo, no tiene mucho interés en hacer más transparentes las normas electorales.

Cada vez es más impresionante la cantidad de dinero que invierten varios precandidatos en la financiación de sus campañas políticas. Además de los fondos públicos utilizados para financiar concentraciones y caravanas de partidarios, se invierten también dineros procedentes de “*aportes, donaciones y contribuciones voluntarias*” de origen poco transparente. Las concentraciones organizadas por Juan Orlando Hernández en Tegucigalpa y San Pedro Sula, así como la que montó el alcalde capitalino, Ricardo Álvarez, en Choluteca, para “*lanzar sus precandidaturas*”, son buenos ejemplos de gastos millonarios en procesos electorales.

El TSE se muestra indiferente y débil ante el despliegue abierto que hacen esos dirigentes políticos en sus campañas prematuras. La ley establece los plazos concretos en que se debe hacer propaganda electoral: 50 días antes de las elecciones internas y 90 días antes de las elecciones generales. Las internas serán en noviembre de este año y las generales en el mismo mes en el próximo año. Pero los precandidatos no cumplen con lo que la ley establece y el TSE se muestra incapaz para sancionar a los infractores y obligarles a respetar los plazos fijados. Esa debilidad institucional del TSE es la fuente de temores y suspicacias al interior de la oposición política, especialmente la que se agrupa en el nuevo partido político Libertad y Refundación (LIBRE), sobre las posibilidades reales de que se produzca un gran fraude en las elecciones generales de noviembre de 2013. La desconfianza no es gratuita. LIBRE y su coordinador general, el ex presidente Manuel Zelaya, ya se han adelantado en denunciar la posibilidad de un fraude mediante la manipulación electrónica de los datos y el manejo poco transparente de la documentación electoral (tarjetas de identidad, manoseo de las firmas que respaldan las solicitudes de inscripción de los nuevos partidos, credenciales para las mesas electorales, actas de la votación, etc.). Todo apunta en el sentido de que las próximas elecciones serán especialmente reñidas y deberán ser muy vigiladas.

Al finalizar el mes, el día 31, los diputados aprobaron el decreto legislativo que crea la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) que deberá conducir la reforma policial. Esta Comisión estará integrada por cinco personas, tres nacionales y dos extranjeros. Todos tendrán derecho a voz y voto en el seno de la Comisión. El presidente Lobo, que al inicio se oponía a la inclusión de extranjeros en la Comisión, finalmente cedió en este punto pero limitándolos en sus facultades y negándoles el derecho a voto. Los diputados obviaron la restricción presidencial y concedieron iguales y plenas facultades a los cinco integrantes de la Comisión de reforma. La aprobación

---

de este decreto coincide con la llegada de diversas misiones internacionales para hacer diagnósticos sobre la policía y recomendar las medidas que se deberían tomar. Hay informes redactados o en proceso de redacción por parte de expertos colombianos y otros enviados por la Organización de Estados Americanos, Unión Europea, Estados Unidos, Chile, etc. Los Estados Unidos incluso nombraron un enviado especial, Oliver Garza, un experimentado diplomático (fue embajador en Nicaragua) y funcionario de alto nivel en Washington, para ocuparse directamente del tema de la seguridad en Honduras. Previamente, el día 02, el Congreso Nacional había aprobado ya la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y había creado una llamada Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII).

La creación de la Comisión de reforma se interpreta como un triunfo de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), especialmente de su Rectora, Julieta Castellanos, que desde octubre del año pasado (mes en que fueron asesinados los dos jóvenes universitarios y se desencadenó la peor crisis de la institución policial) ha venido presionando al gobierno, Poder Ejecutivo y Congreso Nacional, para que se lleve a cabo la depuración de la policía por la vía de una intervención real y profunda.

Los policías no se cruzan de brazos. De manera informal han hecho saber al presidente Lobo y a los diputados su descontento y rechazo a las medidas drásticas que se anuncian para depurar sus filas. Demandan que se investigue también los bienes y fortunas de los políticos, especialmente de los diputados, ministros y altos funcionarios de los distintos gobiernos, pasados y presentes. Denuncian, además, que debido a la protección que los políticos brindan a muchos funcionarios corruptos y delincuentes (alcaldes, regidores municipales, diputados propietarios y suplentes, etc.), la policía no ha podido darles captura y encerrarlos tras las rejas. La situación no parece fácil y se avecinan más problemas y desencuentros en el espinoso tema de la seguridad y la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

Preguntado que fue el presidente Lobo sobre la reacción adversa de los jefes policiales ante la revisión de sus cuentas bancarias y fortunas personales, se limitó a contestar: *“la depuración va y nadie la detiene...”*

### La corrupción sigue en ascenso

**A** pesar de las constantes quejas y reclamos del presidente Lobo ante sus ministros y colaboradores, los actos de corrupción continúan ocupando un lugar privilegiado, junto a los crímenes y la delincuencia, en la agenda pública nacional.

El caso más reciente, la importación ilegal de arroz en dos ocasiones (12 mil toneladas en la primera y 14,600 en la segunda), sin disponer de las licencias requeridas y causando un grave daño a los productores locales (Honduras consume unos tres millones de quintales de arroz al año, pero sólo produce localmente 800 mil quintales), fue el resultado de una vergonzosa confabulación entre funcionarios gubernamentales e importadores privados. El presidente Lobo se vio obligado a condenar estos hechos y, al menos en el segundo caso (Arrozazo II), prohibir su importación. Sin embargo, como ya es usual, el presidente no toma medidas drásticas ni castiga a sus funcionarios corruptos.

Aparte de este escándalo de la importación ilegal de arroz, ha habido también otros actos de corrupción recientes relacionados con la compra de energía térmica innecesaria, aplicación frustrada de altas tarifas aeroportuarias que habrían convertido a Honduras en el país con los aeropuertos más caros del mundo, comprar directas de medicinas sin la licitación debida, negocios sucios en la Empresa Nacional Portuaria (ENP), distribución de dineros en grandes cantidades entre los diputados afines a la candidatura de Juan Orlando Hernández, irregularidades en transacciones dudosas en la compañía telefónica, pagos indebidos en el sistema educativo, sobornos y “*mordidas*” en la Alcaldía capitalina, etc. Es la de nunca acabar.

# FEBRERO

## 2012

---

### La situación política

La Administración gubernamental de Porfirio Lobo ha comenzado la segunda mitad de su mandato con pie izquierdo: sustituciones inevitables en el equipo de gobierno, grandes escándalos de corrupción, tensiones crecientes con el Poder Judicial y, lo que es peor, dolorosas tragedias provocadas por los incendios en una cárcel y en los mercados de la capital, que han costado muchas pérdidas en vidas humanas y costos millonarios. La imagen internacional del país sigue en declive y las constantes violaciones a los derechos humanos atraen la atención internacional y las visitas de destacadas personalidades de gobiernos y organismos internacionales preocupados por el deterioro y descontrol en la situación imperante.

En este mes se han producido la mayoría de los cambios (sustituciones o rotaciones) al interior del equipo de gobierno, los que habían sido anunciados por el presidente Lobo desde inicios del año. Casi todos esos cambios obedecen al hecho de que sus protagonistas se han visto involucrados en lamentables escándalos de corrupción administrativa, que van desde el millonario contrabando de arroz, hasta la introducción ilegal de gasolina por las costas del Mar Caribe, y el otorgamiento sin licitación de concesiones para la producción y venta al Estado de cien megavatios de energía supuestamente “limpia”. Junto a estos escándalos “grandes”, se han producido otros, de menores dimensiones, que involucran a funcionarios intermedios y menores dentro de la estructura estatal.

El primero en caer fue el influyente ministro de Finanzas, William Chong Wong, el hombre de los chinos en Honduras, integrante del llamado “grupo Maduro/Callejas/Marco Tulio Gutiérrez”, el llamado popularmente “Grupo Colibrí”. Sin embargo, su caída no ha sido total: quedó adscrito a Casa Presidencial como asesor especial en temas de negociación con los chinos continentales y con los organismos financieros internacionales. Lo sustituye en el cargo el diputado nacionalista Héctor “Tito” Guillén, ex alcalde de San Pedro Sula, hombre fiel al presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando

Hernández (JOH). La llegada de Guillén (más político que técnico) a un Ministerio tan importante y sensible, en época de campañas electorales, genera preocupación y pone en dudas la posibilidad de alcanzar las metas de rigurosa disciplina fiscal que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al mismo tiempo, su nombramiento evidencia la escalada proselitista de JOH en su búsqueda de la nominación oficial como candidato presidencial del partido Nacional (PN). Ahora JOH aumenta su influencia en el control y distribución de las finanzas del Estado, desplazando a Chong Wong, un discreto aliado del alcalde capitalino, Ricardo Álvarez, el otro contendiente en la búsqueda de la candidatura presidencial en el PN. Con el nombramiento de Guillén, el presidente Lobo evidencia su apoyo y parcialidad a favor de JOH.

En el Ministerio de Educación también hubo cambios: por fin se fue Alejandro Ventura, uno de los ministros más incompetentes, opacos y controversiales en el gabinete lobista. Su destitución era esperada desde hace mucho tiempo. Enfrentado de manera permanente con el gremio magisterial (profesores de primaria y secundaria), del cual, dicho sea de paso, proviene, Ventura no fue capaz de introducir las mínimas reglas de orden y racionalidad en ese caos administrativo en que se ha convertido el sistema educativo hondureño. Le sustituye en el cargo un joven profesor, hasta ahora Rector de una universidad pública regional -la Universidad Nacional de Agricultura (UNA)- ubicada en el departamento de Olancho, zona de donde es oriundo el presidente de la República. Para sorpresa de muchos, el nuevo funcionario se ha declarado opositor directo al golpe de Estado del 28J y partidario de la llamada Resistencia antigolpista. Aparece como un viejo amigo de Lobo, con quien, por lo visto, ha compartido en el pasado algunas ideas de rebeldía juvenil.

En la Secretaría de Industria y Comercio (SIC), su titular, el abogado olanchano Francisco Zelaya, íntimo amigo del presidente y reconocido activista del partido de gobierno, no ha esperado la destitución. Se adelantó presentando su renuncia irrevocable, en medio del escándalo del contrabando millonario de arroz y a las puertas de otro escándalo similar, esta vez con el contrabando de decenas de cisternas cargadas de gasolina ilegal que entra al país a través de los puertos de la Costa Norte (Islas de la Bahía y La Ceiba) y se vende clandestinamente a cinco lempiras menos el galón. Las pérdidas ocasionadas por ambos contrabandos son millonarias. A Zelaya le sustituye en el cargo Adonis Lavaire, un técnico poco conocido en los círculos políticos locales.

Como consecuencia del contrabando de arroz (en realidad fueron dos operaciones decontrabando, las llamadas "*arrozazo I* y *arrozazo II*"), también ha rodado la cabeza del Viceministro de Agricultura y Ganadería, Juan Artica, un hombre muy cercano al presidente y protegido suyo en el reciente pasa-

do. Le sustituye el agrónomo Ramón Escobar. No se descarta que en el inmediato futuro pueda ser sustituido también el ministro de esa Secretaría, el liberal Jacobo Regalado.

En la controversial Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) también ha habido cambios. Roberto Martínez, un político muy cuestionado que fungió como Designado presidencial (especie de Vicepresidente) en el gobierno del nacionalista Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), ha salido por la puerta de atrás, repudiado por casi todos y envuelto en un vergonzoso escándalo de la compra de 100 megavatios de energía a una compañía que parece ser fantasma. Los dueños de esa “compañía”, la WortsilaWesport, han intentado en vano vender a otros inversionistas el jugoso contrato obtenido con sobornos en la ENEE, sin poder lograrlo hasta el momento. El país se ha sentido estafado: no había necesidad de esa compra, como lo advirtieron los empresarios del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), ni había necesidad de declarar un falso Estado de emergencia (¡por 16 años!) para justificar el otorgamiento apresurado del contrato. En teoría, los vendedores de la energía deberían haber empezado sus actividades en enero de este año. Sin embargo, no aparecen por ningún lado. El presidente Lobo, dando muestras de una paciencia y una tolerancia casi desconcertantes, se ha sentido finalmente engañado y ha optado por aceptar la renuncia de Martínez, un hombre muy vinculado al movimiento político del presidente del Congreso Nacional. Se ha especulado mucho sobre el destino final de los dineros recibidos en calidad de soborno; una parte, al menos, habría sido destinada a financiar la campaña proselitista de JOH. A Martínez le sustituye en la gerencia de la ENEE el empresario sampedrano de origen árabe Emil Hawit, también un político ligado hasta no hace mucho a Ricardo Álvarez y cuestionado por sectores de la oposición debido a supuestas prácticas poco transparentes (especialmente en el sistema de aduanas de la costa norte y en la Empresa Nacional Portuaria, en Puerto Cortés).

Curiosamente, la llegada del nuevo Gerente de la ENEE coincide con la sospechosa caída de varias torres de transmisión eléctrica en el centro del país, lo que ha obligado a costosos racionamientos de energía y gastos millonarios en la empresa estatal. Hay razones para sospechar sobre la existencia de mano criminal en estos extraños atentados.

En la barrida general que ha hecho el presidente Lobo en su entorno ministerial, también cayó el llamado Comisionado Presidencial de Religión y Culto, Carlos Portillo, arrastrado por la crisis que se ha generado al interior de las iglesias evangélicas, sobre todo después que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley Marco de tales iglesias que el Congreso Nacional aprobó en septiembre del año 2010.

Y aquí surge otro problema para la Administración lobista: el creciente enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia a causa de las decisiones de ese alto tribunal sobre la inconstitucionalidad de leyes promovidas por el Poder Ejecutivo y aprobadas solicitadamente por el Congreso Nacional:

- a) Impuesto del 1% sobre las rentas mayores a diez millones de lempiras, aprobado mediante reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta en abril del 2011. Con su aplicación, el gobierno había logrado recaudar ya más de 500 millones de lempiras, cuya devolución hoy exigen los empresarios contribuyentes.
- b) Ley Marco de las Iglesias Evangélicas, cuyo texto privilegia a las iglesias grandes y más influyentes, creando un espacio de discriminación ilegal en contra de las demás, y
- c) Ley que crea las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), más conocidas como las “*ciudades modelo*”, un proyecto un tanto utópico que cuenta con el apoyo incondicional del presidente Lobo y de JOH.

Sumamente incómodo y enojado, el presidente ha reaccionado mal. Ha arremetido contra la Corte Suprema (“*Supremo sólo Dios*”, ha dicho) y ha reclamado la pronta creación de un tribunal constitucional (tal como lo recomendó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en su informe presentado a mediados del año pasado) que vigile y controle la calidad jurídica y la justicia de los fallos del máximo tribunal del Poder Judicial. ¿Por qué, se pregunta el presidente, los otros poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, tenemos quien nos vigile y controle, mientras que la Corte Suprema se erige como una última instancia intocable e incuestionable...? Por el momento, Lobo ha anunciado la formación de una Comisión de juristas especializados en derecho constitucional que van a asesorar al Poder Ejecutivo para determinar la justeza y calidad de los fallos y resoluciones de los magistrados de la Corte Suprema. En respuesta velada al reclamo de Lobo, el presidente de la Corte, el magistrado Rivera Avilés, ha dicho que “*es cierto, sólo Dios es el Supremo, pero él nos enseña que se debe respetar la Ley...*” Todo indica que se avecinan nuevos choques y desencuentros entre Casa Presidencial y el Poder Judicial, lo que, en definitiva, habrá de redundar en mayor debilitamiento del gobierno lobista y menor gobernabilidad al interior del equipo gubernamental.

Por si fueran pocos los problemas aquí descritos, a mediados del mes trascendió la información sobre el robo de 27 fusiles lanzagranadas y bazookas (RPG 7) de los arsenales de las Fuerzas Armadas, al igual que sucedió hace algunos meses en la Policía. La gravedad del asunto contrasta con el sospechoso silencio de los militares y la relativa indiferencia del gobierno. El

---

ex presidente Manuel Zelaya, al denunciar el peligro que conlleva este robo, exigió de los militares un inmediato informe al país, la búsqueda y recuperación del armamento robado, y advirtió sobre la posibilidad de que estas armas sean utilizadas en atentados criminales contra los miembros de la oposición a medida que se acercan las fechas cruciales de las elecciones. La denuncia, a pesar de su seriedad y alarma, no ha provocado ninguna respuesta oficial.

A mediados del mes, el día 14, se desencadenó la tragedia: un incendio en la granja penal de Comayagua destruyó totalmente las instalaciones penitenciarias y provocó la muerte de al menos 360 reclusos de los casi 800 que se encontraban en ese momento en ese centro de detención. El país quedó virtualmente paralizado entre el estupor y la impotencia. El mundo quedó horrorizado. Sin embargo, para quienes conocen el lamentable Estado en que se encuentran los 24 centros de reclusión penal que existen en el país (curiosamente sólo dos, uno de ellos el de Comayagua, se considera que reunían las condiciones mínimas para funcionar como tales), lo sucedido no es una sorpresa. De hecho, ya desde el año 2010, el Consejo de ministros había declarado el Estado de emergencia en el mal llamado “sistema” penitenciario y había ordenado tomar cartas en el asunto. Nada se hizo; la situación siguió agravándose hasta que desembocó en una nueva tragedia (en 2004 murieron más de cien reclusos en otro incendio similar, en San Pedro Sula, y antes habían muerto más de ochenta presos en la cárcel El Porvenir de la ciudad de La Ceiba).

La situación de las cárceles hondureñas es más que lamentable. Con capacidad para unos 8,280 reos, albergan a 12,972, de los cuales, el 52% no han sido ni siquiera formalmente condenados por sentencia judicial. A esta situación de ambigüedad y vacío jurídico, se suma la sobrepoblación carcelaria y el deficiente sistema de administración del llamado “ocio penitenciario”. Todo ello encerrado en un marco de escandalosa corrupción que involucra a las autoridades penitenciarias, los jefes policiales, los custodios, los pandilleros, los jefes del crimen organizado y a todos los reclusos en general.

Para rematar la tragedia, cuatro días después, el 18, ardieron tres de los principales mercados de la ciudad capital, generando el pánico colectivo, escenas de terror y angustia junto a pérdidas valoradas en muchos millones de dólares.

Los incendios opacaron en alguna medida otros temas de mucho interés y vigencia en la agenda nacional. Para el caso, el tema de la reforma policial. Aunque el Congreso Nacional aprobó el último día de enero el decreto legislativo que crea la Comisión Nacional de la Reforma del Sistema de Seguridad, hasta la fecha el texto de ese decreto ni siquiera ha sido publicado en

el diario oficial La Gaceta, es decir no tiene vigencia plena. El gobierno, a pesar de los reclamos y presiones de la comunidad universitaria, no ha mostrado mayor interés ni celeridad alguna para proceder a nombrar los miembros (dos extranjeros y tres nacionales) que habrán de integrar la importante Comisión. Pareciera que el tema se va evaporando lentamente del escenario y que la depuración de la policía y la reforma del Sector seguridad van perdiendo fuerza e interés en el quehacer gubernamental.

Y todo este descalabro se produce en momentos en que el país atraviesa por una grave crisis de sus finanzas públicas, las que, según el saliente tesorero general Francisco Cerrato, *“se encuentran en quiebra; pagamos cinco mil millones de lempiras al año por concepto de servicio a la deuda externa y ello, inevitablemente, genera más deuda interna”*. Dicho esto, el Tesorero interpuso su renuncia al cargo y en su lugar fue nombrada la señora Maritza Alvarado.

Arturo Alvarado, ex ministro de Finanzas en el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) y uno de los más respetados expertos financieros del país, advirtió sobre los peligros de la deuda interna y su crecimiento incontrolado: la deuda interna, según Alvarado, representa ya el 44% del total de la deuda pública (externa e interna) y los intereses que pagamos por ella significan un alarmante 81% de todos los intereses de la deuda. El déficit fiscal del gobierno central osciló entre 4,2 y 4,4%, a pesar de que la meta pactada con el Fondo Monetario era de 3,9%. Hay un exceso de unos mil cien millones de lempiras y no aparecen fuentes seguras para financiarlo. La recaudación fiscal en el año pasado no alcanzó las metas fijadas (53 mil millones de lempiras), faltaron unos mil quinientos millones. Seguimos gastando mucho e invirtiendo poco. Cada año el presupuesto general de la nación se incrementa en un diez por ciento. Las perspectivas fiscales son poco halagadoras y estimulantes.

Quizás para salir un poco al paso de esta preocupante situación, el gobierno presentó el día 07 un llamado *“Acuerdo Nacional por un crecimiento económico con equidad social”*, más conocido como *“Plan Anticrisis”*, cuyas metas, aunque parezcan demasiado ambiciosas, se resumen así:

- a) Una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto equivalente al 3,6% (el PIB de 2011 ascendió a 17,344 millones de dólares, es decir unos 334 mil millones de lempiras, un 4% más de lo proyectado por el Banco Central para este año 2012).
- b) Aumentar en 10,5% la inversión privada.
- c) Garantizar atención financiera y técnica a una 7,500 microempresas, y

d) Reducir los índices de “pobreza extrema” de 39 a 35%.

Las remesas recibidas en el año 2011 sumaron 2,861.7 millones de dólares, equivalentes a un 16,5% del PIB, más del doble de lo que significaron las exportaciones de café (1,200 millones de dólares en el mismo año).

La Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó el país entre el 30 de enero y el 09 de febrero se marchó un tanto desilusionada. En su habitual Comunicado de prensa al momento de partir, en medio de los eufemismos protocolarios y los malabarismos lingüísticos, declaró directamente que el gobierno “*no ha cumplido las metas del programa económico*”, hay un exceso en el gasto público y un preocupante déficit en las finanzas del Estado.

Sin embargo, a pesar de estas señales de advertencia y avisos premonitorios, el gobierno al parecer realizó dos millonarias compras de armas en el Estado de Israel durante el año pasado: tres mil fusiles “*Tabor II*” en dos compras separadas, una por 45 y otra por 48 millones de lempiras, lo que hace un total de 93 millones, cuyo diez por ciento de posible comisión coincide curiosamente con el soborno pagado por un reconocido lavador de dólares del crimen organizado a un ministro del gobierno por la suma de 450 mil dólares en el último trimestre del año pasado.

# MARZO

## 2012

---

### La situación política

**A**tribulado por las disputas internas en el seno del gabinete de gobierno y entre los principales funcionarios de su equipo administrativo, el presidente Porfirio Lobo hizo un llamado público a sus colaboradores para que *“no me conviertan el gobierno en un campo de batalla electoral”*, al mismo tiempo que reiteró su advertencia de despedir de sus cargos a quienes insistan en mezclar la política oficial del Estado con las reyertas y trifulcas propias de las diferentes facciones en que está actualmente dividido el partido de gobierno.

Pero el presidente no se ha quedado sólo en las palabras. En este mes separó de su cargo al influyente ministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), el aspirante presidencial y ex alcalde capitalino Miguel Rodrigo Pastor, uno de los tres precandidatos fuertes para convertirse en el nominado oficial del partido Nacional (PN) en las elecciones generales de noviembre del próximo año. En su lugar fue nombrado Miguel Gámez, ingeniero y diputado, coordinador regional en occidente (Departamento de Intibucá) de la campaña del también precandidato Juan Orlando Hernández (JOH), hasta el momento el aspirante preferido del presidente Lobo.

La salida de Pastor, interpretada por éste como un acto de represalia política por parte del dúo Lobo/Hernández, ha desatado una guerra de mutuas acusaciones dentro del PN, cuando los tres aspirantes principales (Pastor, Hernández y Ricardo Álvarez, el actual alcalde capitalino) se recriminan unos a otros por supuestos actos de discriminación y hostigamiento en contra de sus partidarios y activistas, incrustados casi todos dentro de las planillas o nóminas del presupuesto estatal. Tanto Pastor como Álvarez coinciden en culpar a Hernández por lo que consideran una campaña de persecución política en contra de sus seguidores y, al mismo tiempo, reprochan al presidente Lobo su evidente preferencia por el denominado *“delfín”*, es decir JOH.

---

Las cosas están que arden dentro del partido de gobierno. Por el momento, Pastor y Álvarez han conformado una frágil alianza política, que cuenta con una veintena de diputados en el Parlamento, para enfrentar las embestidas de JOH. Sin embargo, tal alianza es efímera y muy pronto habrá de romperse cuando se desate con toda su furia la campaña electoral para escoger, en un torneo interno, los futuros candidatos (presidente, Diputados y alcaldes) que habrán de competir en nombre del PN en las elecciones generales de noviembre de 2013. Por el momento, las encuestas favorecen ya sea a Pastor o a Álvarez, relegando siempre a JOH al tercer lugar. Sin embargo, aparte de la precariedad de los datos y el carácter dudoso de las encuestas comerciales en Honduras, no se debe descartar que todavía faltan ocho meses para las elecciones internas y que JOH dispone, sin control alguno, de los millonarios recursos del presupuesto del Congreso Nacional, utilizados en abundancia condenable para financiar sus actividades proselitistas personales.

Los conflictos internos del PN se reflejan, como es lógico, en el accionar y funcionamiento del propio gobierno. Lo debilitan y le complican su desempeño. Además de Pastor, por ejemplo, también ha abandonado el equipo gubernamental Roberto Ordóñez, quien se venía desempeñando como Viceministro de Planificación y cooperación externa. El controversial Viceministro de cultura y deportes, Godofredo Alvarado, uno de los activistas más conocidos del PN, también ha sido destituido y obligado a salir por la puerta de atrás del gabinete de gobierno. Por si todo esto fuera poco, el presidente Lobo ya ha anunciado que en los próximos días se producirán nuevas destituciones o rotaciones dentro de su equipo de gobierno.

La convocatoria anual, usualmente en el mes de marzo, de la Convención Nacional del PN, máximo órgano de decisión dentro del partido, sirvió de marco para mostrar las profundas rupturas que existen en el seno del partido gobernante. Aunque JOH se salió con la suya y logró convocar la Convención en marzo, contra la oposición cerrada de Pastor y Álvarez que proponían posponerla para otra fecha, el presidente del Congreso se vio obligado a hacer concesiones, suspender la reunión y convocarla para finales del mes de abril en La Ceiba, un territorio en donde sus partidarios son más fuertes que sus adversarios. El otro tema que los ha dividido recientemente es el de la posible creación de un Tribunal Constitucional que sustituya a la actual Sala Constitucional que opera dentro de la estructura de la Corte Suprema de Justicia y, por lo mismo, bajo el control de sus actuales magistrados, los mismos que han declarado inconstitucionales varias leyes que el Congreso, por iniciativa del Poder Ejecutivo, ha aprobado recientemente. Tanto Lobo como Hernández están molestos con la actitud de la Corte Suprema de Justicia y han planteado la necesidad de crear el Tribunal Constitucional, una figura jurídica que, además, fue recomendada por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en su informe sobre el golpe de Estado

presentado en julio del año pasado. La creación de este Tribunal serviría para dirimir en forma democrática los conflictos que surjan entre los diferentes Poderes del Estado. Sería una medida apropiada para fortalecer la institucionalidad democrática y consolidar el Estado de derecho. Sin embargo, los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, casi todos ellos (13 de 15) seriamente comprometidos en la urdimbre ilegal que produjo el golpe de Estado del pasado 28 de junio de 2009, se oponen rotundamente a la idea y la consideran como una agresión institucional por parte de Lobo y Hernández, es decir del Poder Ejecutivo y Legislativo respectivamente. La discusión está en su mejor momento y los diputados partidarios del Tribunal aseguran que ya cuentan con la mayoría suficiente para crearlo.

Mientras el presidente Lobo libra sus propias batallas en el seno del gobierno para calmar los ánimos encendidos de los contendientes nacionalistas, al interior del propio partido también se hacen esfuerzos para devolver las aguas a su nivel. Dos influyentes ex presidentes de la república por el PN, Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) y Ricardo Maduro (2002-2006) se han reunido con los aspirantes presidenciales nacionalistas para mediar en la controversia y pedirles conservar la unidad en las filas del partido gobernante, hoy amenazada por la estridencia y virulencia verbal con que se atacan unos a otros los tres precandidatos principales: Pastor, Álvarez y Hernández. Pero, a juzgar por los hechos concretos en este mes de marzo, es evidente que la gestión mediadora de los ex presidentes todavía no produce los resultados deseados. La pelea sigue muy animada y ninguno de los contendientes parece querer hacer concesiones importantes a los demás. De continuar así, el PN saldrá muy debilitado de las elecciones internas y sus filas quedarán divididas y peligrosamente fragmentadas.

A eso precisamente le apuntan los liberales, tradicionales adversarios de los nacionalistas y ahora también los militantes del partido LIBRE (Libertad y Refundación) que dirige el ex presidente Manuel Zelaya y aglutina en sus filas a miles de liberales e independientes adversarios del golpe de Estado. El nuevo partido fue inscrito legalmente el día 13 y, cinco días antes, el 08, había recibido su personería jurídica el llamado partido Anticorrupción (PAC) que encabeza el locutor deportivo y presentador de televisión Salvador Nasralla. El día 26 fue inscrito un tercer nuevo partido, el denominado Alianza Patriótica, más conocido como el partido de los militares, que dirige el general retirado y cabeza militar visible del golpe de Estado Romeo Vásquez, actual Gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), una de las piezas mayores que han quedado en manos de los militares como recompensa por su rol en la ruptura del orden constitucional en junio de 2009. O sea que marzo ha sido un mes muy prolífico en cuanto al surgimiento legal de nuevos partidos políticos en el sistema electoral hondureño: tres nuevos partidos que se suman a los cinco ya existentes para conformar un panorama electoral más complejo y diverso, alejado cada vez

---

más del tradicional cuadro bipartidista formado por liberales y nacionalistas, que ha sido característico en la historia política de Honduras desde finales del siglo XIX. Si no está definitivamente muerto, no hay duda de que el bipartidismo político histórico en Honduras está ya muy moribundo.

La crisis que hay dentro del partido Liberal (PL), fraccionado desde la base y sin un liderazgo fuerte y convincente, es hoy por hoy la mejor prueba del lamentable Estado en que se encuentran las filas liberales desde el momento en que se produjo el golpe de Estado en junio del 2009. Dos son los principales aspirantes que en estos momentos se disputan con reales posibilidades de triunfo la nominación oficial de su partido para las próximas elecciones generales de noviembre de 2013: Yani Rosenthal Hidalgo, abogado, empresario y banquero, hijo mayor del clan Rosenthal, dueños del poderoso grupo económico Continental, y Mauricio Villeda, también abogado y militante furibundo del Opus Dei que sirvió como representante legal al gobernante de facto Roberto Micheletti en varias negociaciones políticas luego del golpe de Estado. Villeda, hijo de un ex presidente (Ramón Villeda, 1957-1963), quien fuera derrocado por los militares a través de un cruento golpe de Estado en octubre de 1963, se ha convertido hoy, paradójicamente, en el candidato preferido de los golpistas liberales y conservadores.

Hay otros precandidatos en el seno del PL que también aspiran a convertirse en candidatos oficiales de su partido (Edmundo Orellana, Esteban Handal, Guillermo Gaugel y hasta un Obispo jubilado, Monseñor Luis Alfonso Santos) pero sus posibilidades son menores o totalmente inexistentes. En el PN sucede lo mismo: hay otros precandidatos, especialmente una, la señora Eva Fernández, y el activista político Fernando Anduray, pero también sus perspectivas son nebulosas y lejanas.

Si nos atenemos a los resultados de varias encuestas recién divulgadas, las fuerzas principales que se disputarán el triunfo en las elecciones de noviembre del próximo año serán los nacionalistas, los liberales y los zelayistas agrupados en el nuevo partido LIBRE. Este nuevo partido desde ya ha escogido a Xiomara Castro, esposa de Zelaya, como la candidata presidencial única y sin contrincantes en las filas de la llamada Resistencia Popular, base importante del partido LIBRE.

Aunque los cálculos apuntan a favor de estas tres fuerzas políticas, no se debe subestimar el rol a desempeñar por el partido Anticorrupción dirigido por el señor Nasralla. Las encuestas muestran que tiene una buena aceptación, especialmente entre los votantes jóvenes, hastiados ya de los políticos tradicionales, que buscan nuevas opciones a través de figuras de "outsiders" de la política como es el polémico y hasta extravagante animador de televisión.

Además de los ya usuales problemas políticos, el gobierno ha debido enfrentar también las consecuencias constantes y cada vez más desagradables de la crisis imperante en el sistema de seguridad pública en Honduras. Apenas pocos días después de haber llegado a un *“arreglo amistoso”* con la parte demandante (familiares de los 104 prisioneros muertos en un incendio en la cárcel de San Pedro Sula en el año 2004) en las instancias de la Corte Interamericana de Justicia, el gobierno debió enfrentar por enésima vez una nueva crisis penitenciaria, también en el penal de San Pedro Sula, cuando una reyerta entre reclusos produjo, el día 29, la muerte de trece de ellos en condiciones que más parecían un ritual satánico (desmembramiento de cuerpos y decapitación con arma blanca).

El colapso del mal llamado *“sistema”* penitenciario hondureño (en realidad, se trata de un simple conjunto de centros de reclusión, la mayoría de los cuales no reúnen ni las mínimas condiciones para ser considerados como tales) sólo es parte del fracaso general del sistema completo de seguridad pública actualmente vigente. Precisamente para hacer frente a esta crisis, el gobierno decidió crear mediante un decreto legislativo (el 04-2012) la llamada Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), la que quedó integrada por cinco miembros, dos extranjeros y tres nacionales. Estos últimos -los representantes locales- fueron juramentados por el presidente Lobo el pasado día 20 (Víctor Meza, Coordinador, Matías Funes y Omar Casco). Su función principal será la de *“diseñar, planificar y certificar el proceso de reforma integral de la seguridad pública que incluye la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, así como las recomendaciones para la readecuación de la normativa legal relacionada... La Comisión deberá informar cada cuatro meses al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad los avances obtenidos en su desempeño”*.

El tema de la seguridad, como es lógico suponer, ha estado presente en la agenda cotidiana del gobierno y de la sociedad a lo largo de todo el mes. La visita de dos importantes representantes estadounidenses en menos de dos semanas, es una muestra del interés que el tema despierta entre los aliados norteamericanos de la Administración lobista: el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, llegó el día 06 y 20 días después visitó Tegucigalpa William Brownfield, secretario adjunto para asuntos internacionales de narcóticos, conocido por la prensa como *“Zar antidrogas”*. Biden abordó los temas de la seguridad regional con los presidentes centroamericanos en Tegucigalpa, aprovechando la condición de que Honduras ejerce en estos momentos la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Demandó con urgencia la elaboración de planes concretos de seguridad regional, aunque también recibió los reclamos de los gobernantes centroamericanos por la lentitud con que la comunidad internacional desembolsa los recursos prometidos (en junio de 2011, en la reunión de Guatemala, se comprometieron 1,930 millones de dólares para financiar 22

proyectos. Ya están aprobados totalmente ocho de esos 22 proyectos y se requieren 330 millones de dólares pero, al parecer, sólo se han desembolsado 80 millones). En su reunión bilateral con el presidente Lobo, Biden trató temas más específicos: los posibles candidatos a futuras extradiciones hacia Estados Unidos y la utilización de los dos antiguos convenios de extradición firmados el 15 de enero de 1909, uno, y el 21 de febrero de 1927, el segundo (el artículo 1 de este último dice textualmente *“Queda adicionada la lista de delitos antes referida, con los siguientes hechos punibles: delitos contra las leyes para supresión del tráfico de productos narcóticos”*).

Brownfield fue muy específico al momento de calificar la gravedad de las amenazas. Luego de señalar a Honduras y Guatemala como los *“dos países clave”* en cuanto a la seriedad de la crisis, no vaciló al momento de decir que *“Honduras y Estados Unidos enfrentan dos crisis igualmente peligrosas: la violencia y el narcotráfico”*, al tiempo que advirtió: *“Ahora sí pasaremos a la acción”*.

Días después de estas visitas, el lunes 26, el presidente del Poder Legislativo, Juan Orlando Hernández, viajó a Washington para explicar a senadores y representantes amigos los esfuerzos que está haciendo Honduras en materia de lucha contra las drogas (el día 13, un grupo de 94 senadores y representantes del Congreso estadounidense habían enviado una carta pública a la Secretaria de Estado Hillary Clinton demandando la cancelación de la ayuda militar y policial a Honduras, en virtud de las reiteradas violaciones a los derechos humanos).

El Canciller Arturo Corrales viajó unos días antes para explicar a las autoridades norteamericanas una propuesta de plan que Honduras ha diseñado para enfrentar con más éxito el problema del intenso tráfico de drogas. El Plan consiste en lo siguiente:

- a) Construir un *“escudo”* para impedir el ingreso de la droga. Estados Unidos se encargaría de vigilar las fronteras marítimas y aéreas de Honduras para evitar la entrada de drogas al territorio nacional.
- b) Honduras se compromete a impedir la salida de la droga que logre entrar al territorio nacional.
- c) Mejorar la efectividad de los operadores de justicia (policías, fiscales y jueces).
- d) Fortalecer las instituciones democráticas.
- e) Adoptar fuertes medidas anticorrupción.

- f) Proteger y respetar los derechos humanos, y
- g) Realizar un efectivo combate contra la pobreza.

En el ámbito de los puntos C, D y E el gobierno espera que la recién creada Comisión para la Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) pueda hacer un buen trabajo.

Aunque los norteamericanos no han contestado afirmativamente a esta propuesta hondureña, tampoco la han rechazado y, antes bien, han celebrado que al menos ya exista un “*plan*” sobre el cual trabajar en forma conjunta.

Durante la próxima reunión de la Cumbre Iberoamericana a celebrarse en Colombia, en la ciudad puerto de Cartagena de Indias, en la siguiente semana, el gobierno hondureño expondrá las ideas básicas de su propuesta antidrogas, fundamentándola en el principio de la “*responsabilidad compartida*”, para que los países ricos y más consumidores aporten más recursos a los países pobres que sirven de tránsito y “*ponen los muertos*” causados por las guerras de los carteles internacionales de las drogas.

# ABRIL 2012

---

## La situación política

**T**al como se había previsto, las manifestaciones y marchas para conmemorar el 1º de mayo, día de los trabajadores, se convirtieron esta vez en una impresionante demostración de fuerza por parte del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y el nuevo partido político recién inscrito legalmente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el partido Libertad y Refundación, más conocido por sus siglas de LIBRE.

Los adversarios del golpe de Estado del 28 de junio del 2009 y, por lo mismo, casi todos ellos partidarios del matrimonio formado por Manuel Zelaya y Xiomara Castro, organizaron un impresionante desfile de trabajadores urbanos y rurales, profesores de educación primaria y secundaria, grupos étnicos de todo tipo, estudiantes, pobladores de los barrios marginales, profesionales de clase media, artistas, feministas, defensores de derechos humanos, ecologistas y, en fin, toda gama de representantes de los más diversos movimientos sociales y variopintas organizaciones de la sociedad civil hondureña, que colmaron las calles de las principales ciudades del país.

Lo que antes era una tradicional celebración anual que solía convocar básicamente a los sindicatos y algunas organizaciones campesinas y gremios profesionales, en esta ocasión se convirtió en una formidable demostración política en contra del gobierno nacionalista que preside Porfirio “Pepe” Lobo. Los desfiles del Primero de Mayo fueron esta vez una especie de desafío político lanzado desde la oposición zelayista, una prueba de fuerza para demostrar que el FNRP y LIBRE están dispuestos a competir en serio y ganar la batalla de las urnas frente a los partidos políticos tradicionales en las próximas elecciones generales. El FNRP y LIBRE se mostraron en ese día como la única opción opositora real al gobierno.

No en balde la principal oradora de la concentración masiva fue la esposa del ex presidente Manuel Zelaya, la señora Xiomara Castro de Zelaya, convertida hoy, por obra y gracia de la vorágine producida por el golpe de Estado, en una lideresa de masas y candidata única e indiscutible del partido

LIBRE a la presidencia de la República. Su encendido discurso, dedicado a condenar las políticas neoliberales y proclamar la necesidad del “*socialismo democrático*”, fue la pieza clave de las manifestaciones que celebraron el día de los trabajadores en Honduras.

Las decenas de miles de manifestantes en las diferentes ciudades del país constituyen una prueba real del deterioro que ha sufrido el esquema bipartidista en el sistema político de Honduras. Pero, además, son una muestra del alto nivel de politización y, hasta cierto punto, también de ideologización, que presenta la dinámica de la conflictividad social en estos momentos. Cada vez es más evidente que los diferentes conflictos sociales que surgen y se desarrollan en los más diversos puntos del territorio nacional, con mucha frecuencia se contaminan y confunden casi de inmediato con la lucha política que se libra cotidianamente en el escenario nacional.

Política y conflictividad social se entremezclan y funden creando una base peligrosa para la gobernabilidad democrática en Honduras. Los más recientes acontecimientos en el agro nacional así lo demuestran. Veamos algunos ejemplos:

En la madrugada del día 18, curiosamente el día dedicado a la lucha por la tierra a nivel internacional, ocho organizaciones campesinas llevaron a cabo una masiva invasión de tierras en cinco de los 18 departamentos en que se divide el territorio nacional. Doce mil hectáreas fueron ocupadas sorpresivamente por unas tres mil familias, movilizadas en forma sincronizada y discreta por líderes agrarios como Rafael Alegría, el principal representante en Honduras de la organización internacional Vía campesina. Además, Alegría es uno de los dirigentes del FNRP y se ufana de ser, cosa cierta, uno de los más cercanos amigos hondureños del presidente venezolano Hugo Chávez.

Muchas de las tierras ocupadas, especialmente en el departamento de Cortés (municipio de San Manuel), están sembradas de caña de azúcar y pertenecen al grupo económico Continental, propiedad del banquero y político liberal Jaime Rosenthal. Su hijo, Yani, es hoy uno de los dos más fuertes contendientes (el otro es Mauricio Villeda) por la nominación presidencial dentro del partido Liberal (PL). Los Rosenthal movieron sus poderosas influencias dentro del sistema judicial hondureño y lograron casi de inmediato las órdenes de desalojo correspondientes, las que fueron ejecutadas al día siguiente por militares y policías enviados rápidamente a la zona del conflicto. Los campesinos fueron desalojados pero dos días después volvieron a invadir las plantaciones de caña. Nuevo desalojo, esta vez más violento y efectivo, que concluyó con un centenar de invasores en la cárcel. La situación sigue tensa y, de continuar así, podría convertirse en un conflicto agrario.

rio de alta intensidad, similar a los que se producen en la zona del Bajo Aguán, en la costa norte del país.

Los empresarios acusaron a Rafael Alegría de ser el promotor de las invasiones y culparon a César Ham, Director del Instituto Nacional Agrario (INA), por tolerar y estimular las “*tomas*” de tierras. Ham se defendió acusando a Alegría, antiguo compañero suyo en el partido Unificación Democrática (UD) y hoy rival confrontado por la conflictividad agraria y las diferencias políticas al interior del FNRP. En consecuencia, el conflicto agrario, surgido por las tomas sorpresivas de tierras en la mañana del día 18, quedó convertido en una pelea partidaria entre dirigentes de la vieja izquierda política, algunos de ellos reciclados al interior de la oposición zelayista, es decir del FNRP y de LIBRE, viejos líderes sindicales y empresarios ofendidos y amenazados por la vocación invasora que se ha despertado otra vez en el seno de las organizaciones campesinas.

Todo esto sólo indica que la conflictividad social tiende a crecer y volverse cada vez más intensa y amenazante, contagiándose en forma creciente por las disputas políticas que dividen y confrontan a los hondureños en la pelea proselitista de cara a las próximas elecciones internas de noviembre de este año y las generales del año 2013. En los próximos meses seguramente se producirán nuevos conflictos en el agro, generando más incertidumbre y confrontación social en la arena política.

Mientras esto sucede, las diferentes encuestas de opinión pública que se llevan a cabo con demasiada frecuencia en el país, casi todas ellas, con pequeños márgenes de diferencia, coinciden en señalar a Xiomara como la candidata más popular y aceptable por parte de los electores hondureños. Las últimas dos encuestas, la de la empresa Paradigma y la del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), coinciden en destacar a la ex primera dama como la candidata favorita para ganar las elecciones presidenciales en noviembre del próximo año. En ambas encuestas, la popularidad de la esposa de Zelaya oscila entre 16 y 21 puntos, muy por encima de su seguidor más cercano, el presentador de televisión Salvador Nasralla del partido Anticorrupción (PAC), que muestra apenas un índice de aceptación de 10 puntos, revelando, además, una preocupante tendencia a la baja.

Las evidentes preferencias populares a favor de la candidata de LIBRE generan, como es lógico, la preocupación acuciante de las élites políticas y empresariales del país. Un triunfo de Xiomara es, a los ojos de los ricos de Honduras, el retorno del populismo de Zelaya y la irrupción violenta y caótica de los movimientos sociales contestatarios en el escenario del poder gubernamental. Algo totalmente inaceptable para la oligarquía criolla, incapaz de comprender y aceptar la necesidad que tiene el sistema político hondureño de apertura y reformas.

La posibilidad de un triunfo o, al menos, la adquisición de una fuerza política considerable al interior del Congreso Nacional por parte de LIBRE, crean confusión y miedo entre las cúpulas de los partidos políticos tradicionales y al interior de las cámaras empresariales, de los círculos religiosos fundamentalistas y, por supuesto, en el seno de los jefes militares no constitucionalistas. Todo ello crea un cuadro de inestabilidad y peligro, en el que la gobernabilidad estará en juego y la permanencia del Estado de derecho se verá constantemente amenazada.

Por primera vez, en más de cien años, el sistema político bipartidista, base y sustento de la antigua estabilidad política de Honduras, está hoy realmente en peligro de sucumbir. Nunca antes las élites políticas y económicas de Honduras habían visto su poder amenazado de una manera tan directa y precisa, en el marco de las mismas leyes y procedimientos que dicta el sistema democrático tradicional. Con las mismas reglas y en el mismo clima y modelo político, la oposición zelayista se presenta hoy como una real alternativa de poder político y como una posibilidad cierta de alterar de manera radical la normatividad y el estilo del juego político tradicional en Honduras. Es algo nuevo, novedoso y original que, como es de suponer, despierta miedo, incertidumbre y preocupación entre los viejos actores de la política local. El país está al borde de cambios muy importantes, algunos de los cuales han comenzado ya.

La situación se vuelve todavía más preocupante porque los viejos y tradicionales actores del escenario político, los partidos Liberal y Nacional, están atravesando una gravísima crisis política interna, que los mantiene divididos, frágiles y vulnerables. En el caso específico de los liberales (existe una fuerte corriente y base de los llamados "*liberales en resistencia*", fuerza política de Manuel Zelaya al interior del partido LIBRE, que no responden ya a las autoridades tradicionales del partido), su división es más que evidente. Dos candidatos "*fuertes*" se disputan la nominación presidencial: Yani Rosenthal, un "*hijo de papá*", banquero y heredero principal del Grupo económico Continental (propiedad de la familia Rosenthal), y Mauricio Villeda, otro "*hijo de papá*", ya fallecido, ex presidente liberal, reformista y modernizante, que gobernó desde 1957 hasta 1963, año en que los militares lo derrocaron mediante un violento golpe de Estado. Los dos muestran bajos y similares niveles de aceptación popular (tienen un "*empate técnico*" en las encuestas) al interior de su propia formación política (el PL) y, por lo mismo, ninguno alcanza los niveles de popularidad que actualmente muestra la ex primera dama Xiomara Castro de Zelaya.

En el caso del partido Nacional (PN), las cosas andan peor. Ahí el nivel de fragmentación y ruptura es tan alto que ni siquiera han podido celebrar en forma conjunta la tradicional Convención anual del partido. Al final, el evento, que ya había sido pospuesto el pasado mes de marzo, se llevó a cabo el

día 29 en la Ciudad de la Ceiba sólo con la presencia de los partidarios de Juan Orlando Hernández (JOH), presidente del Congreso Nacional y el precandidato favorito del presidente Porfirio Lobo para convertirse en el nominado presidencial del PN y, si la suerte le favorece, en su eventual sucesor. Los otros aspirantes fuertes, el alcalde capitalino Ricardo Álvarez (hombre ligado al grupo económico del banco Ficohsa) y el ex ministro de Obras Públicas y Transporte, Miguel Pastor, se negaron a asistir a la Convención que, de antemano sabían, estaba controlada ya por los seguidores y activistas del presidente del Parlamento, un hombre que dispone de todos los recursos del Congreso Nacional y los utiliza descaradamente en su publicidad electoral y en la campaña abierta de proselitismo personal. La fracasada Convención del PN, a la que también asistieron el presidente Lobo y los ex presidentes nacionalistas Rafael Leonardo Callejas y Ricardo Maduro, fue, ya se sabe, un intento fallido por favorecer la unidad del partido, suscribiendo una especie de pacto de alianzas y mutua solidaridad. Tanto Álvarez como Pastor rechazaron la “generosa” oferta unitaria de Hernández (JOH) y optaron por una virtual ruptura con el candidato que ya todos consideran “oficialista”. Esta división al interior de las filas del partido de gobierno ha debilitado sus fuerzas y colocado al presidente Lobo en una situación en extremo difícil y conflictiva.

La situación ha alcanzado niveles tan altos y preocupantes, que el presidente Lobo se ha visto obligado a desafiar a las autoridades de su propio partido y reclamarles en público por su deslealtad al gobierno. “¡Déjenme en paz, no se metan conmigo!”, clamó en público el presidente de la República, para luego agregar, en tono de advertencia o amenaza: “tengo mucho de qué hablar...”. Lobo resiente que lo involucren en las peleas internas del PN para escoger al candidato presidencial. Sus principales adversarios (Álvarez, que además es presidente del Comité Central del partido, y Pastor, que es uno de los tres más fuertes aspirantes) le recriminan su velado o descarado apoyo al candidato JOH, a quien todos denominan “el delfín de Pepe Lobo”, y, por lo mismo, le acusan de parcialidad y ventajismo en la lucha política interna del PN.

Ante estas acusaciones, el presidente Lobo se defiende atacando. Ha nombrado al frente del Ministerio de Educación a Marlon Escoto, un declarado partidario del ex presidente Manuel Zelaya y, por lo mismo, enemigo del golpe de Estado y amigo de la llamada Resistencia Popular. Escoto ha destapado sin piedad la olla de la corrupción que existe al interior del sistema educativo y que involucra a dirigentes gremiales del magisterio, funcionarios estatales y, por supuesto, diputados de los dos principales partidos políticos tradicionales, el Liberal y el Nacional. La reacción de los involucrados ha sido inmediata y violenta. Los diputados relacionados con el tráfico de plazas en el sistema educativo y con las prácticas clientelares en la otorgación de cargos administrativos, han pedido la cabeza de Escoto, a quien conside-

ran, no sin justa razón, como un eslabón extraño en la cadena del gobierno nacionalista. Pero Lobo no sólo lo ha respaldado sino que, además, ha dicho que *“anda buscando otro igual a él para colocarlo en el Ministerio de Salud”* e introducir el necesario orden y transparencia en el sistema sanitario del país. La alusión directa, más que directa, al actual ministro de Salud, Arturo *“Tucky”* Bendaña, un rico empresario de clínicas médicas privadas de San Pedro Sula y hombre de confianza del ex presidente Ricardo Maduro, ha motivado la respuesta de éste poniendo a disposición del presidente su renuncia. No podía esperarse más. El presidente Lobo, además, ha agregado una afirmación casi provocadora, al decir: *“No me importa si el nuevo funcionario es o no de la Resistencia, pasiva o activa, liberal o cachureco, lo que quiero es que ponga orden en el sistema de salud”*. De esta forma, Lobo traza las líneas que lo empiezan a separar, quizás para siempre, de la vieja guardia de su partido, de los antiguos dirigentes conservadores y tradicionales. Lobo escoge el camino de la ruptura, de la búsqueda de la modernidad y la apertura del sistema político, el camino de la reforma del Estado y el rechazo a las viejas prácticas burocráticas del clientelismo y el favoritismo a la masa activista y clientelar del partido que ganó las elecciones. Es, en esencia, el gradual abandono de la antigua visión patrimonial del Estado, el aparato *“botín”*, que se debe distribuir y repartir entre los ganadores del torneo electoral. El presidente Lobo empieza a entender que, para hacer las reformas y transformar el país, es necesario romper con la tradición y la visión patrimonial del Estado.

Pero todo esto tiene un costo. Lobo deberá pagarlo. Los grupos más conservadores del país, algunos de ellos agrupados en la llamada Unión Cívica Democrática (UCD), que aglutina a militares retirados y a empresarios de la ultraderecha, convocaron a una conferencia de prensa para *“advertir”* al presidente de la República sobre los *“riesgos”* que supone querer reformar la Constitución y modificar el *“rol de las Fuerzas armadas”*. ¡Vaya a saber uno qué quieren decir con eso!. Pero lo cierto es que están ahí, amenazantes y desafiantes, advirtiéndole al presidente de la República (¡nada menos que a él!) que hay ciertos límites que no debe sobrepasar, que hay ciertas fronteras que las dictan ellos y que el presidente no puede ni debe ir más allá, so pena de incurrir en graves violaciones a las reglas tradicionales del juego político local. Son los secuestradores del Estado.

Así son las cosas en el país. Así están los retos y desafíos planteados. El gobierno puede y debe salir adelante, cada vez con más problemas sociales, políticos y, sobre todo, fiscales. A duras penas podrá concluir su periodo gubernamental. No podrá lanzar grandes iniciativas con posibilidades reales de éxito. Lo intentará, quizás, pero no lo logrará. Es un gobierno de transición que, lamentablemente, no lo ha entendido así, al menos todavía.

# MAYO 2012

---

## La situación política

**M**ayo ha sido un mes particularmente intenso y agitado desde el punto de vista político y social. Comenzó con los desfiles del Primero de Mayo, día internacional de los trabajadores. A diferencia de años anteriores, esta vez la celebración presentó dos características que la hacen singular y especial: a) su carácter masivo, es decir la participación de miles y miles de manifestantes en los diferentes centros urbanos de todo el territorio nacional, y b) su marcado carácter político, es decir la naturaleza política de sus principales demandas y su asociación directa con el nuevo partido político recién inscrito: Libertad y Refundación (LIBRE). De hecho, en la práctica, los desfiles del día dedicado a los trabajadores se convirtieron en manifestaciones callejeras a favor de LIBRE, o sea del ex presidente Manuel Zelaya y de su esposa, Xiomara Castro, candidata presidencial única de la nueva agrupación política.

Los llamados zelayistas, agrupados en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y en su expresión política, el partido LIBRE, dieron una demostración de su fuerza y organización, movilizando a decenas de miles de partidarios y simpatizantes en todo el país. Los partidos rivales, tanto tradicionales como los recién llegados, no han podido ocultar su sorpresa y preocupación ante la evidente fuerza movilizadora de los llamados “*resistentes*”. Los grandes medios de comunicación impresos, especialmente La Prensa y El Heraldo (Grupo Canahuati), así como La Tribuna (ex presidente Carlos Flores Facussé), han mostrado su disgusto y recelo condenando la llamada “*politización*” del movimiento obrero en particular y de los movimientos sociales en general.

La vinculación de LIBRE con las organizaciones sociales y, en especial, con los gremios de maestros y centrales sindicales y campesinas, es más que evidente y ayuda a explicar la fuerza organizadora y la indudable capacidad de movilización que muestran los seguidores del ex presidente Zelaya.

Pero mayo no sólo ha sido eso. En este mes también se han producido cambios importantes al interior del Sector seguridad, especialmente en el

seno de la Policía Nacional (PN). Por tercera vez en los últimos seis meses el presidente Porfirio Lobo ha debido remover a la cúpula policial, en un justificado afán por llevar adelante la depuración de la PN y la recuperación de la confianza pública a favor de los policías.

A mediados del mes, el presidente Lobo decidió súbitamente separar de su cargo al Comisionado Nacional Ricardo Ramírez del Cid (V promoción) de su cargo como Director Nacional de la Policía. Ramírez, a su vez, había sustituido a finales del año pasado al también Comisionado José Luis Muñoz Licón, quien debió pasar a segundo plano en compañía de sus colegas de promoción (la IV). A Ramírez le sustituye el ahora Comisionado Juan Carlos Bonilla (VI promoción), más conocido en el mundo policial como “*El tigre Bonilla*”, un hombre de carácter fuerte y aguerrido, famoso por sus procedimientos un tanto arbitrarios e irregulares para combatir la delincuencia. Sin embargo, a Bonilla sólo se le reprochan sus métodos de “*limpieza social*” entre los delincuentes, pero nadie lo acusa de vínculos o conexiones con el crimen organizado o las bandas delincuenciales del narcotráfico.

Para poder llevar adelante su tarea de limpieza al interior de la policía, el gobierno, vale decir el presidente Lobo y el Congreso Nacional, dotó a Bonilla de una ley especial para la depuración policial, un valioso instrumento legal que virtualmente anula todos los derechos de los futuros despedidos a reclamar audiencias de descargo, juicios previos o prestaciones sociales de cualquier tipo. Como bien lo dijo el propio Bonilla: “*se acabó la antigüedad*” y los privilegios indebidos derivados de la misma.

Haciendo uso de estas facultades, El Tigre y el ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla (no son parientes) procedieron a remover -otra vez- la cúpula policial y colocaron en los altos cargos de dirección a los hombres de confianza del nuevo Director, casi todos ellos pertenecientes a la promoción del Tigre, la VI promoción de la Academia Nacional de Policía (ANAPO). Pero esta vez, los nombramientos son provisionales, hasta tanto los nuevos directores no se hayan sometido a las llamadas “*pruebas de confianza*” (toxicológicas, psicométricas, poligráficas y la correspondiente declaración jurada de sus bienes). Sólo aquellos que pasen airoso esas pruebas podrán optar a cargos de dirección y pertenecer a las filas de la policía. La nueva ley, cuya duración será sólo de 90 a 180 días, por su carácter excepcional, permitirá acelerar el proceso de depuración y se estima que excluirá de la policía a centenares o miles de sus actuales agentes.

La buena coordinación existente entre el Poder Ejecutivo (presidente Lobo) y el Congreso Nacional (presidente Juan Orlando Hernández) ha hecho posible la rápida adopción de leyes y decretos que faciliten los procesos de adentamiento al interior de la policía y las reformas necesarias en todo el sistema de seguridad del país. En los próximos meses se sabrá si todos estos esfuerzos, tanto legislativos como ejecutivos, han sido suficientes para

---

mejorar los índices de seguridad ciudadana y reducir los elevados niveles alcanzados por la criminalidad, tanto común como organizada. La población, entre expectante y escéptica, espera ver resultados concretos en el corto plazo.

Dentro de los cambios realizados en el Sector seguridad, se produjo la creación de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, cargo que le ha sido confiado al General Julián Pacheco, quien hasta la fecha y desde finales del año 2009 se ha desempeñado como jefe de los servicios de inteligencia militar. El nombramiento de un militar al frente de una dependencia tan importante y estratégica obedece a la línea seguida por el presidente Lobo para favorecer la gradual *“militarización de los asuntos de la seguridad pública”*, una línea que ha recibido fuertes críticas y rechazo tanto dentro como fuera del país.

Para fortalecer las finanzas públicas y disponer de los recursos necesarios para invertir en la seguridad ciudadana, el presidente Lobo ha debido enfrentar la oposición de los grupos empresariales que se niegan a pagar nuevos impuestos destinados a la seguridad, la llamada *“tasa de seguridad”*, despectivamente llamada por sus adversarios *“el Tasón”*. Ante el rechazo empresarial, Lobo no se ha dejado intimidar y ha ordenado revisar el régimen de exoneraciones y prebendas fiscales de que gozan esos mismos grupos empresariales y elitistas. La confrontación se va agudizando cada día más y las relaciones, otrora cordiales y fluidas entre las partes, se van crispando con fuerza creciente.

A esta crispación contribuye también la tensión que reina en el Bajo Aguán, en donde ha cobrado nueva fuerza el antiguo conflicto agrario que enfrenta a los grupos campesinos con los empresarios agrícolas encabezados por Miguel Facussé, tío por la vía materna del ex presidente Carlos Flores. Cada semana mueren más campesinos o guardias privados de los empresarios. El más reciente recuento arroja un número de 63 personas muertas desde septiembre del año 2009. El conflicto ha sido calificado como el más sangriento y prolongado en los últimos quince años en toda Centroamérica.

Como si no bastara con ello, ahora el Instituto Nacional Agrario (INA), dirigido por el político izquierdista César Ham (presidente del partido Unificación Democrática), ha decidido proceder a la expropiación de tierras cultivadas, aunque obtenidas por procedimientos de dudosa legalidad, en poder de la compañía azucarera Azunosa, una empresa en la que confluye capital hondureño (grupo Rosenthal y otros) junto a capital extranjero. Las acciones expropiatorias de Ham han provocado la furia de los grupos empresariales que califican esta actitud como una *“veleidad populista”* del gobierno de Lobo, a quien acusan de favorecer las tendencias izquierdistas en el campo agrario y copiar iniciativas similares provenientes del sur del continente (alu-

sión a los países que cuentan con gobiernos de centro izquierda en América del Sur).

Aunque parezca paradójico, pero cada vez las críticas de los empresarios a la política del gobierno se parecen más y más a las que se hacían a las iniciativas políticas del ex presidente Manuel Zelaya en los meses previos al golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Es como si la historia, en medio de su ironía cotidiana, se repitiera y renovara hechos y circunstancias ya superados.

El presidente Lobo está consciente de ese enfrentamiento inevitable y, a la vez, decidido asumirlo con toda la responsabilidad que ello supone. Recientemente dijo que se dispone a “*hacer bellezas*” en los próximos 18 meses que todavía le quedan a su Administración. Esas “*bellezas*” estarían concentradas, principalmente, en las áreas de la educación, la salud y la seguridad. En el Sector educación ha nombrado a un polémico pero muy eficiente funcionario, públicamente declarado partidario del ex presidente Zelaya y enemigo directo del golpe de Estado, quien está logrando poner orden en el caos de las planillas salariales y en la distribución de funciones y responsabilidades dentro del Ministerio. Su nombramiento ha provocado el enojo de los sectores llamados “*golpistas*” y el malestar de algunos dirigentes magisteriales que siempre se han beneficiado con el caos imperante. En el Sector salud, el presidente ya ha declarado su intención de encontrar otro funcionario igual para introducir orden y eficiencia en el sistema hospitalario del país y en el esquema de compras y adquisiciones de medicamentos. En el Sector seguridad, las iniciativas están a la vista y la reforma ya ha comenzado.

Mientras esto sucede al interior del gobierno, en el seno del partido gobernante la lucha por la nominación presidencial alcanza sus niveles de confrontación más altos y enfrenta en una pelea sin respiro a los tres grandes aspirantes: Juan Orlando Hernández, Ricardo Álvarez y Miguel Pastor. Esta lucha interna debilita al gobierno y deja a Lobo en una situación cada vez más precaria en cuanto al apoyo partidario. De ahí que no sea extraño que el presidente trate de construirse una base de apoyo social en otros ámbitos, que no son precisamente los exclusivos de su propio partido. Esas “*bellezas*” que promete hacer tienen que ver con esta búsqueda. Y esa es también la razón por la que Lobo ha pedido, casi diríamos exigido, a sus colegas de partido que no contaminen al gobierno con sus propias luchas internas y se alejen de la Administración para dirimir sus disputas proselitistas al margen del gobierno.

En el partido Liberal, otrora la principal fuerza de la oposición (hoy lo es el FNRP y LIBRE), también hay una lucha intensa por definir al nuevo candidato presidencial. Pero, en el PL, a diferencia del PN, la pelea es sólo entre dos grandes candidatos: Yani Rosenthal y Mauricio Villeda. El primero representa al Grupo Continental, un conglomerado de bancos y empresas

industriales y de todo tipo en el país, especialmente en la zona norte, mientras que el segundo aparece como un protegido del ala más conservadora y religiosa del partido. Uno de los dos será el candidato liberal a la presidencia en las elecciones generales de noviembre del año 2013, en la que participarán, por primera vez en la historia contemporánea de Honduras, nueve agrupaciones políticas, ahora que ya fue inscrito en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el noveno partido: Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER), un desprendimiento del FNRP, dirigido por el activista de los derechos humanos Andrés Pavón, personaje sinuoso y con frecuencia provocador que no esconde sus ambiciones y desmesurado afán de protagonismo. Su partido, aunque minúsculo y débil en sus estructuras organizativas, servirá para restarle votos a LIBRE y obstaculizar la candidatura de la ex primera dama, Xiomara Castro de Zelaya.

El día 17, cumpliendo con el calendario electoral, el TSE convocó oficialmente a los nueve partidos políticos a las elecciones internas (para elegir autoridades partidarias) y primarias (para escoger los candidatos a cargos de elección popular en noviembre de 2013), que deberán llevarse a cabo en noviembre de este año. Esto quiere decir que, al menos en teoría, la carrera electoral ha comenzado ya de manera legal y debidamente autorizada por el Estado. En la práctica, sabemos que tal carrera inició desde ya muchos meses atrás, en una franca y abierta violación a la legislación electoral del país.

Por si los problemas actuales no fueran suficientes, el día 11 de mayo helicópteros artillados tripulados por agentes norteamericanos de la Agencia antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, en compañía de agentes locales, ametrallaron una pequeña embarcación que transportaba a un grupo de indígenas en uno de los ríos de la Mosquitia hondureña, al confundirlos con narcotraficantes en pleno trasiego de drogas. El resultado fue trágico: cuatro personas muertas, entre ellas dos mujeres embarazadas y un niño, y varios más heridos. La protesta no se hizo esperar y los habitantes de las comunidades afectadas se rebelaron e incendiaron las viviendas de supuestos colaboradores de los narcotraficantes y de las postas policiales. Los indígenas están indignados y exigen el castigo de los responsables. El asunto no habría tenido más consecuencias que esas protestas airadas si no fuera porque los grandes medios de comunicación norteamericanos, encabezados por el New York Times, se han ocupado del tema, situándolo en el marco de la crítica a la política estadounidense antidrogas y a las tendencias a militarizar la llamada *"guerra contra las drogas"*. El gobierno, en un esfuerzo por minimizar el escándalo y cerrar el caso, guardó silencio en los primeros días pero ya no puede seguir haciéndolo. Ha prometido una investigación pero esa promesa no tiene muchos asideros y no goza de la confianza internacional. Está en un verdadero aprieto, sobre todo después que la DEA, en Washington, aceptó haber participado en la operación pero negó que sus agentes hubiesen disparado. De hecho, culpó a los agentes locales, que se

debaten en el dilema de asumir la culpa o señalar a los norteamericanos. Sea como sea el desenlace, el daño ya está hecho y el gobierno lobista ha salido muy mal parado.

### Los conflictos sociales

La conflictividad social siguió su lento pero peligroso ascenso, esta vez añadiendo el ingrediente preocupante de su rápida y abierta politización. Cada vez más los conflictos sociales derivan con demasiada rapidez en problemas y confrontaciones políticas, complicando más su manejo y dificultando su solución. La gobernabilidad política es la que sufre las consecuencias y muestra señales de mayor deterioro.

Los maestros, como siempre, siguen con sus protestas callejeras demandando el pago de salarios atrasados y las reformas de la ley que pretende introducir orden en el caos del Instituto de pensiones del magisterio, el Inprema. Se creyó que con el nombramiento del nuevo ministro de Educación, las cosas serían diferentes y los maestros volverían a las aulas y cesarían en sus marchas y protestas en las calles. Pero no ha sido así, aunque el respaldo de la población a los profesores se ha ido convirtiendo en hastío y rechazo.

Los transportistas (autobuses y taxis urbanos) han parado el tráfico vehicular en varias ocasiones, generando más desorden y confusión en las principales calles de la ciudad capital. Exigen el pago de subsidios que no siempre son tan transparentes y equitativos como deberían. En los hechos, la política de otorgar subsidios a los dueños del transporte urbano se ha convertido en una fuente inagotable de despilfarro y corrupción.

Los estudiantes de secundaria, por su parte, también se han ido a las calles a protestar por el pago de los llamados "*bonos estudiantiles*", una especie de subsidio para que paguen su transporte a los centros de estudio. Otra fuente de despilfarro de recursos y de mal manejo de los dineros públicos.

Los desalojos violentos de grupos campesinos que se han apoderado por la fuerza de predios rurales, algunos de ellos en plena producción agrícola (caso de las plantaciones de caña de azúcar), se han vuelto ya una costumbre. A cada desalojo le sigue una nueva invasión, a veces en el mismo lugar en el que previamente han sido desalojados. Es como el juego del gato y el ratón, un ciclo interminable de conflictividad agraria.

Los médicos internos del Hospital Escuela otra vez volvieron a parar sus labores exigiendo aumento en la beca mensual que el gobierno les paga. Después de varios días de huelga, en los que colapsó el sistema de aten-

ción a los pacientes, finalmente llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Salud y volvieron a sus puestos de trabajo.

Los trabajadores de la empresa estatal de energía eléctrica también han protestado en las calles y han realizado interrupciones en sus labores diarias para exigir el final del contrato de servicios con la empresa privada SEMEH (servicios de medición eléctrica), uno de cuyos propietarios es el Canciller Arturo Corrales. De acuerdo a los sindicalistas de la empresa, el Estado pierde sumas millonarias que quedan en las manos de SEMEH por un servicio deficiente y poco productivo. El Sindicato afirma estar en capacidad de sustituir a SEMEH en la prestación de esos servicios y generar más ingresos para la empresa. El presidente Lobo ha respaldado públicamente la petición sindical.

Así, entre conflictos viejos y el surgimiento de otros nuevos, el gobierno ha llegado a la mitad de su tercer año y se apresta a realizar las “bellezas” prometidas por el presidente Lobo en sus últimos 18 años de Administración. Ya veremos.

# JUNIO 2012

---

## La situación política

**J**unio es un mes con mucho significado político en la Honduras actual: se cumple el primer semestre del tercer año de gobierno del presidente Porfirio Lobo, lo que quiere decir que ya sólo le quedan 18 meses de gobierno, enfilándose hacia la salida y el final, por un lado, y, al mismo tiempo, en este mes, el día 28, se cumplieron tres años del golpe de Estado político-militar del 28J, lo que fue conmemorado por la llamada Resistencia Popular con el lanzamiento apoteósico de la candidatura presidencial de la ex primera dama derrocada Xiomara Castro de Zelaya. Dos acontecimientos muy importantes y, lo que es más, estrechamente vinculados entre sí.

Mientras el gobierno da la impresión de debilitarse en la medida que se acerca al final del mandato administrativo, la oposición representada por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y su expresión política, el nuevo partido Libertad y Refundación (LIBRE), transmiten exactamente la impresión contraria: la de fortalecerse y prepararse para recuperar el poder político arrebatado al ex presidente Manuel Zelaya hace ya tres años. La movilización gigantesca realizada a finales del mes para conmemorar el tercer aniversario del golpe de Estado y lanzar luego la candidatura presidencial de Xiomara Castro (decidida por consenso entre las cinco corrientes políticas que existen al interior de LIBRE), ha sido interpretada en el ambiente político como una de las mayores demostraciones de fuerza de la oposición zelayista, dispuesta a convertirse en una opción política de primera línea en las elecciones generales de noviembre del próximo año, dando así el tiro de gracia definitivo al bipartidismo político tradicional en el sistema de partidos de Honduras.

El discurso de la nueva candidata presidencial fue emotivo pero conceptual. Se proclamó partidaria del “*socialismo democrático*” e hizo un ferviente llamado a “*revolucionar y refundar*” el país entero, desterrando las prácticas del llamado neoliberalismo y convocando desde el inicio de su posible mandato presidencial a una Asamblea Nacional Constituyente. Llamó a desmilitarizar las políticas de seguridad y pidió a los militares retornar a los cuarte-

les y mantenerse en ellos. A los empresarios les pidió comprensión y, al mismo tiempo, el respeto debido para las nuevas políticas económicas que propone: no a los monopolios ni a los oligopolios, que permiten que muchos empresarios gocen de excesivos privilegios y se beneficien indebidamente del Estado. Proclamó la unidad de las cinco corrientes que funcionan al interior del partido LIBRE y, de paso, pidió a su esposo, Manuel Zelaya, y al periodista Esdras Amado López (propietario de Canal 36, Cholusat Sur) que la acompañen en calidad de diputados dentro de la fórmula presidencial. A Juan Barahona, uno de los líderes más radicales del FNRP y sub coordinador del FNRP, le propuso que fuera uno de sus tres Designados Presidenciales en la fórmula electoral. Su Comisión de campaña será dirigida por su esposo Manuel Zelaya, el periodista López, el dirigente Juan Barahona y los cinco coordinadores de cada una de las fracciones partidarias que componen las estructuras internas del nuevo partido político, a saber: Fuerza de Refundación Popular (Juan Barahona), Movimiento 28 de Junio (Carlos Zelaya, hermano de Manuel), Movimiento de Resistencia Progresista (Rasel Tomé), Movimiento 5 de julio (Nelson Ávila) y Pueblo Organizado en Resistencia (Mauricio Ramos).

De esta forma ha quedado conformado el *“equipo de campaña”* de la primera mujer que se convierte en candidata presidencial por consenso en este nuevo proceso electoral que deberá concluir en noviembre del próximo año. LIBRE se convierte así en el primer partido político que cuenta ya con una candidata presidencial definida.

Al evento asistieron en calidad de invitadas delegaciones del Frente Farabundo Martí de El Salvador, de organizaciones pro derechos humanos de Argentina y la hermana del presidente ecuatoriano Rafael Correa, entre otras.

Pero el gobierno del presidente Lobo se debilita, además, por otras causas que no tienen nada que ver con el crecimiento y la creciente fuerza adquirida por los partidarios de LIBRE. La lucha interna en el partido Nacional (PN, teóricamente gobernante) cada día adquiere niveles más tensos y virulentos, enfrentando en una lucha sin cuartel a tres de sus principales aspirantes a suceder al presidente Lobo: Juan Orlando Hernández (JOH), presidente del Congreso Nacional; Ricardo Álvarez, alcalde capitalino, y Miguel Pastor, hasta no hace mucho influyente ministro de Obras Públicas y hoy dedicado a tiempo completo a promover su precandidatura presidencial. Hernández, aunque cuenta con abundantes recursos provenientes del presupuesto nacional (millonarias sumas asignadas sin ningún control al *“trabajo legislativo”* del Congreso Nacional) no ha logrado, al menos todavía, mejorar su ubicación en las encuestas de opinión que lo colocan en un modesto segundo lugar (después de Álvarez) y, a veces, hasta en un tercero. El alcalde Álvarez encabeza las preferencias, al menos por ahora, aunque ya se advierten

ciertas tendencias al declive. Pastor, aunque está involucrado por entero en la promoción de su candidatura, todavía no muestra la fuerza necesaria que lo pudiera convertir en favorito.

Lobo favorece, cada vez más abiertamente, la candidatura de Hernández, su principal socio y aliado político en el gobierno. Desde el Poder Legislativo, JOH apoya casi todas las iniciativas de Lobo, en su condición de jefe del Poder Ejecutivo. Le facilita la tarea de gobernar y le asegura el respaldo político de una buena parte de la base social con la que cuenta el partido Nacional. Sin JOH, Lobo sería infinitamente mucho más débil de lo que ahora es y sus espacios de maniobra e iniciativa política serían sin duda más reducidos y vulnerables. El binomio Lobo/JOH es el que le da sustento al gobierno actual y le permite todavía conservar una cierta iniciativa política frente a sus críticos y adversarios, especialmente los grupos empresariales conservadores y la misma vieja guardia política del “*Nacionalismo*” tradicional.

Pero, a veces, las cosas no funcionan tan bien y surgen controversias que amenazan con enfrentar a los dos poderes del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo. Veamos un ejemplo: Lobo decidió hacer cambios en el área de la Educación pública, un sector increíblemente problemático y casi ingobernable, minado por las redes de la corrupción alimentadas por políticos abusivos (diputados, especialmente) y burócratas gremiales asociados a los sindicatos de maestros. Destituyó al antiguo ministro, Alejandro Ventura, un ex dirigente magisterial, abusivo y desprestigiado, militante del PN y con juicios pendientes por casos de utilización indebida de fondos de los maestros, y puso en su lugar a Marlon Escoto, un joven educador, Rector de una universidad agrícola de provincia (Departamento de Olancho, tierra de Lobo) y militante confeso en las filas de la Resistencia Zelayista. El simple nombramiento lució como una provocación política de Lobo frente a la vieja guardia conservadora de su partido, representada por el alcalde capitalino. Luego, las primeras acciones de Escoto, orientadas a limpiar la podredumbre y depurar las filas del personal educativo empleado en el Ministerio de Educación, generaron el choque y la confrontación. Los diputados nacionalistas, protectores y promotores de la corrupción en el Sector educación (contratación indebida de activistas políticos disfrazados de maestros, asignación de fondos para actividades no educativas, suplantación de nombres, concesión irregular de préstamos, etc.) protestaron contra el nuevo ministro y exigieron a Lobo su inmediata destitución, sobre todo cuando el funcionario decidió, el día 11, separar de sus cargos a doce Directores departamentales ilegalmente nombrados en esos cargos por el defenestrado ministro Ventura. Lobo resistió la embestida y mantuvo a Escoto en su puesto, incluso después de que la Corte Suprema de Justicia, en una muestra de sospechosa celeridad y diligencia, ordenara restituir a los destituidos. La pelea continúa pero todo indica que Lobo no dará pie atrás y se mantendrá en su posición.

---

Esto no es casual: el presidente Lobo está convencido de que, en el poco tiempo que le queda al frente del gobierno (año y medio), deberá concentrar sus mejores esfuerzos en la realización de tres reformas clave: la del sistema educativo, la del sistema sanitario y la de la seguridad pública. Para ello ha nombrado a Escoto en Educación, ha creado la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) y ha cambiado la cúpula policial en tres ocasiones en los últimos siete meses, y se dispone a introducir cambios importantes en el Sector salud. Esas son sus metas y está dispuesto, lo proclama en público y, con más fuerza, en privado, a no cejar en su empeño.

Pero esta decisión tiene un precio político: el paulatino y cada vez más evidente abandono y alejamiento de la vieja guardia partidaria con respecto a la Administración lobista. Los choques y desencuentros con el alcalde Álvarez son cada día más frecuentes. Éste, aunque es compadre del presidente, también es el presidente del PN y, como tal, aboga en defensa de los activistas de su partido que se sienten marginados al no haber podido colocarse holgadamente dentro de las planillas gubernamentales para disfrutar de su parte del botín estatal ganado en las elecciones del año 2009. Lobo aparece como un político ingrato, malagradecido, traidor a sus propios compañeros, al preferir a militantes de otras agrupaciones políticas para darles cabida en las casillas presupuestarias del Estado. Esta situación debilita aún más a Lobo pero, al mismo tiempo, lo obliga a buscar nuevos aliados y momentáneas coaliciones con fuerzas derivadas de los movimientos sociales (organizaciones de sociedad civil) o con otros partidos políticos, como es el caso de la izquierdista Unificación Democrática (UD) que dirige César Ham, el actual ministro Director del polémico Instituto Nacional Agrario (INA), cuya destitución exige todos los días el alcalde capitalino.

Hastiado ya de los reclamos cotidianos y los reproches lanzados por “*su compadre*”, el alcalde Álvarez, Lobo advirtió que está dispuesto a hablar y, entre otras cosas, contó a la prensa que mensualmente le transfiere al presidente del PN y alcalde de la capital la suma de cinco millones de lempiras (unos 250 mil dólares) para financiar la contratación de activistas políticos del PN, convertidos ocasionalmente en “*microempresarios*”. El aludido reaccionó molesto y fue a Casa Presidencial a buscar una reconciliación con el presidente, tratando de bajar el perfil de la denuncia y aplacar el alboroto generado en los medios de comunicación.

La situación generó tal nivel de molestia al interior del partido “*gobernante*” que obligó al propio ex presidente Rafael Callejas, una especie de gurú de la vieja guardia partidaria, a llamar la atención de sus militantes y advertirles que si continúan por el camino de la confrontación y no promueven la unidad, deben abandonar desde ya el sueño de una nueva victoria electoral en noviembre del año 2013.

La decisión presidencial de llevar adelante la reforma del sistema de seguridad pública (incluyendo policías, fiscales y jueces), ha creado también un nuevo campo de confrontación, esta vez con los empresarios que se niegan a pagar un impuesto de seguridad (la llamada tasa, despectivamente denominada “tasón” por sus críticos, especialmente el ex presidente liberal Carlos Flores, dueño del diario La Tribuna) y han acudido a la Corte Suprema de Justicia en busca de respaldo y protección legal. Los magistrados de la Corte, recelosos de las iniciativas de Lobo y temerosos de una súbita purga contra ellos tramada desde el Congreso Nacional por el binomio Lobo/JOH, han decidido proteger a los empresarios y crearle problemas a la aprobación del nuevo impuesto. Pero Lobo, empeinado y persistente, ha seguido adelante y ha logrado, con el inestimable apoyo de JOH, la aprobación legislativa de la nueva Ley Anti Evasión, un instrumento legal que castigará a todos los grandes contribuyentes que burlan la ley y evaden pagar impuestos. El ministro de Finanzas, Héctor “Tito” Guillén, un incondicional de JOH, ha denunciado que 34 grandes empresas, que tienen ventas por valor de unos 18 mil 300 millones de lempiras anuales (más de 900 millones de dólares), declaran pérdidas y no pagan los impuestos. Lobo considera esta acción como una burla al pueblo hondureño y un atentado contra los esfuerzos gubernamentales por disminuir los altos índices de inseguridad y violencia que prevalecen en el país. Por el momento, todo indica que el presidente Lobo ha logrado salirse con la suya y los empresarios evasores se verán obligados a pagar sus impuestos o, al menos, una buena parte de ellos.

Mientras el partido teóricamente gobernante se fracciona y divide a causa de sus pugnas internas, el proceso electoral sigue su marcha y las fuerzas de la dispersa oposición política poco a poco se van reacomodando, preparando sus filas para la batalla electoral más próxima: las elecciones internas y primarias del próximo mes de noviembre. El pasado 17 de mayo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el máximo organismo electoral de Honduras, convocó oficialmente a los nueve partidos políticos legalmente inscritos para participar en las elecciones internas y primarias de noviembre. Sólo cuatro de esos partidos, los tradicionales Liberal y Nacional, junto al recién creado LIBRE y, posiblemente, el también novato Frente Amplio de Participación Electoral en Resistencia (FAPER), celebrarán elecciones reales en el interior de sus filas. Los otros no tienen capacidad para ello o no muestran el interés debido, temerosos de que un torneo electoral interno los divida y debilite más.

Las elecciones van, aunque han surgido dudas sobre las posibilidades reales de su financiación, tomando en cuenta la difícilísima situación en que se encuentran las finanzas del Estado. Preocupada por esta situación, la embajadora estadounidense Lisa Kubiske visitó a los tres magistrados del TSE (cada uno representa a un partido: Nacional, Liberal Y Democracia Cristiana, la denominada “Santa Alianza” que se ha repartido el control del

---

TSE desde hace ya algunos años) y expresó su preocupación por el retraso del gobierno en transferir los necesarios recursos que el organismo electoral necesita para organizar las elecciones. El Gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, respondió afirmando que cuenta con el dinero suficiente (se habla de unos 800 millones de lempiras, es decir unos 40 millones de dólares) para financiar los dos procesos electorales, el interno y primario de noviembre 2012 y el de las generales en noviembre de 2013. Las presiones norteamericanas discurren ahora por vías más discretas y silenciosas.

### **Los vaivenes de la economía**

**E**l tema central en materia económica ha sido el de la posible firma de un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional, un instrumento que abriría la puerta para obtener los urgentes fondos frescos que permitan disponer del “apoyo presupuestario” necesario para el buen funcionamiento de la maquinaria gubernamental. El gobierno necesita con desesperación la firma del convenio (el que estaba vigente ya ha concluido su periodo de vigencia), pero el Fondo se muestra demasiado cauto y receloso. Quiere una devaluación más pronunciada, mientras que el presidente Lobo se ha comprometido públicamente a rechazar lo que llama una “devaluación acelerada”. El gobierno prefiere una devaluación lenta, gradual y controlada, un “deslizamiento suave” por la vía de las subastas periódicas de divisas en el marco de una franja oscilante debidamente manejada por el Banco Central. Desde el mes de julio del año pasado hasta la fecha, la oscilación controlada ha permitido una devaluación de sólo 55 centavos con respecto al dólar. El Fondo quiere más y más rápido. Se espera que el dólar alcance un valor de 20 lempiras a finales del año.

Si no se logra la firma con el FMI, estarían en riesgo un poco más de 2,500 millones de lempiras (unos 130 millones de dólares) que se espera recibir de la cooperación internacional para apuntalar el presupuesto, aquejado por un déficit ya inmanejable y una deuda externa que representa casi la cuarta parte del Producto Interno Bruto del país. El gobierno, buscando nuevas opciones, trata de readecuar desde ya el presupuesto nacional en esos 2,500 millones de lempiras, ante la perspectiva pesimista de que no se llegue a ningún acuerdo con la Misión del FMI que deberá llegar en las próximas semanas. El presupuesto sufriría una reducción que lo bajaría de los 144 mil millones aprobados a 141,5 millones, afectando como es de suponer diferentes programas sociales y otros gastos ya planificados.

Quizás por eso no ha sido casual que los militares se hayan apresurado a declarar que ya no hay planes para comprar los ocho aviones Tucano que pensaban adquirir en Brasil por un valor estimado en doce millones de dólares cada uno. Se limitarán a reparar los aviones que ya tienen a un costo

estimado de 20 millones de dólares. Las finanzas no están para gastos militares, no obstante la benevolencia y generosidad que el presidente Lobo ha mostrado durante su gobierno hacia las peticiones de las Fuerzas Armadas.

Pero a falta de una firma con el FMI, el gobierno se anotó un importante éxito al concluir su Presidencia Pro Tempore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) con la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, un viejo anhelo que venía siendo objeto de negociaciones desde hace ya varios años. Este acuerdo, si es bien utilizado por los países de la región, significa un soplo de oxígeno muy importante para las economías centroamericanas y representa unos 2,500 millones de euros en los flujos comerciales entre ambas regiones, o sea que el PIB centroamericano podría crecer en esa suma en los próximos años. La UE es el tercer socio comercial más importante para el comercio centroamericano (después de Estados Unidos y del propio comercio interregional) y abre a los productos locales un mercado de unos 500 millones de consumidores.

Honduras transfirió a Nicaragua la Presidencia Pro Tempore del SICA el día 29 de junio recién pasado.

# JULIO 2012

---

## La situación política

**L**a impresionante concentración popular que acompañó el lanzamiento de la candidatura presidencial de Xiomara Castro, a finales del pasado mes de junio en el departamento de Santa Bárbara, ha generado ya las esperadas reacciones al interior de la clase política tradicional del país. Destacados dirigentes liberales y nacionalistas han mostrado, unos en público pero los más en privado, su preocupación por la gran capacidad de movilización demostrada por el nuevo partido Libertad y Refundación (LIBRE) y, sobre todo, por la efectividad de sus redes organizativas y sociales a nivel nacional. Todos coinciden en que LIBRE es algo más que una simple fracción desprendida del tronco liberal. Es una coalición amplia de grupos y sectores sociales que tienen el común denominador de oponerse al golpe de Estado y querer vengarse políticamente en las urnas electorales. Todos ellos bajo el liderazgo aceptado del ex presidente Manuel Zelaya y con la candidatura presidencial de la ex primera dama Xiomara Castro.

La preocupación es tan grande que ya han empezado a aflorar las maniobras y zancadillas políticas para entorpecer el proceso de inscripción y registro de la candidatura presidencial de Xiomara Castro. Los tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cada uno de ellos en representación de su respectivo partido político (el Liberal, el Nacional y el Demócrata-cristiano), han unido fuerzas para poner en duda la validez legal del consenso político que respalda la candidatura presidencial de LIBRE. Resulta que las cinco facciones políticas que existen al interior de LIBRE han decidido ponerse de acuerdo para dar su respaldo a una candidatura presidencial única, la de Xiomara, y, por lo tanto, sólo van a competir entre sí para escoger los candidatos a diputados y a alcaldes. Esta decisión, autorizada por los estatutos de LIBRE y legalizada en el registro del TSE, resulta ahora contraria a la ley y, por lo tanto, imposible de poner en práctica. El TSE busca pretextos y argucias legales para dificultar y, eventualmente, impedir la inscripción como candidata presidencial de la persona que encabeza en estos momentos las encuestas de popularidad en el escenario político local.

Consciente de la gravedad de la situación y preocupado por sus posibles consecuencias sobre la gobernabilidad política del país, el presidente Porfirio Lobo ha hecho un llamado a los dirigentes políticos y a sus representantes en el TSE para que *“no enreden las cosas, recuerden las lecciones del pasado (en alusión al reciente golpe de Estado de junio de 2009) y permitan que el proceso electoral se desarrolle en forma limpia y transparente”*.

Pero los políticos tradicionales no parece que escuchen el consejo presidencial. Un envalentonado y desafiante magistrado, Enrique Ortiz, representante de los liberales en el Tribunal electoral, respondió al presidente recordándole que el TSE es un órgano independiente y que no puede ni debe permitir la intromisión del Poder Ejecutivo. La clase política tradicional, prisionera de su propio miedo y desconcierto ante la presencia de un nuevo y fuerte partido en el cuarteado escenario bipartidista del país, no acaba de encontrar una forma democrática y tolerante para manejar la nueva situación y reacomodar sus fuerzas frente al desafío de los zelayistas agrupados en LIBRE.

Al principio creían que LIBRE no era más que una facción política desprendida del gran tronco centenario del partido Liberal. Luego, sobre todo después del retorno del ex presidente Manuel Zelaya del exilio en mayo del año pasado, empezaron a comprender el fenómeno de la Resistencia contra el golpe de Estado. No se trataba de un movimiento simple de protesta. Era, en esencia, el embrión en pleno desarrollo de un conjunto de movimientos sociales que buscaban organizar y dar forma a su expresión política partidaria. El nacimiento de LIBRE y su inscripción legal en los primeros meses de este año, junto a su crecimiento organizativo y capacidad de convocatoria, han sorprendido a casi todos, pero en especial a los integrantes de la vieja clase política tradicional que todavía mantiene y controla posiciones clave dentro de los partidos liberal y nacional.

Al momento de llevar el listado de sus planillas para inscripción al TSE, la candidata de LIBRE se hizo acompañar por miles de partidarios y simpatizantes para dar una nueva demostración de su fuerza y decisión políticas. Los magistrados del TSE deberán resolver a favor o en contra de Xiomara a finales del mes de agosto. Si su respuesta es negativa, las protestas callejeras y manifestaciones de rechazo no se harán esperar, con las inevitables consecuencias sobre los niveles de gobernabilidad política en el país. A eso precisamente es a lo que teme el presidente Lobo, que ya está suficientemente agobiado con los problemas fiscales (la deuda interna ya alcanzó los 52 mil millones de lempiras, unos 2,600 millones de dólares, y se ha vuelto inmanejable), las disputas internas y los conflictos sociales (maestros y estudiantes en las calles, fiscales en huelga, médicos en protesta, campesinos en rebeldía, etc.) que agitan y acorralan a su gobierno.

---

En efecto, así es. En los últimos días, tal como ya se veía venir, se han agudizado en forma casi sincronizada los conflictos agrarios, especialmente en la zona del Bajo Aguán y en las plantaciones cañeras de la zona norte (Cortés y Yoro, municipio de San Manuel, etc.). Grupos de campesinos han invadido, han sido desalojados y nuevamente han vuelto a invadir, amplias extensiones de tierras cultivadas con caña de azúcar. Alegando ambigüedad y dudas en los títulos de propiedad, los dirigentes campesinos insisten en que el Estado les conceda sus propios títulos sobre esas tierras ya cultivadas. El Instituto Nacional Agrario (INA), bajo la dirección del ex candidato presidencial izquierdista (partido de Unificación Democrática), César Ham, ha puesto en duda la validez de los títulos que muestran los dueños de las plantaciones, estimulando de esa forma las crecientes pretensiones de los líderes agraristas.

La cosa está que arde. Y, de paso, hay que sumarle a esto, además de las protestas y huelgas constantes de los maestros en las zonas urbanas y en demanda de pagos atrasados y revocación de leyes, la gravísima situación que prevalece en la región del Bajo Aguán, en donde cada día mueren tanto campesinos como guardias de seguridad de las fincas y plantaciones privadas. La matanza continúa y los grupos armados proliferan por todos lados, mezclando entre sí a campesinos cultivadores de palma africana, guardias de seguridad privada, grupos de asaltantes, núcleos de narcotraficantes y otros delincuentes comunes, además de los policías y los militares, todos ellos armados y desafiantes. A última hora, ante la gravedad de la situación, el Congreso Nacional aprobó un decreto legislativo ordenando el desarme de todos, con excepción de las fuerzas del orden público (policías y militares) y de los guardias privados. La eficacia de esta medida, que los campesinos resisten y evaden, está todavía por verse.

Los nacionalistas de la vieja guardia del partido, especialmente los ex presidentes Rafael Leonardo Callejas y Ricardo Maduro, utilizando como médium al alcalde capitalino, presidente del partido y precandidato presidencial, Ricardo Álvarez, exigen públicamente al presidente Lobo la destitución del ministro agrarista César Ham, a quien consideran un agitador izquierdista enemigo de los empresarios del agro y partidario de las invasiones violentas y ocupaciones forzosas de la tierra. Ham, cuya vida ha sido amenazada en varias ocasiones por los grupos armados de los terratenientes y grandes empresarios agrícolas, goza y disfruta del apoyo incondicional del presidente Lobo, quien lo considera uno de sus mejores ministros. *“Mientras Ham dice y hace, hay otros que no hacen ni m...”* dijo recientemente Lobo en referencia a sus críticos y a aquellos ministros que no hacen nada en sus respectivos ámbitos administrativos. La expresión, por fuerte y grosera, resultó poco habitual en el estilo presidencial y causó un fuerte impacto en la opinión pública.

Pero no es la primera vez que Lobo defiende con vehemencia y furor a algunos de sus ministros, especialmente a Ham. En otras ocasiones ha debido salir a romper lanzas en público a favor de su actual ministro de Educación, Marlon Escoto, quien ha encomendado la enorme tarea de introducir orden y limpieza administrativa en el caos actual que constituye el sistema educativo nacional. Escoto ha sido declarado enemigo público por parte de un grupo de diputados nacionalistas que se sienten afectados por los cambios introducidos por el joven ministro en el laberíntico y corrupto sistema público de educación. Lobo le apoya y estimula en público cada vez que puede, sin importarle el disgusto y la oposición de sus colegas nacionalistas.

Pero mientras apoya a algunos, a otros los rechaza y, a veces, destituye. La caída más reciente en el interior del gabinete lobista ha sido la protagonizada por el que hasta hace pocos días era el influyente ministro de Hacienda, Héctor "Tito" Guillén, un dirigente político nacionalista del norte del país (fue alcalde de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país) y cercano colaborador y hombre de confianza del presidente del Congreso Nacional y también precandidato presidencial nacionalista, Juan Orlando Hernández. Guillén cayó envuelto en un escándalo de corrupción, vinculado al abuso de poder y a la venta de influencias para favorecer a un grupo de amigos y partidarios de Juan Orlando a través del arrendamiento de empresas estatales (plantas productoras y empacadoras de camarón cultivado) a precios irrisorios por la vía de los usuales prestanombres. La esposa y el hijo de Guillén fueron interceptados por la policía (se especula sobre si ésta fue alertada previamente o no) cuando transportaban en su vehículo una cuantiosa suma de dinero en moneda nacional (unos 60 mil US dólares).

El escándalo ha salpicado al gobierno y deteriorado más la maltratada imagen pública del gabinete lobista. El presidente Lobo ha forzado a su ministro a renunciar y enfrentar las acusaciones en los tribunales judiciales. La caída de Guillén se produce en un momento crucial, justo cuando el gobierno está negociando en forma casi desesperada la firma de un nuevo convenio de apoyo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El gobierno sale golpeado de la crisis y, lo que es muy evidente, más debilitado y desacreditado.

Cada vez que avanza el calendario y se reduce el tiempo político del gobierno, el presidente Lobo luce más débil y aislado. Los dirigentes de su propio partido le han ido abandonando gradualmente y su iniciativa política se deteriora visiblemente. Sólo conserva el apoyo decidido de Juan Orlando Hernández, quien de hecho se ha convertido en su precandidato preferido para que sea su sucesor en caso de ganar las elecciones generales nuevamente, algo que cada día parece más difícil y distante. La alianza Lobo/Hernández es lo que le da fuerza y respaldo al gobierno. Es su verdadera base de sustento, sumada al apoyo que los militares y policías le manifiestan a diario y en público a la Administración lobista.

No será fácil para el presidente Lobo llevar a la práctica las tres grandes reformas que se propone realizar antes de que concluya su periodo gubernamental: la educativa, la del sistema sanitario y la del sistema de seguridad pública. Para impulsar estas reformas, el presidente ha debido buscar aliados fuera del círculo cerrado de sus compañeros de partido: en un ministro que militaba en la oposición zelayista (Marlon Escoto, ministro de Educación), en la rectora de la Universidad Julieta Castellanos, para reformar el sistema de salud/Hospital Escuela, y en tres Comisionados nacionales (sólo uno pertenece al partido de gobierno) para realizar los cambios y reformas en el sistema de seguridad pública del país. Con estas personas, y con el respaldo del Congreso Nacional dirigido por Hernández, el apoyo de los nuevos jefes policiales y el respaldo discreto de los militares, el presidente de la República se enfila hacia la fase final de su gobierno y la culminación del proceso electoral que permitirá escoger a las nuevas autoridades gubernamentales del país.

Mientras llega ese momento, muchos de los ministros y funcionarios principales del equipo gubernamental compiten en una loca carrera por apoderarse a como dé lugar de los recursos del Estado, cometiendo actos de corrupción a diestra y siniestra y sumiendo al país en una especie de festín y reparto de los pocos dineros que todavía quedan en las arcas oficiales. Todos los días, los medios de comunicación se hacen eco de escándalos, grandes y pequeños, de corrupción administrativa que involucran a funcionarios de todos los niveles, desde ministros y Directores generales hasta secretarías y conserjes. La prensa revela las tramas de corrupción y describe con lujo de detalles los procedimientos, argucias y nombres de los funcionarios involucrados, pero los órganos contralores no hacen nada o apenas simulan iniciar investigaciones que nunca avanzan ni producen resultados públicos y creíbles. Un simple dato comprueba lo afirmado: de los 2,435 casos de operaciones y movimientos financieros sospechosos que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha presentado ante la Fiscalía General en los últimos diez años, los fiscales de lucha contra la corrupción y el lavado de activos sólo han judicializado 101 casos, es decir el 4%.

Tan sólo en este mes de julio se han descubierto y revelado casos de corrupción en los siguientes Ministerios y dependencias estatales: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Finanzas, Ministerio de industria y Comercio, Ministerio de Obras Públicas (Fondo Vial), Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Dirección General de Transporte, Instituto de la Propiedad, Registro Nacional de las Personas, Fondo Hondureño de Inversión Social, varias Alcaldías municipales, sin mencionar el desfalco millonario que tuvo lugar en el Colegio de Abogados (107 millones de lempiras, es decir unos 5 millones, 350 mil dólares), etc.

El deterioro y erosión de las instituciones estatales es motivo de creciente preocupación entre los observadores más atentos y serios de la realidad nacional. En una reciente reunión no oficial llevada a cabo en Nueva York (18 de julio), en la que participaron varios expertos locales junto a funcionarios internacionales de las Naciones Unidas y analistas políticos norteamericanos, se hizo una minuciosa radiografía de la situación actual de Honduras, poniendo un énfasis especial en las amenazas del crecimiento y avances del crimen organizado, en especial las redes del narcotráfico, las pandillas urbanas, la corrupción policial, la politización partidaria de las instituciones, particularmente de aquellas llamadas a combatir la delincuencia (el Ministerio Público y el Poder Judicial), la grave crisis de las finanzas públicas, el auge de los conflictos agrarios y las constantes violaciones a los derechos humanos. Las conclusiones de este fructífero y original debate cerrado arrojan serias dudas y preocupaciones válidas sobre los riesgos de la gobernabilidad y estabilidad política de Honduras a mediano y largo plazo.

En los primeros días de agosto, tres partidos políticos (Liberal, Nacional y LIBRE) presentaron sus planillas de candidatos a presidente, diputados y alcaldes ante el TSE. De esta forma, estos tres partidos (dos centenarios y uno totalmente nuevo) participarán en elecciones internas y primarias dentro de cuatro meses. Con ese acto, se abrirá la segunda fase del proceso electoral y la sociedad hondureña podrá encaminarse hacia noviembre de 2013, fecha en que deberán llevarse a cabo las elecciones generales para escoger a los nuevos gobernantes de Honduras en el periodo 2014-2018.

Aunque oficialmente están registrados nueve partidos políticos, sólo tres tienen capacidad real para participar en elecciones primarias e internas, llenando todos los numerosos y engorrosos requisitos que plantea la legislación electoral hondureña. Entre esos tres partidos está el futuro ganador de las elecciones generales de 2013.

La Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, siempre tan atenta y vigilante de la evolución política en Honduras, ha podido comprobar, no sin sorpresa, que las encuestas reales (las que no se publican y sólo se utilizan para evaluar con objetividad la situación de los partidos políticos y sus precandidatos) favorecen a Xiomara Castro y la colocan a la cabeza de los contendientes por la futura presidencia de la República. En atención a ese dato, la embajadora Lisa Kubiske finalmente recibió la autorización debida para reunirse con el ex presidente Manuel Zelaya, quien había pedido la cita poco tiempo después de su retorno del exilio, en mayo del año pasado. Durante el encuentro, la diplomática aseguró a Zelaya que su país, Estados Unidos, respetaría el resultado de las urnas en las próximas elecciones generales, incluso en el caso de que la señora Castro resultara triunfadora. El encuentro, según Zelaya, fue cordial y positivo, aunque hubo momentos en que la parte estadounidense no ocultó su molestia por los constantes ata-

ques verbales contra el *"imperialismo norteamericano"* en los discursos de la candidata de LIBRE. De igual manera, la norteamericana resintió las acusaciones de Zelaya contra Estados Unidos, país al que culpa por la conspiración que desembocó en el golpe de Estado de junio de 2009 y en la correspondiente caída de su gobierno.

Pero, quejas y lamentos aparte, las relaciones buscan volver a su antiguo cauce y el pragmatismo se impone. LIBRE es una fuerza política real en la escena hondureña y es necesario tomarla en cuenta. Es un actor nuevo, que no se puede ni se debe ignorar.

# AGOSTO 2012

---

## La situación política

**E**ste mes transcurrió entre sonados escándalos de corrupción (algo que se ha convertido ya en una rutina desgastante a medida que se acerca el fin de la Administración lobista), cambios importantes en la estructura del gobierno, polémicos ajustes de última hora en el proceso de las elecciones internas y, por supuesto, la continuidad agravada de los conflictos políticos y sociales, especialmente en la peligrosa zona del Bajo Aguán y en otras regiones del país (invasiones campesinas a plantaciones cañeras, reclamo violento de territorios por parte de las comunidades afrodescendientes –garífunas- en el área de Vallecito, departamento de Colón, etc.), junto a las ya permanentes manifestaciones callejeras de los maestros, que virtualmente han abandonado casi por completo las aulas y las han sustituido por las barricadas. A esto se deben sumar los problemas ligados al clima de inseguridad ciudadana y, para cerrar el cuadro, las crecientes dificultades en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos en el diseño y planificación de la política antidrogas que debe ser aplicada en el territorio hondureño.

De acuerdo a un informe divulgado a principios del mes por la oficial Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia, presidida por el ingeniero y analista político Oscar Lanza, el Estado hondureño, a causa de la corrupción administrativa que prevalece entre compradores estatales y proveedores privados, se ve obligado a pagar hasta un 30% adicional en concepto de “comisiones”, prebendas y sobornos, en la realización de sus compras y contrataciones. Al divulgarse estos alarmantes datos, el semioficial Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se vio obligado a pronunciarse y demandar del Estado la estricta aplicación de la Ley de contratación y el ejercicio pleno del principio de libre competencia.

La situación ha llegado a tal punto de cinismo y tolerancia oficial que, en Ministerios tales como el de Finanzas, es de todos sabido que para acelerar la emisión de un cheque de pago es preciso abonar a favor de funcionarios individuales “comisiones” que siempre son superiores al 5% de la suma

adeudada. Las empresas constructoras que han sido favorecidas con contratos generalmente jugosos y leoninos en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, ofrecen cantidades millonarias para que sus contratos sean prorrogados o las sumas involucradas sean incrementadas hasta en un 200% (la Ley sólo permite modificaciones que no supongan aumentos mayores del veinte por ciento). Los sobornos son ofrecidos a los altos funcionarios del Ministerio y, por supuesto, a los diputados que deberán emitir un dictamen (Comisión de Dictamen) sobre la solicitud de adendum en el contrato original.

En los Ministerios de Educación y Salud la corrupción adquiere proporciones realmente escandalosas. El Estado, dijo el ministro Marlon Escoto, mostrando las pruebas documentales, eroga anualmente unos dos mil millones de lempiras (aproximadamente unos cien millones de dólares) en pago por *"licencias laborales"* a favor de *"maestros"* que, al mismo tiempo, se desempeñan como alcaldes o regidores municipales en los gobiernos locales de sus comunidades o, en otros casos, como diputados suplentes en el Congreso Nacional. Al interior del sistema sanitario público la situación llegó a tal punto que el presidente Lobo, luego de haber mostrado una paciencia franciscana y una tolerancia para muchos inexplicable, finalmente se decidió a entregar el Hospital Escuela (entidad insignia de todo el sistema de salud nacional) para que lo administre la Universidad Nacional y, posteriormente, casi le entregó el Ministerio entero, al despedir -¡por fin!- al desprestigiado ministro Antonio *"Tucky"* Bendaña y nombrar en su lugar a la doctora Roxana Araujo, quien recientemente había sido delegada por la Universidad para integrar el equipo de manejo de crisis del Hospital Escuela.

En la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) las cosas andan igual o peor. Una legión de los llamados *"paracaidistas"* (activistas al servicio del partido gobernante, que cobran en las planillas del Estado sin desempeñar ningún trabajo o por simular cumplir con ello) atracan mensualmente las finanzas de ambas instituciones del Estado y las mantienen al borde de la bancarrota. No es casual que el propio presidente haya reconocido en público que la crisis financiera de la ENEE es la principal razón que dificulta la firma de un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La ENEE, de acuerdo a los datos oficiales proporcionados por su nuevo gerente, el empresario de origen árabe Emil Hawit, gasta el 94% de sus ingresos en el pago a las llamadas empresas térmicas, que son las que proporcionan a la ENEE la energía (casi el 70% del total) a base de combustible bunker, es decir la energía más cara del país. Sólo por *"gastos fijos"* (se paga trabajen o no trabajen) la ENEE les paga 5,8 millones de dólares mensuales. Mientras esto sucede, los empresarios y otros usuarios le deben a la empresa unos 150 millones de dólares en *"cuentas por cobrar"*. La suma de condo-

naciones y perdón de deudas acumuladas en los últimos años alcanza proporciones gigantescas.

La Magistrada del Tribunal Superior de Cuentas (TSE), Deisy de Anchecta, una furibunda militante del partido de gobierno, escandalizada por la creciente ola de corrupción que abarca a todas las instancias del Estado, amenazó con abandonarlo todo y marcharse a su casa, *"hastíada de tanta podredumbre e impunidad"*, no sin antes denunciar que tan sólo dos diputados de los 128 que componen la Cámara han rendido cuentas por los millonarios subsidios que reciben todos dizque para financiar obras y apoyar proyectos en sus comunidades electorales. El Congreso Nacional, a pesar de que maneja cantidades millonarias en calidad de presupuesto, nunca le rinde cuentas a nadie y mantiene sus gastos como si fueran un secreto de Estado.

En el Sector seguridad, el nuevo Director Nacional de la Policía, el hoy Comisionado General Juan Carlos *"El tigre"* Bonilla, luego de haber puesto a la luz los hilos de las múltiples conspiraciones que urden en su contra los antiguos Comisionados destituidos de la cúpula policial, pero que todavía permanecen dentro de la estructura del Ministerio de Seguridad, denunció abiertamente el saqueo que esos personajes (José Luis Muñoz Licona, Salomón Escoto Salinas, Ricardo Ramírez del Cid, entre otros) realizaron durante los últimos años en los recursos y presupuesto de la policía. Bonilla detalló ante la prensa la forma en que llevaban a cabo sus trampas y negocios sucios en la compra de equipo, refacciones, combustible, etc. Hasta el momento, a pesar del gran impacto que causó la denuncia, el Ministerio Público no ha procedido de oficio, como corresponde, a abrir una investigación y rellenar un expediente para, posteriormente, presentar el debido requerimiento fiscal y llevarlos ante los tribunales por graves actos de corrupción en perjuicio del Estado de Honduras. Hasta este punto ha llegado la impunidad en la Honduras actual.

En medio de todos estos escándalos, reclamos y denuncias, rodeados todos por una piadosa mirada de indulgencia de los países amigos y los organismos internacionales que dosifican sus desembolsos y abren más los ojos para vigilar, cuando pueden, hacia donde van los fondos de la cooperación internacional, el gobierno del presidente Lobo sigue avanzando, a veces con demasiados tropiezos y vacilaciones, acercándose al momento final en enero de 2014. Mientras llega ese momento, el presidente realiza ajustes de última hora en las piezas de su gabinete de gobierno y sigue produciendo cambios y sustituciones. En estas últimas semanas le ha tocado el turno a dos grandes del Gabinete: el hoy ex ministro de Hacienda Guillermo *"Tito"* Guillén, involucrado en un misterioso trasiego de 60 mil dólares (por la vía de su esposa) y descubierto in fraganti en el desarrollo de la operación, cuyo artífice y pagador había sido el antiguo administrador de la Casa Pre-

---

sidencial en el gobierno de facto de Roberto Micheletti (julio-diciembre de 2009), Javier Valladares; el otro caído es Antonio “Tucky” Bendaña, hasta hace pocos días ministro de Salud, un prominente empresario de clínicas y hospitales privados en la zona norte del país, protegido desde siempre por la cúpula partidaria e influyentes personajes del entorno presidencial.

El primero ha sido sustituido por Wilfredo Cerrato hijo, un joven financista que hasta entonces dirigía la oficina de inversiones público-privadas que creó el Congreso Nacional para promover las inversiones mixtas entre empresarios nacionales o extranjeros y el Estado. Su padre, del mismo nombre, es el actual administrador de Casa Presidencial y un reconocido activista político del partido Nacional (PN), sobre todo en el sector de la Vieja Guardia (Rafael Leonardo Callejas, Ricardo Maduro, etc.). Conociendo el control y el celo especial que el precandidato y presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández (JOH), mantiene sobre el Ministerio de Finanzas, es de suponer que Cerrato hijo responda a los intereses políticos de JOH. El segundo, en cambio, ha sido reemplazado por una funcionaria que él mismo había forzado a emigrar del Ministerio, la doctora Roxana Araujo. ¡Vaya ironía! Cuando el presidente Lobo decidió ceder el control del Hospital Escuela a manos de la Universidad Nacional, la Rectora de esa institución integró a la Araujo en el equipo interventor. Hoy, poco tiempo después de haber salido, Araujo vuelve al Ministerio por la puerta grande y se convierte en Ministra. El mensaje a los corruptos y al equipo que rodeaba a Bendaña no puede ser más claro ni directo.

Con los cambios en el Sector salud, el presidente Lobo reafirma su decisión de seguir adelante y avanzar en la realización de las reformas prometidas, tanto en Salud, como en Educación y en Seguridad. Nada hace pensar que estos tres ejes perderán vigencia o prioridad en los casi 17 meses que le restan a la Administración lobista.

Mientras el barco gubernamental se balancea y navega cada vez más en aguas profundas y procelosas, los actores políticos locales se enfrascan en peleas interminables y trifulcas jurídicas que ponen en riesgo la estabilidad de la gobernabilidad política y desacreditan la transparencia del proceso electoral en marcha.

Aunque ya el presidente les había advertido que no era necesario *“enredar las cosas y era preciso aprender de las lecciones de la reciente crisis política”*, los dirigentes de los dos viejos partidos tradicionales, el Liberal y el Nacional, se empeñaron en complicar los procedimientos, ora para abrir las puertas a determinadas personas o simplemente para cerrárselas. Los protagonistas más visibles de esta trifulca seudo legal fueron principalmente el ex presidente liberal y dueño del diario La Tribuna, Carlos Flores, el presidente del Congreso Nacional y fuerte precandidato nacionalista JOH, el

magistrado del TSE, el liberal Enrique Ortez Sequeira, el ex presidente Manuel Zelaya y el infaltable Canciller Arturo Corrales.

Flores, obsesionado enfermizo por aumentar sus influencias y cuotas de poder, insistió en el derecho de su hija, Lizzie Flores (actual embajadora de Honduras ante las Naciones Unidas), a figurar como candidata a diputada en dos de las planillas de las tres que presentarán las tres corrientes internas del partido Liberal (PL). O sea que Lizzie debería ser la primera candidata al Parlamento tanto de la corriente Villedista (Mauricio Villeda) como de la Yanista (Yani Rosenthal). Esa condición, sin duda, le concedería una polémica ventaja sobre los demás candidatos de las corrientes del PL. Para reforzar sus argumentos, Flores invitó a Zelaya a pelear juntos en el TSE por similar objetivo, teniendo en cuenta que tanto la esposa del presidente derrocado, Xiomara Castro, como él mismo, figurarían en las planillas de su partido (LIBRE) en condición de “*candidatos de consenso*”. La diferencia es que tanto Zelaya (candidato a diputado por el departamento de Olancho) como Xiomara (candidata presidencial por LIBRE) son candidatos de consenso, es decir apoyados por todas las corrientes internas de su partido (en el caso de LIBRE son cinco corrientes o fracciones) mientras que la hija de Flores (la inofensiva Lizzie) sólo es patrocinada por dos de las tres corrientes internas del PL.

Todo esto complicaba la situación y generaba confusión y caos en la aplicación de los mecanismos técnicos para diseñar los votos (papeletas electorales) y aplicar las fórmulas de conteo. El asunto parecía complicarse más cuando decidieron ampliar el plazo para presentar correcciones y “*subsananar*” irregularidades y fallas en la confección de las planillas de precandidatos de todos los partidos (sólo participarán tres partidos en las elecciones internas de noviembre próximo: PL, PN y LIBRE). Sin embargo, esta última decisión (ampliar los plazos) abrió la puerta para la solución básica del problema, ya que concitó el apoyo de todas las corrientes en pugna (16 en total en los tres partidos) que, cada una a su manera, necesitaba un poco más de tiempo para afinar mejor sus listas de precandidatos y suplir las deserciones o renunciaciones de última hora.

Finalmente todo se resolvió en calma y, con la excepción del magistrado Ortez Sequeira, que tiene serios problemas personales con Flores, nadie salió realmente lastimado. LIBRE celebró su “*victoria*” y logró lo que quería: inscribir legalmente la candidatura de Xiomara Zelaya a la presidencia de la República en nombre de todas las corrientes del partido (candidatura de consenso); Flores se salió con la suya y consiguió la inscripción de su hija como candidata simultánea de dos de las tres corrientes del PL (su sueño va más allá: convertirla en presidenta del Congreso Nacional para poder manipular y dirigir a su gusto, desde La Tribuna, las actividades legislativas) y, por último, JOH abrió el espacio para que se reacomodaran otras corrien-

tes pequeñas en el PN que, eventualmente, pueden ser absorbidas y convertidas en sus aliadas políticas frente a sus dos principales contendientes: Miguel Pastor y Ricardo Álvarez. En el caso de Arturo Corrales, el Canciller se da por satisfecho al haber jugado el papel de amigable componedor y haber quedado en buenas migas con todos los actores involucrados en la “*pequeña crisis*”. Ese es su estilo y ese es su juego político.

Consumada la maniobra y devuelta el agua a su nivel, el TSE retomó su rol protagónico en el escenario electoral, llevó a cabo la certificación de las corrientes que cumplieron con todos los requisitos y celebró el correspondiente sorteo. De las 16 fracciones o corrientes políticas que presentaron planillas de precandidatos, sólo dos no llenaron a plenitud los requisitos y quedaron fuera del torneo: una de LIBRE (el llamado Movimiento 5 de julio) y la otra del PN (el llamado Movimiento de Renovación Democrática Nacionalista -ORDEN-, una curiosa mezcla de partidarios del golpe de Estado del 28J y de ex militares en condición de reserva). Catorce corrientes (tres en el PL; siete en el PN y cuatro en LIBRE) fueron legalmente reconocidas e inscritas por el máximo órgano de la administración electoral en el país. Acto seguido, por la vía del sorteo, se asignó a cada precandidato su lugar correspondiente en la voluminosa papeleta electoral que será entregada a los votantes en noviembre próximo para que escojan a sus precandidatos favoritos y puedan convertirlos definitivamente en candidatos. Los escogidos deberán librar su última y decisiva batalla en noviembre del próximo año cuando se lleven a cabo las elecciones generales del 2013.

### **La difícil marcha de la economía y las finanzas públicas**

**E**stamos viviendo una “*emergencia fiscal*”, reconoció recientemente la influyente Ministra de la Presidencia y Designada presidencial María Antonieta Guillén. El crecimiento incontrolable de la deuda interna, que superó ya los 52 mil millones de lempiras (unos 2,620 millones de dólares), amenaza con generar un verdadero descalabro en las finanzas públicas a corto y mediano plazo. Esa deuda se duplicó en los últimos dos años: al salir el gobernante de facto Roberto Micheletti en enero de 2010 era de 22,500 millones de lempiras (unos 1,184 millones de dólares a la tasa de la fecha) mientras que al momento del golpe de Estado (28 de junio de 2009) sólo sumaba 12,687 millones de lempiras (unos 667 millones de dólares). El gobierno ha llegado a una situación tan desesperada que inunda el mercado financiero de bonos para recuperar dinero y pagar la misma deuda interna: contrata nueva deuda para pagar deuda vencida. Y todo esto lo hace subiendo cada vez más los intereses que paga por los bonos (15% actualmente) para volverlos atractivos y realizarlos lo más pronto posible. Muchas voces calificadas se han alzado para advertirle al gobierno que va camino hacia un abismo fiscal.

No es casual, entonces, que el tema de la deuda interna, y de las finanzas públicas en general, sea uno de los que más problemas y dificultades genera para alcanzar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algo que el gobierno necesita desesperadamente.

A última hora, el gobierno decidió intervenir la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), en un esfuerzo por elevar los niveles de recaudación y cumplir con las metas propuestas para este año (55,000 millones de lempiras, es decir unos 2,771 millones de dólares). La intervención de la DEI obligó a la renuncia de su Director (Enrique Buchard, un funcionario que vivía acosado por las presiones de los líderes políticos para colocar en las planillas de la DEI a sus activistas), que prefirió dejar el camino libre al trío de interventores que nombró el presidente. El actual desfase entre lo recaudado y lo que exige la meta fijada, oscila entre el 15 y el 20%, según cálculos de uno de los interventores (Jorge Yllescas).

Envuelto en esta crisis, el gobierno anunció la venta del 49% de las acciones de la vieja y obsoleta compañía telefónica, para cuya compra han aparecido ya unos tres candidatos identificados: empresas de Estados Unidos, China e Israel.

Pero las buenas nuevas no están del todo ausentes: la exportación de café creció en este año en 25% y produjo un total de 6,700 millones de quintales, lo que equivale a ingresos por valor de unos 1,300 millones de dólares. La cosecha terminó a finales de este mes de agosto.

### **Las relaciones con Estados Unidos y la guerra contra las drogas**

**L**a creciente tendencia a “militarizar” la lucha contra las drogas, involucrando cada vez más intensamente a las Fuerzas Armadas, especialmente a las Fuerzas Naval y Aérea, ya empezó a mostrar su “lado oscuro” y las inevitables y controversiales consecuencias.

El derribo de una avioneta (se habla de que fueron dos) que supuestamente transportaba droga y, entre sus tripulantes, a un agente encubierto de la DEA (policía antidrogas de los Estados Unidos), disparó todas las alarmas. El propio jefe del Comando Sur de los EEUU, General Donald Frazer, llegó de improviso a Tegucigalpa el pasado 24 y se reunió de urgencia con el presidente Lobo y los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores. La primera consecuencia de esta reunión fue la destitución fulminante del Comandante general de la Fuerza Aérea (FAH, el Coronel de aviación Ruiz Pastor Landa) y el jefe de su Estado Mayor Aéreo. De igual manera, se acordó enviar a los pilotos hondureños a cursos rápidos de refrescamiento y entrenamiento especial en las bases aéreas de EEUU.

Este último “*incidente*”, que según el presidente Lobo viola convenios firmados previamente por Honduras con Washington sobre el protocolo de derribo y la prohibición de atacar naves civiles, es apenas el último de otra cadena de desencuentros y disputas entre los militares hondureños y los de Estados Unidos. En el mes de junio, helicópteros de la DEA ametrallaron una embarcación con civiles en un río de La Mosquitia, a quienes confundieron con narcotraficantes. Murieron cuatro personas y la investigación prometida por el gobierno hondureño todavía no se ha llevado a cabo.

Por el momento, otra de las consecuencias inmediatas de estos desencuentros ha sido el retiro del radar que los norteamericanos mantenían en la zona de La Mosquitia, y su negativa a proporcionar información clasificada a los hondureños sobre el tráfico aéreo irregular de las avionetas y naves sospechosas de traficar con drogas.

Todo indica que la llamada “*nueva*” política antidrogas diseñada entre Washington y Tegucigalpa no ha comenzado bajo los mejores auspicios.

# SEPTIEMBRE

## 2012

---

### La situación política

**D**urante el mes de septiembre, tiempo en el que se celebran las fiestas de independencia nacional, los diputados del Poder Legislativo aprovecharon el ambiente festivo para intensificar sus campañas proselitistas de cara a las elecciones internas y primarias de noviembre próximo. El entusiasmo fue tal, que declararon feriado prematuro y abandonaron sus labores legislativas, prometiendo volver a ocuparse de los asuntos congresales después de las elecciones, es decir a finales del mes de noviembre. La agenda legislativa quedó en suspenso, subordinada a las urgencias electorales de los legisladores, muchos de los cuales pretenden reelegirse en sus curules en el próximo gobierno (2014-2018).

Las elecciones, por lo mismo, van viento en popa. Superados los momentos críticos del mes anterior y asignados ya, vía sorteo, los sitios que cada precandidato ocupará en las casillas de la extensa boleta electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio el banderillazo, a finales del mes, que marcó el inicio legal de la temporada proselitista, cuando todos los participantes pueden ya iniciar su propaganda electoral de manera pública y abierta. Además está decir que la gran mayoría de movimientos políticos (facciones internas de los partidos) y aspirantes individuales habían comenzado sus labores propagandísticas desde muchos meses antes, violando así en forma flagrante la legislación electoral. El TSE, como ya es costumbre, llega tarde en su afán por enmendar la plana a los candidatos y obligarlos a cumplir la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP). De acuerdo a las cifras del TSE, el censo o padrón electoral actual está compuesto por cinco millones 138 mil 113 ciudadanos en capacidad legal para votar. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que las cifras del TSE provienen del Registro Nacional de las Personas (RNP), una institución en extremo “*politizada*” (repleta de activistas políticos de los dos grandes partidos, el Liberal y el Nacional, junto a un porcentaje menor de democristianos) y carente de credibilidad tanto técnica como política. En ese Censo están incluidos los miles de emigrantes (más de un millón) que no vendrán a votar, muchos de los difuntos

---

cuyo deceso no ha sido registrado y no pocos extranjeros que han logrado hacerse ilegalmente con documentación “hondureña”.

La intensificación de la dinámica electoral, curiosamente, se traduce en mayor inercia e inmovilismo en los engranajes burocráticos del gobierno. Muchos de los funcionarios, altos e intermedios, así como los diputados, abandonan sus tareas diarias y dedican la mayor parte de su tiempo al activismo político. El gobierno entra en una nueva y más aguda fase de parálisis burocrática que, en este caso, se ve estimulada y agravada por la gravísima crisis fiscal por la que atraviesa la Administración del presidente Porfirio “Pepe” Lobo. El gobierno está al borde de la bancarrota financiera. Contrata nueva y cada vez más cara deuda interna para pagar la deuda vieja. Vende bonos del Estado, por los que deberá pagar elevados intereses (15%), para honrar deudas antiguas y pagar a los numerosos proveedores que hacen fila frente a la Tesorería Nacional exigiendo los pagos atrasados. Los empresarios se quejan y amenazan con cerrar el crédito a favor de las instituciones gubernamentales. De hecho, muchos proveedores ya se niegan a prestar o vender servicios y bienes al Estado. Varias dependencias estatales (Ministerios, empresas descentralizadas, el Congreso mismo, etc.) ya han gastado todo o casi todo el presupuesto que les fue asignado para todo el año. No tienen dinero ni para pagar los sueldos y salarios, mucho menos el décimo tercer mes (aguinaldo) que debe ser honrado a finales del año. La situación es, como puede comprobarse a diario, desesperante.

En condiciones semejantes, la firma de un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) parece cada vez más lejana. El gobierno necesita desesperadamente alcanzar un nuevo acuerdo (el último venció en marzo de este año) con el Fondo, lo que le permitiría recibir varios millones de dólares (entre 130 y 200) para el famoso “apoyo presupuestario”. Ello garantizaría un nuevo y recuperado equilibrio en las finanzas públicas que, aunque provisional y pasajero, facilitaría al gobierno terminar su periodo gubernamental en enero de 2014 sin mayores y desesperantes angustias. La Administración lobista no pierde la esperanza de alcanzar un acuerdo en los próximos meses o a principios del nuevo año.

Para ello deberá adoptar medidas drásticas en materia de austeridad financiera (ha anunciado muchas pero los resultados son muy pobres y escasos) y aumentar, a como dé lugar, la recaudación tributaria. La reciente intervención de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) por una terna de expertos en temas tributarios y las crecientes presiones en contra de los empresarios deudores y evasores del fisco nacional, son acciones que van en esa dirección. Sin embargo, entre más medidas anti evasión adopta el gobierno (muchas de ellas caóticas y contradictorias entre sí), más y mejores son los métodos y procedimientos que inventan o utilizan los empresarios para burlar a las autoridades tributarias. El caso de la Tasa de seguridad, un impues-

to a las transacciones financieras que deberá servir para financiar un mejor sistema de seguridad pública, es un buen ejemplo: en los primeros meses producía nueve millones de lempiras diarios (450 mil US dólares), luego bajó a siete y actualmente está en cinco millones (250 mil US dólares) por día. Los mismos banqueros locales han abierto ventanillas bancarias en Panamá, hacia donde han fluido millonarias corrientes de dinero local y en donde se realizan muchas de las grandes transacciones financieras sin pagar ningún impuesto. El presidente Lobo, cansado ya de apelar a la *"buena voluntad"* de los grandes contribuyentes, ha anunciado medidas drásticas contra estos *"evasores legales"* de los impuestos que deberían servir para garantizar mejores niveles de seguridad ciudadana. De acuerdo a estudios independientes, existen al menos 68 decretos y leyes que permiten o facilitan la *"evasión legal de los impuestos"*. Para colmo, según la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), en 29 meses de funcionamiento, el gobierno ha cambiado 28 veces las reglas del juego para la inversión privada, nacional y extranjera.

Como para complicar más las cosas, la Sala de lo Constitucional (cinco magistrados) de la Corte Suprema de Justicia, en una votación inesperada de cuatro a uno, declaró inconstitucional el decreto legislativo que crea las famosas Regiones Especiales de Desarrollo (RED), más conocidas como *"ciudades modelo"*, uno de los proyectos estrella de la Administración Lobo para atraer la inversión extranjera y *"vender"* a Honduras como tierra propicia para la creación de *"paraísos financieros e industriales globalizados y súper modernos"*. Ahora la Corte en pleno (quince magistrados) deberá decidir en el mes de octubre la suerte final (ratifica o rechaza el voto de la Sala Constitucional) del más ambicioso y acariciado proyecto económico (y político) del presidente Lobo. Si la decisión de la Corte mantiene el fallo de la Sala, tanto la ley que crea las *"Chartercities"* como la reforma constitucional que la hizo posible, quedarán sin valor alguno. Los sueños de atraer millonarias inversiones del exterior para financiar la creación de las RED habrá quedado simplemente en eso: un sueño. Ya en días anteriores, las *"Ciudades modelo"* habían recibido un golpe demoledor, cuando se hizo pública la renuncia del profesor norteamericano Paul Rommer, el principal ideólogo del proyecto, descontento con el manejo *"poco transparente"* del mismo por parte de los políticos locales (léase Juan Orlando Hernández y cia). La creciente debilidad del gobierno y su pérdida gradual de iniciativa y poder de convocatoria seguirán en ascenso.

En un intento por encajar el fuerte golpe, el gobierno lobista, respaldado por Juan Orlando Hernández desde el Congreso Nacional, han declarado que después de las elecciones primarias de noviembre, *"retomarán el caso"* de las RED, anunciando desde ya un posible enfrentamiento con los magistrados de la Corte Suprema si éstos se pronuncian a favor de la declaración de inconstitucionalidad del proyecto.

Los conflictos sociales mantienen su dinámica de tensión y crispación permanentes. En el Bajo Aguán, se resuelve a medias un problema y casi de inmediato surge otro. Las muertes están a la orden del día. Las invasiones también. Grupos de campesinos armados defienden las fincas asaltadas o protegen a nuevos invasores. Los guardias privados, con el auxilio de militares y policías intentan desalojarlos y se producen choques y enfrentamientos que, generalmente, se traducen en nuevos muertos en ambos bandos.

A mediados del mes circuló un rumor sobre posibles atentados contra la vida del ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), César Ham, y contra el conocido dirigente campesino Rafael Alegría (el amigo de Hugo Chávez en Honduras). El rumor muy pronto adquirió visos de certeza e información confidencial. El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, y el propio presidente Lobo les llamaron a ambos para advertirles del peligro y pedirles que tomaran las medidas apropiadas de seguridad personal. Al parecer, autores intelectuales desconocidos habrían contratado (y en el caso de Ham, pagado) a sicarios provenientes de las pandillas o “*maras*” para llevar a cabo la ejecución de los dos dirigentes. Alegría, quien en un principio pretendió buscar asilo en una embajada extranjera, al final optó por refugiarse en casas seguras y mantenerse en una relativa clandestinidad. Mientras Ham, quien se desplaza rodeado de guardaespaldas en carros blindados, es el principal dirigente del partido de izquierdas Unificación Democrática (UD), Alegría es fundador y candidato a diputado en las planillas del nuevo partido Libertad y Refundación (LIBRE).

Las amenazas a muerte contra Ham y Alegría (a última hora se habló también de Ana Pineda, la Ministra de Derechos Humanos y Justicia, pero no hay ninguna evidencia de que existan reales amenazas contra ella y todo apunta más hacia un reconocido afán de notoriedad por parte de esta funcionaria) se producen apenas días después de que fueron asesinados los abogados Antonio Trejo, apoderado legal de un importante grupo campesino (MARCA) del Bajo Aguán, y Manuel Díaz, Fiscal de los derechos humanos en la zona sur del país (Choluteca). Ambas muertes han recibido numerosas condenas a nivel internacional y muchos países y organismos extranjeros (Estados Unidos, Francia, España, Unión Europea, ONU, etc.) han pedido al gobierno investigar los casos y castigar a los culpables. En Washington, el conocido senador demócrata Howard L. Berman ha enviado nuevamente una carta a la Secretaria de Estado Hillary Clinton, exigiendo un viraje en la política de Estados Unidos hacia Honduras, el recorte y condicionamiento de la ayuda militar y policial y una fuerte demanda para que el gobierno de Tegucigalpa respete los derechos humanos y reduzca los alarmantes niveles de impunidad que prevalecen en el país.

El gobierno, otra vez, está siendo sometido a una ofensiva crítica en toda la línea por el espinoso tema de los derechos humanos. Y esto sucede justo

pocos días después de haber firmado el 13 de septiembre un Memorándum de Entendimiento con María Otero, Sub Secretaria de Estado para la Seguridad Civil, la Democracia y los Derechos Humanos del gobierno de los Estados Unidos. Ese documento deberá ser desarrollado a través de un “Plan de acción” que contiene las “Directrices conjuntas para la priorización e implementación de la seguridad ciudadana 2012-2013”. Dicho Plan deberá ser aprobado por ambos gobiernos en el transcurso de este mes de octubre.

La firma del mencionado Memorándum pretende restablecer y mejorar el nivel de las relaciones bilaterales entre ambos países, el mismo que se vio ligeramente afectado por los incidentes del derribo de las dos avionetas que supuestamente transportaban drogas ilícitas dentro del espacio aéreo hondureño (zona insular de Islas de la Bahía) y que culminó con la abrupta destitución del jefe de la Fuerza Aérea Coronel Pastor Ruiz Landa. Esa destitución, influida sin duda desde Washington, despertó mucho malestar al interior de las Fuerzas Armadas de Honduras, a tal punto que el jefe del Estado Mayor Conjunto, General René Osorio Canales, declaró a la prensa que los militares se sentían incómodos por las interferencias políticas en su trabajo. De inmediato, desde Casa de gobierno, le ordenaron callar y abstenerse de emitir opiniones sobre el asunto. Esta es la primera vez que se evidencia una discrepancia pública entre el gobierno lobista y los militares.

En el campo de la seguridad, en las últimas semanas se ha advertido un resurgimiento de las masacres y asesinatos colectivos, con decapitación y desmembramiento de cuerpos incluidos. Es como si se hubiesen intensificado las guerras internas entre las pandillas y los grupos dedicados al narcomenudeo o microtráfico de drogas. Los sicarios han vuelto a aparecer, dejando una secuela trágica de sangre y muerte tras de sí. Varios policías han caído, víctimas de esta nueva ola de violencia.

La reforma policial y la correspondiente depuración en las filas de los cuerpos de seguridad siguen a ritmo lento, sin afectar todavía a los altos jefes integrantes de las dos cúpulas que dirigieron la Policía Nacional entre octubre de 2011 -fecha fatídica cuando estalló la última y más grande crisis policial- y abril/mayo de 2012 (fecha a partir de la cual comenzó la Administración del hoy Comisionado General Juan Carlos “El tigre” Bonilla). El intento del precandidato nacionalista y presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, por crear su propia versión de una “nueva policía”, los llamados TIGRES, ha encontrado más oposición y rechazo del que se esperaba. El propio ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, ex capitán del ejército, ha declarado que si se pretende “militarizar la Policía”, él renunciará a su cargo y se dedicará a “cuidar mis pollos” (Bonilla es un conocido granjero y empresario avícola que se dedica a la cría de pollos).

Con la firma del Memorándum de Entendimiento a que se hace referencia en párrafos anteriores, los norteamericanos estarán en capacidad de poner en marcha su propia *“agenda de reforma en el sector seguridad”*, combi-nándola con las propuestas e iniciativas que genere la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), creada por el gobierno a finales de enero del presente año. Ante la ausencia de una agenda propia de seguridad por parte del gobierno, los norteamericanos han diseñado la suya y la discuten con la CRSP. En el marco de este proceso tan controversial, se debe entender la súbita decisión del Fiscal General, Luis Rubí, de pedir a los norteamericanos, en carta dirigida a María Otero, una *“evaluación profesional”* del Ministerio Público, en virtud de la *“crisis profunda”* en que ésta institución se encuentra. El Fiscal Rubí, que hasta no hace mucho se oponía empecinadamente a cualquier intento de evaluación en el Ministerio que dirige, ahora resulta que solicita a los norteamericanos que, por favor, lo sometan a una pronta y profesional evaluación. Este cambio de opinión no es fortuito: es el resultado de la presión de Estados Unidos sobre el gobierno, una vez que quedó claramente establecido que el Fiscal General era uno de los principales obstáculos para llevar a cabo la reforma integral del sistema la seguridad pública del país.

En los próximos días, la CRSP presentará ante el presidente de la República y, eventualmente, ante el Congreso Nacional, los proyectos de nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, Ley de la Carrera Policial, propuesta de reformas a la Ley del Ministerio Público y propuestas de dos reformas constitucionales para poder diseñar un nuevo esquema de seguridad pública en Honduras. De esta manera, se pondrá a prueba la verdadera voluntad política del Poder Ejecutivo y de los legisladores para llevar adelante una verdadera reforma de los tres operadores de justicia (policías, fiscales y jueces) en el sistema de seguridad.

### **La marcha de la economía**

**A** las dificultades derivadas de la ausencia de un convenio de mediano plazo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno debe sumar los problemas originados por el difícil manejo de una deuda interna de tan grandes proporciones, con altos intereses y plazos de vencimiento muy cortos. La decisión de convertir buena parte de esta deuda interna en externa, mediante la venta de la misma en el mercado internacional, sólo es posible si se logra la firma del Acuerdo con el FMI. Es como si se tratara de un círculo vicioso girando sobre una mesa redonda.

Mientras tanto, las reservas internacionales, poco a poco, disminuyen y generan preocupación. Datos oficiales indican que en ocho meses (enero-a-gosto) han descendido en 260 millones de US dólares (según Jorge Bueso

Arias, reconocido banquero local, el Banco Central ha perdido por concepto de reservas la suma de 603 millones de dólares desde julio del año pasado, cuando comenzaron las minidevaluaciones, a la fecha, mientras que la devaluación ha sido de 85 centavos de lempira). Entre tanto, los ingresos fiscales podrían caer en un 6%, unos 3,300 millones de lempiras (aproximadamente unos 165 millones de US dólares). La inflación ya superó los cuatro puntos en este mes y, para rematar, la factura petrolera podría alcanzar los 2,500 millones de dólares, una suma casi igual a las remesas familiares que los migrantes hondureños envían anualmente al país. Sólo en el primer semestre, esa factura fue de 1,600 millones de dólares, una cifra igual a la que se pagó en todo el año pasado. Según María Elena Mondragón, presidenta del Banco central, la economía crecerá este año en un 3,5%, mientras que la inflación no será mayor de 6,5%.

Un tanto optimistas, las autoridades del Banco Central esperan que este año las remesas familiares alcancen la cifra record de tres mil millones de dólares (en promedio, según estudios del mismo Banco, cada migrante envía mensualmente 315 dólares a sus familiares en Honduras). Aunque las remesas han seguido creciendo, su ritmo ha disminuido con respecto a los años anteriores a la crisis financiera y económica que afecta a la economía internacional.

El alza desmedida de los precios de los alimentos básicos seguramente elevará la tasa inflacionaria para finales del año, más allá de los cálculos relativamente moderados que hace el Banco Central. En este mes de septiembre subieron los precios de las carnes, los productos lácteos, los huevos, el azúcar y las gasolinas.

Sólo el café permite tener un poco de optimismo en el sector de la economía. Este año la exportación superó los siete millones y medio de quintales y generó 1,437 millones de dólares. Honduras ocupa ya el tercer lugar y aspira a convertirse muy pronto en el segundo exportador latinoamericano de café, sólo detrás de Brasil.

# OCTUBRE 2012

---

## La situación política

**E**l mes de octubre ha sido uno especialmente difícil y conflictivo para la Administración gubernamental que encabeza el presidente Porfirio “Pepe” Lobo. Al interior de la Policía Nacional se ha gestado una especie de *“insubordinación pasiva”*, que involucra a casi un centenar de oficiales que se sienten amenazados por las medidas de depuración y limpieza institucional que se están aplicando dentro del Ministerio de Seguridad, en especial en las filas policiales. Muchos (24) de estos oficiales, que incluyen Comisionados generales (11) y Comisionados (13), han sido colocados en situación de *“disponibilidad”*, una confusa *“figura administrativa”* que significa lo siguiente: los involucrados o *“disponibles”* no ocuparán ningún cargo específico pero mantendrán su sueldo, uniforme, insignia y arma, al menos durante un año, una vez cumplido el cual pasarán a condición de retiro si previamente no se les ha asignado una nueva responsabilidad dentro de la Policía. De 400 policías sometidos a las *“pruebas de confianza”*, 124 no lograron superar con éxito las pruebas del polígrafo y han decidido impugnar las mismas, alegando el carácter supuestamente inconstitucional de la utilización de semejante procedimiento. Será la Corte Suprema de Justicia la que dirá la última palabra sobre la viabilidad legal de las mencionadas *“pruebas de confianza”*.

Mientras llega la decisión de la Corte, en la Policía prevalece un clima de incertidumbre e indecisión en el que la disciplina se esfuma y las jerarquías se confunden. Los *“insubordinados”* se niegan a obedecer las órdenes de los nuevos jefes, a quienes consideran sus *“subalternos”*, y se mantienen en posición de cuasi rebeldía institucional. El liderazgo ministerial, atrapado en las restricciones y obstáculos contenidos en la actual Ley orgánica de la Policía Nacional, se muestra impotente para resolver la crisis y restablecer las líneas de mando que deben prevalecer en una institución vertical y jerarquizada. La situación es confusa y peligrosa, sobre todo si evoluciona a un Estado de *“insubordinación activa”*, tal como ya anuncian algunos de los antiguos jefes en condición de *“disponibles”*.

El pasado día 11 los antiguos jefes policiales, junto a otros oficiales descontentos, intentaron una maniobra sorpresiva para destituir al nuevo Director Nacional de la Policía, Juan Carlos “El tigre” Bonilla, y poner en su lugar a uno de sus partidarios. La iniciativa no prosperó, y el presidente Lobo, alertado a tiempo, reafirmó en público su absoluto respaldo a Bonilla y el apoyo a las medidas de depuración. Pero este es sólo un episodio de la conspiración policial. La trama continúa y no se debe descartar una nueva intentona de rebelión.

El día 26, la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) entregó al presidente Lobo, en ceremonia especial en casa Presidencial, un conjunto (siete) de propuestas de ley y de reformas para mejorar el funcionamiento del sistema de operadores de justicia en el país. El conjunto incluye una nueva Ley Orgánica de la Policía, una Ley de la Carrera Policial, la nueva Ley de la Carrera del Funcionario del Ministerio Público, una propuesta de reformas a la Ley del Ministerio Público, otra a la Ley de lo Contencioso Administrativo, una más a la Ley del Consejo de la Judicatura y una reforma constitucional para crear el llamado Sistema de Selección y Evaluación. En total son siete instrumentos jurídicos que constituirían, si fueran aprobados por el Congreso Nacional, la plataforma jurídica inicial para sentar las bases de una profunda reforma en el sistema de la seguridad pública en Honduras. Se espera que el debate legislativo sobre estas reformas e iniciativas, una vez que el presidente Lobo las haya revisado y enviado al Parlamento, se produzca tan pronto como haya concluido el proceso de elecciones internas y primarias que se llevarán a cabo el próximo 18 de noviembre.

La crisis profunda por la que atraviesa la Policía, de cuyo último estallido se cumplió un año este 22 de octubre, no parece tener fin. Se requiere de un liderazgo fuerte, decidido, dispuesto a poner orden y disciplina en las filas de la institución. Ni el ministro de Seguridad ni el presidente mismo parecen estar en esa disposición. Las medidas adoptadas por el nuevo Director Nacional, “El tigre” Bonilla, carecen de la coherencia y sostenibilidad suficientes como para ser totalmente efectivas. El proceso de depuración, impulsado desde la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y apoyado abiertamente por la Embajada de los Estados Unidos, todavía no ha sido capaz de generar la suficiente confianza y credibilidad públicas como para ser aceptado y respaldado por la opinión general. Hace falta mucho trabajo para remontar la crisis y transformar la Policía en una institución que goce de la confianza ciudadana.

El Ministerio Público, una de las tres instituciones clave en el sistema de operadores de justicia, se ha convertido también en un fuerte obstáculo para el avance y éxito de la reforma del sistema en su conjunto. Su actual titular, el Fiscal General Luis Rubí, conservador e incompetente, ha convertido la institución en una entidad débil e ineficiente, sin credibilidad pública y en

---

proceso de descomposición gradual, tanto desde el punto de vista ético como profesional. No es casual entonces que hayan sido los propios norteamericanos los que hayan influido, vía canciller Arturo Corrales, para doblegar la terca voluntad del Fiscal y obligarle a aceptar una “*evaluación profesional*” de su desempeño y actuación. Dicha evaluación, que será llevada a cabo por tres expertos internacionales (un mejicano, un salvadoreño y un costarricense) contratados directamente por el gobierno de Estados Unidos, comenzó a finales de este mes de octubre. Sus conclusiones y eventuales recomendaciones podrían ser adjuntadas a la propuesta de reformas que la CRSP presentó al presidente Lobo el día 26.

La reforma de la seguridad pública, una de las tres grandes reformas que el presidente Lobo quiere dejar en marcha al concluir su gobierno (las otras dos son la del sistema educativo y la de la sanidad pública), requerirá de más atención y respaldo por parte de los tres Poderes del Estado para que pueda avanzar y obtener algunos éxitos antes de que comience la nueva administración gubernamental (enero de 2014).

En otro orden de cosas, tal como ya se había previsto en el análisis del contexto del mes anterior, la Corte Suprema de Justicia en pleno, en una votación de 13 a 2, decidió respaldar la resolución de la Sala de lo Constitucional que previamente había declarado inconstitucional la disposición legislativa que creaba las llamadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED), más conocidas como “*ciudades modelo*”. La decisión de la Corte, que ya se veía venir, representa un fuerte golpe para las aspiraciones presidenciales de poner en marcha un megaproyecto que, a juicio del presidente Lobo y del presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández (JOH), permitiría crear decenas de miles de nuevos empleos y sentaría las bases para un despegue serio y positivo de la transformación económica y social de Honduras. El sueño de las “*ciudades modelo*” ha quedado, al menos por ahora, sepultado bajo la resolución inapelable de la Corte Suprema de Justicia.

La reacción del presidente no se ha hecho esperar. Pidió a los desempleados, entre molesto e irónico, que vayan a la Corte Suprema a buscar empleo, en abierta alusión a la imposibilidad de crearlos en el marco del megaproyecto rechazado por los magistrados. El presidente del Poder Legislativo, el aspirante presidencial JOH, fue más cauto y cuidadoso. Esperará a conocer el resultado de las elecciones del próximo 18 de noviembre en las que, en caso de salir triunfador, se convertiría en el candidato oficial del partido Nacional (PN) para las elecciones generales de noviembre del próximo año. Si las gana, estará en mejor posición para replantear la iniciativa de las “*ciudades modelo*”, modificando el esquema legal y buscando nuevas fórmulas de solución que dejen sin alternativas a sus opositores en la Corte Suprema. Para él, el caso no está totalmente cerrado y dependerá en buena parte del resultado electoral del próximo mes.

Pero, al igual que JOH, también el alcalde capitalino, Ricardo Álvarez, y el ex ministro de Obras Públicas y Transporte, Miguel Pastor, esperan convertirse en el candidato oficial del PN. Los tres tienen posibilidades y las elecciones serán muy reñidas. La pelea es intensa y está causando serios daños a la unidad interna del partido, fraccionado a fondo y confrontado con virulencia por las disputas entre los diferentes aspirantes (siete en total, pero sólo los primeros tres con posibilidades reales). Sin importar quién sea el ganador, una cosa es cierta: el partido de gobierno saldrá muy maltrecho después de la contienda y serán necesarios grandes esfuerzos para devolverle la unidad perdida y la cohesión necesaria para poder ganar las elecciones generales.

Y esto es particularmente cierto, si se toma en cuenta la nueva complejidad que caracteriza el panorama político/electoral de la Honduras actual. A diferencia del pasado, esta vez las fuerzas principales no son dos (bipartidismo tradicional) sino que son tres. La presencia del nuevo partido Libertad y Refundación (LIBRE) es un factor que distorsiona el viejo modelo político, altera sustancialmente la correlación de fuerzas en el sistema de partidos e introduce nuevos elementos en el tablero del ajedrez político/electoral de Honduras. Además, si aceptamos que LIBRE es hoy el partido político que crece con más amplitud y rapidez, movilizándolo cada semana miles de partidarios en todo el territorio nacional y multiplicando sus estructuras organizativas en cada rincón del país, la conclusión es clara: el triunfo de uno de los dos partidos tradicionales de Honduras, el Liberal o el Nacional, no será esta vez tan fácil e inevitable como en los años anteriores. Y algo más, aunque ganen la Presidencia los partidos tradicionales, ya sean los liberales o los nacionalistas, la composición del Congreso Nacional será diferente, más compleja y diversa, con una bancada de diputados de LIBRE que no permitirá el control exclusivo de la instancia parlamentaria por parte del partido vencedor en las elecciones generales de noviembre de 2013.

En las filas del partido Liberal (PL) hay tres precandidatos en disputa, pero sólo dos tienen posibilidades reales de hacerse con el triunfo y convertirse en el candidato oficial del partido: Mauricio Villeda y Yani Rosenthal. El otro, Esteban Handal, más conocido como *"El toro colorado"*, no tiene opciones ciertas de triunfo, a pesar de sus abundantes recursos y esfuerzos. Si gana Villeda, muchos de los partidarios de Yani Rosenthal, desilusionados y frustrados, podrían emigrar hacia las filas de LIBRE, en donde siempre tendrán acogida por su condición de *"liberales"* (recuérdese que en LIBRE militan miles de liberales zelayistas, adversarios del golpe de Estado, pero que siempre se consideran *"liberales"*). Es más probable que opten por apoyar a LIBRE que por favorecer a Villeda, un político considerado ultraconservador, proveniente del catolicismo fundamentalista (es un activo militante del Opus Dei, antiabortista y clerical en grado sumo) y, por lo mismo, furibundo partidario del golpe de Estado (fue el representante del gobernante de facto,

Roberto Micheletti, en las negociaciones del Pacto de San José, en Costa Rica, en los días inmediatos al golpe de Estado). En cambio, si gana Yani, lo más seguro es que los villedistas estarían más dispuestos a darle un discreto apoyo, pero nunca podrían emigrar hacia LIBRE y favorecer a los zelayistas, sus enemigos más declarados dentro del liberalismo. Por lo tanto, no es casual que el liderazgo de LIBRE, especialmente su dirigente principal, el ex presidente Manuel Zelaya, prefieran de manera discreta una victoria de Villeda, su adversario principal, para promover después una política de atracción hacia los derrotados partidarios de Yani y provocar una emigración considerable de votos liberales para favorecer a la candidata presidencial de LIBRE, la ex primera dama Xiomara Castro de Zelaya. Una estrategia política complicada pero que puede resultar muy efectiva.

El panorama electoral, como ya se dijo antes, es ahora más difuso y complicado. Aunque son nueve los partidos políticos debidamente inscritos y autorizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para participar en las elecciones generales del último domingo de noviembre de 2013, sólo tres son los que tienen reales opciones de obtener el triunfo: el PL, el PN y LIBRE. Esas tres fuerzas políticas se distribuirán el grueso principal de los diputados nacionales (256, entre propietarios y suplentes), diputados al Parlamento Centroamericano (20), alcaldes (298) y Regidores de las corporaciones municipales. El bipartidismo tradicional, que durante más de cien años permitió que liberales y nacionalistas se turnaran en el control del mando presidencial y del Estado, ha llegado a su fin. Ahora hay una tercera fuerza en la disputa y ese sólo hecho ha cambiado, creemos que para siempre, al modelo político y electoral de la sociedad hondureña. En este sentido, las próximas elecciones tendrán un especial valor histórico por su singularidad y novedad.

### **La marcha de la economía: perspectivas y desafíos**

**C**arlos Borjas, uno de los viceministros de Finanzas (a quien el presidente Lobo llamó mentiroso en público por haber advertido sobre las dificultades que habrá para pagar los aguinaldos navideños a los empleados públicos), declaró públicamente que el déficit fiscal del gobierno podría llegar en diciembre al 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB), más o menos unos 600 millones de dólares al cambio actual. Esta alarmante predicción ayudaría a comprender las dificultades que encuentra el gobierno para firmar un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y tener acceso a nuevos fondos frescos para apuntalar el desequilibrado presupuesto nacional.

La deuda interna, una de las principales preocupaciones fiscales del régimen, alcanzó ya la suma de 52,545 millones de lempiras (unos 2,627 millo-

nes de dólares, o sea el 43,2% de toda la deuda pública de Honduras). Y, para agravar la situación, los nuevos interventores de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) reconocen que los cálculos sobre las nuevas recaudaciones tributarias para el año 2013 son irreales y, por lo mismo, no podrán ser alcanzados: en lugar de los 61 mil millones de lempiras programados (unos 3,050 millones de dólares), lo realmente posible ascenderá a la suma de 54 mil millones (unos 2,700 millones de dólares), mil millones más que lo estimado para este año 2012. Por cierto que la DEI tiene ahora un nuevo Director, el señor Mario Roberto López, un técnico financista, militante reconocido del partido de gobierno. Estará siempre acompañado por los dos interventores que le ayudarán en el manejo de una oficina tan estratégica como controversial.

Las reservas internacionales, al finalizar el mes de octubre, de acuerdo a los datos oficiales del Banco Central, llegaron a 2,473 millones de dólares, lo que arroja una pérdida de 348 millones de dólares con respecto a las cifras de diciembre del año 2011.

La inflación alcanzó ya el 5,1% y podría superar en diciembre los 6,5% programados por el Banco Central en su Programa Monetario de este año.

Estos preocupantes datos de las finanzas públicas se complementan con los proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sobre el desempleo: 120,811 desempleados absolutos, el 52% de los cuales son jóvenes menores de 24 años, y un millón setecientos mil subempleados.

Todo esto en un país que, según el diario londinense *TheEconomist*, ocupa el segundo lugar en Centroamérica por el número de millonarios (205) que alberga, inmediatamente después de Guatemala que encabeza la dudosa lista con 235 magnates en su haber.

# NOVIEMBRE

## 2012

---

### La situación política

**E**ste mes de noviembre, mes de elecciones internas y primarias en tres (los más grandes) de los nueve partidos políticos legalmente inscritos y, por lo mismo, autorizados para participar en las elecciones generales que tendrán lugar en noviembre del próximo año 2013, ha sido un mes turbulento y cargado de sorpresas y confrontación, tanto política como social.

El mes comenzó con las ya clásicas manifestaciones callejeras de protestas en contra del alto costo de la vida, el alza en los precios de los productos de la llamada “*canasta básica*”, los reclamos laborales de los maestros y los médicos, “*tomas*” de vías públicas por parte de pobladores descontentos, huelgas y paros en distintas dependencias del Estado (Instituto Hondureño de Antropología e Historia, Registro Nacional de las Personas, hospitales públicos, centros educativos, etc.). Los gremios magisteriales, enfrentados a muerte con el ministro de Educación y dispuestos a permanecer en las calles la mayor parte del tiempo, siguen siendo el sector más conflictivo en el momento actual. Pero los médicos no se quedan atrás. Molestos por las nuevas medidas de control impuestas en el sistema de salud, especialmente en el Hospital Escuela, decidieron declararse en huelga, la que mantuvieron durante 21 días, ocasionando graves daños al funcionamiento normal del sistema sanitario público del país.

A esto hay que sumar el descontento y la incertidumbre que prevalecen entre los empleados públicos, temerosos por la grave crisis fiscal por la que atraviesa el gobierno, que bien podría traducirse en atrasos en el pago de los sueldos y salarios correspondientes al mes de diciembre, incluyendo el ansiado aguinaldo navideño (décimotercer mes) que la ley establece para el final del año. El presidente Lobo ha insistido en que su gobierno sabrá honrar los compromisos salariales en diciembre, incluyendo los famosos aguinaldos. El ministro de Finanzas incluso afirmó que ya tienen en reserva fiscal el 50% de esos pagos. Pero la duda prevalece.

En un clima semejante, en medio de conflictos sociales, crisis fiscal y escaso crecimiento económico, se llevaron a cabo el domingo 18 las esperadas elecciones internas y primarias al interior de los tres partidos políticos más grandes del escenario nacional: partido Liberal (PL), partido Nacional (PN) y partido Libertad y Refundación (LIBRE). En un ambiente de notorio entusiasmo y amplia participación ciudadana, las elecciones transcurrieron en relativa calma, sin que se reportaran incidentes graves o actos notorios de violencia política.

Los problemas comenzaron después, cuando dio inicio el proceso de conteo y escrutinio de los votos depositados en las urnas. El llamado Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un mecanismo que permite al Tribunal Supremo Electoral (TSE) informar a la población lo más pronto posible sobre los primeros resultados que ingresan al registro oficial de datos electorales, generó más problemas que soluciones y se convirtió en la principal fuente de dudas y sospechas de fraude. Fallas en el sistema electrónico, esgrimidas como causa para explicar la sospechosa interrupción de los flujos informativos, sólo sirvieron para estimular la desconfianza y, al final, descalificar los datos iniciales a los que el propio TSE optó por calificar como “no oficiales”.

Las protestas fluyeron desde todos lados. Los candidatos que al inicio de la transmisión aparecían como favoritos, encabezando las tendencias estadísticas, de pronto reaparecían en segundo y hasta en tercer lugar, generando más dudas y desconcierto. El caos y la desconfianza acabaron saturando el ambiente y el TSE se mostró incapaz para asegurar la estabilidad necesaria y devolver la calma a los aspirantes políticos. En consecuencia, el proceso electoral, que estaba llamado a ser un instrumento de la reconstrucción institucional del sistema político y una fórmula apropiada para devolver legitimidad al funcionamiento democrático del país, salió muy afectado en su credibilidad pública, al tiempo que mostró con nitidez las carencias y fallas de un sistema electoral ya obsoleto e inapropiado para las nuevas necesidades y urgencias de la sociedad hondureña actual.

Y así es. El sistema electoral actual, basado en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP, 2004), debe ser sometido a una profunda revisión y reforma. El propio TSE elaboró una propuesta de reforma electoral ampliamente discutida en diversas instancias y sectores sociales, la envió al Congreso Nacional para que fuera analizada y aprobada antes de las elecciones de este año, pero los legisladores decidieron ignorarla y “*engavetarla*”, es decir guardarla en los archivos y posponer su discusión para mejores tiempos (En Honduras es célebre la frase de un diputado que definió la acción de “*engavetar*” como una fórmula novedosa y muy apropiada de “*legislar*”). De esta forma, el país fue a elecciones con un instrumento jurídico deficiente y, en el mejor de los casos, inapropiado y obsoleto. Es un conjun-

to de disposiciones normativas diseñado para gestionar las elecciones en el sistema bipartidista tradicional, con las reglas y costumbres impuestas por los dos grandes partidos tradicionales e históricos del país, es decir los liberales y los nacionalistas. Pero ahora la situación ha cambiado: la sociedad es más plural, más vigilante y más participativa. Hay una especie de reactivación del interés por la participación política, sobre todo entre los jóvenes y las mujeres, especialmente después del golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Fruto de esa reactivación anímica de la política es la aparición de un nuevo partido político, el de la Libertad y la Refundación, más conocido por sus siglas de LIBRE.

El simple surgimiento de un nuevo partido, con estructuras orgánicas fuertes y dispersas por todo el territorio nacional, con un liderazgo bien definido y decidido, con demostrada capacidad de organización y movilización en todo el país, es una razón suficiente para someter a revisión el viejo modelo electoral. LIBRE ha cambiado la geografía electoral del país y ha mostrado con creces las falencias y envejecimiento del antiguo esquema electoral vigente.

Los resultados electorales, a pesar de las dudas y desconfianza que han generado, son la base para que el TSE declare a los ganadores del torneo electoral y les asigne a todos los candidatos el número de votos que real o supuestamente han acumulado a su favor. De esta forma, con casi el 100% de los votos ya escrutados, los ganadores son Mauricio Villeda en el PL y Juan Orlando Hernández en el PN. En lo que concierne a LIBRE, sólo presentaron una candidata, la señora Xiomara Castro, definida como la "*candidata del consenso*". Por lo tanto, en este caso, todos los votos depositados en las urnas de LIBRE para el nivel presidencial fueron adjudicados a favor de la señora Castro de Zelaya.

En base a las cifras del TSE, los nacionalistas reunieron un poco más de un millón de votos (1,137,906) entre sus siete movimientos participantes; los liberales reunieron 716,550 votos entre sus tres movimientos participantes, mientras que el nuevo partido acumuló un poco más de medio millón (589,926) de votos para su candidata presidencial y los distintos aspirantes a diputados y alcaldes.

Estas son las cifras del TSE. Muchos son los candidatos que discrepan de ellas y reclaman un nuevo conteo de los votos contenidos en las llamadas "*urnas sospechosas*" o "*urnas que presentan incongruencias e irregularidades*". De acuerdo a los propios responsables de la auditoría electoral (una firma consultora internacional), al menos unas dos mil urnas no aparecen y otras tantas actas electorales carecen de los datos básicos para ser tenidas como ciertas y valederas. O sea, pues, que los datos todavía son incompletos y dudosos. Y, lo que es más grave, seguramente así se quedarán.

Por eso, el principal candidato perdedor en el PN, el actual alcalde capitalino Ricardo Álvarez, se niega a reconocer su derrota y, en consecuencia, el triunfo de su contendor Juan Orlando Hernández (JOH). Exige un nuevo conteo de los votos, urna por urna y voto por voto, pero ya el TSE ha rechazado sus demandas y peticiones. El propio presidente de la República, quien, por lo demás, nunca escondió sus simpatías por JOH, ha pedido públicamente el reconocimiento del triunfo de su *“delfín político”* y ha condeñado las protestas y reclamos de los perdedores. En alusión directa a dos de los vencidos (Ricardo Álvarez y Miguel Pastor), ha dicho que no pudieron ganar a pesar del apoyo de los grandes banqueros y de muchos de los principales medios de comunicación, porque *“el pueblo decidió apoyar al candidato que sólo tenía el respaldo de los pobres”*, es decir JOH. De esta forma, el presidente Lobo ha tomado partido abiertamente y, al hacerlo, ha mostrado sus divergencias con otros líderes del PN que respaldan a Álvarez (el ex presidente Ricardo Maduro, por ejemplo) y con los grupos económicos (el Grupo Ficohsa, especialmente) que le han dado sustento financiero en esta campaña electoral.

De esta forma, el PN, aunque según el TSE es el partido más votado, sale bastante lesionado en su unidad interna y presenta fracturas sensibles que podrían disminuir su impacto electoral en los comicios del próximo año. Reconciliar a Álvarez, Pastor y Hernández no será una tarea fácil, pero sin su unidad el partido lucirá cojo y cuarteado ante sus principales adversarios: los liberales y el zelayismo aglutinado en LIBRE.

Al interior del PL las cosas son un poco diferentes. Aunque un tanto a regañadientes, el principal candidato perdedor, Yani Rosenthal, el *“delfín”* del grupo bancario e industrial Continental, ha reconocido su derrota y ha prometido hacer esfuerzos para construir y fortalecer la unidad del partido, unidad que ha quedado profundamente resquebrajada desde el día del golpe de Estado, y que se ha visto más debilitada aun durante estas elecciones internas y primarias. Mauricio Villeda, el ganador, representa a las fuerzas que apoyaron el golpe de Estado, simboliza la derecha clerical y beata del país, un abogado de empresas que estuvo directamente involucrado en la defensa pública, nacional e internacional, del gobernante de facto y protagonista clave del 28J, Roberto Micheletti. Los seguidores de Rosenthal, entre los cuales se cuentan muchos liberales que son adversarios y críticos del golpe de Estado, no la tendrán muy fácil al momento de decidir por quién votar. Hacerlo a favor de Villeda es avalar al sector golpista y conservador del PL. Votar en blanco es desperdiciar su voto o, indirectamente, favorecer a los nacionalistas, sus tradicionales adversarios. Su dilema es más complicado: emigrar hacia las filas de LIBRE y hacer causa común con los zelayistas, entre los cuales hay miles de liberales que se proclaman *“en resistencia”*, es decir antigolpistas y, por lo mismo, cerrados enemigos de Villeda y los grupos empresariales y religiosos que lo respaldan.

---

Zelaya, al hacer sus cálculos políticos, cuenta con el beneficio de una cierta migración de liberales descontentos por el triunfo de Villeda, que vendrían, finalmente, a favorecer la fuerza electoral de LIBRE. Puede ser que tenga razón, aunque no hay motivos para ser demasiado optimistas en cuanto al “caudal político migrante” que se deba esperar.

El liderazgo de LIBRE, con Zelaya y Xiomara a la cabeza, están satisfechos con los resultados obtenidos, amén de que están seguros que los votos depositados en las urnas de LIBRE sí son votos reales y no “virtuales”, como creen que son muchos de los votos que aparecen en las urnas del PL y del PN. Los 600 mil votos obtenidos por LIBRE están distribuidos de acuerdo a la verdadera correlación de fuerzas internas que existe en el nuevo partido político: la mayoría favorece a los llamados “liberales en resistencia” agrupados en el Movimiento 28 de Junio, es decir los “liberales zelayistas” que acompañaron a su líder al momento de abandonar a su partido matriz, el PL; luego están los integrantes del Movimiento Fuerza de Refundación Popular (FRP), los llamados “Refundacionistas”, que vienen de las gastadas filas de la vieja izquierda y del denominado “sindicalismo clasista”; en tercer lugar aparecen los miembros del Movimiento de la Resistencia Progresista (MRP), encabezados por el abogado Rasel Tomé, un hombre de confianza y cercano colaborador del ex presidente Zelaya. Así han quedado redistribuidas las cuotas de poder dentro de LIBRE. Es de esperar que no se produzcan bruscos reacomodos o controversias ideológicas intransigentes que debiliten la frágil unidad de las filas del tercer partido más grande de Honduras. El liderazgo de Zelaya será puesto a prueba, una vez más, para demostrar si es capaz de mantener la unidad tanto al interior de las filas partidarias como en el seno del llamado Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que, según los “Refundacionistas”, es la verdadera casa matriz del partido LIBRE y la fuente inagotable de sus mejores recursos humanos y arsenal ideológico. Zelaya deberá hacer verdaderos malabarismos políticos para mantenerse fuerte en medio de ese laberinto de ideas y propuestas, entusiasmo y triunfalismo, en que a veces parece haberse convertido el nuevo partido.

Una vez pasadas las elecciones del domingo 18, aunque todavía las aguas no vuelven a su nivel y se mantienen revueltas y turbulentas, el gobierno del presidente Lobo ha debido enfrentarse con igual resignación a los numerosos problemas fiscales y de gestión que han caracterizado los últimos meses de su Administración.

Para empezar, ha pedido a sus colaboradores y funcionarios que resultaron escogidos para cargos de elección popular, que deben interponer sus renuncias y dedicarse a sus quehaceres políticos, sin afectar la buena marcha de los órganos gubernamentales. De paso, para guardar las apariencias, les

ha pedido también que recomienden los nombres de sus posibles sucesores.

Al mismo tiempo, en un último y desesperado esfuerzo por devolver un mínimo equilibrio a las finanzas públicas, ha enviado al Congreso Nacional una atrevida propuesta de cuatro reformas fiscales que la prensa no ha vacilado en calificar despectivamente como el “*octavo paquetazo*”, es decir la reforma fiscal número ocho que el gobierno piensa aplicar “*en contra del pueblo*”. La nueva propuesta persigue el objetivo de aumentar los ingresos tributarios del Estado por la vía del incremento de 10 a 25% de los impuestos que deben pagar los extranjeros (individuos o empresas) que hacen negocios en Honduras, a la vez que se elimina la exoneración del 10% por la importación de combustibles que actualmente favorece a las empresas térmicas proveedoras de energía eléctrica al Estado. De igual manera, el gobierno solicita a los diputados la autorización para vender bonos estatales, llamados “*bonos soberanos*”, por valor de unos 750 millones de dólares en el mercado internacional. Si el Congreso Nacional lo aprueba y el Estado logra colocar con éxito los mencionados bonos en el exterior, el gobierno considera que habrá creado las condiciones apropiadas para equilibrar las finanzas en el próximo año y asegurar una transición política estable y segura hacia el nuevo gobierno que deberá comenzar en enero de 2014. Para resolver los problemas de falta de recursos en este año y poder cumplir con los compromisos salariales y de otro tipo en el mes de diciembre, el gobierno ha pedido al Banco Central un préstamo por valor de cien millones de dólares que, al ser otorgado, sin duda alguna habrá de repercutir en el ya deficiente Estado de las reservas internacionales del país (al 30 de noviembre, las reservas internacionales netas del país eran de 2,380 millones de dólares, unos 441 millones menos en comparación con las que habían a finales de diciembre del año pasado. El nivel actual sólo cubre 2,9 meses de importaciones de bienes y servicios).

El gobierno, además, ha tenido que lidiar con los problemas típicos de la corrupción habitual, sólo que en esta ocasión los escándalos han sido mayores y se han producido en un área, la de la salud, especialmente sensible para la opinión pública. Han salido a relucir todas las compras fraudulentas y poco transparentes que son una vieja característica en la administración de los centros hospitalarios y en la gestión general del sistema sanitario público. Un grupo de empresas farmacéuticas, ligadas a reconocidas familias de los grandes grupos económicos del país, son las beneficiarias de estas prácticas de corrupción y saqueo de los fondos públicos: medicinas vencidas, compras falsas, falsificación de patentes, fraude en la calidad y periodos de vigencia de los medicamentos, etc. Son algunas de las fórmulas utilizadas por proveedores, administradores hospitalarios e intermediarios políticos en esta sucia y vergonzosa trama de corrupción y robo en el sistema de salud pública del país.

Ya para terminar el mes, el gobierno recibió un nuevo golpe en sus políticas y gestión pública. Esta vez el golpe fue en el área de la seguridad, en donde el presidente Lobo hace constantes esfuerzos por llevar a cabo la depuración de los cuerpos policiales y la reforma de todo el sistema de operadores de justicia. La Corte Suprema, a través de la llamada Sala de lo Constitucional (cinco magistrados) resolvió por una votación de cuatro a uno declarar inconstitucional el uso de las pruebas de confianza, en especial la del polígrafo, para medir los niveles de lealtad y fiabilidad de los policías. De esta manera, la Corte Suprema anula una reforma legal que permitía al Ministerio de Seguridad avanzar con soltura y agilidad en el proceso de depuración de la Policía Nacional. Falta ver lo que decidirá en los próximos días el llamado pleno de la Corte (los quince magistrados) sobre la resolución de la sala de lo Constitucional. Si la mantiene firme, el gobierno ya ha declarado que no le quedará más alternativa que acudir al mecanismo del plebiscito, en tanto que fórmula de consulta de democracia directa, para que sea el pueblo el que decida qué hacer finalmente en materia de depuración y reforma policial.

A juzgar por lo que está sucediendo y lo que puede suceder después, el próximo año será uno muy agitado y convulso.

# DICIEMBRE 2012

---

## La situación política

**D**iciembre, el último mes del año, será un mes inolvidable en los registros históricos de la Administración nacionalista que dirige el presidente Porfirio Lobo. Las razones son muchas y variadas: crisis institucional entre los Poderes del Estado, agudización de la crisis y verdadero colapso de las finanzas públicas, rebelión creciente de los empleados públicos en reclamo de salarios y aguinaldos navideños, incremento de los índices de violencia y criminalidad, fricciones y choques con los países vecinos (El Salvador y Nicaragua) en las aguas del Golfo de Fonseca, bancarrota de las empresas estatales y déficit creciente en el presupuesto nacional, fuertes presiones de los organismos financieros internacionales a favor de la devaluación y el recorte del gasto público, controversias públicas y agudas con los grupos empresariales y choques cada vez más fuertes con los gremios magisteriales y otros movimientos sociales.

Y, para colmar la copa, todos estos problemas se producen en un contexto de abierta polémica en torno a los resultados oficiales de las elecciones primarias e internas celebradas el día 18 del mes anterior. Una vez que el Tribunal Nacional de Elecciones (TSE) divulgó de manera oficial los resultados finales del proceso electoral, el día 10, surgieron los reclamos y las protestas. El principal perdedor de tales elecciones, a nivel del partido de gobierno, el actual alcalde capitalino, Ricardo Álvarez, rechazó de inmediato los resultados y calificó las elecciones como un gigantesco fraude. Exigió al TSE el recuento de los sufragios (*"voto por voto y urna por urna"*), convencido como está de haber ganado las elecciones y derrotado a su rival más importante, el presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández (JOH), declarado vencedor según las cifras del TSE. Las denuncias de Álvarez, muchas de ellas respaldadas por documentos que demuestran la manipulación de las actas electorales y la falsificación de sus contenidos, dejaron sin piso al TSE y contribuyeron a descalificar, aún más si cabe, al proceso electoral del pasado mes de noviembre. Para rematar, el candidato perdedor en el partido Liberal (PL), el banquero Yani Rosenthal, también mostró sobradas dudas sobre la transparencia del proceso electoral y, aunque al final aceptó la victoria de su principal contendor, el abogado Mauricio Ville-

da, continúa insistiendo en que hubo fraude y burda manipulación de los documentos electorales por parte de los activistas y partidarios del ganador.

Incluso Manuel Zelaya, el líder principal del nuevo partido político y tercero en discordia en estas elecciones, el partido Libertad y Refundación (LIBRE), mostró su disgusto por la manipulación de las actas y el abuso en el manejo de las urnas, a pesar de que su partido resultó favorecido con casi 600 mil votos, y su candidata, la ex primera dama Xiomara Castro, terminó la contienda como la candidata presidencial más votada.

En suma, pues, todos, con excepción de JOH y Villeda, parecen incómodos y molestos con las cifras oficiales divulgadas por el TSE y los resultados finales del torneo electoral recién pasado. De acuerdo a tales cifras, el total de ciudadanos que acudieron a depositar su voto en las urnas fue de 2 millones, 458 mil 558 votos, cantidad que resulta dudosa si se toma en cuenta que miles de actas electorales fueron manipuladas por los responsables de las mesas receptoras, los números resultaron cambiados y las sumas de votos asignadas a cada candidato perdieron la validez y credibilidad necesarias para ser legítimas. La mayoría de los observadores coincide en afirmar que las cifras del TSE están infladas, especialmente en lo que respecta a las cantidades alcanzadas por los candidatos ganadores en el liberalismo y en el nacionalismo.

La situación ha generado controversia y división en los dos grandes partidos tradicionales del escenario político hondureño pero, de manera muy especial, al interior del partido gobernante, en donde la situación ha llegado casi a puntos de ruptura entre los partidarios del candidato ganador JOH y los seguidores del perdedor, Ricardo Álvarez. La pugna ha llegado a tal punto que éste último, Álvarez, ha presentado un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se obligue al TSE a recomtar los votos urna por urna, a fin de establecer con precisión cuáles fueron los resultados reales del discutido torneo electoral. Álvarez está convencido de haber ganado en los comicios del día 18.11.12.

Precisamente esa pugna entre Álvarez y JOH es una de las razones que está en la base de la grave crisis política que se ha desatado entre los Poderes del Estado, especialmente entre el Legislativo y el Judicial. Temeroso porque la Corte Suprema pudiera darle la razón a Álvarez, JOH se ha apresurado a mover sus peones en el seno del Congreso Nacional y enviar un mensaje claro de intimidación y advertencia a los magistrados del máximo tribunal de justicia del país: en la madrugada del día 12, en una sesión tumultuosa y agitada, una mayoría de diputados (97), entre nacionalistas, liberales y udeístas (izquierda parlamentaria), decidieron destituir a los cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que habían votado a favor de la inconstitucionalidad de una ley especial y temporal para depurar a la policía. Con el pretexto oportuno de la limpieza

en las filas policiales -una demanda constante de la población-, los legisladores asestaron un fuerte golpe a la institucionalidad del sistema judicial y, al mismo tiempo, mostraron su firme determinación de cambiar a todos los magistrados (los once restantes del pleno de quince) si fuera preciso, para evitar una posible resolución que afecte o ponga en duda siquiera el triunfo electoral del presidente del Parlamento, JOH.

De esta forma, la institucionalidad del país volvió a mostrar su fragilidad y flaqueza. La politización partidaria del sistema judicial puso en evidencia la debilidad del mismo y su inutilidad como poder independiente y funcional para impartir justicia y fortalecer el Estado de derecho. Otra vez el país está sumido en una grave crisis que afecta a sus principales instituciones y muestra la vulnerabilidad del sistema político en su conjunto. La crisis que hoy lo afecta no es otra cosa más que una manifestación a posteriori de la grave ruptura del orden jurídico constitucional que se produjo en la mañana del día 28 de junio del año 2009, fecha en que se llevó a cabo el fatídico golpe de Estado en contra del gobierno del hoy ex presidente Manuel Zelaya. Los polvos de ahora son consecuencia de aquellos lodos. El país no acaba de superar los efectos de aquella crisis y continúa sufriendo el impacto negativo de sus resultados.

Esta nueva crisis política e institucional no augura nada nuevo para el año 2013. Será un año plagado de problemas y dificultades, los que van desde la bancarrota fiscal en que se encuentra el Estado hasta los grandes desafíos que habrá de enfrentar en el campo de los conflictos sociales y el auge de la delincuencia y el crimen organizado.

El año que ha terminado concluyó con una serie de protestas y manifestaciones callejeras en demanda del pago de sueldos y bonos navideños (aguinaldos). Casi todos los empleados públicos, en mayor o menor medida, se vieron afectados por la crisis fiscal y la incapacidad del gobierno para pagar sus deudas. El Ministerio de Finanzas dejó de pagar un total de 117 millones de dólares en sueldos y salarios a los empleados públicos. Ello explica la presencia de miles de protestantes en las calles de la capital, especialmente maestros, burócratas de las diferentes dependencias del Estado y entes descentralizados: enfermeras, médicos, profesores, barrenderos, empleados de las alcaldías, oficinistas, etc. Todos salieron a quejarse y exigir del gobierno el cumplimiento de sus obligaciones. Por momentos parecía que el país había caído en una especie de rebelión pasiva por parte de la burocracia estatal en contra de la Administración lobista.

Para agravar más la situación, tanto el presidente de la República como el del Congreso Nacional, Porfirio Lobo y JOH, abandonaron el país y tomaron vacaciones navideñas adelantadas, como huyendo de la crisis y evadiendo su propia responsabilidad. Un mal presagio con respecto a lo que espera al país en el próximo año.

En el marco de la crisis fiscal, los legisladores decidieron rechazar el proyecto de presupuesto nacional que el Poder Ejecutivo les había enviado desde el pasado mes de septiembre. De esta forma, la aprobación del nuevo presupuesto de la nación para el año 2013 se llevará a cabo hasta en el mes de enero de ese año. Los agujeros fiscales encontrados por los diputados en el proyecto enviado por el Ministerio de Finanzas suman más de ocho mil millones de lempiras (unos 400 millones de dólares), que constituyen la carga deficitaria que generan al menos seis empresas estatales que reclaman subsidio y respaldo financiero del Estado para seguir funcionando. Empresas tales como la compañía telefónica, la administradora de los puertos marítimos, la de energía eléctrica, etc., que antes eran solventes y transferían sumas millonarias a las arcas del Estado, hoy están quebradas financieramente, agotadas por el permanente saqueo a que las someten los funcionarios corruptos y los políticos incompetentes. Una vez más, la politización partidaria de las estructuras del Estado y sus instituciones revela el grave daño que genera al país y la sociedad hondureña en su conjunto.

Como para salir del apuro, el gobierno ha decidido vender bonos en el exterior por un valor de 750 millones de dólares, ante la imposibilidad de colocarlos en el mercado local, en donde se ha propuesto obtener al menos unos 4,900 millones de lempiras adicionales (unos 245 millones de dólares), entre la venta de bonos y la solicitud de préstamos al Banco Central. Los fondos obtenidos en el mercado local servirán para tapan los agujeros en el presupuesto de este año 2012, mientras que los que se deriven de la venta de los llamados “*bonos soberanos*” (unos 750 millones de dólares) serán utilizados para cubrir los vacíos del nuevo presupuesto del año 2013. O sea que el gobierno seguirá endeudándose para pagar las viejas deudas ya contraídas. Es la de nunca acabar.

El anuncio de la intención de vender “*bonos soberanos*” en el mercado internacional, ha derivado hacia un tema sensible de la política exterior hondureña: las relaciones diplomáticas y comerciales con la República Popular China (RPCH). Al parecer, el gobierno ha llegado a la conclusión de que ha llegado el momento de reconocer al régimen de Beijín, en desmedro, por supuesto, de las cordiales relaciones que hasta hoy ha mantenido con el régimen de Taiwán, la llamada “*República de China*”. Pero no es un simple viraje inocente de la política exterior local: es una maniobra calculada para vender los bonos en el mercado chino, aprovechando la abundancia de recursos que muestra Beijín. Casi se podría decir que se trata de una operación de “*trueque diplomático*”, en la que Honduras reconoce a la RPCH pero, a cambio, ésta auxilia financieramente a Tegucigalpa en un momento de desesperación fiscal y grave crisis económica.

Como era de esperar, la polémica ya ha comenzado y el bloque pro Taiwán entre los políticos locales ha empezado a ejercer sus acciones de cabildeo y presión. El presidente Lobo, al igual que el Canciller Arturo Corrales, pare-

cen decididos a mantener su posición en favor de una apertura directa de las relaciones diplomáticas y de todo tipo con el gobierno de China continental. De hecho, ya los chinos del continente están presentes en la economía hondureña, tanto a nivel de algunas inversiones, vía Hong Kong, en la industria maquiladora, como a través de fuertes inversiones en la financiación de los proyectos de energía hidroeléctrica conocidos como Patuca I, II y III, que se están llevando a cabo en el departamento de Olancho.

Las relaciones con la RPCH, un viejo anhelo del ex presidente Manuel Zelaya, quien se proponía dejarlas establecidas al final de su mandato (enero de 2010), se vieron obstaculizadas por el golpe de Estado que, por cierto, contó con la discreta pero evidente simpatía de Taiwán (su embajador fue uno de los tres, junto los de Estados Unidos y Japón, que permanecieron en Tegucigalpa pese al gobierno de facto). Hoy parece que ha llegado el momento de abrir un nuevo ciclo en las relaciones entre Honduras y la nación china. Veremos si esta percepción se traduce en realidad.

### El auge de la delincuencia...

A pesar de que los vaticinios hace unos meses eran favorables a una reducción sensible de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, los hechos, al final del año, han demostrado lo contrario. La tasa aumentó, según datos de la policía, de 86 a casi 89 casos, aunque el Observatorio sobre la Violencia, adscrito a la Universidad Nacional, mantiene cifras más discretas y cree que el incremento no ha sido tan exponencial.

Pero, lo cierto es que el índice de muertes violentas ha aumentado en las últimas semanas. El lunes 03, para citar un ejemplo, fue un día sangriento, en el que se produjeron 18 muertes violentas tan sólo en la zona norte del país (San Pedro Sula y sus contornos). De igual manera, el día lunes 17 fue peor: 28 muertos por homicidios diversos en todo el país. A esto hay que sumar las repetidas y siniestras masacres colectivas que se han producido entre noviembre y diciembre, ejemplo de que se han agudizado las luchas internas y las disputas territoriales en las redes del microtráfico (narcome-nudeo) de drogas y entre las pandillas criminales.

Las ejecuciones en contra de los trabajadores (propietarios, choferes, ayudantes, etc.) del sector transporte, han sembrado el pánico entre las víctimas de los extorsionadores (pandilleros que se dedican a cobrar los llamados *"impuestos de guerra"*), de la misma manera que se han extendido hacia otros sectores de la población (comerciantes individuales, restaurantes, tiendas comerciales, etc.), imponiendo un régimen de terror y *"autoridad paralela"* que desafía los espacios propios del Estado y vulnera su autoridad. Se está produciendo un lento pero efectivo proceso de *"erosión de las estructuras estatales"*, en desmedro de la autoridad nacional y en beneficio

de los núcleos regionales de poder que surgen y se consolidan en torno a las pandillas y a las redes del crimen organizado.

A mediados del mes se llevó a cabo una gran operación antidrogas por parte del Ministerio Público, la Agencia antinarcoóticos de los Estados Unidos y los militares hondureños. En esa acción, se logró dismantelar importantes redes del narcotráfico en gran parte del territorio nacional: 24 viviendas incautadas, haciendas, alijos de armas, vehículos, etc. que fueron decomisados a los narcotraficantes de los carteles mejicanos y colombianos, así como los de sus aliados y cómplices locales. Cabe señalar que en esa operación no fue invitada a participar la Policía Nacional.

Y, en relación con la Policía, el Congreso Nacional decidió finalmente reformar la Ley Orgánica de la PNH para dejar establecida la obligatoriedad de la práctica de las llamadas *“pruebas de confianza”* a todos los miembros de la carrera policial. De esa forma, los legisladores pusieron fin al carácter *“provisional”* de la legislación que regulaba tales pruebas.

Coincidiendo con la difícil situación en materia de seguridad pública, Honduras, junto a México y Colombia, fue declarada por la reconocida ONG internacional Reporteros sin Fronteras, como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo en América Latina.

Así concluyó el año 2012, el tercero de la Administración lobista.



**AÑO**  
**2013**

---

# ENERO 2013

---

## La situación política

**E**l último año de la Administración del presidente Porfirio Lobo ha comenzado con muy malos augurios. Desde los primeros días del mes, los maestros se mantuvieron en las calles, escenificando marchas y protestas callejeras en contra de las medidas y decisiones adoptadas por el Ministro de Educación, Marlon Escoto. Otro tanto hicieron los empleados de diversas dependencias gubernamentales que reclamaban el pago de sus salarios atrasados. A esto hay que sumar el auge de los hechos de violencia y crímenes de todo tipo que convirtieron el mes de enero en el más violento de los últimos cinco años. En el Bajo Aguán han continuado los enfrentamientos entre grupos campesinos y guardias armados que protegen las plantaciones de palma africana, propiedad del ya famoso trío de empresarios agrícolas Facussé-Morales-Canales.

En el campo de la economía las cosas no andan muy bien, en especial en el terreno de las finanzas públicas, las que se encuentran virtualmente al borde del colapso. El peso inmenso de la deuda interna, que ya representa el 16% del Producto Interno Bruto (PIB), se suma al de la deuda externa para, juntas, completar el 35% del PIB (los expertos vaticinan que, al remontar el 40%, la situación podría volverse totalmente inmanejable).

Para volver más acuciante la situación, en el campo legislativo, el aspirante presidencial Juan Orlando Hernández (JOH) ha fortalecido sus conocidas tendencias a la acumulación desmedida del poder, construyendo estructuras y engranajes de poder absoluto y avasallante. Mostrando un dominio exagerado de las voluntades parlamentarias, el hoy candidato presidencial oficial del partido Nacional (PN) logró introducir y aprobar numerosas leyes, muchas de las cuales han significado cambios sustanciales en el texto de la Constitución de la República. Son tantas las modificaciones incorporadas a la Ley fundamental, que cada vez se parece menos al texto fundacional que los legisladores aprobaron en 1982, justo al dar inicio en legal forma el proceso de transición política hacia la democracia.

Utilizando argucias y eufemismos, el candidato JOH logró la aprobación de un nuevo texto de la ley que crea las publicitadas “*ciudades modelo*”, cambiando el nombre de las mismas (en lugar de Regiones Especiales de Desarrollo ahora se llamarán Regímenes Especiales de Desarrollo y Empleo) pero conservando el viejo contenido. De esa forma, un tanto burda y desafiante, el Congreso Nacional se burla de la Corte Suprema de Justicia que había declarado inconstitucional la ley que creaba esas “*ciudades*”.

Para lograr este objetivo, previamente el Congreso destituyó a los cuatro magistrados que votaron en contra de su acariciado proyecto y, de esa manera, sometió al máximo tribunal de justicia al control grosero y manifiesto por parte del Poder Legislativo. De hecho, luego de la destitución de los magistrados, la Corte Suprema ha quedado convertida en una especie de apéndice sumiso ante el Parlamento. El balance de pesos y contrapesos, que siempre ha sido precario e inestable, ha quedado ahora definitivamente roto y distorsionado, en beneficio, por supuesto, del Poder Legislativo, valga decir de JOH.

El presidente Lobo aprueba y auspicia las iniciativas de JOH. Es más, entre los dos conforman un binomio político hasta ahora indisoluble, que va sentando gradualmente las bases de un régimen de control casi absoluto y autoritario del poder político.

Además de las llamadas “*ciudades modelo*”, la alianza Lobo-Hernández ha logrado introducir y aprobar en la Asamblea Legislativa el llamado “*juicio político*”, un conjunto de procedimientos legales para poder juzgar y, eventualmente, destituir a los altos funcionarios del Estado, del presidente hacia abajo, que, a juicio de los legisladores, incumplan la ley y violen la Constitución. La interpretación de tales “*violaciones*” queda en manos de los diputados, que se erigen así como un poder especial, con fuerza arbitral y decisoria sobre los otros poderes del Estado.

De igual manera, por instancias del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional decidió revisar el régimen de exoneraciones y dispensas que el Estado otorga a favor de muchos empresarios y políticos que se libran así de pagar los debidos impuestos. La decisión ha sido parcial y temporal: las exoneraciones han quedado en suspenso durante dos meses, tiempo durante el cual una numerosa comisión integrada por los más variados representantes de múltiples organizaciones, los empresarios incluidos, deberá decidir cuáles se mantienen y cuáles deberán ser definitivamente canceladas. Los empresarios han interpretado esta medida como un golpe bajo propinado por el presidente al mundo de los negocios. Sin embargo, el presidente Lobo ha podido demostrar, con cifras oficiales y otras provenientes de calificados estudios hechos por organismos financieros internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que Honduras es el país

con el mayor número de exoneraciones fiscales en toda América Latina (se considera que hay 113 decretos que respaldan el régimen de beneficios fiscales para unos cuantos afortunados). Esta situación priva al Estado de recibir unos diez mil millones de lempiras al año (aproximadamente unos 500 millones de dólares), suma que permitiría reducir sustancialmente el déficit fiscal que de manera crónica padece el gobierno.

Esta medida afectará a las empresas editoras de los cuatro grandes periódicos del país, las que, hasta hoy, se han beneficiado de la libre importación del papel y otras materias primas y maquinaria que utilizan en la producción de sus diarios y revistas. Los medios interpretan la medida como un acto de venganza del presidente Lobo en contra de las críticas y reproches cotidianos que le hace la prensa.

Como si todo esto no fuera suficiente, la ofensiva legislativa del dúo Lobo-Hernández ha ido todavía más allá y convertido la destitución de los cuatro magistrados de la antigua Sala Constitucional de la Corte Suprema en un *"hecho consumado"*, gracias a la benevolente complicidad de los nuevos magistrados nombrados en lugar de los defenestrados.

Y todavía se anuncian nuevas medidas legales, esta vez destinadas a romper el llamado monopolio de las frecuencias del espectro radioeléctrico, controladas en su gran mayoría por unos pocos empresarios de los medios de comunicación (el grupo Ferrari-Villeda, entre otros) que se han apoderado de las mismas por la vía de sus influencias políticas, o el simple chantaje mediático frente a los distintos gobiernos. El Poder Ejecutivo ha nombrado ya una comisión interventora en la empresa telefónica -Hondutel-, con instrucciones precisas para romper el monopolio mencionado y *"democratizar el uso de las frecuencias"*, privilegiando en su distribución a los grupos étnicos y a las comunidades rurales que aspiran a tener sus propias radioemisoras y canales locales.

O sea, pues, que en su último año de gobierno, el presidente Lobo parece dispuesto a retomar la iniciativa y pasarle factura a los grupos empresariales que le han hecho una constante oposición casi desde el inicio mismo de su Administración. Medio en broma y medio en serio, como acostumbra hacerlo, el mandatario les advirtió que en este año hará acciones decisivas por las que lo habrán de recordar siempre.

La confrontación está planteada y, al menos por el momento, no se advierten señales de que se pueda producir una reconciliación, aunque tardía, entre el gobierno y los gremios empresariales.

Tampoco con los gremios magisteriales, con quienes la tensión cada vez se vuelve más aguda e intensa. El presidente, auxiliado por su Ministro de

---

Educación, parece dispuesto a someter a los líderes magisteriales y obligarlos a obedecer las medidas adoptadas para devolver la perdida gobernabilidad en el sistema educativo nacional. Es una pelea difícil y prolongada. Los gremios magisteriales son unos de los mejor organizados del país, con un alto nivel de cohesión interna y probada capacidad de movilización nacional.

En medio de todos estos conflictos y controversias económicas y políticas, el Congreso Nacional encontró el tiempo suficiente para aprobar, un mes después de lo esperado, el Presupuesto General de la Nación para el nuevo año 2013. El valor total del mismo es de 8,160 millones de dólares, 86 millones menos de los que pedía el Poder Ejecutivo en el proyecto original de presupuesto enviado al Parlamento desde el mes de septiembre del año pasado (los diputados habían prometido reducirlo en 150 millones de dólares pero no pudieron hacerlo). Los legisladores consideraron prudente reducir un poco el monto solicitado y someter a revisión minuciosa los presupuestos sectoriales de al menos seis empresas estatales que ocasionan pérdidas por unos 400 millones de dólares.

Sin embargo, los técnicos fiscales estiman que este nuevo presupuesto, superior en 13% al presupuesto del año anterior, presenta serios vacíos y lagunas, un déficit calculado que no será fácilmente manejable y agujeros que todavía no tienen identificada su fuente respectiva de financiación. El gobierno espera cubrir estos vacíos mediante la venta de 750 millones de dólares en bonos, los llamados "*bonos soberanos*" que espera colocar en el mercado de valores de la República Popular China.

Lo cierto es que las finanzas públicas andan muy mal y, al menos por ahora, no hay razones para ser optimista con respecto a su inmediato futuro. El peso de la deuda pública, sobre todo la de carácter interno, es demasiado grande e inmanejable. El déficit fiscal a finales de diciembre anterior superaba ya el 6% del PIB, un poco más de 20 mil millones de lempiras (más de mil millones de dólares), una razón adicional para dificultar la firma del ansiado convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Y si a esto agregamos el hecho de que este será un año electoral, con las turbulencias y oscilaciones que son características en tales periodos, la situación luce más nublada y preocupante. El costo del proceso electoral se convierte en una carga más en el desequilibrado presupuesto nacional. Los flujos de la cooperación internacional disminuyen o fluyen más lentamente, condicionados por la natural cautela de los países y agencias cooperantes en un año de elecciones.

### La inseguridad constante...

Todos los vaticinios apuntaban a un incremento en los índices de violencia e inseguridad para finales del año. Afortunadamente no fue así. De acuerdo a las cifras del Observatorio de la Violencia, adscrito a la Universidad Nacional Autónoma, la tasa de homicidios por cien mil habitantes fue de 85.5 en el mes de diciembre, un punto menos de la que había prevalecido en los meses anteriores: 86.5.

No es una cifra para sentirse orgulloso, pero al menos no hubo el crecimiento anunciado. La policía sostiene que han logrado detener la tendencia ascendente y que de ahora en adelante la tarea es inclinarla hacia la baja.

Pero los hechos más recientes, sobre todo en el transcurso de este mes de enero, apuntan en sentido contrario. Las masacres de grupos de jóvenes se repiten con demasiada frecuencia, el involucramiento de policías en los actos delictivos sigue siendo una mancha negra en el desempeño de las fuerzas de seguridad, mientras que las redes del narcotráfico, a pesar de los fuertes golpes recibidos en los últimos tres meses, siguen vivas y muy activas.

La situación ha llegado a tal punto que el gobierno decidió -una vez más- sacar a los militares a las calles y ordenó los patrullajes conjuntos en las dos principales ciudades del país. Pero esta vez con una nueva modalidad: los militares tomaron control de las "postas policiales" en una amplia zona de la ciudad capital, en un acto incorrecto que muchos consideran como una alarmante señal de una posible "preintervención" en la fuerza policial. Es como si el gobierno creyera que, ante la ineficiencia policial, sólo cabe el recurso de la fuerza militar para impedir el desplome total del sistema de seguridad pública en su conjunto.

Son malos augurios, que no presagian nada bueno para el futuro inmediato de la lucha en contra de la delincuencia y el crimen organizado. Cada vez es más evidente el malestar en las filas policiales, tanto por medidas como ésta y también por las órdenes y el estilo de dirección del nuevo jefe de la policía, el Comisionado General Juan Carlos Bonilla. Es como si al interior de la Policía Nacional se fuera gradualmente conformando una peligrosa situación de "insubordinación latente", todavía pasiva, pero en proceso de crecimiento. Será preciso vigilar más de cerca la evolución de una situación semejante al interior de la institución policial.

# FEBRERO

## 2013

---

### La situación política

**E**ste mes, como ya es usual, también estuvo cargado de acontecimientos y escándalos que muestran la gravedad de la crisis en que se encuentra el sistema de la seguridad pública en el país y, por añadidura, el deterioro de la gobernabilidad democrática en la vida política nacional.

El presidente Porfirio “Pepe” Lobo, convencido de que este es su último año en el gobierno y que, por lo mismo, debe hacer todo lo posible por dejar una huella visible en la historia política del país, parece estar decidido a impulsar algunos cambios en la legislación nacional, que marquen la diferencia y dejen una impronta visible en la administración pública. Tal es el caso de la anunciada Ley de telecomunicaciones, que vendría a establecer una nueva regulación en la distribución y control de las licencias que otorga el Estado para la explotación privada de las frecuencias del espectro radioeléctrico del país. La decisión del presidente de “*democratizar*” la asignación de frecuencias no es otra cosa más que la arremetida de Casa Presidencial en contra de los grandes empresarios de la televisión y la radio, que controlan de manera arbitraria e ilegal la mayor parte de las frecuencias mejor ubicadas en el espacio radioeléctrico. En concreto, se trata de limitar el poder e influencia del grupo Ferrari-Villeda en materia de comunicación radial y televisiva. Es la respuesta del presidente Lobo a la constante oposición del clan Ferrari-Villeda desde su sistema de Emisoras Unidas y los canales de TV encabezados por Televisión Centroamericana. Además de limitar la “*pauta*” publicitaria del Estado en esos medios de comunicación, el presidente también quiere privarlos de aquellas frecuencias que controlan aunque no exploten, otorgando las mismas a diversos grupos sociales ansiosos por contar con sus propios medios de comunicación, especialmente los llamados “*medios comunitarios alternativos*”. Honduras, según los datos oficiales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), ocupa el primer lugar en Centroamérica por el número de radioemisoras: 934 (653 de Frecuencia Modulada-FM- y 281 Amplitud Modulada-AM-), distribuidas entre 383 propietarios; también hay registrados 317 canales de televisión en todo el territorio nacional.

Los empresarios de los medios han acusado al presidente de querer coartar la libertad de expresión y atentar contra la libertad de prensa. Lobo ha respondido convocando a “*conversatorios*” casi multitudinarios en Casa Presidencial con los diversos actores de la sociedad civil, interesados en “*democratizar*” el uso del espectro radioeléctrico. Una de esas organizaciones, la llamada C-Libre, que agrupa a periodistas independientes y algunos académicos afines, ha proporcionado a Casa Presidencial un nuevo proyecto de ley de las telecomunicaciones en Honduras, algo que ha despertado el temor y la furia de los grandes dueños de los medios de comunicación (Carlos Flores, dueño del diario La Tribuna; Jorge Canahuati, propietario de los diarios La Prensa y El Heraldo; Rafael Ferrari y Manuel Villeda, dueños de Emisoras Unidas y Televisión), que se sienten “*agredidos*” por la Administración lobista.

Para agravar más la ya tensa situación con los medios, el presidente apoya y acelera el trabajo de la Comisión especial que revisa las exoneraciones fiscales que favorecen, especialmente, a los grandes grupos empresariales y comerciales del país. Las cifras que maneja el gobierno son alarmantes: de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las exoneraciones en el año 2011 sumaron un poco más de once mil millones de lempiras (unos 550 millones de US dólares). En cambio, en 2012, según las cifras del gobierno, las exoneraciones y prebendas arancelarias ascendieron a la suma de 23,153 millones de lempiras (unos 1,158 millones de US dólares), lo que equivale al 42% de toda la recaudación tributaria programada para ese año por la Dirección Ejecutiva de Ingresos). Al momento de justificar la revisión de esta absurda política arancelaria del Estado, que permite tantos privilegios y canonjías, el presidente Lobo dijo que en Honduras “*hay personas que se bañan con agua Evian*”, en abierta alusión al agua importada de Francia.

Los empresarios y comerciantes han reaccionado con furia contra las medidas del gobierno. Presentaron un recurso legal ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la revisión de las exoneraciones, pero ese máximo tribunal, fiel a su nueva dinámica de sumisión y obediencia ante el Poder Legislativo (y, de paso, ante el Ejecutivo, es decir el dúo Hernández-Lobo), resolvió en contra. O sea que, desestimó el reclamo empresarial y concedió la razón al gobierno.

Enfrentado a los influyentes e intolerantes grupos de poder económico, los llamados “*grupos fácticos*”, el gobierno ha debido también hacer frente a la nueva crisis desatada en el seno de la Policía Nacional, crisis que ha puesto nuevamente en la palestra pública la grave situación interna en las filas policiales y los altos niveles de penetración e influencia que tiene el crimen organizado y la delincuencia común en la institución policial.

En la noche del domingo 15, un grupo de hombres armados irrumpió en un conocido restaurante local y asesinó a Roberto “Boby” Ramírez, hijo adolescente del ex Director General de la Policía (01 de noviembre de 2011 a 20 de mayo del 2012), Ricardo Ramírez del Cid, y a dos de sus guardaespaldas, policías en ejercicio activo. La noticia generó de inmediato una conmoción nacional. El padre de la víctima, enemigo personal del actual Director General, Juan Carlos “el Tigre” Bonilla, quien lo sustituyó en el cargo, ha sido un viejo oficial de los servicios de inteligencia policial y, por lo mismo, un hombre muy vinculado con los grupos formales e informales del poder local. Un día después del trágico acontecimiento, rodeado por sus hombres de confianza dentro de la Policía, acusó al Tigre Bonilla de ser el responsable del crimen y exigió la renuncia de éste y la del Ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, es decir, de los dos hombres de confianza del presidente Lobo.

La denuncia de Ramírez puso una vez más al descubierto las luchas internas que corroen a la Policía y el enfrentamiento latente que hay entre las distintas promociones y jerarquías dentro de las filas policiales. En pocas palabras: desnudó, otra vez, la corrupción policial y los altos niveles de penetración que tiene el crimen organizado en esa institución.

A la par de la crisis policial, también en este mes ha quedado al descubierto la crisis de otro organismo operador de justicia, esta vez del Ministerio Público. Dos informes, uno de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) sobre la Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción (FECC) y otro elaborado por tres consultores extranjeros contratados por la Embajada de los Estados Unidos, llegaron a la misma conclusión: el Ministerio Público está en crisis y requiere una profunda reestructuración.

Los norteamericanos, utilizando ambos informes, han incrementado su presión para que el Fiscal General, Luis Rubí, a quien consideran uno de los principales obstáculos en la lucha contra el narcotráfico, sea removido de su cargo. Le acusan de corrupción y negligencia, le consideran mentiroso e incompetente, a la vez que desconfían del entorno de colaboradores que le rodea. Ante una situación semejante, tanto el presidente Lobo como el Jefe del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, juntos, se reunieron con Rubí y le insinuaron la posibilidad de su renuncia. Rubí se negó a considerar siquiera tal posibilidad. Se siente respaldado por el ex gobernante de facto, Roberto Micheletti, y por el ex presidente liberal, Carlos Flores, dueño y editorialista del diario La Tribuna. Además, cuenta con el apoyo de su hermana, Vera Rubí, influyente asesora del actual candidato presidencial del partido Liberal, el abogado Mauricio Villeda.

No se debe descartar la posibilidad de que Rubí sea llamado a rendir cuentas ante el Congreso Nacional y, eventualmente, destituido de su cargo. Sin

embargo, también existe la posibilidad de que sea separado del cargo a finales del año (su permanencia en el cargo debería vencer en marzo del próximo año) para así, de una vez, proceder a elegir al Fiscal para el nuevo periodo (2014-2019), aprovechando el control que tiene el partido gobernante con su actual mayoría parlamentaria. No se debe olvidar que el nuevo Congreso (2014-2019), casi seguramente, será más plural y diverso, menos controlable y manipulable, ya que estará integrado también por los diputados del nuevo partido zelayista Libertad y Refundación, además de los posibles candidatos del partido Anti Corrupción que pudieran resultar electos). Ante una perspectiva semejante, los nacionalistas preferirían dejar electo ya, en esta Legislatura, al nuevo Fiscal General de la Nación, aunque tome posesión de su cargo hasta en el mes de marzo del próximo año. Una consideración de tal naturaleza, le permitiría a Rubí sobrevivir en su cargo hasta finales de este año. Sin embargo, tampoco hay que descartar la posibilidad de que la presión de Estados Unidos sea tan fuerte y constante que produzca la caída del Fiscal en los próximos meses. Ambas posibilidades deberían ser tomadas en cuenta en el análisis de la coyuntura política hondureña en estos momentos.

Mientras el gobierno lobista se enfrenta a estos problemas, la dinámica electoral sigue su ritmo y produce reacomodos y movimientos sensibles en las alianzas y coaliciones políticas.

Ricardo Álvarez, el actual alcalde de la capital y principal candidato perdedor en la disputa por la nominación presidencial en el partido de gobierno -el Nacional-, decidió, finalmente y luego de prolongadas y secretas negociaciones, plegarse al candidato vencedor -Juan Orlando Hernández- y brindarle todo su apoyo. “*Soy un obrero del partido*”, dijo, antes de pedir a sus partidarios el apoyo total para que JOH se convierta en el nuevo presidente del Comité Central del partido Nacional, algo que ha quedado confirmado en la Convención ordinaria del PN el día tres de marzo en Tegucigalpa: los convencionales Nacionalistas (500), reunidos en la sede del partido, decidieron entregar la conducción del mismo al candidato oficial y todavía presidente del Congreso Nacional, el joven y ambicioso político venido del Departamento de Lempira -uno de los más pobres y atrasados del país-, Juan Orlando Hernández, más conocido como JOH (abogado de profesión, con maestría obtenida en Madrid, España).

De esta manera, JOH logra concertar en torno suyo una alianza política muy importante, sumando en el apoyo a sus aspiraciones a Ricardo Álvarez, un operador político de uno de los grupos económicos más influyentes, integrado por el Banco Ficohsa y el grupo Maduro (de la familia del ex presidente Ricardo Maduro 2002-2006). Esta alianza apunta a favor de la unidad orgánica del partido Nacional, de cara a las elecciones de noviembre de

---

este año. Habrá que ver cuán sólida es esta unidad pactada y cuánto tiempo resiste antes del torneo electoral.

En las filas liberales, en cambio, los esfuerzos por lograr la unidad interna del partido encuentran más dificultades de las previstas. La pelea por controlar el Consejo Central Ejecutivo del partido, el llamado CCEPL, ha separado más a las facciones internas y les mantiene en un permanente enfrentamiento. Mauricio Villeda, el candidato oficial, que ganó las elecciones internas, no tiene ni la capacidad ni el carisma suficientes para unir al partido. Se niega, de manera empecinada y poco habilidosa, a reconocer que su contendiente perdedor, el hijo/banquero Yani Rosenthal, logró ganar 199 de las 298 alcaldías en juego electoral y que, por lo mismo, los candidatos liberales de esas alcaldías, son partidarios de su corriente y no de la de Mauricio, quien ganó las elecciones internas. O sea que Yani, sin el carisma ni la habilidad política necesarias, fue capaz de hacerse con casi el 50% de las candidaturas liberales a los cargos de elección popular en las pasadas elecciones internas y primarias (18 de noviembre de 2012), lo que lo convierte, para bien o para mal, en un interlocutor válido e inevitable en cualquier negociación en torno a la unidad del partido.

Esta verdad, tan simple como evidente, parece que no ha sido debidamente explicada al candidato Villeda por sus asesores o, lo que sería peor, no ha sido suficientemente entendida por él. Lo cierto es que los liberales están sumidos en una crisis interna de diálogo y entendimiento. No son capaces de encontrar las fórmulas más adecuadas para hacer viable la unidad del partido. Los 45 diputados que tienen en el Congreso Nacional (de los 128 que conforman la Asamblea Legislativa en Honduras) están dispersos y diseminados en pequeños grupos de interés que votan de acuerdo a sus prejuicios o intereses personales, pero sin tener una personalidad política colectiva, de partido, que les dé cohesión y lógica racional.

A diferencia de estos dos grandes partidos políticos tradicionales-el Liberal y el Nacional-, en la otra orilla, en donde nace, crece y se fortalece una nueva fuerza política, el recién fundado partido Libertad y Refundación (LIBRE), las cosas son diferentes y el entusiasmo es otro. Luego de haber obtenido más de 600 mil votos en las recién pasadas elecciones internas de noviembre/2012, la candidata del partido, la ex primera dama Xiomara Castro de Zelaya, sigue creciendo en los indicadores de la aceptación popular. Encuestas importantes la colocan a la cabeza de las preferencias populares. De acuerdo a los resultados de la más reciente encuesta de la conocida empresa CID-GALLUP, la opinión favorable a Xiomara es del 30% (entre una población encuestada de 1,250 personas en 16 de los 18 departamentos del territorio nacional), mientras que la de JOH es del 20% y la de Villeda del 18%. La intención de voto de los entrevistados es de 25% para la candidata de LIBRE, 23% para JOH y sólo 16% para Villeda. Sin embargo, a nivel

de preferencias de partido, el Nacional sigue encabezando las simpatías con el 33%, mientras tanto LIBRE como los liberales tienen cada uno el 21%.

Así están las cosas, a nivel de partidos, simpatías y posibilidades, en el escenario político actual. Por supuesto, la situación y las posibilidades, seguramente, habrán de cambiar en los próximos meses, a medida que se acerque el momento crucial cuando los más de cuatro millones de electores hondureños acudan a las urnas y depositen el voto a favor o en contra de los nueve candidatos presidenciales que, se espera, habrán de competir en las próximas elecciones generales de este año.

# MARZO

## 2013

---

### La situación política

La polémica en torno a una nueva Ley de Telecomunicaciones y el debate en relación con el régimen de exoneraciones fiscales, se convirtieron en los dos grandes temas de la agenda nacional y concentraron buena parte de la atención pública durante este mes de marzo. Sólo el inicio de las vacaciones veraniegas de la semana santa, permitió abrir un compás de espera y bajar el nivel de las aguas de la confrontación pública. La discusión final se anuncia para la primera semana de abril.

La propuesta de una nueva Ley de Telecomunicaciones, elaborada en forma conjunta con organizaciones de la sociedad civil y representantes de los más diversos sectores sociales del país (grupos étnicos, sindicatos, organizaciones campesinas, asociaciones ecologistas y periodistas independientes), ha despertado una reacción desmedida en su contra por parte de los grandes medios de comunicación, las cámaras empresariales y diversos partidos políticos de la llamada “*oposición*” parlamentaria. De igual manera, el Colegio de Periodistas, subordinado a los intereses de los dueños principales de los medios de comunicación (Carlos Flores, Jorge Canahuati y el clan Ferrari (Rafael)/Villeda (Manuel), ha condenado abiertamente lo que considera una “*clara violación de la libertad de expresión*” en Honduras.

En un arranque de indignación y cólera contenida, el presidente Lobo denunció a Ferrari como un conspirador que se reúne con diputados (doce de ellos, incluyendo a dos del propio partido de gobierno) para cabildear la oposición a las nuevas leyes. Pero, al mismo tiempo, les advirtió: ¡“*La fiesta de las telecomunicaciones habrá de terminar*”!. Si el Congreso Nacional, por temor a la campaña mediática en un año electoral, se resiste a aprobar la nueva legislación, el presidente anunció su disposición a consultar directamente al pueblo, vía plebiscito o colocando una cuarta urna en las elecciones generales del próximo mes de noviembre. ¡Otra vez el fantasma de una cuarta urna planea sobre el escenario nacional!

La intención gubernamental de “*democratizar*” la asignación de las frecuencias de radio y televisión en el espectro radioeléctrico del país, abriendo la posibilidad para que numerosas organizaciones de la sociedad civil puedan tener acceso a las mismas y, por lo tanto, debilitando el amplio control que ha tenido sobre las mismas el clan Ferrari/Villeda a lo largo de muchos años, es considerado ya como un fuerte golpe por parte del presidente Porfirio Lobo a los grupos de poder económico que más le critican y rechazan su política gubernamental. Es la “*venganza del Lobo*”, cuando ya sólo faltan diez meses para que concluya su gestión administrativa. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que representa los intereses de los dueños de los medios, ha anunciado una próxima visita a Honduras para conocer in situ la situación de la prensa y “*las amenazas que sobre ella se ciernen*”.

Pero al presidente no le basta con eso. También se propone reducir las exoneraciones fiscales que favorecen a muchos empresarios y comerciantes del país, además de a los dueños de los grandes medios de comunicación (televisión, radio y prensa escrita) que importan todos sus insumos sin pagar ningún impuesto al fisco nacional. Tan sólo en los últimos seis años, en el periodo que va de 2006 a 2012, los beneficiarios dejaron de pagar 18 mil millones de lempiras, es decir unos 900 millones de dólares al erario. Diario La Tribuna, propiedad del ex presidente liberal Carlos Flores, uno de los más fuertes críticos de las nuevas medidas, se vio favorecido con 1,5 millones de dólares en años recientes.

La Comisión nombrada por el presidente Lobo para revisar el entramado legal que protege al régimen de exoneraciones fiscales (47 leyes, 159 decretos y diez ministerios e instituciones diferentes aplicándolas), prometió entregar la lista de productos que ya no gozarán de esos beneficios en la primera semana del mes de abril, o sea inmediatamente después de las vacaciones de pascua. Esto quiere decir que en los próximos días el país entero será testigo de un amplio debate parlamentario en torno a estos dos temas candentes.

En el Congreso Nacional, su presidente, Juan Orlando Hernández (JOH), se ha involucrado en una verdadera cruzada legislativa para aprobar decretos y leyes que refuercen su control y poder político, una vez que ha quedado convertido en el candidato presidencial, oficial e indiscutible, del partido Nacional (PN) para las elecciones generales del último domingo de noviembre próximo. Su más reciente iniciativa en materia de leyes fue la aprobación del llamado “*juicio político*”, un mecanismo por el cual el Parlamento podrá destituir a los altos funcionarios del Estado, incluyendo al propio presidente de la República. Para ello, se deberán cumplir varios procedimientos que permitirán, al final, convertir a los diputados en jueces y juzgar a los altos funcionarios por lo que pudiera ser una conducta impropia o graves violaciones a los deberes constitucionales. Los diputados tuvieron el cuida-

---

do de advertir que estas disposiciones, las del *"juicio político"*, sólo podrán ser aplicadas a los *"futuros funcionarios"* y no a los actuales, es decir a ellos mismos, entre otros.

Queda demostrado, por vía contraria, que el Congreso Nacional no tenía facultades legales para destituir al ex presidente Manuel Zelaya en junio de 2009 o a los cuatro Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en diciembre del año pasado. Al aprobar la nueva ley del *"juicio político"*, los diputados se dan con la piedra en los dientes y revelan su contradictoria y arbitraria conducta en los casos ya mencionados.

Pero no sólo el juicio político ha sido aprobado en el Poder Legislativo. También discutieron y aprobaron una nueva Ley de Minería, que ya ha empezado a generar el rechazo y los cuestionamientos de algunas comunidades, debidamente inducidas y asesoradas por grupos ecologistas enemigos de la actividad minera. De igual forma, el grupo de asesores de JOH ha continuado impulsando con especial fervor el crecimiento de las llamadas Alianzas Público-Privadas (COALIANZA), que ya se han convertido en una fórmula expedita y rápida para hacerse con millonarios contratos del Estado y privatizar las funciones más rentables de diversas empresas estatales que están casi en la bancarrota. Concesiones para la construcción o administración de carreteras, manejo de la ampliación millonaria de la Empresa Nacional Portuaria, compra de un sustancial paquete de acciones en la compañía telefónica, privatización de servicios específicos en la empresa de energía eléctrica, concesiones para la construcción de pequeñas represas, así como la pretensión de controlar el registro de armas, de vehículos y otros, son unas de las tantas áreas en donde COALIANZA despliega su voracidad y afán de control, debidamente estimulada por los amigos de JOH que ven en estas actividades una millonaria fuente de recursos para la campaña electoral que se avecina. La última de sus más audaces iniciativas ha sido la de comprar a las dos compañías cementeras que existen en el país producto valorado en 50 millones de dólares para invertirlo en construcciones y reparaciones menores en los diferentes municipios. La millonaria suma será pagada con *"notas de crédito fiscal"* a cuenta de los futuros impuestos de los próximos dos años que deberían pagar esas empresas. He aquí una fórmula apropiada para financiar la campaña electoral, vía obras municipales, a costa de los impuestos que debería cobrar el próximo gobierno.

COALIANZA, obra directa de JOH y sus asesores, ya ha recibido concesiones por valor de unos 850 millones de dólares y espera recibir otros 500 millones más en lo que resta del presente gobierno. De modo que, con unos 1,350 millones de dólares en concesiones recibidas en el gobierno lobista, los socios privados de la alianza pueden darse por satisfechos en este periodo gubernamental. Ya vendrán nuevas y mejores oportunidades en el caso de que JOH se convierta en el futuro presidente de Honduras.

Mientras los nacionalistas unen las distintas facciones de su partido y se preparan en grande para afrontar los millonarios costos de la batalla electoral, los liberales todavía no son capaces de articular su propia unidad interna ni de conformar siquiera una bancada legislativa uniforme que haga oposición y dificulte la labor expansionista y acumuladora de poder que caracteriza al joven candidato presidencial del partido Nacional.

El más reciente “éxito” que pueden mostrar los liberales ha sido la decisión de Esteban Handal, el célebre “Toro colorado”, un dirigente menor, de peso electoral reducido y precario prestigio, de sumarse a las filas de Mauricio Villeda, el candidato ganador en las elecciones internas de noviembre pasado en el seno del partido Liberal. Pero el otro precandidato fuerte, Yani Rosenthal, todavía no ha podido construir un pacto de unidad con Villeda para darle más cohesión y fuerza a las filas liberales. No es casual que el PL aparezca actualmente en las encuestas como una tercera fuerza en la escena política, inmediatamente detrás del PN y del partido Libertad y Refundación (LIBRE).

A mediados del mes, el gobierno pudo finalmente anunciar, no sin regocijo ni optimismo, que había logrado colocar 500 de los 750 millones de dólares en “bonos soberanos” en el mercado internacional de valores. La tasa de interés negociada fue alta, de 7,5%, muy por encima de la tasa promedio (5,2%) que han logrado otros países de la región al vender bonos en el mercado de las finanzas internacionales. Honduras deberá pagar intereses por valor de 37,5 millones de dólares por año, además de los 5,8 millones que ya pagó por la intermediación de los bancos y los gestores financieros de la operación transada. Es la primera vez que Honduras incursiona en el mercado mundial de capitales para vender bonos del Estado.

Pero, al margen de estos altos costos que, al final de cuentas, serán preocupación del futuro gobierno, la Administración lobista cuenta con el dinero necesario para equilibrar el presupuesto del presente año, pagar algunas de las deudas millonarias que tiene con las empresas constructoras y con diversos proveedores del Estado, especialmente los de productos farmacéuticos, así como hacer abonos importantes en el pago de la abultada e inmanejable deuda interna. Ahora el problema para las autoridades monetarias del Banco Central es cómo manejar los nuevos flujos millonarios de liquidez, sin provocar un peligroso ascenso en la tasa inflacionaria actual. En los próximos meses -se espera- el gobierno deberá tener un respiro oxigenante en su difícil situación fiscal.

## La inseguridad sigue en la agenda diaria

**A**l interior de las filas policiales han continuado las peleas y luchas por el control del poder entre los diferentes grupos y facciones que se han conformado dentro de la estructura de la Policía Nacional. Los enemigos del Director General, el Comisionado Juan Carlos “El tigre” Bonilla, siguen conspirando para lograr su caída. La mayoría de los altos oficiales que han integrado las cúpulas policiales desde mediados del año 2011 están descontentos con la gestión de Bonilla y maniobran para conseguir su destitución. Esta situación ha creado una especie de “*insubordinación latente y pasiva*” al interior de la Secretaría de Seguridad, alterando el orden jerárquico y generando un cierto caos institucional y disciplinario. La crisis podría estallar en cualquier momento cuando la “*insubordinación pasiva*” se convierta en rebelión activa y violenta.

La política de Estados Unidos, orientada a crear diversos “*grupos élite*” dentro de la Policía Nacional, no contribuye a solucionar los problemas. Ya existen al menos diez de esos grupos, si sumamos los últimos de reciente creación: la Fuerza Nacional Antiextorsión y la Unidad de Crímenes Mayores, lo que fragmenta el mando policial, debilita la gestión de Bonilla y, de alguna manera, alienta la rivalidad y el recelo entre las distintas unidades de la estructura policial. Los llamados “*grupos élite*” no son totalmente funcionales dentro del organigrama de la institución policial ni son sostenibles en el largo plazo. Responden a una necesidad más coyuntural que estructural, en función de los intereses específicos de la estrategia de seguridad norteamericana. Es más, muchos de esos grupos, si no es que todos, escapan al control real de Bonilla como condición para que puedan ser apoyados económicamente por el gobierno norteamericano.

El gobierno sigue sin definir una estrategia clara en relación con el tema de la seguridad pública. No atiende a las propuestas formuladas por la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), pero tampoco es capaz de elaborar sus propias propuestas y proyectos. Se advierte un peligroso “*déficit de interlocución*” entre el gobierno y la comunidad cooperante internacional en materia de seguridad. Y esa misma situación da lugar a otra no menos preocupante y riesgosa: la proliferación de iniciativas menores y aisladas en los temas de seguridad (depuración de la policía, reforma del sistema de educación policial, reforma del Ministerio Público y del Poder Judicial, reforma penitenciaria, derechos humanos, etc.), que con frecuencia sólo sirven para introducir más confusión en el tema y, por lo tanto, mayores dificultades para encontrar las soluciones adecuadas. Se ha generado algo así como una marcada tendencia al “*paralelismo*” en todo lo que concierne a la reforma del sistema de seguridad. Todos quieren opinar y proponer, mientras el gobierno permanece sin mostrar una iniciativa creíble y fiable.

Veamos un ejemplo del desorden y la irracionalidad existente: hasta diciembre del año pasado, el gobierno logró recolectar, por la vía del impuesto conocido como “*tasa de seguridad*”, la suma de 41 millones 722 mil dólares, de los cuales sólo había utilizado (diciembre/2012) 3 millones 515 mil dólares, o sea el 9%. Mientras esto sucedía, el mismo gobierno se endeudaba con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nada menos que en la suma de 60 millones de dólares ¡para financiar proyectos en el Sector seguridad! Dicho sea de paso, la Administración lobista todavía no ha podido lograr que el BID desembolse los primeros dineros de ese millonario préstamo.

Mientras eso sucede, los delitos siguen en aumento y la inseguridad permea todo el imaginario colectivo. Los secuestros con fines de extorsión económica siguen creciendo: 184 (registrados en los archivos policiales, o sea denunciados) en los últimos tres años: 2010=71; 2011=37 y 2012=76. Los denominados “*femicidios*” (feminicidios) o muerte violenta de mujeres han crecido en 35% en los últimos tres años (2010=385; 2011=512 y 2012=520). ¡Asesinan una mujer cada quince horas!

La extorsión se ha vuelto una epidemia. “*Nos está matando*”, ha clamado el presidente Lobo. Ya van más de 100 conductores y cobradores de autobuses del transporte urbano que han muerto asesinados por los pandilleros que exigen el pago de los llamados “*impuestos de guerra*” (extorsión).

La seguridad privada crece como un negocio floreciente. Se estima que más de 70 mil hombres debidamente armados prestan sus servicios en diferentes empresas de seguridad privada. En el registro oficial de la Policía aparecen 709 empresas registradas pero más de la mitad de ellas no tienen ningún control ni pagan los impuestos. El sistema de seguridad privada es un caos, a la vez que un envidiable negocio para muchos ex policías y ex oficiales de las Fuerzas Armadas.

### Otros conflictos

Como si no bastara con los problemas ya reseñados, el país ha debido afrontar una difícil situación en las aguas del Golfo de Fonseca, en la parte sur del territorio nacional, de cara al Océano Pacífico. Aunque la Corte Internacional de la Haya resolvió en su sentencia de septiembre del año 1992 que las aguas del Golfo pertenecen a los tres países ribereños (propiedad tripartita entre Honduras, El Salvador y Nicaragua) y que, en consecuencia, los tres tienen acceso directo al Mar Pacífico a través de la bocana del Golfo, lo cierto es que tanto Nicaragua como El Salvador no han mostrado ni el interés suficiente ni la sensibilidad necesaria para hacer efectivo el derecho de Honduras a acceder a las aguas del Pacífico

libremente. Esta situación ha creado un clima de creciente tensión que, por momentos, se agrava cada vez que las Fuerzas navales de los países involucrados capturan a indefensos pescadores que navegan en esas aguas, tan conflictivas como peligrosas. Honduras ha propuesto fórmulas de solución al problema pero la indiferencia de los vecinos sigue siendo la tónica predominante. Al final, deberá acudir al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en demanda de apoyo y solución definitiva del problema. Si la tensión aumenta, la región podría verse involucrada en choques y enfrentamientos bélicos que a ningún país le convienen. Mientras llega ese momento, los tres países parecen haberse involucrado ya en una discreta carrera armamentista (compra de lanchas artilladas, patrulleras, aviones, helicópteros, etc.) que ninguna de las tres economías está en capacidad de sostener.

# ABRIL 2013

---

## La situación política

Entre continuos y preocupantes movimientos sísmicos en la costa norte del país, en este mes de abril el gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo ha debido afrontar la creciente oposición de los grandes grupos económicos -los llamados “*poderes fácticos*”- que adversan la propuesta gubernamental de reformas a la legislación que rige el sistema de telecomunicaciones (licencias y medios) en el país. El Congreso se apresta a discutir el contenido de la polémica iniciativa del gobierno lobista, mientras proliferan las ofertas y sobornos ofrecidos por los actores involucrados a los diferentes diputados de las distintas bancadas. Sumas millonarias circulan en los pasillos, comprando voluntades y sumando o restando votos parlamentarios. El Congreso da la impresión de ser un enorme bazar en donde las leyes de la oferta y la demanda funcionan a todo vapor.

Pero no sólo ese tema ha ocupado el interés de los diputados. La seguridad y, específicamente, el desempeño de los principales operadores del sistema de justicia (policías, fiscales y jueces, entre otros) han llenado la agenda legislativa. Desde el día 09 comenzaron a desfilar ante la Asamblea los principales jefes y directores de los organismos involucrados. El resultado fue peor de lo que todos esperaban: el sistema de seguridad y justicia está virtualmente colapsado y sólo es capaz, apenas, de investigar y procesar el 20% de los numerosos homicidios (casi ocho mil anuales) que se producen diariamente en el país. La intervención del Fiscal General, Luis Alberto Rubí, fue la más lamentable de todas. Evidenció ignorancia y prepotencia, incapacidad y desidia. Otro tanto sucedió con el funcionario encargado de la depuración policial, Eduardo Villanueva. El Ministro de Seguridad y el jefe de la Policía, Pompeyo Bonilla y Juan Carlos “*El tigre*” Bonilla, también mostraron lo suyo, decepcionando a los legisladores y a la opinión pública en general. La impresión que quedó fue la de un sistema de seguridad pública fracasado y un grupo de funcionarios negligentes e incapaces de hacer frente a los grandes desafíos del crimen organizado y la delincuencia común.

El Congreso decidió lo que ya se esperaba: dar un voto de censura a Villanueva, descalificando su labor al frente de la Dirección de Investigación y

Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), y, al mismo tiempo, nombrar una Comisión Interventora para marginar al Fiscal General e introducir orden y reformas en el Ministerio Público. Esa Comisión, integrada por tres propietarios y un suplente, fue avalada por la coalición de organizaciones de la sociedad civil, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), que preside y dirige la Rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos.

En los próximos días deberían ser nombrados los sustitutos de Villanueva y su Director adjunto, Mario Chinchilla. Se menciona con mucha fuerza el nombre del ex fiscal Omar Menjívar para ocupar tan importante cargo y dedicarse de una vez por todas a la depuración policial, ahora sí en orden descendente, de arriba hacia abajo. Ya se han fijado fechas en el mes de mayo para que la cúpula policial, encabezada por su máximo líder, el Comisionado Bonilla, desfile ante el polígrafo y se someta a las demás pruebas de confianza.

O sea que, en la práctica, se produjo una alianza *sui generis* entre grupos de la sociedad civil y el gobierno, especialmente con el presidente Lobo y el candidato Juan Orlando Hernández (JOH), para dar al traste con algunos de los principales protagonistas de la crisis en el sistema de seguridad. Esa alianza, cuestionada por algunos, ha introducido un nuevo factor clave en la búsqueda de soluciones al gravísimo problema de la inseguridad en el país.

Casi al mismo tiempo, el gobierno anunció el cambio del Ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, quien pasa a ser el secretario privado del presidente Lobo, un cargo que, aunque muy importante, muchos consideran como una fórmula de consuelo y resignación. En su lugar ha sido nombrado el influyente Ministro de Relaciones Exteriores Arturo Corrales, una especie de comodín universal que es utilizado por el presidente cada vez que surge un incendio y requiere de un hábil bombero para apagarlo. Pero esta vez Corrales ha puesto una condición: ejercer autoridad no sólo en el área de seguridad sino también en el de defensa, en el de derechos humanos y en el de asuntos migratorios y temas penitenciarios. O sea, ser algo así como un *"super ministro"*, que tendrá bajo su discreta jurisdicción al menos a cuatro ministerios: Seguridad, Defensa, Interior y Derechos Humanos y Justicia. Un sueño realizado, sobre todo para un político que milita -es, en realidad, su verdadero dueño- en un partido minúsculo e insignificante: la Democracia Cristiana. Pero, también, una posible nueva fuente de conflictos, sobre todo tomando en cuenta el malestar inocultable de los militares y el disgusto más que evidente de muchos jefes policiales.

La designación de Corrales con el pomposo título de *"Comisionado presidencial para seguridad y defensa"* ha desconcertado a muchos, especialmente en las filas de los políticos opositores. Sin embargo, ha producido evidente satisfacción en la embajada norteamericana, organismo al cual se le atribuye el origen de la decisión presidencial. Los norteamericanos, en

efecto, requerían de un nuevo interlocutor válido en el sector seguridad, sobre todo después de haber cuestionado públicamente la trayectoria del Tigre Bonilla y haber anunciado (William Brownfield, el Zar antidrogas, en su reciente visita a Tegucigalpa) que su ayuda fluiría ¡sólo hacia aquellas unidades, los llamados “*grupos élite*”, que no dependieran directamente del Comisionado General Bonilla! Ahora, con Corrales, la agenda de Estados Unidos podrá ser aplicada con menos dificultades... al menos eso es lo que esperan en Washington. Ya veremos.

A los cambios en el área de Seguridad han seguido otros, derivados o complementarios: El Secretario privado del presidente, su pupilo y ahijado, Reynaldo Sánchez, ha abandonado el cargo (el que ocupará Pompeyo Bonilla, el hoy ex Ministro de Seguridad) para retornar al Congreso Nacional y dedicarse por entero a la campaña electoral. Sánchez aspira a ser reelecto diputado por el departamento de Olancho. En la Cancillería, Corrales será sustituido por Mireya Agüero de Corrales, una funcionaria menor y de alcances limitados que no tiene ni tendrá la capacidad suficiente para llenar el vacío dejado por el “*super ministro*”. El Designado presidencial Samuel Reyes también abandona su cargo para dedicarse a la campaña electoral. Lo mismo hará en pocos días el Ministro del Trabajo, el democristiano Felicitó Ávila, quien piensa postularse como Designado presidencial en una todavía en ciernes posible alianza entre su partido, el Demócrata Cristiano, y el partido Nacional. Ávila sería, en teoría, uno de los tres Designados presidenciales (especie de Vice presidentes disminuidos) de JOH, el candidato oficial del partido gobernante.

Los movimientos internos dentro del gabinete gubernamental eran una noticia esperada, aunque, hay que reconocer, la designación de Corrales para sus nuevas funciones no entraba en los cálculos políticos de los mejores observadores. Sus antecedentes hay que buscarlos en las diferentes negociaciones que el gobierno lobista ha mantenido con Estados Unidos en torno a los sensibles temas del narcotráfico, la delincuencia organizada, las “*maras*” o pandillas y el tráfico ilegal de personas. Estas negociaciones quedaron refrendadas en el Memorándum de Entendimiento firmado entre Honduras (Arturo Corrales) y Estados Unidos (María Otero) el pasado 12 de septiembre de 2012. En ese documento (tres páginas apenas), pero especialmente en el Anexo de 30 páginas, está diseñada y expuesta en grandes líneas la agenda de seguridad norteamericana para Honduras. Corrales, con aciertos y altibajos, llega para ser el ejecutor de esa agenda y dar un sentido de coordinación interinstitucional al esfuerzo.

Los Estados Unidos, por intermedio del Zar Brownfield, han dejado en claro sus prioridades y objetivos. Van a centrar sus esfuerzos en la depuración de la policía (fiscales y jueces incluidos) y en su capacitación profesional. Están claros que no será un proceso fácil; durará de cinco a diez años, según cálculos del propio Brownfield. Para ello estarían dispuestos a invertir sumas

millonarias, aunque siempre insuficientes. En el año 2011, los Estados Unidos gastaron en Honduras 67.4 millones de dólares en “*contratos militares*”, 89 millones en el mantenimiento y apoyo de la Fuerza de Tarea Bravo (Palmerola), dos millones en entrenamiento de 300 efectivos del ejército hondureño y 1.3 millones en la compra de equipo electrónico. Para el año pasado, Estados Unidos destinó 85 millones de dólares para diferentes programas de seguridad en Centroamérica, el 65% de los cuales fueron invertidos en los países del llamado “*Triángulo Norte*”. A Honduras le correspondieron 36 millones, 26 de los cuales han sido gastados ya en programas policiales y 11 están “*congelados*” por parte del Congreso norteamericano, a la espera de una certificación favorable del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos y el comportamiento de la policía hondureña en ese sensible tema.

Corrales se retira de la Cancillería con buenas anotaciones a su favor. Dos logros, tan recientes como importantes, destacan entre todos:

- a) El posible reingreso de Honduras a Petrocaribe y la relativa normalización de las relaciones con Ecuador, hecho que se refleja en la invitación al presidente Lobo para asistir a la nueva toma de posesión del reelecto presidente Rafael Correa.
- b) El avance sustancial, más de lo que la gente se imagina, en el acercamiento a la República Popular China, país que Corrales visitó en los últimos días de su mandato como Canciller de la República. En esa visita, en la que fue acompañado por el Ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, el todavía Canciller logró acuerdos básicos muy importantes para impulsar el establecimiento definitivo de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Beijing y Tegucigalpa. Su visita fue muy exitosa.

Hoy, al pasar al área tan gelatinosa y movediza como es la seguridad, Corrales sabe que tiene poco tiempo para lograr éxitos puntuales y convincentes, apenas unos seis meses, justo antes de las elecciones de noviembre, cuando surgirán de manera definitiva los nuevos actores clave, las nuevas propuestas y los nuevos planes de gobierno. Seguramente, dada su conocida afición por los controles electrónicos y las bases de datos, el nuevo Comisionado presidencial para la seguridad y la defensa dará prioridad a la reingeniería electrónica del Ministerio de Seguridad, creando bases de datos confiables y científicas para medir el recurso humano, el inventario de armas y el registro balístico, así como las estadísticas reales de delitos, seguimiento de los mismos y monitoreo sobre su investigación y judicialización debida. La investigación criminal será una de sus prioridades. Se espera que anude lazos más estrechos y, por lo tanto, una mayor colaboración entre la Policía y la Universidad Nacional Autónoma, en particular con el Observatorio de la Violencia de la UNAH.

## Los conflictos sociales

**E**n materia de conflictividad social, abril ha sido, como los meses anteriores, un mes muy agitado y repleto de acontecimientos. La politización rápida de los conflictos y su conversión fácil en crisis han sido las notas características del proceso.

Los maestros, siempre enfrentados con el Ministro Marlon Escoto, quien hace esfuerzos sostenidos para devolverle gobernabilidad al sistema educativo, siguen protestando en las calles y continúan con sus reclamos y protestas. Es la de nunca acabar. Los paros laborales se repiten todos los días, las clases son interrumpidas y los niños se quedan sin la educación cotidiana, ya de por sí deficiente y cuestionada.

En el Bajo Aguán, el viejo conflicto, inicialmente agrario y hoy multidimensional, sigue produciendo muertes y violencia. Cada día mueren más campesinos o guardias privados, más personas ajenas al conflicto pero víctimas de sus consecuencias, más inocentes. La delincuencia común, el crimen organizado, las redes del narcotráfico, los grupos campesinos, que proliferan tanto como se diversifican sus demandas, los terratenientes locales y externos, en fin, todos ellos, en un amasijo siniestro y sangriento, mantienen a esta región sumida en la angustia y la impotencia.

El publicitado “*desarme general*” en la región del Departamento de Colón y, por lo tanto, en el Bajo Aguán, no ha dado los resultados esperados. La tasa de homicidios en esa zona sigue siendo de cien por cada cien mil habitantes, muy por encima de la media que prevalece en el territorio nacional (85.6 por cada cien mil habitantes).

A finales del mes se produjo una inusual huelga de policías, la llamada “*huelga de fusiles caídos*”, que estuvo a punto de convertirse en el peligroso detonante de una rebelión generalizada dentro de la institución policial. Ya en anteriores análisis de coyuntura hemos hablado de una “*insubordinación latente o pasiva*” al interior de la Policía Nacional. Este conato de huelga general es un indicio de la posible conversión de la “*insubordinación pasiva*” en “*rebelión activa*”. Hay que ponerle atención a estas peligrosas y preocupantes señales.

Los motivos esgrimidos por los huelguistas son los ya conocidos: pésimas condiciones de trabajo, abusos de los jefes, sanciones indebidas, prohibiciones injustas, salarios insuficientes y atrasos inexplicables en el pago de los aumentos prometidos y aprobados. Todas son demandas justas. Pero hay quienes, sin duda, aprovechan el descontento de los agentes de base (la “*escala básica*”) para atizar el malestar y crearle problemas al actual Director de la policía, Comisionado General Juan Carlos “*El tigre*” Bonilla. Son sus enemigos, los jefes policiales calificados en “*Estado de disponibili-*

*dad*”, es decir los integrantes de las cúpulas destituidas desde octubre del 2011 a la fecha (Muñoz Liconá, Ávila Panchamé, Ramírez del Cid, etc.), los que aprovechan las legítimas protestas de los agentes de base para generar un clima de ingobernabilidad dentro de la estructura policial y provocar la salida de Bonilla y el retorno de sus aliados al control de los circuitos y engranajes de la fuerza policial, es decir el regreso de los oficiales cuestionados al mando policial.

El presidente Lobo, alertado a tiempo del peligro de la insubordinación policial, culpó a la burocracia -“*maldita burocracia*”, dijo- por la tardanza en desembolsar los dineros generados por el impuesto de la llamada “*tasa de seguridad*”, que deben ser utilizados para resolver problemas tan básicos como la mejoría en las condiciones de vida y trabajo de los policías.

### **El drama de la inseguridad**

**E**ste, sin duda, es el gran tema. En trece años, según el más reciente informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), se han producido en Honduras 53,622 homicidios, de los cuales 20,010 han tenido lugar en el periodo gubernamental del presidente Porfirio Lobo. Esto quiere decir que, en este periodo, han sido asesinadas 576 personas por mes, 19 al día y una cada 76 minutos. Infinitamente más que los que morían en la guerra civil de El Salvador, entre 1981 y 1992 (once años=80 mil muertos).

No es casual que sean precisamente estos dos países, Honduras y El Salvador, los que aparecen en la “*lista negra*” del Departamento de Estado de EEUU como los países que no es aconsejable visitar. Washington recomienda a sus ciudadanos eludir estos países en sus destinos turísticos o de negocios.

Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro de EEUU divulgó una lista de los narcotraficantes o lavadores del dinero sucio del tráfico de drogas que operan en América Latina. Entre ellos, para sorpresa de la somnolienta sociedad local, aparece el nombre de José Miguel Handal, más conocido popularmente en San Pedro Sula como “*Chepito*” Handal, calificado de narcotraficante y lavador de dólares, cuyo hermano, el predicador evangélico de la televisión, Esteban “*el toro colorado*” Handal, ha sido aspirante presidencial del partido Liberal (del cual ha sido presidente de su facción juvenil). Chepito Handal, sobre quien pesaba una orden de captura desde el año 2008 -que el Ministerio Público sospechosamente no había agilizado ni la Policía había cumplido- se movía en San Pedro Sula como un rey, un personaje intocable, capaz de imponer su propia ley, acosar a sus enemigos, intimidar a sus adversarios y “*neutralizar*”, vía sobornos, a policías, fiscales y jueces. La denuncia del gobierno norteamericano, que incluye a su padre y

a su esposa, involucra sus empresas y negocios, legales e ilegales, que conforman una amplia telaraña delictiva en torno a las drogas, los carteles internacionales del narcotráfico y las redes locales de la corrupción y el crimen. El caso de Chepito Handal es una muestra ejemplar de la penetración del crimen organizado en las estructuras de seguridad local y, por lo mismo, en la ineficiencia calculada de nuestras “autoridades” (policías, fiscales y jueces) en la lucha en contra de la delincuencia.

Varias propiedades de Chepito y sus cómplices, padre y esposa incluidos, han sido intervenidas y decomisadas por las autoridades locales, sólo después de que el gobierno norteamericano denunciara públicamente sus actividades.

Pareciera que la presión norteamericana va en aumento y, por lo mismo, la eficiencia de los órganos locales debería también incrementarse. Según René Osorio, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, los militares han registrado en el año 2011 un total de 156 vuelos de aviones o avionetas ilegales con cargamentos de drogas hacia el territorio nacional, en el año 2012 se reportaron 65 vuelos y en lo que va del año 2013 (mes de marzo) se han producido nueve vuelos. Pero eso es lo que las autoridades, en este caso los militares, logran registrar. Y, ahora preguntémosnos, ¿y los vuelos que no son detectados?

En los últimos días se ha especulado un tanto sobre la posibilidad de que el nombramiento de Arturo Corrales en su nueva responsabilidad gubernamental esté relacionado con la posibilidad de una negociación entre el Estado hondureño y los líderes de las pandillas o “maras” criminales que tienen acorralada a la sociedad. No hay evidencias de tal cosa.

Lo que se sabe es que algunos dirigentes de la pandilla o “mara” M-18, por intermedio del Obispo católico Rómulo Emiliani, de San Pedro Sula, han pedido al máximo jefe policial su intervención para impedir que policías corruptos ayuden a las pandillas rivales, capturando a líderes de la M-18 y entregándoselos, previo pago, a los asesinos de la otra banda o pandilla rival. O sea que, en esencia, se trata de que la policía o, al menos, ciertos jefes intermedios de la misma, están actuando como ejecutores contratados por una pandilla para capturar y entregar a pandilleros rivales. Esto sólo demuestra el grado de descomposición y podredumbre al que han llegado ciertos estratos y eslabones de la Policía Nacional.

Habrá que poner mucha atención a estos hechos.

# MAYO 2013

---

## La situación política

**M**ayo, como siempre, comenzó con los desfiles y protestas callejeras celebradas el día primero, en conmemoración del día de los trabajadores. En esta ocasión, los sindicatos que desfilaron lo hicieron, en su gran mayoría, bajo las banderas rojinegras del partido Libertad y Refundación (LIBRE). De hecho, LIBRE, es decir los partidarios del matrimonio Zelaya (Manuel) Castro (Xiomara), se apoderaron de las marchas y concentraciones convirtiéndolas en masivas reuniones políticas con un claro y definido perfil electoral. La celebración obrera sirvió para que el nuevo partido mostrara su creciente fuerza de movilización y poder de convocatoria en todo el territorio nacional.

No fue casual, entonces, que los partidos tradicionales, el Liberal y el Nacional, criticaran con mucho énfasis lo que llamaron *“preocupante politización del movimiento de los trabajadores agrupados en sindicatos”*. Diario La Tribuna, propiedad del ex presidente liberal Carlos Flores, dedicó varios editoriales para comentar el tema y censurar la actitud del partido LIBRE y de los dirigentes obreros.

Coincidiendo con las celebraciones del Primero de Mayo se produjeron también los movimientos y cambios ya anunciados al interior del gabinete de gobierno: Arturo Corrales, hasta entonces Canciller de la República, asumió su nuevo cargo como Ministro de Seguridad, bajo el pomposo título de *“Comisionado presidencial para la Seguridad y la Defensa”*. La nueva designación convierte al polémico funcionario, *“dueño”* del minúsculo partido Demócrata Cristiano, en una especie de *“Súper Ministro”*, generando, como era inevitable, el enfado de sus colegas de gabinete y los recelos de la vieja guardia del partido Nacional, teóricamente partido gobernante en la Administración del presidente Porfirio *“Pepe”* Lobo.

De igual manera, salió del gabinete gubernamental el Designado Presidencial Samuel Reyes, quien interpuso su renuncia para dedicarse por entero a promover su candidatura para diputado en la próxima Legislatura (2014-2018). Le siguieron el Ministro del Trabajo, el democristiano Felícito Ávila, y

el Ministro Director del Instituto Nacional Agrario, el dirigente del izquierdista partido Unificación Democrática (UD), César Ham. Tanto Ávila como Ham pretenden convertirse en funcionarios electos en noviembre para desempeñarse en el próximo gobierno: Ávila como posible Designado Presidencial en la fórmula del nacionalista Juan Orlando Hernández (JOH) y Ham como futuro diputado de UD en el Congreso Nacional.

Otros funcionarios de menor rango también han abandonado el barco gubernamental para involucrarse directamente en la campaña electoral y cumplir con la obligación legal de abandonar el cargo oficial en el gobierno seis meses antes de las elecciones, es decir en este mes de mayo. El presidente Lobo ha sustituido a los renunciantes con los funcionarios subalternos de la escala siguiente, sin provocar, excepto en el área de Seguridad, modificaciones dramáticas o sustanciales. Consciente de que su periodo gubernamental está llegando al final, el presidente no muestra interés en traer a su gabinete nuevos rostros o figuras que podrían insuflarle el último aliento a su gestión administrativa.

En cambio, como es su costumbre, el presidente sigue mostrando su conocido interés por afianzar las relaciones de Honduras en el campo internacional. En este mes ha llevado a cabo varios viajes al exterior, entre los cuales destacan tres: el que lo llevó a Costa Rica para una reunión colectiva de los presidentes centroamericanos con Barak Obama, presidente de los Estados Unidos; el viaje a Caracas para acompañar a Nicolás Maduro en su toma de posesión y afianzar el reingreso de Honduras en la alianza de Petrocaribe, así como la visita a Quito, Ecuador, para estar presente en la toma de posesión del reelecto presidente Rafael Correa y, de esa manera, dejar restablecida plenamente la normalidad en las relaciones diplomáticas y políticas entre Quito y Tegucigalpa. Para ese fin, previamente, el presidente había recibido en Tegucigalpa la visita del canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, quien había destacado por ser uno de los críticos más radicales del golpe de Estado del 2009 y, en consecuencia, del gobierno lobista surgido después. Ampliando más su agenda de política internacional, Lobo recibió también la visita del canciller palestino Riad Malki, quien vino a Honduras para agradecer al gobernante su valioso apoyo en la Organización de las Naciones Unidas al nuevo gobierno de la Autoridad Palestina (es bueno recordar que Honduras tiene una de las colonias árabes más grandes de América Latina, la segunda, se asegura, después de la chilena).

También en este mes de mayo, el día 08, Lobo asistió a una reunión en Managua con los presidentes Daniel Ortega de Nicaragua y Mauricio Funes de El Salvador. El objetivo fue el de buscar acuerdos sobre el manejo de la soberanía compartida en el Golfo de Fonseca y, al mismo tiempo, bajar los niveles de tensión que han prevalecido en esa zona en los últimos meses.

---

A nivel local, el mandatario hondureño recibió con mucha pompa y publicidad a una importante delegación proveniente de la República Popular China que, de esa forma, devuelve la visita que hiciera recientemente a Beijín el entonces todavía canciller Arturo Corrales, junto al Ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato. Los chinos llegaron cargados de promesas y ofrecieron llevar a cabo millonarias inversiones en los más diversos proyectos presentados por el gobierno hondureño. Áreas tales como la minería, las represas hidroeléctricas, un ferrocarril interoceánico, etc., despertaron el interés de los visitantes orientales. Más en privado, se habló específicamente de invertir en la explotación de un “*corredor minero*” ubicado entre los departamentos de Olancho y Colón, en donde, al parecer, han sido identificados yacimientos de 17 minerales diferentes, algunos con supuesto valor estratégico. Familiares ligados al poder gubernamental mostraron interés en participar en este millonario proyecto, aunque también hay razones para creer que grupos vinculados al crimen organizado (narcotraficantes de la zona de Olancho y Colón) han manifestado su deseo de participar en el negocio.

El día 24, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en cumplimiento de la ley, convocó oficialmente a la población para participar en las elecciones generales que tendrán lugar el último domingo del próximo mes de noviembre. De esa forma, el TSE abrió las compuertas para que inicie el proceso electoral y los nueve partidos debidamente inscritos puedan desarrollar a plenitud sus respectivas campañas proselitistas.

Previamente, los partidos inscribieron sus planillas de candidatos a diputados, alcaldes y a la presidencia de la República. Miles de aspirantes disputarán el favor de los cinco millones 253 mil 655 ciudadanos que aparecen registrados en el censo electoral, según los datos del Registro Nacional de las Personas (RNP). En esa cifra global deben incluirse los miles de migrantes que han abandonado el país (se calcula que un millón y medio de hondureños viven, legal o ilegalmente, en el exterior), otros tantos que han fallecido sin haber sido debidamente registrados, los que guardan prisión y los que forman parte de las Fuerzas Armadas y la Policía, que por ley no pueden ejercer el voto. O sea que el Censo o Padrón electoral necesita ser sometido a una rigurosa y profunda revisión, una limpieza a fondo para depurarlo y hacerlo realmente útil y creíble. Ese es uno de los principales reclamos de los partidos políticos, especialmente los de reciente creación, que temen que las deficiencias e inexactitudes del Censo sean utilizadas para llevar a cabo un fraude electoral a favor del partido gobernante y su candidato presidencial, Juan Orlando Hernández.

Los nueve partidos inscribieron ocho candidatos presidenciales, ya que dos de ellos -Unificación Democrática (UD) y el Frente Amplio de Participación Electoral en Resistencia (FAPER)- decidieron aliarse y presentar en forma conjunta la candidatura presidencial del conocido activista de los derechos humanos, Andrés Pavón, fundador y principal dirigente del FAPER. Los

otros candidatos son los siguientes: Juan Orlando Hernández, por el partido Nacional; Mauricio Villeda, por el partido Liberal; Xiomara Castro, por el partido Libertad y Refundación; Salvador Nasralla, por el partido Anticorrupción; Romeo Vásquez, por el partido Alianza Patriótica; Orle Solís, por el partido Demócrata-Cristiano, y Jorge Aguilar, por el partido de Innovación y Unidad.

De todos ellos, sólo tres tienen posibilidades reales de ganar la Presidencia de la República: el nacionalista Hernández, el liberal Villeda o la candidata de LIBRE, la señora Castro de Zelaya. Por el momento, ésta última, Xiomara Castro, es la que encabeza como favorita todas las encuestas. En los dos sondeos más recientes, los de las empresas Tecnimar y Alfredo Keller y Asociados, la señora Castro supera a sus demás contrincantes con varios puntos de ventaja: 32 a 21 (Nasralla), 16 (Hernández) y 11 (Villeda). En la otra encuesta, la de Keller y Asociados, la diferencia es la siguiente: Xiomara 29; Hernández 24; Nasralla 17 y Villeda 11.

Aunque el candidato del partido Anticorrupción (PAC), el presentador de televisión Salvador Nasralla, aparece muy bien favorecido en las encuestas y, por momentos, pareciera ser el rival más cercano de Xiomara, lo cierto es que su candidatura ya empezó a dar muestras de agotamiento y no luce capaz de seguir creciendo. Al contrario, la tendencia más reciente es hacia el descenso y el debilitamiento. Además, su movimiento político carece de estructuras orgánicas en el territorio nacional y gira exclusivamente en torno a su persona. No tendrá posibilidades reales de acreditar suficientes representantes suyos en las mesas electorales, lo que lo coloca en desventaja frente a los otros tres candidatos que aparecen con más probabilidades de triunfo.

Por el momento, las cifras y tendencias indican que la pelea principal será entre Xiomara Castro y Juan Orlando Hernández. De hecho, el tono de los discursos y la virulencia de las acusaciones y reproches entre ambos contendientes ya son un indicio claro de las formas y estilos que adoptará la campaña electoral. Los asesores de JOH insisten en que su candidato debe atacar a LIBRE en primer lugar, insistiendo en presentar a Xiomara como una persona títere en manos de su esposo, el ex presidente Manuel Zelaya, quien, según JOH, representa el peligro de la *“izquierda radical”*. Las proclamas de JOH van adquiriendo un abierto tono acusador, planteando la disputa en términos de izquierda radical versus *“centro democrático”*. En tales circunstancias, es previsible vaticinar un creciente y preocupante clima de polarización ideológica en el curso de la campaña que acaba de iniciar formalmente.

Mientras LIBRE muestra mayores niveles de unidad interna y una efervescente actividad organizadora en sus filas, los nacionalistas y los liberales todavía siguen sumidos en disputas internas, negociando a medias la cohe-

sión interna entre sus propias facciones y tendencias. En el partido Liberal, aunque formalmente se proclamó la unidad, con abrazos y sonrisas, entre los seguidores de Villeda y los partidarios de su principal oponente en las elecciones internas del pasado noviembre, Yani Rosenthal, lo cierto es que continúan las disputas por el control de cuotas de poder y la distribución de cargos en los órganos de dirección partidaria. En el partido Nacional, la unidad entre JOH y quien fuera su principal contendiente en las elecciones internas, el alcalde capitalino Ricardo Álvarez, parece estar más consolidada. Pero necesita que Álvarez sea ungido como candidato a Designado presidencial (especie de Vicepresidente disminuido) en la fórmula de JOH. Para ello es preciso burlar la Ley Electoral, que expresamente lo prohíbe, en virtud de que Álvarez ya fue candidato -y resultó perdedor- en las elecciones internas de noviembre del año pasado. Será el TSE el que dirá la última palabra. Los nacionalistas ya empezaron a ejercer presión, pública y privada, sobre los tres magistrados del TSE.

### **En materia de seguridad...**

**E**n el Sector seguridad, los dos hechos más relevantes han sido: a) el nombramiento de Arturo Corrales como “*Comisionado presidencial para la seguridad y la defensa*”, y b) el inicio del llamado “*proceso de paz*” entre el Estado, la sociedad y las bandas pandilleriles (pandillas o “*maras*”).

En el primer caso, la llegada de Corrales a la Secretaría de seguridad ha significado un giro muy importante en la forma de gestionar el funcionamiento de la Policía y en el ordenamiento de las prioridades a ejecutar. Corrales se ha hecho acompañar de tres coroneles retirados de las Fuerzas Armadas, todos ellos hombres de su confianza y empleados suyos en el área de seguridad de sus empresas industriales y negocios privados. Ellos son: José Antonio Pereira Ortega (Sub Comisionado presidencial para la seguridad y la defensa); Francisco Javier Lima Bueso (Vice Ministro de seguridad) y Manuel de Jesús Luna Gutiérrez (Secretario General del Ministerio de seguridad y ex Jefe de la desaparecida Dirección de Investigación Criminal, la temible y repudiada DNI de la época de la guerra fría). Los tres son egresados de la llamada XII Promoción (1978) de la Escuela Militar de las Fuerzas Armadas.

La llegada de los militares retirados ha sido interpretada como una maniobra para “*militarizar*” la Policía, causando desconcierto y recelo al interior de las filas policiales, especialmente entre sus principales comandantes. Al nomás entrar, Corrales y sus coroneles destituyeron a 17 de los 21 oficiales que integraban el “*Estado Mayor*”, nombrado apenas un par de días antes por el Comisionado General y Director Nacional de la Policía, Juan Carlos “*El Tigre*” Bonilla. De esa forma, el nuevo Ministro ha empezado a construir su

red de control con la ayuda de nuevos oficiales, debidamente recomendados por los coroneles retirados.

En una maniobra sorpresiva y novedosa, Corrales decidió dejar “*en suspenso*” a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y a la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI), para fundirlas en dos nuevas instancias que ha decidido crear:

- a) La Fuerza de Tarea Conjunta Combinada Interinstitucional (una amalgama de policías, fiscales, jueces, agentes de Migración, custodios penitenciarios, etc.), que tendrá por principal función la de “*coordinar las acciones*” entre los diferentes actores del Sector seguridad.
- b) La Fuerza de Tarea Policial de Investigación, que fusionará las diferentes unidades que se dedicaban a la “*investigación criminal*”.

Paralelamente, Corrales ha iniciado el censo de la fuerza policial para establecer con claridad cuántos policías existen realmente, cuánto es su armamento, y proceder a su debido registro balístico. Es una tarea compleja pero el nuevo Ministro parece decidido a evitar el fracaso a toda costa.

Casi al mismo tiempo, aunque sin aparente sintonía con las iniciativas del Ministro, el Congreso Nacional aprobó, casi a la carrera, la creación de una nueva unidad policial bajo el intrincado nombre de Tropa Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), algo así como un híbrido entre fuerza policial y comando militar, que sólo sirve para demostrar la ausencia de una política integral y coherente en materia de seguridad. Cada organismo hace lo que le parece mejor, sin atender a una concepción general y unificada del problema de la seguridad en Honduras.

En cuanto a las pláticas -que no negociaciones- entre las pandillas rivales (Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18), el país se vio sorprendido por la noticia, a finales del mes, sobre un posible “*pacto o tregua*” que se firmaría entre los líderes pandilleros, bajo los auspicios del sacerdote panameño, afincado en San Pedro Sula, Rómulo Emiliani, y el Secretario de seguridad multidimensional de la Organización de Estados Americanos, el canadiense Adam Blackwell. La supuesta firma del pacto se llevaría a cabo en el centro penal de San Pedro Sula, lugar que frecuenta constantemente el padre Emiliani. Al final, los pandilleros no llegaron a ningún acuerdo entre ellos y sólo se limitaron a hacer un llamado al gobierno y a la sociedad para que les perdonen sus crímenes y les den una nueva oportunidad para rehacer sus vidas. Esto es lo que Blackwell, con discreto optimismo, llamó un “*proceso de paz*” que deberá dar frutos a mediano y largo plazo.

El presidente Lobo prometió a los negociadores, luego de felicitarlos por su loable esfuerzo, el apoyo y acompañamiento del gobierno, así como el

nombramiento de “*un enlace*” y un equipo especial para dar seguimiento a las “*pláticas de paz*” y respaldar la posibilidad de una tregua o pacto entre las violentas pandillas. Todos los candidatos presidenciales se han pronunciado favorablemente a las iniciativas de Emiliani y ven con esperanza las posibilidades de disminuir los elevados niveles de violencia y criminalidad que mantienen aterrado al país entero. También hay críticos y censores que condenan al gobierno por mostrar tanta debilidad ante los delincuentes y asesinos, agrupados en las pandillas o “*maras*”. La posible tregua o pacto, dicen, es la mejor prueba del debilitamiento del Estado y de su irremediable tendencia a convertirse en un Estado fallido.

# JUNIO 2013

---

## La complicada situación política

A menos de cinco meses para celebrar elecciones generales, la candidata del recién creado partido Libertad y Refundación (LIBRE), la ex primera dama Xiomara Castro de Zelaya, continúa encabezando las encuestas y ocupando el primer lugar entre los favoritos para convertirse en sucesor (a) del presidente Porfirio “Pepe” Lobo. La candidatura oficialista, que postula a Juan Orlando Hernández (JOH), jefe del Poder Legislativo, como aspirante a la presidencia de la República, no acaba de coger el impulso suficiente para devolver la tranquilidad y certeza de triunfo en las filas del partido Nacional. Otro tanto sucede, aunque con mayor dramatismo y descalabro, en las filas del partido Liberal: la candidatura de Mauricio Villeda no logra salir del tercer o cuarto lugar en que lo sitúan las encuestas, atrapada en divisiones internas y pleitos entre facciones que mantienen debilitado y disperso al otrora fuerte y vigoroso partido de la bandera rojiblanca.

Convencidos de que LIBRE se ha convertido en una fuerza política innegable, con opciones reales de conformar el gobierno a partir de enero del próximo año, los diplomáticos norteamericanos acreditados en Tegucigalpa han puesto en marcha una evidente estrategia de acercamiento y aproximación con el liderazgo del nuevo partido político. En tres ocasiones recientes, la embajadora Lisa Kubiske se ha reunido con los líderes de LIBRE: una vez con el equipo conductor, la segunda vez sólo con la candidata presidencial y luego a solas con el ex presidente Manuel Zelaya, Coordinador general del partido. Para rematar estas reuniones, que hasta hoy han sido discretas y de bajo perfil público, la embajada invitó abiertamente a los dirigentes de LIBRE a participar en las festividades del día de la independencia de los Estados Unidos. Ahí, en presencia de centenares de invitados, todos ellos pertenecientes a las élites políticas y empresariales del país, la embajadora Kubiske dio la bienvenida y fue pródiga en sonrisas y abrazos con los políticos que hasta hace pocos meses eran satanizados y despreciados como representantes de una supuesta “izquierda radical”. El “pragmatismo” mostrado por la diplomacia estadounidense deja sin piso la campaña propagandística del candidato oficial, JOH, quien insiste en señalar a los líderes de

---

LIBRE como peligrosos agentes de la izquierda internacional, anarquistas y violentos, además de enemigos jurados de los Estados Unidos. La recepción de Zelaya y sus colaboradores en la fiesta de la embajada debe verse como un gesto de *“real politik”* por parte de los Estados Unidos, convencidos de que el nuevo partido está en capacidad creciente de ganar las elecciones del mes de noviembre o, por lo menos, de quedar convertido en una segunda o tercera fuerza real en el escenario político hondureño.

El propio presidente Porfirio Lobo, en recientes pláticas privadas con el ex presidente Zelaya, ha planteado abiertamente el tema de un posible triunfo de LIBRE en el próximo torneo electoral, al tiempo que ha mostrado dudas y sorpresa ante la manifiesta incapacidad del candidato oficial para mejorar su posición en las encuestas de opinión. *“En tu opinión, preguntó Lobo a Zelaya, ¿cuál es la razón por la que Juan Orlando no logra crecer en las encuestas?”*. *“La única razón visible, contestó el ex presidente, es que Juan Orlando genera temor entre la ciudadanía por su desbocada tendencia a acumular poder y fortuna a como dé lugar...”* JOH, de acuerdo a esta versión, sería un candidato que inspira más recelos que confianza, incluso entre sus propios correligionarios dentro del partido Nacional y, por supuesto, entre los círculos de empresarios que ya se ven afectados o temen serlo a causa de la voracidad por acumular fortuna que muestra sin empacho alguno el joven político nacionalista.

Siguiendo la línea de ese razonamiento, JOH y sus asesores lograron que la Corte Suprema de Justicia, a través de la previamente domesticada Sala de lo Constitucional, emitiera un fallo para permitir la participación en calidad de candidatos en las elecciones generales a todos aquellos que ya participaron y perdieron en las elecciones internas de noviembre del año pasado. Este fallo judicial, a todas luces ilegal y arbitrario, viola las prohibiciones expresas que están contenidas en la Ley Electoral y de las Organizaciones Política (LEOP). Al mismo tiempo, el fallo abre las puertas para que el alcalde capitalino, Ricardo Álvarez, candidato opositor a JOH y perdedor en las elecciones primarias, pueda hoy convertirse -valdría decir *“reconvertirse”*- en candidato (¡otra vez!) en calidad de Designado presidencial en la misma fórmula de su reciente contendor político. Malabares y piruetas jurídicas que acosumbran los políticos tradicionales para retorcer y acomodar la ley a la conveniencia de sus propios y mezquinos intereses.

Junto con estas maniobras que muestran a JOH como un aspirante sin escrúpulos, decidido a todo con tal de ganar las elecciones, deben sumarse las triquiñuelas políticas en torno a la renuncia del Fiscal General y su Fiscal Adjunto, así como la iniciativa pendiente todavía para nombrar a sus sustitutos legales.

El Fiscal General, Luis Rubí (partido Liberal), y el Fiscal General Adjunto, Roy Urtecho (partido Nacional), presentaron su renuncia a los cargos de manera irrevocable el pasado día 25, luego de que la institución que rectaban -el Ministerio Público- fuera intervenida por una Comisión Especial por órdenes del Congreso Nacional. El mal desempeño, el deterioro institucional y la corrupción alarmante que invadía los espacios de las diferentes Fiscalías especiales, demostrados ampliamente en diversos como recientes informes de evaluación llevados a cabo por la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) y un equipo de expertos nombrados por la Embajada de Estados Unidos, hacían más que evidente la necesidad de tomar acciones en relación con la mencionada institución. JOH y sus colaboradores aprovecharon el momento y decidieron intervenir el Ministerio, forzar gradualmente la salida de Rubí y Urtecho para luego, con el discreto apoyo de algunas organizaciones de la sociedad civil, colocar al frente de la institución a sus propios peones, los que deberán garantizar la complicidad suficiente con sus patrocinadores (JOH y cia) en caso de producirse un fraude electoral que, sin duda, será denunciado por los afectados en las instancias correspondientes tanto del Ministerio Público como de los tribunales del Poder Judicial.

De esta forma, el candidato oficialista, temeroso de perder la votación ante el creciente auge de su principal rival, la señora Castro de Zelaya, ha empezado a acomodar las piezas del tablero, a fin de asegurarse los apoyos indispensables para cubrir la maniobra de un posible fraude en las elecciones generales de noviembre próximo. Todas estas acciones contribuyen a modelar la imagen de Hernández como la de un hombre ávido de poder, excesivamente ambicioso y dispuesto a todo con tal de alcanzar los objetivos que se ha propuesto. Es una imagen que, como dice el ex presidente Zelaya, inspira más temor que confianza, no sólo entre sus oponentes sino también entre sus partidarios menos entusiastas. Y, por supuesto, también en las filas de los llamados independientes que, a juzgar por las encuestas más recientes, siguen conformando una franja porcentual muy importante -entre el 30 y el 34%- dentro del electorado nacional.

Pero no sólo eso: la candidatura de JOH también inspira recelo y cautela entre muchos empresarios, que ya han advertido la tendencia suya a acumular y acumular capital por la vía de la maniobra burocrática y la influencia política. Ya no lo perciben como el político tradicional que busca a los empresarios para pedirles "*colaboración económica*". No, ahora se trata de un "*nuevo actor político*" que no se conforma con pedir dinero para la campaña, sino que, además, quiere y exige ser "*socio*" en los negocios y en las actividades empresariales. El "*nuevo rico*" sediento de poder político... y de poder económico.

El día 14, JOH anunció de manera oficial su “*retiro*” de la presidencia del Congreso Nacional para poder dedicarse por entero a la organización y conducción de su campaña electoral. El llamado “*retiro*”, es decir un discreto alejamiento de las funciones ejecutivas en la dirección del órgano legislativo, es un acto más formal que real. Deja al frente del Congreso a una de sus seguidoras más leales, la diputada Lena Gutiérrez, quien se desempeña como una de las Vice presidentas del Poder Legislativo. La señora Gutiérrez, política menor y de escasa experiencia, es hija del empresario Marco Tulio Gutiérrez, un experto tramitador de influencias que, a través del llamado grupo empresarial Colibrí, maneja buena parte de las compras y contrataciones del Estado, resultando afortunados él y sus privilegiados socios, todos allegados al poder en esta Administración.

Ese grupo privilegiado, integrado por empresarios y políticos que controlan los circuitos clave de los fondos públicos, ha surgido como una especie de “*nuevo actor*” en la distribución del poder económico en Honduras, forzando un reacomodo entre los grupos del poder fáctico tradicional. Es el grupo ligado a la llamada COALIANZA, una entidad creada por JOH para redistribuir los grandes proyectos de infraestructura entre sus nuevos socios y amigos. COALIANZA gestiona actualmente unos quince grandes proyectos por valor aproximado de 2,100 millones de dólares. No es casual que los propios empresarios, a través de dos de sus más conocidos dirigentes -Aline Flores, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI)- hayan exigido públicamente una auditoría oficial para descubrir la forma en que opera COALIANZA al momento de otorgar los contratos y escoger a sus socios. Los empresarios tradicionales, de la vieja escuela, se muestran sorprendidos y recelosos ante el empuje inusitado de los “*nuevos socios*”, que surgen de la acumulación burocrática de capital y no de los circuitos de la producción industrial o la actividad comercial “*clásica*”. Es la lucha que comienza, apenas comienza, en torno al reacomodo y realineamiento de las fuerzas económicas y políticas en pugna.

En medio de este laberinto de luchas y controversias en un año electoral, el presidente Lobo ha visto cómo en el Congreso Nacional, urgido ya de nuevas alianzas y condicionamientos dictados por las necesidades electorales, sus iniciativas desde el Poder Ejecutivo ya no tienen el entusiasta respaldo de antes y, con frecuencia, suelen encontrar o bien discreta oposición o abierto rechazo. Eso es exactamente lo que sucedió con la iniciativa de Ley para reconfigurar el cuadro de distribución de las frecuencias radiales y televisivas, en un afán por “*democratizar*” el modelo de asignación de las mismas. Los grandes medios de comunicación vieron en esa iniciativa un ataque a la evidente concentración de frecuencias en las manos de dos o tres grupos económicos, lo que hábilmente presentaron como si fuera un atentado contra la libertad de expresión. El Congreso, conducido por JOH, llegó a

un acuerdo con esos grupos para minimizar el impacto de la Ley propuesta por la Casa Presidencial y, de hecho, sustituirla por un dudoso compromiso de los grandes medios para poner en marcha mecanismos de “*autoregulación*” y “*control voluntario*” sobre los contenidos de la información publicada que pudiera ser dañina para los intereses de la sociedad. De esa forma, JOH prefirió pactar con los dueños de los grandes medios, sin que le importara dejar en el camino a su viejo amigo y aliado, el presidente Lobo, que no acaba de digerir la maniobra y resiente el abandono de los diputados. Cosas de la política en víspera de las elecciones.

### El difícil rumbo de la economía

**T**odos los vaticinios, incluso los menos pesimistas, apuntan en dirección a un deterioro creciente de la situación económica, agravada por la difícil situación fiscal por la que atraviesa el tesoro público. Coinciden en que el déficit, para finales del año, será del 6% o un poco más con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), que este año llegará casi a los 19 mil millones de dólares (se espera que en diciembre de este año, el PIB sea igual a 385,629 millones de lempiras, es decir a 18,997 millones de dólares). Un déficit semejante equivaldría a unos 886 millones de dólares, justo en momentos en que la recaudación fiscal presenta ya un desfase de cumplimiento de unos 98 millones de dólares. Para entender mejor el impacto de estas cifras, es bueno tener en cuenta dos hechos concretos: a) la masa salarial en el gobierno de la República representa el 9% del PIB, y b) los sueldos en el gobierno absorben el 85% de todos los ingresos fiscales.

En estos momentos el desfase entre los ingresos y los gastos del gobierno asciende a una suma equivalente a 10 mil millones de lempiras, es decir casi 500 millones de dólares, o sea lo mismo que acaba de recibir el gobierno por la venta, con elevados intereses, de los “*bonos soberanos*”. Hasta el mes pasado, las recaudaciones realizadas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) sumaban unos 22 mil millones de lempiras (unos 1,084 millones de dólares), pero el gobierno había gastado ya 32 mil millones (1,576 millones de dólares), según las cuentas divulgadas por el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), una Organización no gubernamental que se dedica a dar seguimiento y monitorear la política fiscal del Estado y la ejecución periódica del presupuesto nacional.

Al revisar estas cifras y medir su enorme impacto en la crisis actual, se comprenderá mejor el casi desesperado intento del presidente Lobo por llevar a cabo una revisión a fondo y radical del sistema de exoneraciones fiscales que opera en el país, el más abundante y generoso de toda la región, según opinión calificada de organismos financieros internacionales. De acuerdo a los datos oficiales, divulgados por el propio presidente, el Estado

pierde anualmente unos 23 mil millones de lempiras, equivalentes a unos 1,133 millones de dólares, a causa de las excesivas exoneraciones fiscales. El 96,4% de esas exoneraciones benefician al llamado “sector privado” (léase grandes y medianas empresas industriales, casas importadoras, centros comerciales, establecimientos de “comidas rápidas”, etc.) y sólo el 0,8% van destinadas a favorecer a las iglesias y a las Organizaciones no gubernamentales (ONG).

La crisis fiscal (elevada deuda interna, una deuda flotante todavía muy importante, caída de los ingresos tributarios, cierre de empresas, etc.), el alza en los precios de los combustibles y la brusca y sustancial reducción de los ingresos por exportación de café (a causa de la caída de los precios en el mercado internacional y de los efectos devastadores de la roya en las plantaciones), son tres de los factores que más desalientan y preocupan incluso a los más optimistas observadores de la economía nacional. El Banco Central ha anunciado que está atento a la revisión de los indicadores que habían sido anunciados como posibles o casi seguros para finales del presente año. Entre esos indicadores, el más importante, el que tiene que ver con la tasa de crecimiento, que había sido estimado en un 3,5%, podría bajar a tres o, incluso menos, dos y medio por ciento. En el primer trimestre del año, siempre según los datos del Banco Central, la economía hondureña creció sólo en 0,7%.

No es casual que en estas circunstancias, ante el temor de una brusca o sensible devaluación de la moneda nacional, se mantenga e incremente la tendencia a acumular ahorros en dólares: en este año han crecido en 17%, mientras los ahorros en lempiras sólo lo han hecho en un tres por ciento. Actualmente los ahorros en dólares en todo el sistema bancario nacional constituyen la tercera parte del total, el 33%.

La quiebra de la empresa estatal de telefonía, HONDUTEL, es ya casi un hecho. Los diputados se han mostrado renuentes a aprobar un nuevo presupuesto para esa empresa, escépticos ante el Plan de rescate financiero que han presentado los miembros de la Comisión Interventora (¡otra más!), que el gobierno nombró recientemente. La otra empresa, la de energía eléctrica (ENEE), también va por el mismo camino. El Congreso Nacional estima que se necesitarían unos 493 millones de dólares (diez mil millones de lempiras) para auxiliar a estas dos empresas del Estado y permitirles seguir funcionando “normalmente”.

Las buenas noticias vienen del exterior: las remesas, aunque han disminuido su ritmo de crecimiento, siguen llegando y mantienen estable, al menos por el momento, su aporte sustancial al equilibrio macroeconómico del país; los chinos han aprobado un millonario préstamo por valor de 297 millones

de dólares (el Comercio Industrial Bank) para continuar la construcción del megaproyecto hidroeléctrico Patuca III.

En este mes, el día 12, finalmente el Congreso Nacional aprobó la polémica Ley de las ahora llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, las ZEDEs), más conocidas entre la opinión pública como *“ciudades modelo”*. Habrá que ver qué resultados produce esta nueva Ley en términos de inversiones y desarrollo en zonas especialmente escogidas dentro del territorio nacional. La naturaleza polémica de esta Ley y la controversia jurídica desatada en torno a su naturaleza y funcionamiento, no son buenas señales, amén de que la oposición política ha anunciado ya la derogación de la misma en caso de ganar las elecciones.

# JULIO 2013

---

## La situación política

La creciente tendencia a militarizar cada vez más las políticas de seguridad ha quedado en evidencia con la insólita propuesta del candidato oficial, Juan Orlando Hernández (JOH), de crear una llamada Policía Militar, compuesta por cinco mil soldados reconvertidos a policías de calle. La propuesta dejó de ser una simple oferta electoral con fines propagandísticos, para convertirse en algo más serio y concreto, cuando el candidato presidencial y, hasta el pasado día 14 de junio todavía presidente oficial del Congreso Nacional, llegó al Parlamento para presentar el anteproyecto de Ley y exhortar a sus colegas diputados a aprobar cuanto antes la polémica iniciativa. Aunque casi todos los demás candidatos presidenciales mostraron su desacuerdo con la desatinada idea de JOH, el jefe del Estado Mayor Conjunto, General René Osorio, olvidando su condición legal de *“apolítico y no deliberante”*, no vaciló en expresar su entusiasmo y apoyo a la propuesta del candidato oficial del partido Nacional. Menos mal que, según fuertes rumores, el General Osorio y sus más cercanos colaboradores cumplirán su periodo de servicio el próximo mes de diciembre, fecha en que deberán abandonar sus altos cargos para dar paso a la siguiente promoción de oficiales de las Fuerzas Armadas.

La propuesta de militarizar la Policía va exactamente en la línea contraria a las propuestas de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), que se orientan hacia la desmilitarización de la institución policial. No se debe olvidar que la Policía hondureña, durante un largo periodo de 35 años, entre 1963 y 1998, se mantuvo bajo el control de las Fuerzas Armadas, como una rama más (la cuarta, junto a las Fuerzas del Ejército, la Aérea y la Naval) del instituto castrense. En ese tiempo, la Policía adquirió una cultura militar que, todavía hoy, sigue siendo un fuerte obstáculo para llevar adelante los planes de profesionalización y modernización de la fuerza policial. Ante el déficit de doctrina policial, la Policía hondureña padece un exceso de cultura militar.

La iniciativa de JOH se produce en un momento en que se debate intensamente a nivel parlamentario las reformas en el sistema de seguridad públi-

ca, especialmente en el ámbito de la Policía (depuración de sus filas y renovación y reconversión) y en el del Ministerio Público (reformas a la Ley orgánica y elección del nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto). Dos agendas, que obedecen a diferentes causas e intereses, han entrado en pugna en medio del debate legislativo: a) la agenda jurídico-técnica, que privilegia la reforma de la normativa legal del Ministerio, y b) la agenda político-electoral, que tiene como prioridad la elección de los Fiscales, General y Adjunto, por un periodo de cinco años y en base a simples criterios de lealtad política. O sea que los diputados se afanan por elegir dos Fiscales que sean anuentes y sumisos ante los intereses de las cúpulas partidarias nacionalista y liberal. Las organizaciones de la sociedad civil y la CRSP se oponen a esta “opción” político-electoral.

Ambos temas, la militarización creciente de la seguridad y la politización negativa de la reforma en la Fiscalía, muestran claramente el estilo autoritario y avasallador que caracteriza la práctica política del candidato presidencial del partido de gobierno. No es casual que sus planteamientos conciten el rechazo casi unánime de los demás partidos políticos, posiblemente con la sola excepción del diminuto partido Demócrata Cristiano, aliado incondicional y sumiso del partido Nacional.

JOH está empeñado en ganar las elecciones a toda costa. Y no vacila en decirlo a los cuatro vientos, lo que provoca el temor o el enojo de sus adversarios. Pero, en todo caso, lo cierto es que siempre genera preocupación e incertidumbre en relación con los niveles de transparencia y credibilidad que tendrá el torneo electoral del próximo 24 de noviembre. Su afán desmesurado por acumular poder político y colocar a los suyos en los puestos clave de decisión, como es el caso en la elección del nuevo Fiscal General por un periodo de cinco años, sólo sirven para introducir dudas y recelos con respecto a sus reales intenciones de jugar limpio en el actual proceso electoral. La comunidad internacional, a través de sus constantes Misiones que visitan Honduras, no oculta su preocupación por los riesgos de violencia y crispación que amenazan a la sociedad hondureña en esta competencia electoral.

Frente a la sospechosa certidumbre de JOH a favor de su propio triunfo electoral, se erige otra convicción, no menos firme ni rotunda, que es la de los militantes de base del recién creado partido Libertad y Refundación, según la cual su candidata arrasará en las urnas y se alzarán con el triunfo en forma incuestionable. He aquí dos fuerzas políticas -el PN y LIBRE- igualmente convencidas de su triunfo seguro en las elecciones generales del último domingo de noviembre próximo. Dado que son dos fuerzas con diferencias ideológicas muy marcadas y con una probada capacidad de movilización callejera, sobre todo en el caso de LIBRE, los riesgos de polarización y crispación política son muy reales y preocupantes. La vigilancia cercana del proceso electoral, tanto nacional como internacional, deberá jugar un rol apaciguador y, eventualmente, mediador, muy importante.

---

Las encuestas más recientes, aunque siempre colocan a la candidata de LIBRE -Xiomara Castro- en el primer lugar, muestran un cierto crecimiento en los porcentajes de JOH y de Mauricio Villeda, candidato del opositor partido Liberal (PL). El candidato del partido Anticorrupción (PAC), Salvador Nasralla, también figura ahora entre los cuatro “grandes” candidatos presidenciales con mayores opciones de triunfo. Pero, aunque las opiniones se dividen al momento de señalar al candidato que tiene las mejores posibilidades de ganar, la opinión se vuelve casi unánime al momento de calificar la naturaleza del futuro Congreso Nacional: será uno muy plural y diverso, con representantes de varios partidos políticos y con mayoría débil y balanceada. No será fácil, dicen los observadores más agudos, para el nuevo gobernante ejercer un control político aceptable sobre el Parlamento.

A estas dificultades ya previsible, el nuevo gobierno deberá agregar las que se deriven de la grave crisis fiscal que afecta a los recursos públicos. Recibirá en herencia una deuda interna absolutamente inmanejable, sumada a una deuda externa que supera ya los montos anteriores a la última condonación con que fue favorecida Honduras por la comunidad financiera internacional. La reciente venta de los llamados “bonos soberanos” (500 de los 750 millones de dólares autorizados por el Congreso Nacional) ha servido para paliar un poco la crisis pero, al mismo tiempo, ha permitido aumentar el monto de la deuda total en unos mil millones de dólares tan sólo en este año fiscal.

La ausencia de un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será otra de las difíciles tareas que la actual Administración lobista dejará pendiente en la mesa del nuevo gobernante. Sin esa firma, el acceso a recursos frescos y préstamos blandos en la comunidad internacional se volverá más difícil.

Pensando en estos y otros problemas graves que quedarán pendientes, el gobierno ha impulsado una nueva iniciativa de carácter fiscal que, por novedosa y complicada, se ha vuelto muy controversial y polémica. Se trata de la nueva y recién aprobada “*Ley de promoción del desarrollo y reconversión de la deuda pública*”, un intento audaz de última hora para obtener fondos a costa de la hipoteca de los recursos naturales que serían dados en concesión a inversionistas extranjeros. En pocas palabras, se trata de lo siguiente: el Estado concede a futuro los recursos naturales que están “ociosos”, es decir sin explotación, y, a cambio, los beneficiarios de las concesiones (es decir, los inversionistas extranjeros especialmente) le “adelantan” ciertos pagos que le permitirán al gobierno recibir dinero fresco para hacer frente a sus dificultades actuales y cerrar el periodo gubernamental con una deuda pública reconvertida a mayores plazos y menores intereses. O sea que se trata de vender deuda cara y comprar deuda barata, canjear deuda interna por externa.

La pregunta es: ¿quiénes serán esos atrevidos inversionistas extranjeros que comprarán las concesiones a un gobierno que ya se va y, además, pagarán por adelantado? El presidente Lobo tiene la respuesta y no vacila en decirla a sus amigos más cercanos: serán los chinos continentales que, luego de cuatro visitas recientes durante las cuales han sido recibidos en la propia residencia particular del mandatario, han quedado convencidos de las bondades y mínimos riesgos del negocio. Los chinos, según el razonamiento presidencial, están muy interesados en explotar los recursos mineros del país (están pendientes de aprobación definitiva unas 280 concesiones mineras en todo el territorio nacional) y en desarrollar megaproyectos como el del ferrocarril interoceánico, un viejo sueño de los gobernantes hondureños para unir los océanos Pacífico y Atlántico a través de vías férreas que atraviesen todo el país. Y, de hecho, ya los chinos (la empresa constructora China HarbourEngineering Company) firmaron una Carta de Entendimiento con el gobierno hondureño para iniciar los trabajos del proyectado ferrocarril. De igual manera, otra compañía china, con financiamiento de bancos chinos, está construyendo la gran represa conocida como Patuca III. O sea que los chinos ya están aquí y, por lo visto, tienen planes en grande para instalarse en Honduras. Al menos, eso es lo que piensa y desea el presidente Lobo, justo cuando apenas le quedan seis meses de mandato gubernamental.

Si los planes y los sueños presidenciales se cumplen, el nuevo gobierno podría tener un margen mayor para administrar y gestionar con algún éxito la grave crisis económica y fiscal que recibirá en premio cuando tome posesión el 27 de enero del próximo año.

### **La economía y sus pronósticos**

**L**a incertidumbre que generan todos los procesos electorales, pero especialmente el que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre, no es la mejor condición para favorecer la inversión nacional y extranjera y la correspondiente creación de empleo en el país (según datos del Ministerio del Trabajo, el 53% de los hondureños en edad de trabajar tienen problemas de desempleo y subempleo). Eso ayuda a explicar la relativa desaceleración económica que se vaticina para el segundo semestre de este año en Honduras.

A este factor, hay que agregar otros no menos importantes:

- a) La crisis económica internacional y su impacto en una recuperación lenta y azarosa de la economía de Estados Unidos, el principal socio comercial e inversionista extranjero en Honduras.
- b) La sensible caída en los precios del café, primer producto de exportación hondureño, a lo que hay que agregar la plaga de la roya que ha provocado daños en más de 30 mil manzanas sembradas, afectando la cosecha en más de un millón de quintales, lo que significa una pérdida equivalente a los 530 millones de dólares a causa de ambos factores (precios y roya).
- c) El alza en los precios de los combustibles en el mercado internacional, lo que ha elevado sustancialmente el monto de la llamada “*factura petrolera*” (más de dos mil millones de dólares) que Honduras debe pagar anualmente.
- d) El alarmante clima de inseguridad que prevalece en todo el país, agravado por el aumento de la actividad del crimen organizado y las acciones de extorsión económica llevadas a cabo por las numerosas pandillas que operan en los centros urbanos del país. El accionar de estas pandillas y la ampliación de sus cobros ilegales, los llamados “*impuestos de guerra*”, han obligado al cierre de miles de negocios pequeños y medianos que son fuente importante de ingresos y empleo.
- e) El cierre de negocios, más la ineficiencia y corrupción de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), han provocado una sensible disminución en la recaudación tributaria que, sólo en el primer semestre de este año, asciende a 167 millones de dólares y se espera que a finales del año alcance la suma deficitaria de 342 millones de dólares. Todo esto repercute negativamente y aumenta las dimensiones y agujeros de la crisis fiscal que padece el país.

Todos estos hechos han obligado al Banco Central a reconsiderar las metas y pronósticos contenidos en el Programa de Política Monetaria 2013-2014, modificando los indicadores y reduciendo las expectativas: se esperaba un crecimiento económico que oscilara entre el 3,5 y el 4% del Producto Interno Bruto (PIB, que ascenderá casi a los 19 mil millones de dólares en diciembre del presente año), pero ahora los cálculos son más moderados: el crecimiento esperado estará entre el 2,6 y el 3,2% del PIB. La inflación se mantendrá entre un 5 y un 6%, la devaluación será de un 5% y el déficit fiscal pasará del 4,5% estimado a un poco más del 6 o del 7%.

Se espera que las remesas familiares que envían los emigrantes lleguen este año a los tres mil millones de dólares, lo que sería un buen soporte para asegurar un mínimo equilibrio macroeconómico a finales de la Administración lobista. Las reservas internacionales cubren actualmente tres meses de importaciones, lo que resulta aceptable de acuerdo a los parámetros internacionales de los organismos financieros mundiales.

Así están las perspectivas de la economía hondureña y de las finanzas públicas del actual gobierno.

# AGOSTO 2013

---

## La situación política

**E**l día 24 del presente mes arrancó oficialmente la campaña publicitaria de los diferentes partidos y candidatos que disputarán el triunfo en las elecciones generales del próximo mes de noviembre. Se dice “*oficialmente*” porque, en la práctica, tal campaña había comenzado desde mucho antes, en abierta violación a las disposiciones de la legislación que regula los procesos electorales y las características y plazos de las campañas publicitarias. El candidato del partido Nacional, Juan Orlando Hernández (JOH), inició su campaña publicitaria desde mucho antes, publicando páginas enteras en los principales diarios del país, proyectando spots publicitarios en la televisión y anuncios en las radioemisoras de todo el país. Las vallas publicitarias aparecen por doquier, tanto en las principales ciudades como en casi todas las carreteras del país. El derroche es evidente y anuncia desde ya el costo multimillonario que tendrá la actual campaña electoral.

Coincidiendo con el inicio de esta batalla por ganar las mentes y los corazones de los electores, los candidatos presidenciales firmaron un Pacto en el que se comprometen a comportarse con educación y respeto durante la campaña, observar las normas de la transparencia electoral y respetar los resultados finales. El Pacto en mención fue patrocinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y apoyado por varias organizaciones de la sociedad civil, grupos de la empresa privada, iglesias evangélicas y católica, etc. Pero, apenas lo habían firmado y ya varios candidatos lo estaban incumpliendo. Anuncios con golpes bajos contra los otros candidatos, publicidad tendenciosa y degradante, insultos personales y ataques calumniosos en contra de la vida personal de algunos candidatos y sus familias, han sido publicados en los medios de comunicación o puestos a circular en las múltiples redes sociales del universo de la Internet. Todo esto indica que la actual campaña electoral irá gradualmente adquiriendo cada vez más crispación y hostilidad, lo que debe verse como un signo preocupante de cara a la tranquilidad y desarrollo pacífico de todo el proceso que conduce a las elecciones generales del último domingo del mes de noviembre.

En una reciente reunión patrocinada por la Organización de Estados Americanos (OEA) con analistas políticos locales y algunos observadores internacionales, se logró identificar un conjunto de factores de riesgo que amenazan la paz y la tranquilidad del proceso electoral hondureño. Elementos tales como el exceso de triunfalismo mostrado por varios candidatos presidenciales, basado en una certidumbre exagerada en su propio triunfo, así como una evidente tendencia a “*ideologizar*” en demasía el debate político, fueron considerados por los participantes como indicios importantes que apuntan a la generación de un clima de crispación y confrontación que pudiera resultar peligroso. Asociado a estos hechos, se insistió en la posibilidad de que los resultados arrojen un margen muy estrecho entre el ganador y el principal perdedor, lo que abriría más las puertas para las acusaciones de fraude y la resistencia de los derrotados a aceptar el resultado final de las elecciones. Aunque estas conclusiones se mueven en el mundo de las hipótesis, es bueno tomarlas en cuenta y considerarlas al momento de analizar el curso del proceso electoral y sus posibles derivaciones.

A propósito del triunfalismo reinante, las más recientes encuestas, tanto comerciales como privadas, revelan la ya conocida tendencia que coloca a Xiomara Castro, la candidata presidencial de LIBRE, en el primer lugar. Las diferencias varían, según la muestra y calidad de cada encuesta, pero la tendencia se mantiene con un margen favorable de entre 4 y 10 puntos por encima de su seguidor más cercano, el candidato oficial del partido gobernante, JOH. En algunos casos el segundo lugar lo ocupa el candidato del partido Anticorrupción (PAC), Salvador Nasralla. Mauricio Villeda, candidato del partido Liberal, casi siempre aparece en tercero o cuarto lugar, pero en las últimas semanas ha mostrado una tendencia sostenida a un leve crecimiento.

De acuerdo a las conclusiones que se derivan de la encuesta ordenada por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la tendencia más preferible debería ser la de fortalecer la candidatura de Villeda para enfrentarla directamente a la de Xiomara. Los autores de la encuesta llegaron a esta conclusión ante la evidencia de la poca capacidad de JOH para crecer y alcanzar a la candidata de LIBRE. Si esto es así, habría que aceptar la existencia de una fuerte corriente de opinión que privilegia a Villeda como el “*candidato de la derecha y del centro derecha*”, con capacidad real, dada su personalidad (hombre de familia, honesto, profundamente religioso, etc.), para hacer frente a la avalancha que anuncian los dirigentes de LIBRE y que mantiene a Xiomara encabezando las simpatías nacionales.

En cambio, la imagen de JOH, bastante deteriorada por escándalos de corrupción y su innegable ambición desmedida por acumular poder y controlar todas las instancias del Estado, no parece ser la más idónea para hacer frente a una Xiomara en pleno crecimiento y con reales posibilidades de

---

triunfo. Para cerrar el círculo, las últimas maniobras políticas de JOH relacionadas con la creación de la llamada Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la forzada y cuestionada elección de los Fiscales, General y Adjunto, del Ministerio Público, sólo han servido para reforzar en el imaginario colectivo esa imagen suya de hombre ambicioso, arbitrario y arrogante, capaz de torcer cualquier ley y repartir sobornos por doquier para salirse con la suya.

La creación de la Policía Militar -unos cinco mil hombres facilitados por las Fuerzas Armadas y adscritos a ellas, al Ejército, especialmente-, aprobada por el Congreso Nacional a instancias y presiones de JOH en la noche del día 22, ha servido, entre otras cosas, para mostrar en qué forma los intereses personales de JOH, en este caso sus aspiraciones político electorales, se anteponen a los intereses generales del país y a los del propio Poder Ejecutivo. Mientras el Ministro de seguridad, Arturo Corrales, promueve y realiza la reconversión de la actual Policía en una de carácter comunitario, el candidato del gobierno promueve su propia versión "*militarizada*" de la Policía. Dos agendas confrontadas entre sí, revelando la ausencia de una política única en materia de seguridad, el principal problema que aflige y angustia a la población entera, según todas las encuestas de opinión de los últimos meses. La tendencia a militarizar las políticas de seguridad se ha convertido en la única propuesta política de JOH en el campo tan sensible y delicado de la seguridad pública.

Con el caso de la selección y elección por el Congreso Nacional de los dos Fiscales clave del Ministerio Público, el General y el Adjunto, una vez más los intereses político electorales de JOH terminaron imponiéndose por encima de los intereses de la institucionalidad y el Buen Gobierno. Para poder reunir las dos terceras partes de los votos parlamentarios (86 de los 128 existentes) que la Constitución señala como requisito para elegir a los dos Fiscales, los partidarios de JOH, dirigidos personalmente por él mismo, acudieron a todas las maniobras habidas y por haber, incluyendo, claro está, generosos y tentadores favores a por lo menos diez diputados de la oposición, nueve de ellos pertenecientes al PL.

La compra de votos, sumada a un proceso de selección de candidatos viciado desde el inicio y profundamente deslegitimado (tres de los siete miembros de la Junta encargada de proponer a los candidatos a ocupar los dos cargos, abandonaron las sesiones y renunciaron a participar en la farsa), convirtieron la elección en un espectáculo condenable y rechazado por la mayoría de la opinión pública. Pero JOH logró salirse, una vez más, con la suya: nombrar a dos fiscales a su propia medida, programados desde ya para favorecerle en caso de denuncias en contra suya por un posible fraude electoral. De esta forma, sin que le importara mucho el debilitamiento institucional de la Fiscalía General y el descrédito que rodea al nombramiento

de los dos nuevos e importantes funcionarios (Oscar Chinchilla, del PN, y Rigoberto Cuéllar, del PL), JOH logró su propósito de elegir por cinco años a dos fiscales muy cuestionados, y asegurarse así la protección de sus propias espaldas ante eventuales denuncias o juicios por corrupción en el inmediato futuro. Este es el estilo del candidato presidencial del PN, un estilo que suscita temor y rechazo incluso entre muchos de sus propios colegas de partido y, por supuesto, en los círculos empresariales y grupos de poder existentes en el país. Muchos empresarios han expresado en privado sus temores y califican a JOH como un hombre dispuesto a ser un socio económico de los grupos de poder más que un subordinado político.

En este mes de agosto se cumplieron los primeros cien días de la gestión del Ministro de seguridad y Comisionado presidencial en defensa y seguridad, Arturo Corrales. La fecha fue utilizada por el alto funcionario para presentar ante el Congreso Nacional y el Consejo de Defensa y seguridad un informe de los primeros cien días de su gestión. En este informe, Corrales puso al desnudo las principales debilidades del órgano policial y la escandalosa podredumbre y corrupción que ha minado las entrañas mismas de la Policía Nacional y la ha convertido en lo que hoy es: un órgano poco calificado para enfrentar los grandes desafíos del crimen organizado y la delincuencia común. En su detallada radiografía de la institución policial, el Ministro describió, con la ayuda de cifras precisas, fruto de un reciente censo de personal llevado a cabo en la Policía, el caos encontrado: más de dos mil policías *"fantasmas"*, es decir que cobran en planilla pero que no existen; 165 vehículos, entre carros y motocicletas, *"desaparecidos"*; más de mil policías asignados a cuidar haciendas y residencias particulares, generalmente propiedad de altos jefes policiales o de sus socios; más de mil armas de diverso calibre perdidas; unos 300 policías que sí existen pero que no cobran salarios, es decir sólo utilizan la placa, el uniforme y el arma oficiales para cometer sus fechorías, etc. La lista de irregularidades es larga y el Ministro fue exhaustivo en su exposición.

La nueva política en la Policía, dijo Corrales, es la de convertirla en policía comunitaria, utilizando para ello el método del Plan Cuadrante que han diseñado los policías Carabineros de Chile. Con la ayuda del General Aquiles Blu, miembro chileno de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), y un equipo de expertos de Carabineros, el Ministro ha empezado a diseñar y poner en marcha los distritos policiales en base a la doctrina de la policía comunitaria. Es un cambio sustancial y seguramente muy positivo, pero encuentra demasiada resistencia entre los jefes policiales que pertenecen a lo que Corrales llama *"la vieja escuela, que privilegia lo estrictamente operativo y logístico, por encima de la doctrina y la planificación"*. El Ministro tiene don de mando y voluntad suficiente para llevar adelante sus planes de transformación o reconversión policial, pero no se debe subestimar la resistencia al cambio que representan los principales mandos policiales, tanto

antiguos como actuales, con el Comisionado General Juan Carlos “El tigre” Bonilla a la cabeza.

La lucha por la reforma en el sistema de seguridad debe enfrentar, además, la fuerte tendencia a la militarización de las políticas de seguridad que encuentran eco favorable en el Congreso Nacional. Esa tendencia conlleva, entre otras cosas, el riesgo de relanzar el protagonismo militar en la sociedad hondureña y desequilibrar las relaciones de poder en el sistema político nacional. No es casual, entonces, que este tema -el de la policía militar versus policía comunitaria- se haya convertido ya en un tema de campaña, colocado en el centro del debate político entre el candidato JOH y la candidata Xiomara Castro.

# SEPTIEMBRE

## 2013

---

### La situación política

Cuando ya solo faltan menos de dos meses para que se lleven a cabo las elecciones generales que permitirán escoger a las nuevas autoridades del Estado hondureño para el periodo 2014-2018, los electores convocados por el Tribunal Supremo Electoral (5,355.112 votantes de acuerdo al más reciente padrón electoral, avalado por el Registro Nacional de las Personas-RNP) se mantienen sometidos a un constante y cada vez más intenso bombardeo publicitario por parte de los nueve partidos políticos y ocho candidatos presidenciales, además de los miles de aspirantes a convertirse en diputados y alcaldes, que disputarán el poder político el domingo 24 de noviembre.

A medida que se acerca el momento crucial, el debate político adquiere cada vez más intensidad y genera inevitable crispación y zozobra en el ambiente político nacional. Poco a poco, la confrontación va definiendo sus perfiles con mayor precisión y claridad, dejando en el escenario a los principales contendientes y sus respectivas propuestas de gobierno. Aunque los partidos participantes son nueve y ocho sus candidatos presidenciales, lo cierto es que la batalla principal se libraré entre cuatro grandes contendientes: el partido Nacional (PN), el partido Libertad y Refundación (LIBRE), el partido Liberal (PL) y el partido Anticorrupción (PAC), cada uno de ellos con su respectivo candidato presidencial y sus propias planillas de diputados y alcaldes.

Poco a poco, la confrontación electoral se va reduciendo a dos posiciones clave: las ideas del candidato nacionalista Juan Orlando Hernández (JOH) y las propuestas políticas de la candidata de LIBRE, Xiomara Castro. Los planteamientos del candidato liberal, Mauricio Villeda, no tienen la originalidad suficiente como para influir en la esencia del debate y se disipan en fórmulas tradicionales y trilladas de la oferta electoral. La propuesta de Salvador Nasralla, candidato del PAC, no pasa de ser una condena contra todo lo que huele a corrupción, sin trascender lo suficiente como para imponer un sello propio en los otros temas de la agenda nacional.

De esta forma, las posiciones encontradas giran en torno al tema de la *“refundación del Estado por la vía de una Asamblea Nacional Constituyente”* (posición defendida por LIBRE y Xiomara) o la *“simple remodelación del Estado por la vía de reformas constitucionales puntuales y precisas”* (posición de JOH y del PN). En la práctica, estas divergencias se traducen en posturas ideológicas rígidas que confrontan a los defensores del sistema actual, es decir los partidarios del status quo y del *“más de los mismo”*, por una parte, frente a los sectores *“anti sistema”*, que demandan cambios estructurales profundos y redefinición básica de las relaciones de poder en la sociedad hondureña, por la otra. Es una confrontación de carácter ideológico que estimula la polarización y convierte la campaña electoral en un enfrentamiento cada vez más feroz y agresivo.

Basta ver el contenido de ciertos mensajes publicitarios para comprobar la agresividad verbal que va adquiriendo la campaña electoral. Y no sólo eso: hay que ver la cantidad de avisos y spots televisivos, junto a los afiches y vallas de propaganda, que aparecen por todos lados y que tienen empapeladas y saturadas las calles y avenidas de los principales centros urbanos del país, así como los diferentes espacios de los medios de comunicación. Todo ello supone una campaña electoral tan encarnizada como costosa y millonaria. Y, por lo mismo, la pregunta que todos -o casi todos- se hacen es la misma: ¿de dónde proceden los millonarios fondos que están financiando estas campañas? ¿Quiénes son los principales contribuyentes privados que aportan las millonarias sumas y alimentan la ilimitada capacidad de algunos candidatos para promocionar sus propias ofertas electorales?

No es casual que la embajadora de los Estados Unidos, Lisa Kubiske, haya declarado en días recientes que *“así como los bancos están obligados a conocer a sus clientes, los partidos políticos (y los candidatos) están obligados a conocer a sus donantes”*. La advertencia de la diplomática estadounidense no fue hecha en el vacío: se produjo en el marco de una súbita y masiva operación antinarcoóticos, que dio al traste con bienes millonarios y numerosas cuentas bancarias del grupo económico dirigido por la familia Rivera Maradiaga, más conocidos por el apodo de *“la banda de los Cachiros”*, considerada por el gobierno norteamericano como *“la banda más grande y mejor organizada del narcotráfico en Honduras... que controla el 90% de las pistas clandestinas y tiene ya entre 10 y 15 años de estar operando en el país”*, como un enlace clave del Cartel de Sinaloa, México, que dirige el tristemente célebre y prófugo de la justicia mejicana Alfonso Guzmán Loera, más conocido como *“el Chapo Guzmán”*. La incautación y *“aseguramiento”* de los bienes y activos de Los Cachiros, fue una exitosa operación combinada por parte de los Estados Unidos (la Agencia antidrogas-DEA) y unos 200 efectivos de la Policía Nacional, previamente certificados y avalados por los propios norteamericanos. El valor de las propiedades y cuentas bancarias incautadas al grupo narcotraficante se calcula que osci-

la entre 600 y 800 millones de dólares, lo que, en comparación con los parámetros de la economía local, equivale a una suma impresionante con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) del país, aproximadamente el 2,5 o el 4%, la mitad del déficit fiscal que enfrenta el gobierno actual.

La operación Neptuno, que así se llamó la operación montada contra Los Cachiros, ha generado un verdadero Estado de pánico entre muchos políticos, banqueros y empresarios locales, algunos de los cuales son socios de las empresas que lavan los dineros sucios del crimen organizado en el país. Y, además, son notorios contribuyentes a las campañas electorales de distintos candidatos, tanto presidenciales como diputadiles y edilicios a nivel nacional y local. Todos han quedado impactados y casi paralizados ante la súbita acción de los norteamericanos, con el apoyo de la Policía Nacional, en contra de Los Cachiros, un grupo delinencial considerado “*intocable*” y casi “*respetable*” en los ámbitos políticos y empresariales del país. La conmoción es mayor cuando la misma embajada de Estados Unidos ha anunciado en declaraciones informales a la prensa que “*viene una segunda oleada*”, junto a la ya anunciada solicitud de extradición que afectaría al menos a una docena de personajes locales.

Pero las extradiciones, no obstante las fuertes presiones norteamericanas para lograrlas, no tienen muchas perspectivas favorables en estos momentos. Hay razones suficientes para saber que el gobierno actual no está dispuesto a autorizar ninguna extradición en los escasos meses que aún le quedan. Eso explicaría las vueltas y revueltas, las idas y venidas, de los decretos y resoluciones legislativas y judiciales en torno al tema de la extradición, que se producen entre el Poder Legislativo, el Judicial y el Ministerio Público. Todos ellos, como suele decirse, se “*tiran la pelota*” los unos a los otros, para no comprometerse ni tomar decisiones que habiliten el trámite oficial de la extradición de los delincuentes que los norteamericanos reclaman. Cansados de esperar, parece que los Estados Unidos habrían tomado la decisión de “*actuar ya, de hecho si es necesario*” pero no seguir confiados en que el sistema judicial hondureño va a comportarse de acuerdo a lo que la ley nacional e internacional establece.

El tema de las extradiciones se ha convertido en un asunto extremadamente sensible y esencial en el juego político hondureño. Los dineros del crimen organizado en la campaña electoral son ya un factor clave para entender la posición de los políticos locales ante el peligroso tema de la extradición. Si este gobierno, como en efecto parece que así será, no toma ninguna iniciativa importante en el asunto, habrá que ver cuál será la actitud de los vencedores en las elecciones de noviembre, para medir así los niveles del compromiso político con el poder criminal y, particularmente, la naturaleza de las relaciones entre el Estado hondureño y los Estados Unidos a partir del año 2014.

De tal manera que, la Operación Neptuno ya mencionada y el auge final de la campaña electoral, junto a su agudizamiento y crispación, vinieron a poner otra vez en la agenda nacional el acuciante tema del creciente poder del crimen organizado en la sociedad hondureña.

Pero, a pesar de la gravedad del asunto, el gobierno ya falleciente del presidente “Pepe” Lobo parece no darse cuenta. Se comporta con la característica inercia de siempre, sin privilegiar los temas más importantes de la agenda, dedicando sus ya débiles energías a asuntos menores y a promociones proselitistas para favorecer a JOH, el candidato oficial.

En las últimas semanas, el Poder Ejecutivo ha concentrado buena parte de su gasto publicitario en favorecer la propaganda oficial del candidato nacionalista, divulgando notas y mensajes para advertir a los electores sobre el peligro del “*retorno al desorden, al caos y la anarquía*” que, supuestamente, representarían los candidatos de LIBRE una vez convertidos en gobierno. Es curioso: aunque en público el presidente Lobo condena al gobierno inconcluso de Zelaya y reprocha los desmanes y abusos cometidos por el gobierno de facto de Roberto Micheletti, en privado, y con más frecuencia de la que la gente podría suponer, habla con Zelaya e indaga en torno a si habría o no posibles represalias contra sus colaboradores en el caso -muy real y factible, dice- de que Xiomara se convierta en presidenta de la República.

Así están las cosas en Honduras, cuando ya sólo faltan menos de 50 días para llegar al último domingo de noviembre, fecha en la que se enfrentarán, al final de cuentas, dos visiones de la historia reciente de este país: la que organizó, promovió, legitimó y financió el golpe de Estado del 28 de junio del año 2009, por un lado, y, por el otro, la que se opuso, marchó por las calles y protestó de mil formas durante meses interminables y años duros, sufriendo violaciones a sus derechos, organizando bases, construyendo una nueva opción política en el imaginario colectivo de Honduras. Esa es la realidad actual y ese es el desafío en este torneo electoral.

### **La situación fiscal y económica**

**E**l país está quebrado. Las finanzas públicas no dan para más. El gobierno ni siquiera tiene dinero suficiente para pagar los sueldos de fin de año y, mucho menos, los aguinaldos navideños, es decir el llamado décimotercer mes. La situación es grave, casi diríamos gravísima. Pero, al presidente, que no parece darse cuenta, no le importa. Pareciera que está dispuesto a sucumbir ante la dinámica de la catástrofe fiscal que piensa dejarle al próximo gobernante, sea quien sea, de la ideología que sea. No le interesa y, por lo tanto, el problema es mayor. La crisis fiscal,

junto al problema tan grave de la seguridad ciudadana, serán los dos asuntos que el nuevo gobierno, dirigido por hombre o mujer, deberá enfrentar con urgencia inusitada. El país está sumido -quién lo duda- en una profunda crisis de gobernabilidad, que sólo puede ser superada –quizás- después de las elecciones.

La deuda externa se ha vuelto inmanejable para las condiciones actuales de la economía real. Según las propias cifras de la Secretaría de Finanzas, expresadas por su mismo jefe, el Ministro Wilfredo Cerrato, la deuda externa total de Honduras ya alcanzó la cifra, para diciembre de este año, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central, de 7,857 millones de dólares, distribuidos de la siguiente manera: 3,057 millones de deuda interna y 4,800 de deuda externa. Esto quiere decir, en pocas palabras, que el peso de la deuda total del Estado representa, ni más ni menos, que entre el 42 y el 43% del PIB, lo que simplemente convierte este porcentaje en “inmanejable” para los estándares internacionales. El Estado hondureño no está ya en condiciones de manejar, en circunstancias viables y aceptables, el control de su propia política económica.

Esto es muy grave, pero todavía no se ha aceptado al interior de la “clase política” local. Se considera un “tema tabú”, algo que debe seguir siendo un secreto muy bien guardado, para bien de la “buena imagen” del país en el extranjero y de las posibles nuevas y utópicas inversiones provenientes del exterior.

El problema es que esas inversiones no acaban de llegar. Al revés, se va la importante y, casi decisiva, empresa brasileña Embroeder, porque el gobierno no cumple sus compromisos y no existen reglas fiables de cumplimiento de los contratos. Esa empresa, que debería haber construido las represas de Llanitos y Jicatuyo en la zona norte/occidental del país, se larga de Honduras por la desidia oficial y por la oposición de grupos de empresarios locales que quieren hacerse con el negocio y la “movida” criolla en torno a las nuevas licencias de las “empresas de energía no renovable” en el país.

La corrupción, como siempre. El espectáculo brindado por las supuestas autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción y su imaginario debate ante temas tan importantes y sustanciales, como es el de la corrupción en el seno del aparato gubernamental, a qué condujo: 1) resultados mediáticos, medidos por el escándalo y la ocasión; y 2) resultados directos, medidos por índices y cifras. Así son las cosas. Para bien o para mal.

## Y ahora qué?

**E**sa es la pregunta, la que se hacen todos los observadores de la realidad local. La respuesta no es fácil. Dependerá, sin duda, de los resultados que produzcan las elecciones. Si gana JOH, tendremos más de lo mismo, posiblemente con algunas modificaciones en cuanto a incrementar los procesos de privatización de las empresas estatales y a militarizar las acciones de las políticas de seguridad del Estado. En cambio, si gana Xiomara, habrá una nueva Constituyente, es decir la posibilidad de un nuevo Pacto Social, un acuerdo negociado entre todos los sectores sociales, una nueva Constitución de la República. Se dice fácil, pero, sin duda, será muy complicado y difícil.

El dilema planteado en estas elecciones es, por primera vez en todo el proceso de la llamada transición política hondureña (33 años), entre la izquierda y la derecha: una derecha moderada, pero con un discurso hostil y ultraconservador, y una izquierda moderada, estimulada con frecuencia por tendencias radicales y utópicas. ¿Cuál de las dos tendencias terminará imponiéndose y marcando el rumbo de Honduras en los próximos años? No lo sabemos todavía. Lo sabremos en los próximos meses.

# OCTUBRE 2013

---

## La situación política

Cuando ya ha empezado el recuento regresivo para que llegue el día de las elecciones, el próximo domingo 24 de noviembre, los ánimos siguen caldeados y los rumores y especulaciones de todo tipo van y vienen. El rumor más persistente es el que hace alusión a un posible fraude en el conteo electoral, maniobra que estaría siendo preparada por el partido de gobierno para asegurarse la victoria de su candidato.

A última hora, el propio presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), el reconocido e influyente empresario Adolfo Facussé, se hizo eco de uno de los rumores más persistentes de los últimos días y denunció que una compañía de tecnología computacional, LATINCOM, estaría siendo contratada por las Fuerzas Armadas para montar una red paralela de “escáneres” que podría introducirse en la base de datos oficial y distorsionar el flujo de cifras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha prometido para el mismo día de las elecciones. Esta compañía no es una desconocida en Honduras: en el reciente pasado firmó un convenio de asociación por diez millones de dólares con la empresa telefónica HONDUTEL, que luego resultó ser un fraude. El gerente de la compañía estatal en ese momento era el General ya retirado Romeo Vásquez, el mismo que ejecutó el golpe de Estado de junio de 2009 y que hoy aparece como flamante candidato presidencial de un partido recién creado bajo el nombre de Alianza Patriótica Hondureña. Vásquez aparece como principal sospechoso de ser el intermediario entre los militares y LATINCOM. El contrato de servicios tendría un valor de tres millones de dólares.

La denuncia de Facussé ha servido para revolver más los ánimos ya de por sí crispados y tensos. Aunque todavía los militares no han desmentido la grave acusación, las sospechas recaen sobre el Ministro de defensa, Marlon Pascua, un hombre muy cercano al presidente Lobo. Los magistrados del TSE se han llamado a silencio, como si se tratara de un simple rumor preelectoral.

El escándalo se enmarca dentro del clima de sospecha y dudas que rodea al TSE, un organismo integrado por representantes de sólo tres partidos políticos -los dos tradicionales, el Liberal y el Nacional, junto al llamado “*partido bisagra*”, la Democracia Cristiana-, mientras los seis restantes que participan en la contienda electoral están marginados y fuera del principal organismo responsable de dirigir y conducir todo el proceso eleccionario. Se cuestiona el profesionalismo e imparcialidad de los magistrados del TSE, además de poner en duda su lealtad a la legislación electoral. El TSE, lamentablemente, no goza de la confianza suficiente como para introducir elementos de credibilidad en el proceso electoral en marcha.

Pero, además de las dudas y de las denuncias, a veces muy alarmistas, sobre la preparación de un fraude “*técnico*” que alteraría los resultados digitalmente al momento de llevarse a cabo la transmisión de los datos desde las mesas electorales receptoras (MER) a la oficina central del TSE, lo cierto es que el debate político ha derivado de manera casi inevitable hacia el tema de la seguridad, dividiendo las opiniones en dos bandos diametralmente opuestos:

- a) Los ocho partidos que firmaron el pasado día 17 el Pacto por la Seguridad promovido por la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), que se decanta por una policía estrictamente civil y de carácter comunitario, con amplios espacios para la participación ciudadana y previamente depurada y reformada, por un lado, y
- b) El partido Nacional, cuyo candidato Juan Orlando Hernández (JOH) se negó a firmar el Pacto y no vacila en promover una Policía Militar de Orden Público (PMOP) y una política de seguridad altamente militarizada.

Las dos posiciones resultan ya irreconciliables. El candidato JOH ha ido más allá en el debate y ha planteado las cosas como si se tratara de defender a los militares frente a lo que él considera “*ataques ideológicos*” de los partidarios de Libertad y Refundación (LIBRE). Al final, la controversia deriva hacia una real contradicción entre los que apoyan la participación de los militares en los asuntos característicos de la ciudadanía civil y aquéllos que se oponen al golpe de Estado y, por lo mismo, rechazan la participación de los militares en los asuntos políticos. Lo que en realidad está en juego es el resurgimiento del viejo protagonismo castrense.

El presidente Lobo respalda cada vez con más urgencia la campaña electoral de JOH. Ante un posible triunfo de LIBRE, los nacionalistas de la vieja guardia cierran filas en torno al nuevo delfín de la política “*nacionalista*”. Bajo el pretexto de “*publicidad institucional*”, los voceros del gobierno están gastando sumas millonarias en divulgar y alabar los logros, reales o supuestos, del llamado “*Gobierno de la unidad nacional*”. Todos los días aparecen

dos o más páginas en cada uno de los cuatro diarios de circulación nacional, además de abundantes “spots” publicitarios y “cuñas” radiales en la televisión y las radioemisoras del país, mostrando la “obra” gubernamental y atacando, valga decir descalificando, la gestión del gobierno del derrocado presidente Manuel Zelaya. Identifican al periodo de Zelaya como uno de anarquía y caos, de desorden y confusión, al que nos quieren conducir de nuevo, por “el camino malo”, tal como lo llaman los publicistas de JOH. Ese camino sería el que señala la ruta de LIBRE.

Pero no sólo los políticos están enfrascados en las polémicas. También los religiosos, sacerdotes católicos y pastores protestantes se han sumado a la pelea. Uno de esos pastores llegó a afirmar que, en una aparición divina, Dios le advirtió que había que votar por alguno de los dos candidatos tradicionales (Mauricio Villeda, liberal, o Juan Orlando Hernández, nacionalista) para evitar la caída en el túnel, al final del cual se divisaba la bandera rojinegra de LIBRE. Más claro y contundente no pudo ser. La divulgación de la carta en que el mencionado pastor relataba su encuentro con Dios, reavivó el debate sobre las relaciones que deben prevalecer entre la religión y la política dentro del marco de un Estado laico, tal como se define por norma constitucional el Estado hondureño.

Pero al margen de estos episodios anecdóticos que con frecuencia se observan en el transcurso de la campaña electoral, lo cierto es que en el país predomina un cierto clima de ansiedad y relativo temor por lo que pueda suceder el día 24 de noviembre. Preocupa, sobre todo, la posibilidad de que la diferencia entre el ganador y su segundo contrincante más importante sea una diferencia tan mínima que genere el rechazo del perdedor y su negativa a aceptar la victoria del triunfador. Una circunstancia semejante, en el ambiente de triunfalismo que rodea al menos a cuatro de los candidatos en pugna, puede resultar muy peligrosa y volátil.

Al clima de tensión ha contribuido, a su manera, la aparición en las calles de la llamada Policía Militar del Orden Público, a la que se asocia con el candidato oficialista. En efecto, JOH ha sido el principal promotor de tal Policía y su defensor más entusiasta. De hecho, ha llegado hasta el extremo de pretender reformar la Constitución para darle un rango constitucional a la PMOP y así, de esa manera, “blindarla” dice en contra de los ataques y rechazo de los partidarios ideológicos de LIBRE. JOH tiene una tendencia muy marcada a “ideologizar” su discurso electoral y dirigirlo principalmente en contra de los partidarios de LIBRE, a quienes, por lo visto, considera sus verdaderos adversarios a vencer en el torneo electoral.

Para contrarrestar, al menos en parte, las dudas y sospechas sobre posibles enfrentamientos violentos en caso de un intento de fraude, ha llegado al país una verdadera avalancha de observadores internacionales de las más diversas nacionalidades y organizaciones (Organización de Estados Ameri-

canos, Unión Europea, Centro Carter, Foro de Sao Paulo, UNASUR, Estados Unidos, etc.) que habrán de vigilar el proceso electoral antes, durante y después del día de las elecciones. Al parecer, también en el exterior hay dudas y quizás por eso el propio presidente Lobo se encargó de denunciar la existencia de una campaña internacional en contra de las elecciones y en protesta por violaciones a los derechos humanos en el territorio hondureño. Culpó de esa campaña al Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), una reconocida ONG de derechos humanos que dirige en el país la destacada activista social Berta Oliva.

La supuesta “*campaña internacional*” cobró más fuerza cuando dos reconocidos senadores de los Estados Unidos enviaron una carta de protesta al Secretario de Estado John Kerry por la política de Washington hacia Honduras. Se quejaron de graves violaciones a los derechos humanos y condenaron la creación de la PMOP, a la que llamaron “*fuerza híbrida*” que confunde las funciones militares con las policiales. Esta carta de los dos senadores, se suma a otra carta reciente que ya había enviado un numeroso grupo de congresistas estadounidenses al Departamento de Estado por los mismos motivos.

Las quejas en Washington han tenido algún eco en la embajada local de los Estados Unidos. La embajadora Lisa Kubiske, cada vez que puede, ofrece declaraciones de prensa insistiendo en la transparencia del proceso y en la necesidad de identificar el origen de los dineros que están financiando una millonaria campaña electoral en uno de los países más pobres de la región. La diplomática aprovechó la reciente ofensiva policial en contra de la banda de narcotraficantes conocidos como “*Los Cachiros*”, para advertir a políticos y banqueros que así como los segundos deben conocer a sus clientes, los primeros deben conocer bien a sus donantes. Este mensaje fue interpretado como una señal de que Washington está preocupado, tanto por los altos niveles de lavado de activos en los bancos locales como por la infiltración del dinero sucio del crimen organizado en la campaña electoral de los diferentes partidos políticos.

La preocupación no es vana. Hay sobradas razones para suponer que en las llamadas “*regiones calientes*”, es decir aquellas partes del territorio en donde las redes del crimen organizado se han hecho fuertes y tienen mayor presencia, como sucede en los departamentos de Colón, Atlántida, Olancho, Copán, etc., además de los principales centros urbanos del país (Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Tocoa, Choluteca, Santa Rosa de Copán, etc.), el dinero del narcotráfico y del crimen organizado en general circula abiertamente y financia más de alguna campaña electoral de aspirantes concretos a convertirse en diputados o alcaldes. La abundante, a veces exagerada, proliferación de anuncios y vallas publicitarias en estas regiones, es una prueba adicional de la profusa circulación del dinero irregular en la campaña electoral del año 2013.

No es casual que apenas cuatro partidos políticos hayan atendido el llamado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para que abrieran portales electrónicos en el servidor del Instituto y ofrecieran la información sobre sus fuentes de financiación. Cuatro partidos han cumplido y lo han hecho a medias: apenas han proporcionado un 30% de la información solicitada y esperada por el IAIP.

El TSE se muestra incapaz y sin fuerzas ni la legitimidad necesarias para aplicar la ley con rigor a los políticos que incumplen las obligaciones contenidas en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP), en lo relacionado con fuentes de financiación, transparencia y rendición de cuentas.

Aunque el día 24 fue creada la Unidad Especial contra delitos electorales, como una dependencia nueva al interior del Ministerio Público, la población no confía mucho en la eficacia de tal organismo. En primer lugar, por la debilidad institucional que sufre estructuralmente la Fiscalía General de la Nación y, en segundo lugar, por la escasa legitimidad que rodea a los nuevos fiscales, General y Adjunto, debido a su accidentado e irregular proceso de selección y elección en el Congreso Nacional. Sin embargo, habría que concederle el beneficio de la duda y esperar que pueda hacer algo y aplicar la ley a los políticos infractores.

El propio día 24, de acuerdo a la LEOP, quedó prohibida la divulgación de encuestas y la publicación de todo tipo de resultados obtenidos a base de sondeos. Se acabó así lo que los medios de comunicación dieron en llamar *“la guerra de las encuestas”*, una controversia generada por la proliferación de *“firmas encuestadoras”* de dudosa procedencia y seriedad, que acomodan sus resultados al gusto del mejor postor. El mercado de la política produjo un espacio apropiado para el gran negocio de las *“encuestas”*. Cada candidato, de acuerdo a sus posibilidades económicas, ordenaba confeccionar una *“encuesta”* a la medida de su gusto y deseo.

En el transcurso de este mes y como si los líos internos no fueran suficientes, salieron a la luz pública las diferencias con el gobierno salvadoreño en torno a un posible reclamo territorial sobre un pequeño islote llamado Conejo, ubicado cerca de la costa hondureña en el Golfo de Fonseca, y a causa de la compra por parte de El Salvador de doce aviones usados A-37 al gobierno de Chile. Honduras, con suma prudencia, ha manifestado su malestar por lo que considera una *“ruptura unilateral del equilibrio militar en la región”* por parte del cercano vecino. Y, de paso, ha hecho público su disgusto por la permisividad estadounidense ante el *“armamentismo”* de San Salvador y el rechazo a pretensiones similares de Honduras en el reciente pasado (2011).

# NOVIEMBRE

## 2013

---

### La situación política

Una vez concluido el proceso electoral y realizada la votación el pasado domingo 24 del presente mes, podría decirse que los peores temores quedaron atrás. La extendida preocupación sobre posibles actos de violencia y desórdenes colectivos en los centros de votación, finalmente resultó un tanto exagerada. Las elecciones transcurrieron en un clima de relativa tranquilidad, con apenas unos pocos disturbios localizados en una que otra mesa receptora de votos. La asistencia de los electores fue grande y, de acuerdo a los cuestionados datos finales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), alcanzó el 61% (3,232.266 votantes) del padrón electoral, calculado por el Registro Nacional de las Personas (RNP) en 5,355.000 ciudadanos electores.

En atención a la tendencia anunciada por el TSE desde las primeras horas posteriores al cierre de la votación, el candidato del partido Nacional (PN), Juan Orlando Hernández (JOH) resultó ganador en la contienda, acumulando un total de un millón 131 mil votos (36.8%) frente a 885 mil sufragios (28.8%) recibidos por su contrincante inmediata, la candidata del partido Libertad y Refundación (LIBRE), Xiomara Castro. En un discreto tercer lugar quedó el partido Liberal (PL), que en el cercano pasado fuera considerado *“el partido político más grande de Centroamérica”*, con 623 mil votos (20.3%), superando al recién creado partido Anticorrupción (PAC) que –¡vaya sorpresa!– logró reunir 415 mil votos (13.5%). Estos cuatro partidos concentran el 99,4% del total de los votos depositados en las urnas, mientras que los restantes cinco partidos (Alianza Patriótica (APH), Democracia Cristiana (PDCH), Innovación y Unidad (PINU) más la alianza de Unificación Democrática con el Frente Amplio Electoral en Resistencia (UD-FAPER) apenas reunieron un insignificante 0.6% del gran total de votantes.

Estas son las cifras oficiales del TSE. Pero, como era de esperar, no son aceptadas ni compartidas por todos los actores participantes en el proceso electoral, ni avaladas completamente por todos los numerosos observadores internacionales que acompañaron el proceso electoral. Hay candidatos y

voces disidentes. Para empezar, dos de los actores principales, LIBRE y PAC, no aceptan las cifras y estadísticas del TSE, por lo cual exigen una revisión minuciosa de las actas electorales (en la demanda de LIBRE suman 16,135, casi el total de todas las actas procesadas). De acuerdo a los reclamantes, miles de actas electorales fueron manipuladas por representantes y activistas del partido de gobierno, cambiando los números, quitándole votos a sus adversarios y acumulando votos ficticios a favor del candidato oficial. El TSE ha prometido analizar la petición de LIBRE y revisar de nuevo las actas cuestionadas. Sin embargo, justo es decirlo, la credibilidad del TSE está en precario y no son muchos los hondureños que confían en la transparencia y honestidad de sus tres magistrados, todos ellos pertenecientes a los partidos tradicionales Nacional, Liberal y Democracia Cristiana.

LIBRE y PAC han optado por el reclamo legal y pacífico, sin bruscas alteraciones del orden público ni actos de violencia y desorden, tal como lo habían vaticinado y repetido hasta el cansancio, con una visión catastrofista, los colaboradores de JOH. Aunque, la verdad sea dicha, en la semana inmediata a la conclusión del proceso electoral, grupos de estudiantes universitarios intentaron organizar protestas callejeras y protagonizar un violento enfrentamiento con las fuerzas policiales, pero, afortunadamente, no pasó a más. De igual manera, los dirigentes de LIBRE, liderados por el ex presidente Manuel Zelaya y la candidata Xiomara Castro, encabezaron el domingo 1º de diciembre una gigantesca manifestación con sus partidarios y simpatizantes para dejar testimonio de su repudio a la actitud del TSE y su rechazo a la victoria de JOH. LIBRE ha declarado ya que no acepta la derrota de quien consideran es la presidenta realmente electa de Honduras: Xiomara Castro.

Vistas así las cosas, el futuro inmediato de Honduras no parece muy prometededor. Aunque muchos gobiernos extranjeros han aceptado el triunfo del candidato nacionalista y la mayoría de los observadores internacionales han dado su visto bueno al proceso electoral y avalan sus resultados, lo cierto es que miles de hondureños no acaban de digerir el trago amargo de la victoria de JOH. Los más radicales, sobre todo en las filas de LIBRE, llaman a la “*resistencia activa*”, es decir la protesta constante en las calles, “*gobernar desde abajo*” y generar un clima de permanente ingobernabilidad que no le permita a JOH disfrutar de su cuestionada victoria y, lo más importante, poner en práctica sus planes de gobierno. Si eso llegara a suceder, el país entraría en una peligrosa fase de intranquilidad social y política que, sumada a la crisis económica, la debacle de las finanzas públicas, el desempleo y la inseguridad existente, podrían formar un peligrosísimo escenario de confrontación y violencia. Ojalá que eso no suceda.

A la par de las voces radicales, generalmente ligadas a grupos provenientes de la antigua izquierda tradicional, se alzan otras, más sensatas y cuerdas,

que abogan por un manejo racional e inteligente de la crisis, resaltando el hecho de que la pérdida de la presidencia no debe ser vista exclusivamente como una derrota de LIBRE, tomando en cuenta que el nuevo partido logró colocar 36 diputados en el futuro Congreso Nacional que inaugura su primera legislatura en enero de 2014.

Y así es: LIBRE logró elegir a una buena cantidad de diputados, lo que le confiere un elevado poder de negociación y presión legislativa en el futuro parlamento. En cambio, el partido ganador (PN), paradójicamente, perdió 23 de los 71 diputados que todavía tiene en el actual Congreso y dispondrá de una bancada conformada por 48 legisladores, una cantidad insuficiente para avalar la aprobación de nuevas leyes e impulsar iniciativas a favor del Poder Ejecutivo que encabezará JOH. Los liberales contarán con 28 (en el actual Congreso tienen 46) de los 128 diputados que conforman la Cámara Legislativa, convirtiéndose así en la tercera fuerza parlamentaria, mientras el PAC, con 13 diputados, pasa a ser la cuarta fuerza. Los restantes tres diputados se distribuyen entre los mini partidos PDCH, PINU y UD, uno para cada partido (en este Congreso los tres partidos sumaban once escaños).

Considerando esta curiosa y nueva composición del Parlamento, puede afirmarse que los partidos tradicionales, (el Nacional y el Liberal) han sido los dos principales perdedores en el nivel parlamentario de las elecciones generales del domingo 24: los liberales perdieron 18 escaños y los nacionalistas 23. En cambio LIBRE y el PAC, que no tenían virtualmente representación oficial en el Congreso, ahora se alzan con 37 y 13 legisladores cada uno. Los partidos pequeños, a punto de evaporarse del escenario político, perdieron en conjunto 9 de los 12 diputados que todavía tienen en la cámara legislativa.

Con una pluralidad semejante, es de comprender que las negociaciones y alianzas estarán a la orden del día. Algo un tanto complicado en el marco de la *"cultura política tradicional"* de la clase dirigente en Honduras, acostumbrada a las reglas simples del bipartidismo, que reducían los acuerdos a las dos grandes fuerzas políticas tradicionales que controlaban el 95% de los votos depositados en las elecciones anteriores (hoy sólo pudieron obtener, los dos partidos juntos, el 57% de todos los votos contados ya oficialmente por el TSE).

Es más, de hecho las negociaciones parecen haber comenzado ya. Los dirigentes del PN han hecho aproximaciones con algunos de los nuevos diputados electos para sondear la posibilidad de alianzas coyunturales que les permitan obtener la ansiada presidencia del Poder Legislativo. Los liberales, que aparecen como los posibles protagonistas de una alianza con los nacionalistas para cerrarle el paso a LIBRE, todavía no se han pronunciado

oficialmente sobre esa iniciativa, aunque han dado a entender que “*estarían abiertos*” a considerar todas las posibilidades y ofertas pertinentes.

El máximo líder del PAC, Salvador Nasralla, quien se considera a sí mismo casi como un predestinado, no ha vacilado en referirse a los legisladores de su partido como “*mis diputados*”, anunciando desde ya que se resistirá a una alianza con los nacionalistas y que, además, aceptaría gustoso negociar para el PAC la presidencia del Congreso. Está por verse si “*sus diputados*” son realmente suyos y carecen de voluntad y autonomía para valerse por sí mismos y promover sus propias iniciativas. Hay razones para creer que algunos de ellos se proponen volar con sus propias alas.

En el seno de LIBRE, en cambio, prevalece la voluntad negociadora y consideran al PAC y a algunos diputados liberales como sus posibles aliados, sin olvidar a los dos diputados que tienen el PINU y la UD. LIBRE tiene una muy buena posición negociadora, tomando en cuenta su condición innegable de segunda fuerza política en el Parlamento, liderada además por un veterano político y parlamentario como es el ex presidente Manuel Zelaya, hoy convertido en flamante diputado por su natal departamento de Olancho, en donde resultó ser el candidato más votado.

La elección de la Junta Directiva, especialmente el presidente del nuevo Congreso Nacional, a finales de enero de 2014, será la primera prueba de fuego para los artífices de las alianzas, coyunturales o no, en el seno de la Asamblea legislativa.

Vistas las cosas desde esta perspectiva, hay que esperar un Congreso Nacional muy plural y beligerante, difícil de controlar, vigilante y cuestionador de las iniciativas gubernamentales. Todo ello es positivo para la democracia y, sin duda, contribuirá a fortalecer una nueva cultura política, más tolerante y democrática, flexible y dispuesta a la negociación, el acuerdo y las alianzas.

El nuevo gobierno tiene retos inmensos que deberá afrontar con decisión y rapidez. No se puede permitir un compás de espera demasiado amplio y prolongado. Para empezar, deberá tomar decisiones radicales a fin de sortear la difícilísima crisis en que se encuentran las finanzas públicas, abatidas por una deuda interna y externa de grandes dimensiones y complicado manejo. El déficit fiscal ha sido estimado, al menos por el momento, en un 6% del Producto Interno Bruto (PIB), aunque economistas independientes consideran que podría llegar hasta el 8%, lo que simplemente lo convierte en algo inmanejable. El déficit en la recaudación fiscal (tributaria) por parte de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) supera los 3,200 millones de lempiras (unos 156 millones de dólares al cambio actual), las exportaciones han caído y las reservas internacionales se han visto ligeramente disminuidas.

Sólo las remesas familiares, que en los últimos años se han convertido en una especie de salvavidas fiscal, se mantienen en moderado crecimiento y, se espera, podrían superar a los tres mil millones de dólares en este año.

Los dirigentes empresariales, tanto del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) como de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), con quienes ya se ha reunido el nuevo presidente, han coincidido en demandar la reducción del abultado aparato burocrático del Estado, recargado artificialmente en los últimos años por la contratación masiva de activistas políticos que ven en el presupuesto nacional algo así como un pastel sometido al reparto que, por momentos, da la impresión de ser una rebatiffa incontrolada.

Pero reducir el aparato estatal y, por lo tanto, el desmesurado gasto público, tiene un alto costo político para cualquier gobernante y, por ahora, no sabemos si JOH estaría dispuesto a pagarlo. Tomando en cuenta lo sucedido con el presidente Porfirio Lobo, a quien su partido le reprocha no haber contratado más activistas del PN en la Administración pública, es muy posible que JOH considere esa experiencia y se muestre excesivamente cauteloso para no empezar mal las relaciones con sus bases partidarias.

Otro de los grandes desafíos que enfrentará JOH en su mandato gubernamental es, sin duda, el de la alarmante inseguridad que prevalece en todo el país. Su propuesta de militarizar la seguridad pública y conceder un protagonismo excesivo y preocupante a los militares en el manejo de la seguridad ciudadana y el cuidado del orden público (creación de la llamada Policía Militar de Orden Público), se convirtió en el eje principal de su campaña electoral. Ahora ha llegado el momento de ponerla en práctica con toda la fuerza del poder gubernamental en sus manos. Seguramente así lo hará, aunque eso no garantice el éxito en el manejo y tratamiento de los problemas de seguridad, especialmente en lo que concierne al crimen organizado y las redes delincuenciales ligadas al narcotráfico y las pandillas o “*maras*”.

En estas elecciones, como nunca antes, el crimen organizado tuvo una evidente presencia a nivel de financiación ilegal a candidaturas de alcaldes y diputados, además de millonarias inversiones en determinadas candidaturas presidenciales. Un ejercicio de monitoreo sobre el gasto electoral (propaganda en medios de comunicación, vallas publicitarias, financiación de concentraciones y movilización, etc.) llevado a cabo por el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), con el patrocinio del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), una reconocida ONG norteamericana, reveló gastos millonarios por parte de los diferentes partidos políticos, con un énfasis especial en las sumas escandalosamente elevadas que invirtió el candidato oficial y futuro presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. Sólo en el mes de octubre, los diferentes partidos gasta-

ron un poco más de diez millones de dólares únicamente en publicidad en los medios de comunicación. De esa suma, los nacionalistas invirtieron el 52%, los liberales el 27 y LIBRE entre el 18 y el 20%. Resalta como un dato de mucho interés el millonario gasto de algunos candidatos a diputados que invirtieron más dinero que algunos de los propios candidatos presidenciales. El gasto fue muy sustancial en las denominadas “zonas calientes”, es decir aquellos espacios geográficos en donde proliferan ya las llamadas “*narcocoeconomías locales*” y en las que el crimen organizado tiene una evidente e innegable influencia y poder. No se debe descartar que algunos diputados y no pocos alcaldes hayan sido colocados en sus nuevos cargos por el crimen organizado que, sin duda alguna, no tardará en pasar su factura por los dineros invertidos. La discusión del tema de la extradición de criminales hondureños hacia los Estados Unidos, que deberá ser uno de los temas candentes en la nueva agenda legislativa, será seguramente un escenario apropiado para que la opinión pública pueda conocer las diferentes posiciones de los legisladores y detectar la posible o casi segura influencia de los narcotraficantes en el debate parlamentario.

No se puede negar que los meses por venir estarán cargados de muchos acontecimientos que, a pesar de los malos augurios, nos mantendrán entretenidos a todos. Así será.

# DICIEMBRE 2013

---

## La situación política

**F**inalmente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó los resultados definitivos y oficiales -cifras y porcentajes- del proceso electoral que tuvo su culminación el día 24 del mes anterior. Juan Orlando Hernández Alvarado, candidato del partido de gobierno, el Nacional, fue declarado oficialmente presidente electo de la República de Honduras. De acuerdo al TSE recibió un total de un millón 149 mil 302 votos, lo que constituye el 36.89% de los votos depositados (3 millones 232 mil 266) y apenas el 19% del total de ciudadanos registrados en el padrón electoral (5 millones 355 mil). Además de su baja relación porcentual con respecto a la suma total del censo electoral, Hernández, más conocido por sus siglas como JOH, es un presidente seriamente cuestionado por lo que los opositores, especialmente el partido Libertad y Refundación (LIBRE) y el partido Anticorrupción (PAC), consideran producto de un escandaloso fraude electoral.

Pero, al margen de la opinión de sus adversarios y de los distintos recursos legales interpuestos para someter a revisión y recuento los votos depositados en casi tres mil de las más de 16 mil urnas utilizadas el día de las elecciones, JOH ya ha sido reconocido por la comunidad internacional como el presidente electo de Honduras en elecciones que, tanto la Unión Europea (UE) como la Organización de Estados Americanos (OEA) no han vacilado en calificar de *“pacíficas y transparentes”*.

La distribución de los votos produjo además los siguientes resultados, tanto a nivel de diputados como de alcaldes:

- a) El partido Nacional obtuvo 48 de los 128 diputados que integran el Congreso Nacional. Perdió 23 curules con respecto a su actual representación en el Parlamento.
- b) El partido Liberal ganó 28 diputados, o sea que perdió 18 curules con respecto a su presencia parlamentaria actual.

- c) El partido Libertad y Refundación tendrá 36 representantes en el nuevo Congreso, que quedará oficialmente instalado el día 25 de enero próximo.
- d) El partido Anticorrupción contará con 13 legisladores.
- e) Los partidos minúsculos, el Demócrata cristiano, el de Innovación y Unidad así como la Unificación Democrática, dispondrán apenas de tres diputados, uno cada uno (esos tres partidos juntos no alcanzaron ni siquiera el 0,5% de todos los votos depositados). En este Congreso los tres partidos contaban con 12 diputados, o sea que perdieron ocho.

A nivel de alcaldías (gobiernos municipales), los nacionalistas se alzaron con 183 de las 298 existentes, los liberales ganaron 83, LIBRE obtuvo 31 y la última restante la ganó un candidato independiente. Así quedó distribuido el poder a nivel de los gobiernos locales y en el seno del futuro Congreso Nacional.

Esto quiere decir, en términos generales, que el partido que ganó la presidencia de la República y la mayoría de las alcaldías municipales no pudo lograr la mayoría suficiente para controlar el Parlamento. Por lo tanto, para poder gobernar, los nacionalistas deberán inevitablemente establecer alianzas con las fuerzas de la oposición, valga decir fundamentalmente con los legisladores del partido Liberal. La primera prueba de esa política de alianzas indispensables será en el momento en que se proceda a elegir la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional. El partido Nacional confía en obtener el apoyo de los liberales para que sea un diputado nacionalista el próximo presidente del Poder Legislativo, presidencia que, a diferencia de los demás países del área, se ejerce por cuatro años ininterrumpidos, los mismos que dura el presidente de la República al frente de la administración gubernamental.

En atención a la vieja y ya institucionalizada costumbre de formar mayorías parlamentarias por la vía sucia de la compra de votos, circulan ya fuertes rumores de ofertas millonarias por parte del partido de gobierno para reunir los votos suficientes que le permitan elegir una Junta Directiva acorde con sus intereses y planes a finales del mes de enero del 2014. Esta será la prueba de fuego para los nuevos diputados, especialmente de los partidos de reciente creación (LIBRE y PAC), que deberán resistir las tentadoras y millonarias ofertas que se acostumbra en la práctica parlamentaria tradicional en el Congreso hondureño.

Preocupados por la composición diversa y plural del nuevo Congreso, los nacionalistas se han ocupado de aprobar numerosas reformas y leyes antes de que concluya la legislatura actual. Aprovechando la mayoría mecánica

que todavía conservan (71 de los 128 diputados), los legisladores del partido Nacional han aprobado con la velocidad del rayo y sin pudor ni debate alguno, un conjunto de impuestos agrupados en la llamada "*Ley de Ordenamiento de las finanzas públicas, control de las exoneraciones y medidas anti evasión fiscal*". Este conjunto de nuevas cargas tributarias, conocido popularmente con el despectivo nombre de "*paquetazo*", es la novena iniciativa en materia tributaria, valga decir el noveno aumento de impuestos, que aplica la Administración nacionalista encabezada por Porfirio "*Pepe*" Lobo a la población hondureña.

La medida es tan antipopular que ya ha generado un clima adicional de inconformidad y disgusto con respecto a la nueva Administración de JOH que, oficialmente, deberá comenzar el próximo 27 de enero. En efecto, en esa fecha deberá iniciar su mandato, pero, en la práctica, JOH ha empezado a gobernar desde ya, nombrado algunos funcionarios desde ahora, con la venia complaciente y cómplice del presidente Lobo. Tal es el caso de la abogada Miriam Guzmán, designada ya como la nueva encargada de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). De igual manera, JOH ha anunciado ya el nombramiento de Marlon Tábor, actual representante de Honduras ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como nuevo presidente del Banco Central. Arturo Corrales, el influyente ministro y Comisionado presidencial para seguridad y defensa, continuará en su cargo al menos en los primeros meses del gobierno de JOH.

Desde su importante cargo, Corrales, el tercer ministro de seguridad en el periodo de Porfirio Lobo, ha dado inicio a una "*reingeniería*" dentro de la estructura institucional de la Policía, aprovechando la salida del Comisionado Juan Carlos "*el tigre*" Bonilla del cargo de Director de la Policía y su sustitución por el Comisionado Ramón Antonio Sabillón Pineda, uno de los tres candidatos propuestos al presidente Lobo por un "*grupo de análisis*" en el que estuvo presente el hermano de JOH, teniente coronel retirado Amílcar Hernández, Gerardo Galindo, de la oficina de inteligencia presidencial, Jeff Lisst, encargado de seguridad, crimen organizado e inteligencia en la embajada de Estados Unidos y Andrea Lewis, funcionaria de antinarcóticos y seguridad de esa misma embajada. Lobo, por recomendación de Corrales, escogió a Sabillón Pineda en atención a su antigüedad y hoja de servicios (trabajó como enlace con la embajada norteamericana durante varios años, además de ser un entusiasta integrante de sectas religiosas evangélicas).

El carácter errático e indefinido de la "*política de seguridad pública y manejo policial*" durante los cuatro años de la Administración lobista, queda dibujado con más claridad en las siguientes cifras: tres diferentes ministros de Seguridad, siete viceministros, cuatro directores de Policía, 25 diferentes directores en el Directorio Nacional compuesto por cinco miembros, 32 distintos integrantes del llamado "*Directorio estratégico*" que se compone sólo de ocho miembros, etc.

Con la puesta en marcha de la “reingeniería gerencial” de Corrales, varios miembros de las viejas cúpulas policiales que estaban en condición de “congelados”, es decir sin cargo de mando alguno, han vuelto a ocupar puestos importantes en la estructura policial, aunque varios de ellos tienen serios cuestionamientos por su desempeño irregular y censurable.

A pesar de estos traspiés y desencuentros, el Ministro de seguridad asegura que la Policía logró bajar el elevado índice de homicidios por cada cien mil habitantes de 85 a 75.1, aunque el Observatorio sobre la Violencia, adscrito a la Universidad Nacional, es más prudente y sólo reconoce un leve descenso de dos puntos: de 85 a 83 homicidios por cada cien mil habitantes, lo que indica que el país sigue siendo uno de los más violentos y peligrosos del mundo. Corrales ha prometido algo que parece imposible: reducir en el 2014 el índice a una media de 30 homicidios, tal como existía diez años atrás.

Lo que está sucediendo en la Policía, es decir el apresurado proceso de reestructuración, coincide con la prisa similar que evidencia el Congreso Nacional en aprobar nuevas disposiciones legales para dejar preparado el camino a la Administración de JOH.

Ahora los diputados nacionalistas se aprestan a aprobar un nuevo presupuesto, acorde a las urgencias de JOH, y un paquete de reformas apresuradas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP), además de reforzar las facultades de la presidencia de la República, ampliando la discrecionalidad administrativa a favor del nuevo presidente. Son reformas a la Ley de la Administración Pública, orientadas a fortalecer el poder presidencial, debilitando las propias funciones del Parlamento, en un curioso proceso de reforzamiento de un nuevo presidencialismo a costa de una pérdida sensible de facultades del Congreso Nacional. Es el proceso exactamente inverso al que promovía JOH desde la presidencia del Congreso, cuando era apenas el candidato del partido Nacional. Hoy, convertido ya en presidente, ordena a sus diputados poner reversa y debilitar a la Cámara legislativa para reforzar al Poder Ejecutivo. Todo ello sólo pone en evidencia la fragilidad de las instituciones estatales y el juego irresponsable que hacen los dirigentes políticos con la naturaleza y función de las instituciones públicas.

Las reformas proyectadas a la LEOP persiguen el objetivo de adelantarse a las iniciativas del nuevo Parlamento que, debido a su composición plural y, por lo mismo, con una nueva distribución del poder, podría aprobar una nueva Ley electoral que no sería del agrado de las viejas cúpulas políticas, acostumbradas a disputar el control del gobierno en elecciones regidas por una legislación ya obsoleta e incompatible con la nueva geografía electoral que se ha ido conformando en el país, sobre todo después del golpe de Estado de junio de 2009.

Los nacionalistas tienen prisa por aprobar todas estas reformas, utilizando los últimos días de la presente legislatura en la que todavía conservan la ventaja de una mayoría conformada por sus 71 legisladores. El nuevo Congreso podría dar marcha atrás en muchas de estas reformas, pero los procedimientos son más complicados, sobre todo tomando en cuenta la existencia del veto presidencial y la necesidad de conseguir dos tercios de los votos para sacar adelante una ley o reforma que haya sido vetada por el presidente de la República.

La aprobación también apresurada del nuevo paquete de impuestos (sobre ventas, telefonía, combustibles, servicios públicos, transacciones financieras, etc.) persigue el objetivo de aliviar, por la vía de nuevos ingresos a costa de ampliar el radio de los impuestos indirectos, la gravísima crisis fiscal en que se encuentra el tesoro público. Con una deuda total ya casi inmanejable (representa el 42% del Producto Interno Bruto) que consume entre 18 y 22 mil millones de lempiras anuales (entre 900 y más de mil millones de dólares) sólo para asegurar su servicio (abono al principal y pago de intereses), la nueva Administración encuentra una situación catastrófica en cuanto a finanzas públicas. La recaudación de ingresos presenta un déficit sensible de más de tres mil millones de lempiras (unos 150 millones de dólares) en este año que finaliza. Sólo la deuda pública interna ha crecido en forma tan desmesurada que se ha vuelto absolutamente incontrolable. El gobierno lobista se vio obligado a colocar en el mercado internacional de valores mil millones de dólares en bonos llamados “soberanos”, a tasas de interés elevadas y con altos costos de intermediación financiera. Todo ello para poder salir un tanto airosos de los compromisos acumulados en los cuatro años de gobierno.

La deuda externa, según el Banco Central, creció en 22,5% en este año 2013 con respecto al año anterior. Su aumento fue de unos 820 millones de dólares para sumar un total de cuatro mil 467 millones de dólares, equivalente al 23.5% del PIB, que se distribuyen de la siguiente manera:

- a) 3,076.6 millones a los organismos multilaterales de crédito
- b) 762.6 en deuda bilateral y a países concretos
- c) 627.6 en deuda comercial o privada.

El servicio de una deuda externa semejante asciende a los 146 millones de dólares anuales, de los cuales el 57% se concentra en el pago de intereses y comisiones.

El despilfarro ha sido tan grande, sobre todo en los últimos dos años de la Administración lobista cuando la inversión en proselitismo electoral disparó exponencialmente el gasto público y los costos del asistencialismo político,

que el gobierno perdió su capacidad para controlar y asegurar el equilibrio elemental de las finanzas del Estado.

Aunque el gobierno suele culpar a las administraciones anteriores, léase la de Manuel Zelaya especialmente, y al aislamiento internacional en que se encontraba el país como producto del golpe de Estado del 2009, lo cierto es que los organismos financieros internacionales fueron generosos y complacientes con el gobierno del presidente Lobo. Sólo el BID, según las cifras oficiales del Ministerio de Planificación, desembolsó 900 millones de dólares a la Administración lobista en cuatro años. El Banco Mundial hizo otro tanto. La verdad es que en buena medida, la crisis fiscal es el resultado de dos factores vinculados entre sí: el saqueo de los recursos públicos llevado a cabo durante los seis meses del gobierno de facto de Roberto Micheletti, fruto del golpe de Estado, y la desastrosa administración financiera y el derroche en proselitismo electoral puestos en práctica por el gobierno “*de transición*” de Porfirio Lobo.

Como era de esperar, el gobierno cierra el año 2013 con un crecimiento débil de 2,8% del PIB y una inflación oficial de casi 5%, un poco menor a la del año 2012, aunque las centrales obreras aseguran que sus datos indican que la inflación osciló entre 7 y 8%. El déficit fiscal estimado en este mes de diciembre llegó en el año a 6%, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Finanzas, aunque el Colegio de Economistas y analistas financieros independientes aseguran que pudo alcanzar entre el 7.5 y el 8% del PIB. El gobierno ha prometido que en el 2014 ese déficit podría bajar a 4.7%. Esa es la meta contenida en el nuevo presupuesto que deberá ser aprobado en la primera quincena de enero de 2014.

Las remesas familiares siguen siendo el más importante soporte de los índices macroeconómicos del país. Sin embargo, cada vez crece más el número de hondureños repatriados en forma forzosa desde Estados Unidos: en este año fueron repatriados oficialmente 70,658 migrantes desde Estados Unidos y México. Se produjeron 350 vuelos especiales desde EEUU hacia Honduras, casi uno por día, para traer a los indocumentados repatriados a suelo hondureño.

Y, a pesar de que crece el número de repatriados, también aumenta el número de migrantes que emprenden la arriesgada ruta hacia el norte. En este año los repatriados aumentaron en casi 18 mil más que en el año 2012. Según datos del gobierno, se calcula que cada 15 minutos se va un hondureño en condición de emigrante ilegal y apenas el 10% de ellos logra ingresar al territorio estadounidense.

Así concluyó el difícil y controversial año 2013, el último de la Administración dirigida por el presidente Porfirio “*Pepe*” Lobo.

**AÑO**  
**2014**

---

# ENERO 2014

---

## La situación política

**N**uevo año y nuevo gobierno. El día 27, a las 9:50 am, el presidente Porfirio “Pepe” Lobo se despojó de la banda presidencial y se la entregó a su sucesor en el cargo, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, más conocido por sus siglas como JOH. Se produjo así el esperado traspaso de mando que pone fin a la Administración lobista y da inicio a la que corresponde al nuevo presidente de Honduras, el joven líder del partido Nacional (PN) y ex presidente del Congreso Nacional.

Previo al inicio de su mandato, JOH se encargó de preparar el terreno en el ámbito legislativo, es decir en el marco de un Congreso Nacional todavía controlado por una mayoría nacionalista de 71 legisladores, en un coro total de 128 diputados. Utilizando abiertamente esta mayoría mecánica, el PN, conducido por JOH y sus incondicionales, generó una verdadera avalancha de leyes, decretos y reformas en la estructura legal del Estado para acondicionar sus mecanismos de acuerdo con los planes e iniciativas del nuevo gobierno, que inició sus funciones el pasado día 27 del presente mes. Esa avalancha legislativa, calificada despectivamente por la oposición como “*decretorragia*”, apuntó a fortalecer la institución de Coalianza, una entidad creada por JOH para gestionar los negocios del Estado en colaboración estrecha y sociedad conjunta con los empresarios privados, tanto nacionales como extranjeros. Las empresas estatales de energía eléctrica, telefonía y telecomunicaciones, Nacional Portuaria, Registro de la propiedad, emisión de pasaportes, etc. son algunas de las áreas y actividades que, por la vía de la creación de numerosos e intrincados fideicomisos, han pasado, total o parcialmente, a ser gestionadas por grupos bancarios privados o empresas mercantiles creadas a propósito para estos menesteres. Se produjo una especie de reparto de los eslabones del Estado entre diferentes grupos bancarios y empresariales, bajo la conducción estratégica de Coalianza, dirigida ésta por socios y amigos cercanos del nuevo presidente.

Estamos en presencia de una especie de “*corporativización*” muy sui generis del Estado hondureño, que ahora queda más fragmentado que antes y

más penetrado por los grupos económicos conocidos genéricamente como poderes fácticos en la sociedad hondureña. El círculo de amigos, familiares y colaboradores más cercanos de JOH, emerge y se consolida como un nuevo grupo económico, que busca espacios propios en el mundo de los grandes negocios y, por lo mismo, presiona y obtiene nuevos y constantes reacomodos en el ajedrez de los ya reconocidos grupos del poder fáctico en Honduras.

Una vez consolidado el cuestionado triunfo electoral del último domingo 24 de noviembre del año pasado, JOH y sus aliados comenzaron rápidamente a diseñar el organigrama de su nuevo gobierno, introduciendo cambios sustanciales en la estructura anterior y creando las figuras de “sectores” especializados que, bajo la conducción de influyentes “coordinadores especiales”, tendrán bajo su mando y control a los diversos Ministerios tradicionales que han pasado a llamarse simplemente “despachos”. Así, por ejemplo, funcionarán Sectores especializados en temas globales como Desarrollo e inclusión social; Gobernabilidad y descentralización (a cargo, dicho sea de paso, del ex alcalde capitalino y hoy flamante Designado presidencial, Ricardo Álvarez); Economía y Finanzas; infraestructura; Defensa y Seguridad, a cargo, precisamente, del propio presidente JOH; Relaciones exteriores y cooperación internacional; Inversiones, etc. Los coordinadores de sectores serán los verdaderos interlocutores válidos del presidente, quien se verá auxiliado en esta compleja tarea de supervisión y guía por un funcionario especial llamado Coordinador general del gabinete, influyente cargo que recayó en el experimentado diplomático Jorge Ramón Hernández Alcerro, hasta no hace mucho embajador en Washington. JR, como gusta que le llamen, ha sido bautizado ya por la prensa como un “superministro” dentro de la nueva arquitectura gubernamental liderada por JOH. Pero, a su lado, casi en la sombra, ha sido ubicado Ebal Díaz, el colaborador más cercano que acompañó a JOH durante toda su gestión como presidente del Poder Legislativo. Díaz, un abogado tan joven como ambicioso, será el nuevo “asesor especial” y Secretario Ejecutivo del gabinete de ministros, una función que anteriormente cumplía el ministro de la Presidencia. Las funciones de Díaz y las encomendadas a JR, más temprano que tarde habrán de entrar en choque, generando conflictos y disputas por espacios de influencia y ámbitos jurisdiccionales dentro de la Administración pública.

Dado el talante de ambos funcionarios -ambiciosos, celosos de sus áreas de influencia y propensos a la intriga palaciega-, no son pocos los que creen que la confrontación y peleas por espacios de poder serán muy pronto la tónica principal de las relaciones intergubernamentales en la Administración de JOH. Veremos qué sucede en el periodo de gracia acostumbrado, el de los primeros cien días de gobierno.

La propuesta reformadora de JOH y su equipo de colaboradores apunta a la reducción del aparato gubernamental, austeridad y ahorro en el gasto público y eficiencia en la gestión a través de la medición constante del desempeño y los resultados de cada uno de los siete sectores recién creados. Sin embargo, tal propuesta introduce nuevos elementos de complejidad en la arquitectura estatal, volviéndola más laberíntica de lo que ya es y generando un clima de confusión y competencia desmesurada entre las diferentes áreas jurisdiccionales del aparato gubernamental hondureño. La rivalidad entre funcionarios, los celos por los límites de sus respectivas esferas de poder e influencia, sumadas a las heridas sin cicatrizar dejadas por la feroz y reciente lucha por la nominación presidencial en las elecciones internas de noviembre de 2012, serán factores de constante disputa y controversia dentro del nuevo equipo ministerial de gobierno. En verdad, aunque JOH apuesta por la reducción y simplificación del gobierno, lo que está logrando es su ampliación y burocratización crecientes. Los días por venir mostrarán la verdadera *"lógica caótica"* de este nuevo intento por reconfigurar la estructura básica del Estado de Honduras.

El fin del gobierno lobista coincidió con el estallido del último gran escándalo de corrupción en la Administración saliente. El Ministerio Público, mostrando una súbita recuperación de su accionar investigativo, comprobó el saqueo de los fondos y recursos del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) y decidió presentar acusación criminal contra un grupo de funcionarios encabezados por el Director principal, Mario Zelaya, un destacado activista político del partido Nacional que apoyaba al ex alcalde capitalino Ricardo Álvarez en la lucha interna del PN por la nominación presidencial. Es decir, que era un adversario reconocido del actual presidente electo.

Zelaya y Cía. se robaron millones de dólares en el IHSS (cálculos preliminares estiman la suma saqueada en unos 200 millones de dólares) por la vía de las compras sobrevaloradas, adquisiciones directas sin la debida licitación, pagos fraudulentos y todo tipo de negocios sucios que incluyeron hasta la falsificación de medicamentos, lo que causó graves daños a la salud de los usuarios de la institución. Algunos colaboradores menores ya han sido indagados por la Fiscalía y, uno de ellos, el administrador, está en prisión. Pero el principal artífice de la trama, Mario Zelaya, se encuentra fuera del país, en condición de prófugo de la justicia. El saqueo de los fondos públicos del IHSS está relacionado con el gasto millonario que llevó a cabo el partido de gobierno en la recién concluida campaña electoral.

Con la nueva configuración del Congreso Nacional, en donde las cuotas de poder ya no están repartidas entre los dos partidos tradicionales, sino entre cuatro agrupaciones políticas, dos de ellas (LIBRE y PAC) de reciente creación y representantes de la nueva dinámica política que anima el escenario social hondureño, la actividad parlamentaria ha cobrado nuevos bríos y ha

---

reanimado el espíritu de debate que había caído en una especie de letargo y sopor burocrático durante la gestión del Congreso anterior, dominado por una mayoría mecánica del partido oficial y bajo la conducción un tanto autoritaria de JOH.

Pero el viejo espíritu intolerante parece sobrevivir a los cambios en la correlación de fuerzas internas en el Parlamento. Así quedó demostrado en las reuniones celebradas para escoger a la nueva Junta Directiva que habrá de dirigir el Poder Legislativo. Los nacionalistas (48 diputados), junto a los liberales (27 diputados), conformaron una alianza basada en la repartición de prebendas y fuertes sumas de dinero para impedir que LIBRE y PAC pudieran tener siquiera la oportunidad de oponerse a la elección forzada de un presidente legislativo (Mauricio Oliva) perteneciente al PN. La alianza de los dos partidos tradicionales se impuso, aunque para ello debió violentar las más elementales normas parlamentarias y negar la palabra, en forma por demás burda y grosera, a los legisladores de la oposición. El escándalo fue mayúsculo y la protesta violenta de los nuevos diputados no se hizo esperar. Fue todo un espectáculo degradante y lamentable.

Al día siguiente, domingo 26, el diputado Oliva (nacionalista del departamento de Choluteca, hombre leal y sumiso a JOH) tomó posesión de su cargo en un Congreso rodeado por protestantes enfurecidos pertenecientes a las bases del llamado Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), fuente de apoyo principal del partido LIBRE. Estos incidentes pueden ser vistos como el preludio de la aguda conflictividad social y política que habrá de rodear el ambiente y los debates parlamentarios en la presente legislatura.

Por el momento, los dos partidos nuevos, eje y columna vertebral de la oposición legislativa, han concertado lo que dieron en llamar un *“Gran Acuerdo de la oposición y de la gobernabilidad”* para diseñar propuestas conjuntas y rechazar aquellas iniciativas del oficialismo que, a juicio de LIBRE y del PAC, lesionen los intereses nacionales. El Acuerdo permitirá acercar las posiciones de ambos partidos en cuestiones cruciales como los nuevos impuestos o el diseño de una nueva arquitectura jurídica para el sistema político electoral. De hecho, esta *“alianza coyuntural”* ya empezó a funcionar y permitió el rechazo a los impuestos que gravan el precio de varios artículos de la llamada *“canasta básica”* de consumo popular. Mientras los liberales propusieron, de acuerdo previo con los nacionalistas, la reforma del paquete (*“paquetazo”* le llama despectivamente la población) de impuestos, LIBRE y PAC exigían su derogación total.

Ante un Congreso más plural y deliberativo, y por lo tanto menos manejable y menos controlable por el partido de gobierno, JOH y sus colaboradores han optado por *“fortalecer”* la figura presidencial, ampliando las facultades

legales y administrativas de JOH, en desmedro de las funciones inherentes por ley al Poder Legislativo. Se produce un debilitamiento real del Congreso a cambio de un “fortalecimiento” falso de la institución presidencial, porque en realidad se trata de un fortalecimiento real de la persona de JOH. Transferencia de poder desde el parlamentarismo hacia el presidencialismo personal. Un retroceso lamentable, sin duda, en el avance de la institucionalidad democrática y en la construcción del Estado de derecho en Honduras.

## **Economía y finanzas**

**D**e acuerdo a las cifras oficiales del Banco Central (BCH), la economía hondureña creció en el año 2013 casi un tres por ciento, un ritmo demasiado moderado para enfrentar los retos de una población laboral creciente y unos índices de pobreza relativa y extrema en peligroso ascenso. El déficit fiscal, una piedra enorme en el zapato gubernamental, subió de 6% en 2012 a 7,5% en el 2013, un crecimiento demasiado preocupante. La deuda total del país llegó a los 8,500 millones de dólares, lo que representa casi el 46% del Producto Interno Bruto (PIB), un porcentaje que se considera inmanejable en economías del tamaño de la hondureña (en el año 2008 era el 21.6% del PIB y en el 2009 el 25.5%). Sólo en el año que acaba de concluir, el país se vio obligado a pagar 900 millones de dólares en concepto de servicio de la deuda pública (principal más intereses).

Para el año que comienza, el Congreso Nacional, el anterior, el que controlaba totalmente JOH, aprobó un presupuesto de 9,182 millones de dólares, casi un 12% más que el del año 2012. El déficit calculado en ese presupuesto es de un 4,5%, o sea unos 865 millones de dólares. Si las tendencias actuales en el manejo de las finanzas públicas se mantienen, lo más seguro es que el déficit fiscal será mayor al estimado, prolongando así el peligroso desequilibrio que hoy afecta al conjunto de las finanzas del Estado.

Estas son algunas de las difíciles circunstancias políticas, sociales y fiscales en que se encuentra el país que deberá conducir el nuevo presidente de la República. No la tendrá fácil, por lo visto, aunque haga esfuerzos por enfrentar los desafíos y buscar soluciones prácticas y prontas a los innumerables problemas que aquejan a Honduras. Habrá que concederle el beneficio de la duda y esperar por lo menos los primeros cien días de gobierno para emitir juicios de valor más definitivos sobre el rumbo y las posibilidades de la nueva Administración nacionalista bajo el mandato de Juan Orlando Hernández.

# FEBRERO

## 2014

---

### La situación política

**S**e ha cumplido ya el primer mes de la Administración que encabeza el gobierno de Juan Orlando Hernández, (JOH). Ha sido un mes intenso, lleno de actividades, un periodo en que el nuevo presidente ha mostrado sus energías y deseos de empezar ya, sin retrasos, entrando de manera directa en los problemas y abordándolos con decisión y firmeza. Justo es reconocer que el presidente JOH comenzó a gobernar desde mucho antes de tomar posesión de su cargo y, por lo mismo, ha tenido tiempo suficiente para montar las bases del despegue de su nueva Administración. Pero eso sí, no hay duda que JOH y su equipo se habían preparado con suficiente antelación para abordar los variados y difíciles problemas que enfrenta la sociedad y el Estado hondureño.

Las áreas clave en las cuales ha sido más notorio el activismo inusitado del nuevo presidente y sus colaboradores más cercanos son las siguientes: la seguridad y defensa públicas, el sistema de salud y educación públicas, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, las empresas estatales en quiebra ( ENEE, HONDUTEL, etc.), la concesión de licencias ambientales y permisos de minería, la Dirección General de Transporte, las políticas de subsidios y paternalismo estatal, la lucha contra la corrupción y las relaciones con el Poder Legislativo.

En casi todas estas áreas, el procedimiento básico ha sido el de la **intervención**, es decir la introducción de nuevos agentes en la estructura institucional para investigar el desempeño de los directores y jefes, con la autoridad suficiente para sustituir a éstos y poner nuevo orden dentro de la organización específica. Así sucedió en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), convertido hoy en el símbolo de la desmesurada corrupción instaurada durante el gobierno anterior, el gobierno presidido por Porfirio Lobo, padrino político y soporte fundamental de la campaña proselitista de JOH para llegar a la presidencia de la República.

Los **interventores**, casi siempre personas de absoluta confianza de JOH, ya han llegado o están por llegar a otras dependencias del Estado: Ministerio de Recursos Naturales (licencias ambientales y permisos para explotar yacimientos mineros), Ministerio de Salud (Comisiones encargadas de compras de medicamentos y contratación de servicios), Ministerio de Obras Públicas y Transporte (Fondo Vial, Dirección General de Transporte, etc.), Ministerio de Relaciones Exteriores (Embajadas y Consulados), Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEM), las 24 Aduanas existentes en el país, etc. En todas partes aflora la ineficiencia y la corrupción. Cada día aparece un nuevo escándalo que involucra a funcionarios del gobierno anterior y salpica, directa o indirectamente, al partido de gobierno. Pareciera que JOH está interesado en depurar las filas de su propio partido, especialmente las de aquellos que están incrustados dentro de las estructuras del aparato estatal desde los tiempos del gobierno anterior. De paso, JOH ajusta cuentas a sus adversarios internos y amenaza a los potenciales o reales opositores a su gobierno con la espada de la **intervención** o el aviso de reabrir antiguos casos o iniciar nuevas investigaciones. Todavía es prematuro para calificar las reales intenciones del nuevo gobernante: ¿tiene un interés real en combatir la corrupción, la vieja y la nueva, o solamente utiliza esa lucha para saldar cuentas y asustar a sus adversarios? El tiempo, muy pronto, lo dirá.

En el campo específico de la seguridad y la defensa, JOH muestra un interés especial. Hombre vinculado a la milicia, ya sea por razones de sus estudios iniciales (educación media) o por vínculos familiares (hermanos que hicieron carrera en el Ejército), no pierde oportunidad para demostrar su vocación castrense y capacidad para ejercer realmente el mando. Es como si padeciera una cierta *"tentación autoritaria"*. Se ha puesto él mismo al frente del llamado Sector seguridad y defensa, que en tiempos de Porfirio Lobo le había sido confiado al influyente ministro de seguridad Arturo Corrales, hoy convertido en un subordinado dócil y discreto de JOH.

Desde el mismo día de su toma de posesión, el presidente ordenó el despliegue de fuerzas militares y policiales para desalojar varios barrios y colonias controladas o amenazadas por las pandillas y los delincuentes comunes. La *"Operación Morazán"*, que así se llamó esta iniciativa, perseguía el objetivo de causar un efecto mediático importante entre la población y, al mismo tiempo, enviar un mensaje a la delincuencia sintetizado en una frase del discurso presidencial: *"¡se les acabó la fiesta!"*. Algo que muchos interpretaron como una crítica velada al gobernante anterior, quien supuestamente habría permitido la celebración de tal "fiesta".

El mecanismo favorito de JOH para poner en práctica su concepción de lo que deben ser las políticas de seguridad en Honduras, consiste en formar las llamadas *"Fuerzas interagenciales"*, una combinación de militares, poli-

cías, jueces, agentes de inteligencia, investigadores criminales y fiscales, que se despliegan sobre objetivos concretos y trabajan en áreas especiales del mapa de la inseguridad. Así, por ejemplo, existen ya las fueras combinadas en materia de lucha contra la extorsión (Fuerza Nacional Antiextorsión-FNA), la seguridad aeroportuaria (FISA), la evasión fiscal, los secuestros, el narcotráfico, los crímenes de *“alto impacto”*, la Fuerza de Seguridad Interagencial (FUSINA), etc. No es una iniciativa nueva; de hecho, ya los norteamericanos, desde su Embajada, venían patrocinando la formación de los llamados *“grupos élite”* dentro de la Policía Nacional, integrados por policías e investigadores criminales y fiscales previamente certificados por sus polígrafos, y ya sometidos a las pruebas de confianza. Los *“grupos élite”* proliferaron en las filas policiales (llegaron a existir nueve en total), generando dispersión en las estructuras de mando y segregando desconfianza y rivalidades internas. Ahora JOH ha tomado el mando único y ha convertido los antiguos *“núcleos exclusivos”* de investigadores seleccionados en las llamadas *“fuerzas interagenciales o unidades interinstitucionales”*, para combatir el crimen organizado y las diferentes modalidades del delito. La Policía Militar de Orden Público (PMOP), la criatura creada por JOH a su gusto y antojo desde su condición de presidente del Parlamento anterior, es, sin duda, la fuerza élite por excelencia y la que goza de la estima oficial y el liderazgo cierto dentro de las nuevas políticas de seguridad del presidente hondureño.

Hay un campo en donde el presidente está mostrando una firmeza inusitada, que pudiera crearle más de algún problema y roces con los Estados Unidos. Se trata de la recién aprobada (18 de enero de 2014) Ley de Protección Aérea, que establece regiones de exclusión para los vuelos de aviones y otras naves aéreas que pudieran resultar sospechosas de acciones ilícitas, especialmente transporte de drogas. Las zonas incluidas dentro de la *“exclusión”* son los departamentos de Gracias a Dios (La Mosquitia, en la frontera con Nicaragua), Colón y Olancho. La elevación o techo límite para los vuelos son 18 mil pies y los protocolos de derribo están ya diseñados y en manos de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), listos para ser puestos en práctica. Los norteamericanos se oponen a esta ley por considerar que contradice los acuerdos internacionales sobre navegación aérea y, sobre todo, por el temor real de que sus propios agentes de la DEA, infiltrados en las redes de los cárteles del narcotráfico internacional, puedan ser objeto de derribo y muerte por parte de los pilotos de la FAH. El llamado Zar antidrogas de los Estados Unidos, William Brownfield, vino en este mes a Honduras (es su tercera visita en menos de un año) para reunirse con JOH y tratar de persuadirlo para no aplicar esa ley o, en todo caso, modificar su radical contenido. JOH se mantuvo firme, al parecer, y asegura estar dispuesto a defender, *“haciendo lo que tiene que hacer”* (su frase favorita de la campaña electoral y hoy convertida en una especie de lema oficial del gobierno), el maltratado y tantas veces violado espacio aéreo hondureño.

O sea, pues, que, en síntesis, el nuevo gobernante se ha tomado en serio su papel de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, la Policía, los servicios de inteligencia y los agentes de investigación criminal, colocándose al frente de ellos para dirigir en forma personal la lucha contra la delincuencia común y organizada. En los meses por venir tendremos, seguramente, más de alguna sorpresa en este campo tan sensible para la sociedad hondureña.

No es casual el afán inusitado del ministro de seguridad por crear su propio Observatorio de la Violencia para producir sus propias cifras, previamente maquilladas, en abierta competencia con el Observatorio universitario, que goza de merecida fama y confianza por la objetividad científica con que maneja sus estadísticas sobre la violencia, especialmente los homicidios, en Honduras. Corrales, sin duda, quiere acomodar las cifras de acuerdo con las prioridades y urgencias de su jefe, el presidente de la República y responsable directo del Sector seguridad y defensa.

Preocupado por las finanzas públicas y el lamentable Estado en que se encuentran, JOH ha dedicado especial atención a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), al frente de la cual ha nombrado a la abogada Miriam Guzmán, ex Magistrada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y una persona de su absoluta confianza. La nombró desde antes de tomar posesión, todavía cuando teóricamente Porfirio Lobo seguía siendo presidente, a inicios del mes de diciembre del año anterior. Sus primeras medidas han sido las de cambiar a varios de los jefes más importantes de la institución e intervenir con sus personas de confianza 17 aduanas del total existente en todo el territorio nacional. La meta es, de acuerdo a sus palabras, adecentar y profesionalizar la DEI para lograr la ambiciosa meta de recaudación en este año 2014: 69 mil millones de lempiras, es decir unos 3,350 millones de dólares. La DEI, como las demás instituciones del Estado, padece el virus de la politización partidaria y, mientras no erradique ese mal, jamás podrá ser una institución eficiente y honesta en su desempeño y funcionamiento.

Siempre en vinculación con el tema de las finanzas públicas, el presidente JOH ha ordenado al gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el empresario de origen árabe y ex diputado del partido Nacional, Emil Hawit, renegociar la contratación de energía de origen térmico, en términos tales que no permitan el tradicional saqueo de los fondos de la empresa a que han estado acostumbrados los empresarios dueños de las cuatro grandes empresas que proveen a precios muy altos la energía térmica a la ENEE. Las negociaciones han sido difíciles y el gobierno ha anunciado su disposición a comprar la energía en los países vecinos, Guatemala especialmente, que se la venden a precios más baratos y en mejores condiciones. Los llamados empresarios "térmicos", porque la energía que producen es a base de combustibles fósiles, especialmente bunker, se han enriqueci-

do en forma desmesurada a costa de la ENEE, su principal cliente desde el año 1994. Honduras, según datos oficiales, actualmente depende de la energía a base de combustible fósil en un 55% y sólo el 45% proviene de fuentes renovables, a pesar de que el país es rico y en su territorio abundan los recursos renovables. Una cláusula introducida en los contratos de energía térmica, denominada “pagos por costo fijo”, obliga al Estado hondureño (ENEE) a pagar un poco más de nueve millones de dólares mensuales a las cuatro compañías que venden la energía térmica, independientemente de que sus máquinas estén trabajando o no. De esta forma, a lo largo de casi veinte años, esos empresarios han logrado pagar ya el costo de su maquinaria y equipo gracias a la “generosidad” estatal que les provee millones de dólares sin tener que trabajar o vender la energía durante todo el tiempo. Es un mecanismo depredador que sólo se explica por la corrupción y la contaminación política que han rodeado las diferentes negociaciones para suscribir y renovar esos leoninos contratos.

Pues bien, de acuerdo con las tajantes declaraciones de JOH, ¡esta fiesta también se acabó! La posición del gobierno, al menos hasta este momento, se mantiene firme y los empresarios térmicos ya están dando muestras de doblar el brazo. Si JOH logra mejores precios para la energía y somete a su voluntad a los arrogantes empresarios de la energía térmica (Grupo Kafie, Grupo Larach, Grupo Nasser y Hermanos López), su imagen obtendrá mejores puntos entre la población y su prestigio irá en ascenso. La lucha entre estos grupos y el equipo del nuevo presidente es un reflejo del reacomodo obligado de los grupos de poder tradicionales, forzados a aceptar en sus espacios la irrupción de nuevos socios, provenientes de la burocracia corrupta, que exigen un pedazo del pastel y un lugar bajo la sombrilla protectora del Estado.

Y así, poco a poco pero con energía y voluntad evidentes, el presidente JOH va mostrando sus intenciones de cambiar ciertas cosas, reacomodar las relaciones de poder dentro de las cúpulas políticas tradicionales y abrir nuevos espacios para sus aliados y colaboradores.

### **El grave desafío fiscal**

**E**ntre todos los problemas que ha debido enfrentar para sacar adelante sus planes iniciales, el de las finanzas públicas es, sin duda, uno de los más importantes y decisivos. El desmesurado peso de la deuda pública total, pero especialmente la de carácter interno, se ha convertido en la “principal amenaza” al equilibrio fiscal y al funcionamiento ordenado y fluido del aparato estatal.

El gobierno anterior, con el aval, dicho sea de paso, del propio JOH desde el Congreso Nacional, dio rienda suelta al endeudamiento público en una forma tan desmesurada como irresponsable. En el año 2010, cuando inició la Administración de Porfirio Lobo, la deuda externa era de 2,847.4 millones de dólares; en 2011 subió a 3,223 millones; en 2012 fue de 3,646.8 millones y a finales de 2013 arribó a la suma de 5,192.8 millones de dólares, lo que quiere decir que el ex presidente Lobo y su equipo económico endeudaron al país a nivel internacional en 2,345.4 millones de dólares, o sea un 82.4% en términos porcentuales durante los cuatro años de su periodo gubernamental. ¡Un endeudamiento de 586.5 millones de dólares por año, 48.9 millones por mes y un millón 630 mil dólares por día!

El monto de la deuda externa a finales de 2013 es casi igual al que había diez años atrás, en diciembre de 2004 (5,208.7 millones de dólares, el más alto en la historia del país hasta entonces), cuando el país fue incluido dentro de la Iniciativa de Países Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés) y favorecido con una millonaria donación que le permitió un transitorio alivio en su permanente crisis fiscal.

A la gravedad de la deuda externa se debe sumar la difícil situación por la que atraviesa Honduras en materia de deuda interna. Al cierre fiscal de 2013, la deuda interna alcanzó ya los 58,464.8 millones de lempiras (aproximadamente unos 2,852 millones de dólares), de los cuales el 80% se vence en los próximos cuatro años, es decir durante el periodo gubernamental de JOH. Se debe tomar en cuenta que la deuda interna ha sido pactada a corto plazo y a elevados intereses (a veces hasta del 16%), lo que la vuelve más difícil de manejar. En este año, de acuerdo a los cálculos del Presupuesto General de la Nación recientemente aprobado, el gobierno de JOH deberá pagar 18,510 millones de lempiras (unos 903 millones de dólares) en concepto de servicio (abonos de capital e intereses) de la deuda interna, lo que equivale casi al 18% del presupuesto global del país, un monto apenas inferior al que el Estado dedica a la educación pública.

Entre los servicios de la deuda interna y de la externa, el Estado deberá pagar en este año unos 27 mil millones de lempiras, o sea el equivalente a unos 1,320 millones de dólares, una cifra que representa casi la mitad de las remesas familiares recibidas por el país, fuente invaluable de soporte al precario equilibrio macroeconómico.

La crisis de las finanzas públicas queda reflejada en la evolución del déficit fiscal con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). En el año 2010, inicio de la Administración nacionalista bajo el mando de Porfirio Lobo, el déficit fiscal fue de 4,8%, equivalente a unos 14 mil millones de lempiras de entonces; al año siguiente, en 2011, fue de 4,6%, igual a unos 15 mil millones de esa época; en 2012 alcanzó el 6%, igual a 21 mil millones de lempiras, y al ter-

minar el 2013 fue de 7.7%, o sea unos 30 mil millones de lempiras (más o menos unos 1,464 millones de dólares).

Así están las cosas en el primer mes de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández (JOH). Su inusitado activismo y su evidente voluntad por hacer frente a todos los desafíos habidos y por haber, deberán ser suficientes para manejar una situación tan complicada y difícil. Ojalá que así sea, para bien del Estado y la sociedad hondureña.

# MARZO

## 2014

---

### La situación política

**E**n su segundo mes de gobierno, el presidente Juan Orlando Hernández ha continuado con su “*activismo*” inusitado, haciendo actos de presencia en los más diversos lugares y ocupándose de casi todos los detalles de la administración pública. JOH, como le suele llamar la prensa por las iniciales de su nombre, se muestra incansable, un tanto autoritario y siempre dispuesto a buscar apoyo y simpatía entre la población, como si se encontrara en una permanente campaña electoral.

Esta actitud, más parecida a la de un candidato que busca votos y no la de un presidente en funciones, ya ha empezado a generar suspicacias y sospechas entre la clase política tradicional del país. A ello se ha sumado el cada vez más intenso rumor sobre las intenciones oficiales de reformar la Constitución de la República para permitir la reelección presidencial (Honduras, Paraguay y México, en América Latina, son los tres países en donde la reelección presidencial está prohibida). En recientes declaraciones a la prensa local, el ex presidente Rafael Leonardo Callejas dijo estar a favor de la reelección presidencial, pero aclaró que la misma debe ser “*alterna*” y no “*continua*”, es decir que ningún presidente puede reelegirse inmediatamente después de cumplir su periodo gubernamental; deberá esperar al menos cuatro años más para poder aspirar por segunda vez al solio presidencial. La declaración de Callejas ha estimulado el debate, cada vez más abierto y directo, sobre un asunto que en el pasado ha sido considerado como un tema tabú en Honduras. Diario La Tribuna, propiedad del ex presidente liberal Carlos Flores, se ha sumado a la campaña, promoviendo opiniones favorables a la reelección alterna (Flores, un político ambicioso y soberbio, no disimula sus pretensiones de volver a ser presidente de la República) y, por lo mismo, a la reforma constitucional que se requiere para hacerla viable.

Y aquí está la primera gran dificultad. Para reformar la Constitución se requieren las dos terceras partes del total de diputados del Congreso Nacional, es decir 86 de los 128 legisladores. El partido de gobierno sólo cuenta con 48 y su aliado ocasional, el partido Liberal, dispone de 27, con lo que la

---

alianza libero-nacionalista reuniría sólo 75 votos; le faltarían 11 votos más, los que podría obtener por la vía del soborno o el chantaje entre las filas de los partidos de la oposición. La historia del parlamento hondureño está repleta de episodios casi grotescos sobre la forma en que se negocian las alianzas, la compra de votos, el pago de sobornos y los arreglos inmorales de todo tipo para obtener la aprobación, modificación o rechazo de las leyes sometidas a discusión.

No es casual que, según versión privada del ex presidente y hoy diputado Manuel Zelaya, líder de la bancada de LIBRE en el Congreso Nacional, desde Casa Presidencial le han enviado mensajeros para conocer su opinión sobre la posibilidad de reformar la Constitución en este año y levantar la prohibición a la reelección presidencial, ya sea continua o alterna. El mensaje también ha llegado desde fuera del país, desde Nicaragua, cuando Daniel Ortega, quien está empeñado en promover su reelección permanente, ha avisado a Zelaya sobre las intenciones de JOH de promover su posible reelección presidencial en las elecciones del año 2017, es decir continuar ocupando la silla presidencial por, al menos, otros cuatro años más al concluir el presente periodo gubernamental. Cada vez es más pública y visible la intención del actual presidente hondureño por mantenerse como huésped indefinido en Casa Presidencial.

Durante la reciente Convención Nacional del partido gobernante, celebrada el día 15 en la ciudad central de Siguatepeque, la mayoría de los oradores, comenzando por el propio JOH, no vacilaron en proclamar sus intenciones de gobernar indefinidamente, *“al menos por unos cincuenta años más...”*. La Convención sirvió para dar un respaldo total al gobierno de JOH y avalar todas sus iniciativas políticas en los primeros días de su mandato. Al mismo tiempo, puso de manifiesto el control casi avasallador que JOH está logrando gradualmente dentro de las estructuras y eslabones orgánicos del partido Nacional. Todo indica que el liderazgo de JOH se sigue afianzando, en desmedro y perjuicio de los viejos liderazgos tradicionales que han estado en manos de los antiguos dirigentes del partido. Da la impresión que una nueva generación de políticos se va apropiando poco a poco de las estructuras del viejo partido conservador, forzando reacomodos desagradables y controversiales en los cuadros de mando y en las estructuras del poder partidario. JOH pareciera que les está ganando la partida.

Sus antiguos oponentes, especialmente el ex alcalde capitalino y hoy flamante Designado presidencial, Ricardo Álvarez, se van gradualmente evaporando en el escenario nacional. Lo mismo le sucedió al otrora aspirante presidencial y ex ministro de obras públicas, Miguel Pastor, reducido hoy casi al anonimato y la soledad política. También le pasa algo parecido a Óscar Álvarez, el que fuera influyente ministro de seguridad en el gobierno de Ricardo Maduro y en buena parte del periodo gubernamental de Porfirio

Lobo. Óscar, luego de salir electo diputado como “*el más votado y popular*” en el partido Nacional (PN), hoy ha quedado relegado a la jefatura de la bancada nacionalista en el Parlamento, un cargo que no tiene ya la relevancia ni influencia de antaño.

Así, de esta forma, poco a poco, JOH va consolidando su control del partido y relegando a un lejano segundo plano a todos aquellos que pudieran sufrir la tentación de convertirse en aspirantes presidenciales para el año 2017. No cabe duda que la batalla interna en el partido de gobierno será cada vez más directa y feroz, lindando casi con el canibalismo político, como ya se ha empezado a ver en el caso de la persecución de los corruptos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, cuyo director, hoy prófugo de la justicia, fue uno de los financistas (con dinero de la corrupción, por supuesto) de la campaña electoral de Ricardo Álvarez cuando éste intentaba convertirse en el candidato presidencial del PN, relegando a un segundo lugar al hoy triunfante JOH.

No es casual que la primera baja en el gabinete ministerial de JOH se haya producido apenas 34 días después de haber iniciado su periodo gubernamental, cuando Jorge Lobo, hijo del ex presidente Porfirio Lobo, presentó su renuncia irrevocable al cargo de ministro de Recursos Naturales. Aunque la nota de renuncia alegaba motivos personales y razones un tanto intrascendentes, lo cierto es que el Lobo Jr. entró en conflicto con la influyente ministra de Comunicación y Estrategias del gobierno, Hilda Hernández, hermana querida de JOH y una de las personas que con mayor dedicación y esmero se dedica a acaparar cuotas de poder e influencia en la Administración de su hermano.

A la par de sus éxitos en el paulatino control del partido, JOH también se ha anotado puntos importantes en la gestión del gobierno. Con actitud firme y decidida, logró doblar la mano a algunos de los llamados “*empresarios térmicos*” que venden la energía al Estado a precios descaradamente altos y onerosos. JOH les amenazó con cancelar los contratos y comprar la energía en Guatemala si no aceptaban nuevas condiciones de precios. Al final, dos de las grandes empresas de energía térmica -LUFUSSA y ELCOSA- terminaron vendiendo 113 megavatios de energía en las condiciones planteadas por el gobierno, quien, en las nuevas condiciones, obtendrá un ahorro estimado en 1,500 millones de lempiras (unos 73 millones de dólares) en los próximos cuatro años.

En materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, aunque han habido algunas acciones importantes, con gran despliegue mediático, lo cierto es que la situación no da señales claras de haber mejorado, tal como afirma el gobierno por todos los medios posibles a su alcance. Los homicidios siguen a la orden del día, con el agravante de que en los últimos dos

---

meses se han intensificado, en brutalidad y cantidad, las cada vez más constantes masacres de jóvenes. Esta situación ha dado pie para que los sectores más críticos de la oposición acusen al gobierno de promover políticas de *"limpieza social"*, que convierten en sus víctimas más propicias principalmente a los jóvenes de ambos sexos. El gobierno niega esas acusaciones y ha pedido a la Organización de las Naciones Unidas el nombramiento de una Misión permanente para vigilar el tema de los derechos humanos.

Y, a propósito de los derechos humanos, JOH y sus diputados se anotaron un triunfo al lograr elegir a un hombre de su confianza y con vieja lealtad partidaria como nuevo Comisionado nacional de los derechos humanos. Ante la imposibilidad de forzar la reelección de Ramón Custodio (quien ya ha estado dos periodos, es decir ocho años, al frente del CONADEH), la alianza libero-nacionalista debió decantarse por Roberto Herrera, un viejo diplomático, abogado en derecho internacional, disciplinado militante del partido Nacional y a quien sus críticos reprochan no saber mucho del tema de los derechos humanos ni haberse involucrado nunca en su defensa y promoción. Custodio era el candidato favorito del ex presidente Carlos Flores, quien, en vano, trató de imponer su candidatura en intensas negociaciones con el partido de gobierno, en base a la alianza real que los liberales mantienen con los nacionalistas en el seno del Congreso Nacional. Pero Custodio estaba muy desprestigiado, después de haber jugado un vergonzoso papel en la defensa del golpe de Estado del 28 de junio del año 2009, y ha sido ampliamente repudiado por la comunidad internacional de defensores de los derechos humanos. El gobierno de JOH, a tono con su lema de *"cambiar a Honduras"*, necesitaba un nuevo rostro al frente del CONADEH, aunque ese rostro fuera el del abogado Roberto Herrera.

En la lucha contra el narcotráfico, los Estados Unidos, aunque un tanto a regañadientes, aceptaron colaborar con Honduras en el despliegue del llamado *"escudo antidrogas"* a nivel marítimo y terrestre para impedir que la droga entre o salga del territorio hondureño. En cambio, a nivel aéreo, la colaboración norteamericana se ha debilitado, en señal de represalia por la insistencia de JOH de poner en práctica la controversial Ley de protección del espacio aéreo hondureño. Washington considera que tal ley violenta los principios de la navegación aérea internacional y pone en riesgo la seguridad de la aviación civil en el área. Por esa razón, Estados Unidos se ha negado a seguir proporcionando información precisa a Honduras sobre las avionetas que ingresan al espacio aéreo del país. Honduras ha comprado tres radares en Israel, de los cuales uno ya está instalado en la costa norte (La Mosquitia) del territorio nacional y los otros dos llegarán pronto. Todo esto, como dijo JOH a la prensa, en un lastimero tono de reproche, *"lo estamos haciendo solitos"*, es decir sin asistencia de los aliados tradicionales, los Estados Unidos.

Pero no sólo radares ha comprado Honduras. También ha adquirido en condición de alquiler varias lanchas y embarcaciones artilladas en Holanda, en una curiosa y extraña operación que despide un intenso tufillo a corrupción. De esta forma, con el pretexto de la lucha contra los traficantes de drogas, el país ha entrado en una onerosa carrera armamentista que ya ha cobrado fuerza en los países vecinos. Toda la región, con la excepción de Costa Rica, se está armando en forma inusitada y preocupante, adquiriendo aviones (El Salvador y Guatemala), helicópteros (El Salvador y Nicaragua), armamento, radares y embarcaciones (Honduras), como si se estuviera preparando para nuevas y sangrientas confrontaciones bélicas en el suelo centroamericano.

En circunstancias tan delicadas y peligrosas, causa temor la intensidad que va cobrando el reclamo salvadoreño sobre la isla Conejo, un peñasco de medio kilómetro de extensión ubicado en el Golfo de Fonseca, zona marítima en la que comparten soberanía los tres países limítrofes: Honduras, Nicaragua y El Salvador. El gobierno de JOH, utilizando el beneficioso efecto mediático que tiene el tema de la soberanía nacional, ha hecho un desplante de nacionalismo y ha inaugurado un helipuerto y un muelle en el islote controversial. De inmediato, el gobierno salvadoreño de Mauricio Funes, en un alarde de tardío patriotismo cuando está a las puertas de su salida, ha condenado la acción hondureña y ha exigido la salida inmediata de las tropas hondureñas de la isla Conejo. De acuerdo a la Cancillería, la soberanía hondureña sobre esa isla nunca ha estado en discusión, razón por la cual la misma no fue incluida entre los territorios disputados en el juicio internacional en la Corte de la Haya, Holanda, que finalmente resultó favorable en gran parte a Honduras, mediante sentencia dictada en septiembre del año 1992.

Tegucigalpa espera que con el ascenso del nuevo presidente salvadoreño, el ex guerrillero Salvador Sánchez, actual vicepresidente en el gobierno de Funes, se puedan crear nuevos espacios de negociación y se abra un necesario compás de espera que permita bajar la tensión y buscar fórmulas pacíficas y diplomáticas para manejar el conflicto. Ojalá que así sea, aunque no hay muchas razones para albergar suficientes esperanzas.

Ya casi para concluir el mes de marzo, llegó a Tegucigalpa la esperada Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que viene a revisar las cuentas nacionales y valorar la posibilidad de concertar un nuevo acuerdo con el gobierno hondureño que, dicho sea de paso, está casi desesperado por lograrlo y recibir la urgente bocanada de aire que representan los recursos frescos para el apoyo presupuestario que urge consolidar. La Misión del FMI, según Roldán Duarte, alto funcionario del Banco Central (BCH) y presidente del Colegio de Economistas (CHE), propondría al menos tres condiciones para poder llegar a firmar un acuerdo con el gobierno de JOH:

- a) Cumplir con las metas de recaudación fiscal fijadas para el año 2014, estimadas prudentemente ahora en unos 64 mil millones de lempiras (unos 3,122 millones de dólares). En otras ocasiones se ha dicho que la suma a recaudar es de 69 mil millones de lempiras.
- b) Reducción del gasto estatal en al menos unos cuatro mil millones de lempiras (unos 195 millones de dólares), para tratar de cumplir la ambiciosa meta de reducir el actual déficit fiscal de 7,7% del Producto Interno Bruto a un 4,7% calculado por el BCH para finales de este año.
- c) Buscar y encontrar una solución definitiva a la crisis financiera crónica en que se encuentran las empresas estatales, especialmente la de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y la de Energía (ENEE). Se estima que las pérdidas de la ENEE (por mala gestión, robo de energía, exceso de empleados, pérdidas “técnicas” y “no técnicas” por el orden del 32% etc.) el año pasado sumaron unos 439 millones de dólares, casi la mitad del déficit fiscal del Estado.

A estas condiciones habría que sumar las tradicionales exigencias para acelerar el ritmo de la devaluación de la moneda nacional, que el BCH ha estimado que en este año será de 3 o 4%, lo que quiere decir que el dólar valdría un poco más de 21 lempiras a finales de diciembre.

El gobierno, quizás con un poco de optimismo, considera que el acuerdo con el FMI podría ser firmado en el tercer trimestre de este año.

# ABRIL 2014

---

## La situación política

**E**l mes de abril, como ya es costumbre todos los años, concluyó con la preparación de los desfiles dedicados al Primero de Mayo, día internacional del trabajo y fecha en que las organizaciones sindicales del país organizan manifestaciones y fiestas callejeras, durante las cuales dan rienda suelta a sus protestas y reclamos frente a los gobiernos de turno. En esta ocasión los desfiles fueron realmente masivos y se produjeron en todos los principales centros urbanos del país. Participaron no solo los trabajadores sindicalizados sino también los integrantes del llamado Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que le dieron, además de colorido y entusiasmo a las marchas, también el tono radical y confrontativo de todas sus reivindicaciones. Los dirigentes del partido Libertad y Refundación (LIBRE), incluyendo la mayoría de sus 36 diputados, desfilaron junto a los manifestantes y el propio ex presidente Manuel Zelaya fue uno de los oradores principales en la tribuna en Tegucigalpa, mientras en San Pedro Sula, en la principal ciudad del norte del país, su esposa, la ex candidata presidencial Xiomara Castro, encabezó las marchas junto a los trabajadores.

La naturaleza de las demandas y reclamos no ha variado mucho en los últimos años. Esta vez, los dirigentes obreros y los líderes del FNRP resumieron en 17 puntos sus peticiones y exigencias ante el gobierno que preside el nacionalista Juan Orlando Hernández (JOH). El contenido del pliego de demandas va desde la “refundación” del Estado por la vía de una Asamblea Nacional Constituyente hasta la derogación de las leyes laborales que, como la Ley del empleo temporal, anulan las conquistas del sindicalismo, según la opinión de los dirigentes obreros. Se incluye también la exigencia de una nueva Ley de transformación agraria, la “renacionalización” de los servicios públicos “privatizados”, el rechazo a la “municipalización” o “privatización” del agua, la reducción del precio de los combustibles, el respeto a la libertad sindical y convenios internacionales que favorecen a los trabajadores, la desmilitarización de la sociedad, la lucha contra la impunidad y la corrupción y, por supuesto, el cambio del llamado modelo neoliberal por “*un modelo social al servicio de las mayorías*”. Lo único realmente nuevo en

este año ha sido la propuesta, al parecer en camino de concertación real, de crear una sola Central obrera que aglutine en su seno a las tres federaciones sindicales que actualmente existen: la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), la Central General de Trabajadores (CGT) y la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH). Sin embargo, las diferencias ideológicas que siempre han impedido la fusión de las diferentes organizaciones sindicales en una Central única, siguen siendo un obstáculo real para cualquier esfuerzo unitario en el seno del llamado movimiento obrero hondureño. En su interior persisten las corrientes socialdemócratas (CTH), las social cristianas (CGT) y la izquierda clasista (CUTH).

En síntesis, los reclamos obreros en este año no difieren mucho de los mismos reclamos planteados ante el gobierno anterior el año pasado. De igual manera, en esta ocasión, las marchas obreras mostraron un alto grado de politización partidaria, siendo el partido LIBRE uno de los principales protagonistas en las mismas. Algunos dirigentes sindicales mostraron disgusto por la presencia de los líderes de LIBRE pero, al final, no tuvieron la fuerza suficiente para impedir que el ex presidente Zelaya se convirtiera en el principal orador del evento. De hecho, puede afirmarse que, al igual que en los años anteriores (desde 2009 a la fecha), las manifestaciones callejeras del Primero de Mayo han estado influidas y en gran medida conducidas por los líderes de la llamada Resistencia Popular y, desde el año 2013, también por los dirigentes de LIBRE. El movimiento obrero organizado y demás grupos sociales son, en gran medida, la esencia y la fuente de las bases políticas del FNRP y de LIBRE.

Los crecientes y chocantes escándalos de corrupción puestos al descubierto en los primeros meses del gobierno de JOH, ocuparon un lugar destacado en las pancartas que portaban los manifestantes obreros. A los casos de corrupción descubiertos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se han sumado ahora los del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEM), en donde su antiguo director, el veterano periodista y furibundo nacionalista Andrés Torres, había organizado una impresionante trama de corrupción mezclada con prácticas clientelistas y de abierto nepotismo. Torres culpa al presidente JOH de haber iniciado una campaña de desprestigio y persecución política en su contra, en venganza por no haber apoyado la precandidatura de JOH en las elecciones internas del partido Nacional (PN) en noviembre de 2012. Aunque la corrupción de Torres y Cía. es evidente y monstruosa, al igual que sucede con la mafia corrupta que funcionaba en el IHSS en torno a su ex director Mario Zelaya (hoy convertido en prófugo de la justicia), lo cierto es que en ambos casos se percibe un cierto tufillo a venganza política y ajustes de cuentas internos a nivel del partido de gobierno. Es la misma trama de canibalismo político orquestada por JOH y sus colaboradores áulicos en contra de sus adversarios políticos al interior de las filas nacionalistas.

Una de las víctimas directas de estas represalias es el propio Designado presidencial (especie de Vicepresidente venido a menos) Ricardo Álvarez, ex alcalde capitalino y el principal oponente de JOH en la lucha interna del PN por la nominación presidencial. Álvarez está virtualmente marginado en el presente gobierno. Su cargo es más bien decorativo y sus funciones están reducidas a actos protocolarios sin mayor trascendencia ni valor político. Lo mismo sucede con varios de sus antiguos colaboradores, a quienes JOH no perdona ni las críticas ni los insultos que le dirigieron en lo más álgido de la lucha interna en el PN para hacerse con la candidatura presidencial. JOH, por lo visto, es un hombre vengativo, incapaz de olvidar una crítica o un reproche que él asume como si fueran ofensas personales.

Ese estilo sectario y cargado de autoritarismo, intolerante y casi despiadado, se va imponiendo gradualmente como una práctica diaria en el ejercicio del poder gubernamental. Los funcionarios del régimen juanorlandista, poco a poco, se van acomodando a las exigencias del gobernante y aprendiendo a comportarse con el sigilo y el bajo perfil suficientes para no provocar las iras de Casa Presidencial. Pero, al mismo tiempo, ese estilo autoritario y prepotente ya ha empezado a causar problemas al gobierno. En el Congreso Nacional, el presidente nacionalista del mismo, el político sureño Mauricio Oliva, no ha podido generar corrientes de consenso y acuerdos que le permitan manejar el Poder Legislativo con la solvencia política necesaria en un clima de relativa tranquilidad y armonía. Lo mismo sucede en el Poder Judicial, en donde los jueces escogidos por JOH, los que integran la llamada Sala constitucional, se comportan de una manera tan burda y sumisa que generan más problemas que soluciones.

El caso más reciente que ilustra lo afirmado anteriormente es el de la elección del alcalde del municipio de San Luis, en el departamento central de Comayagua. Habiendo ganado la Alcaldía el candidato liberal, por la vía del sorteo con moneda ante un curioso empate, los magistrados de la Sala constitucional, afanados en satisfacer la vocación concentradora de poder que emana de la Casa de gobierno, decidieron, en un fallo tan insólito como inesperado, rechazar la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y revertir el resultado, concediendo el triunfo a su correligionario político, el derrotado candidato nacionalista. Como era de esperar, los liberales no se quedaron de brazos cruzados y protestaron de inmediato, exigiendo la celebración de nuevas elecciones o la convocatoria inmediata a un plebiscito para que el pueblo decida quien deberá ser el alcalde en el periodo 2014-2018.

Las consecuencias de este zipizape político han ido más allá de lo que se imaginaron sus autores responsables. Aprovechando el enojo de los liberales ante la burda maniobra de los nacionalistas (*"cachurecadas"* les suele llamar a estas maniobras la voz popular), los dirigentes de LIBRE y el partido Anticorrupción (PAC) se han reunido con los líderes liberales para re-

plantear una alianza política de las tres fuerzas parlamentarias que, en caso de conformarse, daría al traste con el dominio nacionalista en la cámara legislativa. Por el momento, los primeros resultados de esa reunión apuntan en el sentido de formar un bloque opositor en contra de la maniobra nacionalista y, de paso, asegurar la representación de LIBRE y el PAC en la estructura del TSE, asignando un representante a cada uno de los dos nuevos partidos para asegurar mayor equidad y mejor representatividad en el organismo electoral. Se habla también de iniciar los trámites para llevar a cabo un juicio político contra los magistrados de la Sala constitucional por su intromisión grosera en asuntos político-electorales que, por Ley, le competen de manera exclusiva al TSE.

Todavía es muy temprano para juzgar los alcances e impacto de esta naciente alianza política entre los legisladores liberales y los de LIBRE y del PAC. Incluso no es muy seguro que todos los diputados de estas bancadas acepten con disciplina partidaria y voluntad suficiente los arreglos y acuerdos a que han llegado sus dirigentes en la primera reunión tripartita. Sin embargo, el sólo hecho de reunirse, ya es un hecho novedoso y saludable para la práctica democrática en la vida nacional. Si la alianza funciona y se mantiene, el partido gobernante tendrá muchas dificultades para controlar el Congreso Nacional y deberá hacer concesiones importantes a los opositores si quiere conservar la llamada “*gobernabilidad*” política del país.

La existencia de una alianza tripartita entre los principales partidos de la oposición (PL, LIBRE y PAC) dejaría al PN en una posición bastante difícil y comprometida. Al mismo tiempo, fortalecería la tendencia del Poder Ejecutivo, valga decir del presidente JOH, a reforzar sus facultades y poderes a costa de reducir el ámbito de influencia del Poder Legislativo, sobre todo si el control sobre ese poder se convierte en una tarea difícil y casi imposible para la bancada nacionalista.

Las perspectivas políticas del país podrían sufrir modificaciones importantes en los próximos meses, y el gobierno, seguramente, se vería obligado a modificar el rumbo o, por el contrario, a acentuar y consolidar sus tendencias concentradoras y autoritarias. En cualquiera de los dos escenarios, el país podría sufrir alteraciones importantes en su clima de gobernabilidad política y manejo adecuado de la conflictividad social. Lo que suceda en las próximas semanas en el Congreso Nacional -si funciona o no la alianza tripartita- nos permitirá entender mejor hacia dónde va la sociedad hondureña y cuáles son sus perspectivas en materia de gobernanza democrática y tranquilidad política.

Mientras llega ese momento, el país está en angustiosa espera para conocer el desenlace de la extradición del narcotraficante Carlos Arnaldo “*el negro*” Lobo, a quien los norteamericanos persiguen desde hace algunos años para llevarlo ante sus propios tribunales en Estados Unidos. Después de

algunas vacilaciones y frustrados intentos para evadir la responsabilidad, los jueces de la Corte Suprema de Justicia han decidido entregar a Lobo a la justicia estadounidense, aunque todavía no se sabe exactamente cuándo se llevará a cabo el traslado del acusado hacia el suelo norteamericano. Los magistrados locales temen, con justa razón, por lo demás, que la entrega de Lobo marque el inicio de una campaña de venganza y represalias por parte de los narcotraficantes extranjeros y nacionales en contra de las autoridades hondureñas, especialmente los operadores del sistema de justicia (policías, fiscales y jueces). Aunque oficialmente no se ha dicho nada al respecto, lo cierto es que en los pasillos judiciales se respira un inocultable aire de temor ante la reacción que pudieran tener los barones del crimen organizado en Honduras.

El Ministerio de seguridad, al margen de las legítimas preocupaciones en torno a la extradición de Lobo, sigue empeñado en tratar de convencer a la opinión pública que las nuevas políticas de seguridad, basadas en la creciente incorporación de los militares en las llamadas "*Fuerzas interagenciales*", están dando los resultados esperados y han logrado reducir los índices de la criminalidad en porcentajes considerables. Pero la realidad diaria del país desmiente a la Policía y da la razón al Observatorio de la Violencia, adscrito a la Universidad Nacional, cuyas cifras estadísticas gozan de más credibilidad y estima tanto a nivel nacional como internacional.

Se ha desatado una especie de "*guerra siniestra*" entre los policías y la Academia por el tema de los índices de la criminalidad, especialmente por la llamada tasa de homicidios por cien mil habitantes. Mientras el ministro de seguridad, el otrora influyente Arturo Corrales, insiste en que el número de homicidios diarios oscila entre 15 y 16, la Universidad sostiene que el número anda entre 18 y 20 muertos diarios por obra de la violencia ligada al crimen organizado, las pandillas y todo tipo de delincuencia común. Sea como sea, lo cierto es que todos los días se producen numerosas muertes y la población vive en un Estado de angustia permanente y miedo crónico al salir a las calles. En los últimos días han aumentado las muertes por violencia criminal de menores de edad y jóvenes de ambos sexos. Las masacres se repiten con una frecuencia alarmante y el terror se apodera de la gente.

Como para complicar más las cosas, el país está siendo señalado frecuentemente en el campo internacional por la constante violación a los derechos humanos y los altos grados de impunidad que prevalecen. Cada vez con más frecuencia se conocen denuncias a nivel mundial por la muerte de periodistas, abogados, personas pertenecientes a las llamadas "*minorías sexuales*" (los denominados "*crímenes de odio*"), campesinos, indígenas, periodistas y mujeres. La imagen de Honduras, en materia de derechos humanos, según varios organismos internacionales, solo es comparada con las de Cuba y Venezuela a nivel latinoamericano.

---

Pero, a pesar de estos problemas, el presidente JOH no cesa en sus esfuerzos por divulgar una imagen diferente del país siempre que tiene oportunidad en sus cada vez más frecuentes viajes al extranjero. Al mismo tiempo, ha puesto en marcha una millonaria campaña denominada “País imagen”, para transmitir una visión distinta de Honduras ante los ojos de los inversionistas y los turistas extranjeros a fin de que vengan al país, inviertan en las llamadas Zonas de Desarrollo Económico (ZEDEs) y disfruten de los encantos naturales del territorio nacional. El optimismo de JOH es tan fuerte y notorio como la voluntad presidencial para convencer a la opinión pública local de que, como dice el lema presidencial, “Honduras está cambiando”.

Quizás para comprobar la veracidad de estas afirmaciones y, por supuesto, para revisar las cifras de las cuentas nacionales, llegó al país en este mes la acostumbrada Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que, después de una minuciosa inspección de las entidades correspondientes y sus archivos de datos, concluyó en lo de siempre: reducción del gasto público, incremento de la recaudación tributaria por la vía de la ampliación de la base de contribuyentes, manejo adecuado del déficit fiscal, solución definitiva a las crisis financieras de las empresas estatales (HONDUTEL, ENEE, SANAA, etc.) y, por supuesto, explorar la posibilidad de “flexibilizar” la paridad del lempira con el dólar (léase devaluación).

Al partir, los enviados del FMI no dejaron de alimentar las esperanzas en los técnicos del gobierno sobre la posibilidad de firmar un Acuerdo de más largo alcance en el segundo semestre del presente año. Honduras necesita urgentemente la firma de un nuevo convenio con el Fondo para equilibrar un tanto sus finanzas y, sobre todo, tener acceso a recursos frescos que le permitan afrontar con alguna posibilidad de éxito la grave crisis fiscal que actualmente padece.

# MAYO 2014

---

## La situación política

**E**ste ha sido un mes especialmente trágico. Numerosas masacres han acontecido en todo el territorio nacional, con el agravante de que en muchas de ellas las víctimas han sido los niños. El país, a pesar de estar curado contra el espanto a causa de la violencia cotidiana, ha quedado conmovido y horrorizado ante la brutalidad de los crímenes cometidos.

El gobierno, convencido de que la represión militar y policial es la única salida posible, ha reforzado los cuerpos policiales, especialmente la llamada Policía Militar de Orden Público (PMOP), incrementando su número (mil nuevos agentes) e intensificando los patrullajes conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Al mismo tiempo, el presidente Juan Orlando Hernández (JOH) continúa empeñado en crear nuevos órganos policiales, por la vía de potenciar las llamadas “*Fuerzas interagenciales*” o “*Fuerzas de tarea de carácter interinstitucional*”, integradas por policías, militares, fiscales, jueces y agentes de inteligencia. El más reciente organismo policial creado ha sido la llamada Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC, cien nuevos agentes, para empezar), adscrita al Ministerio Público, la que se ocupará de investigar aquellos delitos de mayor impacto social y complejidad especial (21 delitos en total), calificados así por la propia Fiscalía General. La ATIC se suma a las otras policías de reciente creación: la llamada Fuerza de Seguridad Interagencial (FUSINA), la Fuerza de Seguridad Aeroportuaria (FSA), la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), la Fuerza para combatir la evasión fiscal, etc. Hay una proliferación de fuerzas policiales especiales que, con frecuencia, se compartimentan entre sí, desarrollando cada una preocupantes niveles de autonomía y monopolio en el manejo y control de sus propias fuentes de información.

Mientras tanto, los índices de la criminalidad siguen siendo unos de los más altos y preocupantes en el continente americano. Aunque el gobierno, mediante una millonaria y avasalladora campaña mediática, se esfuerza por mostrar avances significativos en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, lo cierto es que la realidad le desmiente con frecuencia y muestra el verdadero rostro de la violencia cotidiana. Mientras el Ministerio de

---

seguridad, por un lado, y la PMOP, por el otro, insisten en presentar cifras sospechosamente maquilladas sobre los índices de homicidios diarios por cada cien mil habitantes, la Universidad Nacional, a través de su bien montado Observatorio de la Violencia, desmiente las cifras oficiales y divulga las suyas propias. A veces, esta *“guerra de las cifras”* da la impresión de ser una competencia siniestra en donde cada parte cuenta los muertos diarios desde ópticas muy diferentes. Y, mientras eso sucede, todos los días las calles de las ciudades se llenan de cadáveres.

Pero el acecho de la violencia y el preocupante clima de inseguridad prevaliente, no han sido obstáculo para que el gobierno de JOH celebre por todo lo alto los famosos primeros *“cien días”* del nuevo régimen, haciendo un despliegue publicitario digno de mejores causas y gastando cifras millonarias de las escuálidas finanzas públicas para comprar espacios y voluntades en los medios de comunicación social.

Frente a la algarabía del gobierno, algunos grupos y partidos de la oposición, el partido Liberal y LIBRE especialmente, publicaron sus análisis sobre los primeros cien días, destacando la gravedad de la crisis fiscal que padece el país, el agravamiento de los problemas de la seguridad y, sobre todo, la profundidad de los casos de corrupción descubiertos y aireados en público en organismos estatales como el Instituto de Seguridad Social, el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos, la Empresa Nacional Portuaria y, más recientemente, en el Instituto de la Propiedad. En todos ellos se han descubierto tramas de corrupción generalizada que comprometen generalmente a destacados militantes del partido de gobierno, con énfasis especial en aquellos que se opusieron a la candidatura de JOH en las elecciones primarias e internas de ese partido en noviembre del año 2012. Esta circunstancia da pie para pensar, no sin justificación debida, que la llamada *“cruzada anticorrupción”* emprendida por JOH y su grupo no es más que una forma disfrazada de ajustes de cuentas internos en las filas del partido Nacional. Si esto es así, más temprano que tarde, tales ajustes se traducirán en fracturas profundas en la unidad del partido y, por lo mismo, en su vulnerabilidad y debilitamiento para enfrentar la grave crisis por la que está atravesando el país.

A la par de las dificultades internas en el partido de gobierno, se deben sumar también los problemas derivados de la gravísima crisis fiscal por la que atraviesa el Estado, sobrecargado hasta más no poder por el peso de la deuda pública, de manera especial el componente interno de la misma. La situación es tan grave que el propio Banco Central, pocos días después de la visita de la Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), se vio obligado a reconocer que el déficit fiscal es más grande de lo que oficialmente se afirmaba (llega al 8% del Producto Interno Bruto) y que, en consecuencia, era preciso modificar la meta de reducción fijada para este año: se había calculado que se podría reducir a un 4,7%, pero hoy se habla ya de un 5,3%

del PIB). La situación, poco a poco, se va volviendo inmanejable. El gobierno buscar recursos por doquier y presiona a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) para que cumpla y supere las metas de recaudación señaladas para este año, unos 69 mil millones de lempiras (aproximadamente unos 3,450 millones de dólares, al cambio actual). La DEI hace lo que puede, pero su capacidad es limitada para reducir los altos niveles de evasión fiscal y, sobre todo, disminuir el fuerte impacto de las variadas y diversas formas de exoneración que favorecen a grandes empresarios y comerciantes del país (se estima que las exoneraciones anuales suman unos 1,175 millones de dólares, de acuerdo a cálculos realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo). Se impone la necesidad de una reforma tributaria profunda, que rompa los niveles de inequidad fiscal actualmente prevalentes y elimine la mayoría de las exoneraciones y privilegios incrustados en el sistema de recaudación fiscal del país.

Por si esto fuera poco, el gobierno de JOH ha debido enfrentar serios problemas en materia de gobernabilidad política en el seno del Congreso Nacional. Las protestas de los diputados de la oposición, en particular los del partido Libertad y Refundación (LIBRE), han arreciado y el Parlamento se ha convertido, por momentos, en un ámbito de violenta confrontación y de caos político. Las disputas llegaron a su punto más alto el día 13, cuando ante las protestas de los legisladores de LIBRE por las estrictas medidas de seguridad adoptadas para el ingreso a la Cámara Legislativa y ante las reiteradas negativas a concederles la palabra, el presidente del Congreso, el diputado nacionalista de Choluteca Mauricio Oliva, ordenó la militarización del inmueble, por lo que los pelotones de soldados, todos pertenecientes a la nueva policía militar PMOP, irrumpieron violentamente en la sala, lanzando bombas lacrimógenas y golpeando sin miramientos a los diputados de la oposición. Varios de los agredidos debieron ser conducidos de emergencia a los hospitales, mientras otros de los protestantes en la calle fueron golpeados y arrestados. El espectáculo resultó denigrante y sus imágenes dieron la vuelta al mundo.

Casi al mismo tiempo, luego de un incidente de tráfico frente a Casa Presidencial, fue brutalmente golpeado el Director de Casa Alianza, José Guadalupe Ruela, una institución muy respetable que se dedica a brindar protección a los llamados "*niños de la calle*". Los guardias que dan protección al presidente JOH arremetieron sin piedad en contra de un indefenso Ruela, por el simple hecho de haber golpeado con su auto a dos policías de la Guardia motorizada de Casa Presidencial. La virulencia de la reacción policial hizo sospechar que se trataba de una venganza, a causa de las constantes denuncias que realiza Casa Alianza en contra de las autoridades policiales y sus exigencias para acabar con la impunidad: tan solo en lo que va de este gobierno, según Casa Alianza, han sido asesinados 352 menores de edad (menores de 23 años) en todo el territorio nacional.

Como si no bastara con la golpiza, el gobierno se encargó de desatar una campaña de desprestigio en contra de Ruela, para lo cual utilizó los servicios de los grandes medios de comunicación afines por razones de pauta publicitaria a los deseos de Casa Presidencial. En fin, la conclusión es la siguiente: el “*caso Ruela*” ha servido para mostrar la recuperada brutalidad pública de la Policía y la intolerancia del gobierno ante la más elemental crítica de su gestión.

Pero, además, el “*caso Ruela*” tuvo otra consecuencia: revivió en la agenda pública, con fuerza renovada, el siempre candente tema de los derechos humanos y la brutalidad policial. Un total de 108 representantes en el Congreso de Estados Unidos enviaron una larga carta al Secretario de Estado norteamericano John Kerry, en la que solicitan la atención de su gobierno sobre lo que califican como “*grave situación*” de los derechos humanos en Honduras. Los legisladores, casi todos demócratas, piden a Washington considerar seriamente la suspensión de todo tipo de ayuda para las fuerzas militares y policiales de Honduras, mientras prevalezca una situación tan lamentable en relación con los derechos humanos. Se demanda la aplicación plena de la llamada “*Ley Leahy*”, por el apellido del Senador que la promovió y que ha permitido bloquear una parte de la ayuda originalmente destinada a las fuerzas de seguridad de Honduras.

A juzgar por las declaraciones un tanto despectivas del Vicepresidente del Congreso, el político nacionalista Antonio Rivera Callejas, quien pretendió ridiculizar y restar importancia a la carta de los legisladores norteamericanos, puede concluirse que el gobierno no le concedió la importancia debida a la protesta presentada en Washington. Sin embargo, pocos días después, Estados Unidos envió una delegación de alto nivel, encabezada por Michael Kozak, Subsecretario adjunto para temas de democracia y derechos humanos, a fin de discutir con el gobierno de JOH sobre el tema de los derechos humanos. En un gesto doblemente significativo, la Misión estadounidense se entrevistó por separado con organizaciones de la sociedad civil local y, lo más importante, realizó una visita de inspección a la peligrosa zona del Bajo Aguán, el punto geográfico más sensible en el asunto de los derechos humanos.

Pocos días después de la Misión Kozak, llegó a Casa Presidencial el jefe del Comando Sur, el General John Kelly, quien ya había visitado al presidente JOH en febrero recién pasado. La presencia de Kelly y algunas de sus declaraciones (de traducción dudosa) han sido utilizadas por los voceros gubernamentales como un ejemplo del respaldo de los militares norteamericanos a las políticas de seguridad aplicadas en Honduras y como una muestra del apoyo incondicional de Estados Unidos a la gestión de JOH, tratando así de bajar el impacto negativo causado por la carta de los 108 representantes.

En este mismo mes de mayo circuló ampliamente el informe definitivo de la Misión parlamentaria de observación de derechos humanos que visitó el país en abril y estuvo integrada por diputados españoles y miembros del reconocido Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA). El informe contiene una minuciosa descripción de la situación de los derechos humanos en Honduras y señala con precisión las graves responsabilidades del gobierno de JOH en el manejo del tema. Esta Misión también documentó las violaciones realizadas en la conflictiva zona del Bajo Aguán.

El día 12 se produjo un misterioso atentado criminal contra Rafael Barahona, ex candidato a alcalde de la capital por parte del partido LIBRE y actual regidor de la Municipalidad capitalina. Afortunadamente la víctima logró salir airosa del intento de homicidio, aunque con algunas heridas leves. La realización de este atentado contra un importante dirigente político de la oposición ha caldeado más los ánimos y enrarecido el ambiente ya de por sí tenso y peligroso.

## **Economía y sociedad**

**E**l alza incontrolada en el precio de los frijoles produjo una protesta social generalizada. El gobierno debió reaccionar rápido y con energía, ofreciendo recompensas monetarias a quienes denunciaran a los acaparadores. Aunque se logró capturar a unos pocos intermediarios, lo cierto es que los precios no bajaron y la gente no oculta su malestar por el alto costo de uno de los granos básicos clave en la alimentación de los hondureños.

Al igual que sucede con las cifras sobre los índices de la inseguridad y el crimen, también existe una *“guerra de cifras”* en torno a los datos reales sobre el monto de la deuda pública, tanto externa como interna. Las partes contendientes son el gobierno, por un lado, y algunos centros de investigación independientes como el Foro Social de la Deuda externa (FOSDEH), por el otro. De acuerdo al Ministerio de Finanzas y el Banco Central, la deuda total de Honduras asciende a unos 8 mil millones de dólares, representando un 42% del Producto Interno Bruto. En cambio, los economistas independientes y los técnicos del FOSDEH aseguran que la deuda es mucho más y alcanza ya los 13 mil millones de dólares, llegando a representar el 63% del PIB. Sólo la llamada *“deuda flotante”*, según el FOSDEH, suma un poco más de los 2,500 millones de dólares, una suma que generalmente el gobierno no incluye en sus cálculos globales sobre la deuda.

En el año 2008, inmediatamente antes del golpe de Estado, cada hondureño debía 387 dólares; hoy, a diciembre de 2013, cada uno debe 930 dólares, según las estimaciones del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales

(ICEFI). De acuerdo a la misma fuente, de cada lempira recaudado vía impuestos por el Estado en el año 2008, seis centavos se utilizaban para pagar el servicio (intereses más amortización del principal) de la deuda; en cambio, en 2013, se destinaron a ese fin 40 centavos.

La inversión extranjera, a pesar de los esfuerzos de promoción que hace el gobierno dentro y fuera del país, no acaba de arrancar con la fuerza esperada. De acuerdo a cifras divulgadas por el Banco Central, en el primer trimestre de este año la Inversión Extranjera Directa (IED) fue de apenas 239,6 millones de dólares, 61 millones menos, es decir el 25,4%, que en el mismo periodo del año anterior, cuando alcanzó los 300,6 millones. El año pasado la IED llegó a la suma de 1,033 millones de dólares y en este año se espera que alcance tan solo 1,099 millones.

Alden Rivera, nuevo ministro de inversiones y desarrollo de JOH, se muestra ligeramente optimista con respecto a las perspectivas en relación con la IED. Estima que en el periodo 2014-2017 esa inversión llegará a la suma de 5 mil millones de dólares, tomando en cuenta que en el periodo anterior (2010-2013) fue de 4,102 millones.

Mientras hay tiempo para comprobar la veracidad de estos pronósticos, el valor del dólar en el mercado cambiario alcanzó ya los 21 lempiras, una cifra que, según los cálculos oficiales, se alcanzaría en diciembre de este año.

# JUNIO 2014

---

## La situación política

**E**n este mes de junio, los niños siguieron siendo destacados protagonistas del drama cotidiano en que vive el país. Si en el mes anterior, muchos niños fueron víctimas de las horribles masacres que se llevaron a cabo en distintos puntos del territorio nacional, en este mes de junio los menores de edad, esta vez en forma masiva y creciente, protagonizaron un éxodo inesperado hacia la frontera norte de México, buscando cruzar el río y llegar a territorio norteamericano.

Si las masacres del mes anterior en contra de los niños horrorizaron a la opinión pública, la estampida de los llamados “*niños migrantes*” dejó sin aliento a la nación entera. El gobierno de los Estados Unidos calificó la situación como una “*crisis humanitaria*”, buscándole una solución pronta a través de la reclusión de los miles de infantes en centros de albergue provisionales y, sobre todo, acelerando y aumentando el ritmo y número de los vuelos de repatriación hacia Honduras. El gobierno hondureño, tomado por sorpresa ante la avalancha y sin muchas alternativas ante la magnitud del problema, optó por enviar una Comisión interinstitucional de carácter oficial, encabezada por la primera dama, Ana García de Hernández, a la que, curiosamente, denominó “*Fuerza de Tarea*”, dándole una tan innecesaria como inesperada connotación militar. Ya antes había calificado a los “*niños migrantes*” como si fueran “*desplazados de guerra*”. Pareciera que el presidente Juan Orlando Hernández (JOH) siente y muestra siempre una irresistible predilección por la jerga castrense y los hábitos y métodos de corte militar. No es casual que muchos sectores de la oposición le consideren como “*un militar frustrado*”.

Para agravar más las cosas, mientras el drama alcanzaba su pico más alto, el presidente JOH permanecía en Brasil, asistiendo como espectador privilegiado, en compañía de una numerosa comitiva oficial, a los juegos de la Copa mundial de fútbol. Justo en esos mismos momentos, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió en Guatemala con los presidentes Otto Pérez Molina, anfitrión, y Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador, para tratar el tema de la “*crisis humanitaria*” causada por la avalancha de

---

niños centroamericanos llegados a la frontera estadounidense. Honduras, ante la ausencia de JOH, quien no quiso interrumpir su viaje brasileño, fue representada por el coordinador del gabinete ministerial Jorge Ramón Hernández, ex embajador en Washington y hombre influyente en el círculo de Casa Presidencial. La opinión pública local percibió en forma muy negativa la conducta de JOH y condenó su indiferencia evidente ante la gravedad de una situación excepcional.

El drama de los niños que se van en busca del “*sueño americano*”, intentando huir de la violencia local y tratando de reunirse con sus padres, residentes ilegales en los Estados Unidos, pone de relieve el grave problema en que se ha convertido la migración constante hacia el norte, por un lado, y, por el otro, la ausencia de una “*política migratoria*” por parte del Estado hondureño. Mientras las élites empresariales y políticas sigan considerando que la migración es una “*solución*”, que quita presión a la situación social prevaleciente y, además, es una fuente permanente de divisas para la economía local, por la vía de las remesas familiares, el Estado hondureño no tratará los flujos migratorios como si fueran un “*problema*”. El discurso oficial reconoce la naturaleza del drama social, pero, en privado, con cierta hipocresía y cinismo, las élites empresariales y los dirigentes políticos perciben la migración como una forma de “*solucionar*” los problemas del desempleo, la delincuencia y la obtención de divisas frescas.

El retorno forzado de miles de niños, jóvenes y adultos, que las autoridades migratorias de los Estados Unidos y México logran interceptar, encarcelar y devolver a territorio hondureño, se convierte en una especie de boumerang que devuelve, acrecentados, los problemas sociales que muchos ingenuos creían “*solucionar*” por la vía de las olas crecientes de migrantes. El gobierno hondureño deberá diseñar cuanto antes una política de Estado en materia de emigración, buscando la forma de establecer cuotas y reglas para organizar lo que los expertos llaman flujos de “*emigración controlada o regulada*”, pero privilegiando siempre la generación de oportunidades locales como la única manera real y efectiva de disminuir las corrientes migratorias hacia el norte del continente.

Además de este grave problema, el gobierno ha debido enfrentar la protesta de nuevos actores sociales en el escenario nacional. A las tradicionales demandas y confrontación constante con los gremios magisteriales, ahora las autoridades han debido soportar la protesta muy bien organizada del importante sector del transporte urbano, interurbano y de carga en todo el país. Las razones de la protesta son diferentes y de distinta gravedad: el precio de los combustibles, siempre en aumento; la instalación de casetas de peaje en las principales carreteras del país, especialmente en la del norte, con tarifas elevadas e injustificadas; la reticencia del gobierno a conceder permisos de operación a centenares de autobuses que ya están funcionando en rutas que no siempre han sido autorizadas legalmente; la creciente y

cada vez más agresiva campaña de extorsión económica por parte de las pandillas y la delincuencia común, con el correspondiente incendio de unidades del transporte y, lo que es peor, agresiones físicas y asesinatos de motoristas, transportistas, ayudantes y pasajeros, etc. En este mes han sido incendiados varios autobuses de las rutas urbanas, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula. En los primeros cinco meses de este año se han producido más de 50 ataques contra unidades del transporte urbano (autobuses, taxis, mototaxis, etc.) con un saldo trágico de 35 muertos y 15 heridos, ocho autobuses quemados y 21 choferes asesinados. Entre 2012 y 2013, 153 taxistas y 32 pasajeros fueron muertos, víctimas de la violencia de los pandilleros extorsionadores. Se está produciendo una creciente deserción de los trabajadores del transporte, que prefieren buscar empleo en otras actividades menos riesgosas. Se estima que sólo en San Pedro Sula, los transportistas pagan unos 22 millones de lempiras mensuales (un poco más de un millón de dólares) a las pandillas que los extorsionan y amenazan.

El tema de la extorsión, a pesar de los innegables éxitos que el gobierno ha tenido en su persecución y control (a través de la recién creada Fuerza Nacional Antiextorsión), se ha convertido en el mayor problema no sólo para los transportistas, sino en general para toda la pequeña y la mediana industria, de manera especial. Miles de pequeños talleres, pulperías, negocios de venta de comida casera, etc. se han visto obligados a cerrar sus puertas y cancelar sus operaciones, aumentando el desempleo y agravando la crisis económica del país. Incluso centros educativos privados de clase media se ven forzados a pagar el mal llamado “*impuesto de guerra*”, bajo la amenaza de los pandilleros de quemar y atacar sus unidades de transporte de los alumnos. La situación se ha vuelto insostenible y la gente espera que el gobierno encuentre solución pronta a este grave desafío de la delincuencia ante la sociedad entera.

Ante una situación semejante, el gobierno de los Estados Unidos ha vuelto a hacer pública la advertencia y alerta hacia sus ciudadanos para que no viajen a Honduras o, si lo hacen, tengan en cuenta los graves riesgos que genera la situación de constante violencia y criminalidad que prevalece en el país. Aunque este es un aviso de alerta que el gobierno norteamericano reproduce cada año, esta vez, dada la situación de cierta tirantez que existe en las relaciones entre los dos países, el gobierno no ha podido ocultar su malestar por la nota y ha dado a entender que se trata de una especie de represalia de Washington por la posición asumida por JOH en el tema de la interceptación y derribo de los aviones que entren al espacio aéreo hondureño y sean sospechosos de transportar drogas (Ley de exclusión aérea, aprobada en enero de este año por el anterior Congreso Nacional, el que controlaba totalmente JOH).

Siguiendo el curso de la discordia con Washington, a su regreso de Brasil, JOH ha proclamado a los cuatro vientos que ha conseguido acuerdos para que sea una empresa brasileña -Embraer- la que se encargue de reparar y modernizar la flota de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), cuidándose, eso sí, de excluir a los aviones F5, de manufactura y tecnología norteamericana, cuya reparación y revisión periódica es potestad exclusiva de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el presidente ha anunciado lo que muchos consideran un *“giro demagógico”* de su política exterior, al declarar que ha llegado el momento de *“mirar hacia el sur”*, en abierta alusión a una posible apertura y reforzamiento de sus vínculos con países latinoamericanos que, desde el golpe de Estado de junio de 2009, han mantenido relaciones frías con Tegucigalpa o simplemente no han sostenido ningún tipo de relaciones cercanas, como era el caso de Ecuador. Hoy, JOH, después de haber visitado recientemente al presidente ecuatoriano Rafael Correa y luego de recibir las cartas credenciales de su nueva embajadora (la primera en cinco años de *“relaciones frías”*), declara alegremente que está dispuesto a aplicar en Honduras algunas de las reformas y metodologías utilizadas por Correa en el marco de su denominada *“revolución ciudadana”*. JOH se declara admirador repentino de las reformas fiscales de Ecuador, de algunas medidas en materia de seguridad ciudadana y, sobre todo, de los cambios operados en el sistema de seguridad social en el país sudamericano. Otro tanto sucede con Venezuela, con la que JOH insiste, cada vez con más apremio, en renegociar el reingreso de Honduras al sistema y acuerdo de Petrocaribe, a fin de beneficiarse en la compra de petróleo a precios relativamente subsidiados. Honduras abandonó el grupo de Petrocaribe inmediatamente después del golpe del 28J.

Mientras JOH se dispone a *“mirar hacia el sur”*, las relaciones con el vecino país de El Salvador pareciera que se enfrían y distancian. El rechazo un tanto infantil de JOH a la invitación para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente Salvador Sánchez Cerén, después que éste había enviado a su futuro Canciller a dar explicaciones por el incidente del Golfo de Fonseca en donde murió un pescador hondureño a manos de patrulleros de la fuerza naval salvadoreña, creó una situación tensa y de innecesario distanciamiento, que ha introducido una cierta frialdad en las relaciones entre dos países que se necesitan mutuamente más allá de sus discrepancias o disputas fronterizas. Si la situación continúa así, no se debe descartar un agravamiento de la tensión que existe en torno a la disputa por el peñón de un kilómetro y medio conocido como Isla Conejo, situado a orillas de la costa hondureña en el estratégico Golfo que comparten en condiciones iguales tres países Nicaragua, Honduras y El Salvador.

Y, a propósito del golpe de Estado, en este mes de junio se cumplieron los primeros cinco años desde que se produjo la ruptura del orden constitucional y fue derrocado el gobierno que presidía entonces el hoy diputado y líder del partido LIBRE, el ex presidente José Manuel Zelaya. Con ese motivo,

tanto el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) como el partido Libertad y Refundación convocaron a sendas manifestaciones en las principales ciudades del país para conmemorar esa fecha y protestar, una vez más, en contra de los sectores que llaman “*golpistas*”. Las marchas callejeras y las concentraciones casi festivas que llevaron a cabo sirvieron para revalidar las críticas contra el gobierno de JOH y pedir a sus simpatizantes la movilización constante contra lo que consideran “*el gobierno dictatorial de JOH y el partido Nacional*”. De esta forma, LIBRE y el FNRP llevaron a las calles el descontento y la censura contra el gobierno, la misma que acostumbra hacer en el seno del Congreso Nacional a través de su bancada de 36 diputados. Sin embargo, en esta ocasión, el Congreso estaba cerrado por vacaciones, ya que muchos de sus integrantes viajaron a Brasil para disfrutar de la fiesta del fútbol en la Copa mundial.

Siguiendo con la “*guerra de las cifras*” entre el Ministerio de seguridad (léase la Policía) y el Observatorio de la Violencia, adscrito a la Universidad Nacional, en este mes los datos estadísticos oficiales sobre el número de homicidios volvieron a sufrir serias modificaciones, las que quedaron al descubierto por diario El Heraldo. La llamada “*Unidad de investigación*” de ese periódico, reveló que el manejo desordenado de las cifras por parte de la Policía muestra que, por un lado se informó que en el año 2013 la reducción de la tasa de homicidios por cien mil habitantes había sido de 17.6%, mientras que ahora, en un informe más reciente, se corrige la cifra y, sin dar mayores explicaciones, se informa que no, que en realidad el porcentaje verdadero fue de 21.7%. Una diferencia sustancial que sólo sirve para introducir confusión y, lo que es peor, más desconfianza con respecto a las cifras reales y a la capacidad de registro estadístico, fiable y creíble, por parte de la Policía. Para complicar más las cosas en materia de datos e información confiable sobre la criminalidad, el Observatorio de la Universidad anunció de pronto que ya no publicará más informes periódicos sobre los índices de la violencia y el crimen. La razón: la Policía se niega a compartir su información oficial con los investigadores universitarios.

Mientras eso sucede, el ministro de seguridad, el inefable Arturo Corrales, hoy sometido a perfil bajo y menor protagonismo institucional, anuncia con bombos y platillos que ha firmado un convenio con una Organización No Gubernamental (ONG) colombiana para crear 18 Observatorios de la Violencia, uno en cada departamento del territorio nacional y así, de esa manera, saturar al país entero con información estadística más precisa, recogida in situ y de inmediato, con la oportuna ayuda de los expertos colombianos. Es casi seguro que en los próximos meses tendremos nuevos datos oficiales, esta vez mostrando una real o supuesta tendencia a la baja en materia de actividad criminal.

# JULIO 2014

---

## La situación política

**J**ulio ha sido un mes especialmente difícil y conflictivo para el gobierno, en particular, y para la sociedad en general. Comenzó con la tragedia de los once mineros atrapados en unas cuevas artesanales que conforman una mina olvidada en la zona sur del país. El gobierno no supo gestionar la crisis y dejó una muy mala imagen en la percepción de la gente. La desafortunada declaración del presidente JOH celebrando el rescate de las víctimas, justo cuando ya no era posible ni siquiera llegar hasta el fondo del pozo en que se encontraban los infortunados mineros, reflejó la improvisación e irresponsabilidad de quienes manejan la comunicación presidencial. JOH quedó como un mentiroso o como un irresponsable. Su imagen, ya bastante dañada por la crisis, sufrió un golpe adicional. Al final, el incidente se selló con tragedia: ocho mineros muertos y olvidados en el fondo de la mina.

A estos hechos se sumó la agudización de la crisis provocada por el masivo éxodo de niños migrantes, acompañados o no, que buscan desesperadamente llegar a la frontera con Estados Unidos, a la espera de obtener permisos de residencia en ese país. Consecuencia: casi 50,000 infantes acorralados en albergues provisionales y en centros de detención improvisados, a la espera angustiada de ser repatriados en forma forzosa hacia sus países de origen. De ese gran total de niños migrantes, el 29% son hondureños, según las cifras oficiales del Comisionado especial de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El presidente JOH, en compañía de los presidentes de Guatemala y El Salvador, viajó a Washington para sostener una brevísima entrevista con el gobernante norteamericano Barack Obama. El resultado no fue nada espectacular: promesas de ayuda para enfrentar la violencia y la pobreza, pero confirmación rotunda de que la repatriación forzada no se detendrá.

El gobierno, sorprendido ante la magnitud del éxodo, no ha sabido manejar la crisis y, como ya es usual, da la impresión de buscar soluciones tan apresuradas como provisionales. Militariza la frontera con Guatemala para impe-

dir la salida de los migrantes; refuerza la lucha contra los traficantes de personas; organiza una “Fuerza de Tarea” interinstitucional para recibir a los repatriados, darles asistencia previa y buscarles un refugio más definitivo. Al mismo tiempo, culpa a la “ambigüedad” de la legislación norteamericana por la confusión creada, sin olvidar, por supuesto, responsabilizar al narcotráfico y al crimen organizado por ser los causantes, se supone, de las fugas masivas de compatriotas hacia el norte del continente.

En resumen, nada definitivo. El gobierno afronta la crisis con la mentalidad del apagafuegos, buscando soluciones tan momentáneas como puntuales. Mientras tanto, el flujo migratorio, tanto de adultos (hombres y mujeres) como de niños, no sólo no se detiene sino que aumenta. También crece el número de ciudadanos repatriados en forma obligada desde los Estados Unidos. La situación es grave, y el problema, al menos por el momento, no parece tener una solución aceptable y duradera.

Como si no fueran suficientes los problemas acumulados, ahora nuevamente el gobierno y el país entero deben afrontar la crónica escasez de frijoles que, como sucede todos los años en esta época, afecta a la producción de granos básicos en general. La sequía de los meses de julio y agosto todos los años causa graves daños en las cosechas de granos básicos (maíz, frijoles, maicillo, etc.) en determinados departamentos y municipios del país, pero el gobierno -los distintos gobiernos- no son capaces de prevenir esta situación recurrente, y al final, solo al final, buscan soluciones en base a la ayuda internacional y a la importación de granos desde el exterior. En esta ocasión, la solución buscada ha sido tragicómica: el gobierno decidió comprar frijoles en Etiopía, el lejano país africano que ha padecido hambrunas peores que las de Honduras. El barco que debía traer los ansiados frijoles se ha extraviado en el camino y no aparece por ningún lado. Cansado ya de tanto improvisar respuestas y repetir mentiras, el ministro de desarrollo económico, Alden Rivera, optó por reconocer ante la prensa su impotencia para localizar la carga de frijoles y la ubicación del misterioso barco. Todo pareciera un sainete si no fuera por el elemento trágico y doloroso que conlleva.

Consecuente con su tendencia de militarizar las políticas de seguridad en particular y la administración del Estado en general, el presidente JOH ha continuado echando mano de oficiales militares para nombrarlos en cargos clave de la administración civil. Eso es lo que ha hecho en las recién creadas Comisiones interventoras en unidades muy importantes del engranaje estatal, como son la Dirección de Migración, hoy reconvertida en Instituto de Migración y Política Poblacional, el Instituto Penitenciario, la Dirección General de Transporte y la Unidad contra el robo de energía en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. En las cuatro instancias, las Comisiones de intervención están integradas, cuando no directamente dirigidas, por altos jefes militares retirados o activos. Esa militarización gradual de los eslabo-

nes de la administración pública representa un marcado retroceso institucional con respecto a los difíciles avances que ya el Estado y la sociedad habían hecho en materia de desmilitarización a lo largo de tres décadas de transición política hacia la democracia. JOH está conduciendo al Estado hondureño hacia atrás, hacia los tiempos ya afortunada y difícilmente superados de la hegemonía castrense en la vida nacional. El país involuiona desde el punto de vista de su institucionalidad democrática.

El clima político se ha recalentado en varias ocasiones en el transcurso de este mes. El día 16, en un infortunado incidente de discusión callejera, el diputado Luis Galdámez, representante del partido Libertad y Refundación en el Congreso Nacional, mató a un conductor de taxi, supuestamente en defensa propia, ante una turba de taxistas que pretendía agredirlo. El asunto tomó cariz político casi de inmediato. El gobierno, a través de sus medios de comunicación afines, inició una campaña contra Galdámez, destacando su carácter colérico y agresivo. El partido LIBRE salió en defensa de su diputado y exigió un juicio justo en los tribunales. El asunto sigue en trámite y se espera que muy pronto se conozca la sentencia definitiva.

Mientras LIBRE se defendía de la andanada de ataques en contra de Galdámez y su militancia política, la Fiscalía especial contra el crimen organizado, junto a la Policía Militar (sin la Policía Nacional), dieron captura al alcalde (nacionalista) de Yoro, en el norte del país, Arnaldo Urbina, al tiempo que le incautaron (*“aseguraron”* dice el lenguaje policial y jurídico) varias casas, haciendas, vehículos y armas, supuestamente adquiridas con fondos del narcotráfico. La hermana del alcalde Urbina, diputada nacionalista por el departamento de Yoro, también aparece mencionada en los expedientes de la Fiscalía en contra de lo que ya se ha dado en llamar *“la banda de los Urbina”*, a la que, dicho sea de paso, se le atribuyen decenas de asesinatos, extorsión, robos y, por supuesto, tráfico de drogas a gran escala y millonario lavado de activos. Los Urbina han sido ligados políticamente al partido de gobierno, causando el daño correspondiente a la imagen presidencial (aparecen abrazados con JOH en un momento de euforia de la campaña electoral), de la misma manera que el caso Galdámez provoca perjuicios y deterioro a la imagen política del partido LIBRE. Esa es la forma en que la crispación política del ambiente se manifiesta a través de la politización de los actos delictivos.

La caída de los Urbina muestra hasta qué punto se van extendiendo los tentáculos del crimen organizado a través de las redes de la política criolla. El clan Urbina sólo es la punta del iceberg. Hay muchos más políticos involucrados en las redes delincuenciales. Ya en años anteriores, el entonces ministro de seguridad y hoy diputado jefe de bancada por el partido Nacional, Oscar Álvarez, había denunciado en su momento la existencia de lo que

llamó “*narco-diputados y narco-alcaldes*” incrustados en los engranajes del aparato estatal y en las estructuras orgánicas de los partidos políticos.

Continuando con la saga de los narcos, sorpresivamente, los cuerpos de seguridad, auxiliados por los militares, invadieron 19 propiedades de la familia Matta Ballesteros, hijos y parientes del reconocido narcotraficante Ramón Matta, secuestrado por los Estados Unidos en Tegucigalpa en el año 1988, quien purga una pena de cadena perpetua en cárceles del país norteamericano. La repentina acción, casi 26 años después del secuestro del Matta mayor, tomó por sorpresa al país entero y planteó nuevos interrogantes sobre esta ofensiva contra los narcotraficantes, tan súbita como inesperada. La conclusión es que los norteamericanos han intensificado sus presiones sobre el gobierno hondureño para que endurezca su tradicional política de discreta tolerancia hacia los millonarios nacidos a la sombra del tráfico de drogas. Washington ha denunciado públicamente al llamado cartel de los Cachiros, los miembros de la familia Rivera Maradiaga, que mueven los hilos del narcotráfico en la zona de los departamentos de Atlántida, Colón y Gracias a Dios. Se les incautaron muchos bienes pero no se les ha capturado, ni siquiera se les persigue en serio. Lo mismo ha sucedido con el reconocido jefe “*hombre de negocios*” de San Pedro Sula, José “*Chepito*” Handal, denunciado abiertamente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como uno de los lavadores de dinero más importantes de la región, al servicio de los carteles mejicanos de la droga. También se le incautaron millonarias propiedades y se le intervinieron cuentas bancarias (sospechosamente vaciadas días antes), pero nada más. Handal se sigue moviendo con relativa fluidez en todo el territorio nacional sin que la policía muestre un verdadero interés en capturarlo.

A estos casos de evidente impunidad y sospechosa tolerancia policial, debe sumarse el escandaloso caso del médico Mario Zelaya, ex Director del Instituto de Seguridad Social, institución a la cual llevó virtualmente a la quiebra luego de haber saqueado sus recursos por sumas que superan los miles de millones de lempiras. Es el caso de fraude y corrupción más grande en la historia reciente de Honduras, lo que ya es mucho decir. Zelaya, quien a todas luces goza de protección por parte de ciertos jerarcas políticos del partido de gobierno, los mismos que se vieron beneficiados con buena parte de los fondos robados al Estado, sigue siendo un prófugo de la justicia. La Policía ha ofrecido una recompensa (50 mil dólares) por su captura, convirtiéndole así en el prófugo más caro de la historia delincriminal en Honduras.

El caso “*Zelaya-Seguro Social*” pone al desnudo los vínculos entre la corrupción administrativa y el financiamiento clandestino de las campañas políticas. En el curso de la investigación, el Ministerio Público ha podido descubrir la existencia de cuentas bancarias a nombre de Oscar Álvarez, diputado y jefe de bancada del partido Nacional, y de Hilda Hernández,

hermana del presidente y actual ministra de comunicación y estrategia (¡nada menos!), en las que se depositaban cuantiosas sumas provenientes del saqueo de los fondos del Instituto del Seguro Social. Esos dineros, en buena parte, se destinaban a los gastos de campaña del hoy partido gobernante. Lo mismo sucedía con otra cuenta bancaria, a nombre de unos supuestos “*Amigos de RIAL*”, las siglas de Ricardo Álvarez, ex alcalde de Tegucigalpa y actual Designado presidencial, que servía para recibir los generosos aportes de los corruptos a la campaña política de los beneficiarios.

Así, entre hechos de corrupción cada vez más escandalosos y estridentes (habría que sumar los del Sector salud y los del Sector transporte), el dramático éxodo infantil hacia los Estados Unidos, el descubrimiento del entramado criminal de la narco-política y la grave crisis alimentaria que padece la mitad del país a causa de la sequía, el acaparamiento y la falta de previsión, va avanzando a trompicones el gobierno que preside don Juan Orlando Hernández.

Ante el creciente deterioro de su imagen, el gobierno debe encajar las intenciones de la oposición política por formar un frente amplio de unidad coyuntural, que le permita enfrentar al régimen juanorlandista con mayor fuerza y decisión. Dirigentes intermedios del partido Liberal, junto a sus homólogos del partido LIBRE, diputados y alcaldes de ambas agrupaciones políticas, se están reuniendo por su propia cuenta en diversos puntos del territorio nacional (la última reunión a principios de agosto, tuvo lugar en el departamento central de Comayagua) para explorar las posibilidades de la unidad opositora. Tal unidad provoca el temor casi delirante de los principales dirigentes del partido de gobierno, de JOH y sus asesores, así como del pequeño grupo de dirigentes liberales que se oponen a la unión con LIBRE y privilegian la alianza con los nacionalistas en general y con JOH en particular. Entre esos dirigentes liberales destaca por su influencia y capacidad operativa el ex presidente Carlos Flores, dueño del diario *La Tribuna* y “operador político” preferido por las élites locales y la embajada norteamericana en Honduras. Flores obtiene beneficios personales (su hija, Lizzie, es la actual representante de Honduras ante las Naciones Unidas; el diario paga ridículos e insignificantes impuestos, etc.) de la alianza con JOH, subordinando los intereses del partido (PL) a los afanes mezquinos y personales de un pequeño círculo de empresarios y políticos que promueven, defienden y financian la subordinación de los diputados liberales ante la bancada nacionalista en el Congreso Nacional.

Si la oposición, entendida esta como la suma de diversas tendencias, grupos y partidos en el escenario nacional (por ejemplo, PL, PAC, PINU, etc.), logra articular una plataforma mínima de unidad, que haga resistencia verdadera contra las iniciativas del PN en el Parlamento, el gobierno de JOH tendría problemas muy difíciles de superar. A eso es precisamente a lo que

le temen JOH, sus asesores, el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, Carlos Flores, Elvin Santos y otros políticos similares.

Muy pronto, las diferentes fuerzas de la oposición política tendrán la oportunidad de replantearse el tema de la unidad, sobre todo cuando ingresen a la agenda parlamentaria dos temas de especial interés y sensibilidad política: la nueva Ley Electoral y la reelección presidencial. Esos temas, por su importancia y particular trascendencia, volverán a crispar los ánimos, todavía más, y crearán el ambiente indicado para una nueva crisis política en el país. Ojalá que los dirigentes políticos tengan la sabiduría necesaria para procesar esos debates con vocación democrática y la sensatez suficiente para evitar otro descalabro en la institucionalidad hondureña. ¡Ojalá!

# AGOSTO 2014

---

## La situación política

**E**l presidente Juan Orlando Hernández (JOH), fiel a su convicción de llevar a cabo una sustancial reingeniería en el aparato gubernamental, ha continuado disolviendo instituciones y creando nuevos organismos con idénticas o más amplias funciones que las de los órganos eliminados. Para el caso, en este mes de agosto, ha creado La Agencia Hondureña de Aeronáutica (AHA), que sustituye a la antigua Dirección General de Aeronáutica Civil, aunque al frente de la “nueva” oficina sigue el mismo militar retirado, el piloto y mayor Israel Navarro, recientemente nombrado en la presente Administración.

Disolvió, también, otras dos instituciones: la inofensiva Comisión de Seguimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que coordinaba, con el apoyo de la comunidad cooperante internacional, el diplomático guatemalteco Eduardo Stein, y el inoperante Consejo Nacional contra el Narcotráfico, cuyas funciones pasan a manos del influyente Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). Paralelamente a la disolución de viejas entidades, JOH también promueve la creación de múltiples “Comisiones interventoras” que sustituyen a los jefes en aquellas oficinas en donde el presidente sospecha que se están cometiendo irregularidades administrativas o actos flagrantes de corrupción. Casi siempre coloca militares, activos o en retiro, al frente de esas Comisiones o los integra como miembros funcionales de las mismas. Para el caso, en el llamado Instituto Penitenciario colocó a un General activo (Francisco Gálvez, ex jefe regional de los servicios de la Contrainteligencia militar) en sustitución de un antiguo General de la Policía (Simeón Santos). Lo mismo hizo en la Comisión creada para intervenir y poner orden en la que fue Dirección General de Migración, hoy reconvertida en flamante Instituto de Política Migratoria, al igual que en la Comisión Interventora de la Dirección General de Transporte. Y así sucesivamente...

A la vez que lleva adelante su peculiar “reingeniería” gubernamental, el presidente Hernández insiste en la evaluación personal del desempeño de ca-

da uno de sus ministros y colaboradores más cercanos. Jorge Ramón Hernández, el coordinador de los “*gabinetes sectoriales*”, ha declarado que a principios de septiembre deberá estar listo el informe detallado de la primera evaluación de resultados en la presente Administración. En base a tal evaluación, se comenta en los pasillos presidenciales que podrían producirse cambios en el gabinete ministerial, algo que reclaman, cada vez con más fuerza, los sectores que se consideran marginados y excluidos del reparto nacionalista del botín estatal.

La llamada “*vieja guardia*” del partido, pero especialmente los seguidores del ex alcalde capitalino y hoy Designado presidencial disminuido, Ricardo Álvarez, consideran que el presidente JOH les ha marginado de las principales cuotas de poder y los mantiene alejados de los círculos clave de influencia en el gobierno nacionalista. En reuniones privadas, que cada día se repiten con más frecuencia, los nacionalistas descontentos se agrupan para conspirar contra JOH. Los temas de la reelección presidencial, el marginamiento que sufren y la conformación del gabinete, son los principales asuntos de discusión. Creen que si JOH no cambia su actitud hacia ellos, no habrá posibilidades de apoyo, aunque sea parcial y condicionado, a sus inocultables intentos de reelección en la silla presidencial.

El propio Álvarez, en recientes declaraciones a la prensa dijo “*sentirse perseguido dentro de su propio partido*”, agregando así más combustible a la chispa de la disensión interna que ya amenaza convertirse en hoguera.

Sabiendo que JOH los necesita para sacar adelante su proyecto reeleccionista, los disidentes, “*alvaristas*” o no, se disponen a vender caro su respaldo y negociar con dureza sus posibles concesiones políticas. Todo ello se traduce en un debilitamiento de las bases de apoyo del nuevo gobernante, obligándole, en la práctica, a recostarse cada vez más en los hombros y brazos de los militares. Esta circunstancia contribuye a explicar, al menos, una de las razones de la política de la creciente remilitarización del Estado y de sus circuitos gubernamentales por parte del presidente JOH.

En un nivel más general, el ambiente político se recalentó un tanto luego que el ex ministro de la Presidencia en el gobierno de Manuel Zelaya(2006-2009), Enrique Flores, después de haber iniciado negociaciones bajo la mesa para evitar ser acusado por actos de corrupción, aceptara dar a la luz pública el día 12, en un conocido canal de televisión de los patrocinadores del golpe de Estado (Canal 5), un listado de varios ex colaboradores (ministros y otros altos funcionarios) de Zelaya que habrían recibido sumas millonarias en lempiras (al menos unos cien mil dólares cada uno) destinados a financiar los gastos programados para realizar la consulta pública en torno a la llamada “*cuarta urna*”. Muchos de los involucrados en esa trama han aclarado que nunca recibieron esos dineros, pero otros, aunque reconocen ha-

---

berlos recibido, alegan también haberlos gastado en las actividades señaladas. Los últimos deberán rendir cuentas ante los órganos contralores del Estado.

Sin embargo, es bueno saber que todas estas acusaciones y réplicas forman parte de una trama más oculta y subterránea: las negociaciones secretas en torno a las posibles alianzas y compromisos para promover la reelección presidencial y las reformas profundas a la legislación electoral vigente. Estas negociaciones, que se llevan a cabo en forma privada, muy discreta y, generalmente, en las residencias y mansiones de los principales dirigentes políticos del país, se generan al margen de las discusiones públicas que por momentos se producen en el seno del Congreso Nacional. Las opiniones de los diputados, por lo general, sólo revelan el tono y los avances, parálisis o retrocesos que se articulan en el seno de las verdaderas negociaciones políticas, las que se realizan en secreto. Es bueno tener en cuenta estas dos dimensiones, la privada y la pública, para entender mejor el alcance y Estado actual de los acuerdos y compromisos políticos entre las cúpulas partidarias.

En otro terreno, después de una visita sorpresiva el día 06 a la ciudad de Miami para celebrar una súbita entrevista con el General John Kelly, Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, JOH y los demás integrantes del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad regresaron entusiastas y optimistas con respecto al respaldo norteamericano a su política antidrogas. Casi de inmediato se intensificaron las acciones de incautación (“*aseguramiento*” dice el discurso oficial) de bienes y cuentas bancarias de reconocidos jefes y clanes locales del crimen organizado y del narcotráfico en particular. El turno más espectacular le ha tocado ahora a la familia Valle (cuatro hermanos residentes en el departamento de Copán, una de las cuales, Digna Azucena Valle, fue apresada el pasado 24 de julio en Estados Unidos y está siendo juzgada en Miami), que se ha destacado como el núcleo traficante más activo e importante en la región occidental del país, precisamente en la zona fronteriza con la vecina Guatemala, ruta predilecta en el tráfico de drogas hacia México y el territorio norteamericano. Los Valle han sido un clan poderoso y temido entre los grupos rivales en el seno del crimen organizado en Honduras. Vinculados a los carteles mejicanos y colombianos, han controlado el traslado de las drogas a través de la frontera guatemalteca, en ruta hacia el mercado estadounidense. Se les han incautado decenas de propiedades y bienes materiales, así como numerosas cuentas bancarias que, sospechosamente, ya estaban vacías cuando los fiscales y la Policía llegaron.

Desde mediados del año pasado, el Estado hondureño ha dado fuertes golpes a los narcotraficantes, incautándoles unas 97 propiedades (52 de ellas al clan Valle) valoradas en muchos millones de dólares. Además de los Va-

Ile, han perdido buena parte de su fortuna jefes y grupos traficantes como los Rivera Maradiaga, alias “Los Cachiros”, en el norteño departamento de Colón, el supuesto “capo” de las drogas en San Pedro Sula José “Chepito” Handal, el clan de los hermanos Urbina en el departamento de Yoro, los hijos de Ramón Matta, en Olancho y Francisco Morazán, así como el caso de Arnaldo Lobo, alias “el negro”, quien ya fue extraditado y está siendo juzgado en los tribunales de La Florida, en Estados Unidos. En este sentido, el presidente JOH le ha dado continuidad -y más profundidad- a la ofensiva antinarcos (casos de Los Cachiros y de “Chepito” Handal) que ya había iniciado, con vacilaciones y timidez manifiesta, el gobierno de Porfirio Lobo bajo la visible presión de los Estados Unidos.

Los observadores y analistas políticos coinciden en que estos golpes han sido muy importantes para debilitar las redes del crimen organizado en el territorio hondureño. Sin embargo, todos insisten en señalar la curiosa circunstancia de que nunca se captura a los jefes del narcotráfico o a los propietarios reales o supuestos de los bienes incautados. Tampoco se recuperan los dineros depositados en las cuentas bancarias. Pareciera que alguien, desde el seno mismo de los cuerpos de seguridad, avisa a los narcotraficantes sobre las acciones que se llevarán a cabo en su contra. No es casual, por ello, que en muchas de las acciones y operaciones en contra del tráfico de drogas, los norteamericanos prefieran actuar en forma totalmente compartimentada, alejando a la Policía y privilegiando la cooperación con determinados fiscales y con las nuevas unidades de la Policía militar.

Muchos de los personajes afectados por las incautaciones de bienes y propiedades son reconocidos dirigentes o diputados, alcaldes o regidores ligados al sistema de partidos políticos. Los llamados “narcopolíticos” están moviendo sus influencias para recuperar lo perdido, expresando, al mismo tiempo, su enojo y protesta contra las acciones promovidas por el presidente JOH, a quien consideran un traidor que paga con represión el real o supuesto apoyo económico recibido en la campaña electoral.

El gobernante, preocupado más por la opinión y el apoyo de los aliados norteamericanos, ha dicho estar dispuesto a afrontar las consecuencias políticas y de otro tipo que se deriven de sus acciones en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en general. Se espera que en los próximos días se produzcan nuevas acciones espectaculares en contra de los narcotraficantes, involucrando entre ellos a activistas y dirigentes intermedios del mundo político.

Los norteamericanos, por supuesto, han mostrado su agrado y respaldo por las decisiones de JOH. Pareciera que las rencillas de ayer están quedando en el olvido, y hoy las relaciones lucen más prometedoras y optimistas. Al menos, eso es lo que se desprende de las primeras declaraciones del nuevo

---

embajador norteamericano James Nealon, quien se ha mostrado entusiasta y contento con la política de incautación de bienes aplicada por el gobierno actual.

Atrás han quedado los sinsabores de la reciente visita que JOH y los otros dos presidentes del Triángulo del Norte (Guatemala y El Salvador) hicieron recientemente a Washington para sostener una meteórica entrevista con el presidente Barack Obama. En esa ocasión, los norteamericanos, por boca del vicepresidente Joe Biden, fueron claros y rotundos: No habrá un Plan Colombia para la región, ya que *“los gobiernos de Centroamérica no están ni cerca de estar preparados para tomar la clase de decisiones que tomaron los colombianos”*, a fin de reorientar y tener éxito en su lucha contra el narcotráfico. Además, reiteró esta vez el presidente Obama, las deportaciones de los niños migrantes, acompañados o no, continuarán en su ritmo ascendente en los próximos meses (como en efecto ya está sucediendo).

Luego del relativo fracaso de esa visita, JOH debe estar satisfecho de relanzar sus relaciones con Washington obteniendo el apoyo norteamericano en su ofensiva contra los bienes y fortunas de los *“narcos”*.

Estos éxitos, muy importantes por su impacto mediático y su reflejo en la percepción colectiva sobre la voluntad presidencial, contrastan con el auge de la violencia callejera que en los últimos días se ha cobrado la vida de decenas de jóvenes y adultos en las principales ciudades del país. Las muertes colectivas, llamadas *“masacres”* por la población, acompañadas de la desmembración y descuartizamiento de cadáveres, se han intensificado en todo el país, generando un clima de terror y espanto entre la gente. Estos crímenes, generalmente vinculados con los delitos de narcotráfico (distribución en el microtráfico y lucha por espacios y rutas de acción) y las acciones de extorsión por parte de los grupos pandilleros, se repiten con demasiada frecuencia, lo que desvirtúa las constantes declaraciones de la Policía y de su ministro de seguridad, el controversial Arturo Corrales, quien, sin inmutarse, pretende convencer a la opinión pública que los índices de criminalidad y homicidios van en importante descenso. Aunque el gobierno asegura haber desarticulado unas cien bandas criminales en los últimos siete meses, es decir en lo que va de la actual Administración, y, por lo tanto, haber mejorado sustancialmente el clima de seguridad, los hechos le desmienten y la credibilidad del gobierno queda en precario.

A las dificultades y problemas en el Sector seguridad, el gobierno de JOH debe sumar también las crisis que se intensifican en el Sector salud y en el de la energía y luz eléctrica. La corrupción que ha imperado en el sistema de compras de medicamentos ha paralizado virtualmente al Ministerio de Salud, sumiendo en una grave escasez de medicinas a los 28 centros hospitalarios que existen en el país. JOH y su ministra de salud (Yolany Batres)

están haciendo esfuerzos reales para sanear esta situación, comprando las medicinas y otros insumos médicos a través de fideicomisos bancarios que, además de pretender transparencia, pagan menos por más y mejores productos. Los antiguos proveedores y beneficiarios permanentes de la corrupción administrativa en el Sector salud, están furiosos y a la ofensiva en contra del gobierno. En el Sector de la energía las cosas están peor. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la ENEE, está virtualmente al borde de la quiebra, víctima de la desmesurada politización partidaria y de la corrupción que esta conlleva. Se necesitan unos 600 millones de dólares para evitar su colapso. La ENEE pierde por robo y pérdidas técnicas entre 350 y 400 millones de lempiras (entre 17 y 20 millones de dólares) cada mes, mientras que apenas recauda unos 200 millones como ingresos. Las deudas de la ENEE constituyen el principal componente del elevado déficit fiscal (el 8% del Producto Interno Bruto) que el país padece y que, dicho sea de paso, es el principal obstáculo para firmar el ansiado convenio de apoyo con el Fondo Monetario Internacional.

Para agravar más la situación, el gobierno de JOH ha sido víctima de los chantajes disimulados (apagones y cortes bruscos en el servicio de energía eléctrica, interrupción maliciosa y calculada del funcionamiento de las plantas generadoras, etc.) por parte de los llamados “*empresarios térmicos*”, es decir los dueños de las tres principales empresas (Luffusa, Emersa y Elcosa) proveedoras de energía que posteriormente distribuye y vende a costos de pérdida la empresa estatal.

Ya para finalizar el mes, la dirigente campesina y lideresa importante a nivel regional en el partido Libertad y Refundación, Margarita Murillo, fue asesinada en la zona norte del país, en una típica operación de sicariato o sea muerte por encargo. Murillo viene a sumarse a una ya larga lista de víctimas asesinadas en circunstancias parecidas, todas ellas pertenecientes al principal partido de la oposición política en estos momentos.

# SEPTIEMBRE

## 2014

---

### La situación política

**S**e terminó el mes de septiembre y el gobierno no cumplió su promesa de presentar, “*a finales del mes*”, el informe con los resultados de la evaluación detallada que dijo haber realizado para medir el desempeño de sus principales funcionarios al frente de todos los Ministerios. El coordinador de los llamados “*gabinetes sectoriales*”, Jorge Ramón Hernández, aseguró a finales del mes anterior que ya estaba todo listo para presentar al público el informe final de la esperada y publicitada “*evaluación de resultados*”, una práctica que el presidente Juan Orlando Hernández (JOH) considera pieza vital en su “*nueva forma*” de gobernar.

Sobre la base de esta evaluación se han tejido muchas especulaciones en torno a posibles cambios en el gabinete, ya sea a través de destituciones o de rotaciones entre sus miembros. Los más ansiosos por conocer los resultados son los propios militantes del partido gobernante -los nacionalistas-, sobre todo aquellos que se sienten injustamente marginados y excluidos en el reparto inicial de las cuotas de poder e influencia dentro del nuevo gobierno. Muchos de ellos siguen albergando la esperanza de que serán tomados en cuenta en un segundo reparto, luego que el gobernante decida dejar algunas vacantes en su equipo de gobierno al conocer los resultados de la primera gran evaluación del desempeño ministerial.

Esta situación es el reflejo del creciente descontento que existe al interior de las filas nacionalistas, especialmente entre aquellos que se consideran de la “*vieja guardia*”, con arraigo suficiente dentro del partido como para aspirar a cargos importantes y cuotas de decisión dentro del quehacer gubernamental. Su exclusión del reparto ha provocado resentimiento y disgusto, a tal punto que no son pocos los nacionalistas, en particular los seguidores del ex alcalde capitalino y hoy Designado presidencial Ricardo Álvarez, que ya están conspirando en silencio en contra de JOH y su equipo de gobierno.

Dentro de los nuevos conspiradores están los partidarios del llamado “*clan Urbina*”, el grupo familia que se agrupaba en torno al hermano mayor, Ar-

naldo, alcalde nacionalista de la ciudad de Yoro, en la costa norte del país. El Ministerio Público, luego de largas y detalladas investigaciones, decidió finalmente incautar los bienes del clan Urbina, exponiendo ante la opinión pública la red de crimen organizado que habían montado en torno a la municipalidad de Yoro. Una hermana de los Urbina es diputada por el partido Nacional y se ha encargado de impulsar una campaña de reclamos y disgustos por la actuación del presidente JOH, quien públicamente ha dicho que las incautaciones fueron ordenadas directamente por él mismo, luego de comprobar que sus aliados políticos, los Urbina, estaban seriamente involucrados en el crimen organizado. JOH ha presentado el “*caso Urbina*” como una prueba más de su voluntad firme para combatir el narcotráfico y demás formas del crimen organizado, sin importar el color político y la militancia partidaria de los involucrados. La familia Urbina fue uno de los financistas importantes de la campaña electoral de JOH.

Las incautaciones de bienes de los narcotraficantes han creado un clima de zozobra y confusión en las filas del crimen organizado. Los narcos no se esperaban una ofensiva semejante, sobre todo tomando en cuenta los aportes económicos millonarios que muchos de ellos aseguran haber hecho a las arcas de los políticos gobernantes. Confiaban en que el nuevo presidente sería “*agradecido*” y, por lo mismo, tolerante y permisivo con respecto a sus actividades delinCUencias. Se han equivocado.

Los bienes incautados, desde el último semestre del gobierno anterior, suman ya más de un centenar y su valor asciende a cientos de millones de dólares. Pero no sólo eso; el gobierno parece estar dispuesto a conceder todas las solicitudes de extradición que presente el gobierno de los Estados Unidos. Actualmente hay once solicitudes de extradición. Uno de los candidatos, Juving Suazo, lugarteniente de Arnaldo “*el negro*” Lobo recientemente extraditado a Estados Unidos, ha pedido que aceleren sus trámites de extradición, ansioso por caer en manos de los norteamericanos y negociar, a cambio de información, una pena reducida.

La ofensiva gubernamental contra el crimen organizado no se limita a los bienes de los narcotraficantes. También abarca las propiedades adquiridas con los dineros sucios de la corrupción que se había difundido e institucionalizado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Decenas de casas, vehículos, oficinas comerciales y otros bienes han sido incautados, mientras ya guardan prisión varios de los involucrados en lo que muchos consideran como “*el más grande caso de corrupción*” desde el retorno de Honduras a la democracia.

Mario Zelaya, el ex director del IHSS y uno de los artífices directos de la gran trama de corrupción descubierta, fue capturado en Nicaragua a principios del mes y, luego de permanecer en manos de los servicios de inteli-

---

gencia militar del vecino país durante diez días, fue entregado en forma encubierta a las autoridades hondureñas en un “paso ciego” de la línea fronteriza entre ambos países. Los nicaragüenses sometieron a intensos interrogatorios a Zelaya y obtuvieron de él toda la información relacionada con la corrupción del IHSS: nombres de los autores materiales e intelectuales, lista de políticos beneficiados con los dineros robados al IHSS, cantidades sustraídas, sumas invertidas en la campaña electoral, etc. Esta información, eventualmente, podría servir a los interesados para chantajear y presionar a muchos políticos hondureños corruptos.

Una vez que Zelaya había confesado todo lo que los nicaragüenses querían conocer, lo entregaron a las autoridades hondureñas que, en una maniobra fallida, trataron de presentar los hechos de otra forma, como si fueran los propios hondureños los que habían capturado a Zelaya en “territorio nacional”. Casi de inmediato, la prensa independiente descubrió la trama y el gobierno, una vez más, quedó como mentiroso ante los ojos del público.

La manipulación de la información por parte de los voceros oficiales ha creado una atmósfera de dudas y sospechas en torno a la forma en que se está manejando el caso IHSS, al grado que ya corren fuertes rumores sobre la posible destitución del Fiscal encargado (Roberto Aldana) de conducir las investigaciones. Al parecer, la élite gobernante no quiere que se revelen los vínculos de la corrupción del IHSS con el financiamiento de la campaña electoral del partido Nacional (PN).

Junto a Mario Zelaya guardan prisión también dos altos ex funcionarios del gobierno anterior: los Vice ministros de Salud y Trabajo, Javier Pastor y Carlos Montes, respectivamente, acusados de haber recibido coimas millonarias a cambio de favores y pagos indebidos a “empresas de maletín”, con los dineros del IHSS. Grandes empresarios, están involucrados en la trama de corrupción, pero sus nombres todavía no han salido a la luz pública como imputados. Muchos de ellos han negociado con los fiscales para convertirse en “testigos protegidos” y eludir así a la justicia. No se descarta que algunos de estos empresarios hayan sobornado a más de algún alto funcionario del Ministerio Público para obtener cierta protección. Se espera que en los próximos días salgan a la luz los nombres de los sobornados.

Mientras lleva a cabo su ofensiva anticorrupción y antinarcóticos, el gobierno del presidente JOH ha logrado presentar nuevas iniciativas ante el Poder Legislativo: una Ley para cambiar el sistema de seguridad social (Ley Marco de Protección Social) que permita ampliar totalmente la cobertura de tales servicios a toda la población hondureña (actualmente el Seguro Social apenas cubre a un cinco por ciento de la población) y otra Ley para la “Protección del espacio marítimo”, que permitirá el libre abordaje de naves sospechosas de actos ilegales en las aguas territoriales de Honduras. Esta Ley

ya fue aprobada por los diputados y pasa a formar parte del conjunto de normas y decretos destinados a crear una plataforma legal completa para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Al mismo tiempo, cumpliendo con el plazo constitucional que se vencía el día 15, el gobierno envió al Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2015. El valor total del presupuesto es de 8,832 millones de dólares, 132 millones menos que el presupuesto correspondiente a este año 2014. La reducción obedece a la necesidad de convencer al Fondo Monetario Internacional de la buena disposición del gobierno para reducir el exagerado gasto público y aplicar medidas creíbles de austeridad y ahorro.

Al parecer, los intentos del gobierno han dado resultado y el FMI estaría dispuesto a firmar en octubre próximo un Acuerdo de alivio que le permitiría a la Administración de JOH recibir entre 200 y 300 millones de dólares para ayudar a equilibrar las tambaleantes finanzas públicas. El Acuerdo con el Fondo es una necesidad de vida o muerte para el gobierno nacionalista. Lograr tal Acuerdo sería presentado como un triunfo personal de JOH y su equipo económico.

Otro obstáculo para la firma con el Fondo ha sido la situación de bancarrota financiera en que se encuentra la compañía estatal de energía eléctrica, la ENEE. Debido a deficiencias técnicas y al robo generalizado de energía, esta empresa pierde casi un millón de dólares diarios (el año pasado, sus pérdidas fueron de 263 millones de dólares), con lo que genera más de la mitad del déficit fiscal general del país (8% del Producto Interno Bruto). Paga a 4,800 empleados, de los cuales unos 1,500 no tienen funciones específicas en la estructura laboral de la ENEE: son los llamados "*paracaidistas*", activistas políticos del partido gobernante que reciben un salario a manera de premio por haber ayudado en la campaña electoral. En tales circunstancias, la empresa no puede sostenerse financieramente y el Estado no debe continuar otorgándole subsidios. La reestructuración total de la ENEE es una de las principales condiciones para firmar un Acuerdo con el FMI.

JOH ha culpado a ciertos grupos empresariales de provocar el fracaso financiero de la ENEE, con el objeto de comprarla a precios de ganga y apoderarse de una de las empresas estatales más importantes. Concretamente, JOH ha acusado a los empresarios que venden energía a base de petróleo a la ENEE, los llamados "*grupos térmicos*", y a ciertos banqueros de querer apoderarse de la empresa. Les ha advertido que no lo permitirá. Aquí puede estar el germen de un nuevo conflicto del gobierno con los empresarios corruptos y voraces.

Siempre en relación con las negociaciones con el FMI, aunque el Banco Central ha pronosticado para este año un déficit fiscal de 5,2% del PIB (unos 1,020 millones de dólares), la empresa calificadora Moody's Investor Service lo calcula en 6,4%, es decir unos 1,249 millones de dólares. La estimación de un déficit mayor dificulta la negociación para la venta de los llamados "bonos soberanos" en el mercado internacional. El Congreso Nacional aprobó vender unos mil millones de dólares más en tales bonos, pero el equipo económico no ha podido lograrlo todavía. Una firma con el Fondo facilitaría la colocación de los bonos en el exterior.

A nivel de la política externa, el presidente JOH se ha mostrado también muy activo y entusiasta. Junto con los presidentes de Guatemala y El Salvador, presentó en Washington y ante las Naciones Unidas el borrador del llamado Plan "Alianza para la Prosperidad", una propuesta para enfrentar en forma conjunta, con el apoyo económico de Estados Unidos, los problemas de la migración ilegal hacia el territorio norteamericano (el éxodo infantil, entre otros), la lucha contra el crimen organizado, las pandillas y el narcotráfico. Washington recibió el documento y todavía no ha dado su respuesta definitiva ante la propuesta de los presidentes del llamado Triángulo del Norte.

Además de Estados Unidos, JOH también ha visitado Europa (España y Bélgica) en este mes de septiembre, promoviendo la imagen de Honduras como "lugar ideal y seguro para la inversión extranjera". El presidente está empeñado en sacar adelante su proyecto predilecto: las "ciudades modelo" en diferentes puntos del territorio nacional.

Pero, pese a sus evidentes esfuerzos por atraer a los inversionistas extranjeros, la situación de inseguridad y criminalidad creciente que prevalece en Honduras conspira contra los deseos presidenciales y desalienta los ánimos del capital foráneo.

En este mes se han intensificado los actos de violencia brutal, aumentando el número de víctimas con sus cuerpos trucidados, masacres colectivas, disputas sangrientas en las áreas controladas por las pandillas y, lo que es igualmente preocupante, un incremento en las violaciones a los derechos humanos por parte de los denominados "policías militares".

Abundan las denuncias en contra de los cuerpos de seguridad y algunos políticos opositores (el ex presidente Manuel Zelaya, por ejemplo) insisten en denunciar la existencia de una política oficial de limpieza social, que utiliza a "escuadrones de la muerte" para asesinar a jóvenes sospechosos de pertenecer a los grupos pandilleriles o "maras". Según el dirigente del partido LIBRE, los grupos de exterminio están integrados por policías y ex policías o por miembros de las agencias privadas de seguridad, que utilizan la

logística y el armamento de la propia Policía para llevar a cabo sus crímenes. La denuncia ha tenido mucho eco en los medios de comunicación independientes y a nivel internacional. Los organismos de derechos humanos, las asociaciones feministas y los grupos de minorías vulnerables (lésbico-gays, indígenas, garifunas, misquitos, por ejemplo) reportan un crecimiento preocupante de las violaciones, el hostigamiento, las torturas y los asesinatos por parte de los policías y los militares que vigilan y patrullan las calles, sobre todo en las comunidades rurales del país.

# OCTUBRE 2014

---

## La situación política

**E**n medio de lluvias intensas que causaron severos daños en distintas partes del territorio nacional (infraestructura, agricultura, viviendas, etc.) y produjeron más de cinco mil damnificados, el país entero ha debido asistir a un repunte súbito de la violencia criminal en que, como ya es costumbre, las víctimas son principalmente los jóvenes (pandilleros o no), los trabajadores del transporte urbano (choferes, cobradores, despachadores, etc.), profesionales del derecho, algunos periodistas y, por supuesto, fiscales del Ministerio Público. En los últimos días ha aumentado el número de personas que mueren víctimas de la violencia criminal, ya sea en forma individual o en las llamadas masacres colectivas. Los sicarios en motocicleta han vuelto a invadir las calles, creando un clima de terror e incertidumbre general.

La muerte violenta de numerosos choferes de taxis y autobuses, en represalia por su negativa a pagar las extorsiones económicas exigidas, han provocado ya varios paros laborales en el transporte urbano, los que, como en una escalada, han ido subiendo su nivel de protesta y condena ante el clima de inseguridad prevaleciente en el país. En varias ocasiones, los transportistas han paralizado el tráfico urbano, exigiendo del gobierno mejores y más efectivas medidas de seguridad para sus empleados.

Pero no sólo los transportistas. También los abogados han advertido sobre su disposición a paralizar todo el sistema de administración de justicia si el Estado sigue siendo incapaz de garantizar la seguridad y la vida de los profesionales del derecho. Hasta la fecha 84 abogados han sido asesinados en el país.

Al menos 34 periodistas han perdido la vida, por diversas razones que van desde el ejercicio de su profesión hasta la simple violencia callejera que angustia a todos y atenta contra cualquier ciudadano de a pie. El Congreso Nacional estaba discutiendo un proyecto de ley para asegurar la protección de los periodistas, los abogados y los defensores de los derechos humanos.

Sin embargo, a última hora, el propio presidente del Poder Legislativo, el nacionalista Mauricio Oliva, declaró *“en suspenso”* la discusión de la ley, postergando su aprobación *“hasta tanto no haya el presupuesto apropiado”*. O sea que el Estado, por falta de recursos, relega a un segundo plano la protección de sus ciudadanos.

El repunte de la violencia cotidiana se produce justo en momentos en que el gobierno se ha anotado importantes triunfos en la lucha contra del crimen organizado, especialmente en su variante del tráfico de drogas. Al mismo tiempo, coincide con una campaña publicitaria por medio de la cual el gobernante Juan Orlando Hernández (JOH) se empecina en convencer a la población de que *“Honduras está cambiando”* y que la angustiante situación de la inseguridad pública está mejorando.

En las últimas semanas, sin duda alguna, el gobierno ha logrado propinar importantes golpes a las redes del narcotráfico nacional e internacional, especialmente luego de la captura de importantes líderes de las redes locales del tráfico de estupefacientes. El apresamiento del llamado *“clan de los hermanos Valle”*, una importante célula del narcotráfico en la zona occidental del país (frontera con Guatemala), y su ya casi inminente extradición hacia los Estados Unidos, en donde son reclamados por diversos tribunales de diferentes Estados de la Unión Americana, han sido dos golpes de efecto de gran importancia, que han levantado la credibilidad pública de los cuerpos de seguridad en relación con su capacidad institucional para combatir al crimen organizado. Lo mismo puede decirse de la captura, casi al mismo tiempo, del destacado capo de las drogas Héctor Emilio Fernández, conocido en el mundo del hampa como *“Don H”*, hermano, por cierto, del diputado liberal suplente por el departamento de Copán, Carlos René Fernández Rosa.

La reciente captura de los jefes narcos de occidente ha servido, entre otras cosas, para dejar al descubierto los vínculos familiares y de otro tipo entre el narcotráfico y varios funcionarios públicos de la Administración estatal a nivel local y regional. Digna Valle, la hermana de los Valle, aparece fotografiada con su primo Rembert Isaías Cuestas Valle, alcalde liberal electo en el Municipio de Florida, fronterizo con la vecina Guatemala. Mayra Lemus, esposa de Luis Valle, miembro clave del clan, era hasta hace poco la vicealcaldesa de ese mismo municipio. El diputado propietario de Copán, José de Jesús Gaugel, conocido en la zona como *“el Tigre Gaugel”*, ha sido mencionado en la prensa escrita como un hombre muy cercano al clan de los Valle.

La reiterada denuncia sobre la existencia de una amplia red de *“narcoalcaldes y narcodiputados”* (uno de los asesores del presidente JOH, Marvin Ponce, declaró públicamente que existe una lista con los nombres de 36 alcaldes sospechosos de estar ligados al narcotráfico), ha recibido una nue-

---

va confirmación ahora que ya se conoce algo más sobre los tentáculos del clan de los Valle entre los círculos políticos regionales y nacionales.

La ofensiva antidrogas desatada por el gobierno, sobre todo con más fuerza a partir del mes de agosto pasado, ha estimulado a Washington para presentar más solicitudes de extradición. En total han sido presentadas 27 solicitudes, de las cuales tres han sido ya resueltas favorablemente, seis esperan una solución pronta, mientras 18 extraditables todavía permanecen prófugos de la justicia. Los diputados se resisten a discutir y aprobar una verdadera Ley de Extradición que agilice los trámites y haga más fácil el envío de los narcotraficantes hacia las cárceles estadounidenses. Mientras los diputados quieren dejar toda la responsabilidad en manos de los jueces, éstos exigen que los legisladores aprueben la nueva Ley y compartan con ellos la misma responsabilidad. Ambas partes, con justa razón, temen por las consecuencias de eventuales represalias por parte de los traficantes de drogas.

Para mantener su imagen de *“luchador auténtico”* contra el narcotráfico, el gobierno deberá mostrar una real voluntad de perseguir y, eventualmente, capturar a los capos traficantes que todavía *“andan prófugos”*, aunque algunos de ellos circulan con relativa libertad por todo el país o se mantienen semiocultos en sus zonas geográficas de influencias. Con razón la gente se pregunta ¿qué pasó con los Cachiros?, la banda conformada por otro clan familiar, el de los Rivera Maradiaga, que han tendido sus redes de control e influencias en la zona norte, fronteriza con Nicaragua y a orillas del Mar Caribe (Colón, Gracias a Dios, Atlántida, etc.) Mientras ellos, al igual que otros como José *“Chepito”* Handal, permanezcan en libertad, las verdaderas intenciones del gobierno siempre estarán envueltas en una telaraña de dudas y sospechas.

A la vez que crece el clima de inseguridad y violencia social, se incrementa y crispa también otro clima, esta vez de carácter político, estimulado por las especulaciones que van y vienen en torno al tema de la posible reelección presidencial y el cuestionado afán continuista del presidente actual. Si se mantiene y consolida la pretensión presidencial de continuar en el poder por la vía impuesta de la reelección, el riesgo de una nueva crisis política, esta vez con más violencia y confrontación, debe ser considerado como una posibilidad muy real a mediano y largo plazo.

Hasta el momento, sólo el partido Liberal (PL), a través de su ex candidato presidencial y jefe actual del Consejo Central Ejecutivo, Mauricio Villeda, se ha pronunciado con claridad y mucho énfasis en su oposición a todo lo que tenga que ver con la reelección presidencial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los diputados liberales, en su gran mayoría, responden a intereses y ambiciones muy distintas a las órdenes y directrices que pudiera dar-

les el abogado Villeda. Por lo tanto, aunque una parte del PL se pronuncie en contra de la reelección, no debe descartarse que muchos de los 27 diputados liberales en el Congreso Nacional, especialmente los que responden a las órdenes del banquero Yani Rosenthal o del ex presidente Carlos Flores (1998-2002), estarán siempre dispuestos a apoyar las iniciativas del gobierno y de la bancada nacionalista en el Poder Legislativo.

Los otros dos partidos importantes en las filas de la hipotética “*oposición política*”, el partido Libertad y Refundación (LIBRE) y el partido Anticorrupción (PAC), no han definido una posición clara con respecto a la reelección, aunque el primero de ellos (LIBRE) podría inclinarse por apoyar la reelección pero en forma alterna y no continua, como pretende JOH y su grupo. En el caso del PAC, ahí las voluntades individuales son tan volátiles y ambiguas como lo es su jefe directo, el presentador de televisión Salvador Nasralla. No se sabe con precisión cuál sería la posición de los legisladores del PAC; lo más seguro es que se produzcan posiciones distintas y apoyos o rechazos diversos.

Pero las cosas tampoco lucen fáciles al interior del partido de gobierno, el PN. Ahí también hay resistencia, sobre todo por parte de aquellos dirigentes que, como Ricardo Álvarez o Miguel Pastor, siempre mantienen vigentes sus aspiraciones presidenciales y sueñan con convertirse en los candidatos oficiales de su partido. También tienen sus reservas otros dirigentes de la llamada “*vieja guardia*” nacionalista, como los ex presidentes Ricardo Maduro y Rafael Leonardo Callejas (aunque éste último vería con buenos ojos la reelección alterna, porque no esconde sus deseos de volver a Casa Presidencial reconvertido otra vez en presidente de la República). ¡Válgame Dios!

El presidente JOH, rodeado de un pequeño grupo de colaboradores cercanos que no tienen viejo arraigo dentro del partido, se ha distanciado gradualmente de los antiguos cuadros nacionalistas, que resienten el ostracismo y repudian lo que consideran “*la traición de Juan Orlando*” al alejarlos poco a poco de los cargos más relevantes y jugosos dentro del presupuesto nacional.

Pero, para sorpresa del propio JOH y su equipo más cercano, se asegura que la idea de la reelección también ha encontrado cierto rechazo entre algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, especialmente los que integran la llamada Sala de lo Constitucional. En una reciente reunión, el día de su cumpleaños, JOH habría preguntado a los magistrados de la Sala cuál sería su reacción ante la posibilidad de avalar jurídicamente la figura de la reelección, lo que supone reformar los llamados “*artículos pétreos*”, es decir irreformables, de la Constitución de la República. Tres de los cinco magistrados consultados habrían reaccionado negativamente y, al menos dos de ellos, fueron muy categóricos en su oposición a la reforma de

la Constitución. Para colmo de males, el presidente JOH también se enteró que el propio presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera Avilés, de filiación liberal, se opone igualmente al proyecto reeleccionista y no parece estar dispuesto a respaldarlo desde la Corte.

Vistas así las cosas, la situación parece que se le está complicando al presidente JOH. Su aspiración continuista encontrará más tropiezos de los que se esperaba y no le resultará fácil convocar el apoyo necesario para imponer la reelección presidencial.

Los militares, que son otro factor clave en la trama reeleccionista, mantienen un discreto silencio sobre el asunto y no emiten opinión definitiva sobre el tema, ni en público ni en privado. Pero no hay duda que, al menos por el momento, respaldan con cierto entusiasmo las iniciativas del presidente, aunque guarden una conducta discreta sobre sus pretensiones políticas de mediano y largo plazo.

Mientras JOH libra su propia batalla interna en el PN, el partido LIBRE parece haber entrado en una peligrosa fase de disputas internas y división orgánica. Al menos dos de sus diputados -el periodista Esdras Amado López y el abogado y ex juez Rasel Tomé- no esconden sus aspiraciones de convertirse en candidatos presidenciales, aunque ya el primero ha amenazado con abandonar las filas del partido y construir tienda aparte, fundando su propia agrupación política llamada "*La Nueva Ruta*". Otros diputados han mostrado descontento por lo que consideran "*estilo caudillista*" con que Manuel Zelaya maneja los asuntos del partido y por las preferencias que muestra hacia el llamado círculo de hierro que lo rodea. En efecto, Zelaya favorece con su amistad y apoyo preferencial a un grupo de colaboradores suyos que despiertan recelos y resistencias al interior de la bancada legislativa y del partido en general. El descontento es evidente y ha obligado a Zelaya a interrumpir su tratamiento médico en Cuba para regresar a Honduras y ocuparse directamente de la incipiente crisis.

Los problemas surgidos a última hora en las filas de LIBRE debilitan la unidad y cohesión de la nueva agrupación política, convertida de pronto, por obra y gracia del voto popular en noviembre de 2013, en la segunda fuerza política del país. La crisis los debilita y fracciona, limitando sus posibilidades de llevar a cabo una verdadera oposición parlamentaria y política frente al gobierno de JOH.

## La economía y sus vaivenes

**P**ara el próximo mes de noviembre, el gobierno espera confiado firmar el ansiado convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que le dará un gran respiro económico ante la crisis de sus finanzas y le permitirá acceder, inicialmente, a unos 220 millones de dólares en carácter de *“apoyo presupuestario”*. Además, el Acuerdo con el Fondo le permitiría tener opción a nuevos recursos en otros organismos financieros internacionales. Para el gobierno de JOH, el convenio es un asunto casi de vida o muerte.

Mientras ese esperado momento llega, el gobierno sigue esperando que las remesas familiares mantengan su ritmo de ingreso y superen los tres mil millones de dólares al final del año. Al inicio de este mes de octubre, el total recibido era de 2,558 millones de dólares, los que podrían aumentar sustancialmente en los meses navideños de noviembre y diciembre. Según un estudio del Banco Central (BCH), el 92,5% de esas reservas son invertidas en simple consumo y sólo un 3% se destina al ahorro y la inversión.

De acuerdo a los datos proporcionados por Mario Dehesa, el representante del FMI en Honduras, la economía local crecerá en este año a una tasa aproximada de 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y en el año siguiente será de 3,5%, lo que se traduce en un *“desempeño débil”* de la economía hondureña en su conjunto.

La deuda total (interna y externa), según los cálculos del Fondo, asciende actualmente a la suma de 7,858 millones de dólares, pero esta cantidad, se advierte, no incluye la llamada *“deuda flotante”* que ha sido calculada en unos 2,300 millones de dólares. El servicio de la deuda total en este año absorberá el 27% del presupuesto nacional, mientras que en el año 2015 ese porcentaje subirá al 30% (más o menos unos 31 mil millones de lempiras o unos 1,476 millones de dólares). Sólo en este primer semestre del año, hasta junio, el gobierno ya había pagado 8,185 millones de lempiras (unos 390 millones de dólares) por concepto de servicio de la deuda. Estas cifras revelan las razones por las cuales el gobierno requiere urgentemente de la ayuda del FMI y demás organismos financieros internacionales, ya sea mediante los *“apoyos presupuestarios”* puntuales, los nuevos créditos o la compra de los llamados *“bonos soberanos”*.

# NOVIEMBRE

## 2014

---

### La situación política

**M**ientras el presidente Juan Orlando Hernández (JOH) anuncia que a finales del año y principios del siguiente se darán a conocer los cambios que realizará en el gabinete ministerial y en otras dependencias clave de la nueva Administración, la ministra de Relaciones Exteriores Mireya Agüero de Corrales decidió no esperar mucho y presentó su renuncia irrevocable en el transcurso de este mes. Aunque alegó razones personales y afán de retirarse a la intimidad familiar, es bien sabido que su salida fue el fruto de las insufribles presiones y limitaciones a que se veía sometida por las constantes y groseras intromisiones del ministro jefe de gabinete Ramón Hernández Alcerro (RH) quien, desde sus oficinas en Casa Presidencial, maneja los asuntos de la Cancillería como si él fuera el propio ministro.

La renuncia de la señora Canciller se esperaba desde hace ya algún tiempo. Para sustituirla suena con mucha fuerza el nombre de Arturo Corrales, ex Canciller en el gobierno anterior y actual ministro de Seguridad. Al cargo de Corrales iría el General Julián Pacheco, actual jefe de la poderosa e influyente Dirección de Inteligencia e Investigación, creada recientemente en el gobierno de Porfirio Lobo.

Se mencionan también otros posibles cambios en algunos Ministerios o en dependencias descentralizadas del Estado, pero será hasta finales del año o a principios de 2015 cuando el presidente JOH informará los detalles. Cuando llegue ese momento, se supone, el gobernante anunciará por fin los resultados de la evaluación de desempeño a que han sido sometidos todos sus colaboradores en el aparato estatal. Desde el mes de septiembre, el ministro jefe de gabinete RH había prometido rendir un minucioso informe de resultados pero no cumplió su palabra. Hasta el día de hoy se desconoce el resultado final de la publicitada evaluación.

Durante este mes de noviembre, el gobierno de JOH ha debido hacer frente a los paros del transporte público en demanda de mejores condiciones de

seguridad y en protesta por las numerosas muertes de sus empleados a manos de las pandillas y extorsionadores criminales. Los transportistas ya no soportan los altos costos que significa el pago mensual de las llamadas “rentas”, sumas cuantiosas de dinero que deben pagar a las pandillas que los someten a la extorsión económica. Finalmente, presionado por la huelga de los dueños de autobuses y taxis del transporte urbano e interurbano, el gobierno accedió a reunirse con ellos y pactar algunas medidas puntuales para mejorar las condiciones de seguridad en las unidades del transporte público. Al mismo tiempo, solicitó al Congreso Nacional la aprobación de importantes reformas legislativas para mejorar la seguridad en el sector transporte.

Mientras manejaba el espinoso asunto de la protesta de los transportistas, el gobierno debió enfrentar un duro revés en su imagen pública cuando se produjo el asesinato de la reina de belleza, recientemente elegida como Miss Honduras Mundo, que debía participar en un evento internacional a celebrarse en Inglaterra a mediados del mes. La joven modelo fue asesinada junto a su hermana mayor por un reconocido caudillo local en el departamento de Santa Bárbara. El asesino, sospechoso de estar vinculado con el crimen organizado en la zona occidental del país, gozaba de completa impunidad y tolerancia por parte de los operadores de justicia de la región. La muerte de la Miss Honduras ha causado un grave daño a la ya de por sí maltrecha y deteriorada imagen internacional del país.

Por si todo esto fuera poco, en este mes de noviembre estalló un conato de rebelión al interior de la Policía Nacional (PNH), cuando el presidente JOH, por intermedio del ministro de Seguridad, Arturo Corrales, hizo pública la súbita destitución del Director de la PNH, el Comisionado General Ramón Sabillón Pineda. Ofendido por la forma un tanto grosera y poco elegante en que fue destituido, Sabillón protestó abiertamente por lo que consideró una decisión arbitraria e ilegal, al tiempo que se resistía a abandonar sus oficinas en el Cuartel General de Casamata en la ciudad capital. A su lado se mantenían muchos de los miembros de la cúpula policial que le acompañaba en su gestión como Director. Los “rebeldes” se negaban a permitir el ingreso al Cuartel General de los demás oficiales que respaldaban la decisión presidencial, y se oponían a la designación del nuevo jefe, el Comisionado General Félix Villanueva Mejía.

Mientras estos acontecimientos elevaban la tensión en el clima político nacional, el presidente se encontraba de viaje en Estados Unidos y manejaba la crisis a través del ministro Corrales. Finalmente las aguas volvieron a su cauce normal y Sabillón aceptó su destitución, una vez que le fue comunicada oficialmente por el propio JOH, aunque todavía no ha aclarado si está dispuesto a aceptar el nuevo cargo que le fue asignado como “agregado” en

la representación de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York.

La “*rebelión*” momentánea en la cúpula policial que rodeaba al antiguo Director Sabillón, es apenas la punta del iceberg de una crisis mucho más profunda y complicada que se está desarrollando dentro de las filas policiales. Esa crisis tiene que ver, entre otras causas menores, con la política de militarización creciente -valga decir remilitarización- del sistema de seguridad, impulsada por el gobierno de JOH. Al privilegiar la creación, equipamiento y desarrollo de unidades militares con funciones policiales como la llamada Policía Militar de Orden Público (PMOP) o las denominadas “*Fuerzas interagenciales o interinstitucionales*” como la FUSINA, el gobierno genera, colateralmente, una reacción de rechazo y repudio entre los policías profesionales, que se sienten desplazados y relegados a un segundo plano. Sabillón se hacía eco de ese malestar y, de alguna manera, lo expresaba a través de su desempeño profesional al frente de la PNH. Criticaba la falta de recursos en su institución, a la vez que señalaba la abundancia de equipos y dineros al servicio de las nuevas unidades policiales amparadas bajo la sombra militar. El gobierno sospechaba que Sabillón estaba detrás de la circulación de comunicados y panfletos anónimos en los que se expresaba el disgusto y malestar de los jefes policiales. Además, Sabillón había llevado a cabo algunas acciones policiales de mucho impacto, sin avisar previamente a JOH o sin coordinar en forma subordinada con los jefes de FUSINA y la PMOP. En su afán por recuperar la credibilidad pública de la PNH, el Director saliente había ido demasiado lejos y provocaba el enojo de Casa Presidencial, interesada siempre en promover y manejar adecuadamente el protagonismo mediático del señor presidente. Sabillón se había convertido en un subalterno incómodo. Su caída era cuestión de días.

La inestabilidad en la cúpula policial se está convirtiendo en una norma, reflejando así la volatilidad de las posiciones en la estructura jerárquica y la vulnerabilidad misma de la institución en su conjunto. En menos de tres años han llegado cuatro nuevos Directores al frente de la PNH: Ricardo Ramírez del Cid en octubre de 2011 y sólo duró en el cargo ocho meses, hasta mayo de 2012; entonces entró Juan Carlos “*El Tigre*” Bonilla, que se mantuvo en la cúpula durante un año y nueve meses, para dejar el lugar a Sabillón Pineda que aguantó apenas once meses, desde diciembre 2013 hasta noviembre de este año. Cabe preguntarse, ¿cuánto tiempo durará en su nueva posición el recién nombrado Director Félix Villanueva? Cuatro Directores en menos de tres años son un mal indicio, señal inequívoca de que algo anormal está sucediendo en la fuerza policial.

La destitución de Sabillón y sus aliados es apenas la salida de la crisis, no es la solución. Las causas del problema siguen latentes y, si continúa la misma línea política de militarización creciente en el Sector seguridad, es

casi inevitable que los conflictos se tornen recurrentes y vuelvan, más temprano que tarde, a surgir y desarrollarse hasta convertirse en nuevas crisis.

Una prueba de ello es la decisión del gobierno de transformar en figura constitucional a la PMOP. Para eso es necesario reformar la Constitución y atribuirle rango constitucional a una institución dependiente de las propias Fuerzas Armadas, cuya regulación legal ya está plasmada en el texto de la Constitución de la República. En el Congreso anterior, controlado en forma mayoritaria por el partido Nacional (PN) y presidido entonces por JOH, fue aprobada la “*constitucionalización*” de la PMOP, a pesar de la oposición de la entonces Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) y del Comisionado nacional de los derechos humanos (CONADEH). Para que esa reforma tenga pleno valor, es necesario que la nueva legislatura, es decir el Congreso actual, la ratifique. Se necesitan las dos terceras partes de los 128 votos del total de diputados propietarios que componen el Parlamento, es decir que el PN requiere reunir 86 votos a favor para que la PMOP quede “*blindada*” con nivel constitucional. En la reciente reunión del Congreso en la ciudad de Choluteca, el gobierno intentó introducir la reforma y forzar una votación favorable, pero fracasó en su iniciativa. No pudo reunir los votos suficientes y se vio obligado a dar marcha atrás. Fue un importante revés político, posiblemente el primero en sus diez meses de gobierno, que sufre el presidente JOH.

El plazo para aprobar la ratificación del rango constitucional de la Policía Militar vence a finales del mes de enero del 2015, cuando ya debe comenzar la siguiente legislatura y, en ese caso, habría que comenzar de nuevo todo el proceso de constitucionalización de la PMOP. Por eso, no se debe descartar la posibilidad de que el gobierno haga un nuevo intento para buscar una votación favorable, antes de que termine la presente legislatura, el 25 de enero de 2015. Sin embargo, la oposición declarada de LIBRE y del jefe político del PAC, Salvador Nasralla, a las medidas de militarización del gobierno de JOH, se convierten en un serio obstáculo para las pretensiones del gobernante. A esto hay que sumar el rechazo por parte del Consejo Central Ejecutivo del partido Liberal (PL) a la idea de volver constitucional la figura de la Policía Militar.

Se le están complicando las cosas a la Administración de JOH. A finales del mes llegó a Tegucigalpa una nutrida misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA) que funciona como instancia previa para pasar al ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta delegación de la CIDH llega para visitar los puntos calientes del territorio nacional y conocer in situ la situación real de los derechos humanos en Honduras. Tomando en cuenta las frecuentes denuncias presentadas por los más diversos grupos sociales y organizaciones no gubernamentales a nivel nacio-

nal e internacional, es de esperar que la CIDH valore en forma muy crítica la situación de los derechos humanos y presente reclamos y demandas ante el gobierno actual.

Como para complicar más las cosas, el gobierno ha iniciado el proceso de saneamiento y recuperación de la administración de dos empresas estatales muy importantes, la compañía telefónica HONDUTEL y la empresa de energía eléctrica ENEE. Este proceso supone el despido de miles de trabajadores, unos mil en la primera y al menos dos mil en la segunda. Los despidos ya han empezado, calificados inicialmente como “*suspensiones temporales*” (hasta abril 2015), pero los afectados saben que las posibilidades de volver y recuperar sus puestos de trabajo son prácticamente nulas. Aquí surge un preocupante foco de conflictividad social que amenaza convertirse en crisis laboral frente a los influyentes sindicatos de ambas empresas.

Pero el gobierno no tiene más alternativa que despedir a los que considera trabajadores “*súper numerarios*”, es decir innecesarios, que consumen millonarias sumas en sueldos y salarios cada mes, provocando la quiebra y la bancarrota de las finanzas de las dos compañías. El saneamiento de esas empresas, cuyo déficit constituye más de la mitad del déficit fiscal total del gobierno (el 7-8% del Producto Interno Bruto), es una condición impuesta por el Fondo Monetario Internacional como requisito previo para firmar el ansiado convenio que el gobierno de JOH espera con desesperación y ansiedad desde principios del año. El mencionado Acuerdo había sido anunciado para este mes de noviembre pero, a última hora, la Misión del Fondo declaró que su posible firma podría llevarse a cabo en los primeros días del mes de diciembre.

Si se produce la firma del convenio, el gobierno podrá respirar más tranquilo y esperar el fin del año con cierta satisfacción y esperanza. Para empezar, el Acuerdo le abriría las puertas a financiamiento adicional para “*apoyo presupuestario*”, unos 220 millones de dólares, provenientes del propio FMI, más otras fuentes de organismos financieros multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) o el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para sólo mencionar algunos.

La firma del Convenio, más el alza alentadora en los precios del café (podría generar unos 500 millones de dólares más de los esperados en esta cosecha), la baja en el precio de los combustibles y el aumento moderado de las remesas familiares (serán superiores a los tres mil millones de dólares), son razones suficientes para tener cierto optimismo que le permitiría al gobierno esperar el nuevo año con más ilusiones y esperanzas que las que tuvo al inicio de su gestión administrativa.

# DICIEMBRE

## 2014

---

### La situación política

**D**iciembre, el último mes del primer año de gobierno de Juan Orlando Hernández, ha sido un mes cargado de acontecimientos políticos y de indicios claros de que el próximo año 2015 será uno de muchas sorpresas y definiciones con respecto al futuro inmediato del país.

Desde el punto de vista económico, el nuevo año se presenta con algunos elementos que permiten cierto optimismo: el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a mediados de este mes, la sustancial reducción en los precios del petróleo, el alza estimulante en los precios internacionales del café, la estabilidad con alguna tendencia al crecimiento de los envíos de remesas familiares, etc. Sin embargo, desde el punto de vista político, las perspectivas son más inquietantes y surgen suficientes nubarrones para empañar el ambiente y contaminar el clima social: los temas de la reforma electoral, la pretendida reelección presidencial y el debate sobre la necesidad de establecer la segunda vuelta en los procesos electorales, la naciente alianza de los principales partidos de la oposición, la remilitarización de las medidas de seguridad y el renaciente protagonismo de los militares en eslabones clave del aparato estatal, etc.

La firma de un convenio trianual con el FMI fue uno de los logros más importantes del equipo que rodea a JOH, aunque el precio a pagar ha sido muy alto y los compromisos contraídos serán, seguramente, fuentes de nuevos problemas y tensiones sociales casi inevitables. Para el caso, la reducción sustancial de la planilla estatal y la clausura de las plazas vacantes han generado ya protestas y rechazo por parte de los gremios laborales más afectados, especialmente en los sindicatos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la compañía telefónica HONDUTEL. El gobierno se ha comprometido a dejar cesantes a más de siete mil empleados públicos, sobre todo en aquellas empresas estatales que tienen los mayores problemas financieros, y que, dicho sea de paso, son los que más repercuten en el elevado índice de déficit fiscal (casi el 8% del Producto Interno Bruto-PIB). El gobierno se ha comprometido a cerrar este año con un déficit de 5,2% del PIB y a bajarlo a 2% en el año 2017. En cuanto a la inflación,

ésta alcanzó la tasa acumulada de 6% a finales de noviembre, por lo que se espera que no altere los cálculos iniciales del Banco Central (no más del 7%) a finales del año 2014. De igual manera, el gabinete económico de JOH ha asumido la obligación de reducir el tamaño del gobierno, parar la carrera de endeudamiento para gasto corriente, aumentar la recaudación tributaria y sanear las finanzas de las empresas estatales que más afectan al déficit fiscal (la ENEE y HONDUTEL).

A cambio del cumplimiento de estos difíciles compromisos (el FMI hará revisiones semestrales de la forma en que avanza el funcionamiento del convenio y cómo se van cumpliendo las metas adoptadas por las partes), el gobierno de JOH recibirá unos 460 millones de dólares, distribuidos en diversos préstamos con varios organismos internacionales (130 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, 55 del Banco Mundial, 33 de la Unión Europea, sumados a los 215 millones para apoyo presupuestario que el FMI facilitará a cargo de las aportaciones anuales que Honduras hace a esa institución). Estos fondos, algunos de los cuales serán desembolsados en los primeros meses de 2015, representan un gran alivio para la asfixiante situación en que se encuentran actualmente las finanzas públicas.

Acorde con las obligaciones contraídas con el FMI, el Congreso Nacional aprobó el nuevo presupuesto de la nación para el año 2015 : 185,482 millones de lempiras, unos 8,833 millones de dólares, un poco más del 40% del PIB nacional. Los legisladores, a tono con los compromisos ante el Fondo, redujeron los montos asignados a Salud (8,3 millones de dólares) y Educación (32 millones de dólares) pero, en cambio, aumentaron los destinados a Seguridad y Defensa, sobre todo este último. La inversión pública sufrió un recorte sustancial y quedó reducida a unos 4 mil millones de lempiras, es decir unos 200 millones de dólares, muy por debajo de las cifras establecidas en este año 2014. El nuevo presupuesto refleja los parámetros de austeridad que el gobierno ha pactado con los organismos financieros internacionales, poniendo énfasis en la reducción del tamaño del Estado y la disminución de la abultada planilla salarial. No es casual que el gobierno haya iniciado ya un censo de todos los empleados públicos para proceder a la cancelación de las plazas innecesarias. El influyente ministro coordinador sectorial, Jorge Ramón Hernández, llegó al extremo de afirmar que, en base a las primeras informaciones arrojadas por el censo en marcha, casi la mitad de los burócratas estatales no tienen asignadas funciones específicas. Los despidos ya comenzaron, especialmente en las áreas más sensibles de las dos empresas estatales en bancarrota financiera: la ENEE y HONDUTEL.

Estos despidos de los llamados “*empleados supernumerarios*” han generado la oposición de las organizaciones sindicales, a la vez que han aumentado las cifras del desempleo a nivel nacional. De acuerdo a Carlos Madero, ministro del Trabajo, el desempleo abierto actual es de 3.9% del total de la

Población Económicamente Activa (PEA), estimada en 3.9 millones de personas. Pero, el denominado subempleo alcanza porcentajes alarmantes: 40%. Esto explica en parte la razón por la cual crece y se amplía la “*economía informal*”, que representa ya el 70 de toda la economía nacional. A esto se debe sumar el hecho de que la calificada como “*población ni-ni*”, es decir los jóvenes que no trabajan ni estudian, suma en Honduras 800 mil personas, lo que equivale al 23% de la PEA.

Por otro lado, la sustancial mejoría en los precios internacionales del café, convertido ya junto a las remesas familiares, en una de las dos principales fuentes de divisas en la economía del país, representa un estímulo importante para la macroeconomía y, en particular, para las decenas de miles de productores del grano. Las remesas, por su parte, han mantenido su ritmo de crecimiento y deben superar ya los tres mil millones de dólares, en base a la lenta pero evidente recuperación gradual de la economía norteamericana. Otro tanto puede decirse de la reducción de los precios del petróleo que, sin duda, ya está repercutiendo favorablemente en la disminución del monto de la factura petrolera anual, que ha sido en los últimos años una pesada carga superior a los 2,200 millones de dólares cada año.

Aunque las inversiones extranjeras no han crecido en la forma que el gobierno esperaba, JOH y sus colaboradores confían en que la firma con el FMI y la puesta en marcha de las llamadas “*Ciudades modelo*” (Zonas Especiales de Desarrollo Económico y Empleo-ZEDEs), reviertan la tendencia negativa y permitan el flujo esperado de inversionistas extranjeros en el próximo año. Lo mismo se espera con respecto al turismo, cuya tendencia ha sido ascendente en los últimos meses, sobre todo gracias a la nueva infraestructura portuaria que se está construyendo en la Bahía de Trujillo, en la zona norte del país.

Los cálculos son optimistas. El gobierno espera alcanzar mejores y más altos niveles de crecimiento económico (la estimación del FMI es de 2,5 a 3% del PIB en este año y de 3% en el 2015). Sin embargo, si se toma en cuenta que la población crece en promedio a 2,6% cada año, la distribución de esas tasas de crecimiento no producirá ningún incremento real en la llamada renta per cápita del país.

Pero, aunque los pronósticos económicos son optimistas y alentadores, no se puede decir lo mismo de los pronósticos en materia política y social.

La aspiración continuista del actual presidente de la República ha enturbiado las aguas y revuelto el escenario político local. La reelección presidencial está prohibida en la legislación constitucional hondureña. Incluso está prohibido y es penado por la ley el simple acto de promover la reforma legislativa que se oriente a permitir que un presidente pueda reelegirse. El artículo 239 de la Constitución así lo establece claramente.

Por ello, no ha sido casual que un grupo de diputados nacionalistas, avalados sin duda por el propio JOH y por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, hayan presentado ante la Sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia una petición para que esa Sala interprete la Constitución y declare ilegal la prohibición de promover la reelección. Algo así como declarar “*inconstitucional*” la propia Constitución. Un disparate jurídico, sin duda, pero necesario para llevar adelante los planes continuistas.

La estrategia reeleccionista inicial constaría de dos etapas claramente distintas pero relacionadas entre sí: la primera es la de quitar la prohibición de hablar, planificar y promover la reelección presidencial; la segunda sería la de reformar todo el contenido del artículo 239 y convertir en legal la reelección presidencial, específicamente en su forma de reelección continua y no alterna, como proponen algunos juristas independientes. Según informaciones confidenciales, la idea original era que los ex presidentes nacionalistas (Rafael Callejas, Ricardo Maduro y Porfirio Lobo) pidieran la reforma constitucional para derogar la prohibición de reelección presidencial, pero, a juicio de algunos de ellos, primero sería necesario que se eliminara la prohibición de promover la derogatoria. De lo contrario, correrían el riesgo de aparecer como responsables por la comisión de un delito. Esa es la razón por la que primero se pide quitar la prohibición de hablar de reelección, para luego proceder a la reforma que prepare el camino hacia la misma, valga decir el continuismo indefinido del actual presidente.

Pero las cosas se han complicado un tanto en el camino. El ex presidente Callejas (1990-1994) ha empezado a mostrar un desmedido interés en el asunto de la reelección, presentándose públicamente como un partidario convencido de la misma. Pero, claro está, se refiere a su propia reelección y no a la de JOH, lo que ha provocado una sospechosa reacción en Casa Presidencial. JOH, fiel a su estilo autoritario, ha aclarado a los dirigentes de su partido que cuando se hable de reelección se estaría hablando de la reelección del actual presidente y de nadie más. Incluso, se asegura en los pasillos del palacio, ha amenazado indirectamente a Callejas con remover los juicios por corrupción que abrumaron durante varios años al ex presidente.

Pero los intentos continuistas han producido otro efecto inesperado: la unión, todavía frágil e incipiente, de las fuerzas de la oposición política, representadas en los cuatro partidos firmantes de la Declaración de alianza: LIBRE, PAC, PL y PINU. Los jefes máximos de esas cuatro agrupaciones políticas firmaron el día 22 un Comunicado en el que señalan sus coincidencias y denuncian los intentos reeleccionistas de JOH, a la vez que califican a su gobierno como si fuera una dictadura. La oposición aclara que la reforma constitucional propuesta por los nacionalistas sólo puede ser posible por la vía de un plebiscito o “*consulta popular*”, pero nunca a través de un trámite pactado desde ya con la Corte Suprema de Justicia (la Sala constitucional

está integrada por magistrados colocados en esos cargos por influencias de JOH y, por lo tanto, incondicionales a él).

La fuerza de esta alianza opositora, si logra mantenerse por algún tiempo, puede ser decisiva al momento de adoptar decisiones clave en el seno del parlamento. Habría que ver hasta qué punto los diputados, especialmente los liberales (27 en total), obedecen las órdenes de su Consejo Central Ejecutivo, actualmente presidido por Mauricio Villeda, el ex candidato presidencial del PL en las pasadas elecciones de 2013. Se sabe que los legisladores del PL están fraccionados en al menos dos o tres grupos que no siempre votan en atención a la línea política de su partido. Hay algunos que responden al dirigente Yani Rosenthal, frustrado aspirante a candidato presidencial; otros obedecen al ex presidente Carlos Flores, dueño del diario La Tribuna, quien funciona como operador político de los grupos más conservadores de las élites empresariales y de la vieja guardia del PL; algunos más podrían todavía sentir cierta lealtad hacia Elvin Santos, el derrotado candidato presidencial en las elecciones de 2009. O sea que es difícil hablar de una bancada liberal unida y, por lo mismo, no pueden ser muy confiables al momento de acatar las decisiones de la recién creada alianza de oposición.

En el caso del partido LIBRE, las cosas también están complicadas. Aunque sus diputados apoyan la formación de la fuerza opositora conjunta, no todos están de acuerdo con las intenciones del ex presidente Manuel Zelaya de competir en futuras elecciones como candidato en caso de que se produzca la reforma que derogue la prohibición reeleccionista. Le acusan de mantener reuniones secretas con el presidente JOH para sacar adelante una reforma que les permita a ambos enfrentarse en futuras elecciones presidenciales. Zelaya está seguro de poder derrotar a JOH, pero sus críticos al interior de LIBRE consideran una utopía tal pretensión, sobre todo si las nuevas elecciones se celebran en base a las viejas reglas y normativa electoral vigente.

Y aquí es donde entra en juego el espinoso tema de la reforma electoral. Aunque todos los candidatos presidenciales en el 2013 se comprometieron ante la comunidad internacional a llevar a cabo a partir de este año una profunda revisión y reforma de la legislación electoral, lo cierto es que el partido Nacional y buena parte del Liberal no han cumplido su palabra. Los diputados nacionalistas se han negado a discutir a fondo las reformas electorales, posponiendo el debate parlamentario para el próximo año, según lo declaró el propio presidente del Poder Legislativo, el nacionalista Mauricio Oliva. Sin reforma electoral, lo que supone la aprobación en la práctica de una nueva Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (la actual Ley data del año 2004 y ya está rebasada por la realidad política y la nueva geografía electoral del país), la oposición no podrá competir en condiciones de equidad y justicia en las próximas elecciones. Basta un ejemplo: la integración del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el máximo órgano responsable de dirigir y gestionar el proceso electoral, debe estar integrado por re-

presentantes de las principales fuerzas políticas del país, lo que significa incorporar en su estructura a los delegados de LIBRE y del PAC, segunda y cuarta fuerzas políticas en el escenario electoral. El PN, hasta el día de hoy, se ha negado arbitrariamente a discutir siquiera la necesidad de cambiar la estructura del TSE, en un intento por conservar la actual organización, totalmente favorable a los designios reeleccionistas de JOH.

Mientras el proyecto de reforma electoral permanezca guardado en los archivos del presidente Oliva, las vías para soluciones negociadas a una posible crisis política se mantendrán cerradas. La reforma es fundamental para hacer más viable el rígido sistema político, que ha existido y se ha mantenido sobre la base del antiguo bipartidismo. Pero hoy la realidad es otra: hay nuevas fuerzas políticas que merecen respeto y tienen el derecho a participar en condiciones de equidad y democracia. Los nacionalistas, en complicidad con muchos diputados liberales, se empeñan en mantener vivo el viejo esquema bipartidista, a pesar de que los partidos que integran la nueva alianza opositora reúnen en conjunto casi el 70% de todos los votos depositados en las urnas en noviembre del año 2013.

Por si estos problemas no fueran suficientes para conformar un cuadro preocupante de conflictividad política y social, el gobierno de JOH ha continuado y profundizado su política de militarización creciente de las fuerzas de seguridad pública en el país, contaminando con el virus de la política partidaria el desempeño de las fuerzas policiales y militares. La creación de innumerables unidades y fuerzas de tarea de todo tipo en el Sector seguridad, ha generado un laberinto institucional que fractura la cohesión de la fuerza policial, debilita la jerarquía y los mandos, al tiempo que confunde las funciones puramente de defensa externa (militares) con las que tienen que ver con el orden público a nivel interno (policiales). Esta tendencia "*militarizante*" en el área de seguridad, ha creado malestar e insatisfacción tanto al interior de las Fuerzas Armadas como en el seno de la Policía misma. Aunque todavía no afloran abiertamente esas manifestaciones de disgusto, es evidente que existen y que se acumulan gradualmente, conformando un cuadro peligroso de resistencia y oposición profesional dentro del Sector de la seguridad pública.

La tendencia a militarizar las instituciones y los instrumentos de las políticas de seguridad ha cobrado nueva fuerza luego del anuncio oficial del nombramiento del General Julián Pacheco (XVIII promoción de la Escuela Militar) al frente del Ministerio de Seguridad, en sustitución del político civil Arturo Corrales, quien regresa a ocupar su antiguo cargo como Canciller de la República. Pacheco se venía desempeñando como jefe de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), creada en el año 2012. En sustitución de Pacheco será nombrado otro militar pero, es casi seguro, el antiguo General seguirá conservando buena parte de sus contactos e influencias al interior de la DNII.

Ya para finalizar este año 2014, llegó -por tercera vez en el año- el General John Kelly, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, quien se ha vuelto un visitante muy asiduo e influyente en la actual Administración nacionalista de JOH. Al comentar sobre sus asiduas visitas a nuestro país, el norteamericano dijo, entre divertido y burlón, sentirse ya como un ciudadano hondureño más. ¡Sólo eso nos faltaba!

**AÑO**  
**2015**

---

# ENERO 2015

---

## La situación política

**E**l día 27 de este mes se cumplió oficialmente el primer año de funcionamiento de la Administración nacionalista dirigida por el presidente Juan Orlando Hernández (JOH). El nuevo año comenzó en medio de un clima de expectativas e incertidumbre, alimentado desde Casa Presidencial con el anuncio de cambios sustanciales en el equipo de gobierno. Al final, todo se redujo más bien a un escándalo puramente mediático, ya que los cambios ni fueron tan “sustanciales”, ni significaron una modificación sensible en las principales tendencias de las políticas gubernamentales.

De todas las “rotaciones” llevadas a cabo en el gabinete de gobierno, la más sustantiva fue, sin duda, la del ministro de Seguridad, Arturo Corrales, quien pasó a reocupar su antiguo cargo como ministro de Relaciones Exteriores, mientras el General Julián Pacheco, una vez forzado a optar por el retiro del servicio activo en las Fuerzas Armadas, fue nombrado como nuevo ministro de Seguridad. El resto de “cambios” o “rotaciones administrativas” afectaron a dependencias menores o intermedias dentro del engranaje gubernamental, sin provocar modificaciones esenciales en el equipo de gobierno.

De esta manera, el presidente JOH inicia su segundo año de gobierno rodeado, en lo fundamental, por los mismos colaboradores con los que inauguró su Administración pública en enero de 2014. Son sus aliados, hombres y mujeres de su confianza, que le apoyan en todo lo que hace, que obedecen fielmente sus órdenes y comparten con él sus aspiraciones continuistas a través de la pretendida reforma constitucional para permitir la reelección presidencial.

Y es precisamente ese tema, el de la reelección en el cargo de presidente, el que provoca mayor crispación y tensa el ambiente político de una forma cada vez más evidente y, por lo mismo, más preocupante.

---

En el mes de diciembre, el día 22, los cuatro partidos de oposición -el Liberal, el partido Anticorrupción, el de Libertad y Refundación, junto al partido de Innovación y Unidad- firmaron una importante Declaración de alianza política, la llamada Declaración de Toncontín, (por el lugar en que fue anunciada al público), en la que se comprometen a impedir las pretensiones reeleccionistas de JOH, denunciar su estilo autoritario, condenar la militarización gradual de las políticas de seguridad pública y denunciar las políticas económicas y sociales del gobierno. La firma de esta Declaración se convirtió en un acto político muy importante y causó, como era lógico suponer, la airada reacción del gobierno que, en verdad, no se esperaba un hecho semejante, al menos no en este momento de la situación política del país.

Aunque al principio la nueva alianza opositora fue vista con cierta desconfianza e incredulidad, lo cierto es que ya el sábado 24 mostró su fuerza y capacidad de influencia en los debates parlamentarios. La pretensión obstinada de JOH de otorgar a la Policía Militar de Orden Público (PMOP) el rango de figura constitucional, sufrió una sorprendente derrota en el Congreso Nacional, cuando la oposición, por mayoría de votos (67 a 61, diez diputados liberales desobedecieron las instrucciones de su partido y sucumbieron a los halagos y favores pagados por el gobierno), se impuso y rechazó la propuesta del Poder Ejecutivo. De hecho, esta ha sido la primera derrota parlamentaria importante que sufre el presidente JOH en muchos años, si se incluyen los cuatro años en que manejó a su antojo y con sobrada y cómoda mayoría de votos la gestión del Parlamento.

Pero pareciera que la derrota no lo desanima y más bien lo estimula y lo lanza a una nueva ofensiva política, esta vez en torno a su propuesta de convocar a un plebiscito para que sea el pueblo el que decida qué hacer con la PMOP, su fuerza militar/policial favorita. No es casual que en su proyecto de *“constitucionalización”*, JOH incluía la propuesta de que esa fuerza armada quedara bajo su mando directo y personal. En esencia, todo indicaba que el presidente quería crear una tercera fuerza armada, al lado de la Policía y el Ejército (Fuerzas Armadas), bajo su control directo y sometida totalmente a su voluntad política. Un peligroso ensayo de politización indebida de la fuerza militar, cuyas consecuencias ya han sido desastrosas en el reciente pasado de Honduras.

La convocatoria al plebiscito, cuya legalidad plena requeriría al menos el 51% de los votos de todos los electores que participaron en el reciente proceso electoral de 2013 (lo que equivale, al menos, a un millón 600 mil ciudadanos), le ha permitido al presidente JOH y sus colaboradores iniciar una verdadera campaña política a nivel nacional promoviendo las bondades de la PMOP y, de paso, generando opinión favorable en pro de la reelección presidencial.

Las aspiraciones continuistas de JOH no sólo han provocado el rechazo de la oposición, que exige con razón la emisión de una nueva legislación electoral que vuelva más transparentes y creíbles los procesos electorarios. Al mismo tiempo, la oposición demanda una reestructuración profunda del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a fin de que se encuentren ahí representadas las nuevas fuerzas políticas de la oposición, es decir los partidos LIBRE y PAC, además del PINU. La recomposición del Tribunal se ha convertido en una condición inevitable para que la reforma electoral anunciada sea realmente aceptada por todas las fuerzas políticas y llene los requisitos para una mejor y más legítima transparencia electoral.

Al interior del partido Nacional, también ha habido reacciones cada vez más visibles que denotan malestar y disgusto por las pretensiones reeleccionistas del presidente. Ricardo Álvarez, el derrotado contrincante de JOH en las elecciones internas del 2012 y ex alcalde de la ciudad capital, ha declarado públicamente que no ha abandonado sus aspiraciones presidenciales y *“que su sueño sigue vivo”*, aunque, por ahora, está trabajando como Designado presidencial en la Administración de JOH, su antiguo adversario político.

En el seno del partido LIBRE también soplan los vientos de la reelección. El ex presidente Manuel Zelaya, coordinador y líder supremo de esa nueva agrupación política, no oculta sus intenciones de volver a competir por la presidencia de la República, convencido como está que sólo él puede vencer a JOH en un nuevo torneo electoral. Esta convicción de Zelaya ha creado mucho malestar al interior del partido LIBRE y ha producido ya las primeras fisuras y deserciones políticas. LIBRE, que por el volumen de votos obtenidos (casi un millón de votos en noviembre de 2013) se proclama como la primera fuerza política de la oposición y el segundo en el sistema de partidos del país (sólo después del partido Nacional), está atravesando por una crisis interna que lo debilita y fracciona. El fuerte liderazgo personal de Zelaya, el círculo casi impenetrable que le rodea y su reiterada práctica de celebrar negociaciones *“confidenciales”* y bajo la mesa con sus adversarios políticos, le están causando un daño muy sensible al partido, generan descontento y estimulan la división interna. LIBRE deberá renovar sus prácticas de democracia interna si quiere recuperar la influencia y la fuerza que debería tener, dado el volumen de votos obtenidos en las elecciones y el número de diputados con los que todavía cuenta (unos 34, otros tres han desertado).

En cambio, el partido Liberal, liderado por quien fuera su candidato presidencial en noviembre de 2013, el abogado Mauricio Villeda, aunque quedó muy maltrecho y golpeado después de su derrota electoral, parece ser la fuerza política que mejor ha capitalizado a su favor la energía de la alianza opositora concertada en diciembre de 2014. A pesar de la división interna que debilita al partido, Villeda ha recuperado gradualmente la aceptación de los votantes y luce, por momentos, como el verdadero dirigente de una opo-

---

sición política seria y sostenida. Ha sido, al menos por ahora, el principal beneficiario de la victoria parlamentaria que obtuvo la oposición política el 24 de enero recién pasado, al derrotar la propuesta del partido gobernante para dar rango constitucional a la Policía Militar.

Pero el liderazgo de Villeda todavía es frágil y cuestionado dentro de las filas liberales. Debe enfrentar la conspiración constante, marcada por el colaboracionismo y la traición del ex presidente Carlos Flores y del joven político sampedrano y frustrado aspirante presidencial Yani Rosenthal. Villeda está en proceso de conformar un verdadero equipo de colaboradores que le sean leales y que compartan realmente sus convicciones políticas a favor de la alianza opositora al gobierno de JOH. Por el momento, el aliado más cercano a los liberales de Villeda es el partido Anticorrupción que, a pesar de las constantes veleidades de algunos de sus dirigentes, muestra una sostenida voluntad de denuncia y oposición al gobierno actual.

Ya para finalizar el mes, la opinión pública se vio sacudida por una noticia de mucho impacto y, todavía, de impredecibles consecuencias: la entrega voluntaria en manos de los norteamericanos de los hermanos Javier y Leonel Rivera Maradiaga, jefes del llamado Cartel de los Cachiros, banda de narcotraficantes que durante muchos años han sido los amos y señores del tráfico de drogas y el lavado de dinero en la zona norte del país. Acorralados ante la posibilidad, muy real por cierto, de una muerte segura a manos de las autoridades hondureñas, los llamados Cachiros optaron por negociar directamente con las autoridades estadounidenses y entregarse a la justicia norteamericana. El gobierno de Honduras ignoraba la existencia de las negociaciones y fue sorprendido por la noticia de la entrega. La información se conoció el sábado 31 de enero, divulgada por la radioemisora Globo, y el gobierno sólo pudo confirmar oficialmente la noticia el día martes 03 de febrero, una vez que el embajador de los Estados Unidos, James Nealon, lo había informado oficialmente al presidente JOH.

Como bien lo ha informado ya la revista especializada InsigthCrime, desde Washington, la entrega de los Cachiros ha despertado la angustia y el temor en círculos clave de las élites hondureñas, tanto bancarias como empresariales y políticas. La red de los Cachiros involucraba a banqueros locales, encargados de lavar las millonarias sumas que manejaban los dueños del Cartel, de igual manera abarcaba a reconocidos empresarios (industriales, agrícolas y comerciantes de todo el país), así como a destacados políticos, muchos de ellos diputados, con liderazgos a nivel regional y nacional. Las contribuciones de los Cachiros a las campañas electorales de muchos dirigentes políticos no eran un secreto para nadie, y algunos diputados actuales deben su triunfo electoral a la generosidad de la banda de narcotraficantes. Igualmente, muchos altos funcionarios, amigos y parientes incrustados en el gobierno anterior, el de Porfirio Lobo (2010-2014), están estrechamente

ligados a las redes delincuenciales del lavado de dinero y financiamientos oscuros, patrocinados por los Cachiros en los años recientes.

El asesinato de Juan Gómez el día 22 de enero, en Tocoa, zona caliente en el mundo del narco, en la región norte del país, encendió las alarmas y aceleró la negociación de los Cachiros con los Estados Unidos. Gómez, un caudillo político local, que había sido Gobernador del departamento de Colón en el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) y posteriormente diputado por el partido Nacional, se desempeñaba como el administrador “legal” de muchos de los bienes y propiedades del Cartel. Se asegura que él fue quien inició los contactos con las autoridades norteamericanas en Tegucigalpa para preparar la posible entrega de los hermanos Rivera Maradiaga. Su muerte funcionó como una especie de alerta temprana, que reveló a los Cachiros el gravísimo peligro al que se enfrentaban. Habían demasiadas personas interesadas en la muerte de los Cachiros y, por lo tanto, era preferible entregarse a los norteamericanos antes que caer en otras manos.

Con la entrega de los hermanos jefes del Cartel más importante de la zona norte, y con la desarticulación del Cartel de los hermanos Valle en la zona occidental del país, fronterizo con Guatemala, las redes del narcotráfico en Honduras han sufrido golpes demoledores, pero no definitivos. La capacidad de estas organizaciones criminales para recomponer sus estructuras es muy grande, y siempre han mostrado mucha flexibilidad e imaginación para readaptarse a las condiciones adversas y cambiantes. Seguramente habrá una pelea sorda entre los grupos rivales para volver a construir redes de control e influencia en los territorios que hoy han quedado como tierra de nadie. En el caso concreto de la frontera con Guatemala, los carteles del vecino país ya han mostrado su fuerza y capacidad de influencia en la zona. Podría esperarse acciones similares en la zona atlántica y en La Mosquitia. Todavía quedan núcleos importantes del narcotráfico que se mantienen activos y dispuestos a convertirse en la fuerza de reemplazo ante el vacío dejado por los Cachiros.

Con la entrega y extradición de los líderes locales del narcotráfico, se ha dado un gran paso adelante en la lucha contra las drogas, pero sólo ha sido un episodio afortunado. Hoy se abre otra etapa, tan amenazante como la anterior. El país deberá mantener la guardia en alto, depurar a fondo a sus cuerpos policiales y de seguridad en general, para garantizar mayor efectividad en la lucha contra el crimen organizado.

## La economía

**D**atos todavía preliminares del Banco Central y del Ministerio de Finanzas nos indican que la economía hondureña creció en 3,1% en el año recién pasado, mientras el déficit fiscal bajó de casi 8% a 4.9%, por debajo del porcentaje estimado que era arriba del 5% del Producto Interno Bruto. La inflación se mantuvo, menos del 7%, en los márgenes calculados por el gabinete económico, mientras que la devaluación, que no pasó del 6% a finales de diciembre, ha empezado a mostrar signos preocupantes en su ritmo de evolución en este mes de enero.

Las remesas, como ya es habitual, dieron el gran espaldarazo a la macroeconomía: llegaron a la suma de 3,440.6 millones de dólares, alcanzando así una cifra record, a pesar de que el número de repatriados desde Estados Unidos fue de 36,376 a finales del mes de diciembre del año pasado; también una cifra record.

Los grandes desafíos que tiene el gobierno en materia de economía en este nuevo año 2015 son los de cumplir los difíciles compromisos firmados con el Fondo Monetario Internacional, equilibrar la situación fiscal, reduciendo los amplios porcentajes del déficit, y promover con más fuerza las inversiones nacionales y extranjeras para generar el necesario empleo.

Por el momento, el gobierno sigue empeñado en cumplir el compromiso de reducir la planilla salarial. Desde los últimos meses del año pasado, miles de trabajadores (algunos "*paracaidistas*") han sido despedidos de las empresas estatales que actualmente están en bancarrota, especialmente las de energía eléctrica y de telefonía. El gobierno se propone bajar el porcentaje de la masa salarial del Estado a un 8% del Producto Interno Bruto. Actualmente el aparato gubernamental está conformado por 88 instituciones públicas, entre administración central y sector descentralizado, que dan empleo a 202,787 burócratas y trabajadores (en el año 2002 había 105 mil empleados públicos, cantidad que aumentó en los últimos años en 97,787 empleados más: ¡casi 10 mil por año!). El desafío de reducción para alcanzar un equilibrio salarial razonable, es muy grande.

# FEBRERO 2015

---

## La situación política

El hecho político más importante en este mes fue la presentación pública de la llamada Alianza opositora, integrada por cuatro partidos políticos (Liberal, LIBRE, Anticorrupción y el PINU) que decidieron suscribir un acuerdo para llevar a cabo acciones conjuntas en oposición al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. En su Declaración pública, los dirigentes firmantes anunciaron su intención de elegir la nueva Junta Directiva del Congreso (enero 2016) con sus propios diputados, anulando así el control absoluto que actualmente tiene el partido de gobierno sobre la misma. Si la oposición logra su objetivo y establece la hegemonía en la Junta Directiva del Congreso Nacional, el presidente de la misma, cuyo cargo no está en juego en la próxima elección (es electo por cuatro años), quedaría totalmente aislado, rodeado por diputados de la oposición, que pasarían a ocupar los cargos sujetos a renovación (todos los demás cargos en la Junta Directiva son escogidos por dos años). De esta forma, el gobierno tendría graves problemas para asegurar su propia gobernabilidad y ejercer el control de los tres Poderes del Estado, tal como sucede en estos momentos.

El anuncio de la conformación de la nueva Alianza se produce menos de dos meses después de la primera Declaración de unidad (24 de enero), la llamada Declaración de Toncontín, que presentó en público la alianza política de los mismos cuatro partidos para oponerse concretamente a la “*constitucionalización*” (elevar a rango constitucional) de la Policía Militar de Orden Público (PMOP). Como fruto de esa alianza inicial, la propuesta oficial fue derrotada, el día 25 de enero, en la sesión del Congreso Nacional (la última reunión de la primera legislatura).

Como era de esperar, la tendencia unitaria entre los partidos de la oposición ha hecho sonar las alarmas en el partido gobernante y en Casa Presidencial. Y también dentro del partido Liberal, especialmente en los núcleos más conservadores de la cúpula partidaria, influida directamente por el ex presidente Carlos Flores. Los liberales se muestran divididos entre los partidarios

---

de la Alianza y los adversarios de la misma. Los primeros están dirigidos por Mauricio Villeda, ex candidato presidencial y actual presidente del Consejo Central Ejecutivo, mientras que los segundos son encabezados por Flores y Yani Rosenthal.

El presidente JOH no se ha quedado de brazos cruzados. Aprovechando el aniversario 113 del partido Nacional (PN) ha organizado una marcha multitudinaria bajo el sugestivo nombre de Alianza con el Pueblo, como una demostración de fuerza y popularidad. Recientemente organizó un desfile de los llamados “reservistas” del ejército, quienes marcharon frente a Casa Presidencial demostrando su apoyo a la Policía Militar de Orden Público y a los afanes reeleccionistas del presidente. La marcha de los “reservistas” fue financiada con dinero oficial, pagado por la casa de gobierno. No hay duda que JOH aprovecha cualquier oportunidad para hacer su propio proselitismo en favor de la reelección presidencial. En sus actuaciones públicas, el presidente actúa como si se tratara de un candidato presidencial buscando la continuidad en el ejercicio del poder. Y es precisamente esa actitud la que más estimula la unidad de la oposición, preocupada por los afanes reeleccionistas de JOH y por su abierto talante autoritario. Las groseras críticas de JOH contra sus opositores, acusándolos de estar coludidos con el crimen organizado, han servido para estimular los afanes unitarios dentro de los partidos ya mencionados. O sea que JOH, víctima de su propio autoritarismo e intolerancia, ha contribuido sin quererlo a la unidad de la oposición.

Pero mientras se fortalece la alianza opositora, al interior de uno de sus principales partidos, el de Libertad y Refundación (LIBRE), se producen divisiones y peleas internas que están debilitando al que se considera la segunda fuerza política del país. Al menos siete diputados, entre propietarios y suplentes, han abandonado las filas del partido y se han sumado a otras fuerzas políticas o se han declarado “independientes”. Cuatro de esos diputados fueron expulsados del partido en castigo por haber votado en contra de la propuesta de Manuel Zelaya, coordinador del partido, para que LIBRE y PAC tuvieran representantes en el seno del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Los nacionalistas han logrado, con el auxilio de diputados liberales y los desertores de LIBRE, rechazar las propuestas de la oposición para reestructurar el TSE o aprobar la segunda vuelta electoral (balotaje). De hecho, el partido de gobierno ha demostrado no tener interés alguno en aprobar la reforma de la legislación electoral, a fin de ponerla a tono con la nueva correlación de fuerzas políticas que prevalece en el escenario nacional, luego de las elecciones de noviembre de 2013 y la derrota del bipartidismo tradicional en Honduras. La reforma electoral es uno de los puntos más álgidos dentro de la agenda política nacional.

La comunidad internacional, especialmente la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), le han recordado a los partidos políticos y al gobierno en general sobre el compromiso de hacer la reforma electoral y aprobar una nueva tarjeta de identidad antes de las elecciones generales del año 2017. Ese compromiso está contenido en el Pacto denominado “*Compromiso de garantías mínimas*”, que los partidos políticos firmaron poco antes de las elecciones de 2013.

Si no se hace la reforma electoral -ya sea simples cambios en la ley o la redacción de una nueva ley electoral y de las organizaciones políticas-, se pone en grave riesgo el futuro proceso electoral, y se podría crear una crisis política de graves consecuencias, sobre todo si partidos tales como LIBRE y PAC se niegan a participar en el nuevo torneo eleccionario. Las posibilidades de generar ingobernabilidad e intranquilidad política son muy grandes y reales.

Al igual que el partido gobernante, el Liberal también celebró su propio aniversario -el número 124- en este mes de febrero. La celebración se produjo en momentos en que se libra una pelea por la selección del jefe de la bancada parlamentaria del partido (27 diputados, la tercera bancada, después de la nacionalista y la de LIBRE). Gabriela Núñez, diputada perteneciente a la llamada “*ala yanista*” (por el nombre de su líder Yani Rosenthal), se autoproclamó presidenta de la bancada, desconociendo la presidencia que ha venido ejerciendo el diputado Marco Antonio Andino, “*activista*” fiel y de subordinación bovina ante el ex presidente Carlos Flores. Esta pelea por el control de la bancada parlamentaria ha dividido más las filas liberales y debilitado la fuerza legislativa del partido. Al menos diez diputados liberales acostumbran negociar su respaldo y “*condicionar*” su voto ante el partido de gobierno.

Mientras esto sucede al interior de los principales partidos políticos y en el seno del Parlamento, el gobierno continúa con su política de remilitarización gradual del sistema de seguridad pública, fortaleciendo los eslabones castrenses de la cadena y descuidando las estructuras puramente policiales. El nuevo ministro de Seguridad, General recientemente retirado Julián Pacheco, reconoció que en las filas policiales prevalece un preocupante clima de desmoralización colectiva, al tiempo que confesó no saber con exactitud cuántos policías realmente hay en la institución. De esta forma, Pacheco desmintió las optimistas declaraciones del anterior ministro y hoy Canciller, Arturo Corrales, quien, al salir del cargo, aseguró haber llevado a cabo una profunda reingeniería dentro de la institución policial y dejar las cosas en orden y debidamente registradas electrónicamente. Todo resultó una farsa.

Agravando más los problemas, los policías de la PMOP han continuado cometiendo abusos de poder, violaciones a los derechos humanos y, para colmo, actos puramente delictivos como el reciente secuestro de un comerciante a quien pretendían chantajear y cobrar rescate por su libertad. Otros policías, pertenecientes a la unidad élite denominada TIGRES, han sido acusados por el hurto de un millón 300 mil dólares sustraídos del botín millonario que el clan de los Valle, capos narcotraficantes ya extraditados a Estados Unidos, tenían escondido en las montañas del departamento de Copán. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera, se mostró sorprendido porque los policías ladrones sólo fueron acusados por lo que calificó como “*delitos de baja pena*”.

Todos estos actos permiten poner en duda la eficacia del llamado proceso de depuración policial llevado a cabo por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), que en sus tres años de funcionamiento ha gastado ya más de 140 millones de lempiras (unos siete millones de dólares) en promover el proceso de saneamiento y limpieza dentro de la Policía Nacional. La anunciada “*depuración*” se ha concentrado más en policías de bajo nivel, dejando a un lado, como intocables, a los altos jerarcas de la institución, muchos de ellos comprometidos de diferentes maneras con el crimen organizado y la delincuencia común.

En este mes de febrero el gobierno hizo público el anuncio de la próxima disolución de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y su sustitución por una nueva fuerza policial que será denominada Dirección Policial de Investigación (DPI), la que estará adscrita al Ministerio de Seguridad e inserta en la estructura funcional de la Policía Nacional. La nueva agencia tendrá un costo de unos 760 millones de lempiras (unos 36 millones de dólares), de los cuales doce millones de dólares serían financiados con un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De esta forma, el gobierno disuelve una institución demasiado desprestigiada, la DNIC, responsable en gran parte por el alto nivel de impunidad prevaliente en el país y el enorme déficit existente en materia de investigación criminal. La nueva DPI funcionará en forma paralela y complementaria con la recién creada Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que ya está operando dentro del Ministerio Público. Aumenta así el universo de agencias policiales de todo tipo, dispersas bajo diferentes nombres como fuerzas de tarea, grupos élite, agencias interinstitucionales, etc. Desde el año 2010 a la fecha han sido aprobados por el Congreso Nacional unos cuarenta decretos relacionados con el Sector seguridad.

El gobierno sigue a la espera de la instalación en Tegucigalpa de la anunciada oficina del Alto Comisionado de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, prometida por el Secretario General de la ONU Ban Ki Mon durante su reciente visita a Centroamérica. Mientras tanto,

los representantes gubernamentales se afanan en preparar el informe sobre el Estado de cumplimiento en materia de derechos humanos, que deberá ser presentado el próximo mes de mayo en Ginebra, Suiza, durante la celebración del denominado Examen Periódico Universal (EPU). Desde el año 2010, el Estado hondureño recibió 129 recomendaciones en el tema de los derechos humanos. El gobierno afirma haber cumplido ya con 71 de esas recomendaciones, mientras 52 están en proceso y seis todavía “*sin atención*”.

La situación de los derechos humanos sigue siendo una tarea pendiente para el gobierno hondureño. De acuerdo al informe anual de Casa Alianza, el año pasado fueron asesinados 1,031 niños y jóvenes adolescentes en todo el país. El Comisionado nacional de los derechos humanos (CONADEH) informó recientemente que entre los años 2000 y 2013, en catorce años, se produjeron 60,379 muertes violentas en Honduras, generando lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llamado una “*epidemia letal*”. Mientras en el año 2004 el porcentaje de homicidios por cada cien mil habitantes era de 30,7%, ya en el año 2011 se había disparado hasta el 86,5%. En el último año, según las cifras estadísticas de la Policía, se ha logrado reducir el porcentaje a 65%, aunque son pocos los que realmente creen y tienen confianza en los datos oficiales. En los últimos días, para el caso, se ha producido un alarmante repunte de la violencia, provocando ya, en apenas 53 días de este año, 135 homicidios en Tegucigalpa y 116 en San Pedro Sula. Los asesinatos de operadores del transporte urbano, motivados por los actos de extorsión fallida, han vuelto a sembrar el terror entre choferes de autobuses y conductores de taxis.

El día 26 se reunieron en el puerto de Tela, en la costa norte del país, los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras para lanzar su ofensiva diplomática a favor de la aprobación de los mil millones de dólares solicitados por el presidente Barack Obama al Congreso estadounidense para financiar la llamada Alianza para la Prosperidad (APP), un ambicioso plan de inversiones y desarrollo, orientado a crear oportunidades locales que permitan reducir sustancialmente los flujos migratorios desde Centroamérica hacia el territorio norteamericano. La ocasión fue propicia para que Honduras y Guatemala firmaran, finalmente, un tratado de Unión Aduanera, 64 años después de que dieran inicio los esfuerzos de integración en Centroamérica cuando, en 1951, fue creada la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). El Salvador ha prometido incorporarse a esta Unión Aduanera en los primeros meses del año 2016.

Los tres países en su conjunto reúnen un Producto Interno Bruto (PIB) equivalente a 102 mil millones de dólares, casi el 50% de todo el PIB regional, además de congregarse a unos 31 millones de potenciales consumidores.

Ya para finalizar el mes, llegó a Tegucigalpa el nuevo embajador de Venezuela para Honduras, Filinto Durán, quien será el nuevo representante de Caracas ante el gobierno hondureño. Venezuela no tenía embajador en Honduras desde junio del 2009, fecha del golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya.

Casi al mismo tiempo, partió hacia La Habana, Cuba, el nuevo embajador designado por el presidente JOH ante el gobierno cubano. Se trata de Andrés Pavón, un viejo defensor de los derechos humanos que, al mismo tiempo, no escatimaba esfuerzos para colaborar con los diferentes gobiernos y agradar a la élite política local. Pavón prestó valiosos servicios al partido Nacional durante las recién pasadas elecciones generales, vendiendo las credenciales de su candidatura y dividiendo las fuerzas de la oposición. Hoy ha recibido su premio en calidad de un cargo diplomático, tan cuestionado como inmerecido.

# MARZO

## 2015

---

### La situación política

**P**rotestas callejeras de los estudiantes, especialmente los de educación media, y los inevitables choques con las fuerzas policiales, caracterizaron la conflictividad social correspondiente a este mes de marzo. Como resultado de esta confrontación, muchos estudiantes fueron arrestados, otros tantos heridos y, al final, aparecieron los cadáveres de cuatro jóvenes que, al parecer, fueron ejecutados en represalia por su participación en las marchas y protestas. Al menos, eso es lo que se sospecha mientras la Policía no rinda un informe creíble sobre las causas de esas *"ejecuciones extrajudiciales"*, como las denominan los organismos de defensa de los derechos humanos.

Las fueras de oposición, especialmente Libertad y Refundación (LIBRE) y el FNRP, convocaron a una manifestación masiva para condenar la violencia policial y exigir el desmantelamiento de lo que el ex presidente Manuel Zelaya llamó *"Escuadrones de la Muerte"*. El asesinato de los jóvenes estudiantes se produce en medio de un clima de violencia creciente en contra de los jóvenes en general, generando confusión sobre las causas y razones últimas por las cuales han muerto los estudiantes. La Policía, como ya es una costumbre, suele atribuir estos hechos criminales a las luchas internas entre los grupos pandilleriles y las pequeñas mafias locales dedicadas al narco-menudeo o microtráfico. Sin embargo, en esta ocasión, las denuncias de los organismos de derechos humanos han concentrado su atención en la extraña coincidencia de que las muertes se producen en momentos de mayor auge de la protesta estudiantil y abarcan, entre otros, a una joven de 13 años que precisamente el día anterior había estado protestando en las calles y ofreciendo virulentas declaraciones antigubernamentales a los medios de comunicación.

Con estas muertes, el tema de los derechos humanos ha vuelto a cobrar mucha vigencia en la agenda nacional, justo en momentos en que el gobierno hace grandes esfuerzos para ganar la batalla de la opinión pública y persuadir al Congreso y Senado de los Estados Unidos a favor de conceder

la ayuda millonaria (mil millones de dólares) para financiar los proyectos y programas que, en teoría al menos, habrían de contribuir a disminuir los flujos migratorios desde Centroamérica hacia el territorio norteamericano.

Precisamente para discutir estos temas, se reunieron los tres presidentes centroamericanos del llamado Triángulo del Norte con el vicepresidente norteamericano Joe Biden, a principios del mes en la capital de Guatemala. Biden, que se ha convertido en el principal interlocutor estadounidense del trío presidencial centroamericano, fue muy claro en su discurso inaugural de la reunión cumbre: *“Una Centroamérica violenta a causa del narcotráfico, una Centroamérica sin oportunidades, es un peligro para Estados Unidos”*, dijo, enfatizando en los aspectos sociales (creación de oportunidades) y haciendo discretamente a un lado el antiguo discurso virulento y unilateral que culpaba exclusivamente al crimen organizado de todos los males que aquejan a la región. En el actual lenguaje de Washington se advierte un nuevo matiz, que señala los problemas sociales (pobreza, desigualdad, deficiente educación, mala salud, desempleo e inseguridad) como fuente de los impulsos migratorios y factores de riesgo que contribuyen a crear la lamentable situación de inseguridad y violencia que predomina en la parte norte de la región centroamericana.

Con apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el respaldo directo del gobierno estadounidense, los tres países del Triángulo del Norte elaboraron y presentaron desde noviembre del año pasado un Plan denominado Alianza para la Prosperidad (APP), para financiar el cual han solicitado mil millones de dólares al gobierno del presidente Barack Obama, lo que representa el 20% del total de fondos requeridos para financiar todo el programa y sus respectivos proyectos. El 80% restante (unos cuatro mil millones de dólares) sería aportado por los tres países de la región, según declaraciones públicas del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien hizo el anuncio sin especificar de dónde, de cuáles fuentes, obtendrán el dinero los centroamericanos para financiar la mayor parte del Plan APP.

El Plan consta de cuatro componentes muy bien definidos:

- a) Desarrollo del capital humano, concentrado básicamente en proyectos de educación y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas del área;
- b) Seguridad y Justicia;
- c) Fortalecimiento institucional, especialmente en lo que concierne a la aplicación de un servicio civil profesional y sin la contaminación partidaria que privilegia la lealtad política por encima de la idoneidad profesional, y

- d) Recaudación tributaria apropiada y los correspondientes niveles de transparencia y rendición de cuentas.

Para poder cumplir con los objetivos del Plan, el vicepresidente Biden mencionó, entre otras, las siguientes condiciones: a) crear condiciones apropiadas para la inversión extranjera; b) lucha frontal y efectiva contra la corrupción; c) mejorar sustancialmente el clima de seguridad, reduciendo los niveles de violencia criminal, y d) mejorar radicalmente los niveles de la recaudación tributaria (actualmente la llamada “*carga fiscal*” en Honduras es apenas de 16,3% del Producto Interno Bruto, más o menos el mismo promedio del Triángulo del Norte). Con estos requisitos básicos en fase de cumplimiento, el gobierno de Estados Unidos garantizaría su apoyo total al Plan de Centroamérica, una región calificada por Biden como una de las cuatro prioridades de la política exterior del gobierno estadounidense, que por enésima vez le otorga a Centroamérica una categoría tan definida y clara en sus prioridades geoestratégicas.

El cabildeo y las gestiones de todo tipo para que los legisladores en Washington incluyan los mil millones de dólares para la APP en el próximo presupuesto del año 2016, están a la orden del día, aunque hay nubarrones en el horizonte, sobre todo por la abierta oposición de muchos congresistas republicanos que le quieren pasar la factura al presidente Obama por sus recientes medidas de acercamiento con Cuba y por sus iniciativas en materia de reforma migratoria.

En este cuadro general, el tema de los derechos humanos adquiere una nueva importancia. En primer lugar, porque las organizaciones defensoras de tales derechos en Estados Unidos los han convertido en el punto central para cuestionar el apoyo incondicional a los gobiernos del Triángulo del Norte, alegando la corrupción policial y las violaciones constantes a los derechos básicos de la población. En segundo lugar, porque en breve deberá ser inaugurada en Honduras la Oficina del Alto Comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, un organismo que se encargará de vigilar minuciosamente el comportamiento del Estado hondureño en materia de derechos humanos y su rigurosa observación y respeto.

El asunto de los derechos humanos se mezcla con las críticas constantes que los partidos políticos de oposición realizan al desempeño gubernamental de la Administración nacionalista de JOH. Estas críticas se vuelven más directas y constantes en la medida que el presidente insiste en sus pretensiones reeleccionistas para continuar en el poder por varios años más, violentando la ley y contradiciendo la tradición local, muy arraigada por cierto, de prohibir la reelección presidencial.

---

Con motivo del 113 aniversario de la fundación del partido Nacional (PN), los partidarios de JOH, con dineros públicos, organizaron una masiva marcha de respaldo político a las pretensiones continuistas del gobernante. La marcha, denominada *“Alianza con el Pueblo”*, pretendió, entre otras cosas, ser una respuesta a la recién formada Alianza opositora que conformaron los cuatro partidos políticos que adversan al gobierno nacionalista de JOH (Liberal, LIBRE, Anticorrupción y Unidad e Innovación). El evento se convirtió en un acto político de respaldo al presidente y, de forma directa y cada vez más abierta, en una manifestación a favor de la reelección presidencial, algo que dejó un desagradable sabor de provocación y desafío entre los distintos opositores al gobierno.

No contentos con esto, los nacionalistas aprovecharon la celebración de su Convención Nacional el día 07 en la ciudad de San Pedro Sula, para reafirmar su respaldo al continuismo gubernamental y exponer claramente sus intenciones de permanecer en el ejercicio del poder gubernamental por lo menos *“durante cincuenta años más”*.

La reacción de los partidos opositores no se hizo esperar. Cada uno, por sus propios medios y con diferente énfasis, condenó la actitud del gobierno y denunció el abusivo uso de dineros públicos para financiar actividades proselitistas de carácter partidario. El gobierno, acostumbrado a tales prácticas, ni siquiera se molestó en contestar y aclarar el origen de los dineros y recursos utilizados para financiar y organizar la Marcha y la Convención.

Aunque más activos en los últimos meses y con mayor presencia mediática, lo cierto es que los partidos de oposición, principalmente los liberales, LIBRE y el partido Anticorrupción, también están atravesando por pequeñas crisis internas que se originan por las peleas de liderazgo y, en el caso de los liberales, por la oposición que hacen los sectores más conservadores del liberalismo, encabezados por el ex presidente Carlos Flores, propietario del diario La Tribuna, Yani Rosenthal, del grupo bancario e industrial Continental, Elvin Santos, empresario de la industria de la construcción y frustrado candidato presidencial del PL en las pasadas elecciones de 2009, y el promotor del golpe de Estado de ese mismo año Roberto Micheletti, en contra del actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del PL, Mauricio Villeda, ex candidato presidencial liberal en las elecciones generales de noviembre de 2013. El núcleo conservador del partido, aliado con el gobierno actual, prefiere disfrutar de las ventajas de la cohabitación y el cogobierno, a diferencia de Villeda que ha optado por la oposición abierta y la alianza con LIBRE, el PAC y el PINU. Estas diferencias políticas tienen sumido al PL en una crisis interna, en la que los extremos se dividen en torno a la línea de oposición o de colaboración ante el gobierno nacionalista del presidente JOH. Estas pugnas al interior del partido se reflejan básicamente en la cúpula de dirección, mientras que en las bases liberales, especialmente en las

zonas rurales y en los barrios pobres de las ciudades, se advierte un consenso básico en contra de la colaboración con los nacionalistas y a favor de una política real de oposición. De hecho, en las bases del PL y de LIBRE se están produciendo ya corrientes fuertes de coincidencia política y unidad opositora. Esto es particularmente cierto en muchas Alcaldías, en donde los militantes de LIBRE y los liberales se unen para enfrentar a los nacionalistas.

Al interior de LIBRE también proliferan las corrientes internas y las diferentes facciones, que surgen para disputar, en su momento, las candidaturas a diputados, alcaldes y presidente de la República. Hasta este momento, según el recuento hecho por el propio ex presidente Manuel Zelaya, dentro del LIBRE existen al menos diez agrupaciones distintas, denominadas corrientes o tendencias, que introducen el bullicio y, con frecuencia, la dispersión y la confusión dentro de las filas del partido. De todas ellas, las más fuertes son la que integran los antiguos liberales zelayistas que abandonaron su partido original y emigraron hacia LIBRE y la “*tendencia*” que conforman los antiguos dirigentes de la izquierda sindical, agrupados a montones en el llamado Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

Hasta el momento, las luchas intrapartidarias en LIBRE han provocado ya la desertión de varios diputados de los 37 originales que conformaron la bancada del nuevo partido.

En el partido Anticorrupción (PAC), el liderazgo de Salvador Nasralla, fundador y principal animador del grupo, se ha visto cuestionando por las críticas de algunos diputados (el PAC tiene una bancada integrada por 13 legisladores que, a diferencia de LIBRE, se han mantenido fieles a su partido hasta la fecha). La dirección de Nasralla, caracterizada por un estilo vertical y muy personalista, cargada de cierto egocentrismo político, ha generado molestias entre algunos diputados que adversan esa forma poco democrática de dirigir la nueva agrupación política. Por el momento, Nasralla ha logrado controlar a medias la disidencia interna y mantiene bajo relativo control el rumbo de su partido.

### **La situación de la inseguridad**

**E**l tema de la inseguridad se mantiene siempre ocupando el primer lugar en la preocupación colectiva de la sociedad. En este mes de marzo, con creciente ansiedad, los ciudadanos han advertido un incremento en la violencia criminal, generada, según la explicación oficial de la Policía, por las luchas intensas que están librando entre sí los jefes menores del narcotráfico local, una vez que sus jefes principales han caído en prisión o han sido extraditados hacia el territorio norteamericano. Al parecer,

---

las disputas para controlar las rutas abandonadas del tráfico de drogas o la pelea por apoderarse de los bienes y propiedades que pertenecían a los clanes familiares de los jefes del narcotráfico en Honduras, están en la base de este renacimiento de la violencia criminal con una nueva fuerza e inusitada virulencia.

Al mismo tiempo, los grupos dedicados al negocio criminal de la extorsión también han redoblado sus acciones delictivas. Como ya es usual, el Sector transporte es uno de los blancos favoritos de los extorsionadores y una de sus áreas de mayor actividad. En lo que va del año se han producido treinta ataques, con sus respectivas víctimas mortales, en contra de los transportistas, incluyendo el asesinato de Carlos Andonie en San Pedro Sula, el pasado día 10, uno de los dirigentes más carismáticos y valientes de los dueños del transporte en Honduras. La muerte de Andonie revela el alto nivel de agresividad de los extorsionadores y su manifiesta disposición a librar la guerra en contra de sus víctimas más propicias: los dueños del transporte urbano e interurbano en Honduras.

El gobierno, seguramente bajo la presión norteamericana, se vio obligado por fin!- a capturar al capo narcotraficante de la zona norte, José “*Chepito*” Handal, quien se mantenía prófugo y en condiciones casi de impunidad manifiesta desde hace ya un par de años. También fue capturado su padre y su esposa, quienes gozaban de una tolerancia poco disimulada por parte de las autoridades policiales de Honduras que, a pesar de saber en donde se encontraban, nunca se decidían a darles captura. Finalmente ya están en prisión y queda por ver cuál será la actitud de los norteamericanos en cuanto a solicitar su extradición hacia los Estados Unidos. A diferencia de otros capos de la droga, “*Chepito*” Handal enfrenta en Honduras acusaciones concretas y órdenes de captura en base a la legislación local, por lo que un eventual proceso de extradición tendría más dificultades y tropiezos que los que han enfrentado los otros casos de jefes narcos extraditados.

Ante el evidente recrudecimiento de la violencia criminal de los narcotraficantes, las pandillas y todas las demás manifestaciones de la delincuencia común, el presidente JOH ha decidido endurecer las penas y volver más riguroso el castigo de los delincuentes, para lo cual ha propuesto al Congreso Nacional reformas concretas a la Ley Antimaras y la creación de un Régimen obligatorio de trabajo para los privados de libertad, medida conocida ya como la “*Ley Picapiedra*”.

# ABRIL 2015

---

## La situación política

**T**al como ya se esperaba, la llamada Sala de lo constitucional, integrada por cinco magistrados, cuatro de los mismos nombrados directa y arbitrariamente por el presidente Juan Orlando Hernández (JOH), cuando aún se desempeñaba como máximo dirigente del Congreso Nacional, emitieron finalmente su fallo en torno al espinoso tema de la reelección presidencial. O sea que una Sala judicial, calificada como ilegal por la mayoría de los abogados y juristas más serios e independientes del país, ha tomado la decisión de reformar el texto constitucional sin tener facultades legales para ello. La sentencia ha creado un revuelo en los círculos políticos del país, tanto a nivel del partido gobernante como en las filas de la oposición. Los diputados nacionalistas, haciendo uso de su control parlamentario, se apresuraron a enviar la resolución judicial al diario oficial La Gaceta para su respectiva e inmediata publicación, lo que, según la técnica jurídica, convierte a la sentencia en ley de la República.

La noticia de que será permitida la reelección presidencial ha animado el ambiente político y ha entusiasmado a más de algún viejo dirigente, entre los que destacan los ex presidentes Carlos Flores (liberal), Rafael Leonardo Callejas (nacionalista) y Manuel Zelaya (del nuevo partido LIBRE). Tanto Callejas como Zelaya, en la práctica, se han lanzado ya a realizar labor proselitista entre sus seguidores y simpatizantes. Callejas, concretamente, ha empezado a reorganizar las estructuras de lo que en su tiempo fue el movimiento que lo llevó a ganar las elecciones generales en 1989, el llamado Movimiento Nacional Callejista (MONARCA). Zelaya, por su parte, apoyándose en las bases del partido LIBRE, pero especialmente entre sus partidarios aglutinados en el llamado Movimiento 28 de Junio, está recorriendo entusiasmado diferentes municipios y zonas rurales del país, para conocer el Estado de ánimo de la gente y su disposición a darle su apoyo electoral en caso de enfrentar en una nueva contienda al que parece ser el candidato inevitable de los nacionalistas: el propio presidente actual, Juan Orlando Hernández.

Flores, en cambio, más temeroso del rechazo de las bases liberales por su pasado golpista y antiguo conspirador permanente contra el gobierno de Zelaya, está moviendo sus piezas con más prudencia y cautela. Su plan empieza por apoderarse de la máxima dirección del partido Liberal (el Consejo Central Ejecutivo), para lo cual necesita deshacerse de su actual presidente Mauricio Villeda, el frustrado ex candidato presidencial en las pasadas elecciones de noviembre de 2013. Las conspiraciones en las filas liberales están a la orden del día.

Mientras tanto, el presidente Hernández, convencido de su fuerte liderazgo dentro del partido de gobierno, no muestra ninguna preocupación por las aspiraciones de sus posibles competidores, especialmente las de Callejas. Esto ha provocado la sospecha de que Callejas se está prestando a un juego político tradicional, según el cual su candidatura es de pura fachada, sólo para ocultar discretamente, al menos por ahora, las verdaderas pretensiones reeleccionistas del presidente JOH. Según esta versión, Callejas sería algo así como un factor de distracción para atraer a Zelaya a una falsa pelea, preservando para el momento final al verdadero candidato del PN, que no es otro que el propio JOH.

La resolución judicial para eliminar la prohibición constitucional de la reelección presidencial, constituye un paso más en el proceso de debilitamiento progresivo de la institucionalidad estatal, lesionando gravemente la independencia de los Poderes públicos, rompiendo el equilibrio en la balanza de tales Poderes y, al final de cuentas, deteriorando todavía más el frágil Estado de derecho prevaleciente en Honduras.

Pero, a la vez que se fragmenta y debilita el sistema político en su conjunto y se deteriora más toda la institucionalidad del Estado, también se erosiona el sistema de partidos y el sistema electoral. Las posibilidades de la reforma electoral, una medida tan necesaria como urgente, se vuelven cada vez más complicadas y lejanas, cerrando la posibilidad real de una verdadera democratización y modernización de la arquitectura jurídica y el andamiaje de todo el sistema electoral del país.

Tan solo en el partido LIBRE la proliferación de fracciones y tendencias, las llamadas “*corrientes*”, ha creado ya un complejo universo de once agrupaciones diversas, todas ellas con sus propias propuestas políticas e ideológicas, pugnando por imponer sus candidatos a la nominación presidencial. En las filas liberales también se amplía la división y la dispersión de fuerzas. Por un lado está Mauricio Villeda y sus seguidores, que por ahora controla las riendas del partido. Frente a él están el ex presidente Carlos Flores, que es el operador político de las élites empresariales por excelencia; el empresario de la industria de la construcción, Elvin Santos, junto al banquero y empresario Yani Rosenthal y, aunque cuesta creerlo, también está el gober-

nante golpista Roberto Micheletti, esperando volver al centro del escenario político. En el partido gobernante, el Nacional, al menos dos dirigentes concretos, además de JOH, han mostrado sus intenciones de entrar al ruedo y disputar la candidatura presidencial: el ex presidente Rafael Callejas y el ex alcalde de Tegucigalpa Ricardo Álvarez. No se debe descartar la posibilidad de que aparezcan nuevos precandidatos: Miguel Pastor, Oscar Álvarez, etc.

Para agravar las cosas y crispar más el ambiente, el diputado nacionalista Renán Inestroza, un incondicional del presidente JOH, introdujo una moción en el Congreso Nacional para reformar -¡otra vez!- la Constitución de la República y permitir que los militares y los policías puedan votar en las elecciones generales. El texto constitucional expresamente prohíbe el voto a los miembros de las Fuerzas Armadas y a los de la Policía Nacional, para mantener a salvo el carácter apolítico de esas instituciones. Si la propuesta de Inestroza llegara a ser aceptada y aprobada por los diputados nacionalistas, el país estaría avanzando cada vez más y a mayor velocidad hacia una casi segura crisis política de grandes proporciones, similares a las que produjeron el golpe de Estado del 28 de junio del año 2009. Ojalá que no.

La tendencia a militarizar la vida política, ahora se está revirtiendo en su contrario: politizar la esfera militar. A la militarización del sistema de seguridad ahora se quiere agregar la politización de la institución militar. Por ese camino, el país va hacia el autoritarismo y la dictadura, negando las posibilidades de la democracia, el libre juego de los partidos políticos, la independencia de Poderes y el Estado de derecho. Es un mal camino.

Como si el cuadro político no fuera ya tan preocupante y riesgoso, el escenario social se ha visto agravado en su complejidad por la severa sequía que ha afectado a amplias zonas del territorio nacional y, como ya es recurrente todos los años, ha creado crisis de hambrunas colectivas en diversos municipios del país, especialmente en la zona central, oriental y en el sur del territorio.

Mientras tanto, el gobierno se encuentra envuelto en una inútil polémica con los grupos de sociedad civil que defienden los derechos humanos, a los que acusa de haber desatado una supuesta campaña de desprestigio y descrédito contra el país en el ámbito internacional. Aprovechando la cercanía de la fecha para presentarse en Ginebra y afrontar la prueba del llamado Examen Periódico Universal (EPU), el gobierno de JOH apresuró la aprobación parlamentaria de la Ley de protección a los defensores de los derechos humanos, a los periodistas y comunicadores sociales, así como a los profesionales del derecho (abogados), cuyas muertes, víctimas de la violencia criminal o, en algunos casos, de las redes delincuenciales del crimen organizado, han ido en preocupante aumento. Según los datos registrados por el Comisionado nacional de los derechos humanos (CONADEH), 90 abogados

---

han sido asesinados en los últimos 63 meses (2010-2015), tres mil mujeres ultimadas, los llamados “femicidios”, desde el golpe de Estado a la fecha (tan solo del 1° de enero al mes de marzo de este año se han producido más de 80 femicidios). A pesar de una situación tan alarmante, el gobierno, el año pasado, apenas invirtió en derechos humanos la suma de 33 centavos de dólar, unos siete lempiras al cambio oficial, por cada hondureño. El presupuesto del CONADEH es de 2,8 millones de dólares al año, lo que significa solo el 0,03% del presupuesto total del Estado.

La situación de la seguridad pública ha seguido marcada por los constantes ataques de los extorsionadores en contra de los operadores del transporte urbano e interurbano en todo el país. Son frecuentes los asesinatos de choferes, cobradores y pasajeros en los autobuses de las rutas urbanas y en el servicio de taxis. En los mercados de la capital, los delincuentes pandilleros han llegado a imponer sus propias reglas de funcionamiento, prohibiendo a las mujeres y los jóvenes vestir de tal o cual manera, para evitar confundirlos con los integrantes de las pandillas rivales. De hecho, los pandilleros han logrado establecer un amplio y peligroso control en los mercados y sus alrededores. La policía parece estar ausente o su presencia ya ni siquiera intimida a los delincuentes.

El proceso de depuración de la Policía sigue en su marcha lenta y dudosa. En este mes se han vencido los plazos laborales de los dos principales jefes de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), quienes deberán ser sustituidos muy pronto, en la primera mitad del mes de mayo. De acuerdo a los datos proporcionados por las autoridades salientes (los abogados y antiguos fiscales Eduardo Villanueva y Mario Chinchilla), desde el año 2013 a la fecha, lograron “depurar”, separándolos de la institución, a 2,384 policías, entre ellos a 104 oficiales y jefes, pero, curiosamente, en tres años apenas si hay seis policías en prisión. En la actualidad la Policía Nacional de Honduras (PNH), hasta el mes de febrero de este año, contaba con 12,092 agentes, entre los cuales había 942 oficiales y jefes. El proceso de limpieza y saneamiento, así como la anunciada reforma policial, siguen siendo tareas pendientes en el sistema de seguridad pública de Honduras.

Por su parte, la Policía Militar de Orden Público (PMOP), creación y criatura favorita del presidente JOH, ha seguido creciendo. En este mes recibió en sus filas a 513 nuevos agentes, con los que ya suma un contingente total de 3,400 miembros. En esa ocasión, al recibir a los nuevos policías militares, el presidente definió a la PMOP como “el principal cuerpo armado para recuperar la seguridad en Honduras”, a la vez que aseguró que la policía militar “ha recuperado la gobernabilidad en la seguridad en dos años”. Pero estos elogios no fueron suficientes para que JOH declarara ante el senador norteamericano Tim Kaine (demócrata), que la PMOP es una fuerza temporal

que no durará más de tres años. Kaine, enterado de la noticia, no vaciló en divulgarla, poniendo en una situación incómoda a JOH, quien, aquí en Honduras, dice exactamente lo contrario y ha intentado, incluso, otorgarle rango constitucional y permanente a la mencionada policía militar. Por lo visto, no es lo mismo mentir en Tegucigalpa que hacer lo propio en Washington.

Pero no todo es tan preocupante y desalentador. Las fuerzas de seguridad han dado golpes importantes a las redes del narcotráfico en el país, capturando a algunos de sus jefes más notables y, sobre todo, incautando centenares de bienes, valorados en muchos millones de dólares (la más reciente de esas incautaciones incluyó más de 50 bienes y propiedades que estaban en poder del narcotraficante de la zona de La Mosquitia, Wilter Blanco). El gobierno de los Estados Unidos, a través del General John Kelly, Jefe del Comando Sur del ejército norteamericano y un asiduo visitante de Honduras, ha declarado en reiteradas ocasiones su gran satisfacción y complacencia por la forma en que el presidente JOH está conduciendo la lucha por restaurar el clima de seguridad en Honduras. Aunque no han apoyado abierta y directamente la cuestionada política de militarización creciente de la seguridad pública, tampoco la han criticado en forma clara y precisa.

En el transcurso del mes, el propio General Kelly se encargó de confirmar la petición oficial de su gobierno para que lleguen 250 soldados más, marines de las Fuerzas Especiales, a recibir y dar entrenamiento en la base militar de Palmerola. El contingente, que deberá llegar en el mes de junio y permanecerá supuestamente seis meses en el territorio nacional, se llama "*Fuerza de Tarea de Propósitos Especiales*". Su anunciada "*visita*" ha provocado debates en los círculos políticos y alguna preocupación entre las empresas nacionales e internacionales que están participando en la licitación pública para construir el aeropuerto comercial en la zona de la base militar.

Al final del mes, los preparativos del desfile del Primero de Mayo, día consagrado a los trabajadores, concluyeron con masivas manifestaciones en los principales centros urbanos del país, en las que resaltaron la condena a los intentos reeleccionistas del presidente JOH y la participación visible del ex presidente Manuel Zelaya y su esposa, la ex candidata presidencial de LIBRE, Xiomara Castro, como protagonistas políticos muy destacados en las marchas de festejo y protesta.

# MAYO 2015

---

## La situación política

**E**ste ha sido un mes especialmente convulso, saturado de escándalos de corrupción y, en especial, marcado por el descubrimiento de las cuantiosas transferencias de dinero sucio hacia las arcas del partido Nacional, por la vía de cheques emitidos desde cuentas pertenecientes a varias empresas fantasmas, las llamadas “*empresas de maletín*”, creadas especialmente para saquear los dineros y recursos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Aunque ya se sabía, desde los últimos meses del gobierno de Porfirio Lobo (segundo semestre del año 2013), de la existencia de una red mafiosa dedicada al ejercicio de la corrupción en todas sus variantes, dentro de la administración del IHSS, lo cierto es que la denuncia no había llegado hasta el fondo de la trama, y la sociedad hondureña no conocía la verdadera dimensión del atraco y robo descarados a que habían sido sometidos los fondos destinados a la seguridad social. El propio presidente Lobo, en un acto de absoluta irresponsabilidad y cinismo, había confesado ante los medios de comunicación, poco antes de que concluyera su conflictiva Administración, que ya conocía la existencia de la trama de corrupción que afectaba al IHSS, pero que había decidido guardar silencio sobre la misma “*para no entorpecer la buena marcha del proceso electoral*”, que culminó en noviembre/diciembre del año 2013. ¡Vaya desfachatez tan increíble!

La verdad de los hechos apunta en otra dirección. Ahora, con el conocimiento que todos tenemos de la profundidad de la trama de corrupción y el alcance desmesurado de la misma, podemos fácilmente concluir en que el ex presidente guardó silencio simplemente para proteger al que entonces todavía era su delfín político, Juan Orlando Hernández, hoy convertido en flamante presidente de la República. Si el escándalo estallaba antes de las elecciones, el partido de gobierno se habría visto afectado en su imagen pública por el descubrimiento del financiamiento oscuro, proveniente de las redes de la corrupción y del saqueo de los fondos públicos, con el que estaba financiando su multimillonaria campaña electoral. Hoy, gracias a la prensa independiente, en particular la Radio y Televisora Globo, nos hemos

enterado de la forma, tan truculenta como descarada, en que el partido Nacional resultó beneficiado por la corrupción que sus mismos militantes organizaron y desarrollaron en diferentes instituciones del Estado, especialmente en el IHSS. El triunfo electoral de los nacionalistas en noviembre del año 2013 fue, en buena medida, el fruto de una bien orquestada y gigantesca operación de corrupción administrativa. Los nombres de varios de sus principales dirigentes y funcionarios públicos han quedado definitivamente manchados y estigmatizados para siempre.

La reacción del gobierno y de los actuales dirigentes del nacionalismo, ha sido tan brusca como improvisada, más visceral que racional: negar los hechos o minimizar su contenido y dimensión, atacando y amenazando al mismo tiempo a los periodistas y políticos denunciadores. La decisión de incoar procesos criminales contra sus críticos no es la mejor opción adoptada por el partido Nacional. Así quedó demostrado cuando el tribunal ni siquiera consideró legalmente válida la acusación criminal presentada contra el dirigente principal del partido Anticorrupción, Salvador Nasralla, a quien un grupo de políticos nacionalistas habían acusado por los delitos de calumnia y difamación en contra del partido gobernante. Nasralla, utilizando hábilmente su experiencia mediática, ya había exigido públicamente al presidente JOH y al gobierno pedir ante la ONU la instalación en Honduras de una llamada Comisión internacional en contra de la impunidad (la CICIH), al estilo de un organismo similar que funciona en Guatemala (CICIG).

En el caso del periodista David Romero, que inició la denuncia y llevó a cabo la investigación a fondo hasta obtener pruebas documentales irrefutables sobre las millonarias transferencias, la reacción gubernamental ha sido todavía más lamentable. Aprovechando la existencia de un juicio ya iniciado en contra de Romero por la esposa del Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuéllar, a quien el comunicador social ha señalado públicamente como receptor de un millonario soborno pagado por algunos de los involucrados en el caso IHSS, el gobierno se ha empeñado en condenar al denunciante (*"castigar al mensajero, haciendo caso omiso del mensaje"*) y, para ello, no ha vacilado en presionar a los jueces y demostrar, una vez más, cuán frágil y vulnerable es la llamada *"independencia judicial"* en Honduras. El resultado de esta maniobra ha sido contraproducente: Romero se ha convertido en una especie de héroe y mártir a los ojos de la población.

El escándalo provocado por las revelaciones de los llamados *"papeles de David"*, ha debilitado al gobierno y le ha dañado sustancialmente su imagen pública, tanto a nivel nacional como internacional. En su desesperación, el régimen ha organizado artificiales *"marchas de apoyo"* para dar la impresión de una supuesta solidaridad popular con la Administración juanorlandista. La prensa descubrió y mostró en pantalla el momento en que dirigentes locales del partido de gobierno pagaban la suma de cincuenta lempiras (un poco más de dos dólares) a los *"entusiastas"* manifestantes, para que acu-

dieran a engrosar las filas de los supuestos ciudadanos solidarios con el presidente JOH. Como suele decirse, el tiro les salió por la culata.

Para aumentar el embrollo y magnificar el desprestigio, Roberto Ramírez Aldana, el fiscal que ha estado encargado de la investigación del caso IHSS, fue repentinamente separado de esa labor y nombrado representante de Honduras ante la Organización de las Naciones para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO), en París, Francia, alegando razones de seguridad ante reales o supuestas amenazas de muerte en contra del funcionario. El gobierno invocó la recién aprobada "*Ley de protección especial de funcionarios y ex funcionarios en riesgo extraordinario*" (Decreto No 323-2013), para justificar la salida del Ramírez Aldana y su separación del polémico caso IHSS, en donde el fiscal, poco a poco, se iba aproximando en sus investigaciones hasta el meollo del asunto: el desvío de millonarios fondos de la corrupción para financiar la campaña electoral del partido de gobierno.

El Congreso Nacional, en una reacción tan tardía como dudosa, decidió crear una llamada Comisión multipartidaria, integrada por representantes de todos los partidos políticos que cuentan con bancadas parlamentarias, para investigar, dijeron, el estado actual de los procesos y juicios que conduce el Ministerio Público en los principales casos de corrupción de los últimos años, incluido, por supuesto, el del IHSS. No fueron muchos los que creyeron en las buenas intenciones del presidente del Parlamento, el nacionalista Mauricio Oliva, un incondicional casi grotesco del gobernante JOH. La mayor parte de los observadores políticos advirtió en esta iniciativa una maniobra de fulgor escaso para disminuir el impacto del caso IHSS, envolviéndolo en la maraña de otros casos de corrupción, y diluyendo así su significado e impacto originales. La Comisión multipartidaria tiene un plazo de veinte días para presentar su informe ante el pleno de la Asamblea legislativa.

Al interior del PN, el escándalo de corrupción que compromete a su liderazgo y desprestigia al gobierno, ya ha empezado a generar consecuencias. El Designado presidencial Ricardo Álvarez, uno de los involucrados en el escándalo (buena parte de los cheques fueron depositados en cuentas bancarias a nombre de los "*Amigos de RIAL*", siglas del ex alcalde) ha pretendido desmarcarse del asunto y ha negado haber recibido cheques a nombre del partido mientras él se desempeñaba como su presidente del Comité Central. Álvarez es un candidato propicio para ser sacrificado, en caso de que el presidente JOH decida salvar su cabeza a cambio de entregar las de los demás, es decir cortar algunas cabecillas para preservar ciertas cabezas. Por lo visto, la corrupción del gobierno anterior, sumada a la del actual, servirá, entre otras cosas, para alimentar la hoguera del canibalismo político en las filas del nacionalismo.

Pero no sólo a nivel local el gobierno ha debido sufrir tropiezos. También a nivel internacional. Durante la presentación oficial ante el llamado "*examen*

*periódico universal*”, más conocido por sus siglas como EPU, en Ginebra, Suiza, dando cuenta del cumplimiento de las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos humanos, la delegación gubernamental, vapuleada en los pasillos por los representantes de los organismos de la sociedad civil dedicados a la defensa de tales derechos, debió reconocer un cumplimiento a medias e incompleto de las mencionadas recomendaciones: 106 de 129, lo que equivale a un 82%. Pero, lo más importante, sin duda, fue el listado de las nuevas recomendaciones: 190, que el Estado hondureño deberá cumplir en el periodo 2015-2020, cuando vuelva a enfrentar la prueba de un nuevo EPU.

A propósito de Naciones Unidas, el gobierno logró finalmente, el día 04, firmar el acuerdo diplomático para la definitiva apertura de una Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en Honduras. Aunque esta iniciativa corresponde a gestiones del gobierno anterior, el gobernante actual insiste en presentarla como un *“éxito propio”*, fruto de su insistencia personal y prueba evidente de su supuesta preocupación por el respeto a los derechos humanos en el país. Lo cierto es que la apertura de tal oficina internacional muestra, entre otras cosas, la existencia de una preocupación real en la comunidad de naciones por el estado precario y difícil por el que atraviesan los derechos humanos en Honduras. Pero, no cabe duda, su instalación y funcionamiento serán un espaldarazo importante para el respeto de esos derechos y garantía segura de una vigilancia efectiva sobre el comportamiento del Estado hondureño en materia tan sensible y controversial.

No hace falta insistir en la difícil situación de los derechos humanos que prevalece en Honduras, así como el constante asedio y hostigamiento en contra de los promotores y defensores de esos derechos. No es casual que el Congreso Nacional haya aprobado recientemente, bajo fuerte presión ciudadana y discreta petición internacional, una ley especial para asegurar protección a los defensores de los derechos humanos, a los operadores del sistema de justicia y a los comunicadores sociales, permanentemente amenazados y agredidos por la delincuencia común y organizada o por las propias fuerzas de seguridad del Estado.

El propio Comisionado nacional de los derechos humanos (CONADEH), aprovechando la celebración del Día mundial de la libertad de prensa, informó sobre un total de 51 violaciones a esa libertad y la muerte violenta de 14 comunicadores sociales en lo que va de este gobierno. Casa Alianza, por su parte, dio cuenta de la muerte de 10,346 niños y jóvenes (menos de 23 años) que han sido asesinados en los últimos 17 años, entre 1998 y 2015. Entre enero de 2014, cuando comenzó la Administración de JOH, y este mes de mayo, las víctimas suman 1,232, mostrando un impactante 90% de impunidad. Desde el año 2013 a la fecha (28 meses) se han reportado casi 90 masacres que han dejado 420 muertos y un centenar de heridos en ca-

---

torce de los dieciocho departamentos del país, ¡tres masacres por mes! No sólo los periodistas, los jóvenes y los niños, sufren las consecuencias de la violencia criminal. Los abogados también: en nueve años, de 2006 a 2015, 142 profesionales del derecho han sido asesinados en Honduras, 96 de ellos desde el golpe de Estado a la fecha.

Esta es, en pocas palabras y muchas cifras, la verdadera situación que deberá vigilar y gestionar la nueva oficina de la ONU que abrirá sus puertas en los próximos meses en el territorio nacional.

Mientras llega ese momento, el gobierno ha continuado con la expropiación de bienes y fortunas acumulados por los jefes y operadores del crimen organizado. En una operación tan súbita como simultánea, las fuerzas combinadas de seguridad (militares y policías) realizaron allanamientos en el norte (Departamento de Colón) y en el sur (Departamento de Choluteca) en propiedades y negocios (92 en total) de los hermanos Pinto (Orlando y Daniel), otrora buenos aliados y financistas de la campaña electoral del presidente JOH.

El día 21 una noticia especial sacudió el ánimo colectivo: en Haití, en una operación encubierta de la DEA, la agencia antinarcoóticos de los Estados Unidos, fue capturado y de inmediato trasladado a territorio norteamericano el abogado Fabio Lobo, hijo mayor del ex presidente Porfirio Lobo. La DEA acusa a Lobo por traficar drogas hacia los Estados Unidos.

El ministro de Seguridad, el General(r) Julián Pacheco, obligado a abandonar las filas de las Fuerzas Armadas para poder ser nombrado al frente de esa Secretaría, sin dar la impresión demasiado evidente de un abierto y descarnado control castrense sobre la institución policial, realizó el más reciente y enésimo cambio de posiciones en la cúpula de la Policía Nacional, colocando a algunos de sus incondicionales al frente de responsabilidades básicas y muy estratégicas dentro de la estructura de la institución. Los cambios promovidos por Pacheco no sólo no apuntan hacia la verdadera y urgente reforma policial, sino que contribuyen a reafirmar el antiguo estado de cosas en las filas policiales. Más de lo mismo y siempre para lo mismo. El Comisionado General Félix Villanueva fue ratificado en su cargo de Director General de la PNH, mientras que otro Comisionado, Elder Madrid Guerra, proveniente de la llamada "*comunidad de inteligencia*", será el segundo al mando como jefe del Estado mayor policial (recientemente, el Consejo de Ministros creó la figura de un Estado mayor conjunto dentro de la Policía, en abierta e inapropiada imitación de la jerarquía e institucionalidad interna de las Fuerzas Armadas). Al frente de la importante Academia Nacional de Policía (ANAPO), fuente matriz en la que se forman los nuevos oficiales, Pacheco nombró a uno de los suyos, Javier Díaz Herrera, quien, al parecer, había sido muy cuestionado antes en su desempeño como agente policial. La nueva cúpula de la PNH, en todo caso, no garantiza la realización de la

reforma. Al contrario, es la prueba evidente del fracaso de la misma. Qué pena.

El General Pacheco, quien sigue conservando su influencia y poder de decisión dentro de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, a pesar de la resistencia de su nuevo jefe, el coronel de inteligencia Carlos Aldana, educado en academias militares venezolanas, decidió cambiar el uniforme de los policías a un costo millonario y, de paso, repartir biblias entre todos los agentes y oficiales de la institución. ¿Sabrá el General Pacheco que el Estado hondureño, por norma constitucional, es un Estado laico? Seguramente no, y si lo sabe, no le importa. Ese es el valor de la ley y la institucionalidad democrática en Honduras. Siempre en relación con la policía, en este mes se produjo el relevo en los cargos de mando de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), siendo sustituidos en sus obligaciones los abogados Eduardo Villanueva y Mario Chinchilla, ambos ex fiscales, por los abogados Oscar Vásquez, también ex fiscal, y César Bonilla, un civil egresado del Colegio de la Defensa Nacional, también llamado *“universidad”* de las Fuerzas Armadas. Los dos nuevos funcionarios deberán dar continuidad al inconcluso proceso de depuración de las fuerzas policiales, confiando en que su desempeño será mejor, más eficiente y, sobre todo, más productivo que el de sus antecesores. Ojalá que así sea.

Coincidiendo con las acusaciones del PN en contra de Salvador Nasralla, controversia que se tradujo en un indudable triunfo mediático del conocido presentador de televisión a costa de un lamentable y disminuido Oscar Álvarez, diputado *“más votado”* en la capital y jefe de la bancada nacionalista en el Congreso Nacional, en el seno del grupo parlamentario del partido Anticorrupción hicieron crisis las soterradas discrepancias entre sus diputados. La consecuencia fue una derrota parcial de su líder máximo, Nasralla, en beneficio de los nuevos jefes de la bancada de 13 diputados del PAC: Jaime Villegas y Joselina Fortín, en sustitución de Luis Redondo y Fátima Mena, como jefes de bancada. Las discrepancias al interior del PAC no son nuevas, sólo que ahora han aflorado con nitidez y claridad insospechadas. No es nada novedoso, ni algo especialmente preocupante.

Más preocupantes son las discrepancias que han surgido entre los magistrados de la Corte Suprema en torno al significado real del fallo de la Sala de lo constitucional, que dio la luz verde para la reelección presidencial. De acuerdo a la magistrada Silvia Santos, supuestamente liberal, es decir obediente a su partido, el fallo de la Sala *“no autoriza la reelección; solo despenaliza la discusión sobre la misma”*. En respuesta, Jorge Rivera Avilés, el presidente de la Corte Suprema y, teóricamente, un obediente militante liberal, declaró tajantemente: *“el fallo es claro, sí está permitida la reelección”*. Esta aparente o real discrepancia entre ambos magistrados, solo sirve para ilustrar el nivel de complejidad, el juego de intereses y ambiciones, manio-

bras y jugarretas que se articulan en torno al tema de la reelección presidencial.

Así cierra sus entresijos el mes de mayo del año 2015, con disputas políticas, escándalos de corrupción y, lo que es más grave y patético, una verdadera epidemia de la fiebre de la llamada chikungunya, que tiene en cama y abatidos a miles de hondureños de todas las clases sociales. Epidemia que se produce en medio de una gravísima crisis de escasez y mala distribución de medicamentos y servicios en el sistema de salud pública del país. Otra vez, la repetición de los mismos problemas y la misma tragedia.

# JUNIO 2015

---

## La situación política

Este mes ha sido uno muy especial. A la vez que marca la primera mitad del segundo año de la Administración nacionalista de Juan Orlando Hernández, señala también el inevitable declive de las pretensiones continuistas del presidente JOH. Ambos hechos están marcados por algo mucho más trascendente y revelador: el sorprendente auge de las llamadas “*marchas de las antorchas*”, manifestaciones multitudinarias que recorren el país entero y mantienen a la sociedad hondureña en un saludable estado de expectación y esperanza. Es el renacer de las energías ciudadanas que, por momentos, se creyeron perdidas o extraviadas en la decepción y el desencanto producidos inmediatamente después de las elecciones generales de noviembre de 2013, elecciones tan cuestionadas como dudosas. Este resurgir de la participación ciudadana en forma tan espontánea como masiva, coincide, además, con el sexto aniversario del golpe de Estado.

Aunque comenzaron en el transcurso del mes anterior, lo cierto es que a partir del día 29 de mayo y durante las cuatro semanas de junio, las marchas de la autollamada “*oposición indignada*” han adquirido una dinámica insólita, incorporando a miles y miles de ciudadanos de todas las clases, capas y estamentos sociales, fundidos en un solo torbellino de indignación y condena contra la corrupción generalizada que agobia y paraliza al país, así como en rechazo a la institucionalidad pública que se muestra demasiado débil, desgastada e inoperante, incapaz de corregir la situación y asegurar el funcionamiento aceptable del Estado de derecho.

Poco a poco, la demanda inicial de transparencia y rendición de cuentas ha ido evolucionando hasta convertirse en un clamor que exige la renuncia del presidente. El lema de “*¡Fuera JOH!*” se ha vuelto tan común y constante que ya parece la consigna más simbólica del movimiento de indignados en todo el país, e incluso fuera de las fronteras patrias, ahí en donde hay hondureños emigrantes. Preguntado que fue uno de los jóvenes organizadores de las protestas sobre la naturaleza de este nuevo “*movimiento social*”, con-

---

testó aclarando que no, no se trata de un movimiento social, se trata de una sociedad en movimiento, ciudadanos en movimiento. Respuesta acertada, sin duda.

La reacción del gobierno ha sido muy lamentable. Su primera actitud fue la de organizar sus propias marchas, con activistas políticos y personas reclutadas para tal fin, previo pago de sumas que no superan los tres dólares. Las “*contramarchas*” nacionalistas, algunas de ellas en caravanas de automóviles, no han dado el resultado esperado y más bien, al contrario, han generado más indignación y repudio por parte de los protestantes. En otra línea de ataque, el coordinador del equipo económico del gobierno y presidente del Banco Central, Marlon Tábor, advirtió sobre el efecto pernicioso que, según él, las marchas habrán de tener sobre las perspectivas de la inversión nacional y, sobre todo, extranjera, en la economía del país. “*Si el semáforo está en verde en lo económico, ejemplificó el funcionario, y rojo en lo político, se va a producir una colisión*”. El propio presidente JOH sumó su voz a la condena de las marchas y, en un exabrupto muy contraproducente, se atrevió a insinuar que los participantes en los desfiles son personas descontentas por los golpes que el gobierno ha propinado a las redes locales e internacionales del narcotráfico. Muchos son ex empleados de las empresas que tenían los narcotraficantes o de las pertenecientes a empresarios evasores del fisco, dijo el gobernante, añadiendo así más leña al fuego y provocando la furia de los marchantes, al sentirse tan groseramente calumniados.

Justo en los momentos del auge inicial de las marchas, la Comisión multipartidaria creada por el Congreso Nacional para investigar los casos de corrupción acumulados en las oficinas del Ministerio Público, presentó su apresurado informe ante la cámara legislativa. En la noche del jueves 04, luego de una prolongada e incómoda demora, Mario Pérez, secretario del Congreso Nacional y político cuestionado en un confidencial informe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (divulgado por el periodista David Romero el mismo día 04), dio lectura al controversial informe, provocando una decepción general entre sus oyentes y entre la opinión pública en general, por los escasos hallazgos y veladas intenciones por reducir el impacto del caso IHSS para magnificar la dimensión de otros casos menores, sobre todo aquellos que involucran a personas ligadas a la oposición política. No es casual que varios políticos opositores calificaran el informe como una “*cortina de humo*”, diseñada para perseguir a unos y proteger a otros.

Al día siguiente, el viernes 05, al anochecer se produjo la segunda marcha multitudinaria en Tegucigalpa (la primera había tenido lugar el viernes 29 de mayo). Miles de manifestantes, portando antorchas, desfilaron hasta las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas en donde presentaron su nota de petición para instalar en Honduras una oficina similar a la Comisión internacional contra la impunidad que funciona en Guatemala (CICIG).

Las marchas se reprodujeron de manera espontánea y masiva en otros centros urbanos del país, incorporando cada vez más participantes y abarcando todo el territorio nacional como si fuera una ola purificadora y vivificante, cargada de energía social y participación ciudadana.

El efecto político del informe leído por el diputado Pérez en el Congreso Nacional quedó virtualmente sepultado por la avalancha crítica desatada por la *"oposición indignada"*. Los propios dirigentes políticos de los llamados partidos de la oposición fueron rebasados por la indignación cívica de los marchantes y debieron bajar su perfil y el protagonismo inicial que pretendieron tener en la conducción de las protestas. Mauricio Villeda, el frustrado ex candidato presidencial de los liberales, lo dijo con una entristecida franqueza: *"eso ya desbordó a los partidos políticos; es el pueblo hondureño el que está marchando, no son los partidos políticos..."*.

En un intento por calmar los ánimos y mostrar una supuesta voluntad anticorrupción, el gobierno empezó a mostrar una sospechosa ansiedad por ahondar en el caso IHSS, reactivar viejos juicios por casos de corrupción y reabrir investigaciones que habían permanecido cerradas o simplemente olvidadas en los archivos de la Fiscalía General. Se giraron órdenes de captura contra empleados del Instituto de la Propiedad (IP), que se dedicaban a saquear los recursos de la institución mediante la elaboración de planillas salariales y nóminas artificiales. Se desempolvaron los expedientes de otros casos escandalosos como los que han tenido lugar en los ministerios de Salud y Educación, en el Instituto nacional de jubilaciones y pensiones de los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEM), los que involucran el retiro irregular de decenas de millones de lempiras del Banco Central para financiar los gastos de la llamada *"cuarta urna"* o el uso indebido de dineros públicos donados por el gobierno chino de la isla de Taiwán. Como consecuencia de esta febril reactivación de la *"lucha anticorrupción"*, fueron giradas órdenes de captura contra conocidos personajes del mundo empresarial y político del país: los empresarios SchucryKafie y la familia Gutiérrez (Marco Tulio y sus hijos, incluida la actual vicepresidenta del Congreso Nacional, la consumada juanorlandista Lena Gutiérrez), el ex ministro de la presidencia en el gobierno de Manuel Zelaya, Enrique Flores Lanza, apodado *"el Napoleoncito"* en sus mejores tiempos de pálido fulgor y demasiada influencia, quien se vio forzado a partir hacia Nicaragua a fin de evitar su captura y encierro. Se anuncian nuevos requerimientos fiscales y órdenes de captura contra influyentes personajes del cercano pasado.

Curiosamente, aunque ha habido reiteradas y alarmantes denuncias sobre sobornos y pagos indebidos al interior del Ministerio Público, en el informe de la Comisión multipartidaria apenas si se hace mención a una supuesta investigación sobre la conducta de *"un alto funcionario"* de la Fiscalía General. Mientras todos comentan que se trata del Fiscal general adjunto, el in-

---

forme no menciona su nombre ni proporciona mayores detalles sobre la real o supuesta investigación. Precisamente uno de los constantes reclamos de los indignados tiene que ver con el pago de sobornos a algunos operadores de justicia, fiscales, jueces y policías en general.

A principios del mes, en una entrevista exclusiva previamente pactada con periodistas que a duras penas podían disimular su afinidad y sospechosa tolerancia, el presidente arremetió sin piedad contra sus críticos y, al mismo tiempo, como si nada, reconoció que su partido, el Nacional, había recibido cheques por sumas cuantiosas provenientes de los dineros sustraídos ilegalmente de las arcas del IHSS. En un arranque de verdadero cinismo, el gobernante recomendó a las actuales autoridades del partido devolver las cantidades, debida y calculadamente minimizadas, recibidas en carácter de donación para financiar su campaña electoral. La confesión presidencial terminó de despejar las dudas que todavía existían en algunos sectores de la población. Mientras la prensa internacional reprodujo con alboroto las declaraciones de JOH, los medios de comunicación local, con la excepción ya conocida de la llamada prensa independiente, guardaron un triste y condenable silencio. Como quien dice: aquí no ha pasado nada.

Ante la gravedad de los hechos, pero especialmente ante el crecimiento avasallador que han adquirido las marchas y manifestaciones de descontento e indignación, un grupo de viejos políticos, entre ellos algunos reconocidos partidarios y organizadores del golpe de Estado del 2009, como el propio general(r) Romeo Vásquez, han pedido públicamente al gobierno la pronta y urgente convocatoria a un diálogo nacional. Intuyendo la existencia de una maniobra dilatoria detrás de este llamamiento, sectores de la oposición la han rechazado y calificado como una medida de última hora para ganar tiempo y dar bocanadas de oxígeno a un gobierno que cada día parece estar más inquieto y desesperado. El influyente Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) también pide el diálogo, sobre todo ahora cuando ve que algunos de sus prominentes miembros pueden ir a parar a la cárcel o ya están con un pié dentro de la misma. Por otro lado, aunque siempre conectado a los hechos, el que fuera representante del COHEP en la junta directiva del IHSS durante la operación de saqueo, ha sido mencionado ya como uno de los beneficiarios de los sobornos pagados a cambio de favores en la administración del sistema de seguridad social. Los reiterados llamados del COHEP a favor de la convocatoria oficial a las mesas del diálogo, insisten en demandar *“una estrategia clara y medible”* en la lucha anticorrupción, así como *“procesos justos e imparciales”* al momento de juzgar a los imputados.

Quizás por todo ello, y tomando en cuenta las suspicacias y los riesgos involucrados, el liberal diario Tiempo advirtió en su editorial del día 18 sobre las maniobras y posibles engaños de lo que llamó un *“diálogo político de*

ocasión”, proponiendo al mismo tiempo uno de otro tipo, un “diálogo político trascendental”.

Mientras se debate sobre la conveniencia o inconveniencia de celebrar conversaciones para generar un amplio marco de convergencia nacional, la dinámica de las “marchas de las antorchas” sigue creciendo y ampliando su radio de acción. El día 21, dos jóvenes organizadores de las marchas por la vía de las redes sociales electrónicas, Ariel Varela y Miguel Briceño, iniciaron una huelga de hambre en las afueras de la Casa Presidencial exigiendo al presidente JOH la pronta solicitud a la ONU para la instalación de una Comisión internacional en contra de la impunidad en Honduras, misma que sería conocida por las siglas de CICIH. De inmediato, la huelga de hambre ha recibido gran apoyo entre diversos sectores sociales de la población y amenaza con volverse un fenómeno viral, como suele decirse en el lenguaje favorito de los asiduos “navegantes” de las redes electrónicas.

El gobierno, persistiendo en su torpe política de descalificación inmediata e indiscriminada de sus críticos, ha intentado en vano desprestigiar personalmente a los huelguistas. Para ello cuenta con la entusiasta participación del asesor presidencial y flamante secretario del gabinete ministerial, Ebal Díaz, quien cada vez que abre la boca para decir sus habituales tonterías sólo sirve para reproducir, con un efecto multiplicador creciente, la indignación colectiva. Es el mismo que acusó a los manifestantes de estar dedicados al contrabando y la defraudación fiscal por la supuesta introducción clandestina de los miles de antorchas que iluminan los desfiles cotidianos en todo el país. ¡Vaya imaginación tan poco creadora!

Pero no sólo son palabras las que predominan en el lenguaje y la actitud gubernamental. También están los hechos, cada vez más preocupantes dados sus niveles de irracionalidad, provocación y agresividad contenidos. En la madrugada del día 22, un grupo de provocadores, reservistas de las Fuerzas Armadas algunos de ellos y supuestos empleados de la alcaldía capitalina los demás, agredieron a periodistas y amigos que acompañaban, en vigilancia solidaria, a los huelguistas indignados. En la noche del domingo 20 desconocidos lanzaron una bomba de fabricación casera en el estacionamiento de la Corte Suprema de Justicia, acto que provocó la inmediata declaración de Ebal Díaz -siempre el señor Ebal- culpando a los indignados de ser terroristas disfrazados. Los actos de agresión han servido para incrementar el repudio nacional hacia la reacción del gobierno y, a la vez, estimular las corrientes de simpatía hacia los jóvenes huelguistas y los marchantes en general. El gobierno parece haber perdido la puntería y no atinar nunca en sus iniciativas y reacciones.

Eso es lo que se deduce de las medidas más recientes adoptadas por el presidente JOH. Por ejemplo, su decisión de militarizar el manejo de los

hospitales públicos (bodegas, farmacias, centros de distribución, etc.) para controlar el uso y reparto de las medicinas, ha provocado el inmediato rechazo de los médicos y demás empleados del sistema de sanidad del Estado, afectado ya desde hace mucho tiempo por el virus de la corrupción en todos sus niveles. De igual manera, la iniciativa para “privatizar” la distribución de los medicamentos a través de una red de farmacias en manos del sector privado, provocó también el descontento y las sospechas entre los usuarios de los servicios de salud en los hospitales públicos.

El día 23, en horas de la noche, el gobierno sorprendió a la población cuando en cadena de radio y televisión apareció el presidente JOH, rodeado de los miembros del Consejo nacional de defensa y seguridad (incluidos, por lo tanto, los otros dos presidentes de los Poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial) y otros altos funcionarios públicos, para anunciar la convocatoria a lo que llamó sibilinaamente un “diálogo social” (evitó el calificativo de político), “sin condiciones” (esa fue su propia condición), “hondureño” (sin elemento internacional) y “abierto” (sin mencionar siquiera a la “oposición indignada” que inunda las calles). La propuesta oficial gira en torno a la creación de un llamado “sistema integral hondureño de combate a la impunidad y la corrupción” que, según el presidente, debería tener los siguientes componentes: a) una Unidad de supervisión y apoyo al Ministerio Público, b) una Unidad de supervisión y apoyo al Consejo de la Judicatura y a la Inspectoría de tribunales, c) una Unidad especial para seguridad de los jueces, fiscales y sus familias, d) un Observatorio del sistema de justicia, y e) un Sistema de integridad empresarial.

La propuesta presidencial, fruto de la presión que están ejerciendo los marchantes indignados, más parece un afán por ganar tiempo, huir hacia adelante, buscando respiro y aire en medio de la crisis política y la tensión social. Desconoce algo muy fundamental: los actores estatales de este diálogo representan justamente la institucionalidad pública que la oposición quiere cambiar y reconstruir. Por lo tanto, no son, seguramente, los protagonistas más indicados para dar credibilidad y legitimidad a la iniciativa oficial. Los opositores, indignados o no, no van a aceptar muy fácilmente sentarse a la mesa con aquellas personas que, por sus funciones presentes o pasadas, están directa o indirectamente involucradas en el clima de corrupción e impunidad que prevalece en el país.

Y así está sucediendo. Importantes líderes de la oposición política y los organizadores de las marchas ya han rechazado la propuesta de diálogo, la que consideran trucada de antemano, algo así como una oferta envenenada. Para colmo de males, el mismo día 23 circuló en los medios de comunicación el texto de una carta que nueve magistrados, de los quince que integran el pleno de la Corte Suprema de justicia, enviaron al magistrado presidente, Jorge Rivera Avilés, demandando mayor respeto a la independencia

de los jueces y menos injerencia del Consejo de la Judicatura en la actividad normal de los tribunales. Una prueba más de la fallida institucionalidad pública en el sistema de administración de justicia.

Por si todavía cabían dudas sobre el rechazo de los indignados al llamado presidencial para asistir a la mesa de diálogo, la marcha convocada para la tarde del viernes 26, la quinta marcha en la secuencia de los últimos viernes, se encargó de despejarlas: fue verdaderamente apoteósica, tan grande y masiva que superó incluso los cálculos más optimistas de los propios organizadores. Decenas de miles de ciudadanos inundaron las calles y rodearon virtualmente la periferia de la Casa Presidencial, custodiada ya por centenares de policías y militares en actitud de combate. Los manifestantes dieron sobradas muestras de prudencia y cautela, en momentos en que cualquier chispa podía encender la hoguera.

La marcha fue convocada para testimoniar solidaridad con los huelguistas de hambre y rechazar la propuesta de diálogo anunciada por el gobierno. En respuesta, el presidente reiteró su invitación a la mesa de negociaciones, asegurando que todos los sectores deberán ser consultados. Sin embargo, en la tarde del sábado 27, uno de los jóvenes huelguistas fue agredido por los policías que rodean Casa Presidencial, obligando a los demás huelguistas originales a suspender el acto de protesta, a fin de salvaguardar su propia integridad física. Queda todavía otro grupo de jóvenes en actitud de huelga.

En la misma noche del sábado, en San Pedro Sula, fue atacado a balazos el ex Director del Instituto Nacional Agrario en el gobierno anterior, César Ham, dirigente principal del partido Unificación Democrática, quien ya había sido amenazado de muerte en el cercano pasado por su rol protagónico en las negociaciones entabladas entre los grupos campesinos del Bajo Aguán y los empresarios agrícolas que defienden como propias las tierras y plantaciones de palma africana que aquellos reclaman. En el atentado, el guardaespaldas resultó muerto mientras Ham está gravemente herido.

El ataque contra Ham, líder controversial de un partido de izquierdas en declive y descomposición, coincide con el sexto aniversario del golpe de Estado y la manifestación callejera correspondiente que convocó el Frente Nacional de Resistencia Popular para conmemorar esa fecha. Ham fue uno de los organizadores del FNRP, en los difíciles inicios del movimiento de resistencia contra el golpe de Estado en el año 2009.

## El futuro es posible...

**C**omo era de esperar, teniendo en cuenta todos estos antecedentes, el mes de junio concluye en medio de un clima de creciente crispación y latente tensión política. Al cumplirse seis años del 28J, este mes también adquiere un carácter doblemente simbólico, ya que, al mismo tiempo que cierra un largo ciclo de historia reciente en la vida política y social de la nación, también inaugura otro, tan lleno de novedades y sorpresas como el anterior. O sea que, cierra una fase para abrir otra, y ojalá que la segunda sea más prometedora y beneficiosa que la primera.

El registro de acontecimientos que contiene este libro, acompañado de ejercicios de interpretación y análisis de contexto, conforman una especie de “diario” sui generis que da cuenta de los sucesos más importantes y notables en la historia contemporánea de Honduras. Comienza en el año 2009 y se prolonga hasta este mes de junio del año 2015, sumando un total de 78 largos y difíciles meses en los que fue transcurriendo una historia llena de altibajos y escollos, repleta de momentos de avance, los menos, y de abundantes episodios de parálisis y retroceso, los más, marcados siempre por la impronta del golpe de Estado del año 2009 y por los reiterados esfuerzos por volver a la normalidad, reconstruyendo la institucionalidad quebrantada y recomponiendo el lastimado tejido social de nuestro país.

La cronología escogida ni es casual ni es improvisada. Arranca desde enero de 2009, describiendo los inmediatos antecedentes de lo que sería el funesto golpe de Estado llevado a cabo en la madrugada del domingo 28 de junio, y cierra su ciclo de evolución en el mes de junio de este año 2015. Son seis años que separan dos momentos clave de nuestra historia política: el golpe de Estado, por un lado, y, por el otro, el auge inesperado de las marchas ciudadanas para expresar indignación y hastío ante la crisis institucional del país y la insoportable desintegración ética de su sistema político.

El primero de esos dos hechos generó desequilibrio institucional y polarización política, quebrantó la estructura jurídico-constitucional del país y dio rienda suelta a la voracidad acaparadora y corrupta de las élites políticas, empresariales, religiosas y militares de nuestra sociedad. Ha sido y es una fase lamentable de la historia.

El segundo momento, en cambio, trae consigo un viento de renovación espiritual y saludable rejuvenecimiento cívico. Es como una ola estimulante y reivindicadora que recorre el país entero y revitaliza las energías apagadas de una ciudadanía hoy cada vez más activa, más vigilante, mejor informada y más propositiva, la nueva ciudadanía por la que tanto hemos luchado y cuyo surgimiento pleno con tanto anhelo y ansias hemos esperado. Esa ciudadanía está hoy en las calles, marchando incansablemente, con sus

simbólicas antorchas iluminando el camino, transmitiendo esperanzas, creando espacios de dignidad y civismo.

Este libro comienza con la tragedia y termina con la esperanza. Su contenido marca la lenta y azarosa evolución desde la derrota inicial, convertida en victoria parcial con el gradual desmantelamiento del sistema político bipartidista, hasta la recuperación plena del espíritu ciudadano y el retorno de la fe y la confianza en que un futuro mejor no sólo es necesario sino que también es posible.



Centro de Documentación de Honduras

### *Últimas publicaciones*

- La militarización de la seguridad pública en Honduras, 2015
- El manejo político de la inseguridad pública: tendencias, peligros e impacto, 2014
- Defensa y Seguridad: agenda de reformas en el sector defensa, 2013
- Criminalidad y violencia en Honduras: retos y desafíos para impulsar la reforma, 2013
- Seguridad ciudadana y precariedad institucional, 2013
- Honduras: conflictividad, Estado y sociedad, 2013

Todo empezó como un simple ejercicio exploratorio, haciendo análisis de contexto para suplir insumos a las discusiones colectivas que entonces solíamos celebrar en nuestras oficinas del Centro de Documentación (CEDOH). Eran los inicios de la década de los años noventa; gobernaba el país Rafael Leonardo Callejas, el primer presidente nacionalista (vale decir del partido Nacional) en la época de la transición política hacia la democracia. Lo que empezó como práctica ocasional, muy pronto se volvió costumbre, rutina periódica que me obligaba a escribir un “*análisis de contexto*” cada mes. Así comenzó esta historia.

Hoy, casi un cuarto de siglo después, cuento con más de 250 “*análisis de coyuntura*” acumulados en mis archivos, como esperando el momento para ser publicados en su totalidad. Ante la dificultad material para cumplir ese objetivo, he optado por publicar los correspondientes a los últimos seis años de nuestra historia contemporánea, abarcando así un sensible periodo que arranca en el año 2009, tiempo siniestro del golpe de Estado, y concluye en el presente año 2015, tiempo luminoso de renacimiento ciudadano y antorchas callejeras.

Este libro es, por lo tanto, algo así como un “*diario de país*”, escrito mes a mes, un registro cotidiano de los hechos que, de alguna manera, han marcado y señalado el rumbo de nuestra evolución histórica reciente en tanto que Estado y sociedad. Contiene, pues, una visión personal del diario acontecer, un conjunto de puntos de vista y opiniones de un observador subjetivo -no podía ser de otra manera- que busca sistemáticamente el sentido más profundo de los hechos objetivos. Combinación inevitable de lo personal y lo social, lo individual y lo colectivo.

ISBN: 978-99926-41-18-7



9 789992 641187

**CEDOH**

Centro de Documentación de Honduras



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Agencia Suiza para el Desarrollo  
y la Cooperación COSUDE

Con la contribución del Gobierno de Suiza  
a través de la COSUDE